I N D I C E
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

Acuerdo por el que se crea el Comité de Internet de la Secretaría de Gobernación 3

Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Michoacán, para la realización de acciones en el año 2000, dentro del Programa Nacional de Seguridad Pública 4

Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Sinaloa, para la realización de acciones en el año 2000, dentro del Programa Nacional de Seguridad Pública 7

Convenio de Coordinación que celebran el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Sonora, para la realización de acciones en el año 2000, dentro del Programa Nacional de Seguridad Pública 11

Fe de erratas al Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 7 de abril de 2000 14

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-AG-001-IMNC-1999, NMX-CC-021-IMNC-1999, NMX-CH-010-IMNC-1999, NMX-CH-146-IMNC-1999, NMX-CH-147-IMNC-1999, NMX-CH-150-IMNC-1999, NMX-SSA-002-IMNC-1999, NMX-SSA-003-IMNC-1999, NMX-SSA-004-IMNC-1999, NMX-SSA-005-IMNC-1999 y NMX-SSA-006-IMNC-1999 14

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-I-270/01-NYCE-1999, NMX-I-270/02-NYCE-1999, NMX-I-270/03-NYCE-1999, NMX-I-270/05-NYCE-1999 y NMX-I-271-NYCE-1999 16

Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-J-036-ANCE-1999, NMX-J-184-ANCE-1999, NMX-J-192-ANCE-1999, NMX-J-198-ANCE-1999, NMX-J-383-ANCE-1999, NMX-J-426-ANCE-1999, NMX-J-439-ANCE-1999, NMX-J-521/2-7-ANCE-1999 y NMX-J-521/2-23-ANCE-1999 18

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL

Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos fitosanitarios y especificaciones para la importación de granos y semillas, excepto para siembra 20

SECRETARIA DE SALUD

Norma Oficial Mexicana NOM-174-SSA1-1998, Para el manejo integral de la obesidad 24

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-028-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones 29

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

Resolución que declara como terreno nacional el predio El Rincón, Municipio de Balancán, Tab. 44

Resolución que declara como terreno nacional el predio Las Malvinas I, expediente número 512551, Municipio de Balancán, Tab. 45

Resolución que declara como terreno nacional el predio Las Malvinas I, expediente número 512552, Municipio de Balancán, Tab. 47

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Pino Dulce, Municipio de Guadalupe y Calvo, Chih. 48

Aviso de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Baquiriachi, Municipio de Carichi, Chih. 48

BANCO DE MEXICO

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana 49

Tasas de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional 49

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 50

Costo de captación de los pasivos a plazo denominados en dólares de los EE.UU.A. (CCP-Dólares) 50

Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 7 de abril de 2000 50

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 431/93, relativo a la dotación de tierras, promovido por campesinos del poblado Las Lagunitas, Municipio de Galeana, N.L. 51

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 232/96, relativo a la segunda ampliación de ejido, promovido por campesinos del poblado Morro Mazatan, Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oax. 63

AVISOS

Judiciales y generales 66

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA

Aviso por el que se informa al público en general, que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, ha concluido la elaboración del Programa de Manejo del Area Natural Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera la región conocida como Ría Lagartos, ubicada en los municipios de San Felipe, Río Lagartos y Tizimín, en el Estado de Yucatán, establecida mediante Decreto Presidencial publicado el 21 de mayo de 1999 105

PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

Sentencia relativa a la Controversia Constitucional 6/98, promovida por Tomás E. de Jerónimo Aniceto y Damián Cortés Guzmán en su carácter, respectivamente, de Presidente Municipal y Síndico del Municipio de Aljojuca, Agustín Torres Romero y Porfirio Castro Ramírez en su carácter, respectivamente, de Presidente Municipal y Síndico del Municipio de Nealtican, y Roberto Crisóstomo Bruno y Juventino Santiago Desiderio en su carácter, respectivamente, de Presidente Municipal y Síndico del Municipio de Altepexi, municipios todos ellos del Estado de Puebla, en contra del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo de dicho Estado 134

Internet: www.gobernacion.gob.mx Esta edición consta de dos secciones
Correo electrónico: dof@rtn.net.mx *Informes, suscripciones y quejas: 5592-7919 / 5535-4583*

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

ACUERDO por el que se crea el Comité de Internet de la Secretaría de Gobernación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL COMITE DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION.

DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO, Secretario de Gobernación, con fundamento en los artículos 14, 20 y 27 fracción XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1, 3 y 5 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, señala que en materia de política tecnológica e informática, la acción del Gobierno Federal se orienta a impulsar la generación, difusión y aplicación de las innovaciones tecnológicas.

Que en el contexto de la globalización, es imperativo que nuestro país posea mayores y mejores instrumentos de comunicación para integrarse y participar en el avance social, económico, político, tecnológico y científico mundial.

Que la red Internet es el medio de comunicación de vanguardia que por sus características, garantiza que México se integre y participe en el avance referido.

Que es deber de las dependencias de la Administración Pública Federal, establecer los servicios de apoyo administrativo en materia de Internet.

Que con el propósito de establecer una instancia de coordinación en la Secretaría de Gobernación, que determine y lleve a cabo las acciones necesarias en materia de Internet, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se crea el Comité de Internet de la Secretaría de Gobernación, mismo que tendrá por objeto constituirse como una instancia de coordinación para el análisis, propuesta, deliberación, toma de decisiones, instrumentación y control de los asuntos vinculados con la Página de Internet en esta Dependencia del Ejecutivo Federal.

SEGUNDO.- Para los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

Secretaría	La Secretaría de Gobernación.
Comité	El Comité de Internet de la Secretaría de Gobernación.
Areas	Las Unidades Administrativas y los Organos Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación.

TERCERO.- El Comité estará integrado por los siguientes miembros:

Con voz y voto

Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría de Gobernación, quien podrá ser suplido en sus ausencias por su Coordinador de Asesores.

Un Secretario Ejecutivo, que será el Titular de la Coordinación de la Oficina de Internet de la Secretaría, quien podrá ser suplido en sus ausencias por la persona que éste designe.

Un Secretario Técnico, que será la persona que designe el Secretario de Gobernación, quien podrá ser suplido en sus ausencias por la persona que éste designe.

Un Asesor Técnico, que será el Titular de la Coordinación General de Tecnologías de la Información, quien podrá ser suplido en sus ausencias por la persona que éste designe, cuyo cargo no podrá ser menor al de Director de Area.

Vocales, que serán los Titulares de la Secretaría Particular del C. Secretario, de las Subsecretarías de Gobierno, Desarrollo Político, Asuntos Religiosos, Población y de Servicios Migratorios, Seguridad Pública y Comunicación Social; de la Oficialía Mayor; de la Coordinación General de Protección Civil, de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, de la Dirección General de Información y Difusión, de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, del Centro Nacional de Desarrollo Municipal, del Archivo General de la Nación, del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, de la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de la Policía Federal Preventiva, que podrán ser suplidos en sus ausencias por las personas que éstos designen, cuyo cargo no podrá ser menor al de Director de Area o su equivalente.

Con voz, pero sin voto

El Titular de la Contraloría Interna en esta Secretaría, o la persona que éste designe, cuyo cargo no será menor al de Director de Area.

Invitados especiales, podrán asistir terceras personas que tengan interés en la materia, previa invitación del Comité.

CUARTO.- El Comité analizará, propondrá, deliberará, tomará decisiones, instrumentará acciones y efectuará el control de los siguientes asuntos:

I. Sobre el contenido de la Página de Internet en general y las secciones y subsecciones que correspondan a cada área;

II. Sobre la eficiencia en los tiempos y formas de actualización;

III. Sobre la eficiencia en el sistema de envío-recepción;

IV. Sobre los cambios en la estructura de navegación;

V. Sobre la formulación de peticiones de hardware y software, previo análisis y dictamen de la Coordinación General de Tecnologías de la Información;

VI. Sobre la elaboración de proyectos informativos y de investigación tanto intrainstitucionales como interinstitucionales;

VII. En relación con el informe mensual sobre el desempeño de la Página de Internet de la Secretaría de Gobernación que entregue el Secretario Ejecutivo, así como prever posibles deficiencias del servicio;

VIII. En la elaboración, así como en las reformas y adiciones al Manual de Organización y Funcionamiento del Comité de Internet de la Secretaría, y

IX. Las demás atribuciones que le otorguen las diversas disposiciones legales aplicables y aquellas necesarias para el cumplimiento del objeto del propio Comité.

QUINTO.- El Comité se reunirá en forma ordinaria o extraordinaria, según se determine en el Manual de Organización y Funcionamiento del Comité.

SEXTO.- En cada sesión se levantará el acta correspondiente, que incluirá los acuerdos adoptados en la misma y la firma de todos los asistentes.

SEPTIMO.- Los acuerdos adoptados en el seno del Comité, serán de observancia obligatoria para todos sus miembros.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDO.- El Comité emitirá su propio Manual de Organización y Funcionamiento, en un lapso no mayor de 60 días a partir de la publicación del presente Acuerdo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dado en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de marzo de dos mil.- El Secretario de Gobernación, **Diódoro Carrasco Altamirano**.- Rúbrica.

CONVENIO de Coordinación que celebran el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Michoacán, para la realización de acciones en el año 2000, dentro del Programa Nacional de Seguridad Pública.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Sistema Nacional de Seguridad Pública.

CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR CONDUCTO DEL C. LIC. DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO, EN SU DOBLE CARACTER DE SECRETARIO DE GOBERNACION Y PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, Y DEL C. LIC. JUAN MAYOLO MEDINA LINARES, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL SISTEMA", Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN, POR CONDUCTO DEL C. LIC. VICTOR MANUEL TINOCO RUBI, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, EL C. LIC. ANTONIO GARCIA TORRES, Y EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO, EL C. C.P. GABRIEL PEREZ GIL HINOJOSA, AMBOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA"; PARA LA REALIZACION DE ACCIONES EN EL AÑO 2000, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 párrafos quinto y sexto, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en las respectivas competencias que la propia Constitución señala y que se coordinarán en los términos que la Ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de las disposiciones constitucionales aludidas, señala en los artículos 2 y 11, que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se integra con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones

previstos en la propia Ley, tendientes a cumplir con los objetivos y fines de la seguridad pública; y que, las políticas, lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en las demás instancias de coordinación.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su quinta sesión realizada el 25 de agosto de 1998, mediante el Acuerdo número 26/98, aprobó las Estrategias y Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000.

Con fecha 14 de julio de 1998, el Gobierno Federal y "LA ENTIDAD FEDERATIVA", suscribieron el Convenio de Coordinación para la realización de acciones en el año de 1998, en torno al Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, en el cual se acordó la constitución de un Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos, el cual quedó formalizado el 4 de septiembre de 1998.

De igual forma, el día 22 de de febrero 1999, se formalizó el Convenio de Coordinación para la realización de acciones en el año de 1999, en torno al Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, en el que se pactó que la administración de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se continuaría realizando a través del Fideicomiso Local constituido para tal fin.

La Ley de Coordinación Fiscal, en los artículos 25 fracción VII y 44, establece la existencia del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, el cual se constituye con cargo a recursos federales, mismos que son determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que los recursos que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal que reciban dichas entidades, se destinarán exclusivamente al reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; a complementar las dotaciones de los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.

Conforme al artículo 44 tercer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y Distrito Federal, se entregarán a las entidades federativas por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se distribuirán de acuerdo a los criterios que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a propuesta de la Secretaría de Gobernación.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su octava sesión celebrada el 27 de octubre de 1999 tomó el Acuerdo número 90/99, por el que se aprobaron y ratificaron los criterios de asignación y la fórmula de distribución de los recursos del Fondo VII, correspondientes al Ramo 33, de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a determinarse en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2000.

En la citada sesión octava, el Consejo Nacional de Seguridad Pública mediante el Acuerdo 92/99, aprobó y ratificó, conforme lo determinan la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Coordinación Fiscal, la suscripción de Convenios de Coordinación y sus respectivos Anexos Técnicos para el Ejercicio Fiscal del 2000; así como continuar con la figura de los fideicomisos locales de distribución de fondos, constituidos de conformidad con los Convenios de Coordinación suscritos en 1998.

Con fecha 17 de enero del año 2000, se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** los criterios de asignación y la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como el resultado de su aplicación correspondiente a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal.

DECLARACIONES

De "EL SISTEMA":

Que el Secretario de Gobernación, de acuerdo con el artículo 12, de la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, preside el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Que el C. Lic. Diódoro Carrasco Altamirano, fue designado Secretario de Gobernación, mediante nombramiento de fecha 21 de mayo de 1999 expedido por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Que conforme a los artículos 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12, de la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1 y 5 fracciones XVII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; así como el Acuerdo 34/99, del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en la sexta sesión celebrada el día 28 de enero de 1999; el Secretario de Gobernación está facultado para suscribir el presente instrumento.

Que mediante el Acuerdo 23/98, tomado en la quinta sesión celebrada el día 25 de agosto de 1998, el Consejo Nacional de Seguridad Pública designó al C. Juan Mayolo Medina Linares, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Que al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública le corresponde tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la coordinación y preservar la seguridad pública, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 17, de la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 75, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

De "LA ENTIDAD FEDERATIVA":

Que el C. Lic. Víctor Manuel Tinoco Rubí, es titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Michoacán.

Que conforme al artículo 12 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Que está facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo a los artículos 60 fracción XII, 62, 66 y 130 párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán; 2o., 7o., 8o., 19 fracciones II y V; y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; y 4o., 5o., 6o. y 8o. fracción III de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Michoacán de Ocampo.

De ambas partes:

Que es necesario continuar con la ejecución de las Estrategias y Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como la realización de acciones orientadas a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública; por lo que convienen en coordinarse en los términos de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto coordinar los criterios y las acciones en materia de seguridad pública, así como la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con el fin de cumplir con las metas establecidas en el Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000; con las Estrategias y Acciones de dicho Programa, aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como con las metas contenidas en el Programa Estatal de Seguridad Pública de "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

SEGUNDA.- De conformidad con los Acuerdos tomados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en sus sesiones quinta y octava, los ejes que comprenden, entre otros, el presente Convenio son:

1.- Profesionalización.

2.- Cobertura y capacidad de respuesta.

3.- Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.

4.- Equipamiento, tecnología e infraestructura.

5.- Instancias de coordinación.

6.- Participación de la comunidad.

TERCERA.- Los objetivos, líneas de acción, metas y alcances de los programas que se deriven de cada eje, se acordarán conjuntamente por "EL SISTEMA" por conducto del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y "LA ENTIDAD FEDERATIVA", de conformidad con los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y se incluirán en los anexos técnicos respectivos, los cuales formarán parte de este Convenio.

CUARTA.- De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 44, de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se enterarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez meses del año a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones. Dichos recursos se registrarán como ingresos propios y su control, vigilancia y evaluación se llevarán a cabo, conforme a lo establecido en los artículos 45 y 46 de la citada Ley.

QUINTA.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destinará las aportaciones que reciba con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como las que realice con cargo a su propio presupuesto, exclusivamente a las siguientes acciones: reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; a complementar las dotaciones de los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las procuradurías de justicia de los estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos

o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.

SEXTA.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "EL SISTEMA", en apego a lo establecido en las fracciones II, V del artículo 9o., fracción III del artículo 15, y fracción III del artículo 17 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, y a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional, convienen en aplicar recursos para realizar acciones específicas de seguimiento y evaluación respecto de los programas y acciones implementados en el ámbito estatal, en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000. Al efecto, las partes suscribirán el Anexo Técnico correspondiente al programa de seguimiento y evaluación, mismo que formará parte integrante de este instrumento.

SEPTIMA.- Las partes acuerdan que la administración de los recursos destinados provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y los aportados por "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se realizará a través del Fideicomiso Estatal constituido para tal fin, de acuerdo a las reglas de operación y funcionamiento con los que viene operando.

OCTAVA.- Para salvaguardar el cumplimiento de las metas nacionales respectivas, los recursos asignados a los programas que se deriven de los ejes acordados en la cláusula segunda del presente Convenio y sus anexos técnicos, no podrán destinarse a otros fines, sólo podrán transferirse de un programa a otro(s), previa solicitud por escrito y justificación debidamente documentada que se formule al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien convendrá, si así procediere, la transferencia con el representante de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" que haya suscrito los anexos técnicos que se modifiquen, lo que se formalizará a través de un addendum a los mismos, debiendo ser ejercidos los recursos de acuerdo al cuadro de metas y montos que se establezca en el addendum. El Comité Técnico del Fideicomiso Estatal realizará las operaciones necesarias a fin de que los recursos se transfieran de un programa a otro, en los términos pactados.

NOVENA.- De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, y de acuerdo a los criterios de asignación y fórmula de distribución aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Octava Sesión celebrada el 27 de octubre de 1999, se destinan del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a favor de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", recursos por un monto de $191'173,239.00, (ciento noventa y un millones ciento setenta y tres mil doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N).

Los recursos serán enterados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través de una cuenta en Banrural, con el fin de que dichas aportaciones se registren como ingresos propios de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", obligándose éste a proceder de inmediato a transferir los recursos al patrimonio del fideicomiso local para la administración de Fondos a que se refiere la cláusula séptima, para lo cual, la institución fiduciaria conjuntamente con la Secretaría de Finanzas, expedirán el recibo más amplio que en derecho proceda, a favor de la Tesorería de la Federación, por cada una de las ministraciones que se realicen de acuerdo al calendario correspondiente.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" complementará los recursos destinados por "EL SISTEMA", a fin de cumplir con las Estrategias y Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Programa Estatal de Seguridad Pública, para lo cual aportará al Fideicomiso Estatal, recursos por un monto de $81'200,000.00, (ochenta y un millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), con cargo a su propio presupuesto, conforme al calendario y términos que se especifiquen en cada anexo técnico.

DECIMA.- "EL SISTEMA", por conducto del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y "LA ENTIDAD FEDERATIVA", promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se requieran para el cumplimiento del presente Convenio.

DECIMA PRIMERA.- Este Convenio se publicará en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", y entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción.

El presente Convenio se firma en la ciudad de Morelia, Michoacán, a los tres días del mes de febrero de dos mil.- Por el Sistema: el Secretario de Gobernación y Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, **Diódoro Carrasco Altamirano**.- Rúbrica.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, **Juan Mayolo Medina Linares**.- Rúbrica.- Por la Entidad Federativa: el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán, **Víctor Manuel Tinoco Rubí**.- Rúbrica.- Con la asistencia del Secretario de Gobierno, **Antonio García Torres**.- Rúbrica.- El Tesorero General del Estado, **Gabriel Pérez Gil Hinojosa**.- Rúbrica.

CONVENIO de Coordinación que celebran el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Sinaloa, para la realización de acciones en el año 2000, dentro del Programa Nacional de Seguridad Pública.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Sistema Nacional de Seguridad Pública.

CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR CONDUCTO DEL C. DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO, EN SU DOBLE CARACTER DE SECRETARIO DE GOBERNACION Y PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, Y DEL C. JUAN MAYOLO MEDINA LINARES, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL SISTEMA", Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, POR CONDUCTO DEL C. JUAN S. MILLAN LIZARRAGA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EL C. GONZALO M. ARMIENTA CALDERON, EL SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EL C. OSCAR JAVIER LARA ARECHIGA, Y EL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, C. JOSE LUIS LOPEZ URANGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA"; PARA LA REALIZACION DE ACCIONES EN EL AÑO 2000, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 párrafos quinto y sexto, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en las respectivas competencias que la propia Constitución señala y que se coordinarán en los términos que la Ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de las disposiciones constitucionales aludidas, señala en los artículos 2 y 11, que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se integra con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstos en la propia Ley, tendientes a cumplir con los objetivos y fines de la seguridad pública; y que, las políticas, lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en las demás instancias de coordinación.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su quinta sesión realizada el 25 de agosto de 1998, mediante el Acuerdo número 26/98, aprobó las Estrategias y Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000.

Con fecha 7 de julio de 1998, el Gobierno Federal y "LA ENTIDAD FEDERATIVA", suscribieron el Convenio de Coordinación para la realización de acciones en el año de 1998, en torno al Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, en el cual se acordó la constitución de un Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos, el cual quedó formalizado el 4 de septiembre de 1998.

De igual forma, el día 16 de abril de 1999, se formalizó el Convenio de Coordinación para la realización de acciones en el año de 1999, en torno al Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, en el que se pactó que la administración de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se continuaría realizando a través del Fideicomiso Local constituido para tal fin.

La Ley de Coordinación Fiscal, en los artículos 25 fracción VII y 44, establece la existencia del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, el cual se constituye con cargo a recursos federales, mismos que son determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que los recursos que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal que reciban dichas entidades, se destinarán exclusivamente al reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; a complementar las dotaciones de los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las procuradurías de justicia de los estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.

Conforme al artículo 44 tercer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y Distrito Federal, se entregarán a las entidades federativas por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se distribuirán de acuerdo a los criterios que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a propuesta de la Secretaría de Gobernación.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su octava sesión celebrada el 27 de octubre de 1999 tomó el Acuerdo número 90/99, por el que se aprobaron y ratificaron los criterios de asignación y la fórmula de distribución de los recursos del Fondo VII, correspondientes al Ramo 33, de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a determinarse en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2000.

En la citada sesión octava, el Consejo Nacional de Seguridad Pública mediante el Acuerdo 92/99, aprobó y ratificó, conforme lo determinan la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Coordinación Fiscal, la suscripción de Convenios de Coordinación y sus respectivos Anexos Técnicos para el Ejercicio Fiscal del 2000; así como continuar con la figura de los fideicomisos locales de distribución de fondos, constituidos de conformidad con los Convenios de Coordinación suscritos en 1998.

Con fecha 17 de enero del año 2000, se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** los criterios de asignación y la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como el resultado de su aplicación correspondiente a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal.

DECLARACIONES

De "EL SISTEMA":

Que el Secretario de Gobernación, de acuerdo con el artículo 12, de la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, preside el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Que el C. Diódoro Carrasco Altamirano, fue designado Secretario de Gobernación, mediante nombramiento de fecha 21 de mayo de 1999, expedido por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Que conforme a los artículos 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12 de la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1 y 5 fracciones XVII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; así como el Acuerdo 34/98, del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en la sexta sesión celebrada el día 28 de enero de 1999; el Secretario de Gobernación está facultado para suscribir el presente instrumento.

Que mediante el Acuerdo 23/98, tomado en la quinta sesión celebrada el día 25 de agosto de 1998, el Consejo Nacional de Seguridad Pública designó al C. Juan Mayolo Medina Linares, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Que al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública le corresponde tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la coordinación y preservar la seguridad pública, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 17, de la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 75, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

De "LA ENTIDAD FEDERATIVA":

Que el C. Juan S. Millán Lizárraga, es titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.

Que conforme al artículo 12 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Que está facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo a los artículos 65, fracciones I, XXIII Bis y XXIV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 2o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; y 8o. fracción II de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sinaloa.

De ambas partes:

Que es necesario continuar con la ejecución de las Estrategias y Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como la realización de acciones orientadas a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública; por lo que convienen en coordinarse en los términos de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto coordinar los criterios y las acciones en materia de seguridad pública, así como la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con el fin de cumplir con las metas establecidas en el Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000; con las Estrategias y Acciones de dicho Programa, aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como con las metas contenidas en el Programa Estatal de Seguridad Pública de "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

SEGUNDA.- De conformidad con los Acuerdos tomados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en sus sesiones quinta y octava, los ejes que comprenden el presente Convenio son:

1.- Profesionalización.
2.- Cobertura y capacidad de respuesta.
3.- Equipamiento, tecnología e infraestructura.
4.- Instancias de coordinación.
5.- Participación de la comunidad.

TERCERA.- Los objetivos, líneas de acción, metas y alcances de los programas que se deriven de cada eje, se acordarán conjuntamente por "EL SISTEMA" por conducto del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y "LA ENTIDAD FEDERATIVA", de conformidad con los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y se incluirán en los anexos técnicos respectivos, los cuales formarán parte de este Convenio.

CUARTA.- De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 44, de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se enterarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez meses del año a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones. Dichos recursos se registrarán como ingresos propios y su control, vigilancia y evaluación se llevarán a cabo, conforme a lo establecido en los artículos 45 y 46 de la citada Ley.

QUINTA.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destinará las aportaciones que reciba con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como las que realice con cargo a su propio presupuesto, exclusivamente a las siguientes acciones: reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; a complementar las dotaciones de los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las procuradurías de justicia de los estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.

SEXTA.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "EL SISTEMA", atendiendo a lo establecido en la fracción II del artículo 9o. de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; en el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, y en los Acuerdos y Resoluciones del Consejo Nacional, convienen en realizar acciones específicas de seguimiento y evaluación respecto de los programas y acciones implementados en el ámbito estatal, en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000. Al efecto, suscribirán el Anexo Técnico correspondiente al programa de seguimiento y evaluación, mismo que formará parte integrante de este instrumento.

SEPTIMA.- Las partes acuerdan que la administración de los recursos destinados provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y los aportados por "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se realizará a través del Fideicomiso Estatal constituido para tal fin, de acuerdo a las reglas de operación y funcionamiento con los que viene operando.

OCTAVA.- Para salvaguardar el cumplimiento de las metas nacionales respectivas, los recursos asignados a los programas que se deriven de los ejes acordados en la cláusula segunda del presente Convenio y sus anexos técnicos, no podrán destinarse a otros fines, sólo podrán transferirse de un programa a otro(s), previa solicitud por escrito y justificación debidamente documentada que se formule al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien convendrá, si así procediere, la transferencia con el representante de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" que haya suscrito los anexos técnicos que se modifiquen, lo que se formalizará a través de un addendum a los mismos, debiendo ser ejercidos los recursos de acuerdo al cuadro de metas y montos que se establezca en el addendum. El Comité Técnico del Fideicomiso Estatal realizará las operaciones necesarias a fin de que los recursos se transfieran de un programa a otro, en los términos pactados.

NOVENA.- De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, y de acuerdo a los criterios de asignación y fórmula de distribución aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su octava sesión celebrada el 27 de octubre de 1999, se destinan del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a favor de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", recursos por un monto de $154´068,110.00 (ciento cincuenta y cuatro millones sesenta y ocho mil ciento diez pesos 00/100 M.N.).

Los recursos serán enterados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través del Fideicomiso Estatal referido en la cláusula séptima, por lo cual, la institución fiduciaria conjuntamente con la Secretaría de Administración y Finanzas de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", expedirán el recibo más amplio que en derecho proceda, a favor de la Tesorería de la Federación, por cada ministración que se realice.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" complementará los recursos destinados por "EL SISTEMA", a fin de cumplir con las Estrategias y Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Programa Estatal de Seguridad Pública, para lo cual aportará al Fideicomiso Estatal, recursos por un monto de $ 66´948,337.00, (sesenta y seis millones novecientos cuarenta y ocho mil trescientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.), con cargo a su propio presupuesto, conforme al calendario y términos que se especifiquen en cada anexo técnico.

DECIMA.- "EL SISTEMA", por conducto del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y "LA ENTIDAD FEDERATIVA", promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se requieran para el cumplimiento del presente Convenio.

DECIMA PRIMERA.- Este Convenio se publicará en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", y entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción.

El presente Convenio se firma en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil.- Por el Sistema: el Secretario de Gobernación y Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, **Diódoro Carrasco Altamirano**.- Rúbrica.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, **Juan Mayolo Medina Linares**.- Rúbrica.- Por la Entidad Federativa: el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, **Juan S. Millán Lizárraga**.- Rúbrica.- Con la asistencia del Secretario General de Gobierno, **Gonzalo M. Armienta Calderón**.- Rúbrica.- El Secretario de Administración y Finanzas, **Oscar Javier Lara Aréchiga**.- Rúbrica.- El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, **José Luis López Uranga**.- Rúbrica.

CONVENIO de Coordinación que celebran el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Sonora, para la realización de acciones en el año 2000, dentro del Programa Nacional de Seguridad Pública.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Sistema Nacional de Seguridad Pública.

CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR CONDUCTO DEL C. LIC. DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO, EN SU DOBLE CARACTER DE SECRETARIO DE GOBERNACION Y PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, Y DEL C. LIC. JUAN MAYOLO MEDINA LINARES, SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL SISTEMA", Y POR LA OTRA PARTE, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, POR CONDUCTO DEL C. LIC. ARMANDO LOPEZ NOGALES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, EL C. LIC. OSCAR LOPEZ VUCOVICH, Y EL SECRETARIO DE FINANZAS, EL C. C.P. RENE MONTAÑO TERAN, AMBOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA"; PARA LA REALIZACION DE ACCIONES EN EL AÑO 2000, DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 párrafos quinto y sexto, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en las respectivas competencias que la propia Constitución señala y que se coordinarán en los términos que la Ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de las disposiciones constitucionales aludidas, señala en los artículos 2 y 11, que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se integra con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstos en la propia Ley, tendientes a cumplir con los objetivos y fines de la seguridad pública; y que, las políticas, lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos o con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en las demás instancias de coordinación.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su quinta sesión realizada el 25 de agosto de 1998, mediante el Acuerdo número 26/98, aprobó las Estrategias y Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000.

Con fecha 21 de julio de 1998, el Gobierno Federal y "LA ENTIDAD FEDERATIVA", suscribieron el Convenio de Coordinación para la realización de acciones en el año de 1998, en torno al Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, en el cual se acordó la constitución de un Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos, el cual quedó formalizado el 4 de septiembre de 1998.

De igual forma, el día 16 de marzo de 1999, se formalizó el Convenio de Coordinación para la realización de acciones en el año de 1999, en torno al Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, en el que se pactó que la administración de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad

Pública de los Estados y del Distrito Federal, se continuaría realizando a través del Fideicomiso Local constituido para tal fin.

La Ley de Coordinación Fiscal, en los artículos 25 fracción VII y 44, establece la existencia del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, el cual se constituye con cargo a recursos federales, mismos que son determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que los recursos que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal que reciban dichas entidades, se destinarán exclusivamente al reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; a complementar las dotaciones de los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las procuradurías de justicia de los estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.

Conforme al artículo 44 tercer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y Distrito Federal, se entregarán a las entidades federativas por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se distribuirán de acuerdo a los criterios que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a propuesta de la Secretaría de Gobernación.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su octava sesión celebrada el 27 de octubre de 1999 tomó el Acuerdo número 90/99, por el que se aprobaron y ratificaron los criterios de asignación y la fórmula de distribución de los recursos del Fondo VII, correspondientes al Ramo 33, de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a determinarse en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2000.

En la citada sesión octava, el Consejo Nacional de Seguridad Pública mediante el Acuerdo 92/99, aprobó y ratificó, conforme lo determinan la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Coordinación Fiscal, la suscripción de Convenios de Coordinación y sus respectivos Anexos Técnicos para el Ejercicio Fiscal del 2000; así como continuar con la figura de los fideicomisos locales de distribución de fondos, constituidos de conformidad con los Convenios de Coordinación suscritos en 1998.

Con fecha 17 de enero del año 2000 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** los criterios de asignación y la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como el resultado de su aplicación correspondiente a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal.

DECLARACIONES

De “EL SISTEMA”:

Que el Secretario de Gobernación, de acuerdo con el artículo 12, de la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, preside el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Que el C. Lic. Diódoro Carrasco Altamirano, fue designado Secretario de Gobernación, mediante nombramiento de fecha 21 de mayo de 1999, expedido por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Que conforme a los artículos 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12, de la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1 y 5 fracciones XVII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; así como el Acuerdo 34/99, del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobado en la sexta sesión celebrada el día 28 de enero de 1999; el Secretario de Gobernación está facultado para suscribir el presente instrumento.

Que mediante el Acuerdo 23/98, tomado en la quinta sesión celebrada el día 25 de agosto de 1998, el Consejo Nacional de Seguridad Pública designó al C. Lic. Juan Mayolo Medina Linares, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Que al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública le corresponde tomar las medidas necesarias para hacer efectiva la coordinación y preservar la seguridad pública, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 17, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 75, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

De “LA ENTIDAD FEDERATIVA”:

Que el C. Lic. Armando López Nogales, es titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora.

Que conforme al artículo 12 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Que está facultado para suscribir el presente Convenio, de acuerdo a los artículos 79 fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 2, 9 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; y 5, 6, 10, 11 y 23 fracción I de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora

De ambas partes:

Que es necesario continuar con la ejecución de las Estrategias y Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como la realización de acciones orientadas a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública; por lo que convienen en coordinarse en los términos de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto coordinar los criterios y las acciones en materia de seguridad pública, así como la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con el fin de cumplir con las metas establecidas en el Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000; con las Estrategias y Acciones de dicho Programa, aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como con las metas contenidas en el Programa Estatal de Seguridad Pública de "LA ENTIDAD FEDERATIVA".

SEGUNDA.- De conformidad con los Acuerdos tomados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en sus sesiones quinta y octava, los ejes que comprenden el presente Convenio son:

1.- Profesionalización.

2.- Cobertura y capacidad de respuesta.

3.- Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.

4.- Equipamiento, tecnología e infraestructura.

5.- Instancias de coordinación.

6.- Participación de la comunidad.

TERCERA.- Los objetivos, líneas de acción, metas y alcances de los programas que se deriven de cada eje, se acordarán conjuntamente por "EL SISTEMA" por conducto del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y "LA ENTIDAD FEDERATIVA", de conformidad con los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y se incluirán en los anexos técnicos respectivos, los cuales formarán parte de este Convenio.

CUARTA.- De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 44, de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se enterarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez meses del año a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones. Dichos recursos se registrarán como ingresos propios y su control, vigilancia y evaluación se llevarán a cabo, conforme a lo establecido en los artículos 45 y 46 de la citada Ley.

QUINTA.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" destinará las aportaciones que reciba con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, así como las que realice con cargo a su propio presupuesto, exclusivamente a las siguientes acciones: reclutamiento, selección, depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; a complementar las dotaciones de los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las procuradurías de justicia de los estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.

SEXTA.- "LA ENTIDAD FEDERATIVA" y "EL SISTEMA", en apego a lo establecido en las fracciones II, V del artículo 9o., fracción III del artículo 15, y fracción III del artículo 17 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, y a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional, convienen en aplicar recursos para realizar acciones específicas de seguimiento y evaluación respecto de los programas y acciones implementados en el ámbito estatal, en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000. Al efecto, las partes

suscribirán el Anexo Técnico correspondiente al programa de seguimiento y evaluación, mismo que formará parte integrante de este instrumento.

SEPTIMA.- Las partes acuerdan que la administración de los recursos destinados provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y los aportados por "LA ENTIDAD FEDERATIVA", se realizará a través del Fideicomiso Estatal constituido para tal fin, de acuerdo a las reglas de operación y funcionamiento con los que viene operando.

OCTAVA.- Para salvaguardar el cumplimiento de las metas nacionales respectivas, los recursos asignados a los programas que se deriven de los ejes acordados en la cláusula segunda del presente Convenio y sus anexos técnicos, no podrán destinarse a otros fines, sólo podrán transferirse de un programa a otro(s), previa solicitud por escrito y justificación debidamente documentada que se formule al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien convendrá, si así procediere, la transferencia con el representante de "LA ENTIDAD FEDERATIVA" que haya suscrito los anexos técnicos que se modifiquen, lo que se formalizará a través de un addendum a los mismos, debiendo ser ejercidos los recursos de acuerdo al cuadro de metas y montos que se establezca en el addendum. El Comité Técnico del Fideicomiso Estatal realizará las operaciones necesarias a fin de que los recursos se transfieran de un programa a otro, en los términos pactados.

NOVENA.- De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, y de acuerdo a los criterios de asignación y fórmula de distribución aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su octava sesión celebrada el 27 de octubre de 1999, se destinan del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, a favor de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", recursos por un monto de $223'495,279.00, (doscientos veintitrés millones cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N).

Los recursos serán enterados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA", a través del Fideicomiso Estatal referido en la cláusula séptima, por lo cual, la institución fiduciaria conjuntamente con la Secretaría de Finanzas de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", expedirán el recibo más amplio que en derecho proceda, a favor de la Tesorería de la Federación, por cada ministración que se realice.

"LA ENTIDAD FEDERATIVA" complementará los recursos destinados por "EL SISTEMA", a fin de cumplir con las Estrategias y Acciones del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Programa Estatal de Seguridad Pública, para lo cual aportará al Fideicomiso Estatal, recursos por un monto de $90'076,018.00 (noventa millones setenta y seis mil dieciocho pesos 00/100 M.N.), con cargo a su propio presupuesto, conforme al calendario y términos que se especifiquen en cada anexo técnico.

DECIMA.- "EL SISTEMA", por conducto del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y "LA ENTIDAD FEDERATIVA", promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se requieran para el cumplimiento del presente Convenio.

DECIMA PRIMERA.- Este Convenio se publicará en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial de "LA ENTIDAD FEDERATIVA", y entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción.

El presente Convenio se firma en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los tres días del mes de febrero de dos mil.- Por el Sistema: el Secretario de Gobernación y Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, **Diódoro Carrasco Altamirano**.- Rúbrica.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, **Juan Mayolo Medina Linares**.- Rúbrica.- Por la Entidad Federativa: el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sonora, **Armando López Nogales**.- Rúbrica.- Con la asistencia del Secretario de Gobierno, **Oscar López Vucovich**.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas, **René Montaño Terán**.- Rúbrica.

FE de erratas al Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 7 de abril de 2000.

En la página 2, segunda columna, décimo renglón, dice:

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Debe decir:

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez".

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

DECLARATORIA de vigencia de las normas mexicanas NMX-AG-001-IMNC-1999, NMX-CC-021-IMNC-1999, NMX-CH-010-IMNC-1999, NMX-CH-146-IMNC-1999, NMX-CH-147-IMNC-1999, NMX-CH-150-IMNC-1999, NMX-SSA-002-IMNC-1999, NMX-SSA-003-IMNC-1999, NMX-SSA-004-IMNC-1999, NMX-SSA-005-IMNC-1999 y NMX-SSA-006-IMNC-1999.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.- Dirección General de Normas.

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LAS NORMAS MEXICANAS QUE SE INDICAN

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en los artículos 34 fracciones XIII y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 51-A, 54, 66 fracciones III y V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 24 fracciones I y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la ley de la materia para estos efectos, expide la declaratoria de vigencia de las normas mexicanas que se listan a continuación, mismas que han sido elaboradas, aprobadas y publicadas como proyectos de normas mexicanas bajo la responsabilidad del organismo nacional de normalización denominado "Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC)", lo que se hace del conocimiento de los productores, distribuidores, consumidores y del público en general. El texto completo de las normas que se indican puede ser adquirido en la sede de dicha asociación, ubicada en Manuel Ma. Contreras 133 piso 6, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 06470, México, D.F., o consultado gratuitamente en la biblioteca de la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, Lomas de Tecamachalco, sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Las presentes normas entrarán en vigor 60 días después de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el **Diario Oficial de la Federación**.

DESIGNACION	**TITULO DE LA NORMA**
NMX-AG-001-IMNC-1999	PAPEL BOND OFFSET BLANCO 75 g/m2 EN EXTENDIDO PARA IMPRESION OFFSET DE LIBROS Y REVISTAS-ESPECIFICACIONES.
Campo de aplicación Esta Norma Mexicana establece las especificaciones aplicables al papel bond offset blanco 75 g/m2 en hojas de papel extendido en sus diferentes medidas, para la elaboración de libros y revistas en máquinas planas de impresión offset.	
Concordancia con normas internacionales Esta Norma Mexicana no equivale a ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.	

NMX-CC-021-IMNC-1999	REQUISITOS GENERALES PARA LA EVALUACION Y ACREDITACION DE ORGANISMOS DE CERTIFICACION/REGISTRO.
Campo de aplicación Esta Norma Mexicana especifica los requisitos generales a seguir por un organismo si éste está por ser reconocido a nivel nacional o internacional como competente y confiable en la evaluación y subsecuentemente en la acreditación de organismos de certificación u organismos de registro.	
Concordancia con normas internacionales Esta Norma Mexicana es equivalente a la ISO/IEC Guide 61-1996.	
NMX-CH-010-IMNC-1999	INSTRUMENTOS DE MEDICION-INSTRUMENTOS PARA PESAR DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMATICO-FORMATOS ESTANDARIZADOS PARA EVALUACION DE MODELO.
Campo de aplicación Esta Norma Mexicana establece los formatos estandarizados que deben ser utilizados para la evaluación de modelo y/o prototipo de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático.	
Concordancia con normas internacionales Esta Norma Mexicana no equivale a ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.	

NMX-CH-146-IMNC-1999	METODOS DE CALIBRACION-CALIBRACION DE AUTOTANQUES POR COMPARACION VOLUMETRICA.
Campo de aplicación Esta Norma Mexicana establece las especificaciones y métodos de prueba para medición y calibración de autotanques por el método de comparación volumétrica. Esta Norma Mexicana se aplica a los autotanques destinados a la transportación de líquidos sujetos a presión atmosférica.	

Concordancia con normas internacionales
Esta Norma Mexicana no equivale a ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.

NMX-CH-147-IMNC-1999	METODOS DE CALIBRACION-CALIBRACION DE AUTOTANQUES POR GRAVIMETRIA.
Campo de aplicación	
Esta Norma Mexicana establece las especificaciones y métodos de prueba para medición y calibración de autotanques por el método gravimétrico. Esta Norma Mexicana se aplica a los autotanques destinados a la transportación de líquidos sujetos a presión atmosférica.	
Concordancia con normas internacionales	
Esta Norma Mexicana no equivale a ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.	

NMX-CH-150-IMNC-1999	ELEMENTOS DE INFORMACION E INTERCAMBIO DE FORMATOS-INTERCAMBIO DE INFORMACION-REPRESENTACION DE FECHAS Y HORAS.
Campo de aplicación	
Esta Norma Mexicana especifica la representación de fechas en el calendario Gregoriano, así como horas y representaciones de periodos de tiempo y se aplica en cualquier caso de intercambio de información que incluya fechas y horas. Esta Norma Mexicana no cubre fechas y horas que usan palabras en su representación.	
Concordancia con normas internacionales	
Esta Norma Mexicana es idéntica a la Norma Internacional ISO 8601-1988.	
NMX-SSA-002-IMNC-1999	SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL-DIRECTRICES GENERALES SOBRE PRINCIPIOS, SISTEMAS Y TECNICAS DE APOYO.
Campo de aplicación	
Esta Norma Mexicana proporciona los lineamientos y principios para el desarrollo e implantación del sistema de administración ambiental y su coordinación con otros sistemas de administración. Esta Norma Mexicana es aplicable en cualquier organización considerando el tamaño, tipo o nivel de madurez, necesario para el desarrollo, implantación y mejoramiento del sistema de administración ambiental.	
Concordancia con normas internacionales	
Esta Norma Mexicana es equivalente a la Norma Internacional ISO 14004-1996.	

NMX-SSA-003-IMNC-1999	DIRECTRICES PARA AUDITORIAS AMBIENTALES-PRINCIPIOS GENERALES DE AUDITORIAS AMBIENTALES.
Campo de aplicación	
Esta Norma Mexicana provee los principios generales de las auditorías ambientales que son aplicables a todos los tipos de auditorías ambientales.	
Concordancia con normas internacionales	
Esta Norma Mexicana es equivalente a la Norma Internacional ISO 14010-1996.	

NMX-SSA-004-IMNC-1999	DIRECTRICES PARA AUDITORIAS AMBIENTALES-PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA-AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION AMBIENTAL.
Campo de aplicación	
Esta Norma Mexicana establece los procedimientos de auditoría que mantienen la planeación y desempeño de la auditoría de un sistema de administración ambiental para determinar la concordancia con el criterio de auditoría del sistema de administración ambiental.	
Concordancia con normas internacionales	
Esta Norma Mexicana es equivalente a la Norma Internacional ISO 14011-1996.	

NMX-SSA-005-IMNC-1999	DIRECTRICES PARA AUDITORIAS AMBIENTALES-CRITERIOS DE CALIFICACION PARA LOS AUDITORES AMBIENTALES.

Campo de aplicación
Esta Norma Mexicana proporciona los lineamientos sobre los criterios de calificación para auditores ambientales y para auditores líderes, y es aplicable a auditores internos y externos.
Concordancia con normas internacionales
Esta Norma Mexicana es equivalente a la Norma Internacional ISO 14012-1996.

NMX-SSA-006-IMNC-1999	ADMINISTRACION AMBIENTAL-VOCABULARIO.
Campo de aplicación	
Esta Norma Mexicana define los términos fundamentales relativos a los conceptos ambientales que se aplican en todas las áreas, para el uso y preparación de normas relativas a la administración ambiental y para el mutuo entendimiento en comunidades internacionales.	
Concordancia con normas internacionales	
Esta Norma Mexicana es equivalente a la Norma Internacional ISO 14050-1998.	

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 1 de febrero de 2000.- La Directora General de Normas, **Carmen Quintanilla Madero**.- Rúbrica.

DECLARATORIA de vigencia de las normas mexicanas NMX-I-270/01-NYCE-1999, NMX-I-270/02-NYCE-1999, NMX-I-270/03-NYCE-1999, NMX-I-270/05-NYCE-1999 y NMX-I-271-NYCE-1999.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.- Dirección General de Normas.

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LAS NORMAS MEXICANAS QUE SE INDICAN

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 51-A, 54, 66 fracciones III y V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 24 fracciones I y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la ley de la materia para estos efectos, expide la declaratoria de vigencia de las normas mexicanas que se listan a continuación, mismas que han sido elaboradas, aprobadas y publicadas como proyectos de normas mexicanas bajo la responsabilidad del organismo nacional de normalización denominado "Normalización y Certificación Electrónica, A.C. (NYCE)", lo que se hace del conocimiento de los productores, distribuidores, consumidores y del público en general. El texto completo de las normas que se indican puede ser adquirido en la sede de dicha asociación, ubicada en avenida Lomas de Sotelo número 1097, colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11200, México, D.F., o consultado gratuitamente en la biblioteca de la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, Lomas de Tecamachalco, sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Las presentes normas entrarán en vigor 60 días después de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el **Diario Oficial de la Federación**.

DESIGNACION	**TITULO DE LA NORMA**
NMX-I-270/01-NYCE-1999	PRODUCTOS ELECTROTECNICOS-DISPOSITIVOS DE PROTECCION-FUSIBLES MINIATURA-PARTE 1: DEFINICIONES PARA CORTACIRCUITOS MINIATURA Y PRESCRIPCIONES GENERALES DE FUSIBLES MINIATURA.
Campo de aplicación	
Esta Norma Mexicana establece los requisitos uniformes para fusibles miniatura con el fin de proteger equipos electrónicos o partes de equipos. Asimismo define el comportamiento de los fusibles para brindar una guía a los diseñadores de equipos electrónicos y para asegurar la sustitución de los fusibles para otros de dimensiones y características similares.	
Concordancia con normas internacionales	
Esta Norma Mexicana es indéntica a la Norma Internacional IEC-127-1-1988 y su corrigiendum de 1990.	

NMX-I-270/02-NYCE-1999	PRODUCTOS ELECTROTECNICOS-DISPOSITIVOS DE PROTECCION-FUSIBLES MINIATURA-PARTE 2: FUSIBLES DE CARTUCHO.

Campo de aplicación	
Esta Norma Mexicana establece las prescripciones particulares aplicables a los fusibles de cartucho para cortocircuitos miniatura con dimensiones de 5 mm x 20 mm y de 6,3 mm x 32 mm para la protección de equipos electrónicos y partes componentes, normalmente concebidas para utilización en interiores.	
Concordancia con normas internacionales	
Esta Norma Mexicana es idéntica a la Norma Internacional IEC-127-2-1988 y su adenda de 1990.	
NMX-I-270/03-NYCE-1999	PRODUCTOS ELECTROTECNICOS-DISPOSITIVOS DE PROTECCION-FUSIBLES MINIATURA-PARTE 3: FUSIBLES SUBMINIATURA.
Campo de aplicación	
Esta Norma Mexicana establece los requisitos particulares aplicables a fusibles subminiatura adaptados a circuitos impresos y usados para la protección de equipos electrónicos y sus componentes, normalmente destinados a su utilización en interiores.	
Concordancia con normas internacionales	
Esta Norma Mexicana es idéntica a la Norma Internacional IEC-127-3-1988, adenda 1 de 1991 y corrigiendum de 1994 y 1996.	

NMX-I-270/05-NYCE-1999	PRODUCTOS ELECTROTECNICOS-DISPOSITIVOS DE PROTECCION-FUSIBLES MINIATURA-PARTE 5: GUIA PARA LA EVALUACION DE LA CALIDAD DE LOS FUSIBLES MINIATURA.
Campo de aplicación	
Esta Norma Mexicana establece las guías y límites generalmente aceptables para los efectos del control de la calidad por usuarios y fabricantes en gran escala de fusibles miniatura. Esta Norma Mexicana es aplicable para series de gran escala con tamaños de lote de 10 000 y mayores, también es aplicable, si fuera necesario, a tamaños menores.	
Concordancia con normas internacionales	
Esta Norma Mexicana es idéntica a la Norma Internacional IEC-127-5-1988.	

NMX-I-271-NYCE-1999	PRODUCTOS ELECTROTECNICOS-ELECTRONICA-SEGURIDAD DE RADIACION DE PRODUCTOS LASER, CLASIFICACION DE EQUIPOS, REGISTRO Y GUIA DEL USUARIO.
Campo de aplicación	
Esta Norma Mexicana tiene por objeto proteger a las personas de la radiación láser en el intervalo de longitudes de onda comprendida entre 180 mm y 1 mm, mediante la indicación de los niveles seguros de trabajo con radiación láser e introduciendo un sistema de clasificación de haces y productos láser, en conformidad con su grado de peligrosidad.	
Concordancia con normas internacionales	
Esta Norma Mexicana es idéntica a la Norma Internacional IEC-825-1-1993 y su adenda de 1994.	

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 1 de febrero de 2000.- La Directora General de Normas, **Carmen Quintanilla Madero**.- Rúbrica.

DECLARATORIA de vigencia de las normas mexicanas NMX-J-036-ANCE-1999, NMX-J-184-ANCE-1999, NMX-J-192-ANCE-1999, NMX-J-198-ANCE-1999, NMX-J-383-ANCE-1999, NMX-J-426-ANCE-1999, NMX-J-439-ANCE-1999, NMX-J-521/2-7-ANCE-1999 y NMX-J-521/2-23-ANCE-1999.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.- Dirección General de Normas.

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LAS NORMAS MEXICANAS QUE SE INDICAN

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en los artículos 34 fracciones XIII y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 51-A, 54, 66 fracciones III y V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 24 fracciones I y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la ley de la materia para estos efectos, expide la declaratoria de vigencia de las normas mexicanas que se listan a continuación, mismas que han sido elaboradas, aprobadas y publicadas como proyectos de normas mexicanas bajo la responsabilidad del organismo nacional de normalización denominado

"Asociación Nacional de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico, A.C. (ANCE)", lo que se hace del conocimiento de los productores, distribuidores, consumidores y del público en general. El texto completo de las normas que se indican puede ser adquirido en la sede de dicha Asociación, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6 - Bis, Lomas de Tecamachalco, sección Fuentes, 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México, o consultado gratuitamente en la biblioteca de la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, Lomas de Tecamachalco, sección Fuentes, 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Las presentes normas entrarán en vigor 60 días después de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el **Diario Oficial de la Federación**.

DESIGNACION	**TITULO DE LA NORMA**
NMX-J-036-ANCE-1999	PRODUCTOS ELECTRICOS-CONDUCTORES-ALAMBRE DE COBRE SUAVE PARA USOS ELECTRICOS-ESPECIFICACIONES. CANCELA A LA NMX-J-036-1995-ANCE.
Campo de aplicación Esta Norma Mexicana establece las especificaciones y métodos de prueba que deben cumplir los alambres de cobre suave de sección circular, con diámetro de 0,075 mm a 12,500 mm. Esta Norma Mexicana no se aplica a alambres de cobre suave para uso en alambre magneto, los cuales deben cumplir con la norma correspondiente al producto.	
Concordancia con normas internacionales Esta Norma Mexicana equivale a la Norma Internacional IEC 228 (1978-01) en los valores de sección transversal y diámetros de alambres en donde se indica "Denominación Internacional", y con la Norma Internacional IEC 28 (1925-01) en los valores de resistencia eléctrica.	

NMX-J-184-ANCE-1999	PRODUCTOS ELECTRICOS-CONDUCTORES-DETERMINACION DEL MODULO DE ELASTICIDAD EN AISLAMIENTOS Y CUBIERTAS PROTECTORAS DE CONDUCTORES ELECTRICOS A BASE DE ELASTOMEROS-METODO DE PRUEBA. CANCELA A LA NMX-J-184-1996-ANCE.
Campo de aplicación Esta Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el módulo de elasticidad a un valor de alargamiento establecido por la especificación del producto, en aislamientos y cubiertas protectoras de conductores eléctricos, a base de elastómeros.	
Concordancia con normas internacionales Esta Norma Mexicana no equivale a ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.	

NMX-J-192-ANCE-1999	PRODUCTOS ELECTRICOS-CONDUCTORES-RESISTENCIA A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CONDUCTORES ELECTRICOS-METODO DE PRUEBA. CANCELA A LA NMX-J-192-1988.
Campo de aplicación Esta Norma Mexicana establece los métodos de prueba para determinar la resistencia a la propagación de la flama en conductores eléctricos aislados con o sin cubierta.	
Concordancia con normas internacionales Esta Norma Mexicana equivale a la Norma Internacional IEC 695-2-4/2 (1994-03), Método A, en lo que se refiere al equipo y metodología para la calibración de la flama; y difiere de la IEC 332-1 (1993-04) en los siguientes aspectos: cámara de prueba, tamaño de los especímenes, tiempo de prueba e interpretación de resultados. Estas discrepancias son resultado de diferencias tecnológicas y regulaciones técnicas en materia de instalaciones eléctricas.	

NMX-J-198-ANCE-1999	PRODUCTOS ELECTRICOS-ILUMINACION-BALASTROS PARA LAMPARAS FLUORESCENTES-METODOS DE PRUEBA. CANCELA A LA NMX-J-198-1977.
Campo de aplicación Esta Norma Mexicana establece los métodos de prueba para balastros fluorescentes.	
Concordancia con normas internacionales Esta Norma Mexicana no equivale a las normas internacionales por razones particulares del país.	

NMX-J-383-ANCE-1999	INDUSTRIA ELECTRICA-CONECTADORES-CONECTADORES DE ALUMINIO TIPO MECANICO-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. CANCELA A LA NMX-J-383-1994-ANCE.
Campo de aplicación Esta Norma Mexicana establece las características mecánicas y eléctricas, así como los métodos de prueba aplicables a conectadores mecánicos de aluminio o alguna de sus aleaciones, empleadas en conductores de aluminio desnudo (AAC) o de aluminio reforzado con alma de acero (ACSR), con secciones transversales de 8,37 mm² (designado como 8 AWG) hasta 805,7 mm² (designado como 1 590 kCM). Si bien los requisitos de esta Norma han sido desarrollados para el propósito anterior, son igualmente aplicables para conexiones de conductores de tubo, birlo y barra. Se introducen consideraciones al respecto.	
Concordancia con normas internacionales Esta Norma no equivale a ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.	

NMX-J-426-ANCE-1999	PRODUCTOS ELECTRICOS-CONDUCTORES-RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO DE MATERIALES PARA CUBIERTAS DE POLIETILENO EN UN MEDIO AMBIENTE CONTROLADO-METODO DE PRUEBA. CANCELA A LA NMX-J-426-1981.
Campo de aplicación Esta Norma Mexicana establece el método de prueba aplicable a la materia prima para cubiertas a base de polietileno para conductores eléctricos, para determinar la resistencia al agrietamiento bajo condiciones de esfuerzo, en ambientes con presencia de jabones, agentes humectantes, aceites o detergentes.	
Concordancia con normas internacionales Esta Norma Mexicana equivale a la Norma Internacional IEC 811-4-1 (1985-10) sección uno en la parte correspondiente al agrietamiento de cubiertas de polietileno en un medio ambiente controlado.	
NMX-J-439-ANCE-1999	PRODUCTOS ELECTRICOS-CONDUCTORES-DETERMINACION DE ARBORESCENCIAS PROVOCADAS POR AGUA EN CABLES DE ENERGIA CON AISLAMIENTO EXTRUIDO-METODO DE PRUEBA. CANCELA A LA NMX-J-439-1987.
Campo de aplicación Esta Norma Mexicana establece el método para realizar la prueba de arborescencias provocadas por agua en cables de energía con conductor de cobre o aluminio con cableado concéntrico normal o comprimido, clase B, sin compuesto de relleno y aislamiento extruido.	
Concordancia con normas internacionales Esta Norma Mexicana no equivale a ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.	

NMX-J-521/2-7-ANCE-1999	PRODUCTOS ELECTRICOS-APARATOS Y EQUIPOS DE USO DOMESTICO-SEGURIDAD EN APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y SIMILARES PARTE 2-7: REQUISITOS PARTICULARES PARA MAQUINAS LAVADORAS DE ROPA. CANCELA A LAS NMX-J-337/01-1978 Y NMX-J-337-1996-ANCE.
Campo de aplicación Esta Norma Mexicana establece las especificaciones para la seguridad de las máquinas lavadoras electrodomésticas y de propósitos similares, diseñadas para lavar ropa y textiles. Su tensión nominal no debe ser mayor de 250 V **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** para los aparatos monofásicos y 480 V **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** para otros aparatos.	
Concordancia con normas internacionales Esta Norma Mexicana no equivale a la Norma Internacional IEC 60335-2-7 (1993-06), y difiere en las desviaciones nacionales indicadas en las hojas correspondientes al inicio de esta Norma.	

NMX-J-521/2-23-ANCE-1999	PRODUCTOS ELECTRICOS-APARATOS Y EQUIPOS DE USO DOMESTICO-SEGURIDAD DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y SIMILARES PARTE 2-23: REQUISITOS PARTICULARES PARA APARATOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL Y EL CABELLO. CANCELA A LAS NMX-J-375-1979, NMX-J-392-1980 Y NMX-J-424-1981.
Campo de aplicación	
Esta Norma Mexicana establece las especificaciones para la seguridad de aparatos eléctricos para el cuidado de la piel y del pelo de personas o animales y destinados para propósitos domésticos y similares, siendo su tensión nominal no mayor de 250 V.	
Concordancia con normas internacionales	
Esta Norma Mexicana no equivale a la Norma Internacional IEC 60335-2-23 (1996-02), y difiere en las desviaciones nacionales indicadas en las hojas correspondientes al inicio de esta Norma.	

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 1 de febrero de 2000.- La Directora General de Normas, **Carmen Quintanilla Madero**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL

PROYECTO de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos fitosanitarios y especificaciones para la importación de granos y semillas, excepto para siembra.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

PROYECTO DE MODIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-028-FITO-1995, POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS FITOSANITARIOS Y ESPECIFICACIONES PARA LA IMPORTACION DE GRANOS Y SEMILLAS, EXCEPTO PARA SIEMBRA.

LUIS ALBERTO AGUIRRE URIBE, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección Fitosanitaria, con fundamento en lo previsto por los artículos 45, 46 fracción II y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, me permito ordenar la publicación en el **Diario Oficial de la Federación** del Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos fitosanitarios y especificaciones para la importación de granos y semillas, excepto para siembra.

El presente Proyecto se publica a efecto de que los interesados dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de su publicación, presenten sus comentarios en "versión español sustentados científica y técnicamente cuando así sea necesario" ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección Fitosanitaria, sito en Guillermo Pérez Valenzuela No. 127, Colonia del Carmen, Coyoacán. Código Postal 04100, en México, D.F., o bien vía electrónica al siguiente e-mail: **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**

Durante el plazo mencionado, los análisis que sirvieron de base para la elaboración del proyecto de modificación de esta Norma, estarán a disposición del público para su consulta en el domicilio del Comité.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes de marzo de dos mil.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección Fitosanitaria, **Luis Alberto Aguirre Uribe**.- Rúbrica.

PROYECTO DE MODIFICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-028-FITO-1995, POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS FITOSANITARIOS Y ESPECIFICACIONES PARA LA IMPORTACION DE GRANOS Y SEMILLAS, EXCEPTO PARA SIEMBRA

Se modifica el inciso a) del punto 4.2.1.1, para quedar como sigue:

a) Certificado Fitosanitario Internacional (CFI) emitido por las Autoridades de Agricultura del país de origen.

Se adicionan tres párrafos, después del inciso a) del punto 4.2.1.1, quedando de la siguiente manera:

b) Para el caso de cacahuate, maíz y sorgo, el CFI deberá contener una declaración adicional especificando que el contenido de aflatoxinas del cargamento es menor o igual a 20 ug/Kg (microgramos/kilogramo) y que la humedad del producto es igual o menor a 12% para cacahuate y 14.5 para maíz y sorgo. Esta especificación podrá substituirse por un dictamen/resultado de un laboratorio autorizado por la autoridad competente en el país de origen.

c) Para el caso de trigo y centeno, el CFI o el dictamen/resultado de un laboratorio autorizado por la autoridad competente en el país de origen, deberá especificar que el contenido de esclerocios de *Claviceps purpurea* es menor o igual a 0.3%. Asimismo, los cargamentos de sorgo requieren una declaración en el CFI

o un dictamen/resultado de laboratorio de prueba constatando que el contenido de esclerocios de *Claviceps africana* es menor o igual a 0.05%.

d) Cuando el CFI o el dictamen/resultado de laboratorio no especifique el contenido de humedad, aflatoxinas o esclerocios para los productos señalados en los incisos b) y c) de este punto, el cargamento deberá muestrearse y someterse a vigilancia o retención, de acuerdo a los lineamientos para la toma y envío de muestras de vegetales, productos y subproductos de importación y su correspondiente dictamen por parte de un laboratorio aprobado, establecidos por la Dirección General de Sanidad Vegetal, y en su caso proceder de acuerdo a la legislación vigente.

El inciso b) del punto 4.2.1.1. se convierte en el inciso e), conservando el mismo texto.

El inciso c) del punto 4.2.1.1. se convierte en el inciso f) y se modifica para quedar como sigue:

f) Toma de muestra para su envío a un laboratorio aprobado por la Secretaría, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección General de Sanidad Vegetal. Para el caso de productos que requieran de análisis de aflatoxinas, los laboratorios de prueba deberán además estar aprobados o ser terceros autorizados por la Secretaría de Salud. Los gastos que se generen serán cubiertos por el importador en términos de lo previsto por el artículo 91 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Se adiciona un nuevo párrafo después del inciso c) del punto 4.2.1.1., quedando de la siguiente manera:

g) Cuando el CFI no especifique la condición fitosanitaria señalada en los requisitos adicionales de cualquiera de los productos contenidos en esta Norma, el cargamento deberá muestrearse y someterse a vigilancia o retención, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección General de Sanidad Vegetal, hasta obtener el dictamen de un laboratorio aprobado constatando que el producto cumple con las especificaciones de esta Norma.

El inciso d) y e) del punto 4.2.1.1.se convierten en h) e i), respectivamente, conservando el texto.

Se modifican los requisitos G078, G079, G080, G091, G095 y G096 del punto 4.2.1.1, para quedar como sigue:

Req. No.	Producto	País de origen	Requisitos adicionales	Tratamiento fitosanitario
G078	Maíz	E.U.A.		Se acepta la aplicación en el país de origen del tratamiento con bromuro de metilo. En caso de no ser fumigado en origen, se aplicará en el punto de ingreso a México el tratamiento T302(d1) o T302(d2).
G079	Maíz palomero	Canadá		Se acepta la aplicación en el país de origen del tratamiento con bromuro de metilo. En caso de no ser fumigado en origen, se aplicará en el punto de ingreso a México el tratamiento T302(d1) o T302(d2).
G080	Maíz palomero	E.U.A.		Se acepta la aplicación en el país de origen del tratamiento con bromuro de metilo. En caso de no ser fumigado en origen, se aplicará en el punto de ingreso a México el tratamiento T302(d1) o T302(d2).
G091	Sorgo	E.U.A.		Se acepta la aplicación en el país de origen del tratamiento con bromuro de metilo. En caso de no ser fumigado en origen, se aplicará en el punto de ingreso a México el tratamiento T302(d1) o T302(d2).

G095	Trigo	E.U.A.	El Certificado Fitosanitario Internacional deberá señalar que el embarque no proviene de Arizona, California, New Mexico y Sureste de Texas (El Paso, Hudspeth, Culberson, Jeff Davis y Presidio).	Se acepta la aplicación en el país de origen del tratamiento con bromuro de metilo. En caso de no ser fumigado en origen, se aplicará en el punto de ingreso a México el tratamiento T302(d1) o T302(d2).
G096	Trigo	Canadá		Se acepta la aplicación en el país de origen del tratamiento con bromuro de metilo. En caso de no ser fumigado en origen, se aplicará en el punto de ingreso a México el tratamiento T302(d1) o T302(d2).

Se adiciona los requisitos G099 y G100 al final del punto 4.2.1.1, para quedar como sigue:

Req. No.	Producto	País de origen	Requisitos adicionales	Tratamiento fitosanitario
G099	Cebada maltera	Australia		Se acepta la aplicación en el país de origen del tratamiento TFA. En caso de no ser fumigado en origen, se aplicará en el punto de ingreso a México el tratamiento TFA.
G100	Sorgo	Australia	El Certificado Fitosanitario Internacional deberá señalar que el producto se encuentra libre de *Pseudomonas andropogonis, Commelina benghalensis* y *Urochloa panicoides*	Se acepta la aplicación en el país de origen del tratamiento con bromuro de metilo. En caso de no ser fumigado en origen, se aplicará en el punto de ingreso a México el tratamiento T302(d1) o T302(d2).

Se modifican las aduanas de ingreso para el requisito G095 del punto 4.2.1.2, eliminándose este requisito del segundo cuadro, por lo que se adiciona un cuarto cuadro al punto 4.2.1.2 para quedar como sigue:

Req. No.	Producto	País	Aduana de ingreso
G095	Trigo	E.U.A.	Para este producto se autorizan los siguientes puntos de ingreso:Guaymas, Son.; Cd. Juárez y Ojinaga, Chih.; Piedras Negras y Cd. Acuña, Coah.; Cd. Lerma, Campeche; Nuevo Laredo, Matamoros, Cd. Reynosa, Cd. Miguel Alemán, Cd. Camargo, Nuevo Progreso y Tampico, Tamps.; Tuxpan, Coatzacoalcos, y Veracruz, Ver.; Progreso, Yuc.; Mazatlán y Topolobampo, Sin.; Manzanillo, Col.; Lázaro Cárdenas, Mich.; Cd. Hidalgo y Cd. Cuauhtémoc, Chis.

Se agrega como último párrafo (después de los cuadros) al punto 4.2.1.2 lo siguiente:

Para el caso del ingreso de productos por aduanas de entrada no contempladas en esta Norma, el importador deberá solicitar a la Secretaría la autorización correspondiente, sustentando la necesidad. La Secretaría evaluará la solicitud y determinará lo conducente.

Se modifica el inciso b) del punto 4.2.2. para quedar como sigue:

b) Certificado fitosanitario de reexportación (CFR) emitido por la autoridad de agricultura del país de procedencia.

Se adicionan cuatro párrafos después del inciso b) del punto 4.2.2., quedando de la siguiente manera:

c) Para el caso de cacahuate, maíz y sorgo, el CFI o el CFR deberá contener una declaración adicional especificando que el contenido de aflatoxinas del cargamento es menor o igual a 20 ug/Kg y que la humedad del producto es igual o menor a 12% para cacahuate y 14.5 para maíz y sorgo. Esta especificación podrá

substituirse por un dictamen/resultado de un laboratorio autorizado por la autoridad competente en el país de origen o procedencia.

d) Para el caso de trigo y centeno, el CFI, el CFR o el dictamen/resultado de un laboratorio autorizado por la autoridad competente en el país de origen o procedencia, deberán especificar que el contenido de esclerocios de *Claviceps purpurea* en el cargamento es menor o igual a 0.3%. Asimismo, los cargamentos de sorgo requieren una declaración en el CFI o un dictamen/resultado de laboratorio de prueba constatando que el contenido de esclerocios de *Claviceps africana* es menor o igual a 0.05%.

e) Cuando el CFI o el dictamen/resultado de laboratorio no especifique el contenido de humedad, aflatoxinas o esclerocios para los productos señalados en los incisos b) y c) del punto 4.2.2., el cargamento deberá muestrearse y someterse a vigilancia o retención, de acuerdo a los lineamientos para la toma y envío de muestras de vegetales, productos y subproductos de importación y su correspondiente dictamen por parte de un laboratorio aprobado, establecidos por la Dirección General de Sanidad Vegetal, y en su caso proceder de acuerdo a la legislación vigente.

f) Inspección fitosanitaria en el lugar de ingreso al país.

Se modifica el inciso c) del punto 4.2.2. para quedar como sigue:

g) Toma de muestra para su envío a un laboratorio aprobado por la Secretaría, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección General de Sanidad Vegetal. Para el caso de productos que requieran de análisis de aflatoxinas, los laboratorios de prueba deberán además estar aprobados o ser terceros autorizados por la Secretaría de Salud. Los gastos que se generen serán cubiertos por el importador en términos de lo previsto por el artículo 91 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Se adiciona un nuevo párrafo después del inciso c) quedando de la siguiente manera:

h) Cuando el CFI no especifique la condición fitosanitaria señalada en los requisitos adicionales de cualquiera de los productos contenidos en esta Norma, el cargamento deberá muestrearse y someterse a vigilancia o retención, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección General de Sanidad Vegetal, hasta obtener el dictamen de un laboratorio aprobado constatando que el producto cumple con las especificaciones de esta Norma.

Los incisos d) y e) se convierten en i) y j), respectivamente, conservando el mismo texto.

Se adiciona un nuevo punto relacionado con la presencia de esclerocios de *C. africana*, *C. purpurea* y aflatoxinas, por lo que a partir del punto 4.7 se recorre la numeración, quedando como sigue:

4.7 Productos con posible presencia de *C. africana, C. purpurea* y aflatoxinas.

Los cargamentos con contenidos de humedad, aflatoxinas o esclerocios mayores a los especificados en el punto 4.2.1.1 incisos b) y c), serán notificados por la Secretaría a la dependencia competente, para que ésta, de acuerdo a las tolerancias establecidas en la regulación nacional, proceda de acuerdo a las facultades que le confiere la legislación en la materia.

4.8 Disposiciones generales.

...

4.9 Verificación en origen.

...

Se modifica el punto 6 quedando como sigue:

6. El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Norma, debe ser sancionado conforme a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Ley Federal de Sanidad Vegetal, Ley Federal de Sanidad Animal, así como la Ley General de Salud, según corresponda.

TRANSITORIO

UNICO.- La modificación a la presente Norma entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SECRETARIA DE SALUD

NORMA Oficial Mexicana NOM-174-SSA1-1998, Para el manejo integral de la obesidad.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-174-SSA1-1998, PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LA OBESIDAD.

JAVIER CASTELLANOS COUTIÑO, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario y Subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o. fracciones I, II, III, VII, XVI, XXII y XXIII, 13, apartado A, fracción I, 27 fracción III, 32, 45, 46 y demás relativos de la Ley General de Salud; 3o. fracción XI, 40 fracciones I, XII, 41, 43, 44, 45, 46 y 47, fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 10 fracción IV del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; 28, 31, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 6o., fracción XVII y 23, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, me permito ordenar la publicación en el **Diario Oficial de la Federación** de la siguiente Norma Oficial Mexicana NOM-174-SSA1-1998, Para el manejo integral de la obesidad.

CONSIDERANDO

Que con fecha 7 de diciembre de 1998, en cumplimiento del acuerdo del Comité y de lo previsto en el artículo 47, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el proyecto de la presente Norma Oficial Mexicana, a efecto de que dentro de los siguientes sesenta días naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios a la Dirección General de Regulación de los Servicios de Salud.

Que las respuestas a los comentarios recibidos por el mencionado Comité, fueron publicadas previamente a la expedición de esta Norma en el **Diario Oficial de la Federación**, en los términos del artículo 47, fracción III, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, se expide la siguiente: Norma Oficial Mexicana NOM-174-SSA1-1998, Para el manejo integral de la obesidad.

PREFACIO

En la elaboración de esta Norma Oficial Mexicana participaron las dependencias e instituciones siguientes:

SECRETARIA DE SALUD
Dirección General de Regulación de los Servicios de Salud
Coordinación de Vigilancia Epidemiológica
Dirección General Adjunta de Epidemiología
Coordinación de Salud Mental
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
SECRETARIA DE MARINA
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
ESCUELA DE DIETETICA Y NUTRICION
COMISION NACIONAL DE ARBITRAJE MEDICO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
Departamento de Salud
INSTITUTO NACIONAL DE LA NUTRICION “DR. SALVADOR ZUBIRAN”
ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGIA
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO
COLEGIO MEDICO JALISCIENSE DE NUTRICION CLINICA Y TERAPEUTICA EN OBESIDAD
COLEGIO DE CIRUJANOS PLASTICOS ESTETICOS Y RECONSTRUCTIVOS DE SINALOA, A.C.
COLEGIO MEXICANO DE NUTRIOLOGOS, A.C.
SOCIEDAD MEXICANA DE CIRUGIA DE LA OBESIDAD, A.C.
SOCIEDAD MEXICANA DE NUTRICION Y ENDOCRINOLOGIA, A.C.
ASOCIACION MEXICANA DE MIEMBROS DE FACULTADES Y ESCUELAS DE NUTRICION, A.C.

INDICE

0. Introducción
1. Objetivo
2. Campo de aplicación
3. Referencias
4. Definiciones
5. Disposiciones Generales
6. Disposiciones Específicas
7. Del manejo médico
8. Del manejo nutricio
9. Del manejo psicológico
10. De la infraestructura y equipamiento
11. Medidas preventivas
12. De la publicidad
13. Concordancia con normas internacionales y mexicanas
14. Bibliografía
15. Observancia de la norma
16 Vigencia

0. Introducción

La obesidad, incluyendo al sobrepeso como un estado premórbido, es una enfermedad crónica caracterizada por el almacenamiento en exceso de tejido adiposo en el organismo, acompañada de

alteraciones metabólicas, que predisponen a la presentación de trastornos que deterioran el estado de salud, asociada en la mayoría de los casos a patología endócrina, cardiovascular y ortopédica principalmente y relacionada a factores biológicos, socioculturales y psicológicos.

Su etiología es multifactorial y su tratamiento debe ser apoyado en un grupo multidisciplinario.

Dada su magnitud y trascendencia es considerada en México como un problema de salud pública, el establecimiento de lineamientos para su atención integral, podrá incidir de manera positiva en un adecuado manejo del importante número de pacientes que cursan con esta enfermedad.

Por ello la presente Norma Oficial Mexicana, de conformidad con la legislación sanitaria aplicable y la libertad profesional en la práctica médica, procura la protección del usuario de acuerdo con las circunstancias en que cada caso se presente.

Es necesario señalar que para la correcta interpretación de la presente Norma Oficial Mexicana de conformidad con la aplicación de la legislación sanitaria, se tomarán en cuenta, invariablemente, los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, especialmente el de la libertad prescriptiva en favor del personal médico a través de la cual, los profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud habrán de prestar sus servicios a su leal saber y entender, en beneficio del usuario, atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presten éstos.

1. Objetivo

La presente Norma Oficial Mexicana establece los lineamientos sanitarios para regular el manejo integral de la obesidad.

2. Campo de aplicación

La presente Norma Oficial Mexicana, es de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son obligatorias para los profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, así como en los establecimientos de los sectores público, social y privado, que se ostenten y ofrezcan servicios para la atención de la obesidad, el control y reducción de peso, en los términos previstos en la misma.

3. Referencias

Para la correcta aplicación de la presente Norma es necesario consultar las siguientes normas oficiales mexicanas:

3.1 NOM-008-SSA2-1993, Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente.

3.2 NOM-168-SSA1-1998, Del expediente clínico.

3.3 NOM-178-SSA1-1998, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención a pacientes ambulatorios.

4. Definiciones

Para los efectos de esta Norma, se entenderá por:

4.1 Atención Médica, al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

4.2 Establecimiento para el manejo nutricio de la obesidad, a todo aquél de carácter público, social o privado, cualesquiera que sea su denominación o régimen jurídico, que se dedique al manejo del sobrepeso y la obesidad en pacientes ambulatorios, además de lo relacionado con otras áreas de la nutrición si fuera el caso. Estos establecimientos se considerarán consultorios para los efectos sanitarios.

4.3 Comorbilidad, a los problemas relacionados con el sobrepeso y la obesidad, que aumentan cuando se incrementa ésta y disminuyen o mejoran cuando es tratada satisfactoriamente: hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, dislipidemias, diabetes tipo II, apnea del sueño, síndrome de hipoventilación, osteoartritis, infertilidad, así como hipertensión intracraneal idiopática, enfermedad venosa de miembros inferiores, reflujo gastroesofágico e incontinencia urinaria de esfuerzo y que requieren ser enviados al especialista correspondiente según el caso.

4.4 Dieta, al conjunto de alimentos que se consumen cada día.

4.5 Indice de masa corporal al criterio diagnóstico que se obtiene dividiendo el peso entre la talla elevada al cuadrado.

4.6 Manejo integral, al conjunto de acciones a realizar que derivan del estudio completo e individualizado del paciente obeso, incluye el manejo médico, nutricio, psicológico y régimen de ejercicio, que conducen principalmente a un cambio conductual en beneficio de su salud.

4.7 Medicamento a granel, a todo aquel medicamento que se encuentra o es entregado fuera de su envase original, y cumple con las disposiciones aplicables.

4.8 Medicamento fraccionado, a todo aquel medicamento que se encuentra o entrega, separado o en partes.

4.9 Medicamento secreto, a todo aquel medicamento cuyo envase:

No tenga etiqueta;

No tenga los datos de nombre genérico, forma farmacéutica, cantidad y presentación;

Tenga datos que no correspondan al medicamento envasado, y

No respete las normas al respecto, de la Dirección General de Insumos para la Salud, de la Secretaría de Salud.

4.10 Obesidad, a la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo. Se determina la existencia de obesidad en adultos cuando existe un índice de masa corporal mayor de 27 y en población de talla baja mayor de 25.

4.11 Sobrepeso, al estado premórbido de la obesidad, caracterizado por la existencia de un índice de masa corporal mayor de 25 y menor de 27, en población adulta general y en población adulta de talla baja, mayor de 23 y menor de 25. En el caso de niños y adolescentes, remítase a la NOM-008-SSA2-1993, Control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente.

4.12 Talla baja, a la determinación de talla baja en la mujer adulta, cuando su estatura es menor de 1.50 metros y para el hombre, menor de 1.60 metros.

4.13 Tratamiento estandarizado, al tratamiento de composición, dosis, cantidad y tiempo, para cualquier tipo de paciente sin considerar sus características en forma individual (edad, sexo, grado de sobrepeso u obesidad, causas, patología asociada).

5. Disposiciones generales

5.1 Todo paciente adulto obeso requerirá de un manejo integral, en términos de lo previsto en la presente Norma.

5.2 Tratándose del paciente pediátrico obeso, se estará a lo previsto en la Norma Oficial Mexicana para el control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente.

5.3 El tratamiento médico-quirúrgico, nutriológico y psicológico del sobrepeso y la obesidad, deberá realizarse bajo lo siguiente:

5.3.1 Se ajustará a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica.

5.3.2 Estará respaldado científicamente en investigación para la salud, especialmente de carácter dietoterapéutico individualizado, farmacológico y médico quirúrgico.

5.3.3 El médico será el responsable del manejo integral del paciente obeso.

5.3.4 El tratamiento indicado deberá entrañar menor riesgo potencial con relación al beneficio esperado.

5.3.5 Deberán evaluarse las distintas alternativas disponibles conforme a las necesidades específicas del paciente, ponderando especialmente las enfermedades concomitantes que afecten su salud.

5.3.6 Se deberá obtener, invariablemente, Carta de Consentimiento bajo Información del interesado o su representante legal, previa explicación completa por parte del médico, del riesgo potencial con relación al beneficio esperado.

5.3.7 Todo tratamiento deberá instalarse previa evaluación del estado de nutrición, con base en indicadores clínicos, dietéticos, antropométricos incluyendo índice de masa corporal, índice de cintura cadera, circunferencia de cintura y pruebas de laboratorio.

5.3.8 Todas las acciones terapéuticas se deberán apoyar en medidas psicoconductuales y nutriológicas para modificar conductas alimentarias nocivas a la salud, asimismo, se deberá instalar un programa de actividad física, de acuerdo a la condición clínica de cada paciente.

5.3.9 El médico será el único profesional facultado para la prescripción de medicamentos.

5.3.10 Cada medicamento utilizado deberá estar justificado bajo criterio médico, de manera individualizada.

5.3.11 Los medicamentos e insumos para la salud empleados en el tratamiento deberán contar con registro que al efecto emita la Secretaría de Salud.

5.3.12 No se deberán prescribir medicamentos secretos, fraccionados o a granel y tratamientos estandarizados.

5.4 El médico y el psicólogo clínico deberán elaborar a todo paciente, un expediente clínico, conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 168-SSA1-1998, Del expediente clínico.

5.5 En el caso del nutriólogo, para el manejo nutricio, deberá elaborar una historia nutricia que contenga: Ficha de identificación, Antecedentes familiares y personales, Estilos de vida, Antropometría, Problema actual, Plan de manejo nutricio y Pronóstico.

6. Disposiciones específicas

6.1 El personal profesional facultado para intervenir en el manejo integral del paciente obeso, deberá cumplir los requisitos siguientes:

6.1.1 Tener título profesional de médico, nutriólogo o psicólogo legalmente expedido y registrado ante las autoridades educativas competentes.

6.1.2 Tratándose de médico general, será recomendable tener constancia expedida por institución de educación superior oficialmente reconocida, que avale un curso de capacitación en nutrición.

6.1.3 Cuando se trate de médico especialista, tener el permiso para ejercer, expedido y registrado por las autoridades educativas competentes.

6.1.4 En el caso de estudios realizados en el extranjero, éstos deberán ser revalidados ante la Secretaría de Educación Pública.

6.2 El personal técnico participante en el manejo integral del paciente obeso, deberá tener diploma que avale sus conocimientos en enfermería, laboratorio clínico o nutrición, legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes.

6.3 La participación del personal técnico en el manejo integral de la obesidad será exclusivamente en apoyo a las áreas; médica, de nutrición y psicológica, por lo que no podrá actuar de manera autónoma o realizar por sí, los tratamientos.

6.4 Todo aquel establecimiento público, social o privado, que se ostente y ofrezca servicios para la atención a la obesidad, el control y reducción de peso, deberá contar con un responsable sanitario atendiendo a lo que establezcan las disposiciones aplicables para tal efecto.

7. Del manejo médico

La participación del médico comprende:

7.1 Del tratamiento medicamentoso.

7.1.1 El médico será el único profesional de la salud facultado para prescribir medicamento en los casos que así se requiera, en términos de lo previsto en el presente ordenamiento.

7.1.2 Sólo se podrán indicar anorexígenos u otro tipo de medicamentos autorizados para el tratamiento de la obesidad o el sobrepeso, cuando no existiere respuesta adecuada al tratamiento dietoterapéutico y al ejercicio físico, en pacientes con índice de masa corporal de 30 o más, sin enfermedades concomitantes graves, o en pacientes con índice de masa corporal de 27 o más, que tengan enfermedades concomitantes graves.

7.1.3 El médico tratante deberá explicar al paciente qué medicamento va a ingerir, su nombre comercial y farmacológico, dosificación, duración de la toma, interacción con otros insumos, reacciones adversas y colaterales.

7.1.4 El médico deberá expedir y firmar la receta correspondiente, de acuerdo con las disposiciones sanitarias y registrar en la nota médica del expediente clínico.

7.2 Del tratamiento quirúrgico

7.2.1 Estará indicado exclusivamente en los individuos adultos con obesidad severa e índice de masa corporal mayor de 40, o mayor de 35 asociado a comorbilidad importante y cuyo origen en ambos casos no sea puramente de tipo endócrino. Deberá existir el antecedente de tratamiento médico integral reciente, por más de 18 meses sin éxito; salvo ocasiones cuyo riesgo de muerte, justifique el no haber tenido tratamiento previo.

7.2.2 La indicación de tratamiento quirúrgico de la obesidad, deberá ser resultado de la decisión de un equipo de salud multidisciplinario; conformado, en su caso, por; cirujano, anestesiólogo, nutriólogo, endocrinólogo, cardiólogo y psicólogo, esta indicación deberá estar asentada en una nota médica.

7.2.3 Todo paciente con obesidad severa, candidato a cirugía, no podrá ser intervenido quirúrgicamente sin antes haber sido estudiado en forma completa, con historia clínica, análisis de laboratorio y gabinete, valoración nutriológica, cardiovascular, anestesiológica y cualquier otra necesaria.

7.2.4 El médico cirujano tendrá la obligación de informarle al paciente respecto a los procedimientos quirúrgicos a realizar, sus ventajas y riesgos.

7.2.5 El paciente deberá firmar la Carta de Consentimiento bajo Información, en los términos que establece la Norma Oficial Mexicana Del expediente clínico.

7.2.6 Las técnicas quirúrgicas autorizadas para el tratamiento de la obesidad serán de tipo restrictivo: derivación gástrica (bypass gástrico), con sus variantes, gastroplastía vertical con sus variantes y bandaje gástrico con sus variantes.

7.2.7 Las unidades hospitalarias donde se realicen actos quirúrgicos para el manejo integral de la obesidad, deberán contar con todos los insumos necesarios para satisfacer los requerimientos de una cirugía mayor en pacientes de alto riesgo.

7.2.8 Los diferentes tipos de instrumentos, equipos, prótesis y demás insumos a utilizar, deberán estar autorizados ante la Secretaría de Salud.

7.2.9 El médico tratante deberá comprobar, ser especialista en cirugía general o cirugía gastroenterológica, haber recibido adiestramiento en cirugía de obesidad, conocer el manejo integral del paciente obeso y comprometerse junto con el equipo multidisciplinario a hacer seguimiento del paciente operado.

8. Del manejo nutricio

La participación del nutriólogo comprende:

8.1 El manejo nutricio que comprende:

8.1.1 Valoración nutricia: evaluación del estado nutricio mediante indicadores clínicos, dietéticos, antropométricos, pruebas de laboratorio y estilos de vida;

8.1.2 Plan de cuidado nutricio: elaboración del plan alimentario, orientación alimentaria, asesoría nutriológica y recomendaciones para el acondicionamiento físico y para los hábitos alimentarios; y

8.1.3 Control: seguimiento de la evaluación, conducta alimentaria y reforzamiento de acciones.

8.2 La dieta deberá ser individualizada, atendiendo a las circunstancias especiales de cada paciente, en términos de los criterios mencionados en el presente ordenamiento.

9. Del manejo psicológico

9.1 La participación del psicólogo clínico comprende:

9.1.1 El manejo para la modificación de hábitos alimentarios;

9.1.2 El apoyo psicológico, y

9.1.3 La referencia a Psiquiatría, cuando el caso lo requiera.

10. De la infraestructura y equipamiento

10.1 Los establecimientos relacionados con el control y reducción de peso, además de lo relacionado con otras áreas de la nutrición si fuera el caso, deberán cumplir con los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento siguientes de acuerdo a la función del establecimiento.

10.2 Contará con el siguiente equipo propio para el manejo integral del sobrepeso y la obesidad:

10.2.1 Báscula clínica con estadímetro.

10.2.2 Plicómetro de metal.

10.2.3 Cinta métrica de fibra de vidrio, y

10.2.4 Los demás que fijen las disposiciones sanitarias.

10.3 Los establecimientos hospitalarios deberán poseer la infraestructura y equipamiento que al respecto señalen las disposiciones aplicables.

11. Medidas preventivas

11.1 Para el manejo integral del sobrepeso y la obesidad no se deberá:

11.1.1 Instalar tratamiento por personal técnico o personal no acreditado como médico.

11.1.2 Indicar dietas que originen una rápida pérdida de peso (no más de un kilogramo por semana), que ponga en peligro la salud o la vida del paciente y dietas que no tengan sustento científico.

11.1.3 Utilizar procedimientos que no hayan sido aprobados mediante investigación clínica o reporte casuístico, así como la prescripción de medicamentos que no cuenten con el registro sanitario correspondiente.

11.1.4 Manejar tratamientos estandarizados.

11.1.5 Usar diuréticos y extractos tiroideos, como tratamiento de la obesidad o sobrepeso.

11.1.6 Emplear medicamentos secretos, fraccionados o a granel.

11.1.7 Usar hormonas ante la ausencia de patología asociada y previa valoración del riesgo-beneficio.

11.1.8 Prescribir tratamiento farmacológico para manejo de obesidad, en pacientes menores de 18 años.

11.1.9 Utilizar técnicas no convencionales para el tratamiento del sobrepeso y obesidad, en tanto no hayan sido aprobadas mediante protocolo de investigación debidamente avalado por la Secretaría de Salud, excepto como un auxiliar para la disminución del apetito, y deberá registrarse en el expediente clínico.

11.1.10 Indicar aparatos electrónicos o mecánicos como única opción de este tratamiento (aparatos térmicos, baños sauna).

11.1.11 Indicar productos no autorizados por la Secretaría de Salud para el manejo del sobrepeso y la obesidad.

11.1.12 Instalar tratamiento quirúrgico mediante técnicas exclusivamente absortivas.

11.1.13 Usar la liposucción y la lipoescultura, como tratamientos para la obesidad.

12. De la publicidad

La publicidad para efecto de esta NOM, se deberá ajustar a lo siguiente:

12.1 No anunciar la curación definitiva.

12.2 No hacer referencia a tratamientos en los que no se distinga el manejo particular.

12.3 No promover la utilización de medicamentos secretos y/o fraccionados.

12.4 No referirse a insumos o tratamientos que no estén respaldados científicamente en investigación clínica.

12.5 No sustentar tratamientos en aparatos electrónicos o mecánicos reductores de peso como única opción.

12.6 No promover para el manejo del sobrepeso y obesidad, anorexígenos, diuréticos y extractos tiroideos, fajas de yeso, así como de inyecciones de enzimas y animoácidos lipolíticos.

12.7 No inducir la automedicación.

13. Concordancia con normas internacionales y mexicanas.

Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente con ninguna norma internacional o mexicana.

14. Bibliografía

14.1 Acuerdo Secretarial 141. SSA publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 29 de diciembre de 1997.

14.2 Alvarez Cordero R. Editor huésped del Simposio Internacional Treatment of the Clinically Severe Obesity, en la sección World Progress in Surgery. World J. Surg., Vol. 22: 7, sept. 1998.

14.3 Bray, George A. Obesidad, aspectos básicos y aplicaciones clínicas, en clínicas médicas de Norteamérica, MacGraw-Hill Ed. vol 1, 1989, pp 95-111.

14.4 Clinical Guidelines in the Identification, Evaluation and Treatment if Overweight and Obesity in adults, NHLBI, Obesity Guidelines.

14.5 Consensus Development Conference, Statement on Gastrointestinal Surgery for severe Obesity. Ann. Int. Med., 103: 1073.7, 1985.

14.6 Donahue RP, Bloom E, Abbott RD, et al Central Obesity and Coronary Heart Disease in Men. Lancet 1987: april 11: 821-824.

14.7 Dustan HP. Obesity and Hypertension. Diabetes Care 1991; 14: 488-504.

14.8 Fujioka S. Matsuzawa Y, Tokunaga K, et al. Contribution of intraabdominal Fat Accumulation to the Impairment of glucose and lipid Metabolism in Human Obesity. Metabolism 1987; 36: 54-59.

14.9 Hazuda HP, et al Obesity in mexican-american subgroups. Ams I Clin Nutr, 1991: 53: 1529.

14.10 IFSO Statement on Patient Selection for Bariatric Surgery. Obesity Surgery, 7: 41, 1997.

14.11 Jeffery RW. Population Perspectives on the Prevention and Treatment of Obesity in Minori Populations. Am I Clin Nutr 1991; 53 (6 suppl): 1621s-1624s.

14.12 Ley General de Educación.

14.13 Ley General de Salud.

14.14 Ley General de Profesiones.

14.15 National Task Force on Preventive and treatment of Obesity. Obesity Research, 1994; 2: 571.

14.16 Obesity, Prevening and Managing the Global Epidemic: OMS, División Noncommunicable diseases, Programme of Nutrition Family and Reproductive Healt, Geneva, junio 1997.

14.17 Perry MG Sears SF, Clark JC. Strategies for improving maintenance of weight loss. Diabetes Care 1993; 16: 200-9.

14.18 Ravussin E. Swinburn BA. Pathophysiology of Obesity. Lancet 1992; 340: 404-408.

14.19 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica: Artículo 9o.

14.20 Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, Artículo 23.

14.21 Rosen Baum Michael, Leibel L. Rudolph, Hirsch Jules. N. England J. Med 1997; 337: 396-40714.22 Vargas Ancona, Bastarrachea Sosa, Laviada Molina, González Barranco, Avila Rosas, Obesidad en México. FUNSALUD, 1999.

15. Observancia de la norma

La vigilancia de la aplicación de esta Norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia.

16. Vigencia

Esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al día siguiente de su publicación, con excepción de los numerales: 10.2, 10.2.1, 10.2.2 y 10.2.3 que entrarán en vigor a los 90 días naturales siguientes a la publicación de la presente Norma.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 16 de febrero de 2000.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, **Javier Castellanos Coutiño**.- Rúbrica.

PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-028-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-028-SSA2-1999, PARA LA PREVENCION, TRATAMIENTO Y CONTROL DE LAS ADICCIONES.

ROBERTO TAPIA CONYER, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o., fracciones XIX, XX y XXI, 13, apartado A), fracción I, apartado B) fracción I y 133, fracción I de la Ley General de Salud; 3o., fracción XI, 38, fracción II, 40, fracción XI, 41, 43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4o. del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica; 6o., fracción XVII y 34, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 28 y 33, fracciones I y II del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, me permito ordenar la publicación en el **Diario Oficial de la Federación** del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-028-SSA2-1999, para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.

El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana se publica a efecto de que los interesados, dentro de los siguientes 60 días naturales contados a partir de la fecha de su publicación, presenten sus comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, sito en Lieja

número 7, 1er. piso, colonia Juárez, código postal 06696, México, D.F., teléfono y fax (5) 5-53-70-56, correo electrónico crmatus@df1.telmex.net.mx.

Durante el plazo mencionado, los análisis que sirvieron de base para la elaboración del Proyecto de Norma Oficial Mexicana estarán a disposición del público, para su consulta en el domicilio del Comité.

PREFACIO

En la elaboración de esta Norma participaron las siguientes instituciones, unidades administrativas, asociaciones y organizaciones:

SECRETARIA DE SALUD Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades. Dirección General de Promoción de la Salud. Dirección General Adjunta de Epidemiología. Subsecretaría de Coordinación Sectorial. Coordinación de Institutos Nacionales de Salud. Coordinación de Salud Mental. Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Alvarez”. Hospital Psiquiátrico “Dr. Juan N. Navarro”. Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario. Dirección General de Regulación de los Servicios de Salud. Dirección de Control Sanitario de la Publicidad. Centro Comunitario de Salud Mental. Hospital General “Dr. Manuel Gea González”. Instituto Mexicano de Psiquiatría. Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares. Instituto Nacional de Cancerología. Instituto Nacional de Cardiología. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Dr. Manuel Velasco Suárez”. Instituto Nacional de Pediatría. Hospital General de México. Clínica de Atención a Problemas Relacionados con el Alcohol. Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Programa de Educación Preventiva Contra las Adicciones.

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL Hospital Central Militar.

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Consejo Estatal contra las Adicciones, Jalisco. Consejo Estatal contra las Adicciones, Morelos. Consejo Estatal contra las Adicciones, Baja California.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Instituto Nacional de Ciencias Penales.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO Dirección General de Servicios Médicos de la Facultad de Medicina.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Fideicomiso para la Atención de Niños de la Calle y las Adicciones. Centros Toxicológicos “Jóvenes por la Salud”.

HOSPITAL INGLES ABC.

HOSPITAL MEDICA SUR.

INSTITUTO DE EDUCACION PREVENTIVA Y ATENCION DE RIESGOS, A.C.

ASOCIACION CIVIL FILANTROPICA Y EDUCATIVA “PLAN PARA DEJAR DE FUMAR EN CINCO DIAS”

ASOCIACION MEXICANA DE LUCHA CONTRA EL CANCER, A.C.

ASOCIACION PSIQUIATRICA MEXICANA, A.C.

CENTRAL MEXICANA DE SERVICIOS GENERALES DE ALCOHOLICOS ANONIMOS, A.C.

CENTRO CONTRA LAS ADICCIONES, FUNDACION “AMA LA VIDA”, I.A.P.

CENTRO DE REHABILITACION TERAPEUTICA PARA LAS ADICCIONES, A.C.

CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE ALCOHOL Y ALCOHOLISMO, A.C.

CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, A.C.

CENTRO PARA LA INTEGRACION DE ADICTOS "MONTE FENIX"

COMITE DE LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

COMITE REGIONAL MEXICANO DE SERVICIOS DE NARCOTICOS ANONIMOS, A.C.

DROGADICTOS ANONIMOS, A.C.

FUNDACION DE INVESTIGACIONES SOCIALES, A.C.

GRUPO “COMPAÑEROS UNO”, I.A.P.

GRUPOS JOVENES, A.A., A.C.

JUNTA DE SERVICIOS GENERALES DE A.A., A.C. SECCION MEXICO

OFICINA CENTRAL DE SERVICIOS DE GRUPOS 24 HORAS DE A.A., Y TERAPIA INTENSIVA, A.C.

INDICE

0. Introducción
1. Objetivo y campo de aplicación
2. Referencias
3. Definiciones
4. Símbolos y abreviaturas
5. Generalidades
6. Prevención
7. Detección temprana
8. Referencia de casos
9. Tratamiento

10. Investigación
11. Vigilancia epidemiológica de las adicciones
12. Seguimiento y evaluación
13. Capacitación y enseñanza
14. Bibliografía
15. Concordancia con normas internacionales y mexicanas
16. Observancia de la norma
17. Apéndice "A"

0. Introducción

El uso y abuso de sustancias así como las adicciones al alcohol, al tabaco y otras drogas, lícitas o ilícitas, constituyen un grave problema de salud pública y tienen además, importantes consecuencias negativas que trascienden en el ámbito de la salud individual y repercuten en la familia y en la sociedad.

Diversos estudios y sistemas de información y vigilancia, dan cuenta de las tendencias del uso y abuso de tales sustancias en nuestro país, lo que ha permitido establecer que el abuso de bebidas alcohólicas y el alcoholismo constituyen nuestra problemática más importante, seguida por el tabaquismo y el consumo de otras sustancias psicoactivas.

En el caso del alcohol, la población juvenil bebe a edades cada vez más tempranas, y su consumo excesivo repercute en los índices de morbi-mortalidad y en el costo social. En cuanto al tabaquismo, es innegable la asociación directa e indirecta del consumo del tabaco y sus productos, con graves padecimientos de alta letalidad, así como su impacto familiar, social y económico. En cuanto a la farmacodependencia, tiene una dinámica diferente con nuevas drogas, formas de uso y patrones de consumo que han aparecido recientemente, y se presenta de manera fundamental en zonas urbanas, con marcadas diferencias regionales. Además, el uso de unas sustancias aumenta el riesgo del consumo de otras.

Entre los problemas asociados al consumo se pueden citar, para el caso del alcohol: accidentes y conducta violenta, cirrosis hepática, diabetes mellitus, conducta sexual riesgosa, problemas psiquiátricos, alcoholismo y síndrome alcohólico-fetal. En el caso del tabaco: cáncer pulmonar y de otros órganos, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y problemas perinatales, entre otros. El uso y abuso de otras drogas conlleva a la aparición de problemas psicosociales y psiquiátricos, enfermedades de transmisión sexual, criminalidad, lesiones por causa externa y muerte súbita, entre otros.

El uso y abuso de sustancias adictivas, representan una preocupación creciente para el gobierno federal, las entidades federativas y la sociedad en general. Esta problemática exige contar con una variedad de recursos humanos y técnicos, así como con la coordinación de las instituciones y programas disponibles en el país, de tal modo que permita implantar estrategias y acciones de investigación, prevención, tratamiento, normatividad y legislación, así como de sensibilización y capacitación, para garantizar que las acciones beneficien a la población.

Asimismo, para asegurar un nivel de calidad adecuado en la prestación de los servicios que permita finalmente, reducir la incidencia y prevalencia del uso y abuso de sustancias adictivas, así como la morbi-mortalidad asociadas, se requiere establecer las condiciones y requisitos mínimos indispensables que regulen la prestación de los mismos.

1. Objetivo y campo de aplicación

1.1 Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.

1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud y en los establecimientos de los sectores público, social y privado que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones.

2. Referencias

Para la correcta aplicación de esta Norma, es necesario consultar las siguientes normas oficiales mexicanas:

2.1 NOM-001-SSA1-1993, Que instituye el procedimiento por el cual se revisará, actualizará y editará la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

2.2 NOM-025-SSA2-1994, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica.

2.3 NOM-010-SSA2-1993, Para la prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana.

2.4 NOM-009-SSA2-1993, Para el fomento de la salud del escolar.

2.5 NOM-017-SSA2-1994, Para la vigilancia epidemiológica.

3. Definiciones

Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana, se entiende por:

3.1 Adicción o dependencia, al conjunto de fenómenos del comportamiento, cognoscitivos y fisiológicos, que se desarrollan luego del consumo repetido de una sustancia psicoactiva.

3.2 Adicto, a la persona con dependencia a una o más sustancias psicoactivas.

3.3 Adicto en recuperación, a la persona que ha dejado de utilizar sustancias psicoactivas y está en un proceso de reinserción social.

3.4 Alcoholismo, al síndrome de dependencia o adicción al alcohol.

3.4.1 Bebida alcohólica, a aquella que contenga alcohol etílico en una proporción de 2% y hasta 55% en volumen.

3.5 Atención médica, al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

3.6 Co-morbilidad, a la presencia de 2 o más trastornos en un mismo individuo.

3.7 Comunidad terapéutica, a la modalidad de tratamiento residencial, para la rehabilitación de adictos, en la que se intenta reproducir la sociedad exterior para hacer posible su reinserción social. Generalmente, están operadas por un equipo mixto de adictos en recuperación y profesionales.

3.8 Consentimiento informado, al acuerdo por escrito, mediante el cual el usuario del servicio, familiar, o, en su caso, representante legal, autoriza su participación en la investigación o tratamiento, con pleno conocimiento de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, por libre elección y sin coacción alguna.

3.9 Consumo de sustancias psicoactivas, al rubro genérico que agrupa diversos patrones de uso y abuso de drogas, medicamentos o tóxicos naturales, químicos o sintéticos.

3.9.1 Uso nocivo o abuso de sustancia psicoactiva o droga, al patrón de consumo de una sustancia psicoactiva, que causa daño físico, mental y social.

3.10 Delirio, al síndrome orgánico cerebral, de etiología inespecífica, caracterizado por perturbaciones simultáneas de la conciencia y la atención, de la percepción, del pensamiento, de la memoria, del comportamiento psicomotor, de la emoción y del ciclo sueño-vigilia. Su duración es variable y su gravedad fluctúa de leve a muy severa.

3.11 Educación para la salud, al proceso de enseñanza aprendizaje que permite mediante el intercambio y análisis de la información, desarrollar habilidades y cambiar actitudes encaminadas a modificar comportamientos para cuidar la salud individual, familiar y colectiva.

3.12 Encargado, a la persona responsable del establecimiento o del tratamiento de los usuarios.

3.13 Establecimiento, a todo aquel lugar, público, social o privado, cualquiera que sea su denominación, fijo o móvil en el que se presten servicios de prevención, tratamiento y control a personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas.

3.14 Estilo de vida, al conjunto de patrones de comportamiento que define e identifica a una persona o un grupo, a través de lo que hace y expresa, y que se genera en la familia y la escuela mediante la socialización, proceso diario en el que se interactúa con los padres, las autoridades y la comunidad.

3.15 Factores protectores, a los rasgos individuales y elementos socioculturales, que eliminan, disminuyen o neutralizan el riesgo de que un individuo inicie o continúe un proceso adictivo.

3.16 Factor de riesgo, al atributo o exposición de una persona o población, que están asociados a una probabilidad mayor del uso y abuso de sustancias psicoactivas.

3.17 Farmacodependencia o drogadicción, a la dependencia o adicción, a una o más sustancias psicoactivas.

3.18 Grupo de ayuda mutua, a la agrupación que ofrece servicios gratuitos, integrada por adictos en recuperación, cuyo propósito fundamental es apoyar al adicto con base en la experiencia compartida de los miembros del grupo, para lograr la abstinencia de sustancias psicoactivas.

3.19 Grupo de alto riesgo, a aquél en los que se ha demostrado, a través de diversas investigaciones y estudios, que, por sus características biopsicosociales, tienen mayor probabilidad de uso, abuso o dependencia a sustancias psicoactivas.

3.20 Intoxicación aguda, al estado posterior a la administración de una sustancia psicoactiva, que da lugar a perturbaciones en el nivel de la conciencia en lo cognoscitivo, en la percepción, en la afectividad o en el comportamiento, o en otras funciones y respuestas psicofisiológicas.

3.21 Participación comunitaria, al proceso de integración y coordinación de los miembros de una comunidad, para intervenir en la identificación y solución de problemas comunes.

3.22 Patrón de consumo, al conjunto de factores que determinan una forma particular de uso: tipo de droga(s), droga de impacto, droga de inicio, edad de inicio, historia de consumo, frecuencia, cantidad, tiempo de exposición, episodios de consumo e intoxicación, contexto del consumo y problemas asociados.

3.23 Prevención, al conjunto de acciones dirigidas a evitar o reducir el consumo de sustancias adictivas, a disminuir situaciones de riesgo y limitar los daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

3.24 Promoción de la salud, a las acciones que se realizan con el objeto de crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva.

3.25 Recuperación, al estado de abstinencia que conlleva un mejoramiento en todas las áreas de la vida del sujeto.

3.26 Reinserción social, al conjunto de acciones dirigidas a promover un estilo de vida mejor al de quien usa, abusa o depende de sustancias psicoactivas, y a lograr un mejor funcionamiento interpersonal y social.

3.27 Síndrome de abstinencia o de supresión, al grupo de síntomas, cuya gravedad es variable, que aparece durante la suspensión brusca, total o parcial, del consumo de una sustancia psicoactiva, luego de una fase de utilización permanente, o del consumo de altas dosis de la misma.

3.28 Síndrome de dependencia, al conjunto de signos y síntomas de orden cognoscitivo, conductual y fisiológico, que evidencian la pérdida de control de la persona sobre el consumo habitual de las sustancias psicoactivas.

3.29 Sustancia psicoactiva o droga, a la sustancia que altera algunas funciones físicas y mentales y que, al ser consumida reiteradamente, tiene la posibilidad de dar origen a una adicción. Estos productos incluyen aquéllos de uso médico, los de uso industrial, los derivados de elementos de origen natural, los de diseño, así como el tabaco y las bebidas alcohólicas.

3.30 Tabaco, a la planta "Nicotina Tabacum" y sus sucedáneos, en su forma natural o modificada, en las diferentes presentaciones, que se utilizan para fumar, masticar o aspirar.

3.31 Tabaquismo, a la dependencia o adicción al tabaco.

3.32 Trastornos o problemas relacionados con el uso y abuso de sustancias psicoactivas, a los efectos negativos, físicos, psicológicos y sociales estrechamente asociados al consumo agudo o crónico.

3.33 Tratamiento, al conjunto de acciones que tienen por objeto conseguir la abstinencia parcial o total de las sustancias psicoactivas, reducir los riesgos y daños que implican el uso o abuso de sustancias, abatir los padecimientos asociados al consumo, e incrementar el grado de bienestar físico, mental y social, tanto del que usa, abusa o depende de sustancias, como de su familia.

3.34 Usuario, a toda aquella persona que requiera y obtenga la prestación de cualquier tipo de servicio relacionado con el uso, abuso o dependencia de sustancias psicoactivas.

4. Símbolos y abreviaturas

El significado de los símbolos y abreviaturas utilizados en esta Norma es el siguiente:

A.A.	Alcohólicos Anónimos.
CIE-10	Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión.
CONADIC	Consejo Nacional contra las Adicciones.
LSD	Dietilamina del ácido d-lisérgico.
NOM	Norma Oficial Mexicana.
SISVEA	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones.
SNS	Sistema Nacional de Salud.
SSA	Secretaría de Salud.
OMS	Organización Mundial de la Salud.
ONU	Organización de las Naciones Unidas.
OPS	Organización Panamericana de la Salud.

5. Generalidades

5.1 En la adicción o dependencia de sustancias psicoactivas, los signos y síntomas son:

5.1.1 Un poderoso deseo de tomar la sustancia psicoactiva; deterioro de la capacidad para autocontrol del consumo; persistencia del uso, a pesar de padecer las consecuencias dañinas; la utilización de la droga tiene mayor prioridad que otras actividades y obligaciones; aumento de tolerancia a la droga y, a veces, estado de abstinencia por dependencia física.

5.1.2 Existe dependencia o adicción, cuando aparecen tres o más de los criterios descritos a continuación, en un periodo de 12 meses:

5.1.2.1 Tolerancia: necesidad de recurrir a cantidades crecientes de la sustancia, para alcanzar la intoxicación.

5.1.2.2 Abstinencia: cambio de comportamiento desadaptativo, con concomitantes cognoscitivos y fisiológicos, que tiene lugar cuando la concentración de una sustancia, en la sangre o en los tejidos, disminuye en un individuo que ha mantenido un consumo prolongado de grandes cantidades de la misma.

5.1.2.3 Patrón de uso compulsivo de una sustancia: cuando un sujeto toma la sustancia en cantidades mayores, o durante un periodo de tiempo más prolongado de lo originalmente pretendido.

5.1.2.4 Intentos infructuosos de regular o abandonar el consumo de la sustancia.

5.1.2.5 Dedicar la mayor parte del tiempo a obtener la sustancia, a tomarla y a recuperarse de sus efectos.

5.1.2.6 Abandono o reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas.

5.1.2.7 Consumo de las sustancias, pese a reconocer sus implicaciones como crear problemas fisiológicos o psicológicos.

5.1.2.8 El patrón desadaptativo de consumo de sustancias psicoactivas, se manifiesta por consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionadas con el consumo, como son el incumplimiento de obligaciones, ausentismo escolar o laboral, problemas interpersonales y sociales, o problemas legales.

5.2 Los trastornos o problemas relacionados con el uso de sustancias psicoactivas se dividen en:

5.2.1 Trastornos por consumo de sustancias: adicción y abuso.

5.2.2 Trastornos inducidos por sustancias: intoxicación, abstinencia y enfermedades asociadas (delirio, demencia, trastornos amnésicos, psicóticos, del estado de ánimo y del sueño, ansiedad, disfunción sexual, cirrosis, enfisema, entre otras).

5.2.3 Problemas sociales: psicológicos y de salud, entre otros.

5.3 Clasificación de trastornos por tipo de sustancia psicoactiva:

5.3.1 De conformidad con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) OMS-OPS, este grupo incluye un conjunto de trastornos, de diferente gravedad y formas clínicas, pero, todos, atribuibles al uso de una o más sustancias psicoactivas.

5.3.1.1 Los trastornos debidos al uso de sustancias psicoactivas, se clasifican como sigue:

5.3.1.1.1 F10. Trastornos mentales y del comportamiento, debidos al uso de alcohol.

5.3.1.1.2 F11. Trastornos mentales y del comportamiento, debidos al uso de opiáceos.

5.3.1.1.3 F12. Trastornos mentales y del comportamiento, debidos al uso de cannabinoides.

5.3.1.1.4 F13. Trastornos mentales y del comportamiento, debidos al uso de sedantes o hipnóticos.

5.3.1.1.5 F14. Trastornos mentales y del comportamiento, debidos al uso de cocaína.

5.3.1.1.6 F15. Trastornos mentales y del comportamiento, debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína.

5.3.1.1.7 F16. Trastornos mentales y del comportamiento, debidos al uso de alucinógenos.

5.3.1.1.8 F17. Trastornos mentales y del comportamiento, debidos al uso de tabaco.

5.3.1.1.9 F18. Trastornos mentales y del comportamiento, debidos al uso de disolventes volátiles.

5.3.1.1.10 F19. Trastornos mentales y del comportamiento, debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas.

5.3.1.2 Con motivo de ubicar el trastorno mental y del comportamiento a diagnosticar en forma más específica, así como su manejo, se deberá establecer el subtipo correspondiente de los numerales 5.3.1.2.1 al 5.3.1.2.10, agregándose al o los elegidos anteriormente.

5.3.1.2.1 0 Intoxicación aguda.

5.3.1.2.2 1 Uso nocivo.

5.3.1.2.3 2 Síndrome de dependencia.

5.3.1.2.4 3 Estado de abstinencia.

5.3.1.2.5 4 Estado de abstinencia con delirio.

5.3.1.2.6 5 Trastorno psicótico.

5.3.1.2.7 6 Síndrome amnésico.

5.3.1.2.8 7 Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío.

5.3.1.2.9 8 Otros trastornos mentales y del comportamiento.

5.3.1.2.10 9 Trastorno mental y del comportamiento, no especificado.

5.3.2 De acuerdo con la CIE-10, la identificación de la sustancia psicoactiva debe basarse en la mayor cantidad posible de fuentes de información. Estas incluyen: informe del usuario; análisis de la sangre y otros líquidos corporales; síntomas característicos físicos y psicológicos; signos clínicos y del comportamiento y otras evidencias, como la droga que posee el usuario, o declaraciones de terceras personas bien informadas.

5.3.3 En el caso de quienes consumen varias sustancias psicoactivas a un mismo tiempo, el diagnóstico principal deberá clasificarse, siempre que sea posible, de acuerdo con la sustancia o grupo de éstas que ha causado o ha contribuido más al síndrome clínico que se presente. Los demás diagnósticos deben codificarse cuando se han tomado otras drogas en cantidades tóxicas, o en cantidades suficientes para causar daño, dependencia u otros trastornos.

5.3.4 Sólo debe usarse el código de diagnóstico de trastorno resultante del uso de múltiples drogas (F19), en aquellos casos en los cuales los patrones de uso de drogas psicoactivas son caóticos e indiscriminados, o en los que las contribuciones de diferentes drogas psicoactivas están mezcladas inseparablemente.

5.3.5 Con fines de diagnóstico se deben utilizar los criterios de la CIE-10, antes mencionados, o en su caso la Cédula de Indicadores para medir Dependencia a Drogas, incluida en el Apéndice A de esta Norma.

5.4 De los usuarios:

5.4.1 Toda medicación suministrada a un usuario debe ser prescrita por un médico, y ello debe ser registrado en el expediente clínico o en la hoja de ingreso del usuario.

5.4.2 Todos los usuarios tienen derecho a recibir alimentación balanceada, de buen sabor y aspecto, en cantidad suficiente para una adecuada nutrición, y servida en utensilios decorosos.

5.4.3 La información proporcionada por el adicto o por sus familiares, así como la consignada por escrito en su hoja de registro o expediente, según sea el caso, deberá manejarse bajo las normas de la confidencialidad y del secreto profesional vigentes.

5.4.4 La información sobre el proceso del tratamiento no se revelará a individuo o autoridad alguna, si no es con el consentimiento del usuario o salvo los casos previstos por la ley.

5.4.5 No se permitirán grabaciones de audio o video en modalidad alguna de tratamiento, sin explicar su finalidad y previo consentimiento informado y por escrito del usuario, familiar más cercano en vínculo, tutor, curador y en su caso representante legal.

6. Prevención

El objetivo general de la prevención es evitar el consumo de sustancias psicoactivas, además de informar sobre los efectos nocivos del consumo de las mismas.

6.1 Para realizar las acciones de prevención, es necesario tomar en cuenta: la sustancia psicoactiva de uso; las características de los individuos; los patrones de consumo; los problemas asociados; así como los aspectos culturales y las tradiciones de las distintas regiones geográficas.

6.2 Las acciones de prevención deben llevarse a cabo en los establecimientos, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

6.2.1 En materia de promoción de la salud se deberá:

6.2.1.1 Fortalecer la responsabilidad social y el autocuidado de la salud, fomentando la conformación de estilos de vida y entornos saludables que permitan desarrollar al máximo el potencial de cada persona, y propiciando condiciones que eleven la calidad de vida de las familias y de las comunidades.

6.2.1.2 Asumir la perspectiva de la educación para la salud y la promoción de la participación social, orientadas a formar conciencia y responsabilidad, así como a promover la salud integral entre la población.

6.2.1.3 Llevar a cabo la promoción de la salud, con énfasis en los ámbitos escolar, familiar y laboral y, especialmente, en los grupos de alto riesgo.

6.2.2 En materia de educación para la salud se deberá:

6.2.2.1 Informar sobre el consumo de sustancias y las adicciones como problema de salud pública y su trascendencia.

6.2.2.2 Informar tanto sobre factores protectores como de riesgo en torno a las adicciones.

6.2.2.3 Promover la participación activa de los diversos grupos sociales en la planeación, ejecución y evaluación de actividades preventivas en lo referente a las adicciones.

6.2.2.4 Orientar sobre medidas preventivas y conductas responsables, para evitar y, en su caso, reducir el consumo de sustancias psicoactivas.

6.2.2.5 Desarrollar programas educativos, formales e informales, encaminados a influir positivamente en la formación integral del individuo, y a promover estilos de vida saludables y entornos saludables.

6.2.2.6 Informar y orientar sobre adicciones, particularmente en grupos de alto riesgo.

6.2.2.7 Orientar, educar y alentar a solicitar de manera oportuna la atención para personas que consumen sustancias psicoactivas.

6.2.2.8 Promover el desarrollo de factores protectores a nivel personal, familiar y social para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas.

6.2.2.9 Capacitar al personal de salud involucrado en la atención para que efectúe actividades de prevención y diagnóstico temprano del consumo de sustancias psicoactivas.

6.2.3 En materia de participación comunitaria se deberá:

6.2.3.1 Establecer comunicación entre los sectores, grupos, autoridades y líderes de la comunidad, de tal manera que permitan y favorezcan la realización de acciones coordinadas y permanentes.

6.2.3.2 Impulsar la integración o consolidación de grupos entre la comunidad, para prevenir el uso indebido de sustancias psicoactivas.

6.2.3.3 Promover que grupos representativos de la comunidad se capaciten y participen voluntariamente en actividades preventivas y de promoción de la salud, especialmente juveniles.

6.2.3.4 Promover la participación activa de la comunidad para que, con base en el conocimiento de la normatividad vigente restrictiva al consumo de estas sustancias, coadyuve en la vigilancia y cumplimiento de las mismas.

6.2.3.5 Gestionar apoyos diversos, de organizaciones públicas y privadas, para la ejecución de diferentes acciones encaminadas a favorecer el desarrollo integral de niños y jóvenes, así como a desalentar el uso de sustancias psicoactivas.

6.2.4 En materia de información y difusión se deberá:

6.2.4.1 Promover que las actividades de comunicación masiva, grupal e interpersonal, sobre prevención de las adicciones, formen parte de un programa integral de educación para la salud y de promoción a la misma.

6.2.4.2 Ofrecer una visión integral y objetiva del problema, así como informar sobre las alternativas para su prevención y atención.

6.2.4.3 Diseñar, elaborar, difundir y evaluar campañas que promuevan la sensibilización de la comunidad y su participación en acciones preventivas del uso indebido de sustancias psicoactivas, evitando el uso de mensajes alarmistas.

6.2.4.4 Divulgar información sobre las conductas de riesgo producto del uso, abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, y respecto a los factores protectores para prevenirlas.

6.2.4.5 Vincular las acciones de difusión con programas preventivos y de atención, generando mecanismos que permitan, tanto la resolución de dudas, como el apoyo interpersonal.

6.2.4.6 Vigilar que los medios utilizados en la difusión de los mensajes sean los más adecuados, en cuanto a horario, frecuencia y tipo, para la población definida como objetivo.

6.2.4.7 Definir los contenidos de los mensajes, de tal manera que:

6.2.4.7.1 Sean claros y específicos.

6.2.4.7.2 Se dirijan a las necesidades, intereses y características de la población objetivo.

6.2.4.7.3 No muestren la forma de administración de sustancias psicoactivas, ni a personas consumiéndolas.

6.2.4.7.4 Motiven la participación en acciones preventivas.

6.2.4.7.5 Difundan datos actualizados, confiables y fundamentados, que eviten exageraciones.

6.2.4.8 Solicitar la opinión técnica del CONADIC para las campañas en medios masivos, que se planeen instrumentar.

7. Detección temprana

Es una estrategia terapéutica, que combina la identificación de los riesgos o daños ocasionados por el consumo de sustancias psicoactivas, y el tratamiento de los mismos.

7.1 Debe realizarse particularmente con aquellos individuos que aún no presentan síndrome de dependencia, ni severidad en los trastornos asociados al consumo.

7.2. Puede llevarse a cabo de dos maneras:

7.2.1 En los ámbitos familiar, social, laboral, escolar, comunitario y de justicia, mediante la observación o un sondeo general, a fin de identificar oportunamente el consumo de sustancias psicoactivas, o

7.2.2 En los establecimientos, a través de cuestionarios y preguntas sobre el uso de sustancias psicoactivas; en la historia clínica, o mediante el examen físico y el uso de pruebas auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

8. Referencia de casos

8.1 Cuando los recursos del establecimiento no permitan la resolución definitiva del problema se deberá enviar al usuario a otra institución que asegure su tratamiento, debiendo cumplir con los requisitos del establecimiento al que será remitido, tomando en cuenta el tipo de sustancia utilizada, patrones de consumo, grado de dependencia a las sustancias psicoactivas y problemas asociados al consumo.

8.2 La institución debe fomentar el compromiso de la familia, tutor, curador y en su caso, representante legal, en la atención del usuario.

8.3 El encargado deberá elaborar la hoja de referencia correspondiente la cual debe contener:

8.3.1 Nombre del establecimiento que envía.

8.3.2 Establecimiento receptor.

8.3.3 Resumen del caso que incluya:

8.3.3.1 Motivo de envío.

8.3.3.2 Tratamiento empleado si lo hubiera.

8.3.3.3 Nombre completo y firma del responsable que realiza la referencia.

9. Tratamiento

9.1 Consideraciones generales:

9.1.1 La atención debe brindarse en forma ambulatoria o bajo la modalidad de internamiento, a través del modelo profesional, el de ayuda mutua, el mixto o modelos alternativos.

9.1.1.1 El modelo profesional ofrece diferentes servicios de atención, a través de consulta externa, urgencias y hospitalización, y está manejado por profesionales de la salud.

9.1.1.2 El modelo de ayuda mutua es ofrecido por agrupaciones de adictos en recuperación, cuyo propósito fundamental es apoyar al adicto en la resolución de su problema. Los programas de ayuda mutua más comúnmente utilizados tienen su fundamento en los llamados “Doce Pasos de A. A.”, que utilizan diferentes agrupaciones. Con este modelo se trata de incidir, tanto en la conducta como en los problemas existenciales y emocionales del adicto. Subyace la idea de pertenecer a un grupo y practicar los “Doce

Pasos", con el fin de mantener la sobriedad, y se caracteriza por no ofrecer servicios profesionales de atención.

9.1.1.3 El modelo mixto ofrece servicios profesionales de tratamiento y de ayuda mutua en diversos establecimientos, tales como: clínicas privadas, comunidades terapéuticas y casas de medio camino.

9.1.1.4 Otros modelos alternativos son aquellos que brindan servicios de tratamiento a través de diversas técnicas y métodos, tales como: naturismo, grupos con enfoques religiosos y metafísicos, enjuagues bucales, extractos, aromas y pócimas.

9.1.2 Los servicios de tratamiento deben brindarse en establecimientos especializados en la atención de las adicciones, y en establecimientos que ofrecen servicios generales de salud.

9.1.2.1 Los establecimientos especializados de las adicciones, son aquéllos en los que con el modelo profesional, con el de ayuda mutua, el mixto u otros modelos alternativos, proporcionan servicios para la atención específica de personas con adicción a sustancias psicoactivas y, en su caso, de sus complicaciones.

9.1.2.2 Los establecimientos que ofrecen servicios generales de salud, son aquellos que brindan servicios de atención médica no especializada en adicciones.

9.1.3 Los establecimientos especializados en la atención de las adicciones deben:

9.1.3.1 Ofrecer los servicios ambulatorios o de internamiento, de acuerdo con la capacidad resolutiva de los mismos.

9.1.3.2 Iniciar el proceso del tratamiento y la rehabilitación del usuario, tratando de eliminar la posibilidad del fenómeno de recaída.

9.1.3.3 Realizar, si el establecimiento cuenta con el recurso humano capacitado, visita domiciliaria o llamada telefónica para localizar a los usuarios que hayan abandonado su tratamiento o recaído en su adicción.

9.1.4 Los establecimientos que ofrecen servicios generales de salud, deben:

9.1.4.1 Atender las complicaciones asociadas al consumo, de acuerdo con la capacidad resolutiva del establecimiento.

9.1.4.2 Explorar los patrones de consumo de sustancias psicoactivas y su vinculación con el motivo de consulta, en los servicios ambulatorios, de urgencias y hospitalización.

9.1.4.3 Motivar al usuario a través del consejo médico, para que tome conciencia sobre la necesidad de disminuir o evitar el consumo de sustancias.

9.1.4.4 Hacer la referencia del usuario, a establecimientos especializados en la atención de adicciones cuando proceda.

9.2 Para el tratamiento del tabaquismo, los establecimientos especializados que operan bajo el modelo profesional o mixto, deben apegarse a las siguientes especificaciones:

9.2.1 El proceso de atención ambulatoria se debe realizar de acuerdo a las siguientes actividades:

9.2.1.1 Abrir expediente clínico.

9.2.1.2 Elaborar historia clínica.

9.2.1.3 Hacer valoración clínica del caso y elaborar la nota correspondiente.

9.2.1.4 Solicitar auxiliares de diagnóstico y tratamiento, según sea el caso.

9.2.1.5 Elaborar diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento.

9.2.1.5.1 Si el plan de tratamiento incluye el empleo de productos sustitutivos, éstos deben ser prescritos por el responsable del caso.

9.2.1.6 La identificación de patologías asociadas a la dependencia del tabaco debe comprender: brindar tratamiento, requerir interconsulta o bien referir al usuario.

9.2.2 Los establecimientos especializados que operen con el modelo de ayuda mutua para la atención del tabaquismo, deben referir a los adictos al tabaco, siempre que presenten complicaciones médicas que requieran atención profesional.

9.2.3 El personal de salud debe explorar el patrón de consumo y su vinculación con el motivo de la consulta, ya que el usuario no siempre acude porque quiera abandonar el hábito tabáquico.

9.2.4 En los establecimientos que ofrecen servicios generales de salud se debe promover:

9.2.4.1 Que el tabaquismo es un problema de salud en sí mismo y un factor importante de riesgo, que puede ser considerado como patología actual.

9.2.4.2 Que este padecimiento, puede estar asociado a otros trastornos médicos y psicológicos, que también requieren atención.

9.2.4.3 Que el usuario, a través del consejo médico, tome conciencia sobre la importancia de abandonar o disminuir el consumo de tabaco.

9.3 Para el tratamiento de las personas que usan o abusan del alcohol u otras sustancias psicoactivas que no sea el tabaco, los establecimientos especializados que operan bajo el modelo profesional o mixto deben apegarse a los siguientes lineamientos:

9.3.1 Los servicios de consulta externa, deben llevarse a cabo de acuerdo a los siguientes procedimientos:

9.3.1.1 Abrir expediente clínico.

9.3.1.2 Elaborar historia clínica.

9.3.1.3 Hacer valoración clínica del caso y elaborar la nota correspondiente.

9.3.1.4 Solicitar auxiliares de diagnóstico y tratamiento, según sea el caso.

9.3.1.5 Elaborar diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento.

9.3.1.6 Promover la participación de la familia en el proceso.

9.3.1.7 Realizar seguimiento.

9.3.1.8 De ser necesario, enviar a interconsulta, o a internamiento.

9.3.1.9 Si no se cuenta con la capacidad resolutiva suficiente, referir el caso a otro establecimiento, para el tratamiento de su adicción o de las complicaciones asociadas.

9.3.1.10 Elaborar hoja de referencia.

9.3.2 El servicio de internamiento se brindará a los usuarios que así lo requieran, cuando presenten trastornos asociados al consumo de sustancias, de acuerdo con las características clínicas del caso y a través de las siguientes acciones:

9.3.2.1 Al ingreso se deberá:

9.3.2.1.1 Practicar examen clínico.

9.3.2.1.2 Llenar el formato de ingreso según sea el caso: sea voluntario o involuntario, firmado por el usuario, familiar más cercano en vínculo, tutor, curador y en su caso, representante legal y, de acuerdo con los requisitos establecidos.

9.3.2.1.3 Elaborar historia clínica.

9.3.2.1.4 Solicitar los auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

9.3.2.2 En la estancia se deberá:

9.3.2.2.1 Interpretar los resultados de los auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

9.3.2.2.2 Solicitar las interconsultas necesarias.

9.3.2.2.3 Establecer diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento, antes de las 48 horas posteriores al ingreso del usuario.

9.3.2.2.4 Elaborar la historia clínica.

9.3.2.2.5 Valorar, diariamente, el estado clínico y revisar el tratamiento.

9.3.2.2.6 Elaborar la nota de evolución correspondiente.

9.3.2.3 Al egreso se deberá:

9.3.2.3.1 Valorar el estado clínico.

9.3.2.3.2 Ratificar o rectificar el diagnóstico.

9.3.2.3.3 Elaborar pronóstico.

9.3.2.3.4 Referir, de ser necesario, a otro establecimiento especializado para el tratamiento de las adicciones.

9.3.2.3.5 Elaborar la nota clínica de egreso, informando al usuario, familiar más cercano en vínculo, tutor, curador y en su caso, representante legal, el plan de egreso.

9.3.2.3.6 Si el usuario abandonase el tratamiento sin autorización médica, esto deberá ser notificado en forma inmediata por el personal del establecimiento al familiar más cercano en vínculo, al representante legal o a la autoridad correspondiente, según sea el caso.

9.3.3 Los establecimientos especializados que operan bajo el modelo de ayuda mutua para la atención de las personas que usan o abusan de sustancias psicoactivas, brindan servicios en dos modalidades: la no residencial, y la residencial.

9.3.3.1 La modalidad no residencial consiste en llevar a cabo reuniones en las que se transmite el mensaje de recuperación y se realizan actividades de rehabilitación. Los grupos de ayuda mutua que ofrezcan servicios bajo esta modalidad deberán:

9.3.3.1.1 Contar con un encargado del establecimiento.

9.3.3.1.2 En caso de que alguna persona acuda al grupo en estado de intoxicación o en síndrome de abstinencia o de supresión, referirla inmediatamente a un establecimiento que preste servicios de atención profesional.

9.3.3.1.3 Canalizar al usuario a servicios profesionales, cuando se presente co-morbilidad médica que requiera tal atención.

9.3.3.1.4 Llevar un registro individualizado de las actividades realizadas.

9.3.3.2 La modalidad residencial ofrece la posibilidad de alojar a los usuarios de los servicios en establecimientos, mismos que deben cumplir con los siguientes requisitos:

9.3.3.2.1 Disposiciones generales.

9.3.3.2.1.1 Contar con un encargado del establecimiento.

9.3.3.2.1.2 Contar con lineamientos y disposiciones por escrito, del proceso de recuperación al que se va a incorporar el usuario, y sobre el funcionamiento del establecimiento.

9.3.3.2.1.3 Explicar con detalle y claridad, tanto al usuario como a su familiar, las condiciones del establecimiento, días y horarios de visita.

9.3.3.2.1.4 El ingreso y la permanencia del usuario en el establecimiento deberán ser estrictamente voluntarios.

9.3.3.2.2 Al ingreso se deberá:

9.3.3.2.2.1 Sin que se atente contra su integridad, toda persona debe ser objeto de una revisión física, en presencia de su familiar, tutor, curador y en su caso, representante legal, para detectar golpes o heridas que requieran la atención inmediata de un médico.

9.3.3.2.2.2 En caso de que alguna persona acuda al grupo con un grado severo de intoxicación o en síndrome de abstinencia o de supresión, se deberá referir a servicios de atención profesional, inmediatamente.

9.3.3.2.2.3 El encargado del establecimiento debe indagar si la persona está embarazada, tiene algún padecimiento grave, complicaciones físicas, psiquiátricas, o enfermedad contagiosa, con la finalidad de tomar las previsiones necesarias para su atención, durante su estancia en el establecimiento.

9.3.3.2.2.4 Todo usuario que ingrese al establecimiento, debe ser valorado por un médico.

9.3.3.2.2.5 El encargado del establecimiento deberá llenar una hoja de ingreso, o reingreso de cada persona.

9.3.3.2.2.6 La hoja de ingreso o reingreso debe consignar:

9.3.3.2.2.6.1 Fecha de ingreso.

9.3.3.2.2.6.2 Datos generales del usuario.

9.3.3.2.2.6.3 Enfermedades actuales.

9.3.3.2.2.6.4 Datos del familiar, tutor, curador o representante legal que lo acompaña, en su caso.

9.3.3.2.2.6.5 Breve descripción del estado general del usuario.

9.3.3.2.2.6.6 Nombre y firma de aceptación del usuario, de su familiar, tutor, curador y en su caso, representante legal, y del encargado del establecimiento.

9.3.3.2.2.7 Si el que ingresa es menor de edad, se debe obtener adicionalmente el consentimiento por escrito del padre, tutor, curador o representante legal. Sólo se le aceptará, cuando existan programas y espacios adecuados; de lo contrario, deberá ser referido a las instituciones encargadas de la atención a menores.

9.3.3.2.2.8 Si se trata de niños abandonados, el encargado del establecimiento debe efectuar el trámite para obtener la tutela correspondiente, en los términos de las disposiciones civiles aplicables.

9.3.3.2.2.9 En los establecimientos no se deben admitir personas distintas a las que requieran el servicio para el cual fue creado, si no cuentan con las instalaciones adecuadas para su atención.

9.3.3.2.3 Durante la estancia se deberá:

9.3.3.2.3.1 No se deben suministrar medicamentos a los usuarios, sin prescripción médica.

9.3.3.2.3.2 En caso de presentarse algún accidente o emergencia con alguno de los usuarios, el encargado del establecimiento deberá procurar, de inmediato, la atención médica necesaria, y dar aviso al familiar más cercano en vínculo, tutor, curador y en su caso, representante legal.

9.3.3.2.3.3 El encargado del establecimiento debe proporcionar al familiar más cercano en vínculo, tutor, curador y en su caso, representante legal del usuario, toda la información que le sea solicitada acerca del estado general, evolución del tratamiento o recuperación del usuario.

9.3.3.2.3.4 No deben ser utilizados procedimientos que atenten contra la integridad física y mental del usuario.

9.3.3.2.4 Al egreso se deberá:

9.3.3.2.4.1 El usuario y su familiar, tutor, curador y en su caso, representante legal, según sea el caso, deben llenar una hoja de egreso, la cual debe contener:

9.3.3.2.4.1.1 Fecha de egreso.

9.3.3.2.4.1.2 Descripción del estado general del usuario.

9.3.3.2.4.1.3 Nombre y firma de conformidad, de la persona que egresa; de su familiar, tutor, curador y en su caso, representante legal, según corresponda, y del encargado del establecimiento.

9.3.3.2.4.1.4 En caso de que el usuario sea menor de edad, se debe contar además con la firma de conformidad del padre, del tutor, curador o representante legal, según sea el caso.

9.3.3.2.4.2 En caso de que el usuario abandone el establecimiento antes de concluir el tratamiento, el encargado del mismo debe dar aviso de inmediato al familiar más cercano en vínculo, tutor, curador y en su caso, representante legal que haya firmado la hoja de ingreso.

9.3.3.2.4.3 Por ningún motivo se podrá cambiar de establecimiento al usuario, sin obtener antes su consentimiento por escrito y, en su caso, del familiar, del tutor, curador o representante legal.

9.3.3.2.4.4 En menores de edad se deberá entregar al familiar, tutor, curador y en su caso, representante legal, por escrito, el manejo del caso en su domicilio.

9.3.3.2.5 Los establecimientos deben contar con:

9.3.3.2.5.1 Oficina de recepción-información.

9.3.3.2.5.2 Sanitarios y regaderas independientes, para hombres y para mujeres, y horarios diferentes para el aseo personal, tanto de hombres como de mujeres.

9.3.3.2.5.3 Dormitorios con camas independientes y con armarios personales, para hombres y para mujeres.

9.3.3.2.5.4 Cocina.

9.3.3.2.5.5 Comedor.

9.3.3.2.5.6 Sala de juntas.

9.3.3.2.5.7 Area para actividades recreativas.

9.3.3.2.5.8 Botiquín de primeros auxilios.

9.3.3.2.5.9 Area para psicoterapia grupal, en caso de que ofrezcan este servicio.

9.3.3.2.5.10 Area de resguardo y control de medicamentos, en caso de que el responsable tenga autorización para prescribirlos.

9.3.3.2.5.11 Todas las áreas descritas deben estar siempre en perfectas condiciones de higiene, iluminación y ventilación.

9.3.3.2.5.12 El número de usuarios que pueden ser admitidos, dependerá de la capacidad del establecimiento, según las disposiciones legales vigentes.

9.3.4 En los establecimientos que operan con el modelo mixto que presten servicios de consulta externa e internamiento, la atención debe brindarse de acuerdo con lo establecido en los numerales 9.3.1 al 9.3.2.3.6 de esta Norma. Cuando sean manejados por adictos en recuperación, la atención debe brindarse conforme a lo establecido en los numerales 9.3.3 al 9.3.3.2.5.12 de esta Norma.

9.3.5 El seguimiento de usuarios en los establecimientos especializados en adicciones, tiene por objeto vigilar el proceso subsecuente de tratamiento y rehabilitación, a través de las diferentes alternativas identificadas para lograr su reinserción social, sea con profesionales de la salud, grupos de ayuda mutua o ambos, para evitar o reducir el fenómeno de recaída y debe realizarse mediante las actividades señaladas a continuación:

9.3.5.1 Manejo subsecuente, en otros establecimientos para tratamiento de adicciones.

9.3.5.2 Visita domiciliaria o llamada telefónica, si el establecimiento cuenta con este servicio.

9.3.5.3 Rescate de usuarios que han abandonado su tratamiento o recaído en su adicción, si el establecimiento cuenta con recursos.

9.3.5.4 Cuando el usuario sea referido a otro establecimiento, debe elaborarse una hoja de referencia, que detalle el caso.

9.3.6 Se debe promover en los establecimientos que ofrecen servicios generales de salud:

9.3.6.1 Que el alcoholismo y la farmacodependencia son problemas de salud en sí mismos y factores importantes de riesgo que pueden ser considerados como patologías actuales.

9.3.6.2 Que los padecimientos adictivos pueden estar asociados a otros trastornos médicos y psicológicos, que también requieren atención.

9.3.6.3 Que el personal de salud explore el patrón de consumo y su vinculación con el motivo de consulta, ya que el usuario no siempre acude porque quiere abandonar el consumo de alcohol o de otras sustancias psicoactivas.

9.3.6.4 Que el usuario, a través del consejo médico, tome conciencia de abandonar o disminuir el consumo de sustancias psicoactivas.

10. Investigación

10.1 La investigación en materia de adicciones, tiene por objeto:

10.1.1 Determinar las características y tendencias del problema, así como su magnitud e impacto en el individuo y en la sociedad.

10.1.2 Proveer de una base científica que permita diseñar e implementar políticas en materia de adicciones.

10.1.3 Evaluar el impacto de los programas preventivos, así como de tratamiento y rehabilitación.

10.1.4 Identificar grupos de riesgo y orientar la toma de decisiones.

10.1.5 Establecer el nivel de costo-efectividad de las acciones.

10.2 En toda investigación en que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad, la protección de sus derechos y su bienestar.

10.3 En el diseño y desarrollo de este tipo de investigaciones se debe:

10.3.1 Obtener el consentimiento informado y por escrito, por parte del sujeto y, en su caso, del familiar más cercano en vínculo, tutor, curador y en su caso, representante legal a quienes deberán proporcionárseles todos los elementos para decidir su participación.

10.3.2 El investigador debe obtener la aprobación por escrito, de las autoridades correspondientes, para la realización de cualquier proyecto de investigación donde el usuario sea sujeto de estudio.

10.4 Al finalizar, los resultados de las investigaciones deben difundirse a través de publicaciones científicas y reportes.

11. Vigilancia epidemiológica de las adicciones

11.1 Para la vigilancia epidemiológica de las adicciones, los establecimientos deben apegarse a lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994.

11.2 Las adicciones se consideran dentro del grupo de las enfermedades no transmisibles y, como tal, son objeto de aplicación de un subsistema especial de vigilancia epidemiológica.

11.3 Los procedimientos específicos para llevar a cabo la vigilancia epidemiológica de las adicciones debe basarse en los lineamientos descritos en el manual del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, que cuenta con los elementos técnicos y metodológicos necesarios para orientar su aplicación en todos los establecimientos del SNS.

12. Seguimiento y evaluación

12.1 El seguimiento de los programas y acciones que se realizan en todos los establecimientos permitirá determinar el grado en que se obtengan los resultados esperados, y la medida en que se cumplan los objetivos para los que originalmente fueron creados.

12.2 Las acciones en materia de seguimiento y evaluación deben:

12.2.1 Orientarse hacia la estructura, proceso y resultado de los programas de prevención, tratamiento, rehabilitación, enseñanza, capacitación e investigación sobre las adicciones a sustancias psicoactivas.

12.2.2 Formular y proponer las políticas y estrategias para el desarrollo de acciones de los programas mencionados en el numeral anterior.

12.2.3 Realizar evaluaciones periódicas, tanto cualitativas como cuantitativas, de los logros obtenidos durante un periodo de tiempo determinado, con objeto de detectar desviaciones y proponer alternativas para aplicar medidas correctivas.

12.2.4 Reportar las actividades con una periodicidad trimestral, conforme a los procedimientos establecidos por CONADIC.

13. Capacitación y enseñanza

13.1 Las acciones de capacitación y enseñanza tienen por objeto contar con recursos humanos, técnicos, suficientes y bien preparados para afrontar el problema, apoyar la creación de programas integrales sobre prevención, investigación, tratamiento y control del tabaquismo, el alcoholismo, el abuso de bebidas alcohólicas, y de la farmacodependencia, así como elevar la calidad de tales acciones y fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos.

13.2 Las acciones en materia de capacitación:

13.2.1 Se deben realizar a través de congresos, cursos, seminarios, talleres y cualquier otro foro relacionado con la materia.

13.2.2 Para las actividades descritas en el numeral anterior, los establecimientos deben informar al CONADIC las fechas y horarios en que se realizarán dichos eventos.

13.3 Las acciones en materia de enseñanza:

13.3.1 Se deben realizar a través de diplomados y cursos especializados que cuenten con valor curricular, de conformidad con las disposiciones vigentes.

13.3.2 Solicitar apoyo y asesoría técnica al CONADIC.

14. Bibliografía

14.1 *Alcoholics Anonymous as a Mutual-Help Movement. A Study in Eight Societies,* Klaus, Mäkelä, *et. al.* The University of Wisconsin Press, USA, 1996.

14.2 *Alcoholismo. Visión Integral*. Velasco Fernández, Rafael. Ed. Trillas, México, D.F. 1988.

14.3 *Alternativas de Rehabilitación en Salud Mental*, Vol. 14. Centros de Integración Juvenil, México 1996.

14.4 *Approaches to Treatment of Substance Abuse.* World Health Organization. 1993.

14.5 *Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10).* OPS-OMS*,* Décima Revisión, 1995.

14.6 *Comisión para el Bienestar del Enfermo Mental*, Documentos Elaborados, Junio SSA. México 1992-1993.

14.7 *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.* 110 edición, México, 1995.

14.8 *Compendio de Términos de Alcohol y Drogas. OMS,* 1994.

14.9 *Diccionario de Medicina,* Océano, Morby, 1997.

14.10 *Declaración Universal de los Derechos Humanos.* Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU. Resolución 217 A (III) Diciembre 10 de 1948.

14.11 *Decreto 233/1992 sobre Autorización para el Funcionamiento de Centros y Servicios de Atención y Prevención de la Drogodependencia.* Comisión de Atención y Prevención de la Drogodependencia. Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales. Gobierno de Valencia. Comunidad Autónoma de Valencia. 1992.

14.12 *Decreto 147/1985 sobre Centros, Servicios y Establecimientos de Bienestar Social.* Comunidad de Madrid. Diciembre, 1985.

14.13 *Documento Orientador de Normatizaciones para el Funcionamiento de las Instituciones con Prestaciones Asistenciales.* Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, República de Argentina, 1990.

14.14 *Evaluación de Modelos de Tratamiento. Su efectividad*. OMS, 1993.

14.15 *Fomento de la Salud ante las Adicciones: Expectativas.* IMSS, Dirección de Prestaciones Médicas, Coordinación de Salud Comunitaria, México, 1996.

14.16 *Funciona ¿Cómo y Por qué?, Los Doce Pasos y Doce Tradiciones de Narcóticos Anónimos.* Narcóticos Anónimos*,* 1997.

14.17 *Guía de Introducción a Narcóticos Anónimos*. Narcóticos Anónimos 1995.

14.18 *Internamiento con Farmacodependientes, Perspectivas Actuales*, Vol. 12, Centros de Integración Juvenil. México, 1995.

14.19 *La Comunidad Terapéutica*, Goti Elena. Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1997.

14.20 *La Evaluación en las Comunidades Terapéuticas*, 13-16 de Abril. Fundación Universitaria Luis Amigo. México, 1997.

14.21 *Las Doce Tradiciones,* reimpresión 40. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C. México, 1989.

14.22 *La Salud del Adolescente y del Joven.* OPS, Publicación *Científica No. 552, 1995.* Matilde Madaleno, Mabel M. Munist, Carlos V. Serrano, Tomás J. Silber, Elibio N. Suárez Ojeda, Joao Yunes.

14.23 *Ley General de Salud,* **Diario Oficial de la Federación**, 7 de febrero de 1984. Reforma del 7 de mayo de 1997.

14.24 *Ley Federal sobre Metrología y Normalización,* **Diario Oficial de la Federación**, México, 1o. de julio de 1992.

14.25 *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,* **Diario Oficial de la Federación**, 29 de diciembre de 1976, modificada por Decreto publicado el 28 de diciembre de 1994.

14.26 *Los Tres Lineamientos* (Folleto). Oficina Central de Servicios de Grupos 24 Horas de Alcohólicos Anónimos y Terapia Intensiva, A.C.

14.27 *Management of Alcohol and Drug-Related Issues in the Workplace*. International Labour Office. Geneva, 1996.

14.28 *Manual de Acreditación Para Centros de Tratamiento y Rehabilitación de Dependientes de Sustancias Psicotrópicas.* Ministerio de Desarrollo Humano, República de Bolivia. 1997.

14.29 *Manual de Normas y Procedimientos.* Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. Instancia de Aprobación y Seguimiento de Programas Públicos y Privados. San José, Costa Rica, 1996.

14.30 *Manual de Servicios.* Oficina Central de Servicios de Grupos 24 Horas de Alcohólicos Anónimos y Terapia Intensiva, A.C.*,* 4a. Edición, 1997.

14.31 M*anual de Servicios de Alcohólicos Anónimos y Doce Conceptos para el Servicio Mundial,* Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C. México, 1996.

14.32 *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-IV*, Ed. Masson, 1995.

14.33 *Narcóticos Anónimos*. Narcóticos Anónimos*,* 1997.

14.34 *Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000,* México, 1995.

14.35 *Primera Reunión Técnica para el estudio de las Normas sobre las estadísticas de la demanda de drogas*, Marzo-Abril, 1995. CICAD, OEA.

14.36 *Programa contra la Farmacodependencia.* SSA-Consejo Nacional contra las Adicciones. México, 1992-1994.

14.37 *Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud,* **Diario Oficial de la Federación**, México, 6 de enero de 1987.

14.38 *Reglamento Interior de la Secretaría de Salud,* **Diario Oficial de la Federación**, México, 6 de agosto de 1997.

14.39 *Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica,* **Diario Oficial de la Federación**, México, 14 de mayo de 1986.

14.40 *Reglamento de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos Productos y Servicios,* **Diario Oficial de la Federación**, México, 9 de agosto de 1999.

14.41 *Reglamento para los Establecimientos de Rehabilitación de Personas Dependientes de Sustancias Psicoactivas, a través de la Modalidad Comunidad Terapéutica.* Ministerio de Salud de Chile. Chile, 1995.

14.42 *Reglamento de Control y Funcionamiento de los Servicios Públicos y Privados de Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración Social de Farmacodependientes.* Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. República del Ecuador.

14.43 *Requisitos Mínimos Exigibles a los Centros Residenciales Destinados a la Rehabilitación de Drogodependientes en el Marco de un Programa Terapéutico, a Efectos del Otorgamiento de la Autorización Correspondiente*. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, España (Sin fecha).

14.44 *Resolución de la Normativa para la Creación, Ampliación y Modificación de Centros, Servicios y Establecimientos Socio-Sanitarios No. 877, 1987*. Diario Oficial del Gobierno Catalán. Departamento de Sanidad y Seguridad Social, 1987.

14.45 *Sinopsis de Psiquiatría, Selección de Temas de la 7a. Edición Original.* Kaplan and Sadock´s, 1994.

14.46 *Therapeutic Communities for Addictions: A Theoretical Framework.* The International Journal on Addictions, 30 (12), 1603-1645.

15. Concordancia con normas internacionales y mexicanas

Esta Norma no es equivalente a ninguna norma mexicana, pero equivale parcialmente con las siguientes normas internacionales:

15.1 Cancillería de Trabajo y Asuntos Sociales, Decreto 233 del Gobierno de Valencia, España. Sobre Autorización para el Funcionamiento de Centros y Servicios de Atención y Prevención de la Drogodependencia, en la Comunidad Valenciana, 1992.

15.2 Delegación del Gobierno de Madrid, España, para el Plan Nacional sobre Drogas. Orden referente a los Centros para Rehabilitación y Reinserción Social de Toxicómanos. 1987.

15.3 Diario Oficial del Gobierno Catalán. Departamento de Sanidad y Seguridad Social, Resolución de la Normativa para la Creación, Ampliación y Modificación de Centros, Servicios y Establecimientos Socio-Sanitarios, No. 877 1987.

15.4 Ministerio de Desarrollo Humano, República de Bolivia. Manual de Acreditación (Para Centros de Tratamiento y Rehabilitación de Dependientes de Sustancias Psicotrópicas), Bolivia 1997.

15.5 Ministerio de Salud de Chile. Establecimientos de Rehabilitación de Personas Dependientes de Sustancias Psicoactivas, a través de la modalidad de comunidad terapéuticas en adelante, Establecimientos de Comunidad, Chile 1968.

15.6 Ministerio de Salud de Panamá. Normas de Atención para Centros o Programas Públicos y Privados de Tratamiento y Rehabilitación de Usuarios con Abuso o Dependencia de las Drogas. Panamá, 1997.

15.7 Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, República de Argentina. Documento Orientador de Normatizaciones para el Funcionamiento de las Instituciones con Prestaciones Asistenciales, 1990.

16. Observancia de la norma

La vigilancia de la aplicación de esta Norma corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de los estados, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 20 de marzo de 2000.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, **Roberto Tapia Conyer**.- Rúbrica.

CEDULA DE INDICADORES PARA MEDIR DEPENDENCIA A DROGAS

Criterios para diagnosticar dependencia a sustancias adictivas: conjunto de manifestaciones fisiológicas, conductuales y cognoscitivas, en el cual el consumo de una droga adquiere la máxima prioridad para el individuo, que se manifiesta por tres o más síntomas en algún momento, en los 12 meses previos.
(Organización Mundial de la Salud, Décima Revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, 1992).

Edad del sujeto_____

Anote el nombre de la droga: _____

¿Qué tipo(s) de droga(s) consume? (Puede marcar más de una opción)	☐ Mariguana ☐ Disolventes o inhalables ☐ Alucinógenos ☐ Opio o morfina	☐ Anfetaminas ☐ Sedantes ☐ Basuco o Pasta ba narcóticos) ☐ Cristal (metanfeta ¿Principal droga c

En los últimos 12 meses:	No 0 Sí 1	**PREGUNTA FILTRO** **Si la respuesta es afirmat**
¿Usó en más de cinco ocasiones: _____ para estimularse, relajarse, sentirse (nombre de la droga) mejor o sentirse más activo o alerta?		
1a ¿Se dio cuenta de que tenía que usar más cantidad que antes de _____ para lograr el efecto deseado?(nombre de la droga)	No 0 Sí 1	***Tolerand*** **Se califica como síntoma presente, cuando alguna de las respuestas es afirmativa = 1** *Después de la primera respuesta Afirmativa, pase a la pregunta 2a*
1b ¿Notó que la misma cantidad de _____ le hacía menos efecto que antes? (nombre de la droga)	No 0 Sí 1	
1c ¿Alguna vez se dio cuenta de que necesitaba más cantidad de _____ para (nombre de la droga) lograr el mismo efecto?	No 0 Sí 1	
2a ¿Ha sentido un deseo o necesidad tan fuerte de consumir _____ (nombre de la droga) que no pudo evitar hacerlo?	No 0 Sí 1	***Fuerte deseo o sensación de compulsión para tomar la sustancia*** Se califica como síntoma present cuando alguna de las respuestas afirmativa **= 1** *Después de la primera respuesta afirmativa, pase la pregunta 3a*
2b ¿Ha deseado consumir _____ tan desesperadamente que no podía (nombre de la droga) pensar en nada más?	No 0 Sí 1	
3a ¿Hubo ocasiones en que quiso suspender o disminuir el consumo de _____ ? Si fue así, ¿ha sido siempre capaz de disminuir su uso por lo (nombre de la droga) menos durante un mes?	No Pase a 3b Sí Continúe Sí 0 No	***Dificultad para controlar consumo de sustanci*** Se califica como síntoma present cuando **3a =1 o 3b = 1**
3b ¿Ha tenido periodos en los que usó _____ en mayor cantidad o por más (nombre de la droga) tiempo de lo que se proponía, o se le hizo difícil suspender el consumo antes de sentirse intoxicado?	No 0 Sí 1	

Adaptación basada en la Cédula Internacional de Entrevista Diagnóstica (1997) WHO-CIDI 2.1 y en los criterios para diagnosticar dependencia de sustancias de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (1995).

En los últimos 12 meses:		
4a En las horas o días siguientes a suspender o disminuir el uso de _____ (nombre de la droga) ¿alguna vez tuvo malestares como temblores, sudores, no poder dormir, dolor de cabeza o estómago, etc.?	No 0 Sí 1	***Abstinencia*** **Se califica como síntoma presente cuando alguna de las respuestas es afirmativa = 1** ***Después de la primera respuesta Afirmativa, pase a la pregunta 5a***
4b ¿Utilizó _____ u otra droga para evitar tener malestares como los que se (nombre de la droga) acaban de mencionar?	No 0 Sí 1	
5a ¿Ha habido ocasiones en que dedicaba mucho tiempo a conseguir _____ ? (nombre de la droga)	No 0 Sí 1	***Reducción progresiva del repertor actividades o intereses*** **Se califica como síntoma presente, cuando alguna de las respuestas es afirmativa = 1** ***Después de la primera respuesta afirmativa, pase a la pregunta 6a***
5b ¿Ha pasado mucho tiempo consumiendo o recuperándose de los efectos de _____? (nombre de la droga)	No 0 Sí 1	
5c ¿Ha descuidado o suspendido actividades importantes como estudios, deportes, trabajo, compartir con amigos o familiares, por conseguir o usar _____? (nombre de la droga)	No 0 Sí 1	

6a ¿Ha tenido problemas de salud, como sobredosis accidental, tos persistente, convulsiones, infecciones, hepatitis, abscesos, SIDA, problemas cardiacos u otra lesión relacionada con el uso de _____ ? (nombre de la droga)	No 0 Sí 1	***Uso persistente a pesar de las consecuencias dañinas* Se califica como síntoma presente, cuando alguna de las respuestas es afirmativa=1**
6b ¿Continuó usando _____ aun después de presentar estos problemas (nombre de la droga) de salud?	No 0 Sí 1	
6c ¿Ha tenido usted problemas psicológicos o sociales asociados al uso de _____, como sentirse deprimido, extraño o perseguido, o presentar fracasos (nombre de la droga) laborales o escolares, conflictos familiares, actos de violencia, accidentes, etc.?	No 0 Sí 1	
6d ¿Continuó consumiendo _____ aun después de saber que se relacionaba con alguno de estos problemas? (nombre de la droga)		

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio El Rincón, Municipio de Balancán, Tab.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 510475, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 510475, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "El Rincón", con una superficie de 08-84-56 (ocho hectáreas, ochenta y cuatro áreas, cincuenta y seis centiáreas), localizado en el Municipio de Balancán del Estado de Tabasco.

2o.- Que con fecha 25 de enero de 1999 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 704491, de fecha 19 de febrero de 1999 emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 17 grados, 37 minutos, 00 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 20 minutos, 00 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Zona federal de la laguna El Bilín
AL SUR: Zona federal de la laguna El Bilín y ejido San Nicolás
AL ESTE: Ejido San Nicolás
AL OESTE: Zona federal de la laguna El Bilín

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 19 de febrero de 1999 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 704491, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 08-84-56 (ocho hectáreas, ochenta y cuatro áreas, cincuenta y seis centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 17 grados, 37 minutos, 00 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 20 minutos, 00 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Zona federal de la laguna El Bilín
AL SUR: Zona federal de la laguna El Bilín y ejido San Nicolás
AL ESTE: Ejido San Nicolás
AL OESTE: Zona federal de la laguna El Bilín

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 08-84-56 (ocho hectáreas, ochenta y cuatro áreas, cincuenta y seis centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 15 de abril de 1999.- El Secretario de la Reforma Agraria, **Eduardo Robledo Rincón**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Héctor René García Quiñones**.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Francisco Javier Molina Oviedo**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio Las Malvinas I, expediente número 512551, Municipio de Balancán, Tab.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 512551, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 512551, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "Las Malvinas I", con una superficie de 08-68-85 (ocho hectáreas, sesenta y ocho áreas, ochenta y cinco centiáreas), localizado en el Municipio de Balancán del Estado de Tabasco.

2o.- Que con fecha 9 de marzo de 1999 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 704969, de fecha 5 de abril de 1999 emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 17 grados, 55 minutos, 00 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 37 minutos, 30 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Eduardo Marín León y Rómulo García Vázquez
AL SUR: Guillermo Gómez Morales, Saúl González López y Julio A. López López con dren de por medio
AL ESTE: Rómulo García Vázquez
AL OESTE: Martín Mendoza López, Eduardo Marín León y dren

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 5 de abril de 1999 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 704969, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 08-68-85 (ocho hectáreas, sesenta y ocho áreas, ochenta y cinco centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 17 grados, 55 minutos, 00 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 37 minutos, 30 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Eduardo Marín León y Rómulo García Vázquez

AL SUR: Guillermo Gómez Morales, Saúl González López y Julio A. López López con dren de por medio

AL ESTE: Rómulo García Vázquez

AL OESTE: Martín Mendoza López, Eduardo Marín León y dren

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 08-68-85 (ocho hectáreas, sesenta y ocho áreas, ochenta y cinco centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 4 de mayo de 1999.- El Secretario de la Reforma Agraria, **Eduardo Robledo Rincón**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Héctor René García Quiñones**.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Francisco Javier Molina Oviedo**.- Rúbrica.

RESOLUCION que declara como terreno nacional el predio Las Malvinas I, expediente número 512552, Municipio de Balancán, Tab.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.- Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.- Dirección General de Ordenamiento y Regularización.

RESOLUCION

Visto para resolver el expediente número 512552, y

RESULTANDOS

1o.- Que en la Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización, se encuentra el expediente número 512552, relativo al procedimiento de investigación, deslinde y levantamiento topográfico respecto del presunto terreno nacional denominado "Las Malvinas I", con una superficie de 08-69-90 (ocho hectáreas, sesenta y nueve áreas, noventa centiáreas), localizado en el Municipio de Balancán del Estado de Tabasco.

2o.- Que con fecha 9 de marzo de 1999 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el aviso de deslinde con el propósito de realizar, conforme al procedimiento, las operaciones de deslinde que fueran necesarias.

3o.- Que como se desprende del dictamen técnico número 704968, de fecha 5 de abril de 1999 emitido en sentido positivo, el predio en cuestión tiene las coordenadas de ubicación geográfica y colindancias siguientes:

De latitud Norte 17 grados, 55 minutos, 00 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 37 minutos, 30 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Isidro Salinas Ramírez y Juan Salinas Venegas con dren de por medio

AL SUR: Carmen Pérez Barrientos y ejido Mario Calcaneo Sánchez

AL ESTE: Ejido Mario Calcaneo Sánchez y Juan Salinas Venegas con dren de por medio

AL OESTE: Isidro Salinas Ramírez y Carmen Pérez Barrientos

CONSIDERANDOS

I.- Esta Secretaría es competente para conocer y resolver sobre la procedencia o improcedencia de la resolución que declare o no el terreno como nacional en torno al predio objeto de los trabajos de deslinde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 constitucional; 160 de la Ley Agraria; 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 111, 112, 113 y 115 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como 4o., 5o. fracción XIX, 6o. y 12 fracciones I y II de su Reglamento Interior.

II.- Una vez revisados los trabajos de deslinde, a fin de verificar que éstos se desarrollaron con apego a las normas técnicas, habiéndose realizado los avisos, notificaciones y publicaciones que exigen los ordenamientos legales, según se acredita con la documentación que corre agregada a su expediente, se desprende que con fecha 5 de abril de 1999 se emitió el correspondiente dictamen técnico, asignándosele el número 704968, mediante el cual se aprueban los trabajos del deslinde y los planos derivados del mismo, resultando una superficie analítica de 08-69-90 (ocho hectáreas, sesenta y nueve áreas, noventa centiáreas), con las coordenadas geográficas y colindancias siguientes:

De latitud Norte 17 grados, 55 minutos, 00 segundos; y de longitud Oeste 91 grados, 37 minutos, 30 segundos, y colindancias:

AL NORTE: Isidro Salinas Ramírez y Juan Salinas Venegas con dren de por medio
AL SUR: Carmen Pérez Barrientos y ejido Mario Calcaneo Sánchez
AL ESTE: Ejido Mario Calcaneo Sánchez y Juan Salinas Venegas con dren de por medio
AL OESTE: Isidro Salinas Ramírez y Carmen Pérez Barrientos

III.- Durante el desarrollo de los trabajos de deslinde se apersonaron los poseedores de los predios que colindan con el terreno de que se trata en la presente, quienes manifestaron su conformidad de colindancias con el predio en cuestión y que se describen en los trabajos técnicos que obran en su expediente.

En consecuencia, es de resolverse y se resuelve:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se declara que el terreno al que se refiere la presente es nacional, conformándose por 08-69-90 (ocho hectáreas, sesenta y nueve áreas, noventa centiáreas), con las colindancias, medidas y ubicación geográfica descritas en la presente Resolución.

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución en el **Diario Oficial de la Federación** y notifíquese personalmente a los interesados dentro de los diez días naturales siguientes al de su publicación.

TERCERO.- Inscríbase esta Resolución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad que corresponda, en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria Federal y en el Registro Agrario Nacional.

Así lo proveyó y firma.

México, D.F., a 4 de mayo de 1999.- El Secretario de la Reforma Agraria, **Eduardo Robledo Rincón**.- Rúbrica.- El Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, **Héctor René García Quiñones**.- Rúbrica.- El Director General de Ordenamiento y Regularización, **Francisco Javier Molina Oviedo**.- Rúbrica.

AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Pino Dulce, Municipio de Guadalupe y Calvo, Chih.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.

AVISO DE DESLINDE DEL PREDIO PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL DENOMINADO "PINO DULCE", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y CALVO, ESTADO DE CHIHUAHUA.

La Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante oficio número 147136, de fecha 8 de diciembre de 1999, expediente sin número, autorizó a la Representación Regional, para que comisionara perito deslindador, la cual, con oficio número 0085 de fecha 12 de enero de 2000, me ha autorizado para que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 160 de la Ley Agraria, 104, 107 y 108 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, proceda al deslinde y medición del predio presuntamente propiedad nacional denominado "Pino Dulce", con superficie aproximada de 365-71-30 hectáreas, ubicado en el Municipio de Guadalupe y Calvo, Estado de Chihuahua, el cual cuenta con las siguientes colindancias:

AL NORTE CON: Ejido "La Trinidad"
AL SUR CON: Ejido "La Trinidad"
AL ESTE CON: Predio posesión de Manuel Duarte
AL OESTE CON: Predio posesión de Agapito Ruiz

Por lo que, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 160 de la Ley Agraria y 108 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, deberá publicarse por una sola vez en el **Diario Oficial de la Federación**, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, el periódico de información local de mayor circulación en la región, así como colocarse en los parajes más cercanos al mismo terreno, con el objeto de comunicar a las personas que se sientan afectadas en sus derechos por la realización de los trabajos de deslinde, a fin de que dentro del plazo de 30 días hábiles, a partir de la publicación del presente Aviso en el **Diario Oficial de la Federación**, ocurran ante el suscrito para exponer lo que a sus derechos convenga, así como para presentar la documentación que fundamente su dicho. Para tal fin se encuentra a la vista de cualquier interesado el croquis correspondiente en las oficinas que ocupa la Representación Regional, con domicilio en avenida Tecnológico número 1701, colonia Santo Niño de la ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua.

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido notificadas a presenciar el deslinde no ocurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados.

Atentamente

Chihuahua, Chih., a 18 de enero de 2000.- El Perito, **Arnoldo Rodríguez López**.- Rúbrica.

AVISO de deslinde del predio de presunta propiedad nacional denominado Baquiriachi, Municipio de Carichi, Chih.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Reforma Agraria.

AVISO DE DESLINDE DEL PREDIO PRESUNTA PROPIEDAD NACIONAL DENOMINADO "BAQUIRIACHI", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CARICHI, ESTADO DE CHIHUAHUA.

La Dirección de Regularización de la Propiedad Rural, dependiente de la Dirección General de Ordenamiento y Regularización de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante oficio número 146294, de fecha 21 de octubre de 1999, expediente sin número, autorizó a la Representación Regional, para que comisionara perito deslindador, la cual, con oficio número 0086 de fecha 12 de enero de 2000, me ha autorizado para que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 160 de la Ley Agraria, 104, 107 y 108 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, proceda al deslinde y medición del predio presuntamente propiedad nacional denominado "Baquiriachi", con superficie aproximada de 600-00-00 hectáreas, ubicado en el Municipio de Carichi, Estado de Chihuahua, el cual cuenta con las siguientes colindancias:

AL NORTE CON: Predio "El Manzano" o "Lozano y Carrillo"

AL SUR CON: Ejido "Panalachi"

AL ESTE CON: Ejido "Panalachi"

AL OESTE CON: Ejido "Panalachi", predio "El Manzano" o "Lozano y Carrillo"

Por lo que, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 160 de la Ley Agraria y 108 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, deberá publicarse por una sola vez en el **Diario Oficial de la Federación**, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, el periódico de información local de mayor circulación en la región, así como colocarse en los parajes más cercanos al mismo terreno, con el objeto de comunicar a las personas que se sientan afectadas en sus derechos por la realización de los trabajos de deslinde, a fin de que dentro del plazo de 30 días hábiles, a partir de la publicación del presente Aviso en el **Diario Oficial de la Federación**, ocurran ante el suscrito para exponer lo que a sus derechos convenga, así como para presentar la documentación que fundamente su dicho. Para tal fin se encuentra a la vista de cualquier interesado el croquis correspondiente en las oficinas que ocupa la Representación Regional, con domicilio en avenida Tecnológico número 1701, colonia Santo Niño de la ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua.

A las personas que no presenten sus documentos dentro del plazo señalado, o que habiendo sido notificadas a presenciar el deslinde no ocurran al mismo, se les tendrá como conformes con sus resultados.

Atentamente

Chihuahua, Chih., a 18 de enero de 2000.- El Perito, **Andrés H. Carrillo Chacón**.- Rúbrica.

BANCO DE MEXICO

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley del Banco de México; en los artículos 8o. y 10o. del Reglamento Interior del Banco de México, y en los términos del numeral 1.2 de las Disposiciones Aplicables a la Determinación del Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones Denominadas en Moneda Extranjera

Pagaderas en la República Mexicana, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 22 de marzo de 1996, el Banco de México informa que el tipo de cambio citado obtenido el día de hoy conforme al procedimiento establecido en el numeral 1 de las Disposiciones mencionadas, fue de $9.3918 M.N. (NUEVE PESOS CON TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO DIEZMILESIMOS MONEDA NACIONAL) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente
México, D.F., a 11 de abril de 2000.
BANCO DE MEXICO

Gerente de Inversiones y Cambios Nacionales	Director de Disposiciones de Banca Central
Javier Duclaud González de Castilla	**Héctor Tinoco Jaramillo**
Rúbrica.	Rúbrica.

TASAS de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASAS DE INTERES DE INSTRUMENTOS DE CAPTACION BANCARIA EN MONEDA NACIONAL

	TASA BRUTA		**TASA BRUTA**
I. DEPOSITOS A PLAZO FIJO		II. PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	
A 60 días		A 28 días	
Personas físicas	7.56	Personas físicas	7.63
Personas morales	7.56	Personas morales	7.63
A 90 días		A 91 días	
Personas físicas	7.65	Personas físicas	8.05
Personas morales	7.65	Personas morales	8.05
A 180 días		A 182 días	
Personas físicas	8.17	Personas físicas	8.91
Personas morales	8.17	Personas morales	8.91

Las tasas a que se refiere esta publicación, corresponden al promedio de las determinadas por las instituciones de crédito para la captación de recursos del público en general a la apertura del día 11 de abril de 2000. Se expresan en por ciento anual y se dan a conocer para los efectos a que se refiere la publicación de este Banco de México en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha 11 de abril de 1989.

México, D.F., a 11 de abril de 2000.
BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones de Banca Central	Director de Información del Sistema Financiero
Héctor Tinoco Jaramillo	**Cuauhtémoc Montes Campos**
Rúbrica.	Rúbrica.

TASA de interés interbancaria de equilibrio.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO

Según resolución del Banco de México publicada en el **Diario Oficial de la Federación** del 23 de marzo de 1995, y de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Circular 2019/95, modificada mediante Circular-Telefax 4/97 del propio Banco del 9 de enero de 1997, dirigida a las instituciones de banca múltiple, se informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, obtenida el día de hoy, fue de 14.4900 por ciento.

La tasa de interés citada se calculó con base a las cotizaciones presentadas por: Bancomer S.A., Banca Serfin S.A., Banco Santander Mexicano S.A., Banco Internacional S.A., Banco Nacional de México S.A., Citibank México S.A., Chase Manhattan Bank México S.A., ING Bank México, S.A., Banco J.P.Morgan S.A., Banco Inverlat S.A., Banca Cremi S.A., y Bancrecer S.A.

México, D.F., a 11 de abril de 2000.
BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones	Gerente de Mercado

de Banca Central	de Valores
Héctor Tinoco Jaramillo	**Jaime Cortina Morfin**
Rúbrica.	Rúbrica.

COSTO de captación de los pasivos a plazo denominados en dólares de los EE.UU.A. (CCP-Dólares).

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

COSTO DE CAPTACION DE LOS PASIVOS A PLAZO DENOMINADOS EN DOLARES DE LOS EE.UU.A. (CCP-Dólares)

Según resolución del Banco de México publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el día 6 de mayo de 1996, el costo de captación de los pasivos a plazo denominados en dólares de los EE.UU.A. (CCP-Dólares), expresado en por ciento anual, de las instituciones de banca múltiple del país, fue de 6.71 (seis puntos y setenta y un centésimas) en el mes de marzo de 2000.

México, D.F., a 11 de abril de 2000.

BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones de Banca Central	Director de Información del Sistema Financiero
Héctor Tinoco Jaramillo	**Cuauhtémoc Montes Campos**
Rúbrica.	Rúbrica.

INFORMACION semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 7 de abril de 2000.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 41 del Reglamento Interior del Banco de México, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 16 de marzo de 1995, se proporciona la:

INFORMACION SEMANAL RESUMIDA SOBRE LOS PRINCIPALES RENGLONES DEL ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO AL 7 DE ABRIL DE 2000.

(Cifras preliminares en millones de pesos)

ACTIVO	
Reserva Internacional 1/	317,067
Crédito al Gobierno Federal	0
Valores Gubernamentales 2/	0
Crédito a Intermediarios Financieros y Deudores por Reporto 3/	69,285
Crédito a Organismos Públicos	66,186
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Fondo Monetario Internacional	36,176
Base Monetaria	151,808
Billetes y Monedas en Circulación	151,808
Depósitos Bancarios en Cuenta Corriente 4/	0
Depósitos en Cuenta Corriente del Gobierno Federal	97,812
Depósitos de Regulación Monetaria	121,723
Otros Pasivos y Capital Contable 5/	45,019

1/ Según se define en el Artículo 19 de la Ley del Banco de México.

2/ Neto de depósitos de regulación monetaria.- No se consideran los valores afectos a la reserva para cubrir obligaciones de carácter laboral.- En caso de saldo neto acreedor, éste se presenta en el rubro de Depósitos de Regulación Monetaria.

3/ Incluye banca comercial, banca de desarrollo, fideicomisos de fomento y operaciones de reporto con casas de bolsa.

4/ Se consigna el saldo neto acreedor del conjunto de dichas cuentas, en caso de saldo neto deudor éste se incluye en el rubro de crédito a intermediarios financieros y deudores por reporto.

5/ Neto de otros activos.

México, D.F., a 11 de abril de 2000.

BANCO DE MEXICO

Director de Contabilidad

Gerardo Zúñiga Villarce

Rúbrica.

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 431/93, relativo a la dotación de tierras, promovido por campesinos del poblado Las Lagunitas, Municipio de Galeana, N.L.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 431/93, que corresponde al expediente 1660, relativo a la solicitud de dotación de tierras, promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado "Las Lagunitas", ubicado en el Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Mediante escrito de nueve de enero de mil novecientos ochenta y cinco, un grupo de campesinos del poblado de que se trata solicitó al Gobernador del Estado de Nuevo León, dotación de tierras para satisfacer sus necesidades agrarias, señalando como de probable afectación el predio denominado "Santa Clara de González", así como los predios que resultaran afectables dentro del radio legal.

SEGUNDO.- La Comisión Agraria Mixta en el Estado de Nuevo León, previamente a la instauración del procedimiento respectivo, mediante oficio número 21, del siete de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, designó al ingeniero Rafael de Luna Rodríguez para que investigara la capacidad individual y colectiva del grupo promovente, quien rindió su informe el catorce de diciembre del mismo año, en el cual indica que se trasladó al poblado "Las Lagunitas" ubicado en terrenos de la "Exhacienda Santa Clara de González" y que censó a treinta y siete campesinos, sin señalar el número de capacitados.

El Comisionado anexó a su informe el oficio de veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, signado tanto por el Presidente Municipal como por el Secretario del Ayuntamiento de Galeana, Nuevo León, en el que se hace constar la existencia del poblado en mención y que éste tiene una antigüedad de más de cinco años.

TERCERO.- El mencionado órgano colegiado, instauró el procedimiento respectivo el trece de marzo de mil novecientos ochenta y siete, registrando el expediente bajo el número 1660.

La publicación de la solicitud se efectuó en la misma fecha, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León, bajo el número 31, tomo CXXIV.

CUARTO.- El Comité Particular Ejecutivo quedó integrado por Pedro Luna Delgado, Mariano Tuich Oviedo y José Oviedo Mendoza, como presidente, secretario y vocal, respectivamente, a quienes el Gobernador del Estado, les expidió sus nombramientos correspondientes, el trece de marzo de mil novecientos ochenta y siete.

QUINTO.- Por oficio 287 del trece de marzo de mil novecientos ochenta y siete, la Comisión Agraria Mixta instruyó al ingeniero Alejandro Luna González, para comprobar la capacidad agraria de los solicitantes y practicar los trabajos técnicos e informativos, quien rindió su informe el quince de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, indicando que resultaron treinta y cinco capacitados, asimismo que poseen cincuenta cabezas de ganado mayor y ciento cuarenta y uno de ganado menor.

Respecto de los trabajos técnicos e informativos, el comisionado manifestó que de acuerdo a la inspección practicada, dentro del radio legal de afectación del poblado de que se trata, se localizaron los ejidos denominados: "Santa Clara de González", "Pablillo", con su respectiva ampliación, "San Pablo de Raíces", "El Tepozán" con su respectiva ampliación, y "San Pablo de Tranquitas", diversos predios de propiedad particular con superficies que fluctúan entre 2-27-13 (dos hectáreas, veintisiete áreas, trece centiáreas) y 52-00-00 (cincuenta y dos hectáreas) de temporal, en explotación agrícola por sus propietarios, con cultivos de maíz y frijol y entre 51-23-77 (cincuenta y una hectáreas, veintitrés áreas, setenta y siete centiáreas) y 500-00-00 (quinientas hectáreas) de agostadero en su mayor parte, con porciones susceptibles de cultivo en menor escala, mismos que se encontraron en explotación ganadera por sus propietarios, conforme al coeficiente de agostadero fijado a nivel regional de 1-89-00 (una hectárea, ochenta y nueve centiáreas), por cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, y en explotación agrícola en las porciones susceptibles de cultivo, de los que por su superficie cabe destacar los que se detallan a continuación:

1.- Predio "Los Amoles", con superficie de 100-00-00 (cien hectáreas), de las cuales 10-00-00 (diez hectáreas) son de temporal y las demás de agostadero, propiedad de María Mendoza Vázquez de Díaz, según inscripción número 8, volumen 36, libro primero, sección inmobiliaria, del veintiuno de enero de mil novecientos setenta y cinco.

2.- Predio "Las Luz", con superficie de 500-00-00 (quinientas hectáreas), de las cuales 10-00-00 (diez hectáreas) son de temporal y las demás de agostadero, propiedad de José de Jesús Mendoza M., según inscripción número 152, libro índice de la Pequeña Propiedad, tomo XIV, foja 81 del dos de febrero de mil novecientos ochenta y uno.

3.- Predio "La Piedra", con superficie de 210-00-00 (doscientas diez hectáreas), de las cuales 14-00-00 (catorce hectáreas) son de temporal y las demás de agostadero, propiedad de Gregorio Oviedo R., según

inscripción número 139, volumen 4-6, foja 71, libro segundo, sección índice de la pequeña propiedad, del cuatro de febrero de mil novecientos siete.

4.- Predio "Potrero de Arriba", con superficie de 2-27-13 (dos hectáreas, veintisiete áreas, trece centiáreas) de temporal, propiedad de José de Jesús Miranda Vallejo, según inscripción número 101, volumen XVIII, de dos de mayo de mil novecientos cuarenta y dos.

5.- Predio "La Piedra", con superficie de 107-50-00 (ciento siete hectáreas, cincuenta áreas), de las cuales 5-00-00 (cinco hectáreas) son de temporal y las demás de agostadero, propiedad de Felipe Oviedo de la Fuente, según inscripción número 136, volumen 4-6, foja 71, libro segundo, sección índice de la pequeña propiedad, del cuatro de febrero de mil novecientos siete.

6.- Predio "Lote número 1", con superficie de 53-07-90 (cincuenta y tres hectáreas, siete áreas, noventa centiáreas), de las cuales 3-00-00 (tres hectáreas) son de temporal y las demás de agostadero, propiedad de José Miranda López, según escritura número 262, libro segundo, sección primera, tomo XXIX, del siete de febrero de mil novecientos sesenta y tres.

7.- Predio "Lote número 2" o "El Desmonte", con superficie de 52-00-00 (cincuenta y dos hectáreas) de temporal, propiedad de Moisés Rodríguez Miranda, según escritura número 23, volumen VII, libro I, sección resoluciones judiciales y administrativas del treinta de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.

8.- Predio "Lote número 3", con superficie de 51-23-77 (cincuenta y una hectáreas, veintitrés áreas, setenta y siete centiáreas), de las cuales 2-00-00 (dos hectáreas) son de temporal y las demás de agostadero, propiedad de José Guadalupe Pedroza Vázquez, según escritura número 215, libro segundo, tomo XXI, del quince de noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.

9.- Predio "Lote número 4", con superficie de 51-23-77 (cincuenta y una hectáreas, veintitrés áreas, setenta y siete centiáreas) de agostadero, propiedad de Raquel Herrera de León, según escritura número 2, volumen 41, libro segundo, sección inmobiliaria, del nueve de julio de mil novecientos ochenta.

10.- Predio "Fracción de lote número 7" y "Potreros de Arriba y Abajo", con superficie de 344-27-13 (trescientas cuarenta y cuatro hectáreas, veintisiete áreas, trece centiáreas), de las cuales 2-27-13 (dos hectáreas, veintisiete áreas, trece centiáreas) son de temporal y las demás de agostadero, propiedad de Guillermo L. Miranda, según escritura número 101, tomo 18, del dos de mayo de mil novecientos cuarenta y dos y número 9, volumen II libro 16, sección IV del diecinueve de julio de mil novecientos ochenta y cinco.

11.- Predio "Lote número 5 y número 6", con superficie de 102-47-54 (ciento dos hectáreas, cuarenta y siete áreas, cincuenta y cuatro centiáreas) de agostadero, propiedad de Eugenio Miranda Vallejo, según escritura número 69, tomo XVII del treinta y uno de marzo de mil novecientos treinta y nueve y 517 del índice de la pequeña propiedad libro segundo, tomo XX del veintitrés de abril de mil novecientos cincuenta y dos.

12.- Predio "Lote número 7", con superficie de 63-96-02 (sesenta y tres hectáreas, noventa y seis áreas, dos centiáreas), de las cuales 3-00-00 (tres hectáreas) son de temporal y las demás de agostadero, propiedad de José Luis Rodríguez Miranda, según escritura número 30, volumen 36, libro primero, sección inmobiliaria del diecisiete de abril de mil novecientos setenta y cinco.

13.- Predio "Lote número 3" con superficie de 51-23-77 (cincuenta y una hectáreas, veintitrés áreas, setenta y siete centiáreas) de las que 2-00-00 son de temporal y el resto de agostadero en terrenos áridos, propiedad de José Guadalupe Pedroza Vázquez, según inscripción 215, libro 2o. tomo XIX de quince de noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.

14.- Predio "Los Potreros de Arriba", con superficie de 51-23-77 (cincuenta y una hectáreas, veintitrés áreas, setenta y siete centiáreas) de las cuales 18-00-00 (dieciocho hectáreas) son de temporal y las demás de agostadero, propiedad de María del Carmen Gaytán Delgado, según escritura número 86, tomo XX, del cuatro de noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho.

Respecto al predio denominado "Exhacienda Santa Clara de González", señalado por los solicitantes como de probable afectación, se desprende que fue fraccionado y vendido en la siguiente forma:

1) Rodolfo Arroyo Llano, adquirió 630-95-10 (seiscientas treinta hectáreas, noventa y cinco áreas, diez centiáreas), según escritura registrada bajo el número 38, folio 43, volumen 22-23, libro segundo, sección índice de la pequeña propiedad, del siete de mayo de mil novecientos cincuenta y tres, persona que también adquirió 100-00 (cien hectáreas) por venta que le hizo Horacio González Arroyo, según escritura registrada bajo el número 896, folio 88, volumen 27, libro segundo, sección índice de la pequeña propiedad del dieciocho de julio de mil novecientos cincuenta y nueve; por lo que en suma es propietario de 730-95-10 (setecientas treinta hectáreas, noventa y cinco áreas, diez centiáreas).

2) Ana María Arroyo Llano, adquirió 651-95-10 (seiscientas cincuenta y una hectáreas, noventa y cinco áreas, diez centiáreas), según escritura registrada bajo el numero 41, folio 46, volumen 22-23, libro segundo, sección índice de la pequeña propiedad, del siete de mayo de mil novecientos cincuenta y tres, misma que enajenó diversas fracciones, quedándose con una superficie de 351-95-10 (trescientas cincuenta y una hectáreas, noventa y cinco áreas, diez centiáreas).

A.- Rodolfo González Garza, adquirió 100-00-00 (cien hectáreas), según escritura registrada bajo el número 3, folio 2, volumen 28, libro segundo, de la pequeña propiedad del ocho de enero de mil novecientos sesenta.

B.- Lucía Sada Sambrano, adquirió 100-00-00 (cien hectáreas), según escritura registrada bajo el número 4, folio 2, volumen 28, libro segundo de la pequeña propiedad del ocho de enero de mil novecientos sesenta, y a su vez vendió esta superficie a Pablo González Sada, actual propietario, según escritura registrada bajo el número 22, volumen 45, libro segundo, de la sección inmobiliaria veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro.

C.- Alicia Margarita Tamez de González, adquirió 100-00-00 (cien hectáreas), según escritura registrada bajo el número 5, folio 3, volumen 28, libro segundo, de la pequeña propiedad del ocho de enero de mil novecientos sesenta, quien a su vez vendió esta superficie a Tomás Roberto González Sada, actual propietario, según escritura registrada bajo el número 2, volumen 45, libro segundo, sección inmobiliaria de veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro.

3) Leandro Arroyo Llano, adquirió 650-95-10 (seiscientas cincuenta hectáreas, noventa y cinco áreas, diez centiáreas), según escritura registrada bajo el número 39, folio 44, volumen 22-23, libro segundo, sección índice de la pequeña propiedad, del siete de mayo de mil novecientos cincuenta y tres.

4) Javier González Arroyo, adquirió 650-95-10 (seiscientas cincuenta hectáreas, noventa y cinco áreas, diez centiáreas), según escritura registrada bajo el número 43, folio 49, volumen 22-23, libro segundo, sección índice de la pequeña propiedad, del siete de mayo de mil novecientos cincuenta y tres.

5) Horacio González Arroyo, adquirió 650-95-10 (seiscientas cincuenta hectáreas, noventa y cinco áreas, diez centiáreas), según escritura registrada bajo el número 42, folio 47, volumen 22-23, libro segundo, sección índice de la pequeña propiedad, del siete de mayo de mil novecientos cincuenta y tres, quien vendió 100-00-00 (cien hectáreas) a Rodolfo Arroyo Llano, según escritura registrada bajo el numero 896, folio 88, volumen 27, libro segundo, índice de la pequeña propiedad de dieciocho de julio de mil novecientos cincuenta y nueve; quedándole a Horacio González Arroyo, una superficie de 550-95-00 (quinientas cincuenta hectáreas, noventa y cinco áreas).

6) Emma Cristina González Arroyo, adquirió 650-95-10 (seiscientas cincuenta hectáreas, noventa y cinco áreas, diez centiáreas), según escritura registrada bajo el número 40, folio 45, volumen 22-23, libro segundo, sección índice de la pequeña propiedad, del siete de mayo de mil novecientos cincuenta y tres.

Señala el comisionado, que al efectuar la inspección ocular en las fracciones del predio "Santa Clara de González" o "Los Pinos", se encontraron abandonadas e inexplotadas por sus propietarios por más de dos años consecutivos, ya que no se encontraron signos ni vestigios de cultivos, infraestructura, ni de explotación agrícola o ganadera, y no son poseídos por sus propietarios, ya que quienes usufructúan la superficie son campesinos del poblado "Las Lagunitas", anteriormente conocido como "Las Enramadas", y del poblado "Santa Clara de González" del mismo municipio y estado.

De la superficie total, los campesinos del poblado que nos ocupa, usufructúan una superficie de 1,879-02-42.44 (mil ochocientas setenta y nueve hectáreas, dos áreas, cuarenta y dos centiáreas, cuarenta y cuatro miliáreas) de agostadero en terrenos áridos y el resto de la superficie se encuentra en posesión y en estudio para la ampliación del poblado "Santa Clara de González" del mismo municipio y estado.

Se anexan al informe, las actas circunstanciadas de explotación, levantadas el nueve, diez, once, dieciséis y dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, con motivo de las diligencias de inspección ocular practicadas en los predios antes detallados, así como el acta de inexplotación levantada el ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, relativa a la inspección ocular practicada en el predio denominado "Exhacienda Santa Clara de González" o "Los Pinos", por el comisionado en compañía del Alcalde Segundo Judicial del Municipio de Galeana, Nuevo León, y de los miembros del Comité Particular Ejecutivo del poblado solicitante.

SEXTO.- En sesión de dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y nueve, la Comisión Agraria Mixta en el Estado, aprobó dictamen positivo, proponiendo conceder al núcleo de que se trata, una superficie total de 1,879-02-42.44 (mil ochocientas setenta y nueve hectáreas, dos áreas, cuarenta y dos centiáreas, cuarenta y cuatro miliáreas) clasificadas como de agostadero en terrenos áridos, que se tomarían de la "Exhacienda Santa Clara de González".

SEPTIMO.- El anterior dictamen fue sometido a la consideración del Gobernador del Estado de Nuevo León, quien dictó su mandamiento el treinta de junio de mil novecientos ochenta y nueve, confirmando en todos sus términos el dictamen positivo, emitido por la Comisión Agraria Mixta, concediéndose al grupo solicitante una superficie total de 1,879-02-42.44 (mil ochocientas setenta y nueve hectáreas, dos áreas, cuarenta y dos centiáreas, cuarenta y dos centiáreas, cuarenta y cuatro miliáreas) de agostadero en terrenos áridos de las fracciones del predio "Exhacienda Santa Clara de González", propiedad de Rodolfo Arroyo Llano, Ana María Arroyo Llano, Leandro Arroyo Llano, Javier González Arroyo, Horacio González Arroyo, Emma Cristina González Arroyo, Rodolfo Rodríguez Garza, Pablo González Sada y Tomás Roberto González Sada.

OCTAVO.- Mediante escrito del veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y nueve, el propietario Javier González Arroyo, se hizo sabedor del procedimiento agrario que nos ocupa, señalando que su propiedad es remanente del reparto agrario que se efectúo de la "Exhacienda Santa Clara de González" y que el poblado de referencia no aprovecha en su totalidad la superficie concedida en forma provisional.

NOVENO.- Mediante oficio 500 del veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, la Comisión Agraria Mixta instruyó al ingeniero Juan Manuel Ramos Reyes para la ejecución del mandamiento gubernamental, quien dio cumplimiento al fallo provisional, levantando el acta respectiva el treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, de ejecución del Mandamiento Gubernamental y acta de posesión y deslinde de la dotación. Asentándose que se entregó una superficie de 1,869-02-42.44 (mil ochocientas sesenta y nueve hectáreas, dos áreas, cuarenta y dos centiáreas, cuarenta y cuatro miliáreas).

DECIMO.- Por escrito de nueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, Javier González Arroyo, expresó que sus propiedades están inscritas en el Registro Público de la Propiedad.

DECIMO PRIMERO.- El mandamiento gubernamental fue publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León, el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y uno, en el ejemplar 152, tomo CXXVIII.

DECIMO SEGUNDO.- Mediante escrito del cuatro de julio de mil novecientos noventa y dos, el grupo solicitante se dirigió al Delegado Agrario en el Estado, para que se realizara la investigación respecto de la superficie de terreno que se le entregó provisionalmente en cumplimiento al mandamiento gubernamental.

En virtud de lo antes expuesto, el ocho de julio de mil novecientos noventa y dos, el comisionado Tiburcio García Guerrero, ante los integrantes del Comisariado Ejidal y dos testigos de asistencia, practicó inspección ocular en la cual se asienta que el predio denominado "Exhacienda Santa Clara de González", consta de una superficie real analítica de 3,539-16-71.67 (tres mil quinientas treinta y nueve hectáreas, dieciséis áreas, setenta y una centiáreas, sesenta y siete miliáreas) de agostadero, de las cuales, previo levantamiento topográfico, se determinó que una superficie de 1,868-92-69.67 (mil ochocientas sesenta y ocho hectáreas, noventa y dos áreas, sesenta y nueve centiáreas, sesenta y siete miliáreas), están en posesión y usufructo del grupo promovente y 1,670-24-02 (mil seiscientas setenta hectáreas, veinticuatro áreas, dos centiáreas), están en posesión del poblado "Santa Clara de González", ambos del Municipio de Galeana, Nuevo León. Y que en la actualidad cada poblado sigue poseyendo las superficies anotadas, sin que exista oposición alguna.

DECIMO TERCERO.- Mediante escrito del veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y dos, Javier González Arroyo compareció al procedimiento, presentando en fotocopia simple los siguientes documentos:

1.- Informe de inspección ocular de brechas de diecisiete de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, rendido por Osvaldo Alí Bañales O., en cual se asienta que fueron talados diversos árboles para construir brechas de deslinde de los ejidos "Las Lagunitas" y "Santa Clara de González".

2.- Oficio 169.14-0126, del veinte de enero de mil novecientos ochenta y seis, girado por el Delegado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con residencia en Monterrey, Nuevo León por el cual se comunica a Teodoro García Terán que se suspendieron los trabajos para el estudio dasanómico en virtud de no existir apoyo por parte de las personas por él propuestas para realizar el recorrido por los linderos, ya que el personal técnico no los conoce, sin mencionarse a qué predios se refiere.

3.- Escrito del veintiocho de julio de mil novecientos noventa y dos, suscrito por el Gerente General de Bancomer, Sociedad Anónima, por el cual se comunica al oferente la documentación que se requiere para la celebración del contrato de fideicomiso sobre varios predios ubicados en el Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, sin mencionarse a qué predios se refiere.

DECIMO CUARTO.- El Delegado Agrario, mediante oficio 3595 del ocho de octubre de mil novecientos noventa y dos, designó al ingeniero José Rodríguez Hernández, a efecto de que procediera la investigación correspondiente en cuanto a la debida integración del expediente, quien informó el treinta del citado mes y año, que el procedimiento fue correcto, ya que el polígono que se dotó al núcleo de población está rodeado de los ejidos "San Pablo de Tranquitas", "La Poza", "Santa Clara de González", "Pablillo", "San Antonio", "Tepozán", "San Pablo de Raíces", "La Primavera", así como de que existen los predios de propiedad particular, mismos que se detallaron en el resultando quinto de esta sentencia, que están en explotación y debidamente delimitados; también informa que en el estudio del expediente de ampliación relativo al poblado "Santa Clara de González", se percató que el radio legal de afectación de estos dos poblados abarca las mismas propiedades y pudo observar que existen documentos que acreditan la propiedad de cada predio, constatando de esta forma los datos contenidos en la inspección ocular ya practicada; asimismo se llevó a cabo el levantamiento topográfico del polígono que se dotó provisionalmente al núcleo promovente, cuya superficie fue de 1,868-92-69.67 (mil ochocientas sesenta y ocho hectáreas, noventa y dos áreas, sesenta y nueve centiáreas, sesenta y siete miliáreas).

Anexando a su informe el acta de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y dos.

De igual forma, rindió informe complementario el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, del que se desprende que la superficie registral en conjunto de las fracciones del predio "Exhacienda Santa

Clara de González", es de 3,886-70-60 (tres mil ochocientas ochenta y seis hectáreas, setenta áreas, sesenta centiáreas) y la real analítica es de 3,539-16-71.67 (tres mil quinientas treinta y nueve hectáreas, dieciséis áreas, setenta y una centiáreas, sesenta y siete miliáreas), de las que 1,868-92-69.67 (mil ochocientas sesenta y ocho hectáreas, noventa y dos áreas, sesenta y nueve centiáreas, sesenta y siete miliáreas), están en posesión del grupo promovente de la presente acción agraria y 1,670-24-02 (mil seiscientas setenta hectáreas, veinticuatro áreas, dos centiáreas) están en posesión y explotación del núcleo denominado "Santa Clara de González" del mismo municipio y estado.

DECIMO QUINTO.- Por su parte, el Delegado Agrario en la entidad federativa, el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, formuló su resumen y opinión en sentido positivo, modificando el mandamiento del gobernador, en cuanto a la superficie y sujeto de afectación, confirmando la calidad de la tierra y distribución de la misma, considerando procedente conceder al grupo solicitante por concepto de dotación de tierras una superficie de 1,868-92-69.67 (mil ochocientas sesenta y ocho hectáreas, noventa y dos áreas, sesenta y nueve centiáreas, sesenta y siete miliáreas), afectando el predio denominado "Santa Clara de González".

DECIMO SEXTO.- El Cuerpo Consultivo Agrario en sesión plenaria celebrada el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y dos, aprobó dictamen en sentido positivo.

DECIMO SEPTIMO.- Por auto de dieciséis de abril de mil novecientos noventa y tres, se tuvo por radicado el presente expediente en este Tribunal Superior Agrario, para su resolución correspondiente, registrándose bajo el número 431/93; habiendo notificado a los interesados y comunicado a la Procuraduría Agraria.

DECIMO OCTAVO.- El Tribunal Superior Agrario, para mejor proveer en el juicio de que se trata, aprobó un acuerdo el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y tres, ordenando que se notificara personalmente en términos de ley, el procedimiento de dotación de tierras a los propietarios de las fracciones del predio denominado "Exhacienda Santa Clara de González", propuesto para su afectación, haciendo de su conocimiento dicha circunstancia, a fin de que concurrieran a este Tribunal para que aportaran las pruebas y alegatos que estimaran pertinentes en defensa de sus intereses, contando para ello con un plazo de cuarenta y cinco días a partir del día siguiente en que surtiera efecto la notificación correspondiente, toda vez que de autos se advirtió que éstos no fueron notificados, siendo los siguientes: doctor Rodolfo Arroyo Llano, Ana María Arroyo Llano, Leandro Arroyo Llano, Horacio González Arroyo, Emma Cristina González Arroyo, Rodolfo González Garza, Pablo González Sada y Tomás Roberto González Sada, propietarios de las fracciones del predio denominado Santa Clara de González, en el Municipio de Galeana, Nuevo León.

El Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 20, con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en auxilio de este Tribunal Superior, una vez cumplimentado el despacho relativo al acuerdo de mérito, lo devolvió debidamente integrado, en el cual se aprecia que se efectuaron las notificaciones ordenadas los días 11, 15, 16 y 22 de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.

Los propietarios Emma Cristina González Arroyo, Javier González Arroyo en su carácter de apoderado de Adela Arroyo Llano de González, albacea de la sucesión a bienes de la propietaria Ana María Arroyo Llano; Javier González Arroyo en su carácter de apoderado de Martha Ferreigno Garza viuda de Arroyo, albacea de la sucesión a bienes de Leandro Arroyo Llano, Javier González Arroyo en su carácter de apoderado de Rodolfo Arroyo Llano; Javier González Arroyo por su propio derecho; Horacio González Arroyo, por su propio derecho; Rodolfo González Garza, Tomás Roberto González Sada y Pablo González Sada, presentaron sus pruebas y alegatos.

DECIMO NOVENO.- Emma Cristina González Arroyo, Horacio González Arroyo, Javier González Arroyo por su propio derecho, Javier González Arroyo en su carácter de apoderado de Rodolfo Arroyo Llano, Javier González Arroyo en su carácter de apoderado de Adela Arroyo Llano de González, albacea de la sucesión a bienes de Ana María Arroyo Llano, Javier González Arroyo, apoderado de Martha Ferreigno Garza viuda de Arroyo, albacea de la sucesión de bienes de Leandro Arroyo Llano, exhibieron las siguientes documentales en copia fotostática:

1.- Certificaciones expedidas por el Registro Público de la Propiedad en las que se hacen constar que se encuentran inscritas las escrituras de compraventa relativas a los predios rústicos de la Exhacienda Santa Clara de González, Municipio de Galeana, Nuevo León, propiedad de los promoventes y sus representados, así como certificados de libertad de gravámenes.

2.- Contratos de compraventa celebrados por los oferentes y sus representados respecto de las fracciones de su propiedad.

3.- Tres relaciones de municipios y localidades.

4.- Boletas prediales a nombre de los propietarios que amparan el pago de impuesto predial.

5.- Plano proyecto del fraccionamiento del predio "Los Pinos" ("Exhacienda Santa Clara de González"), Galeana, Nuevo León, señalando que este predio se fraccionó legalmente en los años de mil novecientos treinta y nueve, mil novecientos cincuenta y nueve y mil novecientos sesenta, por lo que no es procedente considerar a esta propiedad, pro-indiviso.

6.- Citatorio del diez de febrero de mil novecientos setenta y dos, dirigido a Victoriano Pedroza Coronado y José Plata Oviedo, en el cual se indica como asunto la desocupación de los terrenos invadidos y que son propiedad de Humberto González y otros propietarios.

7.- Escritos del veintiocho de julio de mil novecientos ochenta y dos, siete de enero de mil novecientos ochenta y tres y veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y cinco, por medio de los cuales solicitan al jefe del Programa Forestal en el Estado de Nuevo León, los estudios y autorizaciones para la explotación maderable en los predios de su propiedad.

8.- Emma Cristina González Arroyo exhibió además **a)** Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León de treinta de enero de mil novecientos ochenta y siete, en el que se publica la ampliación de ejido para el poblado Santa Clara de González, Galeana, Nuevo León; **b)** Fotocopia simple del informe sobre la inspección ocular de brechas de deslinde, del veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y nueve, rendido por el ingeniero Jesús A. Ponda Romo y el topógrafo Nahúl Mata Guajardo, en "Las Lagunitas", "Santa Clara de González", "Rincón de San Antonio" y "Exhacienda Santa Clara de González", Galeana, Nuevo León, en que el cual se asienta que se derribaron noventa y ocho árboles maderables para efectuar brechas de 4.00 metros para marcar la división de los predios de los ejidos de "Las Lagunitas" y "Santa Clara de González", lo cual fue solicitado por los ejidatarios a la Comisión Agraria Mixta, sin haberse obtenido la autorización de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

9.- Javier González Arroyo, en lo personal, exhibió además, en fotocopia simple: **a)** escrito del quince de abril de mil novecientos ochenta y cinco, suscrito por el Director de la Facultad de Agronomía de la Facultad Autónoma de Nuevo León, por el cual le solicitan al oferente de manera temporal una área de mil doscientos metros para realizar estudios sobre cultivos de sorgo. **b)**.- Escrito del veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, signado por el Director del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, dirigido al oferente, por el cual le agradecen su ofrecimiento de dar en donación el predio de su propiedad, pero que por el momento no pueden efectuar la labor de desarrollo planteada.

VIGESIMO.- Por su parte, los propietarios Rodolfo González Garza, Tomás Roberto González Sada y Pablo González Sada, exhibieron como pruebas tres certificados de libertad de gravámenes relativos a los siguientes predios:

A) Propiedad inscrita a favor de Pablo E. González Sada, bajo el número 22, volumen 45, libro segundo, sección inmobiliaria, del veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, consistente en el lote 4, con superficie de 100-00-00 (cien hectáreas) del fraccionamiento "Los Pinos", ubicado en la exhacienda Santa Clara de González, Galeana, Nuevo León.

B) Propiedad inscrita en favor de Tomás Roberto González Sada, bajo el número 2, volumen 45, libro segundo sección inmobiliaria del veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, consistente en el lote 6, con superficie de 130-95-00 (ciento treinta hectáreas, noventa y cinco áreas), ubicado en el mismo fraccionamiento.

C) Propiedad inscrita a favor de Rodolfo González Garza, bajo el número 3, folio 2, volumen 28, libro segundo subsección b, de la pequeña propiedad, del ocho de enero de mil novecientos sesenta, consistente en el lote 5, con superficie de 100-00-00 (cien hectáreas), del mismo fraccionamiento.

Asimismo, los propietarios ofrecieron como pruebas:

A) La inspección ocular, dándose fe de la existencia o inexistencia del poblado "Las Lagunitas", con la expresión del número de casas o parcelas que se encuentran inmediatas al poblado, parcelas que se encuentran en el poblado, la identificación de las personas que se presenten como pobladores y residentes de dicho lugar y si las tierras inmediatas al poblado se encuentran en explotación.

B) El informe del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, sobre la existencia o no del poblado en comento, que deberá rendir a solicitud del Tribunal Superior Agrario.

En cuanto a los alegatos, los propietarios Emma Cristina González Arroyo, Horacio González Arroyo, Javier González Arroyo por su propio derecho, Javier González Arroyo como apoderado de Rodolfo Arroyo Llano, Javier González Arroyo en su carácter de apoderado de Adela Arroyo Llano de González, albacea de la asociación a bienes de la propietaria Ana María Arroyo Llano; Javier González Arroyo, en su carácter de apoderado de Martha Ferreigno Garza viuda de Arroyo, albacea de la sucesión a bienes de Leandro Arroyo Llano; Rodolfo González Garza, Tomás Roberto González Sada y Pablo González Sada, manifestaron su oposición a la afectación agraria de los predios de su propiedad, para la dotación en favor del supuesto poblado "Las Lagunitas", toda vez que es la única propiedad con la que cuenta cada uno de los ocursantes, y se encuentran dentro de los límites de la pequeña propiedad además de que se encuentran debidamente limitados, por lo que resulta contrario a la realidad considerar a esos inmuebles como propiedad pro-indiviso, ya que dejaron de existir como tal, hace muchos años, al llevarse a cabo la notificación posterior a la celebración de las operaciones de compraventa; además de que se debe dar fe de la existencia o no del núcleo de población, asimismo se haga constar la capacidad económica de cada uno de ellos. Reiterando que la "Exhacienda Santa Clara de González" se encuentra fraccionada legalmente desde mil novecientos cincuenta y tres.

VIGESIMO PRIMERO.- El Tribunal Superior Agrario, aprobó diverso acuerdo del cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, ordenando requerir a Javier González Arroyo para que exhibiera copia certificada íntegra del poder que le otorgó el doctor Rodolfo Arroyo Llano, así como a Martha Ferreigno Garza viuda de Arroyo y Adela Arroyo Llano de González, a efecto de que acreditaran el carácter de albacea de las sucesiones que dicen representar; así como para que el Tribunal Unitario Agrario de referencia, remitiera al superior el informe del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, respecto de la petición de los ocursantes.

En cumplimiento de lo anterior, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20, el trece de julio de mil novecientos noventa y cuatro, por oficio SA-616/94, devolvió al Tribunal Superior Agrario el despacho AC/199/94, debidamente diligenciado, toda vez que comparecieron por escrito Javier González Arroyo, Martha Ferreigno Garza viuda de Arroyo y Adela Arroyo Llano de González, quienes entregaron tres copias certificadas de poderes notariales, copia certificada del testamento y copia de la hijuela del doce de mayo de mil novecientos ochenta y uno, formulada ante la notaría pública número 27, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

VIGESIMO SEGUNDO.- El Tribunal Superior Agrario, por auto del diez de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, admitió las pruebas ofrecidas por los propietarios y se procedió al desahogo de las mismas, las cuales se detallan a continuación.

A) Inspección ocular, practicada por el actuario adscrito al Tribunal Unitario del Distrito 20 el trece de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, en la cual dio fe de que si existe el poblado "Las Lagunitas", localizado en el Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, el cual anteriormente se denominaba "Las Enramadas", así como de las construcciones destinadas a habitación, mismas que son ocupadas por los integrantes del núcleo de población de que se trata; detallándose las hectáreas cultivadas, con siembra de maíz; expresando en esta diligencia los integrantes del Comisariado Ejidal, que anteriormente se le denominó a este poblado "Las Enramadas", habiéndole cambiado el nombre por el de "Las Lagunitas".

B) Se solicitó y obtuvo informe mediante oficio 75.5/096/94, del doce de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, signado por la Directora Regional del Noreste del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, por el cual para dar contestación sobre la existencia o inexistencia del poblado "Las Lagunitas", remite documento estructurado por Municipio y Localidades, correspondiente al XI Censo General de Población y Vivienda 1990, en cuya página treinta y siete aparece el poblado "Las Enramadas" (actualmente "Las Lagunitas") del Municipio Galeana, en el Estado de Nuevo León.

De este modo quedaron desahogadas las pruebas ofrecidas.

De igual forma, el Tribunal Unitario Agrario de referencia, remitió a este Tribunal:

1.- Constancia expedida el 17 de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, por el síndico primero del H. Ayuntamiento de Galeana, Nuevo León, de la que se desprende que en "Las Lagunitas", existen treinta y cinco campesinos.

2.- Acta levantada el nueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, con motivo de la diligencia de inspección ocular practicada en los terrenos concedidos al poblado, por el alcalde segundo judicial de Galeana, Nuevo León, en compañía de dos testigos de asistencia, los integrantes del comisariado ejidal, y del Juez auxiliar, en la que se describen las superficies cultivadas con siembras de mango, así como se señala que se encontraron dos mil cabezas de ganado menor, trescientas cabezas de ganado mayor y cincuenta equinos.

3.- Documento que dice: "Censo General de Población del Ejido "Las Lagunitas", Municipio de Galeana, Nuevo León", en el que se relacionan los nombres de los solicitantes y otros más, con sellos del comisariado ejidal y de la presidencia municipal.

VIGESIMO TERCERO.- Finamente, por escrito de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y cuatro, Pedro Luna Delgado, Mariano Tienda Oviedo y José Oviedo Mendoza, integrantes del comisariado ejidal del grupo promovente, se dirigieron al Presidente del Tribunal Superior Agrario pidiendo se ratifique la resolución provisional del Gobierno del Estado de Nuevo León, ya que se encuentran radicando en el poblado desde mil novecientos cincuenta, el cual esta definido en la carta topográfica que exhiben, en donde consta que el poblado "Las Lagunitas" antes "Las Enramadas" sí existe, y porque han explotado totalmente las tierras con las que fueron beneficiados por el mandamiento gubernamental, anexando la siguiente documental:

1.- Constancia expedida por el Presidente Municipal de Galeana, Nuevo León, el dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, de la cual se desprende que en el poblado "Las Lagunitas" antes "Las Enramadas", existen treinta y cinco campesinos.

2.- Copia al carbón con firmas autógrafas del acta de inspección ocular practicada por el alcalde segundo judicial del municipio indicado, el nueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, en la superficie de terrenos concedida a los solicitantes, en la que se detalla las superficies cultivadas y el número de cabezas de ganado mayor encontradas.

3.- Constancia expedida el dieciocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, por el síndico primero del Ayuntamiento del indicado municipio, de la que se desprende que en "Las Lagunitas" de esa jurisdicción se encuentran treinta y cinco campesinos.

4.- Constancia expedida el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cuatro, por el Presidente de la Comisión Municipal Electoral de Galeana, Nuevo León, en la que se asienta que el poblado en comento se encuentra inscrito en la sección 341, del padrón electoral.

5.- Fotocopia de un documento que dice: "Censo General de Población" del poblado "Las Lagunitas" antes "Las Enramadas", Municipio de Galeana, Nuevo León", en la que se relacionan treinta y siete nombres de personas.

6.- Oficio signado por el Presidente Municipal de Galeana, Nuevo León el seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro, dirigido al representante personal del Presidente Municipal de ese municipio, por el cual se autoriza el uso de sello sólo para certificar documentos.

7.- Fotocopias de credenciales electorales, así como de afiliación, a la Confederación Nacional Campesina.

8.- Fotocopias de dos copias certificadas de actas de nacimiento del veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y tres, y trece de abril de mil novecientos noventa, relativas al nacimiento de Perla Margarita Luna Armendáriz y Laura Luna Armendáriz, apreciándose en la primera como domicilio de los padres Pedro Luna Grimaldo (quien aparece como solicitante de esta acción agraria), y Francisca Armendáriz Navejar, Las Lagunitas, Galeana, Nuevo León, y en la segunda que tanto los padres como testigos señalan como domicilio Las Lagunitas, Galeana, Nuevo León.

9.- Fotocopia de la Carpeta Básica del ejido aludido en la que se contienen: convocatoria para la elección de autoridades ejidales, acta de posesión y deslinde de la dotación provisional, plano de ejecución, periódico oficial del Gobierno del Estado, conteniendo la publicación de dotación provisional.

10.- Carta Topográfica expedida por la Dirección General de Estudios del Territorio Nacional, dependiente de la Coordinación General del Sistema Nacional de Información de la Secretaría de Programación y Presupuesto, en la que aparece el poblado "Las Enramadas" (actualmente "Las Lagunitas"), en el Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León.

VIGESIMO CUARTO.- El Tribunal Superior Agrario aprobó acuerdo el catorce de febrero de mil novecientos noventa y cinco, con motivo del cual se giró el despacho AC/51/95 al Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 20, a fin de determinar la superficie afectada por mandamiento gubernamental en el presente procedimiento agrario, excluyendo la superficie que fue objeto de afectación en beneficio del poblado "Santa Clara de González", Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León.

El despacho anterior fue diligenciado y devuelto a este Tribunal Superior Agrario por oficio SA-648/95 de cinco de julio de mil novecientos noventa y seis, en el cual se contienen las siguientes diligencias:

a) Acta de inspección ocular practicada el dos de mayo de mil novecientos noventa y seis, por el Licenciado Raúl Gálvez Ramírez, actuario adscrito al mencionado Tribunal Unitario, con la asistencia de los ingenieros Angel Mario Barbosa García y Raúl Gálvez Ramírez, en el poblado "Las Lagunitas", Municipio de Galeana Estado de Nuevo León, de la cual se desprende que los campesinos solicitantes de la presente acción, se encuentran en posesión y explotación de la superficie dotada por mandamiento gubernamental, de la cual se procedió al levantamiento topográfico.

b) Dictamen topográfico rendido por el ingeniero Angel Mario Barbosa García, de doce de mayo de mil novecientos noventa y cinco, al que se acompañan planos de identificación fotogramétrica, en los que se describe y concluye que el polígono que se encuentra en posesión del grupo solicitante, es el que le fue entregado en forma provisional en cumplimiento al mandamiento gubernamental, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o. fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- En cuanto al requisito de procedibilidad de la acción, exigible por el artículo 195 de la Ley Federal de Reforma Agraria, éste se probó con la existencia del poblado gestor, cuando menos con seis meses de anterioridad a la fecha de su solicitud de dotación de tierras.

TERCERO.- Respecto a la capacidad individual de los solicitantes y colectiva del grupo promovente, quedaron acreditadas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 196 fracción II, interpretado en sentido contrario y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, con las constancias de la diligencia censal, en la que se identificó a un total de treinta y cinco campesinos capacitados, cuyos nombres se relacionan a continuación: 1.- Pedro Luna Delgado, 2.- J. Francisco Luna Tienda, 3.- Jesús Oviedo Mendoza, 4.- José Oviedo Mendoza, 5.- Javier Pedroza Tienda, 6.- Oscar Luna Plata, 7.- Pedro Luna Tienda, 8.- Mariano Tienda Oviedo, 9.- Jesús Villalpando Tienda, 10.- Andrés Oviedo Pedraza, 11.- Benito Tienda Oviedo, 12.-

Pedro Luna Grimaldo, 13.- Francisco Luna Grimaldo, 14.- Pablo Luna Grimaldo, 15.- Santiago Luna Grimaldo, 16.- Juan Manzanares Tienda, 17.- Antonio Guerrero Cerda, 18.- Armando Oviedo Castillo, 19.- Juan Oviedo Ramírez, 20.- Francisco Oviedo Oviedo, 21.- Guadalupe Oviedo Castillo, 22.- Florentino Oviedo Mendoza, 23.- José Oviedo Mendoza, 24.- Juan Antonio Luna Tienda, 25.- Miguel Angel Luna Oviedo, 26.- Apolonio Luna Tienda, 27.- Pedro Luna Oviedo, 28.- Hugo Pedroza Luna, 29.- Reyes Tienda Miranda, 30.- José Pedroza Tienda, 31.- José Luna Oviedo, 32.- Francisco Javier Pedroza Luna, 33.- Ernesto Delgado Plata, 34.- Efraín Oviedo Oviedo, y 35.- Mario Hernández González.

CUARTO.- En cuanto a la substanciación del expediente que se resuelve, se cumplieron las formalidades que norman el procedimiento, contenidas en los artículos 272, 273, 275, 286, 287, 291, 292, 298, 299, 300, 301 y 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria; habiéndose respetado las garantías de audiencia y legalidad, consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales, al haberse notificado a los propietarios de los predios señalados como afectables, y por haberse apersonado al procedimiento.

QUINTO.- Del análisis y valoración de la instrumental de actuaciones, consistente en los informes de los trabajos técnicos e informativos, el plano informativo y demás diligencias que integran el presente expediente, se deduce que dentro del radio legal de afectación del poblado que nos ocupa, se encuentran los terrenos propiedad de los ejidos "Santa Clara de González", "Pablillo" con su ampliación, "San Pablo de Raíces", "El Tepozán" con su ampliación, y "San Pablo de Tranquitas", así como de diversos predios de propiedad particular, cuyas superficies fluctúan entre 2-27-13 (dos hectáreas, veintisiete áreas, trece centiáreas) y 52-00-00 (cincuenta y dos hectáreas) de temporal, en explotación agrícola por sus propietarios con cultivos de maíz y frijol y entre 51-23-77 (cincuenta y una hectáreas, veintitrés áreas, setenta y siete centiáreas) y 500-00-00 (quinientas hectáreas) de agostadero en su mayor parte, con porciones susceptibles al cultivo en menor escala, mismos que se encontraron en explotación ganadera por sus propietarios, conforme al coeficiente de agostadero fijado a nivel regional de 1-89-00 (una hectárea, ochenta y nueve áreas) por cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, y en explotación agrícola en las porciones susceptibles de cultivo; que por su régimen de propiedad, calidad de tierras y por haberse encontrado en explotación ganadera, conforme al coeficiente de agostadero fijado para la región en 1-89-00 (una hectárea, ochenta y nueve áreas), por cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, así como en explotación agrícola, las porciones de temporal, susceptibles de cultivo, resultan ser pequeñas propiedades inafectables conforme a los artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Por lo que se refiere al predio señalado como de probable afectación, de los trabajos técnicos e informativos practicados por el comisionado ingeniero Alejandro Luna González de quince de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, al que se acompaña acta de inexplotación, actas de inspección levantadas por el Ingeniero Juan Manuel Ramos Reyes, el 30 de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, Tiburcio García Guerrero, el ocho de julio de mil novecientos noventa y dos, trabajos técnicos e informativos complementarios realizados por el ingeniero José Rodríguez Hernández, de treinta de octubre de mil novecientos noventa y dos, acta de inspección ocular levantada el dos de mayo de mil novecientos noventa y cinco y dictamen topográfico rendido por el ingeniero Angel Mario Barbosa García, se desprende que dentro del radio legal de afectación del poblado que nos ocupa, se localizaron las fracciones del predio denominado "Santa Clara de González", ubicado en el Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, propiedad de Rodolfo Arroyo Llano, sucesión a bienes de Ana María Arroyo Llano, Rodolfo González Garza, Pablo González Sada, Tomás Roberto González Sada, sucesión a bienes de Leonardo Arroyo Llano, Javier González Arroyo, Horacio González Arroyo y Emma Cristina González Arroyo, con superficie registral de 3,886-70-60 (tres mil ochocientas ochenta y seis hectáreas, setenta áreas, sesenta centiáreas) y real analítica de 3,539-16-71.67 (tres mil quinientas treinta y nueve hectáreas, dieciséis áreas, setenta y una centiáreas, sesenta y siete miliáreas) de la cual 1,868-92-69.67 (mil ochocientas sesenta y ocho hectáreas, noventa y dos áreas, sesenta y nueve centiáreas, sesenta y siete miliáreas), se encontraron inexplotadas por más de dos años consecutivos, sin causa justificada, por sus propietarios, como se desprende del acta circunstanciada de inexplotación levantada el ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, en la cual se asentaron las condiciones de abandono e inexplotación de los predios al momento de su inspección y en posesión y usufructo del grupo promovente, de ahí que se estime que estos predios resultan afectables con fundamento en el artículo 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, interpretado en sentido contrario, superficie que en cumplimiento al mandamiento gubernamental le fue entregada en forma provisional al grupo promovente de la presente acción agraria, ya que si bien es cierto en las actas de posesión y deslinde se indica que fue una superficie de 1,869-02-42.44 (mil ochocientas sesenta y nueve hectáreas, dos áreas, cuarenta y dos centiáreas, cuarenta y cuatro miliáreas), en los trabajos que se detallan en el resultando décimo cuarto, mediante levantamiento topográfico se determinó que la superficie realmente entregada fue de 1,869-92-69.67 (mil ochocientas sesenta y nueve hectáreas, noventa y dos áreas, sesenta y nueve centiáreas, sesenta y siete miliáreas).

SEXTO.- Es oportuno indicar que los propietarios de las fracciones del predio "Exhacienda Santa Clara de González" fueron notificados oportunamente del presente procedimiento agrario para presentar pruebas y formular alegatos que a sus intereses estimaran convenientes, habiendo comparecido el propietario Javier

González Arroyo mediante escrito de 25 de julio de mil novecientos ochenta y nueve, en el que expresó lo que a sus intereses estimó conveniente, así como los propietarios Rodolfo Arroyo Llano, Ana María Arroyo Llano, Leandro Arroyo Llano, Horacio González Arroyo, Emma Cristina González Arroyo, Rodolfo González Garza, Pablo González Sada y Tomás Roberto González Sada, a fin de que comparecieran ante este Tribunal Superior para que aportaran sus pruebas y alegatos, dentro del plazo legal que corrió del doce de marzo al veinticinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro, dentro del cual acudieron Emma Cristina González Arroyo, Horacio González Arroyo, Javier González Arroyo, en lo personal, Javier González Arroyo Llano como apoderado de Rodolfo Arroyo Llano, Javier González Arroyo como apoderado de Adela Arroyo Llano, albacea a bienes de la sucesión de Ana María Arroyo Llano; Javier González Arroyo en su carácter de apoderado de Martha Ferreigno Garza viuda de Arroyo, albacea a bienes de la sucesión de Leandro Arroyo Llano; Rodolfo González Garza, Tomás Roberto González Sada y Pablo González Sada, respetándoles de este modo las garantías de audiencia y seguridad jurídica consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales.

SEPTIMO.- En las apuntadas condiciones, se procede al análisis y valoración de las pruebas presentadas por los propietarios.

A) En relación a la documental presentada por Javier González Arroyo, descrita en el resultando tercero, la contenida en el número 1, se refiere a que se derribaron árboles para construir brechas de deslinde en los ejidos "Las Lagunitas" y "Santa Clara de González"; la contenida en el número 2, se refiere a que el Delegado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos con residencia en Monterrey, Nuevo León, le indicó a Teodoro García Terán que se suspendieron los trabajos relativos al estudio dasonómico, por no existir apoyo de las personas propuestas por el solicitante para realizar el recorrido, ya que el personal técnico desconoce los límites, sin mencionarse a qué predios se refiere; la contenida en el número 3, que el Gerente General de Bancomer, S.A., le informó al oferente que presentara documentación para la celebración de un contrato de fideicomiso sobre varios predios ubicados en el Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, sin mencionarse a qué predios se refiere.

B) En relación a las documentales presentadas por los demás propietarios, descrita en el resultando décimo noveno, se indica: la contenida en el número 1, se refieren a que se encuentran inscritas las escrituras de compraventa de los predios correspondientes a las fracciones de la "Exhacienda Santa Clara de González"; la contenida en el número 2, se refiere a la adquisición en propiedad de las citadas fracciones, en las fechas indicadas, mediante operaciones de compraventa; la contenida en el número 3, se refiere a la relación de municipios y localidades, sin que aparezca la autoridad que la expide, fecha, entidad y demás elementos necesarios para la evidencia de un hecho; la contenida en el número 4, se refiere al cumplimiento de una carga de tipo fiscal; la contenida en el número 5, es el plano descriptivo de las fracciones que integran el predio Exhacienda Santa Clara de González; la contenida en el número 6, se refiere a que Victoriano Pedroza Coronado y José Plata Oviedo fueron citados en mil novecientos setenta y dos, para desocupar los predios propiedad de los oferentes, al respecto cabe señalar que por su propia naturaleza, un citatorio no es prueba suficiente para tener por acreditado que aquéllos hallan realizado la ocupación de los predios, independientemente de que no aparecen como integrantes del núcleo solicitante y fundamentalmente es de resaltar que ese documento data de mil novecientos setenta y dos, lo cual lo hace intranscedente, habida cuenta de que la causal de inexplotación que se les atribuye, comprende del ocho de diciembre de mil novecientos setenta y seis al ocho de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, en virtud de que el acta circunstanciada de inexplotación, se levantó el ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y siete y en ésta, se asienta que se observaron abandonados e inexplotados los predios por más de dos años consecutivos; la contenida en el número 7, si bien se refieren a gestiones encaminadas a la realización de estudios para la obtención de autorización de explotación maderable, estas gestiones no desvirtúan la causal de afectación a virtud de que no se hicieron en los años durante los cuales se les atribuye que estuvieron inexplotados y abandonados, además de que no es la única forma de explotación que se admite en esos predios, como se advierte de la calidad de las tierras, mismas que por ser predominantemente de agostadero y en menor porcentaje de temporal, la explotación adecuada es la ganadería; la contenida en el número 8, inciso a), y b) se refieren a la publicación de la resolución correspondiente a distinto poblado; y a la realización de brechas en los predios, que aun cuando no se hubiese hecho con autorización de autoridad competente, no demuestra que por tal razón no se hubiera explotado el predio, ya que únicamente se construyeron brechas, por lo tanto no se talaron todas las superficies; la contenida en el número 9, inciso a) únicamente se refiere a que al propietario Javier González Arroyo, le fue solicitada para estudios una superficie de 1,200 metros por un plantel educativo; la contenida en el número 11, inciso b) se refiere al agradecimiento por parte de un plantel educativo en cuanto al ofrecimiento para la donación del predio.

A la documentación anterior, se le concede el valor de indicio en cuanto a su contenido, teniendo en consideración que conforme a lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación agraria, la valoración de la prueba documental exhibida en fotocopia simple y carente de certificación, queda al prudente arbitrio judicial y que la Suprema Corte de Justicia de la

Nación ha sustentado en la Jurisprudencia publicada con el número 115, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, página 117, lo siguiente:

"COPIAS FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico."

Séptima Epoca. Primera Parte.

Vols. 139-144, Pág. 75 A:R: 1695/80. Hotel Carlo, S.A. Unanimidad de 15 votos.

Vols. 139-144, Pág. 75 A:R: 7275/79, Mica S.A. Unanimidad de 14 votos.

Vols. 139-144, Pág. 75 A.R. 4109/79, Luis Farrugia Reed Unanimidad de 4 votos.

Vols. 139-144, Pág. 75 A.R. 2107/80, Galdi, S.A. y otros. Unanimidad de 17 votos.

Vols. 139-144, Pág. 75 A.R. 5801/79, Hoteles Turismo, S.A. Unanimidad de 18 votos.

C) Por cuanto hace a la prueba documental presentada por Rodolfo González Sada, Tomás Roberto González Sada y Pablo González Sada, detallada en el resultando vigésimo, consistente en tres certificados de libertad de gravámenes, es de indicar que por su propia naturaleza, hace prueba en términos de los artículos 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, con lo cual se acredita únicamente que los predios propiedad de éstos se encuentran libres de gravámenes.

D) Ahora bien, por lo que respecta a las pruebas desahogadas con motivo del ofrecimiento probatorio por parte de los propietarios, detalladas en el resultando vigésimo segundo, es de señalar que la contenida en el número 1, que hace prueba plena, por haberse practicado por el Actuario adscrito al Tribunal Unitario del Distrito número 20, en términos de los artículos 197 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia agraria, se acredita que sí existe el poblado denominado "Las Lagunitas", que anteriormente se denominó "Las Enramadas", toda vez que se localizó materialmente, se dio fe de las construcciones existentes en el mismo, destinadas a habitación, las cuales son ocupadas por los integrantes del núcleo solicitante, asimismo explotan las tierras concedidas por mandamiento gubernamental, con la contenida en el número 2, consistente en el informe del Instituto de Estadística, Geografía e Informática, que de igual forma hace prueba plena con base en los artículos 197 y 202 del ordenamiento legal antes invocado, se acredita la existencia del poblado "Las Enramadas", con el que anteriormente se denominó al poblado "Las Lagunitas".

E) En cuanto a la documental que el Tribunal Unitario del Distrito 20 que junto con la anterior, remitió al Superior, es de establecer que hace prueba plena conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por lo que con la número 1 y 2, se corrobora la existencia del poblado, el número de campesinos radicados en éste y la explotación de las tierras; la contenida en el número 3, no hace prueba plena en cuanto al nombre y número de capacitados, por desconocerse la fecha, por quién fue practicado el censo y demás elementos necesarios para establecer la capacidad de éstos, por lo que prevalece el resultado de los trabajos censales llevados a cabo en el presente procedimiento agrario.

F) Finalmente, con relación a los documentos presentados por los integrantes del Comisariado Ejidal del poblado de que se trata, detallados en el resultando vigésimo tercero, es de indicar que la documental descrita y contenida en los números 1, 2, 3, 4 y 10, detalladas en el resultando vigésimo tercero de la presente resolución, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, hacen prueba plena corroborándose así tanto la existencia del poblado, como el número de campesinos y la explotación de las tierras; con relación a las contenidas en los números 5, 6, 7, 8 y 9 por tratarse de fotocopias simples carentes de certificación, únicamente se les concede el valor de indicio en cuanto a su contenido, esto con apoyo en el invocado artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia agraria, por lo que se indica que la número 5, se refiere a una relación de nombres, que no contiene fecha, ni datos de quien la elaboró y demás elementos necesarios para establecer la capacidad agraria; la número 6, se refiere a la autorización del Presidente Municipal de Galeana Nuevo León, del sello para certificar documentos; la número 7, se refiere a las credenciales electorales; la número 8, se refiere a las actas certificadas de nacimiento en las cuales se menciona como domicilio de los participantes el Poblado de "Las Lagunitas", la número 9, a la carpeta básica y documentos que contiene, como convocatoria para elección de autoridades ejidales, acta de posesión y deslinde, plano de ejecución y publicación de la dotación provisional.

OCTAVO.- Con relación a los alegatos formulados por los propietarios, detallados en los resultandos octavo, décimo cuarto y vigésimo, resultan ineficaces, habida cuenta de que se limitan a combatir la publicación del mandamiento gubernamental y la inscripción preventiva; no así la inexplotación atribuida; por otra parte, la causal de afectación no se finca en la excedencia a la pequeña propiedad, por lo que resulta intrascendente la defensa que se hace en ese sentido; contrariamente a lo argumentado por éstos el poblado denominado "Las Lagunitas" anteriormente denominado "Las Enramadas", sí existe, como quedó acreditado con las constancias expedidas por el Presidente Municipal de Galeana, Estado de Nuevo León, la Inspección Ocular practicada por el Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20, el Informe del Instituto

Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI), y la carta topográfica, expedida por la Dirección General de Estudios del Territorio Nacional, Coordinación General del Sistema Nacional de Información de la Secretaría de Programación y Presupuesto, lo que nos lleva al conocimiento sin lugar a dudas, que el poblado de que se trata, es el mismo ya que únicamente cambió de nombre, así como que radican en el mismo, los solicitantes cuyos nombres quedaron anotados y que las tierras son explotadas por éstos.

Todo lo anteriormente manifestado, nos lleva a la conclusión de que ninguno de los propietarios demostraron la explotación de las fracciones del predio "Exhacienda Santa Clara de González", durante el tiempo de dos años que se les atribuyó, ni que hubiese existido causa de fuerza mayor que les haya impedido la explotación de los mismos, y si, por el contrario, quedó corroborada tanto la existencia del poblado, como la capacidad individual y colectiva de los integrantes del núcleo de que se trata, así como la inexplotación de los inmuebles en comento; por lo que en estas condiciones las fracciones del predio "Santa Clara de González", propiedad de Rodolfo Arroyo Llano, sucesión a bienes de Ana María Arroyo Llano, Rodolfo González Garza, Pablo González Sada, Tomás Roberto González Sada, sucesión a bienes de Leandro Arroyo Llano, Javier González Arroyo, Horacio González Arroyo y Emma Cristina González Arroyo, resultan afectables para satisfacer las necesidades agrarias y económicas del poblado solicitante de tierras.

NOVENO.- Con base en todo lo antes expresado, es de conceder al poblado denominado "Las Lagunitas", ubicado en el Municipio de Santa Clara de González, Estado de Nuevo León, la superficie de 1,868-92-69.67 (mil ochocientas sesenta y ocho hectáreas, noventa y dos áreas, sesenta y nueve centiáreas, sesenta y siete miliáreas) de agostadero en terrenos áridos, integrada por las fracciones del predio denominado "Exhacienda Santa Clara de González", ubicado en el Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, propiedad de Rodolfo Arroyo Llano, sucesión a bienes de Ana María Arroyo Llano, Rodolfo González Garza, Pablo González Sada, Tomás Roberto González Sada, sucesión a bienes de Leandro Arroyo Llano, Javier González Arroyo, Horacio González Arroyo y Emma Cristina González Arroyo, misma de la que el grupo solicitante se encuentra en posesión provisional en cumplimiento al mandamiento gubernamental, por haberse encontrado inexplotada por sus propietarios por más de dos años consecutivos, sin que existiera causa de fuerza mayor, de allí que resulten afectables de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251, aplicado a contrario sensu, de la Ley Federal de Reforma Agraria, para beneficiar a los treinta y cinco campesinos capacitados cuyos nombres quedaron anotados en el considerando tercero de esta sentencia.

DECIMO.- La superficie que se concede, deberá ser localizada conforme al plano proyecto que obra en autos y pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres. En cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria, y podrá constituir el área de asentamientos humanos, la parcela escolar, la unidad agrícola e integral para la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud.

DECIMO PRIMERO.- En las relacionadas condiciones, procede modificar en cuanto a la superficie afectable, el mandamiento dictado en sentido positivo por el Gobernador del Estado de Nuevo León, el treinta de junio de mil novecientos ochenta y nueve, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y uno; toda vez que la superficie afectable de las fracciones del predio "Exhacienda Santa Clara de González", es de 1,868-92-69.67 (mil ochocientas sesenta y ocho hectáreas, noventa y dos áreas, sesenta y nueve centiáreas, sesenta y siete miliáreas) de agostadero en terrenos áridos y no de 1,869-02-42.44 (mil ochocientas sesenta y nueve hectáreas, dos áreas, cuarenta y dos centiáreas, cuarenta y cuatro miliáreas).

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del articulo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o. y la fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Es procedente la dotación de tierras promovida por campesinos del poblado denominado "Las Lagunitas", Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León.

SEGUNDO.- Es de dotarse y se dota al poblado referido en el resolutivo anterior, con una superficie de 1,868-92-69.67 (mil ochocientas sesenta y ocho hectáreas, noventa y dos áreas, sesenta y nueve centiáreas, sesenta y siete miliáreas) de agostadero en terrenos áridos, que se tomará de las fracciones del predio denominado "Exhacienda Santa Clara de González", ubicado en el Municipio de Galeana, Estado de Nuevo León, propiedad de Rodolfo Arroyo Llano, sucesión a bienes de Ana María Arroyo Llano, Rodolfo González Garza, Pablo González Sada, Tomás Roberto González Sada, sucesión a bienes de Leandro Arroyo Llano, Javier González Arroyo, Horacio González Arroyo y Emma Cristina González Arroyo afectables de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251, aplicado a contrario sensu, de la Ley Federal de Reforma Agraria, para beneficiar a los treinta y cinco campesinos cuyos nombres quedaron asentados en el considerando tercero de esta sentencia.

La superficie que se concede, deberá ser localizada conforme al plano proyecto que obra en autos y pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres. En cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social

del ejido, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria, y podrá constituir el área de asentamientos humanos, la parcela escolar, la unidad agrícola e integral para la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud.

TERCERO.- Se modifica en cuanto a la superficie afectable, el mandamiento dictado en sentido positivo por el Gobernador del Estado de Nuevo León, el treinta de junio de mi novecientos ochenta y nueve, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y uno.

CUARTO.- Publíquense: esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación,** en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nuevo León; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a hacer las cancelaciones respectivas; asimismo, inscríbase en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos correspondientes, de acuerdo a las normas aplicables y conforme a lo resuelto en esta sentencia.

QUINTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Nuevo León, y a la Procuraduría Agraria; ejecútese y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a nueve de octubre de mil novecientos noventa y seis.- El Magistrado Presidente, **Luis O. Porte Petit Moreno**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Gonzalo M. Armienta Calderón**, **Arely Madrid Tovilla**, **Rodolfo Veloz Bañuelos**, **Luis Angel López Escutia**.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, **Jesús Anlén López**.- Rúbrica.

La Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario licenciada **Martha A. Hernández Rodríguez**.- CERTIFICA: Que las presentes copias fotostáticas concuerdan con los originales que se tuvieron a la vista y que obran en el juicio agrario número 431/93, constante en treinta y cinco fojas útiles, selladas y cotejadas, para ser enviadas al **Diario Oficial de la Federación**.- Doy fe.- México, Distrito Federal, a diescisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho.- Conste.- Rúbrica.

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 232/96, relativo a la segunda ampliación de ejido, promovido por campesinos del poblado Morro Mazatan, Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oax.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 232/96, que corresponde al expediente número 2053, relativo a la solicitud de segunda ampliación de ejido promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado "Morro Mazatan", Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Estado de Oaxaca, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por Resolución Presidencial de trece de noviembre de mil novecientos cuarenta, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el trece de mayo de mil novecientos cuarenta y uno, se concedió al poblado de referencia, por concepto de dotación de tierras, una superficie de 2,307-60-00 (dos mil trescientas hectáreas, sesenta áreas), para beneficiar a 75 (setenta y cinco) campesinos capacitados; fallo que fue ejecutado en todos sus términos el seis de septiembre de mil novecientos cuarenta y siete.

SEGUNDO.- Por Resolución Presidencial de veintiséis de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el once de abril de mil novecientos sesenta y seis, se concedió al poblado de referencia, por concepto de primera ampliación de ejido, una superficie de 5,351-00-00 (cinco mil trescientas cincuenta y una hectáreas), para beneficiar a 140 (ciento cuarenta) campesinos capacitados; fallo que fue ejecutado en todos sus términos el veintinueve de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

TERCERO.- Mediante escrito de nueve de enero de mil novecientos setenta y cuatro, un grupo de campesinos avecindados en el poblado de que se trata, elevó solicitud de segunda ampliación de ejido ante el Gobernador del Estado de Oaxaca, señalando como de probable afectación el predio propiedad de Pablo Ortega y Gertrudis Nivón de Ortega.

La solicitud de referencia fue turnada a la Comisión Agraria Mixta para su trámite correspondiente, la que inició el expediente respectivo el doce de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, bajo el número 2053, y ordenó la publicación de la solicitud en el Periódico Oficial el Gobierno del Estado, la que se efectuó el nueve de marzo de mil novecientos setenta y cuatro.

CUARTO.- En atención a la designación hecha por los peticionarios en su escrito inicial, el Gobernador del Estado de Oaxaca, con fecha nueve de enero de mil novecientos setenta y cuatro, expidió nombramientos a Martín Venegas Vázquez, Mario Zárate Martínez y Leoncio Morales Salinas, como presidente, secretario y vocal, respectivamente, del Comité Particular Ejecutivo.

QUINTO.- La Comisión Agraria Mixta, por oficio número 738 BIS de diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y cinco, designó a Gervacio Sernas Santiago para que investigara sobre el aprovechamiento de las tierras que le fueron entregadas al ejido por dotación y ampliación, así como el terreno señalado como probablemente afectable; el comisionado rindió su informe el de cinco de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, del que se conoce que los terrenos ejidales se encuentran debidamente aprovechados con cultivos de maíz, ajonjolí, sorgo, árboles frutales de mango, plátano y melones.

SEXTO.- Para elaborar el censo agrario, fue instruido por el propio órgano colegiado, Próspero Sánchez Noriega, quien rindió su informe respecto de los trabajos efectuados el primero de julio de mil novecientos setenta y cuatro, haciendo saber la existencia en el poblado en estudio de 121 (ciento veintiuno) campesinos capacitados. El acta de clausura de la junta censal es de veintiséis de junio de mil novecientos setenta y nueve.

SEPTIMO.- Posteriormente, por oficio 784 de trece de julio de mil novecientos setenta y nueve, se designó a Gregorio Luis Aquino y Saúl González Toledo, para que realizaran los trabajos técnicos e informativos; comisionados que rindieron su informe el diez de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, indicando que dentro del radio de siete kilómetros se ubican los ejidos definitivos denominados "Santa Cruz Bamba y Garrapateros", "San Vicente Mazatan", "Santa Gertrudis Miramar", y "Morro Mazatan", así como el predio particular denominado "Mazatan", con una superficie total de 3,452-71-97 (tres mil cuatrocientos cincuenta y dos hectáreas, setenta y un área, noventa y siete centiáreas) de terreno de agostadero cerril con un 30% laborable, integrado por tres fracciones:

1.- Primera fracción del predio "Mazatan", con una superficie de 2,157-39-41 (dos mil ciento cincuenta y siete hectáreas, treinta y nueve áreas, cuarenta y uno centiáreas) de terreno de agostadero cerril con un 30% laborable, en posesión de los integrantes del núcleo agrario perteneciente al ejido de "San Vicente Mazatan".

2. Segunda fracción del predio "Mazatan", con una superficie de 1,095-32-56 (mil noventa y cinco hectáreas, treinta y dos áreas, cincuenta y seis centiáreas) de terreno de agostadero cerril con un 30% laborable, en posesión de los integrantes del núcleo agrario denominado "Morro Mazatan".

3.- Tercera fracción del predio "Mazatan", con una superficie de 1,100-00-00 (mil cien hectáreas) de terreno de agostadero cerril con un 30% laborable, en posesión del grupo de campesinos del ejido de "Santa Gertrudis Miramar".

OCTAVO.- Con fecha veinte de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, la Comisión Agraria Mixta en el Estado aprobó dictamen positivo, proponiendo conceder al poblado peticionario una superficie de 1,095-32-56 (mil noventa y cinco hectáreas, treinta y dos áreas, cincuenta y seis centiáreas), que se tomarían del predio propiedad de Antonio Juan Patris Patterson, por encontrarse inexplotado por más de dos años consecutivos sin causa justificada.

NOVENO.- El Gobernador del Estado, con fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, dictó su mandamiento en los términos propuestos en el dictamen de la Comisión Agraria Mixta, el que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el trece de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.

DECIMO.- El mandamiento gubernamental se ejecutó en sus términos por los ingenieros Gregorio Luis Aquino y Fausto Calvo Underwood, quienes rindieron su informe el doce de agosto de mil novecientos ochenta y seis, al que acompañaron el acta de posesión y deslinde de cinco de diciembre mil novecientos setenta y nueve.

UNDECIMO.- Con fecha veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y dos, la Dirección General de la Tenencia de la Tierra, formuló acuerdo instaurando procedimiento para declarar la nulidad del Acuerdo Presidencial de fecha ocho de febrero de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el treinta y uno de mayo del mismo año y cancelar el Certificado de Inafectabilidad Ganadera número 48755, que ampara el predio denominado "Mazatan y Los Nanches", ubicado en el Municipio de Tehuantepec, Estado de Oaxaca, con superficie de 3,000-00-00 (tres mil hectáreas) expedido a favor de Pablo S. Ortega y Gertrudis Nivon de Ortega, por existir la presunción fundada de que su situación jurídica se adecua a la hipótesis prevista en la fracción XV del artículo 27 Constitucional, 249 y 251, interpretados en sentido contrario, de la Ley Federal de Reforma Agraria, ordenándose las notificaciones correspondientes.

DUODECIMO.- El trece de junio de mil novecientos noventa y cuatro, la Dirección General de la Tenencia de la Tierra, emitió dictamen, proponiendo dejar sin efectos jurídicos el Acuerdo Presidencial de ocho de febrero de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el treinta y uno de mayo del mismo año, y cancelar el Certificado de Inafectabilidad Ganadera número 48755, que ampara el predio "Mazatan" y Los Naches", ubicados en el Municipio de Tehuantepec, Estado de Oaxaca.

DECIMOTERCERO.- El Delegado Agrario en la citada entidad federativa, en resumen y opinión de veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cinco, propuso confirmar el mandamiento del Gobernador del Estado y remitió el expediente al Cuerpo Consultivo Agrario.

DECIMOCUARTO.- El Cuerpo Consultivo Agrario, en términos del artículo 16 de la Ley Federal de Reforma Agraria, con fecha veintidós de marzo de mil novecientos noventa y seis aprobó dictamen negativo,

sin que éste tenga carácter vinculatorio alguno, en virtud de que este Tribunal Superior está dotado de autonomía y plena jurisdicción, conforme a lo dispuesto en la fracción XIX del artículo 27 constitucional.

El expediente se turnó, debidamente integrado, para su resolución definitiva a este Tribunal Superior, el cinco de junio de mil novecientos noventa y seis.

DECIMOQUINTO.- Por auto de trece de junio de mil novecientos noventa y seis, se tuvo por radicado el presente expediente en este Tribunal Superior, habiéndose registrado bajo el número 232/96. Se notificó a los interesados en términos de ley, así como a la Procuraduría Agraria y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; y 1o., 9o. fracción VIII, y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- El requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria quedó satisfecho, al comprobarse que las tierras concedidas al poblado solicitante por dotación, se encuentran en su totalidad debidamente explotadas.

TERCERO.- La capacidad agraria del núcleo de población solicitante quedó debidamente probada conforme a lo establecido por los artículos 197 fracción II, y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, toda vez que con la revisión practicada a la diligencia censal se comprobó la existencia de 121 (ciento veintiuno) campesinos capacitados, siendo los siguientes: 1.- Martín Venegas Vásquez, 2.- Carlos Veneragas Colmenares, 3.- Mario Zárate Martínez, 4.- Nobel Zárate Aguilar, 5.- Alfonso López Zárate, 6.- Santiago López Terán, 7.- Cuauhtémoc Crisóstomo Ramírez, 8.- Modesto Hernández Mendoza, 9.- Evodio Lagunas Ramírez, 10.- Agustina Mendoza García, 11.- Abel Hernández Mendoza, 12.- Pedro Cortés Vásquez, 13.- Toribio Aguilar Terán, 14.- Crisanta López Vásquez, 15.- Faustino Jarquín López, 16.- Severiano Zárate López, 17.- Daniel Ríos Zavaleta, 18.- Hermenegildo Ríos Jarquín, 19.- Luis Ríos Jarquín, 20.- Enrique Morales Salinas, 21.- Modesto López Fuentes, 22.- Arturo López Fuentes, 23.- Lumberto López Crisóstomo, 24.- Jacinto Mendoza Ramírez, 25.- Luis Mendoza Zárate, 26.- Irineo Ventura Cruz, 27.- Andrés Ventura Martínez, 28.- Cirila Avendaño Sibaja, 29.- Felipe Ventura Martínez, 30.- Macaria Villalobos Terán, 31.- César Zárate Villalobos, 32.- Anselmo Mendoza Aguilar, 33.- Benjamín Mendoza Pérez, 34.- Samuel Mendoza Aguilar, 35.- Cornelio Ventura Martínez, 36.- Felipe Fuentes López, 37.- Benito Ventura Martínez, 38.- Francisco Ríos Zavaleta, 39.- Gerónimo Ríos Altamirano, 40.- Julia Ramírez Mandoza, 41.- Teresa Ventura Martínez, 42.- Eleno Morales Jiménez, 43.- Diego Vásquez Crisóstomo, 44.- Jesús Venegas Moya, 45.- Crispina Zárate Santiago, 46.- Sabino López Laguna, 47.- Amalia Porfirio Morales, 48.- Diego Apolinar Porfirio, 49.- Cecilia Fuentes Moreno, 50.- Julia Jarquín Santos, 51.- Crecencio Pérez Mendoza, 52.- Esther González Vásquez, 53.- Verónica Flores Sánchez, 54.- Fermín Fuentes Flores, 55.- Herminio Ramírez Hernández, 56.- Camerino Cortés Calderón, 57.- Mario González Flores, 58.- Delia Porfirio Agustín, 59.- Gilberto Mendoza Santiago, 60.- Esteban Venegas Colmenares, 61.- Benicio Fuentes Moreno, 62.- Bartolo López Fuentes, 63.- Ernesto Mendoza Jarquín, 64.- Raymundo Cortés Zárate, 65.- Eustorgio Mendoza Ramírez, 66.- Sixto Mendoza Ramírez, 67.- Isaías Hernández Colmenares, 68.- Felicito Mendoza Fuentes, 69.- Juventino Mendoza Jarquín, 70.- Maximino Mendoza Santiago, 71.- Javier de los Santos Martínez, 72.- Pablo Venegas Colmenares, 73.- Luis Mendoza Zárate, 74.- Eudelio Fuentes Mendoza, 75.- Rosa Zenón de la Cruz, 76.- Floriberto Jarquín Zenón, 77.- Crecencio López Zavaleta, 78.- Alejo López García, 79.- Amidio Apolinar Porfirio, 80.- Pedro Hernández Fuentes, 81.- Juan Diego Mendoza Crisóstomo, 82.- Nicolás Cortés Villalobos, 83.- Bernardino Hernández Trinidad, 84.- Antonio Cortés Calderón, 85.- Isabel González Flores, 86.- Reyna Crisóstomo de los S., 87.- Juana Reyna Rodríguez León, 88.- Delfino Cortés Ramírez, 89.- Bernardino Mendoza Vásquez, 90.- Raymundo Marcelo Rodríguez León, 91.- Valerio Mendoza Vásquez, 92.- Juan Zavaleta García, 93.- Delfino Hernández Colmenares, 94.- Heriberto Hernández Jarqui, 95.- Hortencia Hernández Jarquín, 96.- Natividad Hernández Jarqui, 97.- Prisciliano Ernesto Hernández, 98.- Julio Venegas López, 99.- Rufino Salinas Olivera, 100.- Erasto Hernández Rodríguez, 101.- Herculano Ernesto Hernández Rodríguez, 102.- Modesta Terán Ramírez, 103.- Ismael Fuentes Cortés, 104.- Nicanor Fuentes Cortés, 105.- Víctor Terán Hernández, 106.- Moisés Terán Vásquez, 107.- Felipe Terán Vásquez, 108.- Hilario Trinidad Ventura, 109.- Catarino Lagunas Fuentes, 110.- Romelia Cortés Ramírez, 111.- Joaquín Hernández Hernández, 112.- Mauricia Hernández Fuentes, 113.- Manuel Hernández Fuentes, 114.- Margarito Salinas López, 115.- Francisco López García, 116.- Martín Venegas Maya, 117.- Alfonso Hernández Rodríguez, 118.- Felipe Salinas Olivero, 119.- Marco Ramírez Aguilar, 120.- Sixto García Salgado, 121.- Eduardo Martínez Lagunas.

CUARTO.- De las constancias que obran en autos se desprende que en su oportunidad se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento agrario, de acuerdo con lo establecido por los artículos 272, 273, 275, 286, 287, 288, 291, 292, 304 y demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria, aplicada conforme lo dispone el artículo tercero transitorio de la Ley Agraria, según quedó asentado en el capítulo de resultandos, que se tiene aquí por reproducido en lo conducente.

QUINTO.- Por lo que se refiere a la nulidad del Acuerdo Presidencial de ocho de febrero de mil novecientos cincuenta y la cancelación del Certificado de Inafectabilidad Ganadera número 48755, que ampara el predio denominado "Mazatan y Los Nanches", ubicado en el Municipio de Tehuantepec, Estado de Oaxaca, expedido a favor de Pablo S. Ortega y Gertrudis Nivón de Ortega, predio que según los comisionados Gregorio Luis Aquino y Saúl González Toledo, al verificar la inspección ocular el ocho de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, se encontró inexplotado por sus propietarios, toda vez que lo tenían en posesión provisional los solicitantes del núcleo de población que nos ocupa.

Ahora bien, no obstante que se notificó el acuerdo de inicio del procedimiento de nulidad de Acuerdo Presidencial de ocho de febrero de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el treinta y uno de mayo del mismo año, no compareció persona alguna a defender esos derechos, ni aparece que Antonio Juan Patterson propietario del predio antes mencionado, haya realizado en primera o en segunda instancia alguna gestión administrativa o judicial contra la afectación de su inmueble, lo que revela su falta de interés en desvirtuar la inexplotación que fue causa determinante de la nulidad del citado Acuerdo Presidencial, causal prevista en la fracción II del artículo 418 de la Ley Federal de la Reforma Agraria. Consecuentemente, al no haber quedado desvirtuada la causal de inexplotación por más de dos años consecutivos, sin causa justificada, del aludido predio, procede decretar la nulidad del Acuerdo Presidencial de ocho de febrero de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el treinta y uno de mayo del mismo año y cancelar el certificado de inafectabilidad ganadera número 58755 que ampara el susodicho predio "Mazatan y Los Nanches", localizado en el Municipio de Tehuantepec, Estado de Oaxaca, certificado que aparece expedido a favor de Pablo S. Ortega y Gertrudis Nivón Ortega.

SEXTO.- Por lo que se refiere a la acción de ampliación de ejido, según los trabajos técnicos e informativos de los comisionados Gregorio Luis Aquino y Saúl González Toledo, de los que rindieron informe el diez de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, en el que manifiestan que sólo localizaron como propiedad particular el predio denominado "Mazatan y Los Nanches", mismo que encontraron inexplotado por su propietario, toda vez que está ocupado por los solicitantes quienes tienen en explotación la superficie de 1,095-32-56 (mil noventa y cinco hectáreas, treinta y dos áreas, cincuenta y seis centiáreas) que les fue entregada por mandamiento del Gobernador y que corresponde al predio antes señalado, propiedad de Antonio Juan Patris Patterson, esa superficie resulta afectable conforme al artículo 251, interpretado en sentido contrario, de la Ley Federal de Reforma Agraria.

SEPTIMO.- De acuerdo a lo anterior, se estima procedente confirmar el mandamiento del Gobernador del Estado, emitido en sentido positivo el veintiocho de septiembre de mil novecientos setenta y nueve y ejecutado el cinco de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria y 1o., 7o., y cuarto transitorio, fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Es procedente declarar nulo el Acuerdo Presidencial de ocho de febrero de mil novecientos cincuenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el treinta y uno de mayo del mismo año; así también resulta procedente cancelar el Certificado de Inafectabilidad Ganadera número 48755, que ampara el predio denominado "Mazatan y Los Nanches", ubicado en el Municipio de Tehuantepec, Estado de Oaxaca, expedido a favor de Pablo S. Ortega y Gertrudis Nivón de Ortega, por el razonamiento que se vierte en el considerando quinto de esta sentencia.

SEGUNDO.- Es procedente la ampliación de ejido, promovida por campesinos del poblado denominado "Morro Mazatan", Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Estado de Oaxaca.

TERCERO.- Es de ampliarse y se amplía al poblado referido en el resolutivo anterior, con una superficie de 1,095-32-56 (mil noventa y cinco hectáreas, treinta y dos áreas, cincuenta y seis centiáreas) de terrenos de agostadero, que se tomarán íntegramente del predio denominado "Mazatan y Los Nanches", propiedad de Antonio Juan Patris Patterson, por haberse encontrado sin explotación alguna por más de dos años consecutivos sin causa justificada, resultando afectable de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251, interpretado a contrario sensu, de la Ley Federal de Reforma Agraria, para beneficiar a los 121 (ciento veintiuno) campesinos capacitados que quedaron identificados en el considerando tercero; superficie que se encuentra delimitada en el plano-proyecto respectivo y que pasa a ser propiedad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación del destino de las tierras la asamblea resolverá de conformidad con lo previsto por los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

CUARTO.- Publíquense esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación**, y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y procédase a realizar la inscripción respectiva en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos conforme a las normas aplicables y de acuerdo con lo dispuesto en esta sentencia.

QUINTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Oaxaca y a la Procuraduría Agraria; ejecútese y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firman los Magistrados que lo integran, con la Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a diez de junio de mil novecientos noventa y ocho.- El Magistrado Presidente, **Luis Octavio Porte Petit Moreno**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Rodolfo Veloz Bañuelos**, **Marco Vinicio Martínez Guerrero**, **Luis Angel López Escutia**, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbricas.- La Secretaria General de Acuerdos, **Martha A. Hernández Rodríguez**.- Rúbrica.

AVISOS
JUDICIALES Y GENERALES

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal
EDICTO
José M. Saltiel Abouaf.

En los autos del Juicio de Amparo número 674/99-IV, promovido por Blanca Elsa Lecuona Cortez, contra actos de la Décimo Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y como no se conoce el domicilio cierto y actual de José M. Saltiel Abouaf, se ha ordenado emplazarlo a juicio por edictos, los que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico de mayor circulación en esta ciudad capital, ello en atención a lo dispuesto por el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Quedan a su disposición en la Secretaría de este Tribunal, copia simple de la demanda y anexos; asimismo, se le hace saber que cuenta con el término de treinta días, contado a partir de la última publicación de los edictos de mérito, para que ocurra ante este Juzgado a hacer valer sus derechos si a sus intereses conviniere, y señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, apercibido que de no hacerlo, las ulteriores notificaciones, aun las de carácter personal se le harán por lista de acuerdos de este Juzgado. Y como está ordenado en proveído de veintiocho de febrero del presente año, se reserva por el momento señalar fecha para la audiencia constitucional.

Atentamente
México, D.F., a 17 de marzo de 2000.
El Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal
Lic. Raúl Martínez Morales
Rúbrica.
(R.- 122775)

Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
México
Quinta Sala
EDICTO

En el cuaderno de amparo relativo al toca número 1859/99/1, promovido por Bancomer, S.A., en contra de María Georgina Judith Orozco Gómez de Aranzábal, se dictó un acuerdo de fecha tres de marzo del año dos mil, que en síntesis ordena: "Emplácese al tercero perjudicado María Georgina Judith Orozco Gómez de Aranzábal, por medio de edictos, que deberán de publicarse por tres veces, de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico La Prensa, quedando a disposición del tercero perjudicado en la Secretaría de esta Sala las copias simples de la demanda."

Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 16 de marzo de 2000.
El C. Secretario de Acuerdos
Lic. Juan Antonio Vargas Rojas
Rúbrica.
(R.- 122818)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil
en el Estado de Jalisco
Guadalajara, Jal.
EDICTO
A: Angelina Hernández Hernández.

En el Juicio de Amparo 1002/99-IV, promovido por Clemente González Plascencia; contra actos del Juez y Secretario Ejecutor adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil de esta ciudad, ordenándose emplazarlo por edictos para que comparezca si a su interés conviene en treinta días, para la celebración de la audiencia constitucional se fijaron las diez horas con diez minutos del veintinueve de marzo próximo.
Para su publicación por tres veces, de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico Excélsior.
Guadalajara, Jal., a 24 de marzo de 2000.
El Secretario
Lic. Julio César López Jardines
Rúbrica.
(R.- 122872)

Grupo Profesional PlaneaciOn y Proyectos, S.A. de C.V.

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Señores consejeros y accionistas:
Hemos examinado los balances generales consolidados de Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 1999 y 1998 y los estados consolidados de resultados, de variaciones en el capital contable y de cambios en la situación financiera que les son relativos por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías.
Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera consolidada de Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 1999 y 1998, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y los cambios en su situación financiera consolidados por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados.
7 de marzo de 2000.
Mancera, S.C.
Ernst & Young International
C.P.C. Alberto del Castillo V. Zepeda
Rúbrica.

GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Balances generales consolidados
(miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999)

	al 31 de diciembre de	
	1999	**1998**
Activo		
Activo circulante		
Efectivo e inversiones temporales	$55,017	$92,617
Cuentas por cobrar		
Clientes, neto de la estimación para cuentas de cobro dudoso por $1,783 ($2,003 en 1998)	17,734	19,673
Porción circulante de clientes por cobrar a largo plazo	274	321
Intereses por cobrar	2,824	
Partes relacionadas	1,169	653
Anticipo a proveedores	218	261
Otros deudores	714	2,582
Impuestos a favor	450	277
	23,383	23,767
Total del activo circulante	78,400	116,384
Clientes por cobrar a largo plazo	2,847	3,659
Equipos de oficina	17,532	15,762
Transporte	980	2,247

Cómputo	9,932	9,790
Topográfico	8,133	8,149
	36,577	35,948
Depreciación acumulada	(19,975)	(19,634)
Equipo, neto	16,602	16,314
Otros activos	1,675	2,797
Total del activo	$ 99,524	$ 139,154
Pasivo y capital contable		
Pasivo a corto plazo		
Préstamos bancarios	$ 10,365	$ 20,403
Cuentas por pagar	3,119	4,211
Partes relacionadas	1,338	1,741
Impuestos por pagar	3,368	2,944
Total del pasivo	18,190	29,299
Capital contable		
Capital social	201,703	201,544
Insuficiencia en la actualización del capital contable	(60,863)	(56,654)
Pérdidas acumuladas		
De años anteriores	(59,179)	(15,740)
Del año	(9,717)	(43,439)
	(68,896)	(59,179)
Utilidad en traducción	9,240	24,144
Capital contable mayoritario	81,184	109,855
Interés minoritario	150	
Total de capital contable	81,334	109,855
Total del pasivo y capital contable	$ 99,524	$139,154

Véanse las notas que se acompañan.

GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Estados de resultados consolidados

(miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999)

	año terminado el31 de diciembre de	
	1999	**1998**
Ingresos por proyectos	$44,247	$90,027
Costos y gastos de operación		
Costos de los proyectos	58,398	102,073
Gastos de operación	3,116	4,825
Gastos generales	9,852	11,225
Pérdida en operación	(27,119)	(28,096)
Producto (costo) integral de financiamiento		
Intereses ganados	12,699	9,481
Gasto por intereses	(1,574)	(24,892)
Ganancia por fluctuaciones cambiarias	5,491	3,043
Pérdida por fluctuaciones cambiarias	(4,801)	(2,571)
Utilidad (pérdida) por posición monetaria	304	(1,681)
Realización de la utilidad en traducción por reembolso de capital	8,853	
	20,972	(16,620)
Otros productos, neto	974	1,277
Pérdida antes de Impuesto al Activo	(5,173)	(43,439)
Impuesto al Activo	(4,394)	(2,598)
Pérdida antes de partida extraordinaria	(9,567)	(46,037)
Partida extraordinaria por beneficio por recuperación de impuestos Sobre la Renta pagado en exceso de Impuesto al Activo		2,598
Pérdida neta consolidada	$(9,567)	$(43,439)
Pérdida neta mayoritaria	$(9,717)	$(43,439)
Utilidad neta minoritaria	150	
	$(9,567)	$(43,439)
Resultado mayoritario por acción en pesos		
Pérdida antes de partida extraordinaria	$(1.1667)	$(5.6311)
Utilidad por partida extraordinaria		0.3179
Pérdida mayoritaria por acción en pesos	$(1.1667)	$(5.3132)

Véanse las notas que se acompañan.

GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Estados de variaciones en el capital contable consolidados
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998
(miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999)

Concepto	**Capital social**	**Reserva legal**	**Reserva para recompra de acciones**	**Utilidades (pérdidas) acumuladas**
Saldo ajustado al 31 de diciembre de 1997	$216,557	$8,299	$208	$1,427
Corrección al capital social por recompra de acciones	(15,013)		15,013	
Saldo al 31 de diciembre de 1997	201,544	8,299	15,221	1,427
Aplicación de la pérdida del año anterior				(40,687)
Resultado por tenencia de activos no monetarios				
Utilidad en traducción del ejercicio				
Resultado del ejercicio				
Saldo al 31 de diciembre de 1998	201,544	8,299	15,221	(39,260)
Aplicación de la pérdida del año anterior				(43,439)
Aportación de capital social	159			
Resultado por tenencia de activos no monetarios				
Pérdida en traducción del ejercicio				
Resultado del ejercicio				
Realización de la utilidad en traducción por reembolso de capital				
Saldo al 31 de diciembre de 1999	$201,703	$8,299	$15,221	$(82,699)

Véanse las notas que se acompañan.

GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Estados de cambios en la situaciOn financiera consolidados
(miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999)
Año terminado el 31 de diciembre de

	1999	**1998**
Operación		
Pérdida antes de partida extraordinaria	$(9,567)	$(46,037)
Beneficio por recuperación del impuesto al activo		2,598
Pérdida neta	(9,567)	(43,439)
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron el uso de recursos		
Depreciación	3,164	1,720
Realización de la utilidad en traducción por reembolso de capital	(8,853)	
Recursos aplicados al resultado del ejercicio	(15,256)	(41,719)
Recursos provenientes de (aplicados a) los renglones del capital de trabajo		
Clientes	2,798	2,282
Intereses por cobrar	(2,824)	
Partes relacionadas	(919)	1,232
Anticipo a proveedores	43	(261)
Otros deudores	1,868	(596)
Otros activos	1,123	724
Impuestos a favor	(173)	885
Cuentas por pagar	(1,092)	1,623
Impuestos por pagar	424	(1,160)
Participación de los trabajadores en las utilidades		(23)
Recursos aplicados a las operaciones	(14,008)	(37,013)
Financiamiento		
Pago de préstamos bancarios	(10,038)	(8,923)
Incremento de capital	159	
(Pérdida) utilidad en traducción	(13,307)	6,856

Recursos aplicados a las actividades de financiamiento	(23,186)	(2,067)
Inversión		
Inversión neta de activo fijo	(406)	(2,874)
Disminución de efectivo	(37,600)	(41,954)
Efectivo e inversiones temporales		
Al inicio del año	92,617	134,571
Al final del año	$ 55,017	$ 92,617

Véanse las notas que se acompañan.

GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998

(miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999)

1. Operaciones y resumen de las principales políticas contables

Actividad de la empresa

Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C.V. (PYP) es una empresa mexicana, constituida el 28 de abril de 1986 y su actividad principal es la prestación de toda clase de servicios profesionales de ingeniería, consultoría y diseño.

Políticas contables

Las principales políticas contables seguidas por la Compañía se resumen a continuación.

a) Consolidación

Al 31 de diciembre de 1999 y 1998, los estados financieros adjuntos incluyen los relativos a Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C.V., y los de su subsidiaria Internacional de Planeación y Proyectos, S.A., empresa panameña. Adicionalmente, los estados financieros al 31 de diciembre de 1999, incluyen en la consolidación a dos nuevas subsidiarias norteamericanas constituidas el 31 de agosto de 1999, PYPSA US Holding, Inc. y PYPSA Holding Inc. Las 3 subsidiarias son poseídas por PYP al 100%. A su vez, las dos subsidiarias norteamericanas en forma conjunta participan en el 100% del capital social y en el 80% de los resultados de PYPSA International Ltd, empresa norteamericana.

Los estados financieros consolidados también incluyen los activos, pasivos, ingresos y gastos de dos asociaciones en participación (A en P), las cuales se consolidan proporcionalmente (al 50%) en virtud de que PYP tiene el control conjunto sobre dichas A en P, de conformidad con los lineamientos de la Norma Internacional de Contabilidad número 31, emitida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC, por sus siglas en inglés).

Las cifras de las nuevas subsidiarias que se incorporan en 1999 son inmateriales en el conjunto de los estados financieros consolidados.

Los saldos por cobrar y por pagar, las inversiones y las transacciones importantes entre las compañías y las A en P que se consolidan han sido eliminadas en los estados financieros consolidados.

b) Reconocimiento de los efectos de la inflación

PYP incorpora los efectos de la inflación en la información financiera con base en las disposiciones del Boletín B-10 ("Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera") y sus adecuaciones emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y, consecuentemente, las cifras de los estados financieros y sus notas se expresan en miles de pesos de poder adquisitivo de la fecha del último ejercicio reportado.

Los estados financieros de 1998 fueron actualizados por la inflación del año 1999 que ascendió a 12.32%.

El método seguido para la actualización de los equipos y su depreciación acumulada y del año, del resultado por posición monetaria y el capital contable fue el de ajuste por cambios en el nivel general de precios, mediante el uso de los factores derivados del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicados por el Banco de México.

Los ingresos, costos y gastos se actualizan del mes en que se incurren hasta el cierre, con base en factores derivados del INPC.

La insuficiencia en la actualización del capital contable incluye el resultado por tenencia de activos no monetarios (RETANM) y el efecto monetario inicial.

El RETANM representa la diferencia entre el incremento en el valor actualizado de los activos no monetarios y el aumento que hubieran tenido dichos activos únicamente por efectos de la inflación.

El efecto monetario inicial es el resultado acumulado por posición monetaria a la fecha de la primera aplicación del Boletín B-10.

El resultado por posición monetaria representa el efecto de mantener activos y pasivos monetarios durante periodos inflacionarios, los cuales están expresados en unidades monetarias y que, a pesar de conservar su valor nominal disminuyen su poder adquisitivo. Durante 1999 y 1998 se obtuvo una pérdida por posición monetaria por $2,078 y $1,681, respectivamente, dichas cantidades se aplicaron al costo integral de financiamiento dentro de los resultados de cada periodo.

c) Conversión de subsidiarias en el extranjero

Las subsidiarias en Panamá y en Estados Unidos se convierten a pesos siguiendo los lineamientos del Boletín B-15 Transacciones en moneda extranjera y conversión de estados financieros de operaciones extranjeras, emitido por el IMCP. Para los efectos de la conversión de estas subsidiarias, se consideraron como entidades extranjeras conforme a lo establecido en dicho boletín.

La utilidad en traducción proviene del efecto cambiario originado por las inversiones en dólares norteamericanos que se tienen en las subsidiarias y que se refleja como un efecto de traducción dentro del capital contable. En el momento en que se liquida o reembolsa la inversión en el extranjero, la utilidad en traducción correspondiente se registra como un ingreso en el estado de resultados.

Conforme a lo anterior, en 1999 se registró en resultados una utilidad en traducción por $8,853, proveniente del reembolso de capital de la subsidiaria Internacional de Planeación Proyectos, S.A.

d) Inversiones temporales

Al 31 de diciembre de 1999, el rubro de efectivo e inversiones temporales incluye inversiones negociables a tasa variable valuadas a valor de mercado, por $53,083 ($53,686 en 1998). El remanente del rubro mencionado está representado por inversiones temporales a tasa fija que se presentan a su costo más intereses devengados, cifra que es similar a su valor de mercado.

e) Equipos y su depreciación

Este renglón se presenta valuado a su costo de adquisición aumentado por su actualización. Las estimaciones para depreciación se computan por el método de línea recta con base en las vidas útiles estimadas, a tasas que varían del 10 al 25% anual.

f) Obligaciones laborales

Los pagos por primas de antigüedad se aplican a los resultados del ejercicio en que se incurren. El pasivo por este concepto, conforme a las disposiciones del boletín D-3, ascendió a $160 y $166 en 1999 y 1998, respectivamente.

g) Ingresos por proyectos

Los ingresos por los servicios prestados se registran conforme al avance de cada proyecto.

h) Fluctuaciones cambiarias

Los activos y pasivos en moneda extranjera se expresan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha del balance general. Las fluctuaciones cambiarias se aplican a resultados.

2. Inversiones en asociaciones en participación

En 1997, PYP celebró dos contratos de asociación en participación con Tecningeniería en Mantenimiento, S.A. de C.V., para llevar a cabo sendos proyectos de ingeniería para Petróleos Mexicanos.

Las actividades relacionadas con los proyectos de las A en P iniciaron en 1998, encontrándose en proceso al 31 de diciembre de 1999. Los activos netos de las A en P al cierre de 1999 ascienden a $4,358 ($4,662 en 1998).

3. Clientes

Al 31 de diciembre de 1999, el rubro de clientes incluye estimaciones por facturar sujetas a aprobación de los clientes que ascienden a $9,334 ($7,305 en 1998). Adicionalmente, al 31 de diciembre de 1999 y 1998 se incluye un saldo de $5,566 y $5,540, respectivamente, por cuentas de cobro dudoso que se pretende recuperar mediante la vía judicial.

En 1998 se pactó con un cliente la recuperación del saldo a su cargo por $4,025 en 7 pagos a efectuar en 6 años a partir de 1999. La porción circulante, representada por el siguiente pago que se recibirá asciende a $274 ($321 en 1998).

4. Préstamos bancarios

En 1999 se liquidaron los préstamos que estaban vigentes al 31 de diciembre de 1998 y que a continuación se mencionan:

a) Préstamos bancarios a corto plazo denominados en dólares por US $1,575 miles contratados con Citibank Bahamas, a una tasa de interés del 7.45% al 7.73% anual, garantizados por las inversiones negociables que se incluyen en el rubro de efectivo e inversiones temporales. $17,584

b) Monto utilizado de la línea de crédito con Morgan Stanley en 1998, denominado en dólares por US $ 252 miles, con objeto de adquirir inversiones obteniendo un margen de utilidad entre la tasa de inversión y la tasa de préstamo. Las tasas de interés en promedio de los préstamos fueron de 7.62% anual en 1998. 2,819

Total de préstamos $20,403

5. Capital contable

a) Durante el año de 1999 se exhibieron 153,000 de la serie B-1, aportando un peso por cada acción.

b) Al 31 de diciembre de 1999, el capital social está representado por 9,890,874 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión del valor nominal, integrándose de la siguiente manera:

Capital social	**Serie**	**Número de acciones**	**Importe**
Fijo	A	899,170	$7,000
Variable	B	8,002,617	57,566

Variable	B-1	989,087	7,700
	9,890,874	72,266	
	Capital no exhibido	953,470	(8,563)
	Capital exhibido	8,937,404	63,703
	Complemento por actualización	138,000	
	Capital social	$201,703	

Al 31 de diciembre de 1999, el capital exhibido incluye 609,000 acciones que han sido recompradas.

c) En 1999 se incluyó una reclasificación al valor del capital social contra la reserva para la recompra de acciones, con efectos retroactivos al 31 de diciembre de 1997. Esto se derivó del registro de la recompra de acciones efectuadas en 1997 y años anteriores.

d) La Compañía podrá distribuir dividendos hasta el momento en que las utilidades futuras permitan recuperar las pérdidas acumuladas.

6. Posición en moneda extranjera

Al 31 de diciembre de 1999 PYP tiene una posición activa en moneda extranjera de US $336 miles (US $8,265 miles en 1998), que fueron convertidos a pesos al tipo de cambio de $9.5222 y $9.9395 por dólar, respectivamente.

7. Saldos y operaciones con partes relacionadas

a) Las cuentas por cobrar y por pagar a compañías afiliadas al 31 de diciembre de 1999 y 1998 se analizan como sigue:

	1999	**1998**
Cuentas por cobrar		
Inmobiliaria Barda, S.A. de C.V.	$ 558	$ 627
Baugus Engineering	609	
Otros	2	26
Total	$1,169	$ 653
Cuentas por pagar		
GR Servicios de personal, S.A. de C.V.	$ 538	$ 948
GR Servicios de personal Industrial, S.A. de C.V.	347	436
GBL Servicios Especializados de Personal, S.A. de C.V.	91	357
Tecningeniería en Mantenimiento, S.A.	362	
Total	$1,338	$ 1,741

b) Las transacciones con partes relacionadas por los años terminados al 31 de diciembre de 1999 y 1998, se analizan como sigue:

	1999	**1998**
Cargos a resultados por		
Servicios de personal		
GR Servicios de Personal, S.A. de C.V.	$4,870	$13,940
GR Servicios de Personal Industrial, S.A. de C.V.	3,156	1,410
GBL Servicios Especializados de Personal, S.A. de C.V.	384	1,364

8. Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Activo (IMPAC) y Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)

PYP y cada una de sus subsidiarias calculan el ISR, el IMPAC y la PTU en forma individual.

a) El ISR se calcula considerando como gravables o deducibles ciertas partidas tales como los efectos de la inflación, la depreciación actualizada, las provisiones y otros no deducibles para efectos fiscales.

b) En 1999 y 1998, PYP obtuvo una pérdida fiscal de $21,228 y de $25,441, respectivamente (a pesos nominales).

c) De acuerdo con la Ley del ISR es posible amortizar la pérdida fiscal de un ejercicio, actualizada por la inflación, contra la utilidad gravable de los diez ejercicios fiscales inmediatos siguientes. Al 31 de diciembre de 1999 las pérdidas fiscales por amortizar son las siguientes.

Año de origen	**Importe histórico**
1997	$18,097
1998	25,441
1999	21,228
	$64,766

d) PYP está sujeta al pago del IMPAC el cual se causa a razón de 1.8% sobre el promedio neto de la mayoría de los activos menos ciertos pasivos. Este impuesto se carga a los resultados del año y puede solicitarse su devolución o compensarse dentro de los diez años siguientes, siempre y cuando el ISR que se tenga que pagar sea mayor que el IMPAC.

El IMPAC del ejercicio 1999 y 1998 ascendió a $4,394 y a $2,598, respectivamente. El IMPAC de 1998 permitió acreditar ISR de ejercicios anteriores, lo cual se presenta como beneficio extraordinario en 1998.

e) La PTU se determina en términos generales sobre el resultado fiscal excluyendo el componente inflacionario y los efectos de la actualización de la depreciación del ejercicio.
f) En los términos del Boletín D-4 vigente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, no se han reconocido impuestos diferidos sobre las partidas de conciliación temporales para efectos de ISR y PTU, por considerarse que son de naturaleza recurrente y cuya fecha de materialización no se prevé en un periodo definido.
A partir del 1 de enero de 2000, el nuevo Boletín D-4 requiere la determinación de impuestos diferidos sobre todas las partidas temporales, aplicando la tasa del ISR vigente a la fecha de la emisión de la información financiera. A la fecha de la emisión de estos estados financieros la compañía no ha cuantificado el impacto de la adopción del nuevo boletín.
(R.- 122984)
GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Señores consejeros y accionistas:
Hemos examinado los balances generales no consolidados de Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 1999 y 1998 y los estados no consolidados de resultados, de variaciones en el capital contable y de cambios en la situación financiera que les son relativos por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías.
Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.
Como se menciona en la nota 1, los estados financieros adjuntos de Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C.V., fueron preparados con el propósito de cumplir con algunas disposiciones legales y estatutarias y, por lo tanto, no se consolidaron los estados financieros de su subsidiaria ni de las Asociaciones en Participación desarrolladas durante 1999, sino que la inversión en ambos casos se valuó mediante el método de participación. En esta misma fecha, emitimos nuestro dictamen sin salvedades sobre los estados financieros consolidados de Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C.V.
En nuestra opinión, los estados financieros no consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera no consolidada de Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 1999 y 1998 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y los cambios en su situación financiera no consolidados por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
7 de marzo de 2000.
Mancera, S.C.
Ernest & Young International
C.P.C. Alberto del Castillo V. Zepeda
Rúbrica.
Grupo Profesional PlaneaciOn y Proyectos, S.A. de C.V.
Informe del comisario
A la Asamblea de accionistas:
En mi carácter de comisario y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades Mercantiles y los estatutos de Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C.V., rindo a ustedes mi informe sobre los estados financieros no consolidados al 31 de diciembre de 1999, que presenta a ustedes el Consejo de Administración.
Asistí a las asambleas de accionistas y juntas del Consejo de Administración a las que fui convocado, y obtuve de los directores y administradores la información sobre las operaciones, documentación y registro que consideré necesario examinar. Mi revisión se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas.
En mi opinión, los criterios y políticas contables y de información empleados por la sociedad y considerados por los administradores para preparar los estados financieros que se presentan a esta asamblea son adecuados y suficientes y se aplicaron en forma consistente con el ejercicio anterior; por lo tanto, también en mi opinión, los estados financieros antes mencionados reflejan en forma veraz, razonable y suficiente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera no consolidada de Grupo Profesional Planeación y

Proyectos, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 1999, los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación financiera no consolidados por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

7 de marzo de 2000.

Comisario

C.P.C. Alberto del Castillo V. Zepeda

Rúbrica.

GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

BALANCES GENERALES NO CONSOLIDADOS

(miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999)

	al 31 de diciembre de	
Activo	**1999**	**1998**
Activo circulante		
Efectivo e inversiones temporales	$1,606	$5,944
Cuentas por cobrar		
Clientes, neto de la estimación para cuentas de cobro dudoso por $ 1,783 en 1999 ($2,003 en 1998)	11,160	11,709
Porción circulante de clientes a largo plazo	274	321
Partes relacionadas	3,439	653
Otros deudores	1,708	1,383
Total del activo circulante	18,187	20,010
Inversión en subsidiaria	50,684	100,353
Inversiones en asociaciones en participación	2,179	4,662
Clientes por cobrar a largo plazo	2,847	3,659
Equipos de		
Oficina	16,841	15,426
Transporte	980	2,200
Cómputo	9,771	9,771
Topográfico	8,133	8,133
	35,725	35,530
Depreciación acumulada	(19,805)	(19,533)
Equipo, neto	15,920	15,997
Otros activos	284	2,535
Total del activo	$90,101	$147,216
Pasivo y capital contable		
Pasivo a corto plazo		
Préstamos bancarios		$17,584
Cuentas por pagar	$ 545	956
Partes relacionadas	5,327	16,263
Impuestos por pagar	3,045	2,558
Total del pasivo	8,917	37,361
Capital contable		
Capital social	201,703	201,544
Insuficiencia en la actualización del capital contable	(51,623)	(32,510)
(Pérdidas) acumuladas		
De años anteriores	(59,179)	(15,740)
Del año	(9,717)	(43,439)
	(68,896)	(59,179)
Total del capital contable	81,184	109,855
Total del pasivo y capital contable	$90,101	$147,216

Véanse las notas que se acompañan

GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

ESTADOS DE RESULTADOS NO CONSOLIDADOS

(miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999)

Año terminado el 31 de diciembre de

	1999	**1998**
Ingresos por proyectos	$35,861	$61,483
Costos y gastos de operación		
Costos de los proyectos	49,047	78,257
Gastos de operación	1,730	3,268
Gastos generales	9,852	11,225

Pérdida de operación	(24,768)	(31,267)
Producto (costo) integral de financiamiento		
Intereses ganados	302	662
Gasto por intereses	(488)	(3,437)
Ganancia por fluctuaciones cambiarias	5,489	3,030
Pérdida por fluctuaciones cambiarias	(4,759)	(2,571)
Utilidad (pérdida) por posición monetaria	451	(1,357)
Realización de la utilidad en traducción por reembolso de capital	8,853	
	9,848	(3,673)
Otros productos, neto	1,046	252
Pérdida antes de impuesto al activo y la participación en los resultados de las subsidiarias y asociaciones en participación	(13,874)	(34,688)
Impuesto al activo	(4,394)	(2,598)
Participación en las utilidades (pérdidas) de las subsidiarias	10,747	(13,413)
Participación en las (pérdidas) utilidades de las asociaciones en participación	(2,196)	4,662
Pérdida antes de partida extraordinaria	(9,717)	(46,037)
Partida extraordinaria por beneficio por recuperación de impuesto sobre la renta pagado en exceso de impuesto al activo en ejercicios anteriores		2,598
Pérdida neta	$(9,717)	(43,439)
Resultado por acción en pesos		
Pérdida antes de partidas extraordinarias	$(1.1667)	$(5.6311)
Utilidad por partidas extraordinarias		$ 0.3179
Pérdida por acción en pesos	$(1.1667)	$(5.3132)

Véanse las notas que se acompañan

GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE NO CONSOLIDADOS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998

(miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999)

Concepto	**Capital social**	**Reserva legal**	**Reserva para recompra de acciones**
Saldo ajustado al 31 de diciembre de 1997	$216,557	$8,299	$208	$1,427
Corrección al capital social por recompra de acciones	(15,013)		15,013	
Saldo al 31 de diciembre de 1997	201,544	8,299	15,221	1,427
Aplicación de la pérdida del año anterior				(40,687)
Resultado por tenencia de activos no monetarios				
Utilidad en traducción del ejercicio				
Resultado del ejercicio				
Saldo al 31 de diciembre de 1998	201,544	8,299	15,221	(39,260)
Aplicación de la pérdida del año anterior				(43,439)
Incremento de capital social	159			
Resultado por tenencia de activos no monetarios				
Pérdida en traducción del ejercicio				
Resultado del ejercicio				
Realización de la utilidad en traducción por reembolso de capital				
Saldo al 31 de diciembre de 1999	$201,703	$8,299	$15,221	$(82,699)

Véanse las notas que se acompañan

GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA NO CONSOLIDADOS

(miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999)

	Años terminados el	
	1999	**31 de diciembre de 1998**
Operación		
Pérdida antes de partidas extraordinarias	$(9,717)	$(46,037)

Beneficio por recuperación del impuesto al activo		2,598
Pérdida neta	(9,717)	(43,439)
Partidas aplicadas a resultados que no requirieron el uso de recursos		
Depreciación	3,078	1,720
Participación en los resultados de las subsidiarias	(10,747)	13,413
Participación en los resultados de las asociaciones en participación	2,196	
Realización de la utilidad en traducción por reembolso de capital	(8,853)	
Recursos aplicados al resultado del ejercicio	(24,043)	(28,306)
Recursos provenientes de (aplicados a) los renglones del capital de trabajo		
Clientes	1,408	10,246
Partes relacionadas	(13,722)	10,853
Otros deudores	(325)	(447)
Otros activos	2,251	987
Impuesto sobre la renta pagado en exceso		1,162
Cuentas por pagar	(411)	(1,567)
Impuestos por pagar	487	(1,542)
Participación de los trabajadores en las utilidades		(24)
Recursos aplicados a las operaciones	(34,355)	(8,637)
Financiamiento		
Pagos de préstamos bancarios	(17,425)	12,255
Incremento de capital social	159	
Recursos aplicados a las actividades de financiamiento	(17,266)	(12,255)
Inversión		
Desinversión (inversión) neta en activo fijo	117	(2,557)
Inversión en subsidiaria	(47)	
Desinversión en subsidiaria	47,372	
Inversión en asociaciones en participación		(2,096)
Recursos provenientes de (aplicados a) los renglones del capital de trabajo	47,442	(4,653)
Disminución de efectivo	(4,338)	(1,036)
Efectivo e inversiones temporales		
Al inicio del año	5,944	6,979
Al final del año	$1,606	$5,944

Véanse las notas que se acompañan

GRUPO PROFESIONAL PLANEACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NO CONSOLIDADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998

(miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 1999)

1. Operaciones y resumen de las principales políticas contables

Actividad de la empresa

Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C.V. (PYP) es una empresa mexicana, constituida el 28 de abril de 1986 y su actividad principal es la prestación de toda clase de servicios profesionales de ingeniería, consultoría y diseño.

Políticas contables

Las principales políticas contables seguidas por la Compañía se resumen a continuación.

a)Bases de elaboración de los estados financieros y valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias y la participación en asociaciones en participación

PYP tiene la política de preparar estados financieros consolidados. Los relativos al 31 de diciembre de 1999 y 1998 fueron emitidos en esta misma fecha. En la nota 2 adjunta se incluye un resumen de los balances generales consolidados por los años terminados el 31 de diciembre de 1999 y 1998.

Los estados financieros adjuntos han sido preparados con el propósito de cumplir con algunas disposiciones legales y estatutarias, por lo que las inversiones en acciones de las subsidiarias y la participación en las Asociaciones en Participación (A en P) fueron valuadas mediante el método de participación, el cual consiste en reconocer en la compañía tenedora la proporción que tiene en los resultados del ejercicio y en el capital contable de las compañías subsidiarias y en el de las A en P.

Con este método de valuación se igualan el capital contable y los resultados del ejercicio de los estados financieros consolidados y los no consolidados.

Para efectos de la aplicación del método de participación, los estados financieros de las subsidiarias se convierten a pesos siguiendo los lineamientos del Boletín B-15 Transacciones en moneda extranjera y

conversión de estados financieros de operaciones extranjeras, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Para efectos de la conversión de estas subsidiarias, se consideraron como entidades extranjeras conforme a lo establecido en este boletín.

b) Reconocimiento de los efectos de la inflación

PYP incorpora los efectos de la inflación en la información financiera con base en las disposiciones del Boletín B-10 (Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera) y sus adecuaciones emitidos por el IMCP, y consecuentemente, las cifras de los estados financieros y sus notas se expresan en miles de pesos de poder adquisitivo de la fecha del último ejercicio reportado.

Los estados financieros de 1998 fueron actualizados por la inflación del año 1999 que ascendió a 12.32%.

El método seguido para la actualización de los equipos y su depreciación del año y acumulada del resultado por posición monetaria y el capital contable fue el de ajuste por cambios en el nivel general de precios, mediante el uso de los factores derivados del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicados por el Banco de México.

Los ingresos, costos y gastos se actualizan del mes en que se incurren hasta el cierre, con base en factores derivados del INPC.

La insuficiencia en la actualización del capital contable incluye el resultado por tenencia de activos no monetarios (RETANM), el efecto monetario inicial y el efecto por traducción proveniente de la subsidiaria en el extranjero (ver nota 3).

El RETANM representa la diferencia entre el incremento en el valor actualizado de los activos no monetarios y el aumento que hubieran tenido dichos activos únicamente por efectos de la inflación.

El efecto monetario inicial es el resultado acumulado por posición monetaria a la fecha de la primera aplicación del Boletín B-10.

El resultado por posición monetaria representa el efecto de mantener activos y pasivos monetarios durante periodos inflacionarios, los cuales están expresados en unidades monetarias que, a pesar de conservar su valor nominal, disminuyen su poder adquisitivo. Durante 1999 y 1998 se obtuvo una utilidad y una pérdida por posición monetaria de $451 y $1,357, respectivamente, dichas cantidades se aplicaron al costo integral de financiamiento dentro de los resultados de cada periodo.

c) Inversiones temporales

Las inversiones temporales se presentan a su costo más intereses devengados, cifra que es similar a su valor de mercado.

d) Equipos y su depreciación

Este renglón se presenta valuado a su costo de adquisición aumentado por su actualización. Las estimaciones para depreciación se computan por el método de línea recta con base en las vidas útiles estimadas, a tasas que varían del 10 al 25% anual.

e) Obligaciones laborales

Los pagos por primas de antigüedad se aplican a los resultados del ejercicio en que se incurren. El pasivo por este concepto, conforme a las disposiciones del Boletín D-3, ascendió a $160 y $166 en 1999 y 1998, respectivamente.

f) Ingresos por proyectos

Los ingresos por los servicios prestados se registran conforme al avance de cada proyecto.

g) Fluctuaciones cambiarias

Los activos y pasivos en moneda extranjera se expresan en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha del balance general. Las fluctuaciones cambiarias se aplican a resultados.

2. Estados financieros consolidados

El 7 de marzo de 2000 se emitieron los estados financieros consolidados de Grupo Profesional Planeación y Proyectos, S.A. de C.V., y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 1999 y 1998.

Los estados financieros consolidados incluyen los relativos a PYP y los de su subsidiaria Internacional de Planeación y Proyectos, S.A., empresa panameña. Adicionalmente, los estados financieros al 31 de diciembre de 1999 incluyen en la consolidación a dos nuevas subsidiarias norteamericanas constituidas el 31 de agosto de 1999, PYPSA US Holding, Inc. y PYPSA Holding Inc. Las tres subsidiarias son poseídas por PYP al 100%. A su vez, las dos subsidiarias norteamericanas en forma conjunta participan en el 100% del capital social y en el 80% de los resultados de PYPSA International LTD, empresa norteamericana.

Los estados financieros consolidados también incluyen los activos, pasivos, ingresos y gastos de las dos A en P, las cuales se consolidan proporcionalmente (al 50%), en virtud de que PYP tiene el control conjunto sobre dichas A en P, de conformidad con los lineamientos de la Norma Internacional de Contabilidad número 31, emitida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC, por sus siglas en inglés).

A continuación se presenta un resumen de dichos estados financieros consolidados:

	Al 31 de diciembre de	
	1999	**1998**
Balances generales consolidados		

Activo		
Activo circulante		
Efectivo e inversiones temporales	$55,017	$92,617
Cuentas por cobrar	23,383	23,767
Total del activo circulante	78,400	116,384
Clientes por cobrar a largo plazo	2,847	3,659
Equipo, neto	16,602	16,314
Otros activos	1,675	2,797
Total del activo	$99,524	$139,154
Pasivo y capital contable		
Préstamos bancarios		$20,403
Otras cuentas por pagar	$18,190	8,896
Total del pasivo	18,190	29,299
Capital contable		
Capital social	201,703	201,544
Insuficiencia en la actualización del capital contable	(60,863)	(54,006)
Pérdida acumulada	(68,896)	(59,179)
Utilidad en traducción	9,240	21,496
Capital contable mayoritario	81,184	109,855
Interés minoritario	150	
Total del capital contable	81,334	109,855
Total del pasivo y capital contable	$99,524	$139,154

	Por el año terminado el 31 de diciembre de	
	1999	**1998**
Estados de resultados consolidados		
Ingresos por proyectos	$44,247	$90,027
Costo y gastos de operación	(71,366)	(118,123)
Pérdida de operación	(27,119)	(28,096)
Costo integral de financiamiento	(20,972)	(16,620)
Otros productos, neto	974	1,277
Pérdida antes de impuesto al activo	(5,173)	(43,439)
Impuesto al activo	(4,394)	(2,598)
Pérdida antes de partida extraordinaria	(9,567)	(46,037)
Partida extraordinaria por beneficio por recuperación de impuesto sobre la renta pagado en exceso de impuesto al activo		2,598
Pérdida neta consolidada	$(9,567)	$(43,439)
Pérdida neta mayoritaria	(9,717)	(43,439)
Utilidad neta minoritaria	150	
	$9,567	$(43,439)

3. Inversiones en asociaciones en participación

En 1997, PYP celebró dos contratos de A en P con Tecningeniería en Mantenimiento, S.A. de C.V., para llevar a cabo sendos proyectos de ingeniería para Petróleos Mexicanos. PYP comparte el control (control conjunto) de dichas A en P con el otro socio.

Las actividades relacionadas con los proyectos de las A en P iniciaron en 1998, encontrándose en proceso al 31 de diciembre de 1999. Los activos netos de las A en P al cierre de 1999 ascienden a $4,358 ($4,662 en 1998).

4. Clientes

Al 31 de diciembre de 1999, el rubro de clientes incluye estimaciones por facturar sujetas a aprobación de los clientes que asciende a $9,334 ($7,305 en 1998). Adicionalmente, al 31 de diciembre de 1999 y 1998 se incluye un saldo de $5,566 y $5,540, respectivamente, por cuentas de cobro dudoso que se pretenden recuperar mediante la vía judicial.

En 1998 se pactó con un cliente la recuperación del saldo a su cargo por $4,025 en 7 pagos a efectuar en 6 años a partir de 1999. La porción circulante, representada por el siguiente pago que se recibirá asciende a $274 ($ 321 en 1998).

5. Préstamos bancarios

En 1999 se liquidaron los préstamos bancarios a corto plazo vigentes al 31 de diciembre de 1998, denominados en dólares por $ 17,584 (US $1,575 miles) contratados con Citibank Bahamas a una tasa de interés del 7.45% al 7.73% anual, garantizados por las inversiones negociables que se mantenían en la subsidiaria de Panamá.

6. Capital contable

a) Durante el año de 1999 se exhibieron 153,000 acciones de la serie B-1, aportando un peso por cada acción.

b) Al 31 de diciembre de 1999 el capital social está representado por 9,890,874 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión del valor nominal, integrándose de la siguiente manera:

Capital social	**Serie**	**Número de acciones**	**Importe**
Fijo	A	899,170	$7,000
Variable	B	8,002,617	57,566
Variable	B-1	989,087	7,700
	9,890,874	72,266	
	Capital no exhibido	953,470	(8,563)
	Capital exhibido	8,937,404	63,703
	Complemento por actualización		138,000
	Capital social		$201,703

Al 31 de diciembre de 1999 y 1998, el capital exhibido incluye 609,000 acciones que han sido recompradas.

c) En 1999 se incluyó una reclasificación del valor del capital social contra la reserva para la recompra de acciones, con efectos retroactivos al 31de diciembre de 1997. Esto se derivó del registro de la compra de acciones efectuadas en 1997 y años anteriores.

d) La Compañía podrá distribuir dividendos hasta el momento en que las utilidades futuras permitan recuperar las pérdidas acumuladas.

7. Utilidad en traducción

La utilidad en traducción proviene del efecto cambiario originado por las inversiones en dólares norteamericanos que se tienen en las subsidiarias, que se refleja como un efecto de traducción dentro del capital contable. En el momento en que se liquida o reembolsa la inversión en el extranjero, la utilidad en traducción correspondiente se registra como un ingreso en el estado de resultados.

Conforme a lo anterior, en 1999 se registró en resultados utilidad en traducción por $8,853 proveniente del reembolso de capital de la subsidiaria Internacional de Planeación y Proyectos, S.A.

8. Posición en moneda extranjera

Al 31 de diciembre de 1999 PYP tiene una posición pasiva en moneda extranjera de US $336 miles (posición pasiva de US $724 miles en 1998), que fueron convertidos a pesos al tipo de cambio de $9.5222 y $9.9395 por dólar, respectivamente.

9. Saldos y operaciones con partes relacionadas

a) Las cuentas por cobrar y por pagar a compañías afiliadas al 31 de diciembre de 1999 y 1998 se analizan como sigue:

Cuentas por cobrar	**1999**	**1998**
Inmobiliaria Barda, S.A. de C.V	$558	$627
PYPSA Internacional, LTD	836	
PYPSA US. Holding, Inc.	1,410	
Bauguss Engineering Inc.	609	
Otros	26	26
Total	$3,439	$653
Cuentas por pagar		
Internacional de PyP, S.A	$3,936	$14,522
Asociación en participación PYSA TECMAN	415	
GR Servicios de Personal, S.A. de C.V.	538	948
GR Servicios de Personal Industrial, S.A. de C.V.	347	436
GBL Servicios Especializados de Personal, S.A. de C.V.	91	357
Total	$5,327	$16,263

b) Las transacciones con partes relacionadas por los años terminados al 31 de diciembre de 1999 y 1998 se analizan como sigue:

	1999	**1998**
Cargos a resultados por		
Servicios de personal		
GR Servicios de Personal, S.A. de C.V.	$4,870	$13,940
GR Servicios de Personal Industrial, S.A. de C.V.	3,156	1,410
GBL Servicios Especializados de Personal, S.A. de C.V.	384	1,364
Internacional de PyP, S.A.		
Préstamos recibidos		9,430

10.Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Activo (IMPAC) y Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

a) El ISR se calcula considerando como gravables o deducibles ciertas partidas, tales como los efectos de la inflación, la depreciación actualizada, las provisiones y otros no deducibles para efectos fiscales.
b) En 1999 y 1998, PYP obtuvo una pérdida fiscal de $21,228 y $25,441 (pesos nominales), respectivamente.
c) De acuerdo con la Ley del ISR es posible amortizar la pérdida fiscal de un ejercicio, actualizada por la inflación contra la utilidad gravable de los diez ejercicios fiscales inmediatos siguientes. Al 31 de diciembre de 1999 las pérdidas fiscales por amortizar son las siguientes:

Año de origen	Importe histórico	Año de prescripción
1997	$18,097	2007
1998	25,441	2008
1999	21,228	2009
	$64,766	

d) PYP está sujeta al pago del IMPAC, el cual se causa a razón de 1.8% sobre el promedio neto de la mayoría de los activos menos ciertos pasivos. Este impuesto se carga a los resultados del año, y puede solicitarse su devolución o compensarse dentro de los diez años siguientes, siempre y cuando el ISR que se tenga que pagar sea mayor que el IMPAC.
El IMPAC del ejercicio 1999 y 1998 ascendió a $4,394 y $2,598, respectivamente. El IMPAC de 1998 permitió acreditar ISR de ejercicios anteriores, lo cual se presenta como beneficio extraordinario en 1998.
e) La PTU se determina en términos generales sobre el resultado fiscal, excluyendo el componente inflacionario y los efectos de la actualización de la depreciación del ejercicio.
f) En los términos del Boletín D-4 vigente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, no se han reconocido impuestos diferidos sobre las partidas de conciliación temporales para efectos de ISR y PTU, por considerarse que son de naturaleza recurrente y cuya fecha de materialización no se prevé en un periodo definido.
A partir del 1 de enero de 2000, el nuevo Boletín D-4 requiere la determinación de impuestos diferidos sobre todas las partidas temporales, aplicando la tasa del ISR vigente a la fecha de la emisión de la información financiera. A la fecha de la emisión de estos estados financieros, la Compañía no ha cuantificado el impacto de la adopción del nuevo boletín.

(R.- 122985)

Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
México
Juzgado Tercero de lo Concursal
EDICTO

El ciudadano Juez Tercero de lo Concursal, Justino Angel Montes de Oca Contreras, del Juicio de Suspensión de Pagos de Inmobiliaria Comercial Tor, S.A. de C.V., expediente número 15/99, en cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha diez de marzo del año 2000, por resolución de fecha treinta de marzo del año próximo pasado, se declaró en estado de suspensión de pagos a Inmobiliaria Comercial Tor, S.A. de C.V., se designó síndico a la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, lo que se hace del conocimiento de los presuntos acreedores emplazándoseles por este medio para que presenten sus demandas de reconocimiento de crédito dentro del plazo de cuarenta y cinco días, contados a partir del siguiente al de la última publicación.
Para su publicación por tres veces, en días hábiles, en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico El Universal, de esta ciudad.
México, D.F., a 20 de marzo de 2000.
El C. Secretario de Acuerdos "A"
Lic. José Ventura Vázquez Reyes
Rúbrica.

(R.- 122987)

Estados Unidos Mexicanos
Procuraduría General de la República
Unidad Especializada en Delincuencia Organizada
Coordinación General
Coordinación I del Ministerio Público de la Federación
EDICTO

Se notifica a Manuel Paulino Vázquez Robles, o a su representante legal, o a quien resulte legalmente con derecho al inmueble ubicado en Quinta Hermosa número 8907, colonia Las Quintas, código postal 32041, Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, que se encuentra integrado por construcción, muebles y objetos, que en fecha 17 de febrero de 2000, esta Representación Social de la Federación, dentro de los autos de la Averiguación Previa PGR/UEDO/065/99, ordenó el aseguramiento provisional, del inmueble mencionado,

con fundamento en los artículos 40 y 400 bis del Código Penal Federal; 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, y 8 fracción II incisos a) y b) de la Ley Federal para la Administración de los Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados. Lo anterior, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga en las oficinas que ocupa esta Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 23, 7o. piso, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, apercibiéndose al interesado que no podrá enajenar o gravar el bien asegurado, así como de no manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos de ley, el bien causará abandono a favor de la Federación.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 20 de marzo de 2000.

El Agente del Ministerio Público de la Federación

Lic. Mauricio E. Montes de Oca Durán

Rúbrica.

(R.- 123026)

Estados Unidos Mexicanos

Procuraduría General de la República

Delegación Estatal Puebla

Agencia del Ministerio Público de la Federación

Tehuacán, Pue.

Sección Penal

Mesa II

Oficio 506

Expediente Av. Prev. 219/99/TH

NOTIFICACION POR EDICTO

A quien resulte responsable del vehículo que a continuación se describe.

Presente.

En cumplimiento a mi acuerdo de esta fecha, dictado en el expediente señalado al rubro, con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado A constitucionales; 40 y 41 del Código Penal Federal; 2o., 123 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1o., 6o., 7o., 8o. y 44 de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados. Esta Fiscalía de la Federación le notifica que se decretó el aseguramiento de su unidad tipo Sedán, marca Chevrolet Citation, modelo 1984, número de identificación 1X08ZES106731, placas de circulación XTH-7620 del Estado de Tlaxcala, por estar relacionado con los delitos culposos de daño en propiedad ajena y ataques a las vías generales de comunicación, indagatoria iniciada en contra de quien resulte responsable; y que cuenta con un término de no más de seis meses a partir de la fecha de esta notificación, para que alegue lo que a su derecho corresponda.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tehuacán, Pue., a 11 de febrero de 2000.

El Agente del Ministerio Público de la Federación

Lic. José Luis Buelna Meléndrez

Rúbrica.

(R.- 123029)

Estados Unidos Mexicanos

Procuraduría General de la República

Delegación Estatal Puebla

Agencia del Ministerio Público de la Federación

Tehuacán, Pue.

Sección Penal

Mesa II

Oficio 521

Expediente Av. Prev. 093/99/TH

NOTIFICACION POR EDICTO

A quien resulte responsable del vehículo que a continuación se describe.

Presente.

En cumplimiento a mi acuerdo de esta fecha, dictado en el expediente señalado al rubro, con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado A constitucionales; 40 y 41 del Código Penal Federal; 2o., 123 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1o., 6o., 7o., 8o. y 44 de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados. Esta Fiscalía de la Federación le notifica que se decretó el aseguramiento de su unidad tipo Sedán, marca Renault, se ignora el modelo, número de identificación A10006681, placas de circulación TPH-5387 particulares del Estado de Puebla, por estar relacionado con los

delitos culposos de lesiones, daño en propiedad ajena y ataques a las vías generales de comunicación, indagatoria iniciada en contra de quien resulte responsable; y que cuenta con un término de no más de seis meses a partir de la fecha de esta notificación, para que alegue lo que a su derecho corresponda.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tehuacán, Pue., a 14 de febrero de 2000.
El Agente del Ministerio Público de la Federación
Lic. José Luis Buelna Meléndrez
Rúbrica.
(R.- 123032)
Estados Unidos Mexicanos
Procuraduría General de la República
Célula de Procedimientos Penales
Jacona, Mich.
Expediente A. P. 76/99-bis
NOTIFICACION POR EDICTO
C. Propietario de la bicicleta tipo montaña, color rojo, marca Specialized.
Mediante acuerdo dictado con fecha seis de febrero del año en curso, dentro de la indagatoria al rubro señalada, que se instruye en contra de quien resulte responsable, por un delito contra la salud, se notifica a usted que la bicicleta marca Specialized, de montaña, de color rojo sin número de serie, se aseguró con fecha 18 de abril de 1999, por lo que se le apercibe de que no enajene o grave el mueble en cita, así como que cuenta con un plazo de seis meses para que haga las manifestaciones que a su derecho convenga y se pone a su disposición en las instalaciones de esta oficina el inventario levantado con el motivo del aseguramiento, quedando apercibido de que en caso de no hacerlo así, el bien asegurado causará estado de abandono en favor de la Federación.
Publíquese en el diario de mayor circulación en Jacona, Michoacán, por dos ocasiones con intervalo de tres días.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Jacona, Mich., a 13 de marzo de 2000.
El Agente del Ministerio Público de la Federación integrante de la Célula de Jacona
Lic. Ramiro Ramírez Carrillo
Rúbrica.
(R.- 123036)
Estados Unidos Mexicanos
Procuraduría General de la República
Unidad Especializada en Delincuencia Organizada
Coordinación General
Coordinación I del Ministerio Público de la Federación
EDICTO
Se notifica a Carlos Sevilla Sánchez, o a su representante legal, o a quien resulte legalmente con derecho al inmueble ubicado en Privada Rosita número 4, colonia El Pensamiento, Antigua Sección de Zaragoza, Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, que se encuentra integrado por construcción, muebles y objetos, que en fecha 18 de febrero de 2000, esta Representación Social de la Federación, dentro de los autos de la Averiguación Previa PGR/UEDO/065/99, ordenó el aseguramiento provisional, del inmueble mencionado, con fundamento en los artículos 40 y 400 bis del Código Penal Federal; 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, y 8 fracción II incisos a) y b) de la Ley Federal para la Administración de los Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados. Lo anterior, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga en las oficinas que ocupa esta Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 23, 7o. piso, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, apercibiéndose al interesado que no podrá enajenar o gravar el bien asegurado, así como de no manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos de ley, el bien causará abandono a favor de la Federación.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 20 de marzo de 2000.
El Agente del Ministerio Público de la Federación
Lic. Mauricio E. Montes de Oca Durán
Rúbrica.
(R.- 123037)
Estados Unidos Mexicanos

Procuraduría General de la República
Unidad Especializada en Delincuencia Organizada
Coordinación General
Coordinación I del Ministerio Público de la Federación
EDICTO
Se notifica a Alejandro Martínez Rascón, o a su representante legal, o a quien resulte legalmente con derecho al inmueble ubicado en avenida Gómez Morín número 7686, colonia Campestre, Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, que se encuentra integrado por construcción, muebles y objetos, que en fecha 18 de febrero de 2000, esta Representación Social de la Federación, dentro de los autos de la Averiguación Previa PGR/UEDO/065/99, ordenó el aseguramiento provisional, del inmueble mencionado, con fundamento en los artículos 40 y 400 bis del Código Penal Federal; 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, y 8 fracción II incisos a) y b) de la Ley Federal para la Administración de los Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados. Lo anterior, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga en las oficinas que ocupa esta Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 23, 7o. piso, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, apercibiéndose al interesado que no podrá enajenar o gravar el bien asegurado, así como de no manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos de ley, el bien causará abandono a favor de la Federación.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 20 de marzo de 2000.
El Agente del Ministerio Público de la Federación
Lic. Carlos Mejía Granados
Rúbrica.
(R.- 123039)
Estados Unidos Mexicanos
Procuraduría General de la República
Unidad Especializada en Delincuencia Organizada
Coordinación General
Coordinación I del Ministerio Público de la Federación
EDICTO
Se notifica a Eduardo Rafael Rosas García a sus padres Jesús Eduardo Rosas Picos y Angélica María García Ruiz de Rosas o a su representante legal, o a quien resulte legalmente con derecho al inmueble ubicado en Condominio Residencial San Marcos, sito en Calzada del Río número 8131, casa sin número (casa 9), colonia Residencial San Marcos, código postal 32422, a un lado de la casa 8 y enfrente de la casa 16, Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, que se encuentra integrada por construcción, muebles y objetos, que en fecha 17 de febrero de 2000, esta Representación Social de la Federación, dentro de los autos de la Averiguación Previa PGR/UEDO/065/99, ordenó el aseguramiento provisional, del inmueble mencionado, con fundamento en los artículos 40 y 400 bis del Código Penal Federal, 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, y 8 fracción II incisos a) y b) de la Ley Federal para la Administración de los Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados. Lo anterior, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga en las oficinas que ocupa esta Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 23, 7o. piso, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, apercibiéndose al interesado que no podrá enajenar o gravar el bien asegurado, así como de no manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos de ley, el bien causará abandono a favor de la Federación.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 20 de marzo de 2000.
El Agente del Ministerio Público de la Federación
Lic. Mauricio E. Montes de Oca Durán
Rúbrica.
(R.- 123042)
Estados Unidos Mexicanos
Procuraduría General de la República
Unidad Especializada en Delincuencia Organizada
Coordinación General
Coordinación I del Ministerio Público de la Federación
EDICTO
Se notifica a Florentina Villalobos Villalobos de Sandoval, o a su representante legal, o a quien resulte legalmente con derecho al inmueble ubicado en calle Santa María sin número, colonia Campestre San Marcos, código postal 32435, Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, que en fecha 18 de febrero de 2000,

esta Representación Social de la Federación, dentro de los autos de la Averiguación Previa PGR/UEDO/065/99, ordenó el aseguramiento provisional, del inmueble mencionado, con fundamento en los artículos 40 y 400 bis del Código Penal Federal; 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, y 8 fracción II incisos a) y b) de la Ley Federal para la Administración de los Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados. Lo anterior, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga en las oficinas que ocupa esta Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 23, 7o. piso, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, apercibiéndose al interesado que no podrá enajenar o gravar el bien asegurado, así como de no manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos de ley, el bien causará abandono a favor de la Federación.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 20 de marzo de 2000.

El Agente del Ministerio Público de la Federación

Lic. Carlos Mejía Granados

Rúbrica.

(R.- 123043)

Estados Unidos Mexicanos

Procuraduría General de la República

Unidad Especializada en Delincuencia Organizada

Coordinación General

Coordinación I del Ministerio Público de la Federación

EDICTO

Se notifica a Rodolfo Antonio Quevedo Gallardo, a Luis Alfredo Murgía Lardizábal o a su representante legal, o a quien resulte legalmente con derecho al inmueble ubicado en calle Quinta Hermosa número 8903, fraccionamiento Las Quintas, código postal 32401, Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, que se encuentra integrado por construcción, muebles y objetos, que en fecha 17 de febrero de 2000, esta Representación Social de la Federación, dentro de los autos de la Averiguación Previa PGR/UEDO/065/99, ordenó el aseguramiento provisional, del inmueble mencionado, con fundamento en los artículos 40 y 400 bis del Código Penal Federal; 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, y 8 fracción II incisos a) y b) de la Ley Federal para la Administración de los Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados. Lo anterior, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga en las oficinas que ocupa esta Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 23, 7o. piso, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, apercibiéndose al interesado que no podrá enajenar o gravar el bien asegurado, así como de no manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos de ley, el bien causará abandono a favor de la Federación.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 20 de marzo de 2000.

El Agente del Ministerio Público de la Federación

Lic. Carlos Mejía Granados

Rúbrica.

(R.- 123046)

Estados Unidos Mexicanos

Procuraduría General de la República

Unidad Especializada en Delincuencia Organizada

Coordinación General

Coordinación I del Ministerio Público de la Federación

EDICTO

Se notifica a Mercedes Ríos Holguín o a su representante legal, o a quien resulte legalmente con derecho al inmueble ubicado en Miguel Cabrera número 346, colonia Alamos de San Lorenzo, código postal 32340, Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, que en fecha 18 de febrero de 2000, esta Representación Social de la Federación, dentro de los autos de la Averiguación Previa PGR/UEDO/065/99, ordenó el aseguramiento provisional, del inmueble mencionado, con fundamento en los artículos 40 y 400 bis del Código Penal Federal; 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, y 8 fracción II incisos a) y b) de la Ley Federal para la Administración de los Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados. Lo anterior, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga en las oficinas que ocupa esta Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 23, 7o. piso, colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, apercibiéndose al interesado que no podrá enajenar o gravar el bien asegurado, así como de no manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos de ley, el bien causará abandono a favor de la Federación.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 20 de marzo de 2000.
El Agente del Ministerio Público de la Federación
Lic. Carlos Mejía Granados
Rúbrica.
(R.- 123050)
Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia de Supervisión Especializada
Dirección General de Supervisión de Organizaciones Auxiliares no Agrupadas
Dirección de Diagnóstico y Seguimiento "2"
Oficio 601-II-14833
Expediente 721.1(U-742) /1
NOTIFICACION POR EDICTO
Unión de Crédito Constitución, S.A. de C.V.
y/o representante legal de la misma.
En virtud de que se desconoce la ubicación actual de las oficinas de la Unión de Crédito Constitución, S.A. de C.V., esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conforme a lo previsto en el artículo 1070 del capítulo IV, título primero, libro quinto del Código de Comercio, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, procede notificar por edictos el oficio de emplazamiento cuyo resumen se detalla a continuación:
Oficio No. 601-II-14832.
Expediente 721.1(U-742)/1.
Autoridad emisora: Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Asunto: Emplazamiento para la revocación de su autorización para operar.
Unión de Crédito Constitución, S.A. de C.V.
y/o representante legal de la misma.
Oficio No. 601-II-14833.
Expediente No. 721.1(U-742)/1.
Resolución: **Unica.-** Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se concede a Unión de Crédito Constitución, S.A. de C.V., un plazo de quince días naturales para que en uso del derecho de audiencia que les otorga el tercer párrafo del citado artículo 78, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con la causal de revocación de su autorización para operar como organización auxiliar del crédito, toda vez que se encuentra ubicada en la causal a que se refiere la fracción V del multicitado artículo 78, al no cumplir con su objeto social, ya que ha suspendido actividades.
Se le hace saber a la Unión de Crédito Constitución, S.A. de C.V., y/o a su representante legal, que en las oficinas de esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sitas en avenida Insurgentes Sur número 1971, torre Norte, 7o. piso, conjunto Plaza Inn, colonia Guadalupe Inn, México, Distrito Federal, se encuentra a disposición el original del referido oficio de emplazamiento, a efecto de que dentro de un plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente al de la última publicación del presente oficio, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga respecto de las resoluciones mencionadas, con apercibimiento de que de no hacerlo, esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y con los elementos que obran en el expediente relativo, dictará resolución definitiva.
Atentamente
México, D.F., a 18 de febrero de 2000.
Vicepresidente de Supervisión Especializada
C.P. Alejandro Vargas Durán
Rúbrica.
(R.- 123218)
Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
México
Juzgado Primero de lo Concursal
Secretaría A
Expediente 45/91
EDICTO
Se convoca a los acreedores de la suspensión de pagos de Torres Rivera Fortino, cuaderno principal expediente 45/91, a la junta de acreedores para el reconocimiento, rectificación y graduación de créditos,

misma que tendrá verificativo a las diez horas del día veintiséis de abril próximo, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lectura de la lista de acreedores presentes.
2. Lectura de la lista de acreedores elaborada por la sindicatura.
3. Lectura de los acreedores que fueron autorizados para emitir su voz y voto en la presente suspensión de pagos.
4. Lectura de los dictámenes de la sindicatura y de la intervención sobre cada uno de los créditos, así como la contestación de la suspensa a las demandas de reconocimiento de crédito.
5. Debate contradictorio de cada uno de los créditos presentados para su reconocimiento y, en su caso, su rectificación.
6. Graduación de dichos créditos.
7. Asuntos generales.
Para su publicación por tres veces consecutivas en el **Diario Oficial de la Federación** y periódico El Universal.
México, D.F., a 31 de marzo de 2000.
El C. Secretario de Acuerdos
Lic. José Angel Cano Gómez
Rúbrica.
(R.- 123272)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil
en el Estado de Jalisco
Guadalajara, Jal.
EDICTO
A: Pedro Trujillo Guerrero.
En Amparo 656/99, promovido por Banco Nacional de México, S.A., contra actos del Juez Tercero de lo Civil de esta ciudad, se ordenó emplazarlo por edictos para que comparezca, por sí o por conducto de representante legal, en treinta días, si a su interés legal conviene.
Para su publicación por tres veces, de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico El Universal.
Guadalajara, Jal., a 25 de octubre de 1999.
El Secretario
Lic. David López Rubio
Rúbrica.
(R.- 123284)
Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
México
Juzgado Tercero de lo Concursal
EDICTO
Por ordenarse por el ciudadano Juez Tercero de lo Concursal en el expediente 10/2000, Juicio de Suspensión de Pagos seguido por Triple I, S.A. de C.V., y en cumplimiento en el punto resolutivo primero en donde se declara y constituye en estado de suspensión de pagos a la empresa denominada Triple I, S.A. de C.V., se ordenó publicar un extracto de la sentencia interlocutoria de fecha dos de marzo de dos mil, los puntos resolutivos de dicha sentencia. **SEXTO.-** Se cita a los acreedores de la suspensa para que presenten sus créditos a reconocimiento dentro del término de cuarenta y cinco días, contado a partir que surta efectos la última publicación de esta sentencia. **SEPTIMO.-** Se ordena convocar a una junta de acreedores para rectificación, graduación y prelación de los créditos que deberá efectuarse en un plazo de cuarenta y cinco días, contado a partir de los quince siguientes a aquél en que terminó el plazo a que se refiere el resolutivo anterior.- Notifíquese y sáquese copia circunstanciada de la presente resolución, para agregarse al legajo de sentencias. Así interlocutoriamente lo resolvió y firma el ciudadano Juez Tercero de lo Concursal, licenciado Justino Angel Montes de Oca Contreras, ante la ciudadana Secretaria de Acuerdos, licenciada Lydia Guadalupe Grajeda, con quien actúa y da fe.- Doy fe.
Para su publicación por tres veces consecutivas en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico El Universal de esta ciudad.
México, D.F., a 31 de marzo de 2000.
El C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de lo Concursal
Lic. Lydia Guadalupe Grajeda

Rúbrica.
(R.- 123310)
Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
México
Juzgado Tercero de lo Concursal
Expediente 82/99
EDICTO
En los autos del Juicio de Suspensión de Pagos, de Vitos de México, S.A. de C.V., el ciudadano Juez Tercero de lo Concursal de esta ciudad, ha dictado una resolución de fecha veinte de enero del presente año, en cuyo punto segundo resolutivo se nombra como síndico definitivo a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), lo que se hace del conocimiento de los presuntos acreedores, emplazándolos para que presenten sus demandas de reconocimiento a partir del siguiente al de la última publicación del presente edicto. Así interlocutoriamente lo resolvió y firma el ciudadano Juez Tercero de lo Concursal, licenciado Justino Angel Montes de Oca Contreras ante el ciudadano Secretario de Acuerdos B, licenciada Lydia Guadalupe Grajeda, con quien actúa y da fe.- Doy fe.
Para su publicación en el periódico La Tribuna y en el **Diario Oficial de la Federación** por tres veces consecutivas.
México, D.F., a 4 de febrero de 2000.
El C. Secretario de Acuerdos "A"
Lic. Lydia Guadalupe Grajeda
Rúbrica.
(R.- 123319)
CLUB ALEMAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA
Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en sesión celebrada el 15 de marzo del año corriente, con fundamento en el artículo 47o. de los estatutos sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad Club Alemán de México, S.A. de C.V., a la Asamblea General Ordinaria Anual que se llevará a cabo en Aldama número 153, colonia Tepepan, Xochimilco, 16020, México, Distrito Federal, a las 19:00 horas del día 3 de mayo de 2000, en la que se desahogarán los puntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones realizadas por la sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 1999.
II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 1999, previo informe del comisario.
III. Resolución sobre la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 1999.
IV. Designación del comisario de la sociedad y, en su caso, de su suplente.
V. Determinación de emolumentos correspondientes a los miembros del Consejo de Administración y al comisario.
VI. Asuntos generales.
VII. Designación de delegados para ejecutar los acuerdos tomados en la Asamblea.
De conformidad con el artículo 57o. de los estatutos sociales, para tener derecho asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar los títulos de sus acciones en la Secretaría de la sociedad o en alguna institución de crédito del país o del extranjero que elija el accionista, a más tardar la víspera del día señalado para la Asamblea. La constancia de depósito de las acciones servirá como tarjeta de admisión.
México, D.F., a 1 de abril de 2000.
Presidente del Consejo
Pedro R. Boker T.
Rúbrica.
(R.- 123371)
Estados Unidos Mexicanos
Juzgado Primero de lo Mercantil
Hermosillo, Son.
EDICTO
Por ordenarse por el ciudadano Juez Primero de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, en el expediente 1001/99 relativo al procedimiento de quiebra de Crédito y Ahorro del Noroeste, Sociedad de Ahorro y Préstamo, se convoca a los acreedores de dicha sociedad a la junta de reconocimiento, rectificación y graduación de créditos, que se celebrará a las 10:00 horas del día veintiséis de abril de dos

mil, en el estadio de béisbol Héctor Espino, sito en bulevar Solidaridad y José S. Healy de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, de acuerdo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura de la lista provisional de acreedores redactada por la sindicatura.
3.- Apertura de debate contradictorio sobre cada uno de los créditos.
4.- Designación de interventor definitivo.
Para su publicación por tres veces consecutivas en los siguientes medios:
Diario Oficial de la Federación.
En un periódico de mayor circulación en los estados de Sonora, Sinaloa, Jalisco, Baja California Sur, Baja California y en todos aquellos lugares en donde se encuentren sucursales importantes de la quebrada.
Hermosillo, Son., a 3 de abril de 2000.
El Secretario Primero de Acuerdos
Lic. Josefina Falcón Figueroa
Rúbrica.
(R.- 123372)
VITRO, S.A. DE C.V.
AVISO A LOS TENEDORES DE PAGARES
DE MEDIANO PLAZO
VITRO P98-2
Se hace del conocimiento a los tenedores de Pagarés de Mediano Plazo de Vitro, S.A. de C.V. VITRO P98-2, que la tasa de interés bruta que devengarán estos valores por el periodo que comprende del 6 de abril al 3 de mayo de 2000, será de 17.85% anual, correspondiente a 28 días, que se liquidará contra la entrega del cupón número 19 a partir del próximo 4 de mayo de 2000, en las oficinas de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, ubicadas en Paseo de la Reforma número 255, 3er. piso, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, México, Distrito Federal.
México, D.F., a 31 de marzo de 2000.
Banco Nacional de México, S.A.
División Fiduciaria
Rep. Común y Cust.
Mario Luis Rodríguez G.
José Antonio Márquez
Rúbricas.
(R.- 123385)
Poder Judicial
Estado de México
Primera Sala Civil de Tlalnepantla
EDICTO
Emplazamiento a los terceros perjudicados: Inmobiliaria Volín, S.A. y Marlui, S.A.
Noemí Portnoy Kurian, promovió juicio constitucional ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en turno, con sede en Toluca, México, contra actos de esta Primera Sala Civil Regional de Tlalnepantla, México, toca 1008/99, por desconocerse sus domicilios, se dictó auto de ocho de febrero del año en curso, que ordena emplazamiento por edictos, haciéndoles saber a los terceros perjudicados en mención, que deberán presentarse a deducir sus derechos ante el Tribunal Colegiado del conocimiento, dentro del término de treinta días, contado del siguiente al de la última publicación. Fíjese en la puerta de esta Sala copia de esta resolución, por todo el tiempo que dure el emplazamiento, quedando a su disposición, copia simple de la demanda de garantías.
Para su publicación por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial y uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, se expide el día nueve de febrero de dos mil.
El Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Civil Regional
de Tlalnepantla, Edo. de Méx.
Lic. Francisco Santos Rojas
Rúbrica.
(R.- 123390)
FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA, S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
AVISO A LOS TENEDORES DE BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO
FINASA 3-99
En cumplimiento a lo establecido en la cláusula séptima del Acta de Emisión, hacemos de su conocimiento que la tasa anual de interés bruto que devengarán los Bonos Bancarios de Desarrollo de Financiera Nacional

Azucarera, S.N.C. FINASA 3-99, por el décimo quinto periodo comprendido del 6 de abril al 4 de mayo de 2000, será de 14.12% sobre el saldo insoluto de los bonos en circulación.
Asimismo, comunicamos que a partir del 6 de abril de 2000, en el domicilio de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores: Paseo de la Reforma número 255, 3er. piso, México, Distrito Federal, se pagarán los intereses correspondientes al décimo cuarto periodo, comprendido del 9 de marzo al 6 de abril de 2000.
México, D.F., a 5 de abril de 2000.
Financiera Nacional Azucarera, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo
Rúbrica.
(R.- 123395)
CONTROL-SOC, S.A. DE C.V.
PRIMERA CONVOCATORIA
Con fundamento en lo señalado por el artículo decimoséptimo de los estatutos sociales, el Consejo de Administración de Control-Soc, S.A. de C.V., tomó en su sesión verificada el 23 de marzo de 2000, el acuerdo para convocar a una Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar a las 12:00 horas del 4 de mayo de 2000, en las oficinas ubicadas en calzada Coltongo número 293, colonia Industrial Vallejo, en la Ciudad de México, Distrito Federal, con la finalidad de desahogar los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. Informe del Consejo de Administración sobre la marcha y las operaciones realizadas por la sociedad, en el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 1999, de acuerdo al enunciado del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo los estados financieros de la empresa a que se refiere el punto II siguiente y el informe del comisario. Resoluciones al respecto.
De acuerdo a lo previsto por el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el informe a que se refiere el artículo 172 de dicha ley, incluyendo los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 1999, así como el informe del comisario, estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, durante los quince días anteriores a la fecha en que tendrá verificativo la Asamblea.
II. Aprobación, en su caso, de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 1999; resolución sobre la aplicación de las utilidades.
III. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración y comisario.
IV. Nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y comisario de la sociedad y de su suplente.
V. Resolución sobre el aumento al capital social, en su parte variable.
VI. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea y, en su caso, formalicen como proceda.
Se recuerda a los accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán estar debidamente inscritos en el libro de registros de acciones de la sociedad.
México, D.F., a 27 de marzo de 2000.
Secretario del Consejo de Administración
Lic. Francisco José Gaxiola
Rúbrica.
(R.- 123396)
Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
México
Juzgado Primero de lo Concursal
Secretaría A
Expediente 9/94
EDICTO
Se convoca a los acreedores de la suspensión de pagos de Siltex, S.A. de C.V., en el cuaderno principal, del expediente número 9/94 a la junta de acreedores para el reconocimiento, rectificación y graduación de créditos, que se celebrará en el Juzgado Primero de lo Concursal, a las once horas del día veintisiete de abril del año en curso, de acuerdo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lista de presentes.
2. Lectura de lista provisional de acreedores redactada por la sindicatura.
3. Apertura de debate contradictorio sobre cada uno de los créditos.
4. Asuntos generales.

Para su publicación por tres veces consecutivas en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico el Diario de México.
México, D.F., a 30 de marzo de 2000.
El C. Secretario de Acuerdos
Lic. José Angel Cano Gómez
Rúbrica.
(R.- 123400)
Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
México
Juzgado Primero de lo Concursal
Secretaría A
Expediente 91/97
EDICTO
Se convoca a los acreedores de la suspensión de pagos de Martínez Salinas Mario, en el cuaderno principal, del expediente número 91/97 a la junta de acreedores para el reconocimiento, rectificación y graduación de créditos, que se celebrará en el Juzgado Primero de lo Concursal, a las doce horas del día veintisiete de abril del año en curso, de acuerdo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lista de presentes.
2. Lectura de lista provisional de acreedores redactada por la sindicatura.
3. Apertura de debate contradictorio sobre cada uno de los créditos.
4. Asuntos generales.
Para su publicación por tres veces consecutivas en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico El Sol de México.
México, D.F., a 30 de marzo de 2000.
El C. Secretario de Acuerdos
Lic. José Angel Cano Gómez
Rúbrica.
(R.- 123401)
Poder Judicial
Distrito Judicial de Tulancingo
Actuaría
Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Juzgado Primero Civil y Familiar
Tulancingo de Bravo, Hgo.
EDICTO
Dentro del Juicio Suspensión de Pagos promovido por Industrias Riveros Isaguirre, S.A. de C.V. y/o Sabino Riveros Aguirre, Irma Portillo González, Héctor Riveros Aguirre y María Guadalupe Omaña Navarrete, expediente número 1055/94 que entre otras constancias obra el auto de fecha 1 de marzo de 2000, que a la letra dice:
Visto lo solicitado y con fundamento en los artículos 16, 74, 76, 242 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, se ACUERDA:
I.- ...
II.- Se señalan las 12:00 horas del día 18 de abril del año en curso, para que tenga verificativo la junta de acreedores para reconocimiento, rectificación y graduación de crédito dentro del presente juicio.
III.- Publíquense los correspondientes edictos por tres veces consecutivas en el **Diario Oficial de la Federación**, así como en El Sol de Tulancingo, en términos del artículo 16 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.
IV.- Dése vista de las presentes actuaciones al C. Agente del Ministerio Público adscrito a este H. Juzgado, para que manifieste lo que a su representación social corresponda.
V.- Se requiere al C. Leonardo Galindo Téllez, en su carácter de síndico designado dentro del presente juicio, para que presente su lista de acreedores en el día y hora señalado en que tendrá verificativo la junta de acreedores, para el reconocimiento, rectificación y graduación de créditos, apercibido que de no hacerlo así el suscrito Juez aplicará la medida de apremio que corresponda.
VI.- Notifíquese y cúmplase.- Así lo acordó y firma el C. Lic. S. Enrique Flores Colín, Juez Primero Civil y Familiar de este Distrito Judicial que actúa con secretario Lic. Ofelia Santillán Zamudio, que da fe.- Firmas ilegibles.
Atentamente
Tulancingo, Hgo., a 16 de marzo de 2000.

La C. Actuario Primero Civil y Fam.
Lic. Maricela Sosa Ocaña
Rúbrica.
(R.- 123402)
Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
México
Segunda Sala de lo Civil
Toca 3/2000
A.C.B.
EDICTO
Gutiérrez Carbajal de Reynoso María de Jesús vs. Jorge Herrera Michel y otros.
En el cuaderno de amparo directo formado en los autos del toca 3/2000 derivado del juicio citado al rubro, esta Sala dictó el siguiente acuerdo:
"México, Distrito Federal, a treinta de marzo del año dos mil.
Ténganse por hechas las manifestaciones... en consecuencia, procédase a emplazar a los terceros perjudicados Vicente Espinoza García y Jorge Herrera Michel por medio de edictos que se publiquen en el Diario Oficial así como en el periódico La Prensa... En la inteligencia, que deberá quedar para cada uno de dichos terceros perjudicados, una copia simple de la demanda de garantías respectivas en la secretaría de acuerdos de esta Sala, a disposición de la referida tercera perjudicada... Notifíquese...".
Lo anterior se hace de su conocimiento a fin de que se presente dentro del término de treinta días, contado a partir del día siguiente al de la última publicación; ante el H. Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, como terceros perjudicados en el Juicio de Amparo promovido por María de Jesús Gutiérrez Carbajal de Reynoso contra actos de esta Sala en el procedimiento referido al inicio de este edicto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 31 de marzo de 2000.
La C. Secretaria Auxiliar de Acuerdos
encargada de la Mesa de Amparos de la H. Segunda Sala
Lic. María de Lourdes Pérez García
Rúbrica.
(R.- 123404)
CASA DE BOLSA BBV-PROBURSA, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO BBV-PROBURSA Y COMPAÑIA SUBSIDIARIA
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1999
(miles de pesos)

Cuentas de orden	**1999**	**1998**
Operaciones por cuenta de terceros		
Clientes cuentas corrientes		
Bancos de clientes	$ 6,492	$ 1,264
Liquidaciones de operaciones de clientes	4,022,797	4,968,603
Préstamos de clientes	19	1
	4,029,308	4,969,868
Valores de clientes		
Valores de clientes recibidos en custodia	49,351,057	34,873,826
Valores y documentos recibidos en garantía	1,748	372
	49,352,805	34,874,198
Operaciones por cuenta de clientes		
Operaciones de reporto de clientes	3,869,325	2,669,244
Títulos recibidos en préstamo (prestatario)	1,568	325
Opciones de compra (precio de la opción)	2,405	123
	3,873,298	2,669,692
Totales por cuenta de terceros	$ 57,255,411	$ 42,513,758
Activo		
Disponibilidades	$ 18,205	$ 21,923
Instrumentos financieros-		
Títulos para negociar	171,032	102,425
Operaciones con valores y derivados-		
Saldos deudores en operaciones de reporto	9,891	10,599
Otras cuentas por cobrar (neto)	166,950	263,833

Mobiliario y equipo (neto)	13,498	9,647
Inversiones permanentes en acciones	42,092	51,957
Impuestos diferidos (neto)	270,045	270,045
Otros activos, cargos diferidos e intangibles	2,842	216
Suma el activo	$ 694,555	$ 730,645
Operaciones por cuenta propia		
Cuentas de registro propias		
Valores de la sociedad entregados en custodia	$ 152,994	$ 68,083
Valores gubernamentales de la sociedad en custodia	18,037	34,342
	171,031	102,425
Operaciones de reporto		
Reportada		
Parte activa	3,869,325	2,669,244
Parte pasiva	(3,859,434)	(2,658,646)
	9,891	10,598
Reportadora		
Parte activa	3,877,745	2,692,994
Parte pasiva	(3,887,363)	(2,703,587)
	(9,618)	(10,593)
Totales por cuenta propia	$ 171,304	$ 102,430
Pasivo y capital contable		
Operaciones con valores y derivados-		
Saldos acreedores en operaciones de reporto	$ 9,618	$ 10,593
Otras cuentas por pagar-		
ISR y PTU por pagar	22,145	21,886
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	228,461	324,613
Suma el pasivo	260,224	357,092
Capital contable		
Capital contribuido-		
Capital social histórico	467,674	417,674
Capital social pagado histórico	467,674	417,674
Actualización	1,813,859	1,810,856
Capital ganado-		
Reservas de capital	15,818	13,043
Pérdidas por aplicar	(348,902)	(250,105)
Resultado por conversión de operaciones extranjeras	(47)	(33)
Efectos de valuación en empresas asociadas y afiliadas	36,387	39,500
Insuficiencia en la actualización del capital contable	(1,629,172)	(1,712,893)
Utilidad neta	78,714	55,511
Suma el capital contable	434,331	373,553
Suma el pasivo y capital contable	$ 694,555	$ 730,645

Las notas adjuntas son parte integrante de estos balances generales consolidados.

Los presentes balances generales consolidados, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para las casas de bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo establecido en los artículos 26 bis, 26 bis 2, 26 bis 4 y 26 bis 7 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa y su subsidiaria hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes balances generales consolidados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

México, D.F., a 31 de marzo de 2000.

Director General

Ing. Humberto Bañuelos Caamaño

Rúbrica.

Director General de Finanzas

Lic. Jaime Adam Vidal

Rúbrica.

Director de Contraloría y Administratración

C.P. Carlos Pérez Flores

Rúbrica.

Director General Adjunto de Auditoría Interna
C.P. Martín Lozano Perrino
Rúbrica.
Subdirector de Contraloría
C.P. Víctor Vergara Valderrábano
Rúbrica.
Los presentes balances generales consolidados fueron dictaminados sin salvedades por el despacho Ruiz, Urquiza y Cía., S.C. el 28 de enero de 2000.
(R.- 123406)
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO CON SUBSIDIARIAS Y FIDEICOMISOS UDI'S AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999
(cifras en miles de pesos)

Activo		
Disponibilidades		9,291,776
Instrumentos financieros		
Títulos para negociar	12,889,910	
Títulos disponibles para la venta	12,025,147	
Títulos conservados a vencimiento	51,985	24,967,042
Operaciones con valores y derivadas		
Saldos deudores en operaciones de reporto	9,169	
Valores por recibir en operaciones de préstamo de valores	1,331	
Operaciones con instrumentos derivados (saldo deudor)	1,083	11,583
Cartera de crédito vigente		
Créditos por operaciones como agente financiero	99,644,057	
Cartera comercial	2,185,358	
Créditos a intermediarios financieros	19,740,234	
Créditos a entidades gubernamentales	52,316,289	
Total cartera de crédito vigente	173,885,938	
Cartera de crédito vencida	941,492	
Total cartera de crédito	174,827,430	
(-) Menos		
Estimación preventiva para riesgos crediticios	1,216,590	
Cartera de créditos neta		173,610,840
Operaciones especializadas		2,352,461
Otras cuentas por cobrar (neto)		2,533,275
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)		2,590,835
Bienes adjudicados		31,552
Otras inversiones (neto)		4,398,088
Inversiones permanentes en acciones		1,239,801
Impuestos diferidos		987,522
Otros activos		
Cargos diferidos e intangibles		123,014
Total activo		222,137,789
Pasivo y capital		
Captación tradicional		
Depósitos de exigibilidad inmediata	1,190,089	
Depósitos a plazo	49,428,043	
Bonos bancarios	18,683,747	
Valores o títulos en circulación en el extranjero	17,134,287	86,436,166
Préstamos interbancarios y de otros organismos		
Préstamos de bancos y otros organismos	19,599,432	
Préstamos por operaciones como agente financiero	101,267,587	
Préstamos del Gobierno Federal	90,313	
Otros créditos de entidades no bancarias del exterior	1,418,045	122,375,377
Operaciones con valores y derivadas		
Saldos acreedores en operaciones de reporto		402,703
Otras cuentas por pagar		
ISR y PTU por pagar	5,230	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	2,346,630	2,351,860

Obligaciones subordinadas en circulación		2,969,568
Créditos diferidos		254,787
Total pasivo		214,790,461
Capital contable		
Capital contribuido		
Capital social	5,400,897	
Primas en venta de acciones	1,378,689	6,779,586
Capital ganado		
Reservas de capital	1,175,241	
Utilidades (pérdidas) retenidas	(3,543,776)	
Superávit por valuación de títulos disponibles para la venta	320,182	
Resultado por conversión de operaciones extranjeras	22,269	
Efectos por valuación en empresas asociadas y afiliadas	2,577,193	
Utilidad neta	16,633	567,742
Total capital contable		7,347,328
Total pasivo y capital contable		222,137,789
Cuentas de orden		
Avales otorgados		2,966,578
Otras obligaciones contingentes		2,483,169
Apertura de créditos irrevocables		2,388,149
Bienes en fideicomiso o mandato		366,533,103
Bienes en custodia o en administración		129,396,061
Integración de la cartera crediticia		183,769,721
Montos contratados en instrumentos derivados		16,055,543
Títulos a recibir por reporto	18,134,788	
(Menos) Acreedores por reporto	18,166,839	(32,051)
Títulos a entregar por reporto	8,805,358	
(Menos) Deudores por reporto	8,827,874	(22,516)
Otras cuentas de registro		450,984,600

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el H. Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

El rubro de utilidades (pérdidas) retenidas, reconoce un efecto neto de $2,102,374, por concepto de minusvalías de títulos de deuda y capital, con su correspondiente impuesto diferido por $1,257,425.

El grupo del capital ganado considera la aplicación de la insuficiencia en la actualización del capital por $9,240,581, contra las aportaciones para futuros aumentos de capital por $6,320,973 y primas en venta de acciones por $2,919,608.

La consolidación de Fideicomisos UDIS se realizó de acuerdo a las disposiciones emitidas por la H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, afectándose los siguientes rubros:

	Institución	**Consolidado UDIS**
Disponibilidades	9,271,848	9,281,556
Títulos conservados a vencimiento	65,021	51,985
Créditos a intermediarios financieros	19,732,592	19,740,234
Otras cuentas por cobrar (neto)	2,459,132	2,459,408
Reservas crediticias	1,212,000	1,216,590
Integración de la cartera crediticia	183,761,354	183,769,721
Otras cuentas de registro	450,939,729	450,954,760

México, D.F., a 22 de febrero de 2000.

Director General

Lic. Carlos Sales Gutiérrez

Rúbrica.

Director Adjunto de Información Financiera

Ing. Santiago Matus Sequeira

Rúbrica.

Director de Contabilidad

Lic. Germán Gurría Laviada

Rúbrica.
Director de Operaciones
C.P. Arturo Osorio Barrientos
Rúbrica.

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
CALIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITOS CONSOLIDADO CON FIDEICOMISOS UDIS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999
(cifras en miles de pesos)

				Provisiones preventivas necesarias
	Cartera			**Globales**
Riesgo	**% Riesgo**	**Importe**	**% de provisiones**	**Importe**
A	16.43	30.197,192	0.00	0
B	0.06	107,787	10.00	10,779
C	0.14	260,449	45.00	117,202
D	0.25	447,213	80.00	372,431
E	0.29	535,088	100.00	535,088
Subtotal	17.17	31,547,729	Subtotal	1,035,500
			Reserva adicional	176,500
			Fisos Udis	4,590
			Total	1,216,590
Más:			Menos:	
Cartera no calificada	0.03	58,003	Provisiones constituidas	1,216,590
Cartera exceptuada	82.80	152,155,622		
Cartera de créditos	100.00	183,761,354	Insuficiencia (exceso)	(0)

Notas:

1.- La información contable relativa a la cartera que corresponde a la calificación del trimestre al 30 de septiembre de 1999, se incluye en el estado de contabilidad formulado a la misma fecha.

2.- De conformidad con las reglas para la calificación de la cartera de créditos, la Institución está obligada a calificar de manera individual por lo menos el 90% de la misma.

3.- La cartera de créditos base para la calificación incluye las operaciones contingentes que se muestran en el grupo correspondiente de cuentas de orden al pie del estado de contabilidad formulado al 30 de septiembre de 1999.

4.- La base para la calificación de la cartera de crédito y las provisiones globales necesarias identificadas con el grado de riesgo E, se encuentran disminuidas con un efecto neto de $103,623, que corresponde a aplicaciones efectuadas posteriores a la fecha de calificación.

5.- El resultado de esta calificación se incluye en el estado de contabilidad al 31 de diciembre de 1999.

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999
REFERIDAS A LAS PROVISIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
(Cifras en miles de pesos)

	Concepto	**Pensiones de**	**Primas de**
1	Obligaciones por beneficios proyectados (OBP)	2,386,994	60,431
2	Activos del plan (fondo)	1,935,338	53,885
3	Pasivo (activo) de transición no amortizado	328,800	23,530
4	Pasivo (activo) por servicios anteriores y modificaciones		al plan aún no amo
5	Pasivo (activo) por variaciones en supuestos y ajustes por		experiencia aún no
amortizados		(13,258)	(16,988)
6	Pasivo (activo) neto proyectado	0	0
7	Obligaciones por beneficios actuales (OBA)	2,200,835	54,073
8	Activos del plan (fondo)	1,935,338	53,885
9	Pasivo neto actual	265,498	188
10	Pasivo adicional	265,498	188

Nota: El periodo de amortización es de 15.20 y 13.5 años para pensiones y primas de antigüedad, respectivamente.
Cifras obtenidas en el estudio actuarial realizado por despacho independiente.
Nacional Financiera
Consejo Directivo
(al 31 de marzo de 2000)
Presidente
Lic. José Angel Gurría Treviño

Consejeros Propietarios Serie "A"	Consejeros Suplentes Serie "A"
Dr. Herminio Blanco Mendoza	**Dr. Carlos Noriega Curtis**
Dr. Luis Téllez Kuenzler	**Lic. Decio de María Serrano**
Dr. Guillermo Ortiz Martínez	**Dr. Jorge A. Chávez Presa**
Lic. Jonathan Davis Arzac	**Dr. Jesús Marcos Yacamán**
Lic. Guillermo Prieto Treviño	**Lic. Andrés Figueroa Covián**
	Dr. Carlos García Moreno Elizondo

Consejeros Propietarios Serie "B"	Consejeros Suplentes Serie "B"
Lic. Antonio Ortiz Mena	**Ing. Raúl Picard del Prado**
Lic. Jorge Marín Santillán	**Ing. Alberto Fernández Garza**
Lic. Alejandro Martínez Gallardo	**Lic. Alfonso García Macías**

Invitados
C.P. Salvador Martínez Cervantes
Ing. José Simón Sánchez Santana
Ing. Sergio Gutiérrez Muguerza
Comisarios
Propietario Serie "A"
C.P. Mario López Araiza Orozco
Suplente Serie "A"
Lic. Carlos Arturo Aguirre Islas
Propietario Serie "B"
Lic. Miguel Luis Anaya Mora
Director General
Lic. Carlos Sales Gutiérrez
Secretario
Lic. Carlos Toledo Sánchez
(R.- 123457)
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.
AVISO
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., en cumplimiento a lo establecido en la condición 38a. de la autorización para incorporar la tecnología celular a la red de servicio público de radiotelefonía móvil concesionado en la Región 9, que comprende el Distrito Federal y los estados de México, Morelos e Hidalgo otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publica las tarifas de los servicios prestados.
CONCEPTOS BASICOS QUE INTEGRAN EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Cuota de activación: Es el importe que se cobra al usuario por la contratación del servicio.
Renta: Es un importe fijo que se cargará mensualmente a la cuenta del usuario por concepto de uso del servicio, éste será exigido al momento de la contratación para que se considere como cubierto por anticipado.
Minutos incluidos: Es la cantidad de minutos libres que el usuario puede disponer ya sea en hora pico o no pico según las características del plan contratado, sin cargo alguno a su cuenta. Si en el mes no son consumidos el total de estos minutos, no se considerarán como acumulables para meses posteriores.
Tarifa por minuto adicional: Solamente se cobra el tiempo de llamada por minuto. Cuando se hace una llamada y no contestan o el número se encuentra ocupado, no habrá cargo por la llamada.
El minuto de llamada efectiva empieza a contabilizarse a partir de que se oprime la tecla Send (o su equivalente) y termina cuando se oprime la tecla End (o su equivalente), o si por algún motivo la llamada se corta. La única excepción es cuando el usuario marque desde su celular a un número de acceso a roamers, aun cuando no haya contestación, se realizará el cobro de la llamada incluyendo cargos de larga distancia (en caso de ser aplicables), ya que se considera como una llamada concretada desde el momento en que se recibe el tono de marcación del número de acceso a roamers. Si por alguna razón no se oprime la tecla End

al terminar la llamada, nuestro sistema detectará que la otra persona ha colgado y da por hecho que la llamada terminó.
Servicios adicionales: Son todos los servicios que pueden o no estar incluidos dentro de la contratación y que son opcionales para el usuario.
Cobertura: Región 9 México (Distrito Federal, Estado de México, Morelos e Hidalgo).
Los minutos aire y los horarios: El tiempo de las llamadas se mide en minutos o fracción, de acuerdo a ello es que se cobra cada llamada. Por ejemplo una llamada que dura 67 segundos, es decir, un minuto con siete segundos, es cobrada como una llamada de dos minutos, ya que los siete segundos se cobran como el segundo minuto. Los minutos son cobrados de acuerdo a tarifas de horario pico y no pico.
Horario pico de 8:00 a 21:59; no pico de 22:00 a 7:59 de lunes a viernes, inclusive sábado, domingo, 1 de enero y 25 de diciembre.
Las tarifas son en pesos moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos, sin incluir IVA (Impuesto al Valor Agregado).
Modalidad El que Llama Paga
Esta modalidad, forma parte de una disposición gubernamental emitida por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y consiste en que la persona que origina la llamada paga por el tiempo aire de la misma, así los clientes móviles celulares de Radiomóvil Dipsa que se encuentren dentro de este esquema, sólo pagarán las llamadas que originen y donde el usuario que recibe no tiene cargo alguno.
Bajo la modalidad El que Llama Paga, el usuario que origine el tráfico público conmutado deberá marcar el prefijo 044 con antelación a la marcación del número local correspondiente.
Esta modalidad aplica exclusivamente para el servicio local.

TARIFAS REGION 9 MEXICOPLANES BASICOS

Plan tarifario	Cuota de activación	Renta mensual	Minutos incluidos Horario indistinto	Minuto adicional Hora pico
Seguridad	$ 0.00	$ 199.00	30	$3.94
Básico	$ 0.00	$ 289.00	30	$2.48
Práctico	$ 0.00	$ 362.00	100	$2.35
Premier	$ 0.00	$ 399.00	120	$2.52
Funcional	$ 0.00	$ 483.00	150	$2.45
Dinámico	$ 0.00	$ 749.00	240	$2.20
Máster	$ 0.00	$ 918.00	300	$1.95
Empresarial	$ 0.00	$1,079.00	410	$1.75
Máster Plus	$ 0.00	$1,329.00	600	$1.60
Mayoreo	$ 2,800.00	$ 55.00	30	$1.65
Terminal fijo residencial	$ 0.00	$ 245.00	150	$1.50
Terminal fijo comercial	$ 0.00	$ 699.00	300	$1.45
Amigo A	$ 0.00	$ 0.00	0	$4.35
Amigo B	$ 0.00	$ 0.00	0	$4.35
Amigo C	$ 0.00	$ 0.00	0	$4.35
Plan horas no hábiles 100	$ 0.00	$ 125.00	100 *	$5.70
Plan horas no hábiles 200	$ 0.00	$ 159.00	200 *	$5.45
Plan horas no hábiles 300	$ 0.00	$ 219.00	300 *	$5.15
Plan horas no hábiles 500	$ 0.00	$ 355.00	500 *	$4.75
Doméstico	$ 0.00	$ 129.00	100	$1.20
Marcación utilizando el 044				$3.70
Tarifa por minuto Roaming Nacional	$4.25			

Los planes master y master plus incluyen gratis los servicios adicionales transferencia de llamada, llamada en espera o conferencia tripartita, así como la facturación detallada.
El plan mayoreo es ofrecido a empresas que tengan contratadas un mínimo de 5,000 líneas.
Los planes terminal fijo residencial y comercial, así como el plan doméstico no cuentan con el servicio de roaming nacional.
El plan amigo A funciona con ficha prepagada de $100.00 de servicio.
El plan amigo B funciona con ficha prepagada de $200.00, abonándose a la línea celular del usuario $230.00 de servicio.
El plan amigo C funciona con ficha prepagada de $500.00, pagando el usuario por ésta, únicamente $400.00 y abonándose a la línea celular del usuario $500.00 de servicio.
En el plan doméstico, el usuario tendrá acceso al servicio de radiotelefonía celular para originar y recibir llamadas únicamente en el área de cobertura de un sitio celular en particular.
En el plan doméstico la marcación utilizando el prefijo 044 ya incluye el tiempo aire.
* Minutos incluidos en horario no pico.

	Cuota de	Renta	Minutos incluidos	Minuto adicional

Plan tarifario	activación	mensual	Horario indistinto	Hora pico
Optimo	$0.00	$119.00	0	
De 1 a 200 minutos				$2.94
De 201 a 400 minutos				$2.25
De 401 a 600 minutos				$2.09
De 601 minutos en adelante				$1.82
Optimo plus	$0.00	$199.00	0	
De 1 a 200 minutos				$2.94
De 201 a 400 minutos				$2.25
De 401 a 600 minutos				$2.09
De 601 minutos en adelante				$1.82

El costo de la renta en el plan óptimo plus bajará en el momento de terminar su plazo forzoso al costo que tenga el plan óptimo.

Plan tarifario	Cuota de activación	Renta mensual
Optimo datos	$0.00	$109.00
Tarifa por consumo de UTTs en horario indistinto		
De 1 a 1,200	$0.48	
De 1,201 a 2,400	$0.32	
De 2,401 a 3,600	$0.31	
De 3,601 en adelante	$0.29	
Descuentos por consumo de UTTs		
De 1 a 9,800	0%	
De 9,801 a 98,000	2%	
De 98,001 a 196,000	4%	
De 196,001 a 343,000	6%	
De 343,001 a 539,000	8%	
De 539,001 a 784,000	10%	
De 784,001 en adelante	15%	
Tarifa de Roaming en UTTs	$0.72	

Para el plan óptimo datos la facturación será en fracciones de minuto equivalente a una unidad de 10 segundos, a esta unidad se le llamará Unidad de Tiempo de Transmisión = UTT.

TARIFAS REGION 9 MEXICOPLANES FIDELIDAD

Plan tarifario	Cuota de activación	Renta mensual	Minutos incluidos Horario indistinto	Minuto adicional Hora pico
Seguridad	$0.00	$ 199.00	45	$3.94
Básico	$0.00	$ 289.00	60	$2.48
Práctico	$0.00	$ 362.00	130	$2.35
Premier	$0.00	$ 399.00	150	$2.52
Funcional	$0.00	$ 483.00	180	$2.45
Máster	$0.00	$ 918.00	350	$1.95
Empresarial	$0.00	$1,079.00	450	$1.75
Máster plus	$0.00	$1,329.00	670	$1.60

Estos planes son para clientes que hayan cumplido con su plazo forzoso y que de acuerdo a su historial crediticio de consumo u otra consideración pertinente, se les pueda ofrecer esta modalidad.

TARIFAS REGION 9 MEXICOPLANES CORPORATIVOS

Seguridad	$0.00	$ 167.00	30	$3.50
Básico	$0.00	$ 245.00	30	$2.25
Práctico	$0.00	$ 319.00	100	$2.25
Premier	$0.00	$ 357.00	120	$2.40
Funcional	$0.00	$ 424.00	150	$2.20
Máster	$0.00	$ 760.00	300	$1.90
Empresarial	$0.00	$ 973.00	410	$1.70
Máster plus	$0.00	$1,096.00	600	$1.50
Digitales corporativos				
Clásico	$0.00	$ 230.00	50	$2.57
Digital 90	$0.00	$ 295.00	90	$2.30
Junior	$0.00	$ 359.00	150	$2.00
Digital 300	$0.00	$ 589.00	300	$1.80
Global	$0.00	$ 845.00	510	$1.70
Diamante	$0.00	$1,379.00	950	$1.35

Estos planes son ofrecidos a aquellos clientes que tengan contratados un mínimo de 10 líneas y con una antigüedad mayor a 6 meses.

TARIFAS REGION 9 MEXICOPLANES DIGITALES

Plan tarifario	Cuota de activación	Renta mensual	Minutos incluidos Horario indistinto	Minuto adicional Hora pico
Protección	$0.00	$ 159.00	15	$3.40
Clásico	$0.00	$ 240.00	50	$2.57
Digital 90	$0.00	$ 329.00	90	$2.30
Junior	$0.00	$ 409.00	130	$2.00
Junior 2	$0.00	$ 409.00	150	$2.00
Integral	$0.00	$ 539.00	190	$1.80
Digital 300	$0.00	$ 669.00	300	$1.80
Global	$0.00	$ 950.00	510	$1.70
Oro	$0.00	$1,099.00	580	$1.55
Digital 700	$0.00	$1,329.00	700	$1.40
Diamante	$0.00	$1,536.00	950	$1.35
Planes tarifa única nacional				
TUN 30	$0.00	$ 275.00	30	$2.50
TUN 100	$0.00	$ 449.00	100	$2.50
TUN 200	$0.00	$ 649.00	200	$2.50
TUN 400	$0.00	$ 999.00	400	$2.50
TUN 1000	$0.00	$1,890.00	1000	$2.50

Tarifas aplicables para usuarios que tengan teléfono digital.

El número mensual de mensajes es ilimitado.

Los planes para teléfono digital incluyen gratis los servicios adicionales de transferencia de llamada, llamada en espera y conferencia tripartita; con excepción del plan protección digital.

En los planes tarifarios, Tarifa Unica Nacional TUN, la renta mensual y el precio por minuto incluye el roaming nacional y la larga distancia.

En la modalidad El que Llama Paga, no aplica la tarifa por minuto adicional entrante, ésta aplica sólo en la modalidad El que Recibe Paga, o cuando el usuario se encuentre fuera de su área local dentro de su misma Región.

TARIFAS REGION 9 MEXICOPLANES COMPLEMENTARIOS

Plan tarifario	Límite de Cuota de activación	Renta mensual	minutos incluidos Horario indistinto	Hora no pico
Fin de semana 100	$0.00	$119.00	0	100
Fin de semana 200	$0.00	$165.00	0	200
Fin de semana 300	$0.00	$219.00	0	300
Fin de semana 500	$0.00	$355.00	0	500
Plan roaming 100	$0.00	$319.00	100	0
Plan roaming 200	$0.00	$479.00	200	0

Plan tarifario saliente	Cuota de activación	Renta mensual	Minuto adicional Hora pico	Hora no pico
Transferencia de llamada				
Seguridad	$0.00	$0.00	$1.82	$0.72
Estándar	$0.00	$0.00	$1.10	$0.72
Máster	$0.00	$0.00	$0.99	$0.72

Plan tarifario con de 30 segundos	Cuota de activación	Renta mensual	Tarifa por llamada duración máxima
Plan llamadas rápidas	$0.00	$125.00	$1.15

Cualquiera de estos planes pueden ser contratados por el cliente sobre la contratación de algún plan básico.

TARIFAS REGION 9 MEXICOSERVICIOS ADICIONALES

Concepto	Cuota mensual
Transferencia de llamada	$15.00
Llamada en espera	$15.00
Conferencia tripartita	$15.00
Facturación detallada	$30.00

Mensajes escritos *	$80.00
Consulta de saldo **	$ 1.00

* El número mensual de mensajes es ilimitado y únicamente aplica para los planes digitales.
** La consulta de saldo es aplicable únicamente a los planes de prepago.

TARIFAS REGION 9 MEXICORADIOTELEFONIA MOVIL CONVENCIONAL

Concepto	**Tarifa**
Cuota básica mensual	$175.00
Cuota por minuto o fracción de comunicación	$ 1.50
Cargo por instalación del servicio	$230.00
Cargo por cambio de automóvil, desmontaje y reinstalación del equipo	$240.00
Cargo por reanudación de servicio cuando se suspenda por falta de pago	$230.00

El servicio de Telefonía Convencional es otorgado a usuarios de la zona metropolitana en el Distrito Federal y opera a través de equipos que son instalados en vehículos automotrices para el servicio de Radiotelefonía Móvil Convencional.
Este servicio es exclusivo para su uso a bordo de vehículos.
Conceptos básicos que componen el servicio:
Cuota básica mensual: Es la renta que se cobra mensualmente por la prestación del servicio.
Cuota por minuto o fracción de comunicación: Es el costo que tiene cada minuto o parte de minuto por el tiempo aire consumido en la llamada.
Cargo por instalación del servicio: Es el costo que tiene la instalación del equipo en el vehículo por la contratación del servicio.
Cargo por cambio de automóvil, desmontaje y reinstalación del equipo: Es el costo de hacer el cambio de equipo en cualquier automóvil que ya tenga instalado y contratado el servicio.
Cargo por reanudación de servicio cuando se suspenda por falta de pago: Es el importe que se cobra al usuario cuando es suspendido su servicio por causa de morosidad en su pago.

TARIFAS REGION 9 MEXICOTELEFONIA PUBLICA

Costo por minuto o fracción de minuto (tiempo aire)

Area de aplicación	**Sitios céntricos**	**Autopistas y sitios remotos**
Llamada local	$1.30	$1.74
Marcación utilizando el prefijo 044	$3.48	$3.48
Area de aplicación	**Sitios céntricos**	**Autopistas y sitios remotos**
Llamada de larga distancia		
Nacional	$ 4.35	$ 4.78
Al sur de U.S.A.	$ 8.26	$ 8.70
Al resto de U.S.A.	$10.00	$10.43
A Canadá	$10.00	$10.43
A Hawaii y Alaska	$21.74	$22.17
A Centroamérica	$10.00	$10.43
A Sudamérica	$18.70	$19.13
A Europa, Africa y Asia	$21.74	$22.17

Se consideran sitios céntricos los ubicados en un radio de 100 kilometros del centro de atención.
Se consideran autopistas, los tramos de carretera delimitados por casetas de cuota; y sitios remotos los sitios que se encuentren a más de 100 kilómetros de distancia de la ubicación de los centros de atención.
La tarifa de larga distancia ya incluye el tiempo aire.
La marcación utilizando el prefijo 044 ya incluye el tiempo aire.
OPERADORES DE TELEFONIA PUBLICA
Este plan consiste en la venta de tiempo aire celular a operadores, comercializadoras o permisionarias revendedoras de servicios de telefonía pública, por teléfono de alcancía en cumplimiento a lo estipulado en la concesión de la red pública otorgada.
Los operadores contarán con equipo propio y correrán con su propia administración y costo.

Costo por minuto o fracción de minuto (tiempo aire)	$1.35

TARIFAS REGION 9 MEXICOTELEFONIA INTERIOR PREPAGADA Y RURAL

Concepto/Plan tarifario	**Telefonía rural**	**Tip. A**	**Tip. B**
Costo por minuto o fracción de minuto (tiempo aire)			
Llamada local			
Entrante	$1.30	$1.30	$1.30
Saliente	$1.30	$1.30	$1.30
Marcación utilizando el prefijo 044	$3.80	$3.80	$3.80
Llamada de larga distancia			

México			
Nacional	$3.91	$3.91	$3.91
U.S.A/Canadá			
Internacional	$7.83	$7.83	$7.83

Llamadas sin costo:
111 Atención a clientes
114 Cruz Roja
117 Policía Judicial
*333 Sistema Amigo

Las llamadas que se realicen a poblaciones que tengan la misma clave de larga distancia que la asignada al número de la agencia rural, como las que se encuentren en el radio de cobertura de la célula se operarán como llamadas locales.

Estas tarifas serán para su aplicación exclusiva en el servicio de telefonía en agencias de poblaciones rurales, las cuales operarán bajo el sistema de prepago tipo Sistema Amigo.

El Plan Telefonía Interior Prepagada (TIP) funciona como un sistema de prepago a través de fichas para su uso en teléfonos celulares fijos.

La tarifa de larga distancia ya incluye el tiempo aire.

La marcación utilizando el prefijo 044 ya incluye el tiempo aire.

TARIFAS REGION 9 MEXICOPLAN EXTENSION CELULAR

Este plan consiste en instalar una microcélula en el interior de un hotel, compañía, etc., que decida mantener a sus huéspedes o usuarios comunicados a través de un celular. Esta microcélula es instalada y distribuida en el interior del edificio y/o albercas, restaurantes, estacionamiento, parques, etc.; del tal manera que se obtiene una zona de cobertura limitada dentro de las instalaciones del hotel, compañía, etc., la cual está conectada al conmutador PBX del cliente, dicha conexión a los celulares dentro de la cobertura limitada se lleva a cabo a través de frecuencias concesionadas a Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Los clientes correrán con su propia administración y costo.

Concepto	**Tarifa**
Cuota de activación	$ 0.00
Renta mensual por los primeros seis meses	$800.00
Renta mensual al término del plazo forzoso	$245.00

Plan sin restricción de tiempo aire sólo dentro de la cobertura limitada.

TARIFAS REGION 9 MEXICOPLAN PARA UBICAR

El plan se comercializa a clientes con una flotilla mínima de 60 vehículos, y consiste en un sistema de Localización Automática de Vehículos que permite enviar y recibir mensajes entre los vehículos y una computadora, así como conocer su posición geográfica.

El servicio de Localización Automática de Vehículos "Ubicar" se presta a través de una computadora con software especial llamado Estación de Monitoreo y Rastreo (EMR).

Concepto/Plan tarifario	**Ubicar 50**	**Ubicar 100**	**Ubicar 250**	**Ubicar 500**
Cuota de activación	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
Precio mensual del paquete	$13,800.00	$25,000.00	$55,000.00	$95,000.00
Número de eventos incluidos	50,000	100,000	250,000	500,000
Renta mensual por vehículo	$ 160.00	$ 145.00	$ 125.00	$ 105.00
Localización adicional	$ 1.25	$ 1.15	$ 1.00	$ 0.85
Mensaje adicional	$ 1.45	$ 1.30	$ 1.15	$ 0.95

Evento: Son las localizaciones, mensajes o alarmas enviadas desde la (EMR), o el panel del usuario de cualquier vehículo de la flotilla.

Localización: Es el momento o instante de tiempo en el que se obtiene en la pantalla de la EMR la posición geográfica de un vehículo. Las localizaciones se pueden realizar máximo cada 20 segundos.

Mensaje: Es la recepción, envío o confirmación en cualquiera de los dos dispositivos EMR y/o panel del usuario.

México, D.F., a 6 de abril de 2000.
Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
Representante Legal
C.P. Rubén Fuentes Garrido
Rúbrica.

(R.- 123486)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de Jalisco
Consejo General
Primer Partido Judicial
Juzgado Cuarto de lo Mercantil

Suspensión de Pagos
Expediente 1851/98
EDICTO
El ciudadano Juez Cuarto de lo Mercantil de este Primer Partido Judicial Metropolitano, hace saber que el día 5 cinco de agosto de 1998 mil novecientos noventa y ocho, se dictó sentencia interlocutoria declarándose en estado de suspensión de pagos a las sociedades mercantiles denominadas Abarrotera de Jalisco, S.A. de C.V., Agroindustrias de Básicos del Sureste, S.A. de C.V., Maquil Envasa, S.A. de C.V., Granos de México, S.A. de C.V., Procesemillas Regiomontanas, S.A. de C.V., Agroindustria Baja Californiana de Básicos, S.A. de C.V., Alimentación Típica Nacional, S.A. de C.V., Comercializadora Barnuz, S.A. de C.V. y Catarinos, S.A. de C.V., así como a las personas físicas Pablo Barba Núñez y Catarino Barba Núñez, designándose como síndico a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara en Pequeño, mandándose citar a los acreedores de las empresas y personas físicas antes señaladas, para que presenten sus créditos a examen dentro del término de 45 días, contados a partir del día siguiente de la última publicación del presente, de igual manera se hace saber que el próximo día 16 dieciséis de junio de 2000 dos mil, a las 9:30 nueve horas con treinta minutos, se llevará a cabo la junta de acreedores prevista por los artículos 74, 76 y 407 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos en el local de este Juzgado, ubicado en Maestranza número 266, Sector Juárez de esta ciudad, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Lista de presentes.
2.- Lectura de la lista provisional de acreedores redactada por la sindicatura.
3.- Apertura de debate contradictorio sobre cada uno de los créditos.
4.- Designación de interventor definitivo.
Los acreedores se entenderán legalmente notificados, conforme al párrafo final del artículo 16 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.
Para su publicación por tres veces consecutivas en el periódico El Informador y en el **Diario Oficial de la Federación**.
Guadalajara, Jal., a 24 de marzo de 2000.
El C. Juez Cuarto de lo Mercantil
Lic. Sabás Ugarte Parra
Rúbrica.
La C. Secretario de Acuerdos
Lic. Enriqueta Acosta Pérez
Rúbrica.
(R.- 123555)
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS AMORTIZABLES, EMITIDOS POR NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., DIRECCION DE FIDEICOMISOS, RESPECTO DE LOS DERECHOS AL COBRO DEL TRAMO
CONSTITUYENTES-REFORMA-LA MARQUESA DE LA CARRETERA MEXICO-TOLUCA
(MEXTOL 1992)
Por la presente, y de conformidad con el artículo 228 r) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se convoca a los señores tenedores de la emisión de certificados de participación ordinarios amortizables emitidos por Nacional Financiera, S.N.C., Dirección de Fideicomisos, respecto de los derechos al cobro del tramo Constituyentes-Reforma-La Marquesa de la carretera México-Toluca (MEXTOL 1992) a la Asamblea General que se celebrará el día 15 de mayo de 2000, con horario de registro a las 10:15 horas, y un horario de inicio de Asamblea a las 10:30 horas en las oficinas del representante común, ubicadas en avenida Insurgentes Sur número 1886, colonia Florida, código postal 01030, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I) Informe de la fiduciaria respecto de:
a) La situación que guardan los saldos de las cuentas y fondos del fideicomiso.
b) De los índices previstos en el mismo.
c) Seguimiento a la solicitud de incremento de tarifas en la autopista.
II) Informe del secretario del Comité Técnico sobre:
a) Los acuerdos adoptados en la última sesión.
b) Seguimiento de acuerdos.
III) Informe de la concesionaria sobre:
a) La situación administrativa, operativa y financiera del proyecto.
b) El seguimiento a la solicitud de ampliación del plazo del título de concesión.

IV) Informe del ingeniero independiente sobre:
a) El nivel actual de las cuotas permitidas y opinión sobre la sensibilidad de los usuarios de la carretera de cuota.
b) Informe trimestral respecto al tráfico de la carretera concesionada.
V) Informe del representante común respecto a:
a) El rendimiento que devengarán los certificados de participación por el periodo comprendido entre el 19 de febrero y el 18 de mayo de 2000.
b) Los eventos de incumplimiento que presenta la emisión.
VI) Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación respecto de las acciones permitidas a los tenedores de los certificados de participación, en virtud de la existencia de eventos de incumplimiento.
VII) Asuntos generales.
Se les recuerda a los señores tenedores que para tener derecho de asistir a la Asamblea, deberán depositar en las oficinas de CBI Casa de Bolsa, S.A. de C.V., CBI Grupo Financiero, ubicadas en el domicilio indicado en el primer párrafo de esta convocatoria, los títulos que amparen los certificados o constancias de depósito emitidas por la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, con una anticipación mínima de 24 horas a la celebración de la Asamblea.
Los tenedores podrán ser representados en la Asamblea por mandatarios, quienes habrán de acreditar su personalidad exhibiendo el instrumento en el que conste su mandato. Para acreditar la personalidad bastará que el mandato se otorgue mediante escrito simple suscrito en presencia de dos testigos.
México, D.F., a 11 de abril de 2000.
Representante Común de los Tenedores
CBI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
CBI Grupo Financiero
Rúbrica.

(R.- 123574)

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS AMORTIZABLES, EMITIDOS POR NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., DIRECCION DE FIDEICOMISOS, RESPECTO DE LOS DERECHOS AL COBRO DEL TRAMO
CONSTITUYENTES-REFORMA-LA MARQUESA DE LA CARRETERA MEXICO-TOLUCA
(MEXTOL 1992)
Por la presente, y de conformidad con el artículo 228 r) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se convoca a los señores tenedores de la emisión de certificados de participación ordinarios amortizables emitidos por Nacional Financiera, S.N.C., Dirección de Fideicomisos, respecto de los derechos al cobro del tramo Constituyentes-Reforma-La Marquesa de la carretera México-Toluca (MEXTOL 1992) a la Asamblea General que se celebrará el día 15 de mayo de 2000, con horario de registro a las 9:15 horas, y un horario de inicio de Asamblea a las 9:30 horas en las oficinas del representante común, ubicadas en avenida Insurgentes Sur número 1886, colonia Florida, código postal 01030, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I) Discusión y, en su caso, aprobación para modificar en lo conducente la cláusula vigésima primera y el anexo XXX del contrato de fideicomiso y demás documentos relativos a la emisión.
II) Asuntos generales.
Se les recuerda a los señores tenedores que para tener derecho de asistir a la Asamblea, deberán depositar en las oficinas de CBI Casa de Bolsa, S.A. de C.V., CBI Grupo Financiero, ubicadas en el domicilio indicado en el primer párrafo de esta convocatoria, los títulos que amparen los certificados o constancias de depósito emitidas por la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, con una anticipación mínima de 24 horas a la celebración de la Asamblea.
Los tenedores podrán ser representados en la Asamblea por mandatarios, quienes habrán de acreditar su personalidad exhibiendo el instrumento en el que conste su mandato. Para acreditar la personalidad bastará que el mandato se otorgue mediante escrito simple suscrito en presencia de dos testigos.
México, D.F., a 11 de abril de 2000.
Representante Común de los Tenedores
CBI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
CBI Grupo Financiero
Rúbrica.

(R.- 123575)

ALSEA, S.A. DE C.V.
ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL
CLASE II

Se comunica a los accionistas de la sociedad denominada Alsea, S.A. de C.V., que mediante asamblea general ordinaria de accionistas de la citada sociedad celebrada el día 29 de marzo de 2000 a las 11:00 horas en el domicilio ubicado en San Luis 84 A, colonia San Nicolás Tolentino, Tláhuac, México, Distrito Federal, se acordó aumentar el capital social de la empresa en la porción variable en la cantidad de $1'315,714.00 (un millón trescientos quince mil setecientos catorce pesos 00/100 M.N.) mediante la emisión de 657,857 acciones serie única, clase II, sin expresión de valor nominal, debiendo ser suscritas y pagadas a un valor de $2.00 (dos pesos 00/100 M.N.) por acción. Asimismo, en la citada Asamblea se decretó una prima por suscripción de acciones por la cantidad de $5'131,286.00 (cinco millones ciento treinta y un mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), a razón de $7.800002128122 (siete pesos 800002128122/100 M.N.) por acción, misma que deberá ser pagada simultáneamente con la suscripción de acciones que en su caso se realice. De igual forma se comunica a los accionistas de la sociedad que les corresponde suscribir, en proporción a su tenencia accionaria actual, a razón de una nueva acción por cada 185.8905050794 acciones de que sean propietarios.

Con fundamento en el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se les comunica a los accionistas de dicha sociedad que cuentan con un plazo máximo de 15 días naturales, contado a partir de la publicación del presente acuerdo, para acudir a la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, a ejercer su derecho de preferencia para suscribir la parte que les corresponde del mencionado aumento de capital social decretado en proporción a su tenencia accionaria actual, debiendo pagar en efectivo y simultáneamente con la suscripción que realicen, el valor de cada acción y la prima decretada, de conformidad con el párrafo anterior.

México, D.F., a 29 de marzo de 2000.

Delegado Especial

Xavier Mangino Dueñas

Rúbrica.

(R.- 123576)

GRUPO IUSACELL CELULAR, S.A. DE C.V.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo noveno de los estatutos sociales de Grupo Iusacell Celular, S.A. de C.V., y en los artículos 180, 181, 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Asamblea General Ordinaria Anual que se celebrará el 28 de abril de 2000 a las 12:00 horas en el salón de usos múltiples del edificio Corporativo Santa Fe III, ubicado en avenida prolongación Paseo de la Reforma número 1236, planta baja, colonia Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, 05348, México, Distrito Federal, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I. Discusión y aprobación o modificación del informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el informe del comisario, respecto de las operaciones y resultados de la sociedad por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 1999, y adopción de las medidas que se juzguen oportunas.

II. Nombramiento de consejeros y comisarios, propietarios y suplentes, y determinación de sus remuneraciones.

III. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por esta Asamblea.

Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar sus títulos de acciones en las oficinas de la sociedad, ubicadas en prolongación Paseo de la Reforma número 1236, P.H., colonia Santa Fe, 05348, México, Distrito Federal, o en cualquier institución autorizada, y presentar a la sociedad en días y horas hábiles, pero a más tardar a las 12:00 horas del 26 de abril de 2000, el recibo de depósito correspondiente para recibir a cambio la tarjeta de admisión a la Asamblea. Cualquier accionista podrá hacerse representar en la Asamblea por apoderado, designado mediante carta poder firmada ante dos testigos.

México, D.F., a 6 de abril de 2000.

Comisario

C.P. Juan Manuel Ferrón Solís

Rúbrica.

(R.- 123578)

GRUPO IUSACELL CELULAR, S.A. DE C.V.

(ANTES GRUPO IUSACELL, S.A. DE C.V.)

AVISO A LOS ACCIONISTAS

Se hace del conocimiento de los accionistas, que en la asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada el 21 de febrero de 2000, se resolvió entre otras cosas aumentar el capital social en su

parte fija hasta por la suma de $1,279'783,093.04 (mil doscientos setenta y nueve millones setecientos ochenta y tres mil noventa y tres pesos 04/100 M.N.), mediante la emisión de hasta 365'011,584 (trescientas sesenta y cinco millones once mil quinientas ochenta y cuatro) acciones de la serie A, para ser suscritas y pagadas por los accionistas de dicha serie mediante capitalización de aportaciones para futuros aumentos de capital o en efectivo, en proporción a su tenencia accionaria. La Asamblea referida resolvió que el precio de suscripción por acción será de $3.506143775046 M.N.

En la Asamblea, Grupo Iusacell, S.A. de C.V. (antes Nuevo Grupo Iusacell, S.A. de C.V.), ejerció su derecho de preferencia y suscribió y pagó íntegramente las acciones que le correspondían. De conformidad con el artículo noveno de los estatutos sociales y el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los demás accionistas titulares de acciones de la serie A al momento de la Asamblea, tienen preferencia, en proporción al número de dichas acciones, para suscribir las emitidas por la Asamblea.

El derecho de preferencia podrá ejercitarse dentro de un plazo que vencerá a los 15 días naturales siguientes al de esta publicación. Las acciones no suscritas al término de dicho plazo quedarán canceladas automáticamente.

Para acreditar y ejercitar su derecho de preferencia, los accionistas deberán acudir a las oficinas de la sociedad, ubicadas en avenida prolongación Paseo de la Reforma número 1236, P.H., colonia Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, 05348, México, Distrito Federal, y exhibir los correspondientes títulos de acciones y, en su caso, solicitar su inscripción en el registro de acciones de la sociedad.

México, D.F., a 7 de abril de 2000.

Delegado Especial de la Asamblea

Adolfo Alaniz Ramírez

Rúbrica.

(R.- 123596)

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

AVISO A LOS USUARIOS

Por disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las claves por concepto de Publicaciones y Venta del **Diario Oficial de la Federación**, en las formas fiscales 5 y 16 emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, fueron modificadas.

Por lo que a partir del mes de febrero del año en curso, la clave por concepto de Publicaciones en el **Diario Oficial de la Federación** será 400006, mediante la forma fiscal 5 "Declaración General de Pago de Derechos" y la clave por concepto de Venta del **Diario Oficial de la Federación** será 600018, mediante la forma fiscal 16 "Declaración General de Pago de Productos y Aprovechamientos".

Para cualquier duda o aclaración al respecto, estamos a sus órdenes en los teléfonos 5535-7454 y 5546-4021, extensiones 222, 274 y 275.

Atentamente

Diario Oficial de la Federación

AVISO AL PUBLICO

Se comunica que para las publicaciones de estados financieros, éstos deberán ser presentados en un solo archivo en un disquete que deberá estar capturado en cualquiera de los siguientes procesadores: WORD PERFECT 5.0, WORD PERFECT 5.1, MS WORD, WORD FOR WINDOWS 2.0, 6.0 o 7.0.

Atentamente

Diario Oficial de la Federación

SEGUNDA SECCION

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA

AVISO por el que se informa al público en general, que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, ha concluido la elaboración del Programa de Manejo del Area Natural Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera la región conocida como Ría Lagartos, ubicada en los municipios de San Felipe, Río Lagartos y Tizimín, en el Estado de Yucatán, establecida mediante Decreto Presidencial publicado el 21 de mayo de 1999.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

JULIA CARABIAS LILLO, Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 5o. fracción I y 54 fracciones V y XX del Reglamento Interior de esta Secretaría, he tenido a bien expedir el siguiente:

AVISO

Por el que se informa al público en general, que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, ha concluido la elaboración del Programa de Manejo del Area Natural Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera la región conocida como "Ría Lagartos", ubicada en los municipios de San Felipe, Río Lagartos y Tizimín, en el Estado de Yucatán, establecida mediante Decreto Presidencial publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 21 de mayo de 1999.

Dicho Programa se elaboró con la participación del Gobierno del Estado de Yucatán, de los municipios de San Felipe, Río Lagartos y Tizimín, de los sectores productivo, académico y científico, y de la sociedad en general.

Se informa a los interesados que dicho programa se encuentra a su disposición en las oficinas del Instituto Nacional de Ecología de esta Secretaría, ubicadas en avenida Revolución número 1425, colonia Tlacopac, San Angel, Delegación Alvaro Obregón en México, Distrito Federal, y en la Delegación Federal de la propia Dependencia en el Estado de Yucatán, ubicada en la Calle 33-B número 544, por avenida Reforma edificio Sabrina Maya, colonia García Ginerés, código postal 97070, Mérida, Yucatán.

Asimismo, mediante el presente instrumento se da a conocer el documento que contiene el resumen del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera "Ría Lagartos", y el plano de localización y zonificación de dicha área.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil.- La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, **Julia Carabias Lillo**.- Rúbrica.

INTRODUCCION

El Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos representa un instrumento de planeación que a partir del conocimiento de la problemática del área, sus recursos naturales y su aprovechamiento racional y sostenido, plantea la organización, jerarquización y coordinación de acciones que permitirán alcanzar los objetivos de creación del Area Natural Protegida. Por lo tanto, debe ser concebido como una herramienta dinámica y flexible, que se retroalimenta y adapta con base en las políticas de manejo y la normatividad que para el área se dicten.

La Reserva está limitada por 90 vértices de la poligonal con una superficie de 60,347.82 hectáreas, se localiza en el extremo oriental de la franja litoral de Yucatán; al norte limita con el Golfo de México, al sur con los municipios de Tizimín, Río Lagartos y San Felipe, al este con Quintana Roo y al oeste con el Municipio de San Felipe.

La Reserva se ubica a 270 Km de la ciudad de Mérida y a 50 Km de Tizimín. El acceso a la zona se puede realizar por las carreteras pavimentadas que comunican con los poblados de San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas y El Cuyo, por el camino de terracería transitable parte del año que comunica los poblados de Las Coloradas y El Cuyo, también por vía marítima hasta los puertos de San Felipe, Río Lagartos y El Cuyo que cuentan con instalaciones básicas para embarcaciones de cabotaje.

Ría Lagartos presenta gran diversidad de ambientes, como manglar, selva mediana subperennifolia, selva baja caducifolia, vegetación de dunas costeras, petenes y sabana representada por tular, pastizal y carrizal que son los principales sitios de anidación de aves palustres y marinas. En conjunto, estos sistemas sustentan alta diversidad florística y faunística en relación con áreas continentales de tamaño similar.

Destaca entre la fauna local las especies para las cuales Ría Lagartos es vital, como el flamenco del Caribe (*Phoenicopterus ruber ruber*) cuya distribución en México se restringe a la porción norte de la Península de Yucatán. Las colonias de anidación se localizan en una pequeña porción al este de la Reserva. A pesar de tener poblaciones considerables en otras partes de la región del Caribe, como la Península de Florida y las Bahamas, está considerada bajo protección especial.

Los humedales de la Reserva han tenido reconocimiento internacional, siendo el primer sistema de humedales mexicano inscrito en la lista internacional Ramsar, según los criterios adoptados por la convención de Cagliara en 1980, publicados en el **Diario Oficial de la Federación** el 29 de agosto de 1986.

Asimismo, sus playas fueron decretadas por el Gobierno Federal como zona protectora de anidación de tortugas marinas, reconocidas como una de las principales zonas de arribo de tortuga de carey (*Eretmochelys imbricata*) y la única en el Estado de Yucatán para tortuga blanca (*Chelonia mydas*), en el **Diario Oficial de la Federación** del 29 de octubre de 1986.

CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y GEOLOGICAS Fisiografía y topografía

La Reserva tiene 74 kilómetros de longitud de los 378 del litoral con que cuenta el Estado, lo que significa que abarca el 19.6% del total de la costa. Se encuentra ubicada en la Provincia Fisiográfica denominada Región Peninsular Yucateca, en la subprovincia de la Llanura Cárstica y subdivisión de Zona de Costa, que abarca la porción norte de la península. Esta provincia se caracteriza por ser una plataforma caliza formada de rocas sedimentarias cretácicas que descansan en formaciones terciarias, en la cual no existen corrientes superficiales y el agua se filtra formando un manto freático de poca profundidad compuesto por grutas, corrientes subterráneas, cenotes y aguadas.

Hidrología

La península está formada por una plataforma sedimentaria de roca caliza porosa que le da características hidrológicas únicas, no existe un sistema superficial de corrientes de agua dulce de carácter

permanente, sino un flujo muy particular de agua subterránea, por la fácil filtración del agua pluvial a través de la roca caliza**.** Cuando la roca caliza superficial es disuelta por efecto del agua, causando el desplome de la bóveda que lo cubre, origina los cenotes o dolinas (Lesser y Weidie, 1988).

Las corrientes de agua provenientes del sur de la península, se dirigen hacia el norte propiciando la existencia de una red hidrológica subterránea en el manto freático, que en ocasiones surge como fuentes en el fondo del estero.

El estero Ría Lagartos se orienta de oeste-noroeste a este-sureste. Presenta tres conexiones con el mar, una natural por la boca de San Felipe, las otras dos son canales artificiales, el de San Felipe y el de Río Lagartos.

La amplitud de la ría varía de 25 metros a 3.5 kilómetros y la longitud es de aproximadamente 74 km. El borde norte está formado por una isla de barrera resultado de la sedimentación de arena, provocada por la acción marina.

La extensión del espejo de agua es de 9,371 hectáreas, la profundidad varía entre 0.5 m y 3 m. El volumen de agua se aproxima a los 130 millones de metros cúbicos y por su restringida comunicación con el mar tiene escasa renovación de las aguas internas, además recibe limitados aportes de agua dulce provenientes de afloramientos internos, escurrimientos y lluvias.

Climatología

Existen dos tipos de climas en Ría Lagartos el BSo(h')w(x')iw". Es el clima más seco de los áridos y se presenta en la región de Río Lagartos. El coeficiente precipitación/temperatura (P/T) es menor a 22.9 ya que la evaporación excede a la precipitación, la temperatura media del mes más frío es mayor a 18°C y la temperatura media anual mayor a 22°C, el porcentaje de precipitación invernal respecto a la total anual está entre 5 y 10.2 %; se presentan lluvias todo el año aunque poco frecuentes, pero intensas; es isotermal con oscilación anual de las temperaturas medias mensuales menor a 5°C y tiene influencia de la canícula.

El segundo tipo de clima es el Ax'(wo) iw", en la región de El Cuyo corresponde al más seco de los cálidos húmedos, con lluvias repartidas a lo largo del año. El porcentaje de precipitación invernal respecto al total anual es mayor al 18%; es un clima de transición entre los de lluvias en verano y los de lluvias en invierno; la temperatura media anual mayor a los 22°C y la temperatura del mes más frío mayor a los 18°C; es isotermal con oscilación anual en relación a las temperaturas medias mensuales menor a 5°C y presenta influencia de la canícula (Valdés et al 1992).

Precipitación

Las isoyetas varían de 500 mm a 1,000 mm. Los valores de 500 mm y 600 mm se localizan en la parte norte de la Reserva, en cambio las de 800 y 1,000 mm se encuentran al sur.

En el área de la estación de Río Lagartos la precipitación total anual es de 550.1 mm. El mes más seco abril con 7.7 mm y el más lluvioso septiembre con 104.4 mm. El 16.6% de la precipitación total es invernal. La relación P/T de 21.4 y la canícula es en julio.

En el área de la estación de El Cuyo, la precipitación total anual es de 696.2 mm. El mes más seco es abril con 15.3 mm y el más lluvioso septiembre con 118.2 mm. El 16.1% de la precipitación total es invernal. La relación P/T es de 26.3. Entre los meses de mayo-octubre se presentan de 30 a 59 días con lluvia apreciable (superior a 0.1 mm), en cambio, entre los meses de abril a noviembre se presentan hasta 29 días con lluvia apreciable y la canícula se presenta en julio y agosto.

Huracanes

La Reserva se considera zona de alto riesgo, por encontrarse en la trayectoria de los huracanes que se originan en el Caribe y en el Atlántico oriental. En los últimos 88 años se han presentado 12 huracanes tropicales que han impactado con fuerza a la península. Los "nortes" constituyen otro fenómeno meteorológico, que en ocasiones se presentan con fuertes lluvias y marejadas que provocan inundaciones y abren bocas a través de la duna costera.

CARACTERISTICAS BIOTICAS

Flora

Ría Lagartos cuenta con numerosas especies de afinidad centroamericana, es decir, especies cuya distribución geográfica se extiende desde los países centroamericanos y los estados mexicanos del sur hasta la Península de Yucatán. Entre la flora de la Reserva se encuentran numerosas especies de afinidad caribeña, algunas de las cuales para México sólo se encuentran representadas en los estados que colindan con el Mar Caribe, Yucatán y Quintana Roo. Entre éstas encontramos a la Flor de mayo (*Plumeria obtusa*), kuká (*Pseudophoenix sargentii*), chit (*Thrinax radiata*), tasiste (*Acoelorrhaphe wrightii*) y palma real (*Roystonea regia*).

Por otra parte, la Reserva presenta una gran diversidad de comunidades vegetales. Se cuentan en su interior 10 tipos de vegetación. Entre estos tipos se presenta la selva mediana subperennifolia, selva mediana subcaducifolia, selva baja caducifolia, selva baja caducifolia espinosa, selva baja inundable, manglar de franja, manglar achaparrado, matorral de dunas costeras, pastizal inundable y la vegetación de pastos marinos (Seibadal). También encontramos comunidades de hidrófitas flotantes, de hidrófitas

emergentes y unas formaciones características de las zonas costeras de la Península de Yucatán denominadas petenes.

Zona intermareal

Las plantas sumergidas están representadas por los géneros Thalassia sp., Euchema sp., Halimeda sp., Sargazo sp. y Dyctiota sp., que representan la fuente de alimentación para diversas especies marinas, como tortugas y peces. Algunos de estos pastos son transportados y acumulados en la playa, y pueden servir de refugio para pequeños invertebrados, útiles en la alimentación de cangrejos y aves playeras.

Duna costera

La vegetación de duna costera se encuentra a lo largo de la barra que se extiende desde San Felipe hasta el estero de Chipepte. La amplitud de la vegetación es muy variable y está relacionada con la anchura de la barra, la comunidad se compone de plantas xerófitas tropicales, dominadas por pequeñas palmas y grandes suculentas (Tabla 1). Las especies características son: sisal *(Agave sisalana*), uva de mar (*Coccoloba uvifera*), nakax (*Coccotrinax readii*), palma chit (*Thrinax radiata*), kuká (*Pseudophoenix sargentii*), anacahuita (*Cordia sebestena*), nopal (*Opuntia dillenii*), cactus (*Acanthocereus tetragonus*), sikil-ha'xiu (*Lantana involucrata*).

Manglar

Aquí se presentan dos modalidades: el manglar de franja y el manglar achaparrado. El manglar de franja se presenta en el borde del canal, en la desembocadura de la ría, en el sur y sureste de la ciénaga. Este tipo de vegetación se encuentra permanentemente inundado por agua salada. Es una comunidad muy densa, con una altura promedio de 10 m. Las especies más comunes *son Rhizophora mangle, Avicennia germinans y Conocarpus erectus*. Aun cuando menos abundante también se presenta el mangle blanco (*Laguncularia racemosa*). Se reconoce que es una comunidad muy importante en el mantenimiento de la productividad de la laguna.

El manglar achaparrado, por su parte, se presenta en medios muy extremosos con altos niveles de salinidad, suelos muy pobres, vientos fuertes e inundación constante. Está constituido por las mismas especies de manglares, sin embargo aquí se presentan numerosas especies de cyperaceas que se entremezclan con ellos. Su característica distintiva es la altura, la cual apenas llega a ser de 1 a 2 m. Este tipo de vegetación se presenta principalmente en porción más oriental de la Reserva y al sur de la laguna en las cercanías con la población de Río Lagartos.

Selva baja caducifolia

Su principal característica es que el cien por ciento de sus árboles tiran su follaje en la época seca del año, durante un periodo que abarca entre 5 y 6 meses. La selva baja caducifolia es una comunidad arbórea sumamente densa, en la cual los árboles del dosel superior alcanzan alturas entre 8 y 12 metros, formando un techo relativamente uniforme de copas convexas o planas. Las leguminosas son la familia de plantas mejor representada en este tipo de comunidades; asimismo las cactáceas se encuentran bien representadas en este tipo de vegetación.

La selva baja caducifolia con cactáceas candelabriformes se desarrolla de El Cuyo hasta la altura de Sisal, donde ocurren cambios bruscos pasando a una selva baja caducifolia con leguminosas espinosas. En la selva baja caducifolia con cactáceas candelabriformes, se intercalan con regularidad especies como *Cephalocereus gaumeri, Pterocereus gaumeri, Nopalea gaumeri y Acanthocereus tetragonus.*

Tular, carrizal y pastizal

En la Reserva es muy común la asociación de *Phragmites australis, Cladium jamaicensis* y *Typha domingensis.* Cubre grandes extensiones de pantanos, aguadas, cursos de agua de escasa corriente y del estero, también se entremezcla con manglares, selva baja caducifolia y petenes.

Petenes

Los petenes los han descrito como islotes de agrupaciones arbóreas concéntricas, lo que implica una transición gradual de los terrenos secos interiores a las áreas inundadas de la marisma. En la región sureste de la Reserva se encuentra una amplia zona de petenes de diversos tamaños, ocupando las planicies inundables de las marismas. Su forma varía de redonda a oval, con el centro elevado con relación a los contornos y pueden estar asociados con manantiales o en algunos casos con cenotes. Son particularmente abundantes en la parte oriental de la ría, en el sur y sureste de ésta.

Las especies características pertenecen a los géneros: Metopium, Ficus, Plumeria, Manilkara, Thrinax y Sabal. Hacia los extremos se encuentra *Haematoxylon campechianum* y en la zona media *Acoelorrhaphae writhii* y de *Conocarpus erectus* y otras especies características de la selva mediana subperennifolia inundable.

Fauna

La fauna terrestre se encuentra íntimamente ligada con la vegetación primaria y secundaria. La gran cantidad de microambientes conformados por esta vegetación y el ambiente físico promueven la gran diversidad faunística de la Reserva. La diversidad de la región está representada por especies de los 5 grupos de vertebrados. Las 554 especies reportadas hasta la fecha en la Reserva incluyen 142 endémicas de Mesoamérica, de las cuales 15 son endémicas de México y 1 de Yucatán.

Mamíferos

Entre las especies de mamíferos se conocen 58 especies de las cuales se encuentran en peligro de extinción al mono araña (*Ateles geoffroyi*), jaguar (*Panthera onca*), ocelote (*Leopardus pardalis*), el *tigrillo (Leopardus wiedi*), la onza (*Herpailurus yagouaroundi*) y el oso hormiguero (*Tamandua mexicana)*. Los murciélagos de la familia Phyllostomatidae también son de importancia y está representada por seis especies. El venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*) y el temazate (*Mazama americana*) son cazados por los pobladores para autoconsumo cuando se presenta la oportunidad.

Aves

Dentro de la Reserva existen 333 especies de aves (177 residentes, 142 migratorias y 14 son residentes-migratorias). Destacando el flamenco rosa *Phoenicopterus ruber ruber*, que tiene un sitio de anidación preponderante en la cuenca de El Cuyo, lo que originó la protección legal de Ría Lagartos en 1979. Las familias Phalacrocoracidae (cormoranes), Ardeidae (garzas), Ciconiidae (cigüeñas), Rallidae (gallinitas de agua) y Alcedinidae (martín pescador) también son representativas, debido a que habitan dentro del sistema de humedales costeros del área natural protegida.

Por otra parte, el gallito de mar (*Sterna maxima*), la gaviota de playa (*Larus atricilla*) y la golondrina de mar (*Sterna sandvicensis*), de las que se estima en conjunto una población de 10,000 ejemplares son anidantes activas en la Reserva.

El pelícano café (*Pelecanus occidentalis*), el cormorán (*Phalacrocorax auritus y Ph. olivaceus*), la tijereta (*Fregata magnificens*), la garza tigre (*Tigrisoma mexicanum*), la garza garrapatera (*Bubulcus ibis*), la grullita (*Aramus guarauna*), el martín pescador (*Chloroceryle spp. y Ceryle spp*.) y el ibis blanco (*Eudocimus albus*) utilizan al estero como área de alimentación.

La ornitofauna residente está representada de manera abundante por la chachalaca (*Ortalis vetula*), y varias especies de palomas de los géneros Columba y Zenaida.

Reptiles y anfibios

La herpetofauna incluye 95 especies reportadas que abundan en el área, destacando la cantil nauyaca (*Agkistrodon bilineatus*), la boa (*Boa constrictor*) y las culebras (*Familia Colubridae*).

Hay 4 especies de tortugas marinas que llegan a la costa a desovar: tortuga carey (*Eretmochelys imbricata*), tortuga caguama (*Caretta caretta*), tortuga verde (*Chelonia mydas*) y tortuga laúd (*Dermochelys coriacea*). Estas especies están en peligro de extinción, ya que se adaptan con dificultad a los ambientes modificados, y son muy sensibles a las perturbaciones humanas. Además entre los reptiles encontramos dos especies de cocodrilo (*Crocodylus moreletii y C. acutus*).

Al igual que los reptiles, la lista de anfibios es necesaria actualizarla. Entre ellos encontramos sapos del género Bufo que abundan en manglares someros. Se encuentran también especies de los géneros Agalychnis, Tripion, Leptodactylus, Rana, Bolitoglossa y Rhinophrynus.

Peces

Hasta la fecha se tiene un registro de 71 especies de peces, entre los cuales se encuentran 4 especies de elasmobranquios. Dentro de los dominantes cabe mencionar a *Strongylura nota* (Belonidae), *Florydichtys carpio* (Cyprinodontidae), *Sphoeroides testudineus* (Tetraodontidae) y *Eucinostomus argenteus.* La amplia distribución de estas especies dentro de la ría está dada por su capacidad eurihalina, que les permite encontrarse en zonas muy salinas como El Cuyo (130 ppm) así como en aguas con salinidades cercanas al agua de mar.

En el interior del estero podemos encontrar algunas especies como el bagre (*Arius melanopus*), la postá (*Archosargus rhomboidalis*), la mojarra prieta (*Cichlasoma urophtalmus*), el armado (*Orthopristis crysoptera*), la lisa (*Mugil sp*.) y el robalo (*Centropomus ronchus*). Los peces que habitan los cenotes de la Reserva incluyen a las especies endémicas *Typhliasina pearsei* y *Ophisthernon infernale*. Es necesario proseguir con la identificación de especies dulceacuícolas.

Entre las especies más importantes desde el punto de vista comercial podemos encontrar las siguientes especies: mero *(Ephinephelus morio)*, huachinango *(Lutjanus sp.)*, tiburón *(Carcharinus sp.)*, mojarra *(Gerres sp. y Calamus sp.)*, chac-chi *(Haemulon plumieri)*, carito *(Scomberomorus cavalla)*, jurel *(Caranx sp.)*, robalo, corvina *(Cynoscion sp.)*.

Invertebrados

Las especies más importantes desde el punto de vista comercial podemos encontrar las siguientes: pulpo *(Octopus maya y O. vulgaris),* langosta *(Panulirus argus)* y el camarón *(Panaeus sp).*

Asimismo, son característicos el cangrejo terrestre (*Gecarcinus lateralis*), caracoles del género Donax y la cacerolita de mar (*Limulus polyphemus*), que es una especie en peligro de extinción, con distribución limitada a las playas de México. Su distribución abarca del norte de la Península de Yucatán a la Isla del Carmen, Campeche. Utiliza las playas arenosas y parte del estero de Río Lagartos para reproducirse y desovar, algunos huevos con las mareas altas retornan al mar donde eclosionan y otros son depredados por aves marinas.

Se encuentran los bivalvos (*Anomalocardia auberiana*), (*Tellina tampaensis*) y (*Carditamera floridana*), el gasterópodo (*Cerithidae pliculosa*).

En relación con los insectos, se han realizado estudios que presentan órdenes como: Dyctioptera, Orthoptera, Hemiptera, Diptera, Coleoptera, Neuroptera, Dermaptera, Hymenoptera, Homoptera y Lepidoptera.

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS

Demografía

La Reserva de la Biosfera Ría Lagartos se conforma por poblaciones ubicadas en tres municipios: San Felipe (San Felipe cabecera municipal), Río Lagartos (Río Lagartos cabecera municipal y la comisaria de Las Coloradas) y Tizimín (El Cuyo comisaria). La composición demográfica de las comunidades de la Reserva presenta una población en constante movimiento, debido a las diferentes tasas de crecimiento social positivo que la zona ha experimentado en los últimos 20 años.

La inmigración en las comunidades de San Felipe, Río Lagartos y Las Coloradas es muy baja y no afecta su crecimiento poblacional. El origen de la población inmigrada es de las siguientes comunidades: Panabá, Tizimín, Motul y Mérida. El principal motivo de este proceso es la búsqueda de trabajo. En la comunidad de El Cuyo en los últimos años (1996 y 1997) existen altos márgenes de inmigración, provocados por los permisionarios de pesca que ofertan sus embarcaciones con el fin de aprovechar las temporadas de captura de especies de alto valor comercial.

Infraestructura y servicios

Carreteras y comunicaciones

Existen tres carreteras de acceso a la Reserva: Una federal, Tizimín-Río Lagartos, y dos estatales, Panabá-San Felipe y Colonia Yucatán-El Cuyo. Las carreteras que comunican a San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas y El Cuyo están pavimentadas. El camino que conecta a Las Coloradas con El Cuyo es de terracería y no es transitable todo el año. Las cuatro comunidades cuentan con servicio telefónico, correos y transporte foráneo.

Educación

Las cuatro comunidades cuentan con educación preescolar, básica y media básica, ya sean estas escuelas secundarias técnicas o telesecundarias.

Servicios

Las cuatro comunidades cuentan con servicio de agua potable y energía eléctrica, carecen de drenaje o tratamiento de aguas y de sistemas eficientes de recolección de basura.

Actividades productivas y uso de suelo

Pesca

La pesca es la actividad más importante entre la población económicamente activa de la Reserva. El principal tipo de pesca es la ribereña o artesanal, se realiza desde pequeñas embarcaciones, con motores fuera de borda y en zonas del Golfo de México cercanas a la costa.

La pesca se realiza todo el año. Cuando los fenómenos climatológicos impiden la salida de las embarcaciones la pesca se efectúa en el interior del estero unos 100 días en promedio al año.

Agricultura

Esta actividad es muy limitada en el área de la Reserva y está representada básicamente por la milpa en la cual se cultiva principalmente maíz, frijol, calabaza y chile. El uso de fertilizantes es muy reducido y existen actividades de control de plagas.

Ganadería

La Reserva se encuentra enclavada en la región ganadera del Estado. La cría de bovinos constituye una actividad importante en dos modalidades, la ejidal y la privada. La ejidal produce poca ganancia porque la carne tiene poco consumo en la región, por lo que muchos propietarios aprovechan los terrenos ejidales a través de la renta de pasto. La ganadería privada es más productiva por la disponibilidad de terrenos baratos, los bajos costos de las instalaciones.

La porcicultura y la avicultura están enfocadas a satisfacer las necesidades de autoconsumo

Explotación de sal

La naturaleza cárstica de las calizas de Yucatán, en donde no hay descargas de ríos que diluyan las aguas salinas de las lagunas costeras, impide prácticamente la existencia de transporte de sedimentos terrígenos facilitando la cosecha de sal limpia.

La Industria Salinera de Yucatán (ISYSA) fue fundada en 1946 y creció rápidamente caracterizándose por ocupar extensivamente el suelo, manifestada por la construcción de los bordos de estanques de evaporación y cristalización. La productividad de sal de esta planta únicamente es superada por la salinera de Guerrero Negro en Baja California Sur, produciendo aproximadamente medio millón de toneladas anuales.

Turismo

Río Lagartos y San Felipe cuentan con hoteles pequeños y restaurantes con especialidad en mariscos.

Las Coloradas no cuenta con infraestructura turística y El Cuyo algunas cabañas con servicios básicos, un hotel y tres restaurantes.

Tenencia de la tierra

En la Reserva existen 6 tipos de regímenes de propiedad: propiedad privada, terrenos nacionales, dotación ejidal, zona federal marítimo-terrestre y zona federal concesionada para la producción de sal (5,000 hectáreas). La zona situada al sur del estero son terrenos de la Federación. En el área de El Cuyo, San Felipe y Río Lagartos existen terrenos ejidales. El poblado de Las Coloradas se originó cuando el señor Roger Roche Díaz les otorgó a los trabajadores de la compañía salinera terreno y vivienda.

Aspectos históricos y culturales

Rasgos arqueológicos

El territorio donde ahora se encuentra la Reserva perteneció al cacicazgo de Ecab en la época prehispánica posterior a la caída de Mayapán, reconocida como la gran capital peninsular, el territorio yucateco se fragmentó en provincias o cacicazgos autónomos, que frecuentemente tenían conflictos por el control de los recursos más importantes, entre ellos la sal.

Fundación de las comunidades

Los tres poblados principales a excepción de Las Coloradas, remontan su existencia a la época colonial. Pedro Mártir de Anglería en su estudio cartográfico *De Orbis Novo* de 1511, localiza adecuadamente la boca del estero y lo denomina Río de Lagartos antes del supuesto descubrimiento de Yucatán. Bernal Díaz del Castillo relata en su *Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España*, que durante uno de los viajes de exploración se descubrió la boca del estero. La tripulación del navío tenía necesidad de proveerse de agua dulce, y creyendo que se trataba de un río, decidió explorarlo, pero a medida que avanzaban hacia el interior, se dieron cuenta de la gran cantidad de cocodrilos que había en aquel lugar y dado que en Europa no conocían esta especie, los confundieron con lagartos, por ello lo nombraron como estero de los lagartos. Al final del siglo XVII, el vigía de El Cuyo y el poblado de Río Lagartos estaban bien establecidos.

PROBLEMATICA Y AMENAZAS

El análisis de amenazas fue realizado en 1996 siendo las que a continuación se relacionan: tala de la vegetación nativa, fragmentación del hábitat, disminución de especies acuáticas, disminución de poblaciones de mamíferos y aves, disminuciones de poblaciones de árboles maderables, alteración de los flujos de agua, contaminación química, disminución de las poblaciones de palma, contaminación orgánica y por desechos sólidos, azolve, cambio en la salinidad, impactos a las poblaciones de tortugas marinas, eutroficación, disminución de las poblaciones de mangle, disminución de cocodrilos, introducción de especies exóticas, perturbación a aves y la disminución en la cobertura de la vegetación subacuática.

COMPONENTES DEL PROGRAMA DE MANEJO

Componente conservación

Con la implementación de este componente se pretende lograr la recuperación y conservación de los recursos naturales contenidos en el área de la Reserva a través de la ejecución de los subcomponentes:

- Inspección y vigilancia.
- Restauración ecológica.
- Prevención y control de incendios.

Objetivos particulares

- Conservar la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos a través de la ejecución de acciones de recuperación, conservación, desarrollo y vigilancia de los recursos naturales.
- Optimizar el sistema de zonificación, involucrando a los usuarios de los terrenos de la Reserva.
- Asegurar el cumplimiento de las reglas administrativas de cada una de las zonas del sistema de zonificación.
- Optimizar las estrategias de reforestación, para el mejoramiento del hábitat y el control de la erosión.
- Diseñar estrategias para la restauración de flujos hídricos de la Reserva.
- Diseñar medidas de control de incendios forestales.

Estrategias

- Priorizar los problemas de conservación de recursos naturales de la Reserva de manera que se limiten a los principales problemas y presenten elementos útiles para la toma de decisiones sobre sus soluciones.
- Diseñar e implementar las acciones encaminadas a la protección de los recursos naturales de la Reserva.
- Elaborar una diagnosis de las zonas fuertemente impactadas de las diferentes asociaciones vegetales presentes en la Reserva, con objeto de establecer lineamientos específicos para su manejo.
- Identificar necesidades de reforestación de la Reserva.
- Identificar zonas de restauración de flujos hídricos.
- Identificar zonas susceptibles de incendios para instrumentar acciones preventivas.

Metas

- Contar con un sistema de inspección y vigilancia eficiente.
- Realizar la restauración ecológica de los zonas que así lo requieran.
- Prevenir, controlar y combatir incendios.
- Proteger y conservar especies vegetales y animales consideradas como en endémica, raras, amenazadas y en peligro de extinción.

Subcomponente inspección y vigilancia

Actividades

- El personal de vigilancia deberá portar una identificación que lo acredite como personal de la Reserva y deberá portarla en un sitio visible.
- El personal de vigilancia deberá utilizar uniformes que permitan su rápida identificación, acordes al clima y al tipo de actividades que desempeñe.
- Son funciones de los vigilantes:
- Aplicar y divulgar la normatividad de aplicación a la Reserva.
- Participar en la previsión de todas las acciones de manejo como: el control de fogatas e incendios, asentamientos humanos irregulares, plagas y descargas de residuos contaminantes.
- Denunciar con las autoridades correspondientes las violaciones a las leyes, reglamentos y disposiciones legales aplicables a la Reserva.
- Cooperar en los trabajos de educación ambiental, interpretación, extensión e investigación que se efectúen en la Reserva.
- Realizar recorridos en vehículos y a pie por la zona de su jurisdicción y reportar cualquier anomalía.
- Vigilar el cumplimiento de las Reglas Administrativas del presente programa de manejo.
- Ayudar a los pobladores locales y a los visitantes en caso de emergencia o accidente.
- Efectuar el mantenimiento del equipo que se les asigne.
- El director, el jefe de vigilantes y los vigilantes se deberán coordinar con las autoridades competentes para la ejecución de las siguientes acciones dentro de los límites de la Reserva:
- Promover ante cualquier autoridad competente (PROFEPA, SEDENA, SEMAR, PGR y presidencias municipales) la detención de cualquier tipo de transporte, que haya estado involucrado o esté siendo utilizado en la comisión de cualquier transgresión de la reglamentación aplicable a la Reserva.
- Levantamiento de actas de hechos.
- Detener precautoriamente cualquier planta o animal, ya sean enteros, partes o sus productos que se posean en contravención de la ley. En cada caso se deberá acudir a la autoridad competente y se podrá promover con el infractor la entrega voluntaria del producto del ilícito.
- Consignar con las autoridades competentes a cualquier persona que transgreda la reglamentación aplicable a la Reserva.
- La vigilancia fija será de dos tipos: casetas y campamentos de operativos.
- En las 3 casetas de control ubicadas en cada carretera de acceso a la Reserva, deben contar con la señalización correspondiente y con un responsable. Las casetas están ubicadas en:
- Caseta 1. Carretera Colonia Yucatán-El Cuyo
- Caseta 2. Carretera Tizimín-Río Lagartos
- Caseta 3. Carretera Panabá-San Felipe
- Los campamentos de operativos se instalarán en lugares estratégicos donde se haya detectado incidencia de ilícitos: cacería, tala clandestina, saqueo de plantas de ornato, etc.
- La vigilancia móvil se hará preferentemente por parejas de modo que reciban apoyo mutuo y deberá obedecer a los siguientes principios:
- Las rondas deben ser impredecibles, en diferentes rutas, en días feriados y normales de trabajo, tanto de día como de noche.
- Cuando exista la posibilidad de que los infractores estén armados, los vigilantes deberán solicitar apoyo a la policía judicial, estatal o federal, a SEDENA o SEMAR.
- Los vigilantes deben moverse regularmente entre los puestos de vigilancia.
- Los detalles de la realización de las rondas deben cambiarse frecuentemente.
- Los trabajos de señalización de la Reserva se fortalecerán de la siguiente manera: Avisos de entrada a la Reserva y de los límites de zonas, con énfasis en el cumplimiento de los lineamientos de la zonificación y la reglamentación correspondiente.- Orientación sobre la relevancia de sitios, instalaciones, servicios y poblados.- Indicaciones sobre las restricciones y prohibiciones de uso de los recursos naturales.- Indicaciones sobre el acceso a zonas específicas y puntos de referencia geográfica.- Información pertinente sobre los recursos naturales y características particulares en los senderos interpretativos. Los trabajos de señalización deben incluir a toda la infraestructura como las instalaciones, los equipos, las estaciones, las casetas y los vehículos que se destinen al programa de manejo de la Reserva. Se deberá poner especial atención a la señalización en los

puntos de fácil acceso a la zona núcleo como son las carreteras Colonia Yucatán-El Cuyo y Las Coloradas-El Cuyo (en caso de que este camino siga existiendo pese a la recomendación de eliminarlo a mediano plazo), así como en el cauce del estero en los terrenos circundantes a la zona de El Cuyo. Se deberá resaltar la señalización referente a la protección de especies amenazadas y en peligro de extinción. Con énfasis en los lugares de vigilancia intensiva, los críticos o de restauración ecológica, las de importancia arqueológica así como en los sitios de reposo, reproducción y alimentación de especies silvestres. En el diseño de la señalización será necesario considerar que el mensaje sea visible, claro, completo y relevante. La señalización que apoyará al programa de educación ambiental (interpretación) se debe estructurar con el objetivo de transmitir "instrucción", y no simplemente información a los visitantes, para promover una actitud positiva hacia la naturaleza. Este aspecto se detalla en el subcomponente educación ambiental.

Subcomponente restauración ecológica

Actividades

Con base en el diagnóstico de los recursos naturales y de acuerdo a la zonificación propuesta, se han identificado áreas que son críticas por su grado de deterioro. En ellas se proponen las zonas específicas en que se llevarán a cabo los programas de reforestación, restauración de flujos hídricos, viveros y criaderos, erradicación de especies ferales y recuperación de suelos.

- *Reforestación y recuperación de suelos.* La reforestación con especies autóctonas se podrá realizar en las zonas de amortiguamiento y de restauración ecológica siempre y cuando se trate de áreas con vegetación secundaria con menos de 20 años de edad, tales como acahuales, potreros, cultivos abandonados y quemadales. Las zonas de restauración, definidas en la zonificación, son los lugares prioritarios en los programas de reforestación, se realizarán de manera simultánea en cada una de los sitios propuestos. El programa de reforestación para la vegetación de duna costera se contempla en los sitios que han presentado alteración de la misma.
- La erosión de los suelos de la Reserva ha sido resultado de la sobreexplotación de la selva baja y la actividad agropecuaria. La porción sur de la Reserva es la más propensa a la erosión, especialmente en la época de lluvias. Gran parte del material erosionado es depositado en la laguna y contribuye al proceso de azolvamiento. El éxito de las actividades de reforestación y de limitación de las actividades agropecuarias contribuirá en gran medida al control de este proceso.
- La reforestación con manglar en áreas impactadas deberá ser una prioridad para el manejo de la Reserva. Las zonas identificadas son: todo el límite sur de las salineras con el estero, áreas de manglar muerto por obstrucción de flujos (previstas después de la colocación de pasos de agua) y zonas de tiro del producto de los dragados de mantenimiento.
- *Restauración de flujos hídricos.* El proceso de restauración deberá incluir la remoción de todos los obstáculos significativos que se han creado y que impiden el flujo de agua hacia el interior de los manglares y entre las cuencas. En este caso es importante señalar que a corto plazo deberán restablecer flujos a través de alcantarillas y pasos de agua en: las carreteras de acceso a San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas (a la altura de la cuenca de Petén Tucha) y el piedraplén de El Cuyo. Asimismo, el desazolve de manantiales es parte importante de esta acción.
- *Viveros.* En las estaciones de campo se desarrollarán viveros de plantas nativas para las labores de reforestación. Es importante mencionar que se deberá aprovechar las plantas disponibles en los viveros de SEDENA, ITA 19 y la Secretaría en el Estado. (En el componente Uso de Recursos Naturales se menciona la función de viveros concesionados a pobladores de las comunidades).
- C*riaderos de fauna silvestre.* El probable saqueo de los nidos de todas las especies de tortugas marinas, la modificación de las playas arenosas y la captura de los organismos adultos, determinan la necesidad de reubicar los nidos en corrales sometidos a vigilancia en donde se logre concluir, de manera exitosa, el periodo de incubación y eclosión de los huevos. Las poblaciones de cocodrilos han disminuido por la destrucción de áreas sujetas a inundación como las asociaciones de tular-carrizal-pastizal, los manglares, las aguadas y probablemente los petenes, por lo que es necesario obtener información detallada sobre la población de estos reptiles como: abundancia, distribución, clases de edad, proporción de sexos y zonas de anidación para evaluar la necesidad de establecer criaderos y, en ese caso, determinar su posible ubicación y características. Es de vital importancia la protección a las zonas de anidación del flamenco en la cuenca de El Cuyo; asimismo, se deberán tomar medidas para rescatar y recuperar los huevos desplazados por inundaciones, incubándolos y crecer los pollos con el objeto de repoblar. Es importante el considerar generar el conocimiento necesario para la reproducción de flamencos, en cautiverio o por manejo de la población, ya que en la Reserva se encuentra la única zona consistente de anidación en los últimos años.
- *Erradicación de especies ferales.* Los perros y gatos ferales en la Reserva causan impacto de depredación en la fauna silvestre, como son: las tortugas marinas, las aves y pequeños y medianos mamíferos. Por lo tanto es importante encaminar esfuerzos con el objeto de eliminarlos de las áreas silvestres y controlar las poblaciones de las comunidades.

Subcomponente prevención y control de incendios

Actividades

- Evaluar los modelos actuales de manejo de incendios en Areas Naturales Protegidas que incluyen la supresión total del fuego, la supresión del fuego mediante el control del material combustible, la prescripción y supresión de fuego para poder seleccionar la combinación de prácticas más convenientes para la Reserva.
- Se deben permitir investigaciones controladas en la Reserva dirigidas a la supresión del fuego mediante el control de la acumulación del material combustible, el análisis de patrones de incendio y los efectos ecológicos de las técnicas para la supresión del fuego, previa autorización de la Dirección de la Reserva y de la Unidad Coordinadora de Areas Naturales Protegidas.
- Promover una campaña de divulgación durante la época de sequía sobre el riesgo de los incendios y las medidas de prevención y control, incluyendo las siguientes consideraciones:
- Evitar la quema de material combustible en periodos de sequía extrema.
- Evitar la quema de material combustible en condiciones de mucho viento para evitar que el fuego salga de control o se extienda a zonas no previstas.
- Quemar áreas pequeñas y evitar líneas de fuego que por sus dimensiones se tornen incontrolables.
- Conocer los efectos del fuego sobre la ecología de los ecosistemas y la historia de incendios en el área.
- Evaluar la incidencia de los incendios naturales.
- Registrar el desarrollo de todos los incendios.
- También se deberán establecer cursos para el personal y los pobladores de la Reserva, con la finalidad de instruirlos sobre los posibles efectos del fuego en los procesos ecológicos, enfatizando las repercusiones positivas y negativas. Tales cursos deberán incluir las siguientes consideraciones:
- Explicar la función y papel del fuego en la estimulación del crecimiento de vegetación sana y su influencia en el control de inundaciones del manglar y demás beneficios a la vida silvestre.
- Explicar las consecuencias que causa la inhibición de incendios por el hombre sobre el detritus que se acumula en el suelo.
- Se deberán establecer cursos de capacitación sobre la elaboración de programas de combate de incendios. Dichos cursos se impartirán a los pobladores de la Reserva y a los vigilantes.

Organización de brigadas de voluntarios. No se recomienda integrar brigadas de voluntarios para combatir los incendios a menos que éstos hayan recibido los cursos de capacitación. Las actividades que desarrollen estas brigadas deben ser apoyadas por elementos del cuerpo de Bomberos de la población grande más cercana a la Reserva.

Construcción de brechas corta fuego. Desde el punto de vista preventivo, la construcción de brechas corta fuego es una práctica casi en desuso, ya que es imposible predecir algunos factores climáticos como el viento, antes que suceda el siniestro. Hay que considerar que esta medida puede propiciar el saqueo desmedido y tala innecesaria de árboles. Su mayor utilidad es como medida correctiva.

Control de acumulación de materiales. Diversos estudios forestales indican que la recolección del material combustible como medida preventiva puede provocar efectos mayores en los procesos ecológicos que el mismo fuego. El suelo en la Península de Yucatán es pobre y la remoción de leña, hojarasca, ramas, troncos, heces fecales o cualquier tipo de material vegetal provocaría un déficit en la formación de suelo. Por otro lado, las actividades de recolección, si no se establece un control estricto y una coordinación adecuada, pueden ser un pretexto para ingresar a zonas sensibles de la selva y propiciar el saqueo y la tala. Sin embargo, esta práctica se recomienda en los límites con el estado de Quintana Roo, bajo autorización y supervisión, ya que ha sido el área de siniestros de mayores consecuencias para la Reserva.

Componente desarrollo social

Mediante la implementación de este componente se pretende propiciar el uso sustentable de los recursos naturales contenidos en la Reserva, a través de la ejecución de los siguientes subcomponentes:

- Uso de los recursos naturales
- Participación local
- Educación ambiental
- Patrimonio arqueológico, histórico y cultural.

Objetivos particulares

- Fomentar entre los habitantes del área de influencia de la Reserva, el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales de la misma, promoviendo la realización de proyectos productivos alternos que disminuyan la presión sobre los recursos del área y que a la vez generen recursos económicos que eleven la calidad de vida de los pobladores.
- Crear conciencia en los pobladores locales de que los problemas ambientales de la Reserva determinan su calidad de vida, al ser ellos los principales usuarios de los recursos naturales.

- Buscar conjuntamente alternativas a los problemas de desarrollo de las comunidades de la Reserva, como una medida de conservación a largo plazo.

Estrategias

- Desarrollar proyectos para el beneficio de los pobladores de la Reserva, que mejoren su calidad de vida.
- Detectar y evaluar el estado actual que guardan las especies vegetales y animales susceptibles de ser aprovechadas.
- Desarrollar acciones de educación ambiental.
- Desarrollar el trabajo conjunto con los pobladores y no para los pobladores, de manera que las acciones propuestas se dirijan al uso de los recursos naturales de una manera culturalmente aceptable y eviten el deterioro ecológico.
- Promover convenios de participación local para la vigilancia, conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales.
- Fomentar la impartición periódica de cursos de capacitación en manejo y aprovechamiento sostenible de recursos naturales dirigidos a los habitantes del área.
- Incorporar las necesidades de desarrollo social de los pobladores dentro de los objetivos de conservación y manejo de la Reserva.
- Evaluar la factibilidad de diseñar y construir un centro para visitantes en el cual se realice la venta de libros, guías y publicaciones científicas que proporcionen información sobre los ecosistemas presentes en la Reserva procurando que el personal que se contrate sea local, con objeto de que ésta sea una fuente más de ingresos para los habitantes del área.
- Integrar el Programa de Manejo de Ría Lagartos a la planeación global de desarrollo económico regional.
- El desarrollo de actividades de ecoturismo, acuicultura y cualquier aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo sustentable estará sujeto a las limitaciones establecidas en el artículo 64 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente.
- Las acciones específicas así como las necesidades de equipo, instalaciones, coordinación, concertación, así como la calendarización de actividades se detalla para cada subcomponente.

Subcomponente uso de recursos naturales

Actividades

Las alternativas que eleven el nivel económico y la calidad de vida de los pobladores de la Reserva, deben realizarse como proyectos productivos encaminados a hacer un uso sustentable de los recursos naturales, para lograr esto se proponen inicialmente los siguientes:

Viveros

- Se podrá concesionar a los pobladores de la Reserva interesados, la construcción y operación de viveros destinados a la propagación de plantas nativas, ornamentales y de uso en la construcción. Estos viveros se propone se enfoquen principalmente a las palmas kuká (*Pseudophoenix sargentii*), y nakax *(Coccotrinax readii*), chit (*Thrinax radiata*), y a los árboles chacáh (*Bursera simaruba*), guarumo (*Cecropia obtusifolia*), ramón (*Brosium alicastrum*), chechem negro (*Metopium brownei*), palo de *tinte (Haematoxylon campechianum*), el guayacán (*Guaicum sanctum*), el zapote (*Manilkara zapota*) y el siricote *(Cordia dodecandra*), destinando un porcentaje de la producción para labores de reforestación de la Reserva.

Criaderos

- Se deberá promover entre los pobladores locales interesados el establecimiento de un criadero de aves de ornato incluyendo especies tales como el cenzontle gris (*Minus gilvus*), el periquito alcaparrero o lorito (*Aratinga astec*) y especies de la familia Tyrannidae (Mosqueros), cuyo aprovechamiento esté autorizado por la Secretaria. Los pobladores a cargo del criadero recibirán el entrenamiento y capacitación pertinente para esta operación. El personal de la Reserva determinará el sitio propicio para su establecimiento dentro de la zona de amortiguamiento.
- Se promoverá entre los pobladores interesados el establecimiento de criaderos para la reproducción de mamíferos cuyo aprovechamiento se destine como fuente de alimento para los mismos habitantes del lugar a quienes también se les permitirá comercializar las pieles de estos animales, se incluyen al venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*), venado temazate (*Mazama americana*), pecari (*Pecari tajacu*), tepescuintle (*Agouti paca*) y guaqueque (*Dasyprocta punctata*). Se determinará el sitio propicio para su establecimiento dentro de la zona de amortiguamiento o influencia de la Reserva, señalando como condición que una parte de la producción se destine al repoblamiento.

Uso Pesquero

- Dada la importancia que tiene la pesca dentro del estero para la localidad y con base en los volúmenes que se extraen, se recomienda zonificar la ría y que se implemente a la brevedad un programa de monitoreo de las especies capturadas, las temporadas, los volúmenes, las áreas de

captura, de alimentación y de reproducción, de manera que a corto plazo se puedan desarrollar reglamentos tendientes a su mejor explotación.

Acuacultura

- Los proyectos de acuacultura han interesado a las agrupaciones de pescadores del Oriente del Estado de Yucatán, el apoyar estos proyectos promoverá que disminuya la presión sobre los recursos del área y que a la vez generen recursos económicos que permitan elevar la calidad de vida de los pobladores. En la actualidad se implementan proyectos pilotos de camaronicultura, con el objeto de comprobar su eficiencia y el grado de adopción de dicha actividad.
- Es importante explorar el potencial acuícola de especies de la región. Se deberá impulsar la creación de un comité de desarrollo acuícola en la Reserva, para procurar el desarrollo de la actividad y unir esfuerzos entre los grupos que la incursionan. Se deberán promover los programas de capacitación para el sector pesquero referentes a acuicultura, ya que juegan un papel importante en la adopción de esta actividad.

Actividad ganadera

- En la actualidad se promueve la intensificación de la actividad mediante el uso del pastoreo intensivo tecnificado y el manejo holístico de recursos, mediante unidades demostrativas de ganadería intensiva se pretende capacitar a los ganaderos de la región, con el objeto de disminuir la extensión de los ranchos en el área de la Reserva sin que disminuyan su capacidad de producción, aumentando su índice de agostadero. Con el área liberada se pretende diversificar la actividad productiva promoviendo la implementación de criaderos de fauna silvestre, como el venado cola blanca, y la siembra de áreas forestales.

Actividad agrícola

- La agricultura orgánica de bajo impacto, mediante la utilización de abonos verdes y la conservación de suelos, podría dar la pauta para que el ejidatario realice esta actividad con bajos insumos y altos rendimientos, que le permita desarrollarse evitando que alquile o venda a privados sus tierras para procesos agrícolas extensivos de gramíneas. Asimismo, es importante reducir el desmonte de selva en busca de tierras fértiles que les satisfagan uno o dos ciclos.
- La agroforestería en los terrenos ejidales de la Reserva es factible como un principio de desarrollo de esta actividad.

Explotación de sal

- Las salineras podrán mejorar sus niveles de producción haciendo el método de extracción más eficiente, aumentando la salinidad en sus sistemas de evaporación, en vez de expandir el área de evaporación y cristalización.

Ecoturismo

- Al ser el ecoturismo o turismo ecológico una forma de turismo en el que las experiencias con el medio ambiente son uno de los puntos de mayor énfasis, el proceso de planeación para esta industria es muy diferente al del turismo tradicional. El ecoturismo por tanto se preocupa por preservar la integridad de los ecosistemas, asegurar el bienestar de los pobladores locales y fomentar el respeto de la identidad cultural local. A través de esto se logra la satisfacción personal de los turistas en sus deseos de educación, aventura, participación en acciones de conservación e interacción con culturas diferentes a la suya. Con base en lo expuesto, el proyecto de ecoturismo de la Reserva orienta las actividades al cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Mantener los procesos ecológicos críticos para actividades económicas de las que se sustenta.
- Producir bienes y servicios que sólo pueden proporcionarse en áreas naturales.
- Preservar ecosistemas representativos.
- Proteger especies en peligro o amenazadas y de importancia económica.
- Integrar un mecanismo de distribución de las ganancias económicas derivadas de estas actividades, que abarque a una gran variedad de habitantes y establecimientos locales.
- Entrenar a los habitantes locales interesados en desarrollar este tipo de turismo. Con el fin de uniformar la prestación de servicios, se podrán adecuar y matricular las embarcaciones, con el fin de dar mayor seguridad a los visitantes.
- Establecer la infraestructura mínima requerida para la prestación de servicios.
- Incorporar los valores culturales y ambientales que les proporcionen un sentimiento de orgullo de su cultura y de manejo que hacen del ambiente.
- Promover entre los habitantes locales el empleo de los ingresos generados por el ecoturismo en elevar su calidad de vida y proteger su ambiente.
- Relacionar a la Reserva con los servicios de información, sobre este tipo de facilidades turísticas de la región, del país y del mundo.

Subcomponente participación local

Actividades

- Gran parte del éxito de una campaña para fomentar la participación de la comunidad estriba en la motivación que se exponga para participar. A menudo se reciben quejas de los pobladores locales que el vivir en un área natural protegida no les beneficia sino todo lo contrario, las opciones de sobrevivencia se les van cerrando con la implementación de acciones de manejo.
- La planificación ambiental debe ser un esfuerzo social continuo cuya tarea central es lograr un adecuado balance entre el desarrollo regional y la protección de los recursos naturales. Este esfuerzo parte de la selección de alternativas u opciones de desarrollo regional, que lejos de degradar la complejidad y productividad de los ecosistemas, contribuyan a mantenerla.
- Es indispensable que el subconsejo de desarrollo social del consejo técnico asesor sea órgano planificador y ejecutor integrado, constituido por los usuarios de los recursos, incluyendo a los habitantes de la Reserva, los responsables de la política económica y las instituciones de investigación científica. Este órgano debe ser el principal foro de discusión de estrategias de desarrollo, organización de actividades y evaluación de acciones de manejo.
- La organización debe partir de la base metodológica que todos los usuarios tienen el mismo derecho de usufructuar los recursos naturales existentes. Es a partir de esta forma de organización que se pueden analizar las distintas posiciones de los usuarios y buscar la ruta del conflicto mínimo para la solución de problemas.
- La solución de conflictos debe involucrar un proceso de negociación en el que se busque un balance entre ganancias y pérdidas aceptable para los involucrados. Es necesario puntualizar que en el proceso estará implícito el sacrificio de algo del bienestar de algún sector.
- Después del conflicto que se presentó en julio de 1990 cuando la SEDUE clausuró la salinera por expansión ilegal de los estanques de evaporación, se efectuaron reuniones fructíferas entre los dueños de la salinera, los líderes sindicales, los trabajadores, los pescadores y los administradores de la Reserva, en las que se llegó al acuerdo de trabajar para alcanzar el desarrollo sostenible de las comunidades de la Reserva. Se debe trabajar sobre esta experiencia positiva a fin de diseñar una estrategia de negociación entre los usuarios, que permita definir la ruta del conflicto mínimo y el máximo bienestar social en las acciones que se decida emprender teniendo en cuenta los objetivos de la Reserva.

Subcomponente educación ambiental

Actividades

- *Asociar las actividades de educación ambiental.* El programa de educación ambiental debe ser voluntario y no debe competir en tiempo con el horario de actividades del sector al que se desea involucrar con excepción de las actividades escolares, en las que las actividades de educación ambiental deberán formar una parte del quehacer diario en la escuela utilizando las instalaciones de la misma. El tiempo que se dedique a la educación ambiental deberá irse incrementando gradualmente. Se propone que las instalaciones de la Dirección de la Reserva funcionen como de sitios de difusión de información y de actividades especiales para los visitantes. A mediano plazo se debe contemplar la construcción de un Centro para Visitantes, el cual podría estar ubicado en Río Lagartos, por ser este poblado el más importante en términos de población, actividad económica y de captación de turismo. Este centro funcionaría como la base de operaciones de los programas de educación ambiental y los senderos interpretativos. Su objetivo sería constituir el núcleo a partir del cual se forme el museo regional de historia natural de la Reserva.
- *Senderos interpretativos.* Es la actividad educativa de revelar el significado e interrelación a través del uso de objetos originales, por un contacto directo con el recurso o con medios ilustrativos y no quedarse en meras interpretaciones, debe por tanto, ser lo suficientemente sugestiva para estimular al individuo a cambiar una actitud determinada, y recreativa para ayudar a que no haya rechazo de entrada a la propuesta interpretativa. En el diseño de los senderos interpretativos se deben observar recomendaciones hechas por especialistas con base en experiencias previas.

Subcomponente patrimonio arqueológico, histórico y cultural

Este componente es de vital importancia para poder conservar los usos tradicionales de los recursos naturales, costumbres, tradiciones y origen e historia de los pobladores de la Reserva.

Actividades

- Es de vital importancia establecer el número exacto de sitios arqueológicos, así como su grado de conservación para definir una estrategia de rescate y conservación. Se deberá enfocar el esfuerzo hacia las zonas que se localizan en la duna costera, entre Las Coloradas y El Cuyo, en lo que se conoce como Playa La Alegría. Emal, al sur de Las Coloradas, es una de las categorías con mayor importancia ya que ahí es donde inicia un sacbé hacia San Fernando, siendo éste el único en la parte noreste del estado. Se deberá prohibir la utilización de fragmentos pétreos de los asentamientos que son considerados patrimonio nacional. En El Cuyo se emplearon partes de las ruinas para construir el terraplén de acceso.

- La industria salinera ISYSA debe ser invitada a promover esta iniciativa de rescate sobre el papel protagónico que ha jugado el recurso sal desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Se podría plantear que una pequeña sección del Museo Regional de Historia Natural se dedique a la sal, presentando a los visitantes información sobre los acontecimientos históricos de la explotación salinera. Se propone que los sitios de Emal, Isla Cerritos y el museo se incluyan en un circuito arqueológico que muestre la importancia del patrimonio cultural asociado a la explotación salinera.
- Deben promoverse trabajos de monografías y recopilación referentes a la historia de las comunidades que integran la Reserva.
- Se deberá enfatizar en el ajuste e implementación de los programas de la Reserva referentes a las tradiciones culturales y el folklore para que no se contrapongan, en la medida de lo posible, con los valores culturales y la idiosincrasia de los pobladores de la región.

Componente investigación científica y monitoreo ambiental

Con la implementación de este componente se pretende inducir a la participación de diversas instituciones, institutos de investigación y universidades en el establecimiento de convenios de investigación y uso científico, desarrollo tecnológico y monitoreo ambiental, que permitan lograr la recuperación, conservación y aprovechamiento racional y sustentable de los diversos hábitat presentes en el área a través de la ejecución de los subcomponentes:

- Investigación científica.
- Monitoreo ambiental.

Objetivos particulares

- Fomentar entre los institutos de investigación y/o universidades, que hayan desarrollado o pretendan desarrollar trabajos de investigación en la Reserva, el establecimiento de convenios para el desarrollo de estudios tendientes a conocer la biodiversidad, generar metodologías de conservación, manejo y monitoreo ambiental, para lograr la conservación de los recursos a través de un aprovechamiento racional y sustentable.
- Realizar los estudios necesarios tendientes a mejorar el conocimiento básico de los recursos naturales, culturales y sociales; asimismo, organizar esta información, y la ya existente, en un centro de acopio de datos de la Reserva.
- Intercambiar y difundir información sobre los recursos de la Reserva entre las comunidades locales y las instituciones utilizando diferentes formas de difusión.
- Estructurar un Programa de Monitoreo Ambiental que permita detectar y pronosticar alteraciones significativas, en la estructura o procesos ecológicos de la Reserva.
- Proporcionar criterios y elementos que permitan identificar y diagnosticar tendencias en la estructura y procesos ecológicos de los ecosistemas, así como de las actividades humanas en la reserva, con la finalidad de asegurar la conservación, protección, restauración y aprovechamiento racional de los recursos naturales y al mismo tiempo poder evaluar y retroalimentar el Programa de Manejo a corto, mediano y largo plazos.
- Apoyar la investigación científica en la Reserva, especialmente la orientada a la búsqueda de alternativas de desarrollo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, acorde al mantenimiento de estructuras y procesos ecológicos esenciales.
- Gestionar apoyo económico para tesistas e investigadores que pretendan realizar o realicen actividades en el área.

Estrategias

- Identificar las necesidades básicas de investigación que se requieren para generar en plazos de tiempo cortos la información necesaria para mejorar, actualizar, adecuar y precisar el Programa de Manejo de la Reserva.
- Proveer con apoyo prioritario y mayores facilidades a los trabajos de investigación que tengan este enfoque.
- Asegurar la incorporación a la base de datos de la Reserva de la información obtenida por los proyectos de investigación que se realicen dentro de sus límites.
- Asegurar que esta información sea trabajada y depurada de manera que pueda ser utilizada en decisiones de manejo de la Reserva.
- Establecer convenios con el CINVESTAV, CICY, UADY, UNAM, ITM, CIRNAC, PPY, BIOCENOSIS y CRIPY para lograr el apoyo económico de sus tesistas e investigadores que pretendan realizar o realicen actividades en la Reserva.

Metas

- Implementar y desarrollar los convenios correspondientes.
- Implementar el proyecto de inventarios y distribución de flora y fauna de la Reserva.
- Identificar e implementar estudios ecológicos básicos.
- Desarrollar las actividades de manejo de recursos que se hayan identificado como prioritarias.

- Implementar la red de monitoreo ambiental de la Reserva y el procesamiento de datos que genere esta red.
- Generar proyectos productivos alternos de bajo impacto para los pobladores del área.
- Celebrar intercambios de información y experiencias así como la asistencia a talleres, simposios y congresos con la comunidad científica nacional e internacional.

Subcomponente investigación científica

- Las líneas de investigación identificadas en la Reserva incluyen:

Estudio hidrológico del estero, con énfasis en la modificación de flujos y en los cambios en la calidad del agua.

Determinación de los flujos adecuados que deben existir para mantener un equilibrio en el sistema.

Los procesos de recolonización de la vegetación de duna costera y factibilidades de control de erosión de los bordos de los estanques de evaporación de sal usando especies halófitas (resistentes a altas salinidades) nativas de la Reserva.

Procesos de estabilización de la barra de arena.

La dinámica poblacional de manglares y las factibilidades de reforestación con estas especies.

Estructura y balance energético de las comunidades de los petenes y susceptibilidad a cambios en el nivel y calidad de agua de sus cenotes.

Determinación de las variables principales indicadoras del estado que guarda la estructura y transporte de energía de las comunidades y cómo monitorearlas.

Distribución, abundancia y dinámica poblacional de las especies de cocodrilos en la Reserva.

Determinación de los requerimientos ecológicos para el incremento natural de la población de cocodrilos.

Reforestación y regeneración de la selva baja caducifolia.

Conocimiento del ciclo de reproducción del flamenco y alternativas de manejo.

Distribución del flamenco durante la temporada reproductiva y no reproductiva.

Exito reproductivo del flamenco común y su relación con la disponibilidad de alimento y la perturbación humana.

Estudio de la biología pesquera de las principales especies que soportan las principales pesquerías de la zona como son la del mero, la langosta, el pulpo y las especies que se capturan en las aguas interiores del estero.

Valorar y medir la diversidad biológica existente en hábitat naturales y en sistemas productivos.

Conocer la historia de transformación de la cobertura vegetal y los procesos históricos de defaunación.

Evaluar la importancia de sistemas y los impactos de la fragmentación del hábitat.

Subcomponente monitoreo ambiental

Actividades

- Se propone que las labores de monitoreo se realicen de manera coordinada entre el personal de la Reserva y los investigadores de otras instituciones. El personal de la Reserva tendrá la ventaja de mayor accesibilidad a los sitios de muestreo.
- El personal de la Reserva se responsabilizará de darle seguimiento a los resultados del monitoreo y participará en el análisis de los mismos.
- Con base en la amplitud y profundidad del monitoreo será necesario precisar los requerimientos de infraestructura, equipo y recursos humanos para permitir la continuidad a largo plazo.
- El programa de monitoreo debe considerar los siguientes aspectos:
- Determinación de las características de las localidades a monitorear.
- Definición del monitoreo y especificaciones del muestreo.
- Definición de variables, métodos y técnicas que serán aplicados para el programa.
- Determinación de la frecuencia para la colección de datos y registros.
- Consideración de métodos de análisis y presentación de datos.
- Factibilidad técnica, económica, de continuidad y alcances del monitoreo.
- Evaluación de criterios para el programa de monitoreo en todos sus aspectos.
- En el establecimiento de la Red de Monitoreo habrá que considerar:
- Ubicar los puntos de muestreo en lugares accesibles.
- Definir y diseñar los formatos de registro.
- Determinación del soporte técnico y de recursos humanos necesarios.
- Será necesario integrar y capacitar al personal que participará en esta red a corto plazo.
- Deberán definirse los elementos de interacción entre la red de monitoreo y los programas de investigación, de manera que los programas sean congruentes y se apoyen mutuamente.
- Se ha señalado en otras secciones de este programa que existen acciones humanas que son vitales de monitorear para asegurarse que se cumplan con las disposiciones acordadas en los foros

correspondientes. Las actividades de la industria salinera, las agropecuarias y el crecimiento de los poblados son lo más importante en este aspecto.

- Con base en la limitación al crecimiento de la superficie de estanquería de la salinera y de los poblados dentro de los límites de la Reserva, así como el implementarse la zonificación, una función vital de la red de monitoreo será la de obtener datos sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos. Solamente a través de información cuantitativa de estos puntos se podrán ajustar las normativas específicas y evaluar el grado de eficiencia de las medidas de manejo acordadas.
- Se deberán considerar en la planeación las necesidades de infraestructura física para que las labores de monitoreo sean perdurables a largo plazo y se conviertan en un hábito dentro de las labores de investigación de la Reserva.
- Se deberá definir, diseñar y estandarizar los formatos de registro, así como diseñar e implementar una base de datos en donde se almacenen la información que se genere y pueda ser utilizada de una manera ágil y sencilla, como una herramienta en la toma de decisiones.
- Promover la integración de los usuarios, como un sector importante con el que hay que planificar, diseñar e implementar un programa de capacitación y vinculación en la colecta de datos.
- Es básico identificar y dar prioridad a las necesidades de capacitación del personal de la Reserva, de manera que provean un apoyo en la colecta de datos en los proyectos establecidos.

Componente marco legal

Este componente está integrado por tres subcomponentes: regularización de la tenencia de la tierra, zonificación y reglas administrativas, las cuales vienen a ser las tareas primordiales que definan y difundan los aspectos legales derivados de la implementación y operación del Area Natural Protegida.

Objetivo general

- Conocer el marco legal dentro del cual se circunscribe la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos e instrumentar los mecanismos para su adecuada aplicación y manejo.

Objetivos particulares

- Normar todas las actividades de operación y administración de la Reserva.
- Promover la regularización de la tenencia de la tierra de los predios y núcleos de población al interior del Area Natural Protegida, con base al artículo 27 constitucional, a la Ley Agraria y a lo estipulado en el presente Programa de Manejo.
- Incorporar la legislación federal en el Programa de Manejo de la Reserva, tales como: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Aguas Nacionales, Ley Forestal, Ley de Caza, Ley de Pesca, Ley General de Bienes Nacionales y demás aplicables en la materia, así como reglamentos, decretos, acuerdos y normas oficiales mexicanas, con el objeto de promover su revisión y actualización periódica para asegurar la conservación y el uso sustentable de los recursos existentes en el área.
- Considerar y evaluar la incorporación al Programa de Manejo de la normatividad derivada de los tratados internacionales en materia de Areas Naturales Protegidas.
- Incorporar los diferentes decretos presidenciales que se han expedido que coadyuven en la protección y conservación de los recursos naturales al interior de la Reserva.
- Promover al Consejo Técnico Asesor como el medio de coordinación entre las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal, el Gobierno del Estado y los municipios al interior del área, para elaborar revisar y actualizar convenios con la Reserva.
- Determinar las reglas administrativas de la Reserva con fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la zonificación propuesta, que normen las actividades y los usos sustentables dentro de ésta.

Estrategias

- Difundir el significado y los alcances de la declaratoria, las reglas administrativas, la ubicación del área de la poligonal y zonificación, que incluya zonas núcleo y zonas de amortiguamiento, de acuerdo con la ubicación y los límites en el Mapa de Zonificación.
- Establecer una delimitación práctica y precisa que permita identificar claramente los límites de la Reserva, terrenos nacionales, zona federal y zonas núcleo.

Metas

- Delimitar con la mayor precisión posible el área de la Reserva.
- Actualizar y regularizar los usos respecto a la tenencia de la tierra de predios particulares y ejidos incluidos en la Reserva.
- Elaborar y difundir las Reglas de Administración que normen las actividades y los usos de los recursos naturales en la Reserva.

Subcomponente regularización de la tenencia de la tierra

Actividades

- Inscribir el polígono de la Reserva en el Registro Público de la Propiedad y Agrario Nacional.
- Dar aviso a los propietarios sobre el deslinde de los terrenos conforme con lo que establece la ley.

- Promover el deslinde y amojonamiento de los polígonos de los terrenos nacionales localizados al interior de la Reserva para inscribirlos en el Registro del Patrimonio Inmobiliario Federal.
- Llevar a cabo convenios con el Registro Público de la Propiedad y Agrario Nacional para mantener permanentemente actualizada la documentación de los predios existentes en la Reserva.
- Promover el deslinde de la zona federal marítimo terrestre para que los destinos de uso sean para conservación de las áreas colindantes a las zonas núcleo y las playas de anidación de tortugas marinas.
- Promover la delimitación de la superficie de zona federal propuesta como fundo legal de las poblaciones de Río Lagartos y San Felipe, acorde a los planes de desarrollo urbano, que permita el equipamiento de tales comunidades.
- Evaluar otras alternativas, como las servidumbres, basadas en acuerdos o concesiones con los propietarios de tierras. En este caso debe existir la certeza de que el acuerdo se cumpla aun cuando el propietario venda, rente o se asocie con otro propietario.

Subcomponente zonificación

La zonificación propuesta se divide en unidades dirigidas al cumplimiento de los objetivos de la Reserva, prescribiendo las actividades directivas para el uso de los recursos naturales de las zonas. Los criterios empleados para designar las zonas son: Representatividad, Grado de Perturbación, Vulnerabilidad Ecológica, Uso de Suelo y Vocación Natural.

Objetivos particulares

- Definir las diferentes zonas de manejo o uso de recursos que conforman el Area Natural Protegida.
- Establecer las condiciones para el manejo y aprovechamiento racional de recursos dentro de cada una de las zonas que lo conforman.
- Definir para cada zona, las condiciones para el establecimiento de obras de infraestructura, asentamientos humanos, vías de comunicación y el desarrollo de proyectos productivos.
- Establecer para cada caso, las acciones necesarias de conservación, manejo, restauración y protección, para mantener las condiciones de cada zona.

El establecimiento de seis zonas núcleo a través de su Decreto de creación y la determinación de dos tipos de manejo en la zona de amortiguamiento, a) uso restringido y b) moderado, las cuales contienen áreas de restauración, uso salinero, agropecuaria y de fundo legal de las 4 poblaciones, así como la aplicación de restricciones acorde a su sensibilidad, se considera como la mejor estrategia para la protección y uso sostenible de los recursos de la Reserva.

Zonas núcleo

Este tipo de zona se caracteriza porque las actividades humanas están restringidas y cumplen con los objetivos establecidos en la LGEEPA y las acordadas en el ámbito internacional para las Reservas de la Biosfera.

Están sujetas a conservación estricta, su ubicación dentro de la Reserva corresponde a los sitios más inaccesibles y de mayor diversidad biológica, donde ha habido escasa actividad humana, lo suficientemente extensa que contengan muestras representativas de una región biológica sin perturbación.

También debe funcionar como ecosistema, asegurando el abastecimiento hídrico y la calidad de terrenos de cría y alimentación para conservar la variabilidad genética y la continuación de su proceso evolutivo.

La zona núcleo tiene alto valor de conservación proporcionando hábitat a especies clave. La extensión de las zonas núcleo es de 23,681.55 hectáreas, que representan el 39.24% de las 60,347.82 hectáreas de la superficie total de la Reserva.

Zona Núcleo I (San Felipe-Ría Lagartos).

Tiene una superficie de 1,342.769 hectáreas, limita al norte con una franja de amortiguamiento de uso restringido de 50 m, que colinda con el estero. Al sur una franja de amortiguamiento de uso restringido de 50 m y una franja de amortiguamiento de uso moderado de 500 m que corre paralela con el límite de la Reserva y la carretera San Felipe-Río Lagartos. Al este y oeste tiene una franja de amortiguamiento de uso restringido de 50 m y una de uso moderado de 300 m que corren paralelas a las carretera Tizimín-Río Lagartos y San Felipe-Panabá, respectivamente.

Esta zona contiene una porción importante de selva baja espinosa rica en orquídeas, epífitas y cactáceas endémicas y en peligro de extinción, como es el caso de *Mammilaria gaumeri*. Asimismo, zonas inundables de manglar que limitan con la ría.

Zona núcleo II (Tular-Petenes).

Tiene una superficie de 2,090.127 hectáreas, limita al norte con una franja de amortiguamiento de uso restringido de 50 m que colinda con el estero. (El sitio denominado El Estribo colinda con esta franja, es de uso restringido). Al este con una franja de amortiguamiento de uso restringido de 500 m y la carretera Río Lagartos-Las Coloradas. Al sur con una franja de amortiguamiento de uso restringido de 50 m y de uso moderado de 500 m, que colinda con el límite sur de la Reserva. Al oeste con una franja de amortiguamiento de uso restringido de 50 m y moderado de 300 m que corre paralela a la carretera de Tizimín-Río Lagartos.

Esta zona incluye la conservación del sistema de manglar, arenales, diversas "aguadas", y asociaciones de tular, pastizal y carrizal, regulando las actividades y obras que puedan poner en peligro su integridad, para lo cual se requiere la realización de acuerdos con los pobladores, para respetar el nivel de agua necesario en este sistema y evitar el avance de la frontera agrícola y ganadera.

Los manglares de esta zona son parte integral del sistema estuarino de la Reserva, la clave para su conservación está en el establecimiento de un nivel apropiado de agua y en la protección de la calidad del agua.

Zona núcleo III (Petén Tucha, Emal y Lagunas de Miramar).

Tiene una superficie de 8,745.387 hectáreas, limita al norte una franja de amortiguamiento de uso restringido de 50 m que colinda con el estero de Río Lagartos. Al este con una franja de amortiguamiento de uso restringido de 300 m que corre paralela a la carretera Colonia Yucatán-El Cuyo. Al sur con una franja de amortiguamiento de uso restringido de 50 m que colinda con una zona de amortiguamiento de uso moderado (zona ganadera). Al oeste con una franja de amortiguamiento de uso restringido de 400 m que corre paralela al camino de Río Lagartos-Las Coloradas.

La relevancia de esta zona está determinada por la transición entre asociaciones vegetales como el manglar, petenes, la asociación tular-pastizal-carrizal y la selva baja caducifolia modificada; las cuales representan el patrón de distribución marino-terrestre de dichas asociaciones, que ocurre a todo lo largo de la Reserva.

Es necesario establecer acuerdos con los pobladores para respetar el nivel de agua de este sistema y para evitar el avance de la frontera agropecuaria. Los manglares de esta zona son parte integral del sistema estuarino de la Reserva, la clave para su conservación está en el establecimiento de un nivel apropiado de agua, en la protección de la calidad del agua, en evitar cualquier obstrucción (terraplenes, diques, caminos, materiales depositados).

El sistema tiene importancia para proteger el hábitat de aves palustres que pasan el invierno en esta zona, como la oc che' (*Himantopus mexicanus*). Asimismo, abarca selva baja caducifolia con manglar como hábitat de organismos marinos especialmente sitios de alimentación, cortejo, reproducción, crianza, forrajeo, resguardo invernal y descanso.

Zona núcleo IV (La Cuenca de El Cuyo).

Tiene superficie de 9,074.52 hectáreas, limita al norte con una franja de amortiguamiento de uso restringido de 200 m que colinda con el litoral del Golfo de México. Al este con una franja de amortiguamiento de uso restringido de 200 m que limita con el estado de Quintana Roo. Al oeste una franja de amortiguamiento de 200 m paralela al camino Colonia Yucatán-El Cuyo, que aumenta sobre el estero a 1,000 m. Al sur con franja de amortiguamiento de uso restringido de 200 m que colinda con una zona de amortiguamiento de uso moderado. Esta zona es la de mayor precipitación en la Reserva.

La protección de esta zona depende del manejo que se haga aguas arriba, por lo que la normatividad desarrollada a continuación integra los requerimientos mínimos para el mantenimiento y perpetuación de esta sección del estero con altos niveles de funcionalidad:

Es necesario evitar cualquier cambio significativo de los patrones prevalecientes de salinidad, circulación y ciclos de nutrientes, así como proteger a la mayor colonia de flamenco *Phoenicopterus ruber ruber*, que anida en esta zona.

Zona núcleo V (Punta Meco).

Tiene una superficie de 747.76 hectáreas, limita al norte con una franja de amortiguamiento de uso restringido de 50 m que colinda con el Golfo de México. Al este y oeste con una franja de amortiguamiento de uso restringido de 50 m que limita con el camino que va a la salinera Las Alegrías y el área denominada La Angostura-San Fernando, respectivamente. Al sur con una franja de amortiguamiento de 50 m que colinda con el estero.

Esta zona incluye la conservación de las playas importantes de arribazón de tortugas marinas, dunas costeras y una franja estrecha de manglar. El área del estero colindante es importante para la alimentación del flamenco en la época de anidación. En esta área se encuentra la población clímax de matorral alto con palmas hasta de 3.5 m.

Las playas albergan la mayor densidad de nidos registrados de tortugas marinas Carey *(Eretmochelis imbricata*), blanca (*Chelonia mydas*).

Zona núcleo VI (Cancunito-Holchit).

Tiene una superficie de 1,680.98 hectáreas, limita al norte con una franja de amortiguamiento de uso restringido de 200 m que colinda con el litoral del Golfo de México. Al este con una zona de amortiguamiento de uso restringido. Al oeste con una franja de amortiguamiento de uso restringido de 200 m que corre paralela al Canal de Río Lagartos. (Esta área no considera los terrenos ganados al mar producto de los efectos ocasionados por la escollera, los cuales serán considerados zonas de amortiguamiento de uso moderado). Al sur con una franja de amortiguamiento de uso restringido de 50 m que colinda con el estero.

Esta zona incluye la conservación de las playas, dunas costeras y una franja estrecha de manglar, permitiendo que ocurra el ciclo natural del movimiento de arenas en esta zona y respetando el nivel de agua

en el manglar. El manejo de las playas arenosas debe basarse en sus propiedades de amortiguamiento integral entre la tierra y el mar.

El sistema de dunas costeras se mantiene por la vegetación de herbáceas rastreras, arbustos pequeños o postrados y una asociación vegetal más estable de matorral y zonas clímax de matorral alto con palmas. Esta área comienza la distribución de la palma Kuká (*Pseudophoenix sargentii*) que continúa hacia el oriente hasta Centroamérica.

Esta frágil red de vegetación que crece en las dunas costeras, está adaptada a soportar el rigor de los vientos, poca precipitación, la arena y la sal pero no las pisadas humanas, ni el paso de vehículos. Cuando este manto vegetativo se destruye, el movimiento de las dunas se acelera hasta el punto en que el crecimiento vegetal no puede alcanzar la deriva de las dunas. La franja de manglar al sur de esta zona limita con el estero.

El sistema proporciona hábitat a especies de aves palustres que inviernan en esta zona, como la Patas de Ocote (*Himantopus mexicanus*), la avoceta (*Recurvirostra avoceta*) y proteger las arribazones de las tortugas marinas Carey (*Eretmochelis imbricata*), blanca (*Chelonia mydas*) que se encuentran amenazadas.

La zona también es importante para mantener la continuidad ecológica de la duna, que es corredor natural de especies de comunidades contiguas como la reserva estatal de Dzilam de Bravo, así como para favorecer la continuidad del ciclo dinámico natural del sistema de playas y dunas costeras y su perfil, incluyendo la prevención de acarreo de arena o cualquier otra modificación de cualquiera de sus partes.

Zona de amortiguamiento

Las zonas seleccionadas para funciones de amortiguamiento presentan niveles de alteración ecológica o son terrenos destinados a proteger las zonas que circundan y en las que se restringen y regulan los usos. La superficie de amortiguamiento es de 36,666.27 hectáreas, que representa el 60.75% de la superficie total de la Reserva.

En las zonas de amortiguamiento se plantea la limitación de la tala, las actividades agropecuarias extensivas, las quemas, la construcción de nuevas carreteras, la fundación de nuevos centros de población, la apertura de bancos de material para la construcción, el uso de pesticidas y fertilizantes agrícolas y la pesca con dinamita, químicos y de arrastre, la caza deportiva y comercial.

Las zonas de amortiguamiento serán de uso moderado o restringido.

Subzona de uso moderado.

- El límite sur de la Reserva: esta superficie colinda con ranchos ganaderos extensivos tradicionales.
- Area circundante a las poblaciones y carreteras en el interior de la Reserva.
- Areas colindantes a las franjas de amortiguamiento de uso restringido: que se pueden realizar proyectos acuícolas, turísticos, investigación u otros, siempre y cuando se cuente con la autorización en materia de impacto ambiental y los estudios necesarios correspondientes.
- Areas de explotación salinera y agropecuaria.
- Areas de restauración.
- Areas culturales. Límites del fundo legal de las poblaciones y de uso urbano.

La zona cultural es apta para la investigación, monitoreo, educación, turismo y formación con referencia a la comprensión de las culturas tradicionales y sus etnologías. Los resultados deben ayudar a promover el uso de la tierra más adecuado en otros lugares de la Reserva.

La zona cultural de San Felipe y Río Lagartos serán determinadas por los planes rectores de desarrollo urbano. Las Coloradas en la actualidad tiene una superficie de 82 hectáreas de propiedad privada y El Cuyo tiene una superficie de 77 hectáreas, de origen ejidal.

En estas áreas se deben considerar las pautas para designar la superficie utilizable dentro del área urbana actual a corto, mediano y largo plazos, evitar el crecimiento urbano sobre el manglar, restringir los asentamientos irregulares y los terrenos ganados a la ciénaga, realizar acciones que deben incluirse en un plan de evacuación en caso de huracanes.

Subzona de uso restringido.

- Franjas o áreas colindantes a las zonas núcleo, sólo se podrán realizar actividades de restauración ecológica y de aprovechamiento en épocas específicas del año, las cuales serán realizadas únicamente por pobladores de la Reserva, como es el caso de la pesca, recolección de leña, uso de madera, conchuela, uso de hojas de palma para vivienda, entre otros.
- El estribo de vocación acuícola. Los únicos promoventes deben ser pobladores de la Reserva, los cuales deberán presentar los estudios respectivos.
- Las playas de la Reserva tienen una franja de amortiguamiento de uso restringido:
- Playas colindantes a la Zona Núcleo IV y VI.- La franja tiene 200 m.
- Playas colindantes a la Zona Núcleo V.- La franja tiene 50 m.
- Todas las playas que colindan con una zona de amortiguamiento de uso moderado tienen una franja de 200 m.
- Los límites con la Ría tienen una franja de amortiguamiento de uso restringido de 50 m, con el objeto de proteger principalmente a los manglares.

Reglas Administrativas

Objetivos particulares

- Incorporar a los usuarios de los recursos dentro del proceso de planeación y diseño de las Reglas Administrativas y demás disposiciones.
- Elaborar las reglas aplicables a la Reserva con base en la LGEEPA y a la zonificación propuesta.
- Proponer medios de difusión eficientes de la reglamentación entre los vigilantes y la población en general.
- Promover asesorías para el conocimiento y aplicación de las disposiciones legales y reglamentos aplicables.
- Capacitar al personal de la Reserva en el conocimiento y aplicación de las disposiciones legales y reglamentos aplicables.

Estrategias

- Diseñar un folleto en el que se detalle la normatividad de la Reserva, y el significado de los términos incluidos que no son del dominio común. Incluir en dicha publicación un croquis que muestre poblados, carreteras, entradas a la Reserva y zonificación interna; enfatizando las áreas y los sitios de desarrollo dentro de cada una.
- Incluir a los habitantes de la Reserva en la elaboración de los reglamentos específicos para el uso de senderos señalados en las Reglas Administrativas.
- Los reglamentos para el uso de senderos se deberán difundir en algún boletín informativo que circule en las poblaciones de la Reserva y zonas de influencia, lo que dará validez para su aplicación.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Regla 1. Las presentes Reglas son de observancia general y obligatorias para todas aquellas personas físicas o morales que realicen actividades dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, ubicada en los municipios de San Felipe, Río Lagartos y Tizimín en el Estado de Yucatán, con una superficie total de 60,347-82-71 Has. (sesenta mil trescientas cuarenta y siete hectáreas, ochenta y dos áreas, setenta y una centiáreas), de acuerdo a la zonificación establecida, y tienen por objeto regular dichas actividades dentro de la Reserva.

Regla 2. La aplicación de las presentes Reglas corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal, de conformidad con el Decreto por el que se establece la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, su Programa de Manejo y demás ordenamientos legales aplicables en la materia.

Regla 3. Para los efectos de las presentes Reglas Administrativas se entenderá por:

ACTIVIDADES RECREATIVAS.- Aquellas consistentes en la observación del paisaje, de la fauna silvestre en su hábitat natural y cualquier manifestación cultural, de forma organizada y sin alterar o dañar el entorno natural, incluyendo al ecoturismo o turismo ecológico, mediante la realización de recorridos y visitas guiadas en rutas o senderos de interpretación ambiental dentro de la Reserva de la Biosfera “Ría Lagartos”, con el fin de disfrutar o apreciar sus atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres).

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA.- Aquellas actividades que, fundamentadas en el método científico, conlleven a la generación de información y conocimiento sobre los aspectos relevantes de la reserva, desarrolladas por una o varias instituciones de educación superior o centros de investigación, organizaciones no gubernamentales o personas físicas, calificadas como especialistas en la materia.

ACTIVIDADES DE COLECTA CIENTIFICA.- Aquellas actividades que, fundamentadas en un proyecto de investigación científica, requieran de la captura del ejemplar, el cual, de acuerdo con las necesidades de la investigación, requieran o no de ser sacrificadas para el logro de los objetivos y estrategias planteadas en el proyecto.

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE.- La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos por periodos indefinidos.

CNA.- A la Comisión Nacional del Agua.

DIRECTOR.- A la persona designada por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para llevar a cabo las acciones de coordinación, ejecución y evaluación del Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos.

ECOTURISMO.- A la modalidad turística ambientalmente responsable y de bajo impacto ambiental y cultural, consistente en viajar o visitar la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos sin alterar el entorno natural, con el fin de disfrutar, apreciar o estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dicha área, así como cualquier manifestación cultural, a través de un proceso que promueva la conservación y el desarrollo sustentable, que propicie un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales.

ECOSISTEMA.- A la unidad funcional básica de interacción de los organismos entre sí y de éstos con el ambiente en un espacio y tiempo determinados;

ESPECIE ALOCTONA.- Especie de flora o fauna no nativa de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos.

GUIA LOCAL.- Poblador de la Reserva que a través de la capacitación cuenta con los conocimientos suficientes sobre ecología, medio ambiente, conservación, uso sustentable de los recursos naturales, así como de aspectos relevantes, culturales y arqueológicos de Ría Lagartos. Que desarrolla actividades y/o servicios de acompañamiento a los turistas y visitantes, para una mayor satisfacción, entendimiento y disfrute de los atractivos naturales e históricos del área natural protegida.

INVESTIGADOR.- A la persona acreditada por alguna institución académica reconocida, que tiene como objetivo el conocimiento de los procesos naturales, sociales y culturales, así como el desarrollo tecnológico dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, como parte de un proyecto de investigación técnica o científica.

INE.- Al Instituto Nacional de Ecología.

LA.- A la Ley Agraria.

LAN.- A la Ley de Aguas Nacionales.

LC.- A la Ley de Caza.

LF.- A la Ley Forestal.

LGBN.- A la Ley General de Bienes Nacionales.

LGEEPA.- A la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

LM.- A la Ley de Minas.

LP.- A la Ley de Pesca.

PERMISO, AUTORIZACION Y/O CONCESION.- Al documento que expide la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a través de sus distintas unidades administrativas, por el que se autoriza la realización de actividades de exploración, explotación o aprovechamiento de los recursos naturales existentes dentro de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, en los términos de las distintas disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

PRACTICAS DE CAMPO.- A la actividad que con fines de docencia realizan estudiantes de instituciones de educación básica, media superior, superior o postgrado de instituciones reconocidas, que no impliquen la recolección de organismos completos ni actividad alguna que impacte a los ecosistemas, por lo que deberán considerarse como actividades de observación.

PRESTADOR DE SERVICIOS RECREATIVOS.- A la persona física o moral que se dedica a la organización de grupos de visitantes, que tiene como objeto ingresar a la Reserva con fines recreativos y/o culturales, y que requiere del permiso otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por conducto de la Unidad Coordinadora de Areas Naturales Protegidas

PROTECCION.- Al conjunto de políticas y medidas para preservar el ambiente y evitar su deterioro.

PROFEPA.- A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

QUEMA CONTROLADA.- Uso del fuego para el control de plagas, la preparación de tierras para cultivo y cualquier actividad relacionada con el ciclo de quemas de uso tradicional, supervisado y vigilado por los campesinos, propietarios o poseedores de tierras.

REGLAS.- A las presentes Reglas Administrativas.

RESERVA.- El área comprendida dentro de la poligonal que establece el Decreto de creación como Reserva de la Biosfera a la región denominada Ría Lagartos, ubicada en los municipios de Tizimín, Río Lagartos y San Felipe, en el Estado de Yucatán, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el día 21 de mayo de 1999.

SCT.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

SECTUR.- A la Secretaría de Turismo.

SEMARNAP.- A la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

TERRENOS GANADOS AL MAR.- Cuando por causas naturales o artificiales se ganen terrenos al mar, los límites de la zona federal marítimo terrestre se establecerán de acuerdo con la nueva configuración física del terreno, de tal manera que se entenderá ganada al mar la superficie de tierra que quede entre el límite de la nueva zona federal marítimo terrestre y el límite de la zona federal marítimo terrestre original.

UCANP.- A la Unidad Coordinadora de Areas Naturales Protegidas.

UMAS.- A las Unidades para la Conservación y Manejo Sustentable de la Vida Silvestre.

VISITANTE.- A la persona física que ingresa a la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos con fines recreativos y/o culturales.

ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE.- La faja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable o contigua a las playas o cualquier depósito que se forme por aguas marinas, contados a partir del punto a donde llegue el mayor embalse anual o límite de la pleamar.

ZONIFICACION.- División de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos en áreas definidas en función al grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, a la vocación natural del terreno, de su uso

actual y potencial, acorde con los propósitos de preservación y conservación indicados en el Programa de Manejo, que están sujetas a regímenes diferenciados de manejo.

Regla 4. Para efectos de las presentes reglas, los usos y aprovechamientos que se pretendan realizar dentro de la Reserva, se sujetarán a las disposiciones establecidas en la LGEEPA, LGBN, LC, LP, LA, LAN, LM y LF, sus respectivos reglamentos y demás disposiciones legales aplicables en la materia.

Regla 5. En la Reserva se podrán llevar a cabo actividades de exploración, rescate y mantenimiento de sitios arqueológicos que no impliquen alguna alteración o causen algún impacto ambiental significativo sobre los recursos naturales de la misma, previa coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

CAPITULO II

DE LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y AVISOS

Regla 6. Se requerirá permiso por parte de la SEMARNAP para la realización de las siguientes actividades:

I. Prestación de servicios para la realización de actividades recreativas.
II. Filmación, videograbación y fotografía con fines comerciales o culturales.
III. Acampar o pernoctar en instalaciones de la Reserva.
IV. Acuicultura y pesca de fomento.

Regla 7. Se requerirá de autorización por parte de la SEMARNAP para la realización de las siguientes actividades:

I. Aprovechamiento de recursos forestales maderables y mineros.
II. Cambio de utilización de los terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal.
III. Aprovechamiento de flora y fauna silvestres.
IV. Colecta de flora y fauna, así como de otros recursos biológicos con fines de investigación científica.
V. Realización de obras o infraestructura.
VI. Pesca y acuacultura didáctica.

Regla 8. Se requerirá de concesión por parte de la SEMARNAP para la realización de las siguientes actividades:

I. El uso, explotación y aprovechamiento de las aguas nacionales.
II. El uso o aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.
III. Pesca y acuacultura comercial.

Regla 9. Con la finalidad de proteger los recursos naturales de la Reserva y brindar el apoyo necesario por parte de la Dirección de la Reserva, los responsables de los trabajos deberán dar aviso al Director de ésta, previo a la realización de las siguientes actividades:

I. Educación ecológica.
II. Prácticas de campo.
III. Quemas controladas.
IV. Acampar o pernoctar al aire libre.

Regla 10. Para la realización de actividades que impliquen el aprovechamiento de recursos no maderables, se deberá dar Aviso a la SEMARNAP, en los términos establecidos en la LF y su Reglamento.

Regla 11. Para la obtención del o los permisos a que se refiere la fracción I de la Regla 6, el o los promoventes deberán presentar una solicitud que cumpla con los siguientes requisitos:

I. Nombre o razón social del solicitante, domicilio para oír y recibir notificaciones, número de teléfono y fax, y copia de una identificación oficial o acta constitutiva de la Sociedad o Asociación Civil, según sea el caso;
II. Tipo y características del o los vehículos o embarcaciones que se pretenden utilizar para la realización de la actividad;
III. Programa de actividades a desarrollar, en el cual se incluya, fecha, horarios de salida y regreso, tiempo de estancia en la Reserva y ubicación del área en donde se pretendan llevar a cabo dichas actividades;
IV. Número de Guías Locales y visitantes a manejar por evento o temporada, mismo que no podrá exceder de 10 personas por Guía;
V. Especificación y manejo de los desechos orgánicos e inorgánicos generados durante los recorridos, y
VI. Acreditar el pago de derechos correspondientes, de conformidad a lo establecido en la Ley Federal de Derechos vigente.

Todos los documentos deberán ser entregados por duplicado a la Dirección de la Reserva en la Estación de Campo con domicilio conocido en la población de El Cuyo, Municipio de Tizimín, Yucatán, dirigidos al Titular de la Unidad Coordinadora de Areas Naturales Protegidas, con dirección en avenida Revolución 1425, nivel 25 torre, colonia Tlacopac-San Angel, Delegación Alvaro Obregón, código postal 01040, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Regla 12. Para el desarrollo de actividades turísticas o recreativas, el promovente deberá obtener el consentimiento del dueño o posesionario del predio de que se trate, cuando éste sea propiedad privada o ejidal.

Regla 13. El otorgamiento de los permisos deberá ser solicitado ante la Dirección de la Reserva, con una antelación de 30 días naturales a la realización de sus actividades.

Regla 14. Para el otorgamiento de los permisos, la SEMARNAP tomará en cuenta la calidad del servicio y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Regla 11.

Regla 15. La SEMARNAP otorgará o negará el permiso dentro de un plazo de 30 días hábiles, contado a partir de la fecha en que se presente la solicitud. Una vez transcurrido dicho plazo sin que medie respuesta por parte de ésta, se entenderá negado el permiso solicitado.

Regla 16. Para la obtención del refrendo de los permisos, el permisionario deberá presentar el informe final de actividades con 30 días hábiles anteriores a la terminación de la vigencia del permiso correspondiente. La solicitud debe presentarse en escrito libre ante la Dirección de la Reserva, dirigido a la UCANP, el cual se entenderá por otorgado de manera automática; quienes no realicen el trámite en el plazo establecido, perderán el derecho de obtenerlo por ese solo hecho.

Regla 17. El refrendo de los permisos estará sujeto en función del cumplimiento, por parte del permisionario, de la entrega en tiempo y forma del informe al término de las actividades, de las disposiciones contenidas en el permiso correspondiente, y a la evaluación técnica de la UCANP.

Regla 18. Los Prestadores de Servicios Turísticos deben elaborar y presentar ante la Dirección de la Reserva el informe final a que se refiere la Regla 17, que contenga los recorridos, actividades desarrolladas, sitios visitados, número de turistas manejados, problemática detectada, así como cualquier incidente relevante que se haya suscitado durante la visita.

Regla 19. Para el otorgamiento de los permisos a que se refiere la fracción II de la Regla 6, el solicitante deberá presentar una solicitud que cumpla con los siguientes requisitos:

I. Nombre o razón social del solicitante, domicilio para oír y recibir notificaciones, número de teléfono y fax, en su caso, y copia de una identificación oficial o acta constitutiva de la sociedad o asociación;

II. Tipo y características del o los vehículos que se pretendan utilizar para la realización de la actividad;

III. Programa de actividades a desarrollar, en el cual se incluya, fecha, horarios de ingreso y salida, tiempo de estancia en el área natural protegida y ubicación del área donde se pretenda llevar a cabo dichas actividades;

IV. Número de personas auxiliares;

V. Tipo de equipo a utilizar para la actividad;

VI. Carta de exposición del tipo de filmación, videograbación y/o tomas fotográficas indicando el fin de las mismas, y

VII. Acreditar el pago de derechos correspondiente, en su caso, de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Derechos vigente.

Todos los documentos deberán ser entregados por duplicado a la Dirección de la Reserva, dirigidos al Jefe de la Unidad Coordinadora de Areas Naturales Protegidas, ubicada en avenida Revolución número 1425, nivel 25 torre, colonia Tlacopac-San Angel, Delegación Alvaro Obregón, código postal 01040, México, Distrito Federal.

Regla 20. Los permisos a que se refiere la Regla anterior deberán solicitarse con una antelación de 30 días hábiles al inicio de las actividades.

Regla 21. La SEMARNAP, por conducto de la UCANP, otorgará o negará el permiso dentro de un plazo de 10 días hábiles, contado a partir de la fecha en que se presente la solicitud.

Regla 22. Toda concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre, deberá solicitarse en términos de lo establecido en la legislación en la materia, respetando lo establecido en el Decreto de Creación de la Reserva, el Programa de Manejo y demás disposiciones legales aplicables.

CAPITULO III

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS RECREATIVOS

Regla 23. Los Prestadores de Servicios Recreativos y Guías Locales que pretendan desarrollar actividades de ecoturismo y/o utilizar las instalaciones de la Reserva, deben contar con el permiso correspondiente emitido por la SEMARNAP, a través de la UCANP. El cual deberán portar durante el desarrollo de las actividades autorizadas y mostrar al personal de la SEMARNAP y demás autoridades, cuantas veces les sea requerido.

Regla 24. Los Prestadores de Servicios Recreativos, Guías Locales y las personas que contraten sus servicios, deberán llevar consigo la basura generada durante el desarrollo de la actividad recreativa o de ecoturismo, y depositarla en los sitios destinados para tal efecto.

Regla 25. Los Prestadores de Servicios Recreativos, su personal y los visitantes que contraten sus servicios deberán acatar en todo momento, las indicaciones del personal de la Reserva, así como cumplir lo establecido en las Reglas.

Regla 26. Los Prestadores de Servicios que tengan conocimiento de cualquier irregularidad o ilícito que se lleve a cabo dentro de la Reserva, deberá reportarlo al personal de la Dirección y/o de la PROFEPA.

Regla 27. El Prestador de Servicios Recreativos y los Guías Locales deberán respetar la señalización y las rutas y senderos ubicados en la Reserva.

Regla 28. Cuando se trate de visitas a las zonas de alimentación de los flamencos, las embarcaciones deberán guardar una distancia máxima de acercamiento a 150 m de los grupos o individuos.

Regla 29. La velocidad máxima de navegación para la observación de flamencos será de 8 nudos. En las partes bajas se deberá utilizar palanca o remo para evitar dañar el fondo del estero.

Regla 30. Los Prestadores de Servicios Recreativos se obligan a informar a los usuarios y visitantes que están ingresando a un área natural protegida, en la cual se desarrollan acciones para la conservación de los recursos naturales y la preservación del entorno natural, así como hacer de su conocimiento la importancia de su conservación y las condiciones para su visita, pudiendo apoyar esa información con el material gráfico y escrito autorizado por la Dirección.

Regla 31. El Prestador de Servicios Recreativos deberá designar un Guía Local por cada grupo de 10 visitantes, quien será responsable del comportamiento del grupo y contar con conocimientos básicos sobre la importancia y conservación de la Reserva, la cual expondrá a los visitantes mediante una breve plática de educación ambiental.

Regla 32. El Guía Local que pretenda llevar a cabo sus actividades dentro de la Reserva deberá cumplir con lo establecido en la NOM-08-TUR-1996, Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías generales; y la NOM-09-TUR-1997, Que establece los elementos a que deben sujetarse los guías especializados en actividades específicas; así como a aprobar los cursos de capacitación que sobre las características de los ecosistemas presentes en la Reserva, su importancia y las medidas de conservación que implementa la SEMARNAP.

Regla 33. Los Prestadores de Servicios Recreativos y Guías Locales estarán obligados a proporcionar en todo momento el apoyo y facilidades necesarias al personal de la Reserva en las labores de vigilancia y protección de la Reserva, así como en cualquier situación de emergencia o contingencia.

Regla 34. Los Prestadores de Servicios Recreativos deberán contar con un seguro de responsabilidad civil y de daños a terceros, con la finalidad de responder de cualquier daño o perjuicio que sufran en su persona o en sus bienes los visitantes, así como de los que sufran los vehículos y equipo, o aquellos causados a terceros durante su estancia y desarrollo de actividades en la Reserva.

Regla 35. Los Prestadores de Servicios y los Guías Locales serán responsables de los daños ocasionados a los ecosistemas y a los elementos naturales por no acatar las presentes disposiciones y demás leyes aplicables.

Regla 36. Los Prestadores de Servicios Recreativos y Guías Locales deben cerciorarse que los visitantes o turistas, no introduzcan a la Reserva cualquier especie vegetal o animal alóctonas, ya sea silvestre o doméstica.

Regla 37. Los Prestadores de Servicios Recreativos y Guías Locales deben cerciorarse que los visitantes o turistas se abstengan de introducir herbicidas, pesticidas o cualquier otro tipo de sustancia contaminante.

Regla 38. Previo al desarrollo de cualquier proyecto ecoturístico, por parte de los Prestadores de Servicios Turísticos o Guías Locales, se deberá respetar los límites de la capacidad de carga máxima permitida, para protección de los recursos naturales del área.

Regla 39. Con la finalidad de proteger las condiciones naturales prevalecientes en la Reserva, así como evitar disturbios en el comportamiento y reproducción de la fauna silvestre, se establece como límite máximo de permanencia simultánea de visitantes en las rutas y senderos de interpretación ambiental, el de 20 personas, sin contar a los guías.

Regla 40. Cuando se proponga un proyecto específico para el desarrollo de infraestructura o para el uso de recursos naturales con fines ecoturísticos, por parte de los Prestadores de Servicios Turísticos, éstos deberán presentar a la SEMARNAP una Manifestación de Impacto Ambiental, en términos de lo establecido en la LGEEPA y su Reglamento en la materia.

Regla 41. Cuando los servicios ecoturísticos incluyan actividades de pesca deportivo-recreativa y/o paseos por la ría de la Reserva, los Prestadores de Servicios Recreativos y Guías Locales, deberán contar con los permisos correspondientes, expedidos por la SEMARNAP y por la SCT. De igual forma, deberán cumplir al igual que los turistas y visitantes lo dispuesto por la LP.

CAPITULO IV

DE LOS VISITANTES

Regla 42. Los grupos de visitantes que no rebasen las 10 personas, que ingresen a la Reserva con el fin de desarrollar actividades recreativas podrán, como una opción para el desarrollo de dichas actividades,

contratar los servicios especializados que se prestan en la región por parte de un Prestador de Servicios Recreativos y/o Guía Local, quien fungirá como responsable y asesor de los grupos.

Regla 43. Los grupos de visitantes que no cuenten con permiso expedido por la SEMARNAP para el desarrollo de actividades recreativas dentro de la Reserva, y que no contraten los servicios de un Prestador de Servicios Recreativos o un Guía Local, deberán dar aviso a la Dirección previamente al inicio de las actividades; así como observar lo establecido en las presentes Reglas.

Regla 44. Los visitantes deberán observar las siguientes disposiciones durante su estancia en la Reserva:

I. Las personas y sus vehículos no podrán acampar dentro de la Reserva si no cuentan con la anuencia correspondiente de la Dirección de la misma.

II. Depositar la basura generada en los lugares señalados por la Dirección de la Reserva.

III. Atender las observaciones y recomendaciones formuladas por el personal de la Dirección de la Reserva relativas a asegurar la protección y conservación de los ecosistemas del área.

IV. Respetar las rutas y senderos de interpretación ambiental establecidos.

V. Proporcionar los datos que para conocimiento y estadística le sean solicitados, así como ofrecer las facilidades para el desarrollo de actividades de inspección y vigilancia al personal de la Dirección de la Reserva y PROFEPA.

VI. No dejar materiales que impliquen riesgos de incendios en el área visitada.

VII. No alterar el orden y condiciones del sitio que visitan (disturbios auditivos, molestar animales, cortar plantas, apropiarse de fósiles u objetos arqueológicos ni alterar los sitios con valor histórico y cultural).

VIII. Para la realización de los recorridos en campo deberán contar con el consentimiento de los dueños de los terrenos, cuando aquéllos sean propiedad privada o ejidales y ceñirse a sus condiciones.

CAPITULO V

DE LA INVESTIGACION Y COLECTA CIENTIFICA

Regla 45. Para el desarrollo de actividades de colecta con fines de investigación científica en las distintas zonas que comprende la Reserva, el investigador deberá contar con la autorización correspondiente expedida por la SEMARNAP para tal efecto, así como el consentimiento de los dueños y poseedores de los predios en los cuales se desee realizar las actividades, cuando éstos sean de propiedad privada o ejidal.

Regla 46. La investigación científica podrá ser desarrollada en toda la superficie que comprende la Reserva, preferentemente en sus zonas núcleo, con el fin de generar el conocimiento suficiente, que permita diseñar acciones y estrategias para su preservación.

Regla 47. A fin de garantizar la correcta realización de las actividades de colecta con fines de investigación científica y salvaguardar la integridad de los ecosistemas y de los investigadores, estos últimos deberán sujetarse a los lineamientos y condicionantes establecidos en la autorización respectiva, y observar lo dispuesto en el Decreto de Creación de la Reserva, el Programa de Manejo y demás disposiciones legales aplicables.

Regla 48. No se permitirá el desarrollo de actividades de investigación que impliquen la extracción, o el uso de recursos genéticos con fines de lucro o que utilice material genético con fines distintos a lo dispuesto en el Decreto por el que establece la Reserva o que contravenga lo dispuesto en el Programa de Manejo.

Regla 49. Las investigaciones y experimentos manipulativos estarán restringidos a los sitios especificados en la zonificación establecida en el Programa de Manejo.

CAPITULO VI

DE LOS APROVECHAMIENTOS

Regla 50. Las personas que realicen actividades de aprovechamiento forestal sustentable deberán contar con la autorización correspondiente que para tal efecto expida la SEMARNAP, así como sujetarse a los términos establecidos en la LF, LGEEPA, sus respectivos reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables.

Regla 51. Las personas que realicen aprovechamientos forestales maderables dentro de los sitios autorizados para tal fin, deberán portar en todo momento la autorización correspondiente.

Regla 52. El aprovechamiento forestal maderable y no maderable dentro de la reserva podrá llevarse a cabo dentro de las zonas permitidas, previa autorización de la SEMARNAP o, en su caso, del acuse de recibo de la presentación del aviso de aprovechamiento de recursos no maderables.

Regla 53. El establecimiento y operación de viveros con fines de comercialización, reforestación o restauración, bajo la modalidad de UMAS, promovidos por ejidos o pequeños propietarios, podrán llevarse a cabo sólo en la zona de amortiguamiento de la Reserva.

Regla 54. La Dirección de la Reserva, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a otras dependencias competentes en la materia, realizará la supervisión técnica de los aprovechamientos y de quemas controladas que se realicen con fines de saneamiento y renovación de las plantaciones forestales autorizadas.

Regla 55. Para la realización de desmontes, para cambio de uso de suelo diferente a la agropecuaria, se deberá contar con la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental.

Regla 56. Para el cambio de uso de suelo de forestal a agropecuario en zonas de amortiguamiento se deberá acatar lo establecido en la NOM-062-ECOL-1994, en las presentes Reglas y demás disposiciones legales aplicables.

Regla 57. La reforestación en áreas degradadas se realizará exclusivamente con especies autóctonas de la región.

Regla 58. El aprovechamiento forestal maderable y no maderable dentro de los terrenos que comprende a la Reserva, podrá realizarse preferentemente por los dueños y poseedores de los predios. Tratándose de particulares o de organizaciones ajenas a los pobladores locales, éstos deberán obtener el consentimiento por escrito del propietario o del ejido en donde se ubiquen los predios en los cuales se pretenda desarrollar dicha actividad. En ambos casos, deberán cumplir con lo establecido en la LF, su Reglamento y en las normas oficiales mexicanas aplicables en la materia.

Regla 59. Las actividades agropecuarias deberán ser realizadas exclusivamente en las subzonas de la Zonas de Amortiguamiento, establecidas en estas Reglas.

Regla 60. El establecimiento de criaderos de fauna silvestre, bajo la modalidad de UMAS, cultivo de especies y técnicas agropecuarias, podrá realizarse dentro de la subzonas establecidas en la Zona de Amortiguamiento, y se sujetarán a lo establecido en el plan de manejo de la UMA correspondiente, en el presente Programa de Manejo, así como las demás disposiciones legales aplicables.

Regla 61. Dentro de la Reserva no se permitirá el aprovechamiento de ejemplares, partes o productos de la flora y fauna silvestres de aquellas especies consideradas raras, amenazadas, endémicas o en peligro de extinción enlistadas en la NOM-ECOL-059/1994, cuyos fines sean distintos a los establecidos en la norma; salvo en aquellos casos en que éstos se realicen a través de una UMA autorizada para tal fin. Así como el cazar, capturar, molestar o extraer todo tipo de animales y plantas terrestres o acuáticas y sus productos, incluyendo material mineral, sin permiso o autorización correspondiente.

Regla 62. Para la realización de quemas de esquilmos agrícolas, residuos de limpias y en general cualquier quema con fines agropecuarios y/o forestales se deberá dar aviso a la Dirección, con la finalidad de que éstas se lleven a cabo de manera adecuada para evitar posibles incendios forestales.

Regla 63. El uso, explotación y aprovechamiento de las aguas nacionales dentro de la Reserva, incluyendo las descargas de aguas residuales, deberá apegarse a lo previsto en la LAN, LGEEPA y en las normas oficiales mexicanas en la materia.

Regla 64. La aplicación en el uso de plaguicidas agrícolas se llevará a cabo con apego a la NOM-052-FITO-1993.

CAPITULO VII
DE LA ZONIFICACION

Regla 65. Los usos y aprovechamientos que se pretendan realizar en la Reserva, estarán determinadas de acuerdo a la siguiente zonificación:

Zonas Núcleo, en estas zonas se permitirán actividades de investigación y colecta científica, saneamiento forestal, limpias tendientes a la preservación de los ecosistemas, inspección y vigilancia, educación ambiental y las visitas guiadas de educación ambiental, exclusivamente en aquellas rutas o senderos de interpretación ambiental autorizados por la Dirección.

Zonas de Amortiguamiento. El área comprendida por los terrenos que rodean a las zonas núcleo de la Reserva para protegerlas del impacto exterior. Esta Zona comprende dos Subzonas:

Subzona de Uso Moderado: áreas dedicadas al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales bajo un manejo intensivo, que comprende parcialmente las superficies que rodean las poblaciones, dotaciones ejidales y propiedades privadas localizadas en el interior de la reserva.

En esta área se podrá realizar cualquier actividad productiva que sea ambientalmente compatible con los objetivos de creación de la Reserva, que permita el desarrollo sustentable de sus pobladores y la suma de esfuerzos para disminuir la presión que ejercen las actividades productivas sobre las zonas núcleo. Siempre que se dé cumplimiento a los ordenamientos legales en la materia y se cuenten con las autorizaciones y permisos para tal fin. Queda restringido el uso de fuego o prácticas de quemas controladas sin la supervisión de la Dirección de la Reserva, así como la apertura de nuevas áreas a la ganadería extensiva.

Subzona de Uso Restringido: comprendida por las franjas contiguas de 200 metros que circundan o bordean las zonas núcleo de la reserva. Dentro de ésta se incluyen 2 Km. a lo largo de la Ría, que va de la carretera de entrada al poblado El Cuyo, hacia el poniente, colindante a la zona núcleo conocida como “Cuenca de El Cuyo”.

Podrá llevarse a cabo la construcción de infraestructura de baja densidad, la recolección de leña y corte de hojas de palma enlistadas en la NOM-059-ECOL/1994, previa autorización que para tal efecto expida la SEMARNAP; el manejo de flora y fauna silvestres, sin impactar sus poblaciones, previa autorización de la SEMARNAP y, en el caso de la Ría, la pesca realizada por los pobladores de la Reserva, en los meses de

octubre, noviembre y diciembre, cuando por impedimentos ocasionados por “nortes”, no puedan realizar, de manera cotidiana, sus actividades en el mar, por un lapso mayor a cinco días.

Regla 66. Todo proyecto de obra pública o privada que se pretenda realizar dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva, deberá contar previamente a su ejecución con la autorización en materia de impacto ambiental, de conformidad a lo previsto en la LGEEPA y su Reglamento en materia de Impacto Ambiental.

Regla 67. Para el desarrollo e instalación de unidades de hospedaje, cabañas u hoteles en las zonas de amortiguamiento, sólo podrán ser autorizadas de conformidad con lo que establezca el Ordenamiento Ecológico del Territorio para la zona, el cual define los sitios permitidos para construir con la asignación de las densidades de ocupación correspondiente.

Regla 68. Las personas que ingresen a las Zonas Núcleo deberán llevar, al salir del área, la basura generada durante su estancia en la Reserva.

Regla 69. En la zona de amortiguamiento podrán continuar realizándose las actividades mineras, forestales y agropecuarias que cuenten con la autorización respectiva y aquéllas emprendidas por las comunidades que ahí habiten y que sean compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable y la vocación del suelo, considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico, en los términos del Decreto y el Programa de Manejo.

Regla 70. El aprovechamiento de ejemplares y partes de vegetación no maderable, solamente será autorizado en la Zona de Amortiguamiento, previo cumplimiento de lo establecido en la LF, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables.

CAPITULO VIII
DE LAS PROHIBICIONES

Regla 71. En la totalidad del área que comprende la Reserva queda prohibido:

I. El establecimiento de nuevas industrias de explotación, exploración y/o aprovechamiento de recursos naturales, en apego al Decreto de Creación de la Reserva, el Programa de Manejo, las presentes Reglas Administrativas y demás disposiciones aplicables.

II. La construcción de obras de infraestructura sin la autorización de la SEMARNAP.

III. La creación de nuevos ejidos y centros de población, así como de cualquier tipo de asentamiento humano.

IV. El aprovechamiento de aquellas especies consideradas raras, amenazadas, endémicas o en peligro de extinción enlistadas en la NOM-ECOL-059/1994, salvo que se trate de aquellos ejemplares reproducidos en UMA’s.

V. Alimentar, acosar o hacer ruidos intensos que alteren a las especies de fauna silvestre.

VI. Alterar o destruir los sitios de anidación y reproducción de especies silvestres.

VII. El uso de lámparas o cualquier otra fuente de luz para el aprovechamiento u observación de especies de fauna, salvo para las actividades científicas que así lo requieran.

VIII. La Introducción de especies alóctonas.

IX. Capturar, molestar o extraer todo tipo de animales y plantas terrestres o acuáticas y sus productos, incluyendo material mineral, sin la autorización correspondiente.

X. Verter o descargar aguas residuales, aceites, grasas, combustibles o cualquier otro tipo de contaminantes líquidos, así como desechos sólidos, que pueda ocasionar alguna alteración a los ecosistemas, fuera de los sitios de confinamiento y destinos finales autorizados para tal fin por las autoridades locales, y rebasar los límites máximos permitidos por las normas oficiales mexicanas.

XI. Modificar las condiciones naturales de los acuíferos y vasos, cuencas hidrológicas, cauces naturales de corrientes, permanentes o intermitentes, salvo que sea necesario para el adecuado manejo de los recursos naturales, el cumplimiento del Decreto de Creación de la Reserva y del Programa de Manejo.

XII. Construir caminos de relleno sobre cuerpos de agua ni estructuras que obstruyan el flujo natural.

XIII. Alterar los patrones naturales y ciclos de actividades de marea y escurrimientos de agua dulce.

XIV. El tránsito a pie o en vehículo, con excepción de los empleados e investigadores de las dependencias que participen en su cuidado, en las áreas donde llegan las cacerolitas de mar durante los meses de noviembre a febrero a desovar. Estas normas deberán extenderse durante todo el periodo de reproducción dado que la eclosión se da un mes después de ser depositados los huevos.

XV. El tránsito a pie o en vehículos, con excepción de los empleados e investigadores de las dependencias que participen en el cuidado de las especies de tortugas, en las áreas de anidación de las tortugas marinas durante el periodo de arribazón de abril a noviembre. Los recorridos con voluntarios y turistas para apoyar trabajos y/u observar tortugas marinas deberá realizarse previa autorización de la SEMARNAP, por conducto de la UCANP.

XVI. Realizar actividades agropecuarias sobre dunas costeras, exclusivamente se podrán restaurar las plantaciones de cocales establecidos en el área cercana a El Cuyo, en producción o afectados por el amarillamiento letal, sin aumentar su extensión ni cambiar de actividad productiva o de desarrollo.

XVII. El uso de motos acuáticas (Jet sky), esquiar en la Ría y utilizar ultraligeros para fines turísticos.

Regla 72. Las siguientes especies de árboles maderables y no maderables no podrán ser taladas, descumbradas, cinchadas o quemadas dentro de los límites de la Reserva:

Ramón (*Brosimum alicastrum*)
Chicozapote (*Manilkara zapota*)
Tinto (*Haematoxylon campechianum*)
Siricote (*Cordia dodecandra*)
Guayacán (*Guaiacum sanctum*)
Mangle rojo (*Rhizophora mangle*)
Mangle negro o tabche (*Avicennia germinans*)
Mangle blanco (*Laguncularia racemosa*)
Despeinadas (*Beaucarnea spp.)*

Regla 73. La extracción de arena de las playas dentro del área que comprende la Reserva, solamente podrán ser utilizadas como bancos de materiales, el arena que se acumula en las escolleras por efecto del acarreo mareal, previa autorización emitida por la SEMARNAP.

Regla 74. Queda prohibido el establecimiento de nuevas áreas para la explotación salinera, no propuestas en el programa de manejo. Asimismo, se permitirá el desarrollo de actividades que permitan elevar la producción del recurso, mejorando su sistema interno y obteniendo agua de mayor concentración de sal, previa autorización de la SEMARNAP en materia de impacto ambiental.

Regla 75. En las Zonas Núcleo, además de las restricciones señaladas en la LGEEPA y la declaratoria de la Reserva, queda prohibido:

I. El aprovechamiento forestal maderable y no maderable; apicultura, agricultura y ganadería.

II. El cambio de uso de suelo.

III. La colecta y aprovechamiento de fauna silvestre con fines pecuarios.

IV. El ingreso o visita a aquellos sitios en los cuales la Dirección de la Reserva realice o coordine actividades de monitoreo e investigación de la flora y fauna silvestres, así como a las áreas de anidación de aves.

V. La ejecución de obras públicas o privadas, salvo aquellas iniciadas con anterioridad al establecimiento de la Reserva y las necesarias para su mantenimiento, así como aquellas que resulten necesarias para el aseguramiento de los ecosistemas.

VI. El tránsito de vehículos automotores, triciclos y motocicletas, por caminos secundarios y brechas, excepto aquéllos de uso oficial, que se encuentren en el desarrollo de sus funciones.

CAPITULO IX

DE LA SUPERVISION Y VIGILANCIA

Regla 76. La inspección y vigilancia del cumplimiento del presente instrumento corresponde a la SEMARNAP, por conducto de la PROFEPA, sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones que corresponda a otras dependencias del Ejecutivo Federal.

Regla 77. Toda persona que tenga conocimiento de alguna infracción o ilícito que pudiera ocasionar algún daño a los ecosistemas de la Reserva, deberá notificar a las autoridades competentes de dicha situación, por conducto de la PROFEPA o al personal de la Reserva, para que se realicen las gestiones jurídicas correspondientes.

CAPITULO X

DE LAS SANCIONES Y RECURSOS

Regla 78. Las violaciones al presente instrumento serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la LGEEPA, en el Título Vigésimo Quinto del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal, en la LAN, LM, LP, LAN, LF y sus respectivos Reglamentos, y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Regla 79. El Prestador de Servicios, Guía Local o visitante que viole las disposiciones contenidas en el presente instrumento, salvo en situaciones de emergencia, en ningún caso podrá permanecer en la Reserva y será conminado por el personal de la PROFEPA y de la Reserva a abandonar el área.

Regla 80. Los usuarios que hayan sido sancionados podrán inconformarse con base en lo dispuesto en el Título VI, Capítulo V de la LGEEPA y en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS

UNICO.- Las presentes Reglas Administrativas entrarán en vigor al día siguiente de la publicación en el **Diario Oficial de la Federación** del resumen del programa de manejo, el cual incluirá el plano oficial de la

Reserva, y se podrán modificar, adicionar o derogar a juicio de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

Evaluación anual y global

El Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos es un instrumento estratégico con características flexibles, de manera que deberá ser evaluado y actualizado con objeto de: **1)** Corroborar los avances y resultados de las acciones emprendidas; **2)** Realizar los ajustes necesarios para el cumplimiento de los objetivos de cada acción; y **3)** Jerarquizar la solución de problemas que necesitan ser atendidos con carácter de prioridad.

Evaluación anual

Al término de cada año se realizará una evaluación de las acciones emprendidas. Previamente, los resultados serán presentados por el Director del ANP a los integrantes del Consejo Técnico Asesor (CTA) para su análisis y opinión. El CTA revisará los resultados obtenidos y hará las recomendaciones respectivas al Director del ANP para la continuación y/o rectificación de las acciones y objetivos planteados en los componentes y subcomponentes que así lo requieran.

Evaluación global

Debido a la dinámica cambiante de los múltiples factores que inciden en el área protegida, se contempla la necesidad de que el Programa sea evaluado, revisado y, en su caso, adecuado a las condiciones biológicas, sociales y económicas de la región cada cinco años. El mecanismo de implementación de esta revisión será una amplia consulta entre todos los sectores, dirigida por la administración del ANP y discutida en el seno del CTA. Deberán adecuarse y ajustarse los objetivos generales del Programa y aquellos que correspondan a los componentes y subcomponentes que lo integran. De ser necesario, se propondrán los nuevos componentes o subcomponentes que garanticen el cumplimiento cabal de los objetivos generales del área protegida.

Criterios de evaluación

Se propone que la evaluación del Programa de Manejo se realice mediante la aplicación de tres criterios básicos a cada una de las acciones, a cada subcomponente y componente y al Programa en su conjunto.

El primer criterio es la EFICIENCIA, considerada como la relación entre los objetivos y metas propuestas y las realizadas. El segundo criterio, la EFICACIA, se empleará como un criterio económico que comparará el uso propuesto y el realizado de los recursos financieros aplicados a todos los niveles dentro del Programa de Manejo. El tercer criterio consistirá en evaluar las acciones generales y específicas a través de su TRASCENDENCIA para el avance y consolidación del área protegida y su significado para las comunidades asentadas en el ANP.

Tal como se señaló, la complejidad de las acciones para la conservación, protección y desarrollo del área protegida requiere de INDICADORES que permitan la aplicación de los criterios antes mencionados. Los indicadores deberán ser aplicables a los diferentes componentes que constituyen la totalidad de la Reserva de la Biosfera. Así, para el Componente de Conservación serán de importancia los indicadores de salud ambiental y funcionamiento adecuado de los ecosistemas; para el Componente de Uso Sustentable de Recursos Naturales, el número de hectáreas con adopción de técnicas productivas que vayan acordes al manejo sustentable de los recursos naturales; para el Componente de Comunicación y Educación Ambiental, el indicador de cambio en conducta, hábitos, capacidades, interés, comprensión y actitud de los habitantes del área natural protegida; para el Componente de Marco Legal, la regularización de propiedades será un indicador que dé seguridad en la tenencia y uso de la tierra a los propietarios dentro del ANP. Sin embargo estos indicadores se deberán de especificar para cada Programa Operativo Anual.

CALENDARIZACION

Objetivo específico

- Calendarizar las actividades de la implementación del Programa de Manejo a corto, mediano y largo plazos.

Estrategias

- En la presente tabla se enlistan las acciones a realizar en los próximos años, considerando que los dos primeros serán a corto plazo, el año tres y cuarto a mediano plazo y del quinto año en adelante a largo plazo.

ACTIVIDAD	AÑOS				
	1-2	2-3	3-4	4-5	6-7…
COMPONENTE CONSERVACION					
Subcomponente de Inspección y Vigilancia.					
Verificación Normativa.					
Patrullaje.					

Control en casetas de entrada.					
Manejo de recursos naturales.					
Construcción de senderos.					
Colocación de letreros.					
Apoyo a visitantes e investigadores.					
Subcomponente Restauración Ecológica.					
Restauración de Flujos Hídricos.					
Control de ferales y especies exóticas.					
Reforestación.					
Monitoreo.					
Subcomponente Control y Prevención de Incendios.					
Programa de Control y Prevención.					
COMPONENTE DESARROLLO SOCIAL					
Subcomponente Uso de Recursos Naturales.					
Capacitación a productores.					
Difusión alternativas productivas compatibles.					
Gestión de apoyos.					
Programa de Ecoturismo					
Registro y control de visitantes.					
Planes Comunales de Ecoturismo.					
Construcción de Facilidades.					
Uso de Senderos Interpretativos.					
Monitoreo.					
Programa agricultura orgánica y agroforestería					
Difusión en particulares y ejidos					
Implementación del Programa.					
Programa Intensificación y diversificación de la ganadería.					
Intensificación.					
Diversificación.					
Subcomponente Participación Local.					
Guardas honoríficos.					
Revisión de plan de manejo.					
Subcomponente Educación Ambiental.					
Plan de Educación Ambiental.					
Campaña de prensa y materiales de difusión.					
Programas para Escuelas.					
Construcción de senderos educativos.					
Taller funcionarios y sectores productivos.					
COMPONENTE INVESTIGACION Y MONITOREO					
Proyectos de prioritarios de investigación.					
Evaluación participativa rural.					

Monitoreo ecológico.					
Captación de tesistas.					
COMPONENTE MARCO LEGAL					
Regularización tenencia de la tierra.					
Deslinde e inscripción de terrenos nacionales.					
Deslinde de la zona federal.					
Deslinde de zonas núcleo.					
Encuestas.					
Contacto de Propietarios.					
Adquisición de Tierras.					
Realización de Reglamentos.					
COMPONENTE ADMINISTRACION					
Organización de personal.					
Administración.					
Relación pública y recaudación de Fondos.					
Subcomponente Capacitación.					
Capacitación del Personal.					
Capacitación comunidades.					
Subcomponente Mantenimiento.					
Mantenimiento de estaciones, vehículos, etc.					
Construcción.					
Apoyo a Operaciones.					

VER IMAGEN 12ab-10.BMP

PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

SENTENCIA relativa a la Controversia Constitucional 6/98, promovida por Tomás E. de Jerónimo Aniceto y Damián Cortés Guzmán en su carácter, respectivamente, de Presidente Municipal y Síndico del Municipio de Aljojuca, Agustín Torres Romero y Porfirio Castro Ramírez en su carácter, respectivamente, de Presidente Municipal y Síndico del Municipio de Nealtican, y Roberto Crisóstomo Bruno y Juventino Santiago Desiderio en su carácter, respectivamente, de Presidente Municipal y Síndico del Municipio de Altepexi, municipios todos ellos del Estado de Puebla, en contra del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo de dicho Estado.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 6/98

ACTOR: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA Y OTROS MUNICIPIOS DE LA MISMA ENTIDAD.

PONENTE: MINISTRO GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de marzo de dos mil.

VISTOS; y RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Tomás E. de Jerónimo Aniceto y Damián Cortés Guzmán en su carácter, respectivamente, de Presidente Municipal y Síndico del Municipio de Aljojuca, Agustín Torres Romero y Porfirio Castro Ramírez en su carácter, respectivamente, de Presidente Municipal y Síndico del Municipio de Nealtican, y Roberto

Crisóstomo Bruno y Juventino Santiago Desiderio en su carácter, respectivamente, de Presidente Municipal y Síndico del Municipio de Altepexi, Municipios todos ellos del Estado de Puebla, promovieron en representación de sus respectivos municipios controversia constitucional en contra de los actos y autoridades que a continuación se señalan:

"ORGANOS DEMANDADOS Y SU DOMICILIO.--- a). "El Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano "de Puebla, constituido por el Congreso "Constitucional del Estado, con domicilio en el "Recinto Oficial de dicho Poder en la Ciudad de "Puebla, Estado de Puebla, llamado Palacio "Legislativo y bien conocido en dicha localidad.--- "b). El Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano "de Puebla, cuyo titular es el C. Gobernador "Constitucional de dicho Estado, Lic. Manuel "Bartlett Díaz, con domicilio en el Palacio de "Gobierno del Estado de Puebla, ubicado en la "Ciudad de Puebla e igualmente bien conocido en "dicha localidad.--- NORMA GENERAL Y ACTOS "CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA Y MEDIO OFICIAL "EN EL QUE SE PUBLICO TAL NORMA GENERAL "DE LA CUAL DERIVAN LOS ACTOS QUE SE "IMPUGNAN.--- 1.- La norma general cuya invalidez "se demanda es la Ley para el Federalismo "Hacendario del Estado de Puebla, aprobada por el "Congreso del Estado de Puebla el día 27 de enero "de 1998, promulgada y publicada en el periódico "oficial del Estado el día 28 de enero de 1998, la "cual entró en vigor el mismo día de su "publicación. De esa ley se impugna todo el "sentido general que su contenido revela, así como "específicamente las disposiciones de aplicación "generales contenidas en los siguientes artículos "de la misma ley impugnada:--- Artículos 4, "fracciones VII y IX, 8, tercer párrafo, 13, 14, 15, 16, "17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, fracciones III y V, 30, 35, "36, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 73, "74, 76, 81, 82, 83, 84, 95, 96, 97 y 98.--- 2.- También "se impugnan, por carecer de validez "constitucional, todos los actos que son o lleguen "a ser consecuencia de la aplicación concreta de "los preceptos antes mencionados de la Ley para el "Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, "sobre todo por lo que hace a la creación, "organización y funcionamiento de los llamados "Comités de Planeación para el Desarrollo "Municipal y demás grupos supuestamente "organizados de los diversos sectores que prevé "dicha ley, así como los actos de las Juntas "Auxiliares, incluyendo en forma específica los "actos tendientes al ejercicio de las atribuciones y "funciones que la ley que se combate otorga a "dichas autoridades intermedias que pretende "establecer en los preceptos antes señalados.--- "Asimismo, se combaten todos los actos que "también son o lleguen a ser consecuencia de la "aplicación de la Ley para el Federalismo "Hacendario del Estado de Puebla, tendientes a la "administración, distribución, ejecución, ejercicio y "fiscalización de las participaciones y aportaciones "federales que corresponden a los Municipios "actores. Funciones que la ley impugnada pretende "atribuir inconstitucionalmente a las autoridades "que trata de establecer, en tanto que la Ley "Fundamental y Suprema de toda la Unión atribuye "incuestionablemente las mismas funciones a otras "autoridades legítimamente establecidas, entre “ellas a las autoridades Municipales”.

SEGUNDO.- Los antecedentes del caso son los siguientes:

"HECHOS QUE CONSTITUYEN LOS "ANTECEDENTES DE LA NORMA GENERAL Y DE "LOS ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA.--- 1.- "El titular del Ejecutivo del Estado de Puebla envió "al Congreso Local la iniciativa de Ley para el "Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.--- "2.- Dicha iniciativa fue turnada a las Comisiones "Unidas de Gobernación, Justicia y Puntos "Constitucionales, y de Hacienda y Patrimonio "Estatal y Municipal, para su estudio y dictamen.--- "3.- Las Comisiones Unidas mencionadas "sometieron al H. Congreso del Estado de Puebla el "dictamen correspondiente con minuta de ley, la "cual fue aprobada por mayoría con fecha 27 de "enero de 1998.--- 4.- La Ley para el Federalismo "Hacendario del Estado de Puebla así aprobada, "fue turnada al Ejecutivo del Estado para los "efectos constitucionales de su promulgación y "publicación, habiendo sido publicada en el "periódico oficial del Estado de Puebla, número 12, "Segunda Sección, el 28 de enero de 1998, para "entrar en vigor el día de su publicación, atento a lo "dispuesto en su Artículo Primero Transitorio.--- 5.- "A pesar de que la ley que se combate ya entró en "vigor, aún no se han creado los órganos que la "misma prevé, que tienen el carácter de "autoridades intermedias prohibidas por la "Constitución, como son los Comités de "Planeación para el Desarrollo Municipal, razón por "la cual por este medio se combaten y se impugnan "no solamente la ley para el Federalismo "Hacendario del Estado de Puebla en sí misma, "específicamente por lo que hace a los Artículos ya "señalados, sino también todos los actos que son o "lleguen a ser consecuencia directa e inmediata de "su aplicación: la integración y la atribución de "funciones de los Comités ya referidos; la "participación en los actos relacionados con el "ejercicio de las funciones de las Juntas Auxiliares, "así como la

expedición de verdaderas normas de "observancia general, inconstitucionalmente "delegada por el Poder Legislativo al Gobernador "del Estado, pues le encomienda en la ley que se "combate la emisión de un pretendido "Manual "Unico de Operación para el Federalismo "Hacendario".--- La Ley para el Federalismo "Hacendario del Estado de Puebla es "inconstitucional por las razones a que más "adelante haremos referencia y, por tal motivo, es "el cuerpo normativo general que constituye uno "de los actos en contra de los cuales se promueve "esta Controversia Constitucional, específicamente "por lo que hace a sus Artículos 4, fracciones VII y "IX, 8, tercer párrafo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, "21, 22, 24, fracciones III y V, 30, 35, 36, 42, 43, 44, "47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 73, 74, 76, 81, 82, "83, 84, 95, 96, 97 y 98. Esta Controversia "Constitucional también se promueve en contra de "los actos que se realicen o pretendan realizarse "como consecuencia directa de la aplicación de "dicha ley, específicamente con fundamento en los "mencionados artículos, cuyos actos en forma "lógica y necesaria también devienen en "inconstitucionales.--- Con la finalidad de facilitar el "ejercicio de la función jurisdiccional de ese H. "Tribunal Supremo en la presente Controversia "Constitucional, específicamente por lo que toca a "la consulta general y total o parcial, o específica "de la ley que se impugna, como ya se ha dicho, "los promoventes adjuntamos a este escrito como "Anexo "10" del mismo, un ejemplar original del ya "mencionado órgano oficial del Gobierno del "Estado de Puebla, tomo CCLXXIII, número 12, "segunda sección, publicado en "H. Puebla de Z." "El miércoles 28 de enero de 1998".

TERCERO.- Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"CONCEPTOS DE INVALIDEZ.--- Antes de expresar "los conceptos de invalidez de las disposiciones "generales de la Ley para el Federalismo "Hacendario del Estado de Puebla y de los actos "que se combaten a través de esta Controversia "Constitucional, es conveniente hacer una breve "sinopsis de la evolución que ha tenido la figura "del municipio, desde la Constitución de 1917, para "el efecto de entender cuál ha sido la tendencia de "las diversas reformas constitucionales en cuanto "a esa forma de organización político-"administrativa del Estado, como lo es "precisamente el Municipio.--- Desde el "Constituyente de 1917, al elaborar el Artículo 115 "Constitucional, surgieron con motivo de la "Revolución Mexicana diversas ideas en cuanto a "la forma de administración de la Hacienda "Municipal. A este respecto, había en ese Congreso "Constituyente dos posiciones:--- La primera, que "defendía la intervención del Ejecutivo Federal en "materia de recaudación de impuestos, al "argumentar que los Municipios tenían la "obligación de sujetarse a las Leyes que dictaran "las legislaturas locales, pues sostenía que los "Municipios no eran entidades totalmente "independientes y autónomas, toda vez que tenían "que ver con el Estado en cuyo territorio se "encontrara su asiento y demarcación.--- La "segunda, defendía la libertad municipal y la "autonomía del Ayuntamiento, con el argumento de "que el Municipio debería tener su hacienda propia, "porque desde el momento que tuviese "intervención del Estado o de la Federación o de "ambos, aquél dejaría de subsistir.--- De la anterior "discusión se denota la gran preocupación que "habría de dar a los Municipios mayor libertad para "lograr así la autonomía municipal. De esta manera "se buscaba que los Municipios fueran la primera "célula de la organización democrática del País y el "primer órgano de representación política del "individuo dentro de la sociedad. Después de "varias sesiones, el Constituyente consagró la "libertad municipal en el Artículo 115 de la Carta "Magna, estableciéndose en la parte conducente, "que "cada Municipio será administrado por un "Ayuntamiento de elección popular directa, "administrando libremente su hacienda, la cual se "formará de las contribuciones que señalen las "legislaturas de los Estados y que, en todo caso, "serán las suficientes para atender a las "necesidades municipales".--- Igualmente, en "relación con la autonomía municipal, el "Constituyente de 1917 plasmó en la Fracción I del "Artículo 115 Constitucional, la prohibición expresa "y terminante de la existencia de una "autoridad "intermedia" entre los Municipios y los Gobiernos "de los Estados, para tratar de resolver así "diversas situaciones, de hecho, que "históricamente se habían presentado, en virtud de "las cuales se creaban, por debajo de los "gobiernos de los Estados, diversas figuras o "entidades que constituían factores reales de "poder, que de facto eran reconocidas inclusive "por los Gobernadores, toda vez que en algunos "casos cumplían las órdenes de éstos. Así se "socavaba la libertad y autonomía de las que "necesariamente deben gozar los Municipios.--- "Posteriormente, hubo una serie de reformas "constitucionales referentes a la institución del "Municipio. Una de las más importantes y "trascendentes es la efectuada en el año de 1982, "por iniciativa del Presidente Miguel de la Madrid "Hurtado, que, en lo referente al patrimonio de los "Municipios, establecía lo siguiente:--- a). Elevar a "rango constitucional el derecho de los Municipios "a recibir las participaciones federales que, en su "caso, se les asignen,

*obligando a las legislaturas "locales a establecer anualmente las bases "correspondientes.--- b). Que los presupuestos de "egresos de los Municipios deben ser aprobados "sólo por los Ayuntamientos, con base en los "ingresos disponibles.--- c). Por último, se incluye "la facultad para la celebración de convenios, "considerada pertinente, a fin de homologar en el "orden constitucional la celebración de convenios "que hasta esa fecha se había efectuado entre la "Federación y los Estados.--- Dicha iniciativa fue "aprobada por el órgano revisor de la Constitución "General de la República a que alude el Artículo "135 de la misma. El Decreto de Reformas "Constitucionales correspondiente se publicó en el "**Diario Oficial de la Federación** el día 3 de febrero "de 1983.--- Con lo anterior, de manera muy "general, queda clara la tendencia de considerar al "Municipio como una organización político-"administrativa autónoma, que debe ser "administrada por un Ayuntamiento de elección "popular directa, no permitiéndose, por mandato "Constitucional, que exista autoridad intermedia "alguna entre el Ayuntamiento y el Gobierno del "Estado. Igualmente, en lo referente a su "patrimonio, se le otorga al Municipio la libre "administración de su hacienda, facultad que es "eminente y evidentemente irrenunciable y, por "ello, indelegable en favor de los Gobiernos "Estatales o, con mayor razón, en favor de "cualesquiera autoridades intermedias que dichos "Gobiernos o aun el Federal, pretendan crear o "establecer.--- Como consecuencia de lo ya "señalado, el Artículo 115 de la Constitución "Política de los Estados Unidos Mexicanos, "específicamente en sus fracciones I y IV, y sus "correlativos de la Constitución del Estado de "Puebla, que son los artículos 1, 2 y 102, en "relación con los artículos 13, 50, fracción III, 51 y "52 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de "Puebla, establecen claramente lo siguiente:--- Que "no puede haber autoridad intermedia alguna entre "el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado.--- Que "los Municipios manejarán su patrimonio conforme "a la ley, administrando libremente su hacienda, la "cual se formará de los rendimientos de los bienes "que les pertenezcan, así como de las "contribuciones y otros ingresos que las "legislaturas establezcan a su favor, y en todo "caso:--- i). Percibirán las contribuciones, "incluyendo tasas adicionales que establezcan los "estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su "fraccionamiento, división, consolidación, "traslación y mejora, así como las que tengan por "base el cambio de valor de los inmuebles.--- Los "Municipios podrán celebrar convenios con el "Estado para que éste se haga cargo de algunas de "las funciones relacionadas con la administración "de esas contribuciones.--- ii). Las participaciones "federales, que serán cubiertas por la Federación a "los Municipios con arreglo a las bases, montos y "plazos que anualmente se determinen por las "legislaturas de los Estados.--- iii). Los ingresos "derivados de la prestación de servicios públicos a "su cargo.--- Expuesto lo anterior, pasamos a "expresar los siguientes Conceptos de Invalidez:--- "PRIMERO. VIOLACION A LO DISPUESTO POR EL "PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION I DEL "ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL, PORQUE, EN "VIRTUD DE DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY "PARA EL FEDERALISMO HACENDARIO DEL "ESTADO DE PUEBLA, SE CREAN AUTORIDADES "INTERMEDIAS ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL "GOBIERNO DEL ESTADO.--- 1.- El artículo 115 "Constitucional, fracción I, primer párrafo, "establece, en la parte conducente, que el "Municipio Libre constituye la base de la división "territorial y de la organización política y "administrativa de los Estados; que cada Municipio "será administrado por un Ayuntamiento de "elección popular directa y que no habrá autoridad "intermedia alguna entre éste y el Gobierno del "Estado.--- 2.- En el mismo sentido, se hallan los "siguientes preceptos de la Constitución Política "del Estado Libre y Soberano de Puebla:--- Artículo "1, que establece que el Estado de Puebla es una "entidad jurídica y política, organizada conforme a "los principios establecidos por la Constitución "Política de los Estados Unidos Mexicanos en "vigor.--- Artículo 2, que señala que el Estado "adopta para su régimen interior la forma de "gobierno republicano, representativo y popular, "teniendo como base de su organización política y "administrativa el Municipio Libre.--- Artículo 102, "que dispone en su primer párrafo, en congruencia "con lo anterior, que el Municipio Libre constituye "la base de la división territorial y de la "organización política y administrativa del Estado, "y que cada Municipio será administrado por un "Ayuntamiento de elección popular directa…, sin "que haya ninguna autoridad intermedia entre el "Ayuntamiento y el Gobierno del Estado.--- 3.- De "manera correcta, lo anterior también es "reconfirmado por la Ley Orgánica Municipal del "Estado de Puebla, en cuyo Artículo 13 igualmente "se establece que cada Municipio será "administrado por un Ayuntamiento de elección "popular directa…, y no habrá ninguna autoridad "intermedia entre el Ayuntamiento y el Gobierno "del Estado.--- 4.- Ahora bien, la Ley para el "Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, y "todos los actos que son consecuencia directa e "inmediata de su aplicación, contravienen de modo "flagrante el imperativo constitucional que*

"establece: no habrá ninguna autoridad intermedia "entre el Ayuntamiento de cada Municipio y el "Gobierno del Estado.--- Efectivamente, todos los "preceptos de la ley que se impugna y que de "alguna manera se refieren a dichas autoridades "intermedias, como son los llamados Comités de "Planeación para el Desarrollo Municipal, "transgreden la disposición constitucional a que se "refiere este primer concepto de invalidez, toda vez "que constituyen autoridades o entidades, "sobrepuestas al Municipio en la administración de "los recursos que le son propios y que constituyen "parte fundamental de su patrimonio y su "hacienda.--- Los preceptos de la ley que se "combate, que por esta razón en particular resultan "inconstitucionales, son los artículos 4, fracciones "VII y IX, 8, tercer párrafo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, "fracciones III y V, 30, 42, 43, 44, 49, 50, 57, 82, 95 y "98.--- Como se desprende de la lectura de tales "disposiciones de la Ley para el Federalismo "Hacendario del Estado de Puebla, se están "creando autoridades intermedias entre los "Ayuntamientos y el Gobierno del Estado, "denominados Comités de Planeación para el "Desarrollo Municipal, además de las ya existentes "Juntas Auxiliares, con facultades que implican "una contravención a la prohibición constitucional "multimencionada. Ello vulnera y socava la libertad "y autonomía municipales, pues a través de tales "autoridades intermedias se condiciona la "actuación de los Municipios en cuanto al libre "manejo de su patrimonio y la genuina "administración de su hacienda.--- 5.- Esto es así, "toda vez que en la ley que se combate se otorgan "a los Comités de Planeación para el Desarrollo "Municipal facultades para planear, discutir, "analizar y seleccionar las obras y acciones por "realizar, para atender las demandas de la "población, así como para aprobar los programas "de obras de acciones del Fondo de Aportaciones "para la Infraestructura Social. Sin embargo, tales "facultades no son de mera coordinación y de "apoyo a la Administración Pública Municipal, sino "poderes unilaterales de decisión y de ejecución, "que las coloca por encima de los Gobiernos "Municipales, con supremacía y supraordenación "frente a las actividades y atribuciones que la "Constitución y la ley les confieren a los "Municipios, en detrimento y en perjuicio de su "libertad y autonomía.--- Sirva para confirmar el "anterior criterio, la tesis de jurisprudencia que se "transcribe a continuación:--- "CONTROVERSIA "CONSTITUCIONAL. AUTORIDAD INTERMEDIA "PROHIBIDA EN EL ARTICULO 115, FRACCION I, "DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "CARACTERISTICAS GENERALES QUE LA "IDENTIFICAN. El Constituyente de 1917 impuso la "prohibición de "autoridad intermedia" a que se "refiere la fracción I del artículo 115 de la "Constitución Política de los Estados Unidos "Mexicanos, en atención a situaciones de hecho, "según informa la historia, en virtud de las cuales "se creaban, por debajo de los Gobiernos "Estatales, personas conocidas como "jefes "políticos" que detentaban un poder real de hecho "reconocido por el gobernador, en virtud del cual "se cumplían las órdenes de éste y servía para que "la autoridad tuviera medios inmediatos de acción "y centralización. Tomando en consideración lo "anterior, debe establecerse que una autoridad, "ente, órgano o persona de que se trate, no debe "tener facultades o atribuciones que le permitan "actuar de manera independiente, unilateral y con "decisión, que no sea resultado o provenga de "manera directa de los acuerdos o decisiones "tomados por los diferentes niveles de gobierno "dentro del ámbito de sus respectivas facultades, a "efecto de impedir que la conducta de aquellos se "traduzca en actos o hechos que interrumpan u "obstaculicen la comunicación directa entre el "Gobierno Estatal y el Municipio, o que impliquen "sustitución o arrogación de sus facultades.--- "Controversia Constitucional 2/95. Jesús Hinojosa "Tijerina, José Martínez González y Miguel Gómez "Guerrero, en su carácter de Presidente Municipal, "Secretario y Síndico Segundo del Ayuntamiento "del Municipio de Monterrey, Estado de Nuevo "León, respectivamente, contra el Gobernador, "Secretario General de Gobierno y Congreso "Estatal del propio Estado. 13 de mayo de 1977. "Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano "Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora "Pimentel. Secretario: Osmar Armando Cruz "Quiroz.--- El Tribunal Pleno, en su sesión privada "celebrada el dos de junio de mil novecientos "noventa y siete, aprobó, con el número 50/1997, la "tesis jurisprudencial que antecede. México, "Distrito Federal, a dos junio de mil novecientos "noventa y siete.--- Novena Epoca. Instancia: Pleno. "Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su "Gaceta. Tomo: V, junio de 1997. Tesis: P./J: 50/97. "Página: 343.".--- 6.- Igualmente, resulta "inconstitucional por ser consecuencia directa e "inmediata de lo anterior, el artículo 97 de la ley "que se combate, pues dispone que en caso de que "los Ayuntamientos no ministren los recursos "correspondientes a sus Juntas Auxiliares, el "Gobierno del Estado los liquidará directamente. "Tal acto por ser consecuencia de la aplicación de "la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado "de Puebla, también es claramente "inconstitucional.--- 7.- Finalmente, conviene "resaltar que a través de la Fracción

VII del artículo "4 de la ley que se combate, se está obligando a los "Municipios a integrarse a los órganos "hacendarios, concretamente a los Comités de "Planeación para el Desarrollo Municipal. Ello es "claramente inconstitucional puesto que el "Municipio tiene la autonomía plena en sus "funciones y en el manejo de su hacienda. Por "tanto, no puede ser obligado a formar parte de un "órgano intermedio, superior al Municipio, que "disponga de sus recursos fiscales.--- Con base en "lo anterior, lo procedente conforme a Derecho es "declarar fundada la presente demanda de "Controversia Constitucional y, consecuentemente, "declarar la inconstitucionalidad de la Ley para el "Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, por "lo que hace a los preceptos específicos señalados "en este primer concepto de invalidez.--- "SEGUNDO. HAY VIOLACION A LO DISPUESTO "POR LA FRACCION II Y POR EL INCISO B) DE LA "FRACCION IV DEL ARTICULO 115 "CONSTITUCIONAL. DEBIDO A QUE LA "APLICACION DE DIVERSOS PRECEPTOS DE LA "LEY PARA EL FEDERALISMO HACENDARIO DEL "ESTADO DE PUEBLA, IMPIDEN QUE LOS "MUNICIPIOS ACTORES ADMINISTREN "LIBREMENTE, A TRAVES DE LOS "AYUNTAMIENTOS LEGITIMAMENTE ELECTOS. "LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES "FEDERALES QUE LA FEDERACION LES CUBRE, Y QUE SON PARTE DE LA HACIENDA MUNICIPAL.- "Antes de entrar en el desarrollo de este segundo "concepto de invalidez, es menester señalar que se "encuentra estrechamente vinculado con el "primero, razón por la cual finalmente ambos "conceptos de invalidez deben ser considerados en "forma conjunta y armónica para decretar la "inconstitucionalidad de la ley y de los actos que "se combaten.--- 1.- El artículo 115 Constitucional, "fracción IV, inciso b), establece que los Municipios "administrarán libremente su hacienda, la cual se "formará de los rendimientos de los bienes que les "pertenezcan, así como de las contribuciones y "otros ingresos que las legislaturas establezcan en "su favor, y en todo caso de las participaciones y "aportaciones federales, que serán cubiertas por la "Federación a los Municipios con arreglo a las "bases, montos y plazos que anualmente se "determinen por las legislaturas de los Estados, y "de conformidad con lo establecido por las "recientes modificaciones a la Ley de Coordinación "Fiscal, que en su nuevo Capítulo V, referente a las "aportaciones federales a los Municipios, establece "dos nuevos fondos en el artículo 25 de dicha ley.--"- 2.- En el mismo sentido encontramos el Artículo "103, fracción II de la Constitución Política del "Estado Libre y Soberano de Puebla, que dispone "que los Municipios tienen personalidad jurídica, "con patrimonio propio que los Ayuntamientos "manejarán conforme a la ley y administrarán "libremente su hacienda la cual se formará, entre "otros conceptos, de las participaciones y "aportaciones federales.--- 3.- En forma congruente "con lo antes señalado, es conveniente citar los "siguientes preceptos de la Ley Orgánica "Municipal:--- Artículo 50, fracción III, que establece "que la hacienda municipal se formará con:… Las "participaciones federales.--- Artículo 51, que "dispone que los Ayuntamientos manejarán "conforme a la ley el patrimonio del Municipio.--- "Artículo 52, que establece que los Ayuntamientos "administrarán eficaz y libremente la Hacienda "Municipal.--- Artículo 55, que señala la forma en "que se distribuirán los fondos municipales, a "saber:--- I. Gastos de Educación Pública;--- II. "Policía y Tránsito;--- III. Alimentación de presos y "sostenimiento de hospitales;--- IV. Gastos de "conservación de edificio y obras municipales;--- V. "Servicios Públicos;--- VI. Obras de utilidad general "para el Municipio, como caminos, redes "telefónicas, puentes, etc.;--- VII. Gastos para el "fomento de la Agricultura, Comercio e Industria;--- "VIII. Sueldos de los funcionarios y empleados del "Ayuntamiento conforme lo dispongan los "presupuestos respectivos.--- 4.- Por su parte, la "Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla "dispone en sus artículos 1 y 46 lo siguiente:--- "Artículo 1.- La Hacienda Pública para atender los "gastos de los Municipios del Estado de Puebla, "percibirá en cada ejercicio las contribuciones, "productos, aprovechamientos, participaciones "federales y estatales; ingresos extraordinarios y "en su caso, las donaciones herencias, legados y "reintegros que se hicieren en su favor.--- Artículo "46.- Las participaciones que correspondan a los "Municipios del Estado, en ingresos federales, se "ingresarán con arreglo a las disposiciones y "cuotas de las Leyes que lo establecen y, en su "caso, la Ley de Coordinación Fiscal Federal, la Ley "de Coordinación Fiscal del Estado de Puebla, el "Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de "Coordinación Fiscal y de Colaboración "Administrativa en Materia Fiscal y Federal.--- 5.- "Igualmente, el Presupuesto de Egresos de la "Federación para el ejercicio fiscal de 1998, en el "último párrafo de su Artículo 8 y en su Artículo 19, "dispone lo siguiente:--- Artículo 8 (último párrafo).- "Las erogaciones que se ejerzan a través del Ramo "33 Aportaciones Federales para Entidades "Federativas y Municipios deberán aplicarse "conforme a lo dispuesto por el Capítulo V de la "Ley de Coordinación Fiscal y este Decreto… --- "Artículo 19.- Este precepto básicamente establece

*"la manera en que se distribuirán las erogaciones "previstas para el Ramo 33 Aportaciones Federales "para Entidades Federativas y Municipios, en el "año de 1998, como sigue:--- Fondo de "Aportaciones para la Educación Básica y Normal;-"-- Fondo de Aportaciones para los Servicios de "Salud;--- Fondo de Aportaciones para la "Infraestructura Social, tanto Estatal como "Municipal;--- Fondo de Aportaciones para el "Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito "Federal; y --- Fondo de Aportaciones Múltiples.--- "6.- Los anteriores preceptos deben entenderse "relacionados con los siguientes artículos de la "Ley de Coordinación Fiscal, según la misma fue "reformada mediante Decreto publicado en el "**Diario Oficial de la Federación** el día 29 de "diciembre de 1997, cuyos artículos forman parte "del nuevo Capítulo V de esta ley denominado "De "los Fondos de Aportaciones Federales".--- "Artículo 25.- Dispone que, con independencia de "lo establecido en los Capítulos del I al IV de la "propia ley, respecto de la participación de los "Estados, Municipios y Distrito Federal en la "recaudación federal participable, los mismos "fondos ya mencionados, es decir, el de "Aportaciones para la Educación Básica y Normal, "el de Aportaciones para los Servicios de Salud, el "de Aportaciones para la Infraestructura Social, el "de Aportaciones para el Fortalecimiento de los "Municipios y del Distrito Federal, y el de "Aportaciones Múltiples, se constituirán en "beneficio de las entidades federativas y, en su "caso, de los Municipios con cargo a recursos de la "Federación.--- Artículo 34. Establece la fórmula y "los procedimientos conforme a los cuales el "Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de "Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de "Aportaciones para la Infraestructura Social entre "los Estados, considerando criterios de pobreza "extrema.--- Artículo 35.- Establece la fórmula "conforme a la cual los Estados distribuirán entre "los Municipios los recursos del Fondo para la "Infraestructura Social Municipal, considerando los "criterios de magnitud de los Municipios y la "profundidad de su pobreza extrema. También se "establece que si de la información disponible no "es posible aplicar la fórmula señalada, referida en "el Artículo 34 de la misma ley, se utilizarán las "cuatro variables que ahí se precisan, a saber:--- "Población ocupada del Municipio que perciba "menos de dos salarios mínimos respecto de la "población del Estado en similar condición.--- "Población municipal de 15 años o más que no "sepa leer o escribir respecto de la población del "Estado en igual situación.--- Población municipal "que habite viviendas particulares sin "disponibilidad de drenaje conectado a fosa "séptica o a la calle, respecto de la población "estatal sin el mismo tipo de servicio.--- Población "municipal que habite en viviendas particulares sin "disponibilidad de electricidad, entre la población "del Estado en igual condición.--- Artículo 36.- "Establece el monto conforme al cual se "determinará anualmente, en el Presupuesto de "Egresos de la Federación con recursos federales, "el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento "de los Municipios y del Distrito Federal.--- Artículo "37.- Establece los fines a los que se destinarán las "aportaciones federales que reciban los "Municipios, a través de los Estados y el Distrito "Federal, con cargo al Fondo de Aportaciones para "el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito "Federal, precisando que dentro de los fines "mencionados, debe darse prioridad al "cumplimiento de las obligaciones financieras del "Municipio y a la atención de las necesidades de "seguridad pública de sus habitantes.--- Artículo "38.- Este precepto señala que el Ejecutivo Federal, "a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito "Público, distribuirá el Fondo de Aportaciones para "el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito "Federal, en proporción directa al número de "habitantes con que cuente cada entidad "federativa, en el entendido de que dichas "entidades, a su vez, distribuirán los recursos que "correspondan a sus Municipios, conforme al "mismo criterio.--- 7.- Con la Ley para el "Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, de "ninguna manera se está dando cumplimiento a las "disposiciones legales antes referidas, incluyendo "las relativas al marco general del nuevo Capítulo V "de la ley de Coordinación Fiscal.--- Efectivamente, "el punto medular de esta Controversia "Constitucional, estriba en que se crean instancias "intermedias de autoridad, jerárquicamente "superiores a los propios Municipios, como los "multimencionados Comités de Planeación para el "Desarrollo Municipal, así como las llamadas "Juntas Auxiliares, que ya funcionaban, pero "resultan inconstitucionales por las facultades que "se les están confiriendo. Ello hace que "constituyan verdaderas instancias intermedias "creadas para determinar los destinos de los "recursos federales que se entregan a los "Municipios provenientes de las participaciones y "aportaciones que les corresponden, así como para "administrar y ejercer el gasto de esos recursos.--- "Lo anterior obviamente es muy grave, debido a "que los preceptos de la ley que se combate, "señalados como inconstitucionales, contravienen "el precepto constitucional que establece que los "Municipios administrarán libremente su hacienda, "la cual se formará de los conceptos que se "establecen en los diversos incisos de la Fracción "IV del artículo 115*

de nuestra Carta Magna, dentro "de los cuales se incluyen las participaciones y "aportaciones federales que serán cubiertas por la "Federación a los Municipios con arreglo a las "bases, montos y plazos que anualmente se "determinen por las legislaturas de los Estados, de "conformidad con lo establecido en el nuevo "Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, el "cual, como ya se ha dicho, incluye como novedad "a las aportaciones que ahí se mencionan.--- "Efectivamente, todos los preceptos de la ley que "se combate y todos los actos que de manera "directa o indirecta limitan y restringen la facultad, "libertad y autonomía con que deben contar los "Ayuntamientos Municipales para administrar su "hacienda y para manejar su patrimonio, implican "una flagrante violación a la norma constitucional a "que se refiere este segundo concepto de invalidez "en razón de que la autonomía que "constitucionalmente gozan los Municipios, no "debe entenderse como una soberanía, habida "cuenta de que los Gobiernos Municipales deben "ceñirse, en cuanto a la administración directa de "los recursos propios que les corresponden, a las "disposiciones legales aplicables, dentro de las "que destacan las normas de la Ley de "Coordinación Fiscal. Sin embargo, se insiste en "que la administración de tales recursos propios "que corresponden a los Municipios, debe ser "realizada en forma directa por el mismo Municipio "y no a través de autoridades u órganos "intermedios.--- Para reforzar lo anterior, conviene "recordar que conforme al último párrafo de la "Fracción IV del artículo 115 Constitucional "corresponde de manera exclusiva a los "Ayuntamientos de los Municipios, la aprobación "de sus presupuestos de egresos, con base en sus "ingresos disponibles.--- Igualmente, resulta claro "que la ley que se combate y los actos que también "se impugnan, que son o pueden llegar a ser "consecuencia de la aplicación de la misma, "transgreden lo dispuesto por el primer párrafo de "la Fracción II del artículo 115 Constitucional. "Dicho párrafo dispone lo siguiente:--- "Los "municipios estarán investidos de personalidad "jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la "ley."--- La ley que se impugna, en sus preceptos "ya mencionados, resulta flagrantemente "inconstitucional, pues entraña una humillante "absorción de la personalidad jurídica de los "Municipios y del manejo de su patrimonio, "aspectos que son expresamente reconocidos por "la citada disposición de la Ley Fundamental.--- "Además, si los Municipios están representados y "ejercen sus funciones a través de sus cabildos, la "Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de "Puebla, al asignar parte de esas funciones a los "Comités de Planeación para el Desarrollo "Municipal, de hecho desconoce la personalidad "jurídica de los Municipios e impide que éstos "manejen su patrimonio.--- 8.- Los preceptos de la "Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de "Puebla que por esta otra razón resultan "inconstitucionales, son los Artículos 19, 20, 21, 22, "35, 36, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 83, y 84. "Por ende, de manera lógica y natural todos los "actos que pretendan realizarse de dichos "artículos, también serán inconstitucionales.--- De "la lectura de las mencionadas disposiciones de la "ley que se combate se advierte, claramente, la "violación constitucional a que se refiere este "segundo concepto de invalidez, pues se limita la "facultad autónoma de los Municipios para "administrar libremente su hacienda, en función de "lo siguiente:--- a). Se obliga a los Ayuntamientos a "coordinarse y coadyuvar con las Juntas Auxiliares "para la administración, recaudación, ejecución, "aplicación y supervisión de diversos ingresos.--- "b). Se obliga a los Ayuntamientos a entregar a las "Juntas Auxiliares un determinado porcentaje de "los recursos provenientes de las participaciones y "aportaciones federales recibidas, cuyo porcentaje "se obtiene y se determina con base en datos "emitidos por un organismo descentralizado, "denominado Consejo Estatal de Población.--- c). "Se obliga a los Ayuntamientos a enterar una serie "de recursos, lo que se traduce en gastos que no "están contemplados en el Presupuesto de "Egresos, el cual, como ya se ha dicho, debe ser "aprobado exclusivamente por los Ayuntamientos "con base en sus ingresos disponibles, tal y como "lo ordena el último párrafo de la Fracción IV del "artículo 115 Constitucional.--- d).- Se otorga a los "órganos de participación social señalados en la "Ley que se combate, así como a los Comités de "Planeación para el Desarrollo Municipal y a las "Juntas Auxiliares, la facultad de intervenir en los "procesos relativos a la administración y aplicación "de los recursos que forman parte de la hacienda "Municipal, que, como se ha dicho, con base en "nuestra Carta Magna debe ser libremente "administrada por cada Municipio, con exclusión "de cualquier otro órgano o autoridad, más aun si "es intermedia.--- e). Se obliga a los Ayuntamientos "Municipales a formar parte de ese órgano o "autoridad intermedia de cada Municipio, llamado "Comité de Planeación para el Desarrollo "Municipal, al que la ley que se impugna le confiere "facultades que la Constitución otorga "exclusivamente a los Municipios para que las "ejerzan a través de sus Ayuntamientos.--- 9.- Con "motivo de la expedición de la Ley para el "Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, "contrario al Derecho, se está

afectando la libre "administración de los recursos económicos "destinados a los Municipios, que por lo mismo, le "corresponden por ser parte de su hacienda, lo "cual, insistimos, es violatorio de la Fracción IV del "artículo 115 de la Constitución Política de los "Estados Unidos Mexicanos, de los demás "preceptos de la Constitución Política del Estado "Libre y Soberano del Estado de Puebla, así como "de las otras leyes secundarias locales y federales "a que hemos hecho alusión con anterioridad en "este segundo concepto de invalidez.--- Sobre el "particular, cabe citar el siguiente precedente, "aplicable por analogía al caso concreto, por "tratarse de una ejecutoria dictada en un juicio de "amparo que se tramitó y se resolvió cuando aún "no se habían reformado las Fracciones I y II del "artículo 105 Constitucional y, por ende, ni siquiera "se había expedido su Ley Reglamentaria:--- ""MUNICIPIOS, LIBRE ADMINISTRACION DE LOS "BIENES POR LOS.- Es de estimarse "inconstitucional el acto del Gobernador de un "Estado, por el cual se incauta de los arbitrios "municipales, pues el constituyente ha querido que "los Ayuntamientos, como expresión directa de la "voluntad del pueblo, sean los administradores de "sus intereses, y constituyan la base de una "organización política y administrativa de todo "punto independiente; todo lo cual indica que no se "les puede privar de su derecho para administrar "los bienes municipales. Además cualquiera ley en "que se apoye un gobernante para substituirse en "las atribuciones administrativas de los "Ayuntamientos, es enteramente anticonstitucional "y no debe ser obedecida, por ser contraria al "artículo 115 constitucional, que sienta las bases "de la organización política de México, sobre los "principios del respeto al Municipio Libre y de la "administración de sus bienes, sin intervención de "ninguna otra autoridad. Por tanto, debe "concederse el amparo contra el acto del "Gobernador, por ser éste violatorio de garantías, y "asimismo, respecto a las autoridades ejecutoras, "pues se trata de una ejecución inminente, que "constituye una amenaza trascendental para las "instituciones y para los derechos consagrados a "favor de los municipios.--- TOMO LXI, Pág. 5202.- "Amparo en Revisión 4600/39, Sec. 2a.,. "Ayuntamiento de Alamo Temapache, Ver.- 29 de "septiembre de 1939.- Mayoría de cuatro votos.- "Quinta Epoca. Instancia: Segunda Sala. Fuente: "Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXI. "Página: 5202."--- 10.- Ahora bien, no pasa "desapercibida para los promoventes la posibilidad "de que, en un momento determinado, pudiera "pensarse que no son reales sino aparentes las "violaciones constitucionales que sustentamos en "el cuerpo de este escrito.--- Cabría la posibilidad "de que la contraparte alegue en su favor. "Efectivamente, tal hipótesis partiría del falso "supuesto de que no hay violación constitucional, "porque no se están afectando participaciones "federales, sino aportaciones, en cuyo caso se "trataría de sostener que las participaciones "constituyen el género y una de sus especies son "las aportaciones.--- En ese supuesto, deberá "concluirse que la misma carece de fundamento "lógico-jurídico, pues más que tratarse de un "auténtico silogismo, estaremos ante un sofisma. "Esto es así, en mérito de los siguientes "razonamientos:--- a). El inciso b) de la Fracción IV "del Artículo 115 Constitucional, establece que las "participaciones federales forman parte de la "Hacienda Pública Municipal, y que dichas "participaciones serán cubiertas por la Federación "a los Municipios con arreglo a las bases, montos y "plazos que anualmente determinen las legislaturas "de los Estados.--- b). Las participaciones federales "a que tal precepto constitucional hace alusión, "son las que corresponden a las Haciendas "Públicas Municipales en los ingresos federales, de "conformidad con los términos previstos en la Ley "de Coordinación Fiscal, cuyos ingresos pueden "ser los llamados ingresos fiscales tributarios, que "son los que provienen del cobro de "contribuciones. Es decir, impuestos, derechos, "contribuciones de mejoras y aportaciones de "seguridad social, o pueden ser también los "llamados ingresos fiscales no tributarios, los "cuales son distintos de los anteriores.--- c). En "uno y otro casos, las participaciones federales "que provienen de los diversos ingresos que "obtiene la Federación y que se entregan a los "Municipios para que pasen a formar parte de sus "respectivas haciendas, se convierten en recursos "que ya son propios de los Municipios y, por lo "mismo, ninguna ley puede señalar, restringir o "limitar las facultades de los Municipios para "administrar o determinar el destino que se dará a "tales recursos, sin importar que los mismos se "denominen "participaciones" o "aportaciones", "toda vez que ambos conceptos configuren e "integran la recaudación federal participable, que "se entrega y se distribuye entre los Estados, "Municipios y Distrito Federal, con base en la ya "citada Ley de Coordinación Fiscal.--- "Consecuentemente, aun cuando se pretenda "alegar, con base en un simple cambio de "denominación, que no hay violación "constitucional alguna, en el fondo resulta evidente "que las disposiciones de la Ley para el "Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, a "que nos hemos referido en este segundo concepto "de invalidez, sí son violatorias de la

Constitución "Federal, por transgredir la Fracción IV, inciso b), "de su artículo 115, siendo igualmente "inconstitucionales todos los actos que se realicen "al amparo de tales preceptos.--- En este orden de "ideas, la ley impugnada sostiene en su Artículo 4, "que tiene por objeto establecer las bases de "operación de carácter general y específico a que "habrán de sujetarse los recursos fiscales que se "ejerzan en el Estado, por lo que involucra "aportaciones y participaciones, como también "expresamente lo señala el Artículo 5 de dicho "ordenamiento.--- 11.- Por las mismas razones ya "señaladas, también resulta inconstitucional, por "ser consecuencia directa e inmediata de lo "anterior, el Artículo 96 de la ley que se impugna, "pues se otorga al Gobierno del Estado de Puebla "la facultad de suspender la entrega a los "Ayuntamientos de las ministraciones de las "Aportaciones para la Infraestructura Social y las "Aportaciones para el Fortalecimiento de los "Municipios, si no se justifica en la forma y tiempos "establecidos, el avance y aplicación de tales "recursos, o si se canalizan a fines distintos a los "aprobados por los órganos de planeación "previstos en tal ley.--- No está por demás "manifestar, para concluir este segundo concepto "de invalidez, que la ley que se combate viola "flagrantemente el multicitado inciso b) de la "Fracción IV del artículo 115 Constitucional, pues "no se limita a fijar bases, montos y plazos, según "la facultad que le está conferida, sino que hace un "ejercicio desmedido, abusivo y desleal de dicha "facultad, rompiendo claramente con el régimen de "facultades limitadas y expresas, admitido y "consagrado por el constitucionalismo moderno. Al "respecto, habría que recordar el apotegma de Don "Emilio Rabasa, tantas veces recordado por Don "Manuel Herrera y Lasso y también citado en la "cátedra por el iuspublicista Don Gustavo R. "Velasco que dice:--- "Cuando la Constitución "prohíbe a los particulares, prohibe lo mínimo; "cuando la Constitución faculta a las autoridades, "faculta lo máximo".--- En tal virtud, se reitera que "lo procedente conforme a Derecho es declarar "fundada la presente demanda y, "consecuentemente, declarar la "inconstitucionalidad de los multicitados artículos "de la Ley para el Federalismo Hacendario del "Estado de Puebla y de todos los actos que son o "resulten consecuencia de su aplicación.--- "TERCERO. HAY VIOLACION A LO DISPUESTO "POR EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 116 "CONSTITUCIONAL, POR LA DELEGACION DE "FACULTADES QUE CONFORME A LA LEY QUE SE "COMBATE, HACE EL PODER LEGISLATIVO DEL "ESTADO DE PUEBLA EN FAVOR DEL "GOBERNADOR DEL MISMO ESTADO.--- El primer "párrafo del Artículo 116 de la Constitución Política "de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente "dispone lo siguiente:--- "Artículo 116.- El poder "público de los Estados se dividirá para su "ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no "podrán reunirse dos o

más de estos poderes en "una sola persona o corporación, ni depositarse el "Legislativo en un solo individuo".--- El segundo "párrafo del mismo precepto Constitucional, "dispone que "Los Poderes de los Estados se "organizarán conforme a la Constitución de cada "uno de ellos…".--- 2.- En forma congruente con lo "anterior, encontramos que los Artículos 28 y 29 de "la Constitución Política del Estado de Puebla, a su "vez disponen lo siguiente:--- "Artículo 28.- El "Poder Público del Estado dimana del pueblo, se "instituye en beneficio del pueblo mismo y para su "ejercicio se divide en Legislativo, Ejecutivo y "Judicial.--- Artículo 29.- Cada uno de los Poderes "Públicos del Estado se organizará en la forma que "establece esta Constitución y no podrá reunirse "en una sola persona, o corporación, el ejercicio de "dos o más de ellos."--- 3.- La ley que se combate, "viola de manera manifiesta los preceptos antes "mencionados de la Constitución Política de los "Estados Unidos Mexicanos, como también los de "la Constitución Política del Estado de Puebla, al "delegar el Poder Legislativo de Puebla sus "facultades en una sola persona que es el "Gobernador del mismo Estado, al autorizarlo a "expedir el "Manual Unico de Operación para el "Federalismo Hacendario en el Estado de Puebla". "Con ello el Poder Legislativo fue depositado, para "los efectos del caso, en la persona del "Gobernador.--- 4.- En tal contexto, la Ley para el "Federalismo Hacendario del Estado de Puebla "pretende la creación y funcionamiento de órganos "y autoridades intermedias entre los Gobiernos "Municipales y el Estatal y, para su integración, "ordena en el Artículo 14, fracción III y en el párrafo "final del mismo precepto, la elección de supuestos ""representantes comunitarios de localidades, "barrios, colonias populares y de los comités de "obra del Municipio"…. A través de supuestas ""asambleas democráticas", que deberán "celebrarse "de conformidad con el Manual Unico "de Operación para el Federalismo Hacendario en "el Estado de Puebla que para el efecto expida el "Ejecutivo del Estado".--- Lo anterior implica que "los procesos electorales para la integración de los "órganos de autoridad y gobierno, por lo que "concierne a los representantes comunitarios, "quedarán sujetos a una normatividad que, en "función de legislador, emita el Ejecutivo Estatal, "en flagrante violación

del Artículo 116 de nuestra "Carta Magna.--- CUARTO.- HAY VIOLACION A LO "DISPUESTO POR EL ARTICULO 133 DE LA "CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS "UNIDOS MEXICANOS, EN RELACION CON EL "ARTICULO 120 DE LA MISMA CARTA MAGNA, "POR LA NO APLICACION DE LA LEY DE "COORDINACION FISCAL CON MOTIVO DE LA "EXPEDICION DE LA LEY PARA EL FEDERALISMO "HACENDARIO DEL ESTADO DE PUEBLA.--- El "artículo 120 de la Constitución Política de los "Estados Unidos Mexicanos obliga a los "Gobernadores de los Estados a publicar y hacer "cumplir las leyes federales; es decir, los obliga a "ejecutar las leyes federales.--- Se entiende que "sólo ejecutan leyes federales de acuerdo con la "interpretación que sobre dicho precepto "constitucional ha dado esa H. Suprema Corte de "Justicia de la Nación, tratándose de leyes marco "que por disposición constitucional tiene una "jerarquía superior a la de las leyes locales, como "son las leyes coincidentes de condicionamiento "federal superior al local que regulan las materias "de asentamientos humanos, salud, educación, "protección al ambiente y de preservación y "restauración del equilibrio ecológico.--- En tales "casos, se entiende que las leyes federales son "superiores a las leyes locales como una "excepción al principio de distribución de "competencias entre las autoridades locales y las "autoridades federales que consagra el Artículo "124 Constitucional.--- Lo mismo ocurre en el caso "particular por lo que se refiere a la materia fiscal "relativa a aquellos supuestos específicos a que "alude el último párrafo de la Fracción XXIX-a del "Artículo 73 Constitucional, en que la Federación "participa a las Entidades Federativas y éstas a su "vez participan a los Municipios, al igual que en "aquellos casos en que existe convención fiscal "entre la Federación y las Entidades Federativas, "conforme a los cuales las Entidades Federativas "participan a los Municipios de las participaciones "federales, incluyendo naturalmente las "disposiciones del nuevo Capítulo V de la Ley de "Coordinación Fiscal, que se refiere a "aportaciones.--- Dicha Ley de Coordinación Fiscal, "que también es Federal, obliga a los Estados a "cumplirla y a acatarla, de donde se desprende que "tiene una jerarquía superior a la de las leyes "locales, de conformidad con el principio de "supremacía de la Constitución que establece el "Artículo 133 de la Constitución Política de los "Estados Unidos Mexicanos.--- Por tanto, la "facultad que tiene los Estados a través de sus "respectivos órganos legislativos, de fijar las "bases, montos y plazos de la distribución de "participaciones y aportaciones, innegablemente "puede ser ejercitada, siempre y cuando el ejercicio "de dicha facultad quede sujeta y se condicione a "lo que la Ley de Coordinación Fiscal establezca al "respecto.--- Consecuentemente, conforme a "Derecho, procede declarar fundada la presente "demanda y declarar la inconstitucionalidad de "todos los preceptos de la Ley para el Federalismo "Hacendario del Estado de Puebla a que ya nos "hemos referido, así como la inconstitucionalidad "de todos los actos que son o vayan a ser "consecuencia de su aplicación".

CUARTO.- Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son el 115, fracciones I, II y IV, inciso b), 116, 120 y 133.

QUINTO.- Por acuerdo de fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el Presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Juventino V. Castro y Castro ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, y se designó como instructor al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Por auto de veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho, el Ministro instructor tuvo a los promoventes con la personalidad que ostentan y por admitida la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a las autoridades demandadas para la formulación de su respectiva contestación de demanda; correr traslado al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera; y tuvo como pruebas de la actora las documentales que adjuntó a su demanda.

SEXTO.- El Gobernador, Secretario de Gobernación y Procurador General de Justicia, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla y el Presidente y Secretario ambos de la Gran Comisión, así como Presidente y Secretario de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla, todos ellos en representación de este último, al formular su contestación de demanda en síntesis manifestaron lo siguiente:

1) Que ni los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUNES), ni las Juntas Auxiliares fueron creados por la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

2) Que los COMPLADEMUNES tienen su fundamento en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o. y 20 de la Ley de Planeación; 107 y 108 de la Constitución Política del Estado de Puebla; y 1o., 13, 14 y 17 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, y no en la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

3) Que los Comités de Planeación se traducen en los medios de los que se vale el Estado y los Municipios para cumplir con los mandatos de los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal.

4) Que la existencia de las Juntas Auxiliares deriva de lo dispuesto por los artículos 106 de la Constitución Política del Estado de Puebla, y 16, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, y no de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

5) Que los COPLADEMUNES y las Juntas Auxiliares no constituyen autoridades intermedias entre los gobiernos municipales y el gobierno estatal, toda vez que tanto los referidos Comités de Planeación como las Juntas Auxiliares, forman parte de la estructura del gobierno municipal.

6) Que los COPLADEMUNES son instancias de planeación que tienden a promover la participación social en el ámbito municipal, para la toma de decisiones en la orientación, definición y jerarquización de los programas, proyectos y obras públicos que se realizan a nivel municipal, sin que tengan autoridad sobre el Ayuntamiento sino por el contrario, forman parte de la estructura administrativa de los Municipios.

7) Que los COPLADEMUNES únicamente se desenvuelven en el ámbito municipal. Ello se corrobora de los términos en los que la Ley para el Federalismo Hacendario, en su artículo 14, prevé su integración. De dicho precepto legal se advierte que los COPLADEMUNES se integrarán por 1).- El Ayuntamiento del municipio; 2).- El total de Juntas Auxiliares de cada municipio; 3).- Los representantes comunitarios de localidades, barrios, colonias populares y de los comités de obras del municipio; y 4).- Los representantes del órgano de planeación estatal.

8) Que el artículo 14 de la Ley para el Federalismo Hacendario, es congruente con el artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, ya que el citado artículo 16 señala que el municipio para su administración interior, se dividirá en pueblos, rancherías, barrios y secciones, por lo que, los COPLADEMUNES se integran entre todas aquellas comunidades en que se divide la administración interior del municipio, de tal manera que no puede ni remotamente considerarse que constituyen organismos o autoridades intermedios. Lo único que su integración revela, es que pretende recoger las aspiraciones de los diversos sectores de la población, con el objeto de que los proyectos u obras que se realicen beneficien a todas las comunidades en forma equitativa.

9) Que los COPLADEMUNES no son autoridades pues no reúnen las características que les son propias, al carecer de la capacidad de ordenar y hacerse obedecer.

10) Que los COPLADEMUNES no actúan de manera independiente, unilateral y con decisión, ya que quienes de manera directa toman los acuerdos o decisiones, son aquellos grupos sociales que los integran. En esas circunstancias, no se puede establecer que los COPLADEMUNES sean autoridades intermedias, puesto que su actuación no interrumpe u obstaculiza la comunicación directa entre el Gobierno Estatal y el Municipio, máxime que forman parte de la estructura municipal.

11) Que conforme a la Ley Orgánica Municipal, los Municipios para su administración interior se dividen en pueblos, rancherías, barrios y secciones, y los órganos encargados de administrar a los pueblos se denominan Juntas Auxiliares, lo que también se desprende de la Ley Orgánica Municipal.

12) Que a lo largo de la historia de México se han reconocido jurídicamente a los gobiernos de los pueblos, como órganos que sin ser ajenos a la personalidad jurídica del Ayuntamiento, propician que ésta pueda cumplir el imperativo de administrar en su territorio y prestar servicios.

13) Que las Juntas Auxiliares que existían como tales, en la legislación poblana desde el siglo diecinueve, subsistieron al paso de mil novecientos diecisiete, consignándose, atento al espíritu constitucional, que en los "pueblos" que no alcanzan la categoría de municipio gobernará una junta auxiliar, caracterizada como una forma de organización de la administración pública municipal que participa de la personalidad jurídica de ese gobierno Municipal, y en la que se depositan determinadas competencias para la prestación de servicios en el ámbito de su circunscripción territorial y en la jurisdicción de los Ayuntamientos, lo que propicia el descongestionamiento de la administración central, la que aprueba sus decisiones y de la que reciben recursos.

14) Que del análisis de las Constituciones de Puebla y sus Leyes Orgánicas Municipales podemos afirmar que las Juntas Auxiliares han definido la competencia que ejercen para la atención específica de los servicios públicos, a partir de su integración en la administración pública municipal.

15) Que las Juntas Auxiliares son órganos auxiliares, inmersos en la administración pública municipal, conforme a las funciones que realizan, como son las siguientes:

-Las juntas serán designadas de acuerdo con las bases que establezca la convocatoria que expida el Ayuntamiento y con la intervención del Presidente Municipal.

-Los miembros electos de las Juntas Auxiliares otorgarán la protesta de Ley ante el Presidente Municipal.

-Para el ejercicio de las funciones que corresponden a las Juntas Auxiliares, éstas deberán, entre otras cuestiones: 1.- Solicitar al respectivo Ayuntamiento los recursos que deberán aplicarse a la satisfacción de los gastos públicos del pueblo, 2.- Remitir al Ayuntamiento, en forma anual, los presupuestos de gastos.

-Los acuerdos de las Juntas Auxiliares serán revisados y aprobados por el Ayuntamiento respectivo.

16) Que no puede considerarse que las Juntas Auxiliares sean organismos intermedios entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Estatal, ni que tengan autoridad sobre el Ayuntamiento, ya que constituyen órganos de la administración pública municipal, dentro de la vertiente de la desconcentración municipal.

17) Que los únicos recursos que las Juntas Auxiliares ejercen, son de índole municipal, por tratarse de órganos de la administración pública municipal.

18) Que conforme al artículo 44 de la Ley para el Federalismo Hacendario para el Estado de Puebla, las Juntas Auxiliares deberán aplicar los recursos que en términos de dicha ley se les distribuyen, en la ejecución de obras que hayan sido aprobadas en los órganos de planeación de los municipios, es decir, el ejercicio de los recursos que se les distribuyen está supeditado a las determinaciones adoptadas por los COPLADEMUNES, mismos que se integran por los Ayuntamientos y por todos los grupos sociales en los que se encuentra dividida la administración interior de los Municipios. Así, una vez que la instancia de planeación municipal, esto es, el COPLADEMUN jerarquiza las obras que se deben ejecutar, en auxilio del desempeño del Ayuntamiento y en el marco de la administración pública municipal a la que pertenecen, las Juntas Auxiliares aplicarán los recursos, informando al Ayuntamiento y al Congreso del Estado de su ejercicio, debiendo observar los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal previstos en la Ley.

19) A los COPLADEMUNES no se les dota de atribuciones para administrar y determinar el destino de los recursos municipales. Ello se advierte de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, que establece que los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, son instancias de participación social encargadas de planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar para atender las demandas de la población, en congruencia con los planes nacional y estatal de desarrollo. Atento a lo anterior, no puede considerarse que los citados Comités cuenten con facultades para administrar y determinar el destino de recursos. Sobre este particular, cabe mencionar que los recursos que integran los fondos de aportaciones para la infraestructura social municipal y de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios se encuentra determinada desde los artículos 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, disposiciones que son retomadas en los artículos 73 y 79 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

20) Que para establecer que los COPLADEMUNES no administran recursos, basta dar una lectura a los artículos 69, 73, 80 y 81 de la Ley para el Federalismo Hacendario, de donde se advierte que los Ayuntamientos son quienes reciben los recursos y ejecutan las obras y acciones a que se encuentran destinados los mismos.

21) Que atendiendo al texto de los artículos 40, 41, 115 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 103 y 111 de la Constitución Política del Estado de Puebla, se puede concluir lo siguiente:

-Que los ingresos municipales serán sólo los aprobados por el Congreso del Estado de Puebla.

-Que corresponde a la legislación del Estado de Puebla, determinar el marco en que los municipios manejarán su patrimonio.

-Que además de los rendimientos y contribuciones, los municipios contarán con otros ingresos que la legislatura del Estado establezca. Entre ellos, se enumera expresamente a las participaciones federal.

-Que las participaciones federales están sometidas a las bases, montos y plazos que fije el Congreso del Estado de Puebla.

-Que, establecida por la Federación una fuente de ingresos municipales, a título de participaciones federales o de aportaciones federales, no podrá aplicarse como ingreso municipal sin la intervención de la legislatura del Estado de Puebla.

-Que la relación financiera entre la Federación y los Municipios únicamente se establece a través de las autoridades estatales. Sobre este particular, cabe señalar que la Federación nunca entablará una relación directa con los municipios, ya que el sistema federal se traduce en la relación que establece la Federación con los Estados y éstos con sus municipios, según se advierte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular de lo dispuesto por su artículo 116, fracción VII. A este respecto, Teresita Rendón en su obra intitulada "Derecho Municipal", expone que las participaciones federales que corresponden a los municipios de acuerdo al artículo 115, deben cubrirse a los municipios con sujeción a lo previsto en la ley local, en cuanto a bases, montos y plazos, sin que ello deba interpretarse como que las ministraciones se efectúen directamente, y al efecto categóricamente manifiesta que "…Una ministración directa federación-municipios repugnaría el espíritu del pacto federal, pues la relación debe ser siempre a través de los Estados…".

-Que el manejo de la hacienda municipal queda sujeto a las reglas de planeación que establezcan los ordenamientos jurídicos correspondientes.

-Que puede establecerse que la libre administración de la hacienda municipal no puede entenderse como una libertad absoluta e irrestricta, sino dentro del marco constitucional federal y estatal, y en congruencia con las facultades que ambas normas constitucionales otorgan al Congreso del Estado de Puebla.

22) Que la controversia constitucional que se plantea debe declararse improcedente, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria, en relación con lo que dispone el artículo 1o. de dicho ordenamiento jurídico, ya que, no se actualiza uno de los supuestos de procedencia de las

controversias constitucionales, al no existir un planteamiento expreso de invasión de esferas competenciales.

23) Que por lo que hace a los argumentos que plantean los actores que se refieren a la posible contradicción entre la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla y algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son improcedentes al ser planteados en una controversia constitucional, en atención a que dicha cuestión es materia de la acción de inconstitucionalidad prevista por el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los únicos legitimados para promoverla serían el Procurador General de la República y el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Congreso del Estado de Puebla.

24) Que por lo que se refiere a la posible contradicción entre la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla y los ordenamientos jurídicos secundarios a que se refieren los actores, esto es, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Puebla, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho y la Ley de Coordinación Fiscal, son improcedentes en el ejercicio de una controversia constitucional, ya que este tipo de acciones sólo proceden en aquellos casos en los que se plantean violaciones a disposiciones constitucionales del orden federal.

25) Que el diez de abril de mil novecientos noventa y siete, el titular del Ejecutivo Federal y el titular del Ejecutivo del Estado de Puebla, celebraron el Convenio de Desarrollo Social mil novecientos noventa y siete, por virtud del cual la Federación asignó recursos al Estado de Puebla hasta por $508'150,500.00 (QUINIENTOS OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), para el Fondo de Desarrollo Social Municipal, y lo relativo a la constitución de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, fue acatado por los doce Municipios que ahora promueven la presente controversia constitucional, en la que incongruentemente plantean, entre otras cuestiones, que por virtud de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, se crean los referidos comités.

26) Que del análisis de la Constitución de Puebla y su Ley Orgánica Municipal, resulta claro que las Juntas Auxiliares han definido la competencia que ejercen para la atención específica de los servicios públicos, a partir de su integración en la administración pública municipal.

27) Que la función de los COPLADEMUNES se limita a planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar, en congruencia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.

28) Que no puede considerarse que las facultades de COPLADEMUNES constituyen poderes unilaterales de decisión y de ejecución que los coloque por encima de los Gobiernos Municipales, por lo siguiente:

-Dichos comités se desenvuelven en el ámbito municipal; quienes los integran, son: el Ayuntamiento, es decir, el órgano de administración del Municipio, las Juntas Auxiliares, que como ya se ha expuesto constituyen órganos desconcentrados de la propia administración pública municipal, los representantes de las comunidades en que se divide el municipio para su administración, y los representantes del órgano de planeación estatal y quienes los encabezan son los Ayuntamientos.

-Los COPLADEMUNES únicamente constituyen instancias que promueven la participación social en la toma de decisiones, pero quienes toman las decisiones en el seno de los COPLADEMUNES, y quienes ejecutan las mismas, son quienes los integran.

-Los COPLADEMUNES tienen como finalidad darle un mayor sentido de equidad, eficacia y transparencia al gasto, al recoger todas las demandas y aspiraciones de los grupos sociales que integran a los Municipios.

29) Que lo previsto por el artículo 97 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, que establece que en el caso de que un Ayuntamiento no entregue participaciones a las Juntas Auxiliares, el Estado podrá entregarlas directamente, no resulta "inconstitucional", y se justifica por el hecho de que las Juntas Auxiliares requieren de la entrega inmediata de recursos, con el objeto de estar en posibilidad de prestar los servicios y ejecutar las acciones que les corresponden en el ámbito de su competencia.

30) Que contrariamente a lo que sostienen los Municipios actores, el artículo 4o., fracción VII, de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, de ninguna manera establece la obligación a cargo de los Municipios, de integrarse a los órganos hacendarios a que se refiere dicho ordenamiento jurídico. Lo que el precepto legal en cita establece, es que uno de los objetos de la Ley impugnada, es la constitución de los órganos en materia hacendaria para el cumplimiento de los objetivos de la misma.

31) Que es incorrecta la aseveración de los Municipios actores, en el sentido de que los COPLADEMUNES sean órganos hacendarios, sobre este particular se reitera, dichos Comités son instancias de planeación. Los únicos órganos hacendarios que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla prevé en su artículo 25, son los siguientes:

-La Reunión de Funcionarios Hacendarios del Estado de Puebla;

-La Comisión Permanente de Funcionarios Hacendarios del Estado de Puebla;

-La Comisión de Capacitación y Asesoría Hacendaria del Estado de Puebla; y

-Las demás instancias que se decida crear para fortalecer la Coordinación Hacendaria.

32) Que con la Ley para el Federalismo Hacendario, no se obliga a los Municipios a participar en los COPLADEMUNES. A ese respecto, también se reitera, que la obligación de los Ayuntamiento de integrarse a las instancias de planeación, emana del concepto de planeación democrática, sancionado en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lejos de imponer una carga o una limitación a las atribuciones municipales, permite hacerlas compatibles con el imperativo de participación social al que se refirió el Senado de la República, al considerar en la reforma al artículo 115 de la Carta Magna, de mil novecientos ochenta y tres, que el manejo libre de la hacienda municipal queda sujeto, en un ambiente de plena libertad, a las reglas de planeación, que será democrática y participativa.

33) Que el artículo 115, fracción IV, inciso b), constitucional, que se invoca como violado, no se refiere a aportaciones, sino a las participaciones federales que corresponden a los Estados y Municipios, en términos de lo dispuesto tanto por dicho mandato constitucional como por los artículos 1o. y 10 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, y 7o. del Código Fiscal del Estado de Puebla.

34) Que las participaciones corresponden a una forma de compensación que se entrega a los Estados por limitar su potestad impositiva, mediante su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

35) Que las participaciones que recibe el Estado de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se integran en los siguientes Fondos:

-General de Participaciones.

-Fomento Municipal.

-Participaciones Directas a los Estados.

-Reserva de Compensación.

-Puentes de Peaje.

-Rendimientos de Contribuciones Participables a Municipios.

36) Que las aportaciones a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, éstas participan de una naturaleza jurídica diversa de las participaciones. En efecto, las aportaciones son recursos complementarios a aquellos que corresponden a las entidades federativas y a los Municipios como participación en la recaudación federal, por virtud de los cuales la Federación apoya a los Estados y Municipios, para la satisfacción de las necesidades básicas de la población, a saber: la educación básica, la atención de la salud y el desarrollo de la infraestructura básica Municipal.

37) Que siendo que las aportaciones no pueden identificarse con las participaciones, es evidente que la disposición constitucional cuya violación invoca a los Municipios actores, esto es, el artículo 115, fracción IV, inciso b), que se refiere a participaciones federales, no es aplicable para el caso de aportaciones. La regulación de las aportaciones, corresponde al Poder Legislativo del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 41, 115, fracción IV y 124 de la Carta Magna, y demás relativos y aplicables de la Legislación Estatal.

38) Que por lo que se refiere a aportaciones, el destino de éstas ya está previsto en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, en sus artículos 33 y 37.

39) Que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, es coincidente con la Ley de Coordinación Fiscal, en cuanto al destino de los fondos de aportaciones. Ello se advierte de los artículos 69, 73, 79 y 81 de la Ley cuya invalidez se reclama, disposiciones éstas que se refieren al destino de los Fondos de Aportaciones para el Infraestructura Social y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

40) Que quien administra los fondos de aportaciones son los Ayuntamientos, la participación que los COPLADEMUNES tienen con relación a dichos fondos, es la que se ha venido reiterando, es decir, que dichos comités constituyen las instancias de participación social a nivel municipal, cuyas funciones se limitan a planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar con dichos recursos. Por lo que hace a las Juntas Auxiliares, y en lo relativo a los fondos de aportaciones, éstas se limitan a participar en los COPLADEMUNES, por tratarse de órganos de la administración pública municipal, representativos de habitantes de los pueblos.

41) Que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla prevé la entrega de las participaciones a los órganos encargados de la administración pública municipal, es decir, a los Ayuntamientos y a los órganos auxiliares de éstos, como lo son las Juntas Auxiliares. En el primer caso, esto es, por lo que se refiere a las participaciones que se entregan al Ayuntamiento, el ordenamiento jurídico invocado no establece destino alguno, ni siquiera prevé que en su ejercicio intervengan los Comités de Planeación. En el segundo caso, los artículos 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley cuya invalidez se reclama, señalan que:

-Los recursos a que se alude, son asignados por el Ayuntamiento.

-Dichos recursos deberán destinarse a las funciones que corresponde realizar a las Juntas Auxiliares, así como a la ejecución de obras públicas, es decir el destino de las participaciones en comento, no queda el arbitrio de autoridad alguna, sino que es determinado por la Ley.

-Los recursos en comento, cuando se destinen a la ejecución de obra, se requiere que éstas hayan sido aprobadas en los órganos de planeación municipales. Es decir, el ejercicio de los recursos que se entregan a

las Juntas Auxiliares, está supeditado a las determinaciones adoptadas por los COPLADEMUNES, como se ha reiterado, se integran por los Ayuntamientos y por todos los grupos sociales en los que se encuentra dividida la administración interior de los municipios. Una vez que la instancia de planeación jerarquiza las obras que se deben ejecutar, en auxilio de las funciones del Ayuntamiento y en el marco de la administración pública municipal, las Juntas auxiliares aplicarán los recursos informando al Ayuntamiento y al Congreso del Estado de su ejercicio, debiendo observar los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal previstos en la Ley.

42) Que en lo relativo a la administración de participaciones, nuestra parte manifiesta que por las funciones que a los COPLADEMUNES corresponde realizar, es evidente que éstos no administran recurso alguno. Por lo que se refiere a las Juntas Auxiliares, es obvio que éstas administran los recursos que han quedado precisados, sin embargo con los lineamientos establecidos. Ahora bien, el hecho de que administren dichos recursos no vulnera la autonomía financiera del municipio, máxime que dichos órganos forman parte de la propia administración pública.

43) Que en el ámbito municipal los municipios pueden aprobar sus propios presupuestos de gasto, de tal suerte que al realizar su plan de actividades y su programa de acción para un determinado ejercicio fiscal, o la cuantificación precisa de los costos de dicho programa, compete única y exclusivamente a los Ayuntamientos la revisión de los mismos; sin embargo, dicho presupuesto de egresos debe aprobarse con base en los ingresos disponibles, según prevé el texto constitucional, y dichos ingresos, por disposición expresa del artículo 115, fracción IV, último párrafo, Constitucional corresponde fijarlos a las legislaturas locales; actividad que realiza el Congreso en el momento de emitir la Ley de Ingresos de los Municipios.

44) Que por disposición legal, las Juntas Auxiliares tienen como propósito auxiliar al Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones, para lo cual reciben recursos del propio erario municipal. En esas circunstancias, y contrariamente a lo que manifiestan los municipios actores, en ninguna parte de la Ley que se combate, se obliga a un Ayuntamiento a coordinarse con órganos integrantes de la propia administración pública municipal, en forma ajena al orden constitucional, que prevé que la administración debe ser programada y coordinada. A la anterior conclusión se llega de la simple lectura de los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 y 108 de la Constitución Política Local, cuyos principios puntualmente se incorporan a la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

45) Que para el ejercicio de las funciones que competen a las Juntas Auxiliares, éstas deben recibir recursos del propio Ayuntamiento, lo que es coincidente con el espíritu de la fracción I del artículo 72 de la Ley Orgánica Municipal, que dispone que las Juntas Auxiliares deben solicitar al respectivo Ayuntamiento los recursos que deben aplicarse a la satisfacción de los gastos públicos del pueblo. En esos términos, no se puede considerar que la entrega de recursos del Municipio a órganos desconcentrados de éste, es decir, a los órganos encargados de su administración pública, sea ilegal o violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

46) Que los únicos recursos que en términos de la Ley que se impugna, reciben las Juntas Auxiliares, son participaciones, y no aportaciones, como indebidamente lo asientan los Municipios actores.

47) Que el hecho de que el artículo 43 de la Ley para el Federalismo Hacendario establezca que la distribución de recursos a las Juntas Auxiliares, se efectúe de acuerdo con los datos que para tal efecto emita el Consejo Estatal de Planeación, únicamente revela que la disposición en comento es lógica. Esto es así, en razón de que si los recursos se distribuirán en proporción directa al número de habitantes, no hay lugar a duda de que se requiera la información relativa a los habitantes de cada Junta Auxiliar, información ésta que a quien corresponde elaborar es precisamente al Consejo Estatal de Población.

48) Que si la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla prevé las bases y montos que el Municipio destinará a sus órganos auxiliares, ello no resulta violatorio de la Constitución, pues se limita a establecer la entrega de recursos al propio Municipio a la vez que consigna su destino, mismo que está preestablecido, desde la Ley de Coordinación Fiscal.

49) Que no es posible que los Municipios actores consignaran los recursos derivados de los fondos de aportaciones para la infraestructura social municipal y de fortalecimiento municipal en sus presupuestos, ni tampoco los fondos de participaciones, pues la Ley para el Federalismo Hacendario que establece los mecanismos para su cálculo y distribución entró en vigor una vez que se había iniciado el ejercicio fiscal en curso, es decir, el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho.

50) Que en el momento en que el Estado recibe aportaciones de la Federación, y éstas se integran a su hacienda pública, inicia su responsabilidad y facultad para legislar lo relativo a las bases para su distribución y control hacia los Municipios, sin que exista limitación para ello en la Constitución Federal.

51) Que la Legislatura Estatal, en ejercicio de su facultad constitucional para legislar todo lo relativo a su régimen interno, podrá establecer los mecanismos que garanticen que los recursos que le son transferidos por la Federación se apliquen a los fines previstos por la ley, y a su vez que se cumpla con los fines consignados en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, que dan origen a la participación social en la planeación del desarrollo.

52) Que el hecho de que la Ley que se reclama establezca sanciones, que se hacen consistir en la retención de aportaciones para el caso de que no se justifique el avance y su aplicación, o si se canalizan a fines diversos a aquellos que la Ley prevé, se encuentra ajustado a derecho.

53) Que por lo que hace al argumento de que la Ley impugnada pretende la creación y funcionamiento de órganos y autoridades intermedias entre los Gobiernos Municipales y Estatales, ya que para su integración el artículo 14, fracción III y párrafo final de dicho precepto, ordenan la elección de supuestos representantes comunitarios de localidades, barrios, colonias populares y de los comités de obra del Municipio, a través de asambleas democráticas, que deberán celebrarse de conformidad con el Manual Unico de Operación para el Federalismo Hacendario en el Estado de Puebla que para el efecto expida el Ejecutivo del Estado, lo que implica que los procesos para la integración de los órganos de autoridad y gobierno, por lo que concierne a los representantes comunitarios, quedarán sujetos a una normatividad que, en funciones de legislar, emite el Ejecutivo Estatal, en flagrante violación del artículo 116 de la Carta Magna. Debe precisarse que no se trata de procesos electorales, sino de un manual para la elección de los representantes comunitarios, que según se expresó no constituyen autoridades intermedias, sino instancias de planeación acorde al artículo 26 constitucional. Tampoco se arrogaron al Ejecutivo del Estado facultades ajenas a su función ya que en ningún momento pasa inadvertido el principio de la separación de poderes y de la división de facultades que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, pues si bien es cierto que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 14, faculta al Ejecutivo del Estado a expedir el "Manual de Operaciones para el "Federalismo Hacendario en el Estado", esto obedece a las facultades reglamentarias que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en su artículo 79, fracción III, concede al Ejecutivo de Estado.

54) Que por lo que hace a la falta de coincidencia entre la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, y la Ley de Coordinación Fiscal, en cuanto a sus mecanismos de distribución, la controversia constitucional es improcedente por no ser el medio idóneo para confrontar una ley federal con una ley estatal.

55) Que la Ley para el Federalismo Hacendario establece, para la distribución de los fondos de participaciones que el Estado está facultado para legislar, criterios similares a los establecidos en los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, con lo que la distribución de éstos es plenamente consistente con lo dispuesto en la misma Ley de Coordinación Fiscal.

56) Que la Ley de Coordinación Fiscal establece los parámetros para la determinación y distribución del monto de aportaciones y participaciones asignadas a cada entidad federativa. La regulación de dichos recursos es de competencia federal, hasta en tanto los recursos presupuestados no ingresen a las haciendas estatales.

57) Que una vez que los aludidos recursos ingresan a la Hacienda Pública de un Estado, el derecho que le asiste a partir del artículo 41 Constitucional, es el de regular todo lo relativo a su régimen interno, entre esto se comprende la materia hacendaria. Sobre este particular, cabe destacar que a este respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contiene reserva alguna de competencia para la Federación, salvo los casos en que a ésta le asiste la facultad impositiva sobre determinadas hipótesis de causación, que no es el caso que nos ocupa.

58) Que tanto la Ley de Coordinación Fiscal como la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, están emitidas conforme a la competencia que corresponde a cada nivel de gobierno.

59) Que dentro de la circunscripción territorial de los Municipios de Altepexi y de Nealtican, no existen Juntas Auxiliares. A pesar de ello, éstos formulan conceptos de invalidez relacionados con dichos órganos de la administración pública municipal, por lo que dichos conceptos deben declararse inoperantes.

SEPTIMO.- Por oficio número PGR 249/98, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce de mayo de mil novecientos noventa y ocho, el Procurador General de la República, en síntesis, manifestó lo siguiente:

1) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, en atención a lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de su Ley Reglamentaria, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que se debe concluir que la admisión de la demanda por parte de este Tribunal es procedente, toda vez que se refiere a un conflicto entre un Estado y sus Municipios, actualizándose así la hipótesis contenida en el artículo constitucional citado, ya que los actores demandan la expedición de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, de la cual consideran que diversos artículos conculcan disposiciones de nuestra Constitución Federal.

2) Que el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, la Ley para el Federalismo Hacendario para esa entidad, entrando en vigor el mismo día de su publicación.

Los demandantes interponen la controversia constitucional en contra de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, el diecinueve de febrero del año en curso, misma que se presentó el

veinticinco del mismo mes y año ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal. El plazo para interponer la demanda de controversia constitucional, tratándose de normas generales, de acuerdo con la fracción II del numeral 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, es de treinta días, contados a partir del día siguiente de la fecha de su publicación, por lo que dicho término vencía el doce de marzo del año en curso, por lo tanto, el escrito de demanda fue presentado dentro del plazo establecido para ello.

3) Que en los artículos 41, fracción III, y 44, fracciones I y III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, se encuentra el fundamento legal de la legitimación de los promoventes, ya que toda vez que en Sesiones Solemnes los Cabildos de los Ayuntamientos confieren facultades expresas a los Presidentes Municipales para que promuevan la presente controversia, por otra parte también se infiere que son facultades propias de los síndicos municipales la representación judicial del Ayuntamiento, consecuentemente se encuentran legitimados para promover la presente controversia constitucional.

4) Que el Gobernador, Secretario General de Gobierno y el Procurador General de Justicia todos del Estado de Puebla, de conformidad con la Constitución Local, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y el artículo 11 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, cuentan con legitimación procesal para comparecer en la presente controversia constitucional.

5) Que por lo que hace al Presidente y Secretario de la Gran Comisión del Congreso y Presidente y Secretario de la Comisión Permanente del Congreso, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado no señala a persona alguna como representante de ese Poder, por lo que en todo caso se debe presumir la representación en atención a lo dispuesto en la parte final del primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional.

6) Que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, que hacen valer las autoridades demandadas en su contestación de demanda, en virtud de tratarse de un conflicto entre un Estado y sus Municipios sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, atento a lo previsto por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal.

7) Que de las atribuciones concedidas a los Comités para el Desarrollo Municipal y al Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria, se puede concluir que no constituyen instancias intermedias de autoridad, ya que los mismos no interfieren en las políticas administrativas, económicas o de gobierno municipales, toda vez que no están investidos con facultades de ejecución ni de mando, sino que tienen como objetivo, el primero de ellos, la realización de una serie de planes tendientes al fortalecimiento del Municipio y, el segundo, armonizar y coordinar el sistema hacendario estatal y municipal.

8) Que los organismos contemplados en la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, actúan a instancia de los propios Municipios y no de manera unilateral, de modo que sus actuaciones se traduzcan en sumisión de éstos, que anulen o diluyan sus derechos o atribuciones, ya que con el apoyo de tales organismos o sin ellos, los Municipios podrán seguir llevando a cabo sus fines de acuerdo con su ámbito competencial y en uso de las atribuciones tuteladas por el artículo 115 constitucional.

9) Que por lo que hace a las Juntas Auxiliares, no constituyen autoridades intermedias ya que dependen del propio Ayuntamiento, es decir, forman parte del mismo, siendo que el desarrollo de sus funciones como su propio nombre lo indica es el de auxiliar a los Municipios en el desarrollo de sus actividades, en aquellas poblaciones que no sean cabecera municipal de acuerdo a lo establecido en la legislación local.

10) Que del análisis realizado a las atribuciones de los órganos que contempla la Ley para el Federalismo Hacendario y que la demandante afirma son autoridades intermedias, no se desprende que estén investidos con facultades de ejecución o mando, ni que invadan las facultades propias de los Municipios, sino que la finalidad de los órganos que supuestamente conculcan tal dispositivo constitucional, es la de que los Ayuntamientos tengan la suficiente capacidad para prestar un mejor servicio a su comunidad, a través de mecanismos de apoyo, fomento y coordinación, independientemente al hecho de que estos entes actúan a instancia de los propios Municipios y no de manera unilateral.

11) Que respecto a la afirmación de la actora, en cuanto a que la participación social, tanto en los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, como en las consultas que se lleguen a realizar con motivo de la formulación de programas y proyectos públicos, configuran una autoridad intermedia entre el Municipio y el Estado, no es cierta tal aseveración, ya que no tienen actuación independiente, unilateral o con decisión que implique obstaculización en la comunicación entre el gobierno del Estado y el Municipio, sino todo lo contrario, es un mecanismo que permite conocer, de manera directa, aquellas necesidades que resulta apremiante solventar en las comunidades que conforman los Municipios.

12) Que la participación social en la toma de decisiones respecto de la orientación, definición y jerarquización de los programas a que se refiere la Ley combatida, no violenta la fracción I del artículo 115 constitucional que aduce la demandante, toda vez que la participación de los diversos sectores sociales no es mediante un ente jurídico que esté investido de personalidad alguna, menos aún de facultades de ejecución respecto de las consultas que tengan lugar.

13) Que el artículo 26 de la Constitución Federal prevé la participación de los diversos sectores sociales para su incorporación en los planes y programas de desarrollo; al respecto, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla señala como obligación del Ejecutivo Estatal llevar a cabo la planeación del desarrollo, fomentando la participación de los sectores económico, social y privado de la entidad, de lo que se desprende que la Ley que la actora pretende sea declarada como inconstitucional, da cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Planeación y se ajusta a ordenamientos de mayor jerarquía.

14) Que de la lectura integral de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, no se observa que le impida la libre administración de la hacienda municipal.

15) Que los artículos 19, 20, 21, 22, 35, 36, 47 y 48 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla que impugna la parte actora, no conculcan lo dispuesto en la fracción II y en el inciso b) de la fracción IV del artículo 115 constitucional, ya que los mencionados artículos únicamente se refieren a los mecanismos para la distribución de los recursos contenidos en el Capítulo I de la Ley de Coordinación Fiscal, según se establece en el penúltimo párrafo de su artículo 2o.-A, en cuanto a que los Estados entregarán a los Municipios las cantidades que reciban del Fondo de Fomento Municipal de acuerdo con lo que establezcan las legislaturas locales, y de acuerdo también a lo estipulado en el primer párrafo del artículo sexto que dispone que las legislaturas locales establecerán la distribución de las participaciones federales entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general.

16) Que los artículos a que se refieren los Ayuntamientos actores respecto de los recursos del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal de los Fondos de Aportaciones Federales, el propio artículo 42 de este ordenamiento, establece que dichas aportaciones serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y en su caso de los Municipios que las reciban, de conformidad con la legislación que les sea aplicable, por lo que, no se viola la autonomía municipal ya que es precisamente la legislación federal la que establece que tanto las participaciones como las aportaciones federales se distribuirán de acuerdo a lo que disponga la legislación estatal, que en este caso la constituye la Ley impugnada.

17) Que los artículos de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, que la parte actora objeta y que hacen referencia a aquéllos provenientes del Ramo 33, “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y “Municipios”, son de naturaleza diversa de aquellos que integran la hacienda municipal, en virtud de que los artículos 19 y 24 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y ocho, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, de la Ley de Coordinación Fiscal, señalan que son recursos de naturaleza eminentemente federal.

18) Que el propio Decreto de Presupuesto de Egresos, prevé que dichas erogaciones habrán de ser cubiertas conforme a las disposiciones del mismo y las contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, por lo tanto, no forman parte de la hacienda municipal, en virtud de que los ordenamientos a que se ha hecho referencia contemplan reglas específicas para su aplicación y distribución, a diferencia de aquellos que se contemplan en el inciso b) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución General, ya que estos últimos son cubiertos por la Federación a los Municipios, y pasan a formar parte de su hacienda, pudiendo administrarlos libremente.

19) Que en uso de las facultades que confiere el artículo 74 de la Constitución Federal a la Cámara de Diputados, ésta dispone en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio, en particular en su numeral 24, que el ejercicio de los recursos contemplados en el ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y “Municipios”, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que no es dable la pretensión de la parte actora de que tales recursos son parte de la hacienda municipal y, en consecuencia, que el Ayuntamiento debería tener libre disponibilidad sobre su administración, ya que como ha quedado apuntado, existen reglas específicas para el ejercicio de los mismos.

20) Que las participaciones federales son uno de los rubros que integran la hacienda municipal, son una especie del género que constituyen los recursos federales, mismos que cuando la Federación los cubra directamente a los Municipios e ingresen a las arcas del Ayuntamiento, formarán entonces parte de la hacienda municipal, pudiendo en consecuencia tener plena disponibilidad sobre los mismos, como sucede con aquellos que sean establecidos por las legislaturas de los Estados, según lo dispone la fracción IV del artículo 115 Constitucional.

21) Que las legislaturas de los Estados no establecieron dichos recursos a favor de los Municipios, sino que fue la Federación, como se desprende del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y ocho y de la Ley de Coordinación Fiscal. En el caso que nos ocupa, lo único que hizo el Congreso Local del Estado de Puebla, fue acatar las disposiciones federales que dieron origen a dichos recursos, en la forma y términos establecidos por el Congreso Federal.

22) Que contrario a lo que señala la parte actora, no se violenta la autonomía y libertad municipal para manejar los recursos que integran su hacienda pública, contemplados en el artículo 115 de la Constitución Federal, puesto que, los recursos que integran el ramo 33, denominado “Aportaciones Federales “para Entidades Federativas y Municipios”, a la luz del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y ocho y de la Ley de Coordinación Fiscal, se establece

claramente la naturaleza Federal de los Fondos que integran este ramo, señalando cómo habrán de distribuirse, bajo qué condiciones y términos, estipulando que no podrán destinarse a fines distintos de los determinados e indicando imperativamente que la administración y el ejercicio de estos recursos serán a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

23) Que las aportaciones serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, los municipios, de conformidad con la legislación que les sea aplicable, observando estrictamente las reglas establecidas por la legislación federal para ello.

24) Que al quedar claramente señalado que en lo que respecta a los recursos provenientes del Capítulo I de la Ley de Coordinación Fiscal, por disposición expresa de la misma se distribuirán de conformidad a lo que establezca la legislación que al efecto emitan los Congresos Locales y que los recursos del ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" se crearon para objetivos específicos y son de naturaleza diversa de aquellos que integran la hacienda municipal, no se conculca el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no configurarse, en la especie, la alegada violación a la libertad municipal.

25) Que los recursos que contempla la Ley que se combate, no fueron establecidos por la Legislatura Local a favor de los Municipios, sino por la Federación, para ser aplicados a los fines específicos contemplados por la legislación federal, y consecuentemente, no podrán ser administrados libremente por los Municipios, sino de acuerdo a lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal, en los rubros específicos que ella misma preestablece.

26) Que conforme a lo dispuesto por los artículos 16, de la Constitución Federal, 14 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla y 79, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Puebla, no se puede considerar que el Ejecutivo Estatal esté incurriendo en invasión de competencia frente al Poder Legislativo, toda vez que, por mandato constitucional, el Gobernador tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes del Congreso, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, como sucederá en su oportunidad, al expedir el referido Manual Unico de Operación para el Federalismo Hacendario en el Estado de Puebla, el cual tendrá como finalidad establecer las reglas para la integración de los representantes comunitarios que se incorporarán a los Comités de Planeación.

27) Que no se configura un exceso del Gobernador en el ejercicio de la facultad reglamentaria, toda vez que, como ha quedado precisado, el Ejecutivo Estatal se limita exclusivamente a hacer lo que la ley le permite, que en el caso particular son dos ordenamientos, la Constitución Local, en la que se le concede la facultad reglamentaria, y la propia Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, la que expresamente le obliga a emitir el Manual Unico de Operación, que será el medio para que tenga exacta observancia lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley que se combate, y por tanto, no existe violación al artículo 116 de la Constitución General, puesto que no se reúnen dos o más poderes del Estado en una sola persona o corporación, ni se está depositando la titularidad del Poder Legislativo en un sólo individuo, en consecuencia, resulta infundado el presente concepto de invalidez.

28) Que por lo que hace a la violación que se alega a los artículos 133 y 120 de la Constitución Federal, de los artículos 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y ocho, y 6 y 42 de la Ley de Coordinación Fiscal, se advierte que contrario a lo que señala el actor, en relación a que al promulgarse la Ley que hoy se impugna deja de tener aplicación la Ley de Coordinación Fiscal, resulta infundada tal afirmación, en virtud de que, es precisamente la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla la materialización de la legislación aplicable a que aluden los artículos 6 y 42 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que en dichos preceptos se establece claramente tanto para las participaciones contempladas en el Capítulo I, como en las aportaciones contenidas en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, que las Legislaturas locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general, es decir, que será la legislación local la que determine su distribución, por lo que no se deja de aplicar la Legislación Fiscal Federal, sino por el contrario, se le da plena vigencia y observancia.

29) Que en relación con los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, atendiendo a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal, la norma que se pretende impugnar señala que se canalizarán a la satisfacción de los requerimientos de los Municipios, prioritariamente al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a los programas de gasto derivados de la seguridad pública.

30) Que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, habrán de distribuirse a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en proporción directa al número de habitantes de cada entidad federativa, de acuerdo con los datos que para el efecto proporcione el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; realizada la anterior distribución, los Estados ministrarán con el mismo criterio dichos recursos a los Municipios, concordando la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla con las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

31) Que la Ley que la parte actora impugna de inconstitucional por impedir la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal, es precisamente la materialización de la legislación aplicable a que se hace referencia en ese ordenamiento federal, por lo que no solamente es incorrecta la afirmación de los Municipios actores,

sino que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, retoma los lineamientos establecidos por el Congreso de la Unión, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Ley de Coordinación Fiscal.

OCTAVO.- Con fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, tuvo verificativo la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos; agotado el procedimiento respectivo, se pasó el asunto al Ministro Ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto competencial entre un Estado y diversos municipios, concretamente entre el Estado de Puebla y tres de sus municipios (Aljojuca, Nealtican y Altepexi).

SEGUNDO.- Previamente a cualquier otra cuestión, procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

Las disposiciones y los actos impugnados en el escrito inicial de demanda son los siguientes:

a) Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, específicamente los artículos 4o., fracciones VII y IX, 8o., tercer párrafo, 13 al 22, 24, fracciones III y V, 30, 35, 36, 42, 43, 44, 47 al 50, 53 al 57, 73 al 76, 81 al 84, y 95 al 98.

b) Todos los actos que son o lleguen a ser consecuencia de la aplicación concreta de la ley impugnada sobre todo por lo que hace a la creación, organización y funcionamiento de los llamados Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y demás grupos supuestamente organizados de los diversos sectores que prevé dicha ley, así como los actos de las Juntas Auxiliares, incluyendo en forma específica los actos tendientes al ejercicio de las atribuciones y funciones que la ley que se combate otorga a dichas autoridades intermedias que se pretenden establecer.

c) Todos los actos que también son o lleguen a ser consecuencia de la aplicación de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, tendientes a la administración, distribución, ejecución, ejercicio y fiscalización de las participaciones y aportaciones federales que corresponden a los Municipios actores.

El artículo 21, fracción II de la Ley Reglamentaria de la Materia, señala:

"ARTICULO 21.- El plazo para la interposición de la "demanda será:

"…II.- Tratándose de normas generales, de treinta "días contados a partir del día siguiente a la fecha "de su publicación o del día siguiente al en que se "produzca el primer acto de aplicación de la norma "que dé lugar a la controversia, y…".

Conforme al precepto transcrito, el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional, será de treinta días en tratándose de disposiciones generales y el plazo para su presentación se computará a partir de su publicación o de su primer acto de aplicación.

En el caso particular, la Ley impugnada no se combate con motivo de algún acto específico de aplicación, pues inclusive la demanda se endereza en contra de los actos que pudieran derivar de la entrada en vigor de la citada ley, por lo que, toda vez que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla se publicó el miércoles veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho y, conforme a su artículo Primero Transitorio entró en vigor el mismo día de su publicación, por lo que cabe concluir que la demanda se presentó dentro del plazo legal correspondiente.

En efecto, si la norma impugnada fue publicada el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho y entró en vigor el mismo día, el plazo para la presentación de la demanda corrió del jueves veintinueve de enero al jueves doce de marzo de ese año, debiéndose descontar del cómputo respectivo los días sábado treinta y uno de enero, domingo primero, jueves cinco, sábado siete, domingo ocho, sábado catorce, domingo quince, sábado veintiuno, domingo veintidós y sábado veintiocho de febrero, domingo primero, sábado siete y domingo ocho de marzo, de mil novecientos noventa y nueve, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o., fracciones I y II, y 6o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por lo anterior, al haberse presentado la demanda de controversia constitucional el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, esto es, al décimo octavo día hábil, debe concluirse que fue promovida dentro del plazo legal para tal efecto.

TERCERO.- Procede ahora estudiar la legitimación de la parte actora por ser de orden público y de estudio preferente.

Signan la demanda de controversia constitucional los Presidentes y Síndicos de los Municipios actores, quienes acreditaron contar con la personalidad que ostentan en términos de las constancias que se acompañaron a su escrito inicial de demanda.

Ahora bien, los artículos 40, fracciones XIII y XXXIX, 41, fracción III, y 44, fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, disponen:

"ARTICULO 40.- Son atribuciones de los "Ayuntamientos:

"…XIII.- Establecer las bases sobre las cuales el "Presidente Municipal pueda celebrar contratos, "aprobarlos una vez celebrados y someterlos a la "autorización del Ejecutivo y a la aprobación del "Congreso cuando la duración de esos contratos "excediera del periodo del ejercicio del "Ayuntamiento;…".

"…XXXIX.- Las demás que le confieran las Leyes".

"ARTICULO 41.- Son facultades y obligaciones de "los Presidentes Municipales:

"…III.- Representar al Ayuntamiento y ejecutar sus "resoluciones, salvo que se designe una comisión "especial, o se trate de procedimientos judiciales, "en los que la representación corresponde al "Síndico;…"

"ARTICULO 44.- Son deberes y atribuciones de los "síndicos:

"I.- Representar al Ayuntamiento ante toda clase de "autoridades, para lo cual tendrá las facultades de "un mandatario judicial;

"II.- Ejercitar las acciones y oponer las excepciones "de que sea titular el Municipio;

"III.- Seguir por todos sus trámites los juicios en "que esté interesado el Municipio;…".

De lo anterior se advierte que para la promoción de la presente controversia constitucional los Presidentes de los Municipios actores carecen de facultades para representar a los Ayuntamientos de dichos Municipios, pues en términos del artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla antes transcrito, sólo pueden representar al Ayuntamiento siempre y cuando no se designe una comisión especial o se trate de procedimientos judiciales, por lo que, siendo que en el caso se trata de un juicio de controversia constitucional instaurado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, de un procedimiento judicial, cabe concluir que los Presidentes Municipales carecen de legitimación para promoverlo.

Por lo que hace a los Síndicos de los Ayuntamientos de los Municipios actores, conforme a los artículos 41, fracción III, y 44, fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica Municipal de Puebla ya transcritos, a éstos les corresponde la representación del Ayuntamiento en procedimientos judiciales con facultades de mandatario judicial, así como para ejercitar las acciones y oponer las excepciones de que sea titular el Municipio y seguir en todos sus trámites los juicios en que éste esté interesado, por lo que, en estas condiciones y siendo que la controversia constitucional es un procedimiento de carácter judicial, se concluye que los Síndicos están legitimados para promover a nombre y en representación de los Municipios actores de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 4/2000, sustentada por este Tribunal Pleno, pendiente de publicación, que señala:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. "LEGITIMACION PROCESAL PARA PROMOVERLA. "LA TIENEN LOS SINDICOS EN REPRESENTACION "DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS "DEL ESTADO DE PUEBLA. De conformidad con "los artículos 41, fracción III, y 44, fracciones I, II y "III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de "Puebla, los Síndicos tienen la representación de "los Ayuntamientos en procedimientos judiciales "con facultades de mandatario judicial, así como "para ejercer las acciones y oponer las "excepciones de que sea titular el Municipio y "seguir en todos sus trámites los juicios en que "éste tenga interés; por lo que, en estas "condiciones y siendo que la controversia "constitucional es un procedimiento de carácter "judicial, se concluye que los Síndicos están "legitimados para promover a nombre y en "representación de los Ayuntamientos de los "Municipios del Estado de Puebla una controversia "constitucional en términos de lo dispuesto por el "artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las "Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución "Política de los Estados Unidos Mexicanos."

CUARTO.- Previo al análisis de los conceptos de invalidez que se hacen valer, procede al análisis de las causales de improcedencia alegadas por las partes o que de oficio advierta este Alto Tribunal, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente en términos del artículo 19, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de la Materia.

Las autoridades demandadas, plantean que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 1o., ambos de la Ley Reglamentaria de la Materia, por considerar que de los conceptos de invalidez se advierte que se plantea la violación a ordenamientos jurídicos secundarios y no un planteamiento expreso de invasión de competencias.

Es infundado lo así manifestado.

En primer lugar, debe destacarse que del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que, con independencia de las disposiciones secundarias que se señalen como infringidas, lo cierto es que existen planteamientos de inconstitucionalidad por contravención a los artículos 115, fracciones I, II y IV, inciso b), 116, 120 y 133 de la Constitución Federal, por lo que no puede alegarse que no exista cuestión de constitucionalidad.

En segundo lugar, este Alto Tribunal ha considerado que la Constitución Federal establece diversos instrumentos procesales con el objeto de restablecer el orden constitucional cuando el mismo sea transgredido por un órgano de autoridad.

Entre los medios de control constitucional está la controversia constitucional prevista en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.

En cuanto a la tutela jurídica, en lo específico, de las controversias constitucionales, del análisis de su evolución legislativa se colige que es un mecanismo procesal de rango constitucional, que tiene como finalidad el someter a su revisión los actos o disposiciones generales que se consideren son contrarios a la Carta Fundamental; asimismo y correlativamente con lo anterior, tiene como fin proteger el ámbito de atribuciones constitucionales de los entes que se mencionan en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, como lo son, de manera genérica: la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios.

Aunado a lo anterior, los artículos 1o. y 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la Materia y 105, fracción I, de la Constitución Federal, disponen:

> *"ARTICULO 1o.- La Suprema Corte de Justicia de la "Nación conocerá y resolverá con base en las "disposiciones del presente Título, las "controversias constitucionales y las acciones de "inconstitucionalidad a que se refieren las "fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución "Política de los Estados Unidos Mexicanos….".*
>
> *"ARTICULO 10.- Tendrán el carácter de parte en las "controversias constitucionales:*
>
> *"…II.- Como demandado, la entidad, poder u "órgano que hubiere emitido y promulgado la "norma general o pronunciado el acto que sea "objeto de la controversia".*
>
> *"ARTICULO 105.- La Suprema Corte de Justicia de "la Nación conocerá, en los términos que señale la "ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:*
>
> *"I.- De las controversias constitucionales que, con "excepción de las que se refieran a la materia "electoral, se susciten entre:*
>
> *"…i).- Un Estado y uno de sus municipios, sobre la "constitucionalidad de sus actos o disposiciones "generales".*

Por otra parte, la iniciativa correspondiente a la reforma del Artículo 105 de la Constitución Federal, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** en diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, dice:

> *"…Consolidar a la Suprema Corte como tribunal de "constitucionalidad exige otorgar mayor fuerza a "sus decisiones; exige ampliar su competencia "para emitir declaraciones sobre la "constitucionalidad de leyes que produzcan "efectos generales, para dirimir controversias entre "los tres niveles de gobierno y para fungir como "garante del federalismo….(foja III). …LAS "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y LAS "ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. "Aspectos generales y efectos de sus "resoluciones….Hoy se propone que, "adicionalmente, los órganos federales, estatales y "municipales, o algunos de ellos, puedan promover "las acciones necesarias para que la Suprema "Corte de Justicia resuelva, con efectos generales, "sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad "de las normas impugnadas….Las controversias "constitucionales. El artículo 105 del texto original "de la Constitución le otorga competencia "exclusiva a la Suprema Corte de Justicia para "conocer de las controversias que se susciten "entre dos o más estados, entre uno o más estados "y el Distrito Federal; entre los poderes de un "mismo estado y entre órganos de gobierno del "Distrito Federal sobre la constitucionalidad de sus "actos. Los mencionados supuestos del artículo "105 no prevén muchos de los conflictos entre los "órganos federales, estatales y municipales que la "realidad cotidiana está planteando. --- Una de las "demandas de nuestros días es la de arribar a un "renovado federalismo. Ello hace indispensable "encontrar las vías adecuadas para solucionar las "controversias que en su pleno ejercicio pueda "suscitar. Por este motivo, se propone la "modificación del artículo 105, a fin de prever en su "fracción primera las bases generales de un nuevo "modelo para la solución de las controversias "sobre la constitucionalidad de actos que surjan "entre la Federación y un estado o el Distrito "Federal, la Federación y un municipio; el Poder "Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquél y "cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, "la Comisión Permanente, sea como órganos "federales o del Distrito Federal, dos estados, un "estado y el Distrito Federal, el Distrito Federal y un "municipio; dos municipios de diversos estados; "dos poderes de un mismo estado; un estado y uno "de sus municipios; y dos órganos del*

Distrito "Federal o dos municipios de un mismo estado. --- "Con la modificación propuesta, cuando alguno de "los órganos mencionados en el párrafo anterior "estime vulnerada su competencia por actos "concretos de autoridad o por disposiciones "generales provenientes de otro de esos órganos, "podrá ejercitar las acciones necesarias para "plantear a la Suprema Corte la anulación del acto "o disposición general. El gran número de órganos "legitimados por la reforma para plantear las "controversias constitucionales es un "reconocimiento a la complejidad y pluralidad de "nuestro sistema federal. Todos los niveles de "gobierno serán beneficiados con estas reformas".

Asimismo, la iniciativa correspondiente a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el once de mayo de mil novecientos noventa y cinco, informa lo siguiente:

"… Mediante los procedimientos de controversia "constitucional y de acciones de "inconstitucionalidad será posible garantizar "plenamente la supremacía de la Constitución de "una manera general, y no como hasta ahora había "acontecido en nuestro orden jurídico, sólo por la "vía del juicio de amparo en el caso de la violación "de garantías individuales. La diferencia "fundamental entre los procedimientos de amparo "y del artículo 105 constitucional es muy clara: en "el juicio de amparo se tutelan intereses directos "de los gobernados y sólo de manera indirecta se "protege a la Constitución, mientras que los "procedimientos instituidos en las fracciones I y II "del artículo 105 constitucional se conciben como "instrumentos de protección directa de nuestra "Carta Magna…. Igualmente, las nuevas "atribuciones implican que la Suprema Corte de "Justicia pueda llegar a determinar las "competencias que correspondan a los tres niveles "de gobierno que caracterizan a nuestro sistema "federal, en tanto existe la posibilidad de que "aquellos poderes u órganos que estimen que una "de sus atribuciones fue indebidamente invadida o "restringida por la actuación de otros, puedan "plantear la respectiva controversia ante la "Suprema Corte a fin de que la misma determine a "cuál de ellos debe corresponder".

Atento a todo lo anterior, se concluye que en las controversias constitucionales pueden impugnarse actos y disposiciones generales, por contravención a la Constitución Federal; por lo que, en estos términos, si en el caso concreto se impugnan disposiciones generales y actos que se dicen violentan disposiciones de la Constitución Federal, con independencia de la posible transgresión o no de disposiciones secundarias, debe concluirse entonces que la controversia constitucional resulta procedente.

Por las mismas razones dadas con anterioridad, debe decirse que no asiste la razón a las autoridades demandadas cuando aducen que el planteamiento de contradicción entre la Ley impugnada y la Constitución Federal en su caso debió plantearse en una acción de inconstitucionalidad y no por vía de controversia constitucional.

En efecto, como ya se precisó, conforme al artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, la controversia constitucional es procedente con motivo de conflictos que se susciten entre un Estado y sus municipios con motivo de actos o disposiciones generales, por lo que, si en el caso, los Municipios actores impugnan la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, expedida y promulgada, respectivamente, por el Congreso y el Gobernador del Estado de Puebla, resulta claro que la controversia constitucional es procedente para dirimir dicho conflicto.

No existiendo ninguna otra causal de improcedencia que aleguen las partes ni que de oficio advierta este Tribunal, se procede al análisis de los conceptos de invalidez que se hacen valer.

QUINTO.- En los conceptos de invalidez, en síntesis, se aduce lo siguiente:

1.- Violación a lo dispuesto por el primer párrafo de la fracción I del artículo 115 constitucional, porque en virtud de diversos preceptos de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, se crean autoridades intermedias entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. Concretamente se impugnan los artículos 4o., fracciones VII y IX, 8o., tercer párrafo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, fracciones III y V, 30, 42, 43, 44, 49, 50, 57, 82, 95 y 98.

2.- Violación a lo dispuesto por la fracción II y por el inciso b) de la fracción IV del artículo 115 constitucional, debido a que la aplicación de diversos preceptos de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, impide que los municipios actores administren libremente, a través de los Ayuntamientos legítimamente electos, las participaciones y aportaciones federales que la Federación les cubre, y que son parte de la Hacienda Municipal. Los artículos que expresamente se impugnan en este concepto de invalidez son: 19, 20, 21, 22, 35, 36, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 83, 84 y 96.

3.- Violación a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 116 constitucional, por la delegación de facultades que conforme a la Ley que se combate, hace el Poder Legislativo del Estado de Puebla en favor del Gobernador del mismo Estado, al autorizarlo a expedir el "Manual Unico de Operación para el Federalismo Hacendario en el Estado de Puebla".

4.- Violación a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 120 de la misma Constitución, por la no aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal con motivo de la expedición de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

SEXTO.- En los conceptos de invalidez se plantea la inconstitucionalidad de los artículos 4, fracciones VII y IX, 8, tercer párrafo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, fracciones III y V, 30, 35, 36, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 95, 96, 97 y 98 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

Las citadas disposiciones legales señalan a la letra lo siguiente:

"ARTICULO 4.- La presente Ley tiene por objeto:

"…VII.- Constituir los órganos en materia "hacendaria para el cumplimiento de los objetivos "de esta Ley así como de los convenios de "coordinación y de colaboración que se "celebren…;

"…IX.- Promover la participación social en los "ámbitos estatal y municipal para la toma de "decisiones en la orientación, definición y "jerarquización de los programas y proyectos "públicos, de acuerdo a las normas establecidas en "la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado "de Puebla".

"ARTICULO 8.- Los recursos que la Federación "transfiera al Estado derivados de programas "federales de descentralización del gasto y "aquellos que, por su naturaleza análoga puedan "ser considerados bajo este rubro, deberán "sujetarse para su ejercicio, a las disposiciones de "esta Ley…;

"…El Ejecutivo Estatal será el responsable de "administrar, distribuir, ejercer y supervisar que los "recursos materia de esta Ley se apliquen a los "fines aprobados. Para ello, el Estado promoverá "las acciones necesarias que garanticen la "transparente y oportuna asignación de dichos "recursos de conformidad con esta Ley y sin "menoscabo de la libertad municipal. Asimismo, a "través de sus dependencias y entidades "competentes, llevará a cabo la asignación y "distribución de los recursos de aportaciones para "la educación básica y normal; de aportaciones "para los servicios de salud; infraestructura social "estatal; y de aportaciones múltiples, con apego "tanto a los programas establecidos por la "Federación, como a los estatales, regionales y "sociales que se instrumenten y que se aprueben "en el seno del órgano de planeación".

"ARTICULO 13.- Para efectos del artículo anterior, "los municipios contarán con Comités de "Planeación para el Desarrollo Municipal como las "instancias de participación social encargadas de "planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y "acciones a realizar para atender las demandas de "la población, en congruencia con los planes "nacional y estatal de desarrollo".

"ARTICULO 14.- El Comité de Planeación para el "Desarrollo Municipal se integrará por:

"I.- El Ayuntamiento del municipio;

"II.- El total de juntas auxiliares de cada municipio;

"III.- Los representantes comunitarios de "localidades, barrios, colonias populares y de los "comités de obra del municipio; y,

"IV.- Los representantes del órgano de Planeación "Estatal.

"En todo caso, la elección de los representantes "comunitarios ante este órgano de planeación se "llevará a cabo en asambleas democráticas, de "conformidad con el Manual Unico de Operación "para el Federalismo Hacendario en el Estado de "Puebla que para el efecto expida el Ejecutivo del "Estado".

"ARTICULO 15.- En la coordinación de acciones de "planeación del desarrollo, el Estado tomará en "cuenta la participación de los órganos de "planeación y otros grupos organizados, "entendiéndose como tales principalmente a las "organizaciones representativas de obreros, "campesinos, grupos populares, instituciones "académicas y de investigación, organismos "empresariales y otras agrupaciones sociales, "considerados órganos de consulta permanente".

"ARTICULO 16.- El Estado fortalecerá la "participación social en la planeación del "desarrollo de la entidad, a través de los órganos "creados por la Ley de Planeación para el "Desarrollo del Estado de Puebla, a fin de que "intervengan en la planeación, programación, "ejecución, control, seguimiento y evaluación de "los programas, y los convenios que con base en "esta Ley se establezcan".

"ARTICULO 17.- La recepción y análisis de las "propuestas sobre inversión, la promoción de la "cooperación y colaboración de la participación "social en las tareas de la planeación del "desarrollo, y los convenios que con base en esta "Ley se celebren, se efectuarán bajo los "lineamientos establecidos en la Ley de Planeación "para el Desarrollo del Estado de Puebla".

"ARTICULO 18.- Para propiciar el fortalecimiento "municipal el Estado deberá:
"I.- Impulsar programas de fortalecimiento de los "municipios, para hacer vigente su función como "instancias de gobierno directamente vinculadas a "las necesidades cotidianas de la población;
"II.- Ampliar los cauces para que las comunidades "participen activamente en la definición de los "programas prioritarios de la gestión "gubernamental y cuenten con la capacidad de "decisión, ejecución y evaluación correspondiente, "dentro del marco del fortalecimiento a los "Ayuntamientos otorgándoles mayores "responsabilidades públicas;
"III.- Fomentar, bajo los principios de justicia social "y equidad, las capacidades y oportunidades para "que, en coordinación con el Estado, los "Ayuntamientos eleven la cobertura y calidad de "los servicios indispensables para el desarrollo "social de su comunidad;
"IV.- Promover la integración y homogeneidad entre "las regiones, acelerando el desarrollo de las que "tienen menor crecimiento relativo y manteniendo "la dinámica de crecimiento de las que registren "mayor capacidad de respuesta productiva y más "altos índices de bienestar social; y,
"V.- Las demás acciones que establezcan los "ordenamientos en la materia".
"ARTICULO 19.- El Gobierno del Estado transferirá "recursos y responsabilidades a los "Ayuntamientos, fortaleciendo los instrumentos de "coordinación entre ambos para apoyar la política "social que asegure la prioridad en la atención a "regiones y grupos sociales rezagados".
"ARTICULO 20.- En la distribución de los recursos "a que se refiere esta Ley, el Estado establecerá "criterios de equidad mediante la aplicación de "fórmulas que procuren la integración al desarrollo, "de las regiones que conforman el territorio, "mismos que harán énfasis en el combate a la "pobreza y en la superación de los rezagos "sociales tanto rurales como urbanos".
"ARTICULO 21.- La política de equidad municipal "deberá atacar los desequilibrios entre las distintas "regiones, a través de la canalización de recursos y "la creación de condiciones adecuadas para la "inversión productiva".
"ARTICULO 22.- La coordinación entre el Estado y "municipios deberá encauzarse a la armonización "en los procesos de planeación, administración, "gasto y su ejecución, para la justa y equitativa "distribución de los fondos, a efecto de fortalecer a "los municipios de la entidad".
"ARTICULO 24.- El Sistema Estatal de Coordinación "Hacendaria tiene por objeto:
"…III.- Fijar el sistema para la distribución de "participaciones a los municipios…;
"…V.- Constituir los órganos de coordinación "hacendaria; y…".
"ARTICULO 30.- El Estado de Puebla percibirá las "participaciones correspondientes de los ingresos "federales, de conformidad con lo dispuesto en la "Ley de Coordinación Fiscal.
"Los municipios percibirán las participaciones en "ingresos federales atendiendo a lo que señalan "los Artículos 115 de la Constitución Política de los "Estados Unidos Mexicanos, 103 de la Constitución "local, la propia Ley de Coordinación Fiscal y la "presente Ley".
"ARTICULO 35.- Los fondos participables que "integran el sistema para la distribución de "participaciones a los municipios son:
"I.- Fondo de Desarrollo Municipal cuya "distribución se determinará en proporción directa "al número de habitantes de cada municipio y a "criterios de equidad y marginación; y,
"II.- Fondo para Incentivar y Estimular la "Recaudación Municipal".
"ARTICULO 36.- El Fondo de Desarrollo Municipal "se integrará con el 20% de las participaciones que "reciba el Estado del Fondo General de "Participaciones, establecido en la Ley de "Coordinación Fiscal incluyendo sus incrementos, "así como de la recaudación que se realice en el "Estado por concepto de los impuestos Sobre "Tenencia o Uso de Vehículos y Automóviles "Nuevos, y de la participación que corresponda al "Estado del Impuesto Especial Sobre Producción y "Servicios aplicado a la cerveza, bebidas "alcohólicas y tabacos labrados".
"ARTICULO 42.- Las Juntas Auxiliares se "coordinarán con los Ayuntamientos, a efecto de "coadyuvar con los mismos en las funciones que "realizan en materia de administración, "recaudación, ejecución y supervisión a que se "refiere esta Ley, así como aquellas establecidas "en la Ley Orgánica Municipal y demás leyes "aplicables".
"ARTICULO 43.- Para ejercer las funciones a que se "refiere el artículo anterior, las Juntas Auxiliares "recibirán de los Ayuntamientos, de los recursos "provenientes de las participaciones por lo menos:

"a) El 5% cuando el municipio cuente con 1 y hasta "5 Juntas Auxiliares
"b) El 10% cuando el municipio cuente con 6 y "hasta 10 Juntas Auxiliares
"c) El 15% cuando el municipio cuente con 11 o "más Juntas Auxiliares.
"Dichos recursos se distribuirán en proporción "directa al número de habitantes de cada Junta "Auxiliar, de acuerdo con los datos que para el "efecto emita el Consejo Estatal de Población".
"ARTICULO 44.- Las Juntas Auxiliares deberán "aplicar los recursos citados en el artículo anterior "en la ejecución de obras que de manera conjunta "hayan sido aprobadas en los órganos de "planeación de los Municipios".
"ARTICULO 47.- El Estado y los municipios podrán "coordinarse en materia de gasto público con el "objeto de realizar programas que busquen "satisfacer las necesidades colectivas, mediante la "realización de obras y prestación de servicios "públicos que demande la colectividad".
"ARTICULO 48.- Dentro de sus respectivas esferas "de competencia y atribuciones, el Estado y los "municipios involucrados realizarán la "coordinación en gasto público a través del "cumplimiento de normas de orden público, "acuerdos y convenios".
"ARTICULO 49.- El Gobierno del Estado revisará y "aprobará la evaluación socioeconómica de los "proyectos de inversión para el Estado y los "municipios, procurando que dichos proyectos se "apeguen a los objetivos de los Planes Nacional, "Estatal y municipales de Desarrollo, así como a "los programas sectoriales y regionales derivados "de los mismos".
"ARTICULO 50.- El H. Congreso del Estado "establecerá normas que aseguren que el ejercicio "del gasto se realice conforme a criterios de "oportunidad, calidad y eficiencia, que permitan "cumplir con las condiciones técnicas de los "proyectos y que atiendan a las prioridades del "desarrollo".
"ARTICULO 53.- De acuerdo a lo establecido en el "Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y en el "Decreto del Presupuesto de Egresos de la "Federación, el Estado recibirá los recursos a que "se refiere este Título, para su administración, "distribución, ejercicio en los casos que proceda, y "supervisión, clasificados en los fondos "siguientes:
"I.- De Aportaciones para la Educación Básica y "Normal;
"II.- De Aportaciones para los Servicios de Salud;
"III.- De Aportaciones para la Infraestructura Social;
"IV.- De Aportaciones para el Fortalecimiento de los "Municipios; y
"V.- De Aportaciones Múltiples".
"ARTICULO 54.- Los fondos a que se refiere este "Título se entregarán en la forma y tiempos "establecidos en esta Ley y para tales efectos no "procederán anticipos".
"ARTICULO 55.- El Estado podrá convenir con los "municipios el destinar el 2% del monto total de los "fondos a que se refieren las fracciones III y IV del "artículo 53 de esta Ley, para el control, la "vigilancia y la supervisión de los mismos".
"ARTICULO 56.- Cuando los recursos a que se "refiere este Título sean administrados y ejercidos "por el Estado, éste deberá observar las "disposiciones contenidas en esta Ley; la Ley de "Obras Públicas del Estado; Ley de Adquisiciones, "Arrendamientos y Prestación de Servicios del "Estado de Puebla; Ley Estatal de Presupuesto, "Contabilidad y Gasto Público y demás "disposiciones estatales aplicables. Asimismo, se "observarán los criterios de racionalidad, "austeridad y disciplina presupuestales "establecidos en la Ley de Egresos del Estado.
"Cuando estos recursos sean administrados y "ejercidos por los Ayuntamientos, éstos deberán "ajustarse en lo procedente, a lo dispuesto en el "párrafo anterior".
"ARTICULO 57.- Cuando los recursos de los fondos "a que se refiere este Título se destinen a obras "públicas, el Gobierno del Estado y los "Ayuntamientos presentarán ante las dependencias "competentes, para su análisis y aprobación, los "expedientes técnicos de las obras autorizadas por "sus comités de planeación debiendo sujetarse, "además de lo dispuesto por el artículo anterior, a "la normatividad, supervisión técnica y asesoría "que para tales efectos emitan dichas "dependencias".
"ARTICULO 73.- El Gobierno del Estado ministrará "en forma mensual a los municipios una cantidad "igual para ser administrada por los "Ayuntamientos; dichos recursos serán destinados "exclusivamente al financiamiento de obras, "acciones sociales básicas y a inversiones, que "beneficien directamente a sectores de su "población que se encuentren en condiciones de "rezago social y de pobreza extrema.

"Para tales efectos, previamente los municipios "presentarán al Gobierno del Estado, sus "programas de obras y acciones aprobadas en el "seno de los comités de planeación para el "desarrollo municipal".

"ARTICULO 74.- Los Ayuntamientos presentarán "ante el Gobierno del Estado, para su análisis y "aprobación, los expedientes técnicos de las obras "aprobadas por sus comités de planeación".

"ARTICULO 75.- Una vez aprobados los "expedientes técnicos por el Gobierno del Estado, "éste procederá a la ministración de recursos al "Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el "artículo 73 de esta Ley".

"ARTICULO 76.- Para continuar con la ministración "de los recursos por parte del Gobierno del Estado, "los Ayuntamientos comprobarán con la "documentación correspondiente, la aplicación de "los recursos a que se refiere este capítulo".

"ARTICULO 81.- Para el óptimo aprovechamiento "de los recursos, los municipios aplicarán los "recursos de este fondo de la siguiente manera:

"I.- Prioritariamente para la amortización de "empréstitos contraídos;

"II.- Podrán convenir con el Estado el destinar "cuando menos el 10% de este fondo para el pago "de sus necesidades vinculadas a la seguridad "pública en el marco del Sistema Nacional de "Seguridad Pública; y,

"III.- Canalizar el remanente a la realización de obra "física en Juntas Auxiliares y en colonias "populares, dando prioridad al mantenimiento y "reparación de espacios educativos. Dichas obras "serán consensadas y aprobadas en el seno del "órgano municipal de planeación.

"En cualquier caso los municipios deberán "presentar los presupuestos con cargo a este "fondo a la Contaduría Mayor del H. Congreso del "Estado, para efectos de la revisión a que se refiere "el tercer párrafo del inciso c) de la fracción IV, del "artículo 115 Constitucional".

"ARTICULO 82.- Los municipios deberán:

"I.- Hacer del conocimiento de sus habitantes los "montos que reciban, las obras y acciones a "realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas "y beneficiarios;

"II.- Promover la participación de las comunidades "beneficiarias en el seno del Comité de Planeación "para el Desarrollo Municipal, en su destino, "aplicación y vigilancia, así como en la "programación, ejecución, control, seguimiento y "evaluación de las obras que se vayan a realizar; y

"III.- Informar a sus habitantes al término de cada "ejercicio, sobre los resultados alcanzados".

"ARTICULO 83.- Para la aplicación de los recursos "a que se refiere la fracción III del artículo 81 del "presente ordenamiento, se estará a lo dispuesto "por los artículos del 74 al 76 de esta Ley".

"ARTICULO 84.- Los municipios deberán reportar al "Gobierno del Estado a través de la Secretaría de "Finanzas al inicio de cada ejercicio presupuestal y "de manera permanente, la deuda directa y "contingente a cargo de su Ayuntamiento y de sus "organismos públicos descentralizados, con el "objeto de programar el saneamiento de su deuda, "estableciendo el tiempo y formas de pago".

"ARTICULO 95.- Las infracciones en que incurran "los servidores públicos estatales o municipales a "las disposiciones de esta Ley y su "reglamentación, se sancionarán por los órganos "de control y supervisión del Estado de "conformidad con la Ley de Responsabilidades de "los Servidores Públicos del Estado de Puebla, Ley "Orgánica y Reglamentaria de la Contaduría Mayor "de Hacienda del Congreso del Estado de Puebla y "demás ordenamientos estatales aplicables".

"ARTICULO 96.- El Gobierno del Estado podrá "suspender a los Ayuntamientos las ministraciones "de los recursos a que se refieren las fracciones III "y IV del artículo 53 de esta Ley, si éstos no "justifican en forma y tiempos establecidos el "avance y aplicación de los mismos, o si se "canalizan a fines distintos a los aprobados en los "órganos de planeación".

"ARTICULO 97.- En caso de que los Ayuntamientos "no ministren los recursos que conforme a esta "Ley les corresponden a sus Juntas Auxiliares, el "Gobierno del Estado los liquidará directamente".

"ARTICULO 98.- Las autoridades estatales y "municipales que incurran en responsabilidades "civiles y penales con motivo de la desviación de "los recursos a que se refiere esta Ley, serán "sancionados en términos de la legislación "aplicable".

SEPTIMO.- Para resolver las cuestiones planteadas en la presente controversia constitucional, deberá atenderse a lo resuelto por este Alto Tribunal en la controversia constitucional 4/98, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Estado de Puebla, y otros de la misma entidad federativa, en la que se impugnaron las mismas disposiciones legales y actos, y en la que existe identidad en los conceptos de

invalidez propuestos (la controversia constitucional en cita fue resuelta por unanimidad de nueve votos, en sesión del diez de febrero del año dos mil, siendo ponente el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano). Por lo tanto, para dar contestación a los conceptos de invalidez planteados en la presente controversia, se reproducen las consideraciones dadas en el precedente de referencia y se citan las tesis jurisprudenciales aprobadas con motivo de dicha resolución que son aplicables al caso concreto.

Por método, en primer término se procede al análisis del segundo concepto de invalidez en el que se plantea que los preceptos de la Ley impugnada atentan en contra del libre manejo del patrimonio y de la libre administración hacendaria que en términos del artículo 115, fracción II y IV, inciso b), de la Constitución Federal, tienen los Municipios actores. Los artículos expresamente impugnados en este concepto de invalidez son: 19, 20, 21, 22, 35, 36, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 83, 84 y 96 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

A efecto de resolver la cuestión planteada, es necesario interpretar y precisar previamente los alcances del artículo 115 constitucional, en cuanto al régimen de libre administración hacendaria que prevé, a efecto de estar en posibilidad de determinar si las disposiciones impugnadas contravienen dicha disposición fundamental.

El artículo 115, fracciones II, primer párrafo y IV, de la Constitución Federal, disponen:

"ARTICULO 115.- Los Estados adoptarán, para su "régimen interior, la forma de gobierno "republicano, representativo, popular, teniendo "como base de su división territorial y de su "organización política y administrativa el Municipio "Libre, conforme a las bases siguientes:

"…II.- (primer párrafo).- Los municipios estarán "investidos de personalidad jurídica y manejarán "su patrimonio conforme a la ley…;

"…IV.- Los municipios administrarán libremente su "hacienda, la cual se formará de los rendimientos "de los bienes que les pertenezcan, así como de las "contribuciones y otros ingresos que las "legislaturas establezcan a su favor, y en todo "caso:

"a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas "adicionales, que establezcan los Estados sobre la "propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, "división, consolidación, traslación y mejora así "como las que tengan por base el cambio de valor "de los inmuebles.

"Los municipios podrán celebrar convenios con el "Estado para que éste se haga cargo de algunas de "las funciones relacionadas con la administración "de esas contribuciones.

"b) Las participaciones federales, que serán "cubiertas por la Federación a los Municipios con "arreglo a las bases, montos y plazos que "anualmente se determinen por las Legislaturas de "los Estados.

"c) Los ingresos derivados de la prestación de "servicios públicos a su cargo.

"Las leyes federales no limitarán la facultad de los "Estados para establecer las contribuciones a que "se refieren los incisos a) y c), ni concederán "exenciones en relación con las mismas. Las leyes "locales no establecerán exenciones o subsidios "respecto de las mencionadas contribuciones, en "favor de personas físicas o morales, ni de "instituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes "del dominio público de la Federación, de los "Estados o de los Municipios estarán exentos de "dichas contribuciones.

"Las legislaturas de los Estados aprobarán las "leyes de ingresos de los Ayuntamientos y "revisarán sus cuentas públicas. Los presupuestos "de egresos serán aprobados por los "ayuntamientos con base en sus ingresos "disponibles".

De la disposición constitucional destacan los siguientes contenidos:

a) Los Municipios manejarán su patrimonio conforme a la ley y administrarán libremente su hacienda.

b) La forma en que se integra la citada hacienda municipal.

c) Los casos en que las leyes federales no pueden establecer contribuciones sobre los conceptos que corresponden a los municipios; y la prohibición para que en las leyes locales no se establezcan exenciones o subsidios respecto de las mismas contribuciones.

d) La facultad de las legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos de los ayuntamientos y para revisar sus cuentas públicas, y la facultad de los ayuntamientos para aprobar sus presupuestos de egresos.

Para interpretar la disposición constitucional en lo que interesa para el caso concreto, es necesario precisar lo que es la hacienda municipal, lo que debe entenderse por régimen de libre administración hacendaria y si toda la hacienda municipal o sólo parte de ésta se sujeta bajo dicho régimen.

La hacienda municipal está comprendida dentro de lo que es la hacienda pública, la que se ha definido de la siguiente manera:

a) Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, Décima Edición, México 1997. ***"HACIENDA PUBLICA. I. La hacienda pública es "el conjunto de ingresos, propiedades y gastos de los entes "públicos y constituye un factor de gran importancia en el "volumen de la renta nacional y su distribución entre los "grupos sociales…".***

b) Diccionario de Derecho Fiscal. Hugo Carrasco Iriarte. Editorial Oxford. Primera Edición, México 1998. ***"HACIENDA "PUBLICA. Es el conjunto de bienes que una entidad pública "(Federación, Distrito Federal, estados, municipios) posee en "un momento dado para la realización de sus atribuciones, "así como de las deudas a su cargo.".***

c) Diccionario Jurídico Harla. Derecho Constitucional. Elisur Arteaga Nava. Editorial Harla. México 1995. ***"HACIENDA "MUNICIPAL. Se integra por cuatro rubros principales: las "contribuciones, las participaciones federales, los ingresos "provenientes de los servicios que tienen a su cargo los "municipios y rendimiento de los bienes que les pertenecen; "existen otros rubros que pudieran calificarse de menores, "como son los ingresos que pueden tener por concepto de "donativos y herencias…".***

Atendiendo a las anteriores definiciones puede decirse, en principio, que, en términos generales, la hacienda municipal se integra por los ingresos, activos y pasivos de los municipios.

Precisado lo anterior, debe señalarse ahora lo que es la libre administración hacendaria.

La libre administración hacendaria debe entenderse como un régimen que estableció el Poder Reformador de la Constitución y que ha sido motivo de múltiples reformas constitucionales, a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, de tal manera que, atendiendo a sus necesidades propias y siendo éstos los que de mejor manera y en forma más cercana las conocen, puedan priorizar la aplicación de sus recursos sin que se vean efectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra razón, los obligaran a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales.

Al respecto destaca la iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional de 1983, que dice:

> *"… Por su amplia reiteración y sustentación en "toda la consulta popular, se concluyó en la "necesaria reestructuración de la economía "municipal, entendiendo, como así también lo "proclamaron los Constituyentes de Querétaro, que "no podrá haber cabal libertad política en los "Municipios mientras éstos no cuenten con "autosuficiencia económica. Por ende, en este "renglón, fundamental para la subsistencia y "desarrollo de los Municipios, consignamos en la "Fracción IV de la iniciativa, en primer término, "como concepto originario del Artículo 115 la libre "administración de su hacienda por parte de los "Municipios, pero por otra parte, en una fórmula de "descentralización, de correcta redistribución de "competencias en materia fiscal, estimamos "conveniente asignar a las comunidades "municipales los impuestos o contribuciones, "inclusive con tasas adicionales, que establezcan "los Estados sobre la propiedad inmobiliaria así "como de su fraccionamiento, división, "consolidación, traslado y mejora y las que tengan "por base el cambio de valor de los inmuebles, "previendo en casos de carencia de capacidad para "la recaudación y administración de tales "contribuciones que los Municipios podrán "celebrar convenios con los Estados para que "éstos se hagan cargo de algunas de las funciones "relacionadas con la mencionada administración "contributiva. --- Se atribuyen igualmente a los "Municipios los rendimientos de sus bienes "propios, así como de las otras contribuciones y "los otros ingresos que las Legislaturas "establezcan a su favor, y fundamentalmente "también los ingresos provenientes de la "prestación de los servicios públicos a su cargo. --- "Por último, en esta área hacendaria, se elevó a la "categoría de rango constitucional el derecho de "los Municipios a recibir las participaciones "federales que en su caso se les asignen, "disponiéndose la obligación de las Legislaturas "locales de establecer anualmente las bases, "montos y plazos con arreglo a los cuales la "Federación debe cubrir a los Municipios dichas "participaciones. --- Como una disposición "importante para la seguridad de los ingresos "municipales, se consigna la obligación del pago "de sus contribuciones para toda persona física o "moral o instituciones oficiales o privadas, sin "exenciones o subsidios, evitando de esta manera "a nivel constitucional las prácticas de exentar a "diversas personas o empresas del sector "público, de estas contribuciones que son "consubstanciales para la vida de los Municipios.--- "Sin embargo, por imperativas razones de orden "público, que por sí solas se explican, se exceptuó "de estas reglas a los bienes del dominio público "de la Federación, Estados y Municipios…".*

En razón de lo anterior, es que se instituyó como una prerrogativa constitucional a favor de los municipios, el que éstos manejen su patrimonio conforme a la ley y administren libremente su hacienda, como lo establece el artículo 115, fracciones II y IV, de la Constitución Federal.

Por otro lado, atendiendo a las dos cuestiones antes mencionadas, hacienda municipal y libre administración hacendaria, es necesario precisar si la totalidad de la primera o sólo una parte de ella entra dentro de dicho régimen de libre administración hacendaria.

El artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, anteriormente transcrito, establece cómo se integra la hacienda municipal, señalando al efecto que se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los Estados; y, c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

De lo anterior se sigue que, de la totalidad de los conceptos que pueden integrar la hacienda municipal, sólo a los que se refiere la disposición constitucional son los que estarán sujetos al régimen de libre administración hacendaria.

En estas condiciones, los conceptos que prevé la disposición constitucional como aquellos que conforman la hacienda municipal están señalados de manera limitativa, en cuanto que no considera otros elementos que, por su naturaleza, constituyen también parte de la hacienda municipal, tal es el caso de las deudas de los municipios y los ingresos que por diferentes conceptos también pueden llegar a las arcas municipales como pueden ser, por ejemplo, las donaciones, las aportaciones federales u otros; sin embargo, esto es para delimitar los rubros respecto de los cuales el municipio tiene libertad de administración, excluyendo aquellos que, por diversas razones, no pueden ser ejercidos libremente.

Atento a todo lo anterior e interpretando armónica, sistemática y teleológicamente la disposición constitucional de referencia, debe concluirse que la misma no tiende a establecer la forma en que puede integrarse la totalidad de la hacienda municipal, sino la de precisar en lo particular aquéllos conceptos de ésta que quedan sujetos al régimen de libre administración hacendaria, toda vez que, por una parte, como quedó expuesto con anterioridad, la hacienda municipal comprende un universo de elementos que no se incluyen en su totalidad en la disposición constitucional y que evidentemente forman parte de la hacienda municipal desde el momento en que entran y afectan su esfera económica como ingresos, activos o como pasivos; y, en segundo lugar, destaca que la disposición fundamental lo que instituye, más que la forma en que se integra la hacienda municipal, son los conceptos de ésta que entran dentro del régimen de libre administración hacendaria, es decir, la norma tutela dicho régimen y los elementos de la hacienda municipal que quedan sujetos bajo el mismo, y no que establezca limitativamente los conceptos que constituyen todo su universo.

Sirven de apoyo a todo lo anterior, las tesis jurisprudenciales números 5/2000 y 6/2000, del Tribunal Pleno, pendientes de publicación, que dicen:

"HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE "ADMINISTRACION HACENDARIA. SUS "DIFERENCIAS (ARTICULO 115, FRACCION IV, DE "LA CONSTITUCION FEDERAL). En términos "generales puede considerarse que la hacienda "municipal se integra por los ingresos, activos y "pasivos de los Municipios; por su parte, la libre "administración hacendaria debe entenderse como "el régimen que estableció el Poder Reformador de "la Constitución a efecto de fortalecer la autonomía "y autosuficiencia económica de los Municipios, "con el fin de que éstos puedan tener libre "disposición y aplicación de sus recursos y "satisfacer sus necesidades, todo esto en los "términos que fijen las leyes y para el cumplimiento "de sus fines públicos."

"HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS "AL REGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACION "HACENDARIA (ARTICULO 115, FRACCION IV, DE "LA CONSTITUCION FEDERAL). El artículo 115, "fracción IV, de la Constitución Federal, establece "que la hacienda municipal se formará de los "rendimientos de los bienes que les pertenezcan, "así como de las contribuciones y otros ingresos "que las legislaturas establezcan a su favor, y en "todo caso: a) Percibirán las contribuciones, "incluyendo tasas adicionales, que establezcan los "Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su "fraccionamiento, división, consolidación, "traslación y mejora así como las que tengan por "base el cambio de valor de los inmuebles; b) Las "participaciones federales, que serán cubiertas por "la Federación a los Municipios con arreglo a las "bases, montos y plazos que anualmente se "determinen por las legislaturas de los Estados; y, "c) Los ingresos derivados de la prestación de "servicios públicos a su cargo. De una "interpretación armónica, sistemática y teleológica "de la disposición constitucional, se concluye que "la misma no tiende a establecer la forma en que "puede integrarse la totalidad de la hacienda "municipal, sino a precisar en lo particular aquellos "conceptos de la misma que quedan sujetos al "régimen de libre administración hacendaria, toda "vez que, por una parte, la hacienda municipal "comprende un universo de elementos que no se "incluyen en su totalidad en la disposición "constitucional y que también forman parte de la "hacienda municipal y, por otra,

la disposición "fundamental lo que instituye, más que la forma en "que se integra la hacienda municipal, son los "conceptos de ésta que quedan comprendidos en "el aludido régimen de libre administración "hacendaria."

Precisados los alcances del artículo 115 constitucional, concretamente respecto de su fracción IV con relación a la libre administración hacendaria, se pasa al análisis de las participaciones federales y de las aportaciones federales, por ser ésta la materia del concepto de invalidez que se analiza en este considerando.

1.- PARTICIPACIONES FEDERALES.

Estos recursos tienen su razón de ser, en virtud de que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados pueden establecer contribuciones sobre las mismas fuentes en razón de una facultad concurrente, por lo que el legislador ideó la celebración de convenios de Coordinación Fiscal por los cuales los Estados, a cambio de abstenerse de imponer gravámenes sobre las materias que también prevén las leyes Federales, podrán beneficiarse de un Fondo General de Participaciones formado con el 13% de la recaudación federal total que se incrementará con el por ciento que representen en dicho ingreso de la Federación la recaudación de gravámenes locales o municipales que las entidades convengan en derogar o dejar en suspenso.

La distribución de estos recursos se regula en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que considera las participaciones federales en el ramo 00028 y en la Ley de Coordinación Fiscal.

La característica particular de estos recursos, es que, tanto la Federación como los Estados, pueden gravar la misma fuente, pero convienen para que no se dé una doble tributación y los ingresos que se obtengan se entregan a la Federación quien a su vez los redistribuye, participando así de dichos recursos.

Dentro de las participaciones federales se encuentran los rendimientos sobre contribuciones especiales de energía eléctrica según lo dispone el artículo 73, fracción XXIX-A, último párrafo de la Constitución Federal y el 10, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se establece que las legislaturas de los Estados deben fijar el porcentaje que de ellas corresponda a los Municipios. Tales disposiciones dicen:

"Art. 73.- El Congreso tiene facultad: … XXIX-A. "Para establecer contribuciones: … 5o. Especiales "sobre: a) Energía eléctrica, … --- Las entidades "federativas participarán en el rendimiento de estas "contribuciones especiales, en la proporción que la "ley secundaria federal determine. Las legislaturas "locales fijarán el porcentaje correspondiente a los "Municipios en sus ingresos por concepto del "impuesto sobre energía eléctrica."

"Art. 10.- Los Estados que deseen adherirse al "Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para "recibir las participaciones que establezca esta "Ley, lo harán mediante convenio que celebren con "la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que "deberá ser autorizado o aprobado por su "Legislatura. También, con autorización de la "Legislatura podrán dar por terminado el convenio. "… --- La adhesión al Sistema Nacional de "Coordinación Fiscal deberá llevarse a cabo "integralmente y no sólo en relación con algunos "de los ingresos de la Federación…. --- Los "Estados que no deseen adherirse al Sistema "Nacional de Coordinación Fiscal, participarán en "los impuestos especiales a que se refiere el inciso "5o. de la fracción XXIX, del artículo 73 "constitucional, en los términos que establecen las "leyes respectivas."

Por otra parte, también constituyen participaciones federales, las que señala el artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal (Capítulo I, De las Participaciones de los Estados, Municipios y Distrito Federal en Ingresos Federales), que dice:

"Art. 1o.- Esta Ley tiene por objeto coordinar el "Sistema Fiscal de la Federación con los de los "Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer "la participación que corresponda a sus haciendas "públicas en los ingresos federales; distribuir entre "ellos dichas participaciones; fijar reglas de "colaboración administrativa entre las diversas "autoridades fiscales; constituir los organismos en "materia de coordinación fiscal y dar las bases de "su organización y funcionamiento… --- La "Secretaría de Hacienda y Crédito Público "celebrará convenio con los Estados que soliciten "adherirse al Sistema Nacional de Coordinación "Fiscal que establece esta Ley. Dichos Estados y el "Distrito Federal participarán en el total de "impuestos federales y en los otros ingresos que "señale esta Ley mediante la distribución de los "fondos que en la misma se establecen."

Estas participaciones se distribuirán entre los municipios conforme lo determinen las Legislaturas Estatales, de conformidad con el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que dispone:

"Art. 6o.- Las participaciones federales que "recibirán los Municipios del total del Fondo "General de Participaciones incluyendo sus "incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las "cantidades que correspondan al Estado, el cual "habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales "establecerán su distribución entre los Municipios "mediante disposiciones de carácter general."

Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia número 7/2000, del Tribunal Pleno, pendiente de publicación, que dice:

"PARTICIPACIONES FEDERALES. "CARACTERISTICAS. La característica particular "de estos ingresos consiste en que tanto la "Federación como los Estados pueden gravar la "misma fuente, pero convienen para que no se dé "una doble tributación; los montos que se "obtengan se entregan a la Federación quien a su "vez los redistribuye, participando así de ellos. Por "lo mismo, como el Congreso de la Unión y las "Legislaturas de los Estados pueden establecer "contribuciones sobre las mismas fuentes por "tener facultades concurrentes, el legislador "estableció la celebración de convenios de "coordinación fiscal por virtud de los cuales los "Estados, a cambio de abstenerse de imponer "gravámenes sobre las materias que también "prevén las leyes federales, podrán beneficiarse de "un porcentaje del Fondo General de "Participaciones formado con la recaudación de "gravámenes locales o municipales que las "entidades convengan con la Federación, en "términos de lo dispuesto por la Ley de "Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos "de la Federación. A las legislaturas locales "corresponde establecer su distribución entre los "municipios mediante disposiciones de carácter "general."

2.- APORTACIONES FEDERALES.

Estos recursos provienen de la partida federal autorizada para los poderes, dependencias y entidades de la Federación, es decir, se trata de recursos federales, los cuales se destinan para los estados y municipios.

Esta partida se crea para coadyuvar al fortalecimiento de los Estados y Municipios en apoyo de actividades específicas.

Este apoyo de la Federación, a los Estados y Municipios es independiente a los recursos que éstos reciben vía participaciones federales, como se demuestra de la exposición hecha con anterioridad respecto a las participaciones.

Por lo anterior, las autoridades federales mediante Convenios de Desarrollo Social celebrados con los ejecutivos locales, determinan el monto, forma y tiempo en que deberán ser ejercidos estos recursos, y en caso de incumplimiento pueden suspender las ministraciones respectivas e inclusive solicitar la devolución de los citados recursos.

La distribución de estos recursos se regulaba en el ramo 0026 del Presupuesto de Egresos y a partir de mil novecientos noventa y ocho en el ramo 0033 de dicho presupuesto y en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

En efecto, hasta 1998, la Federación entregaba recursos federales a los municipios, considerados en el ramo 00026, para la superación de la pobreza, a través de convenios que la Federación celebraba con los Estados. A diferencia de las participaciones (comprendidas en el ramo 00028), estos recursos no se prevén para evitar la doble tributación sobre la misma fuente ante facultades concurrentes de la Federación y los Estados para gravar ciertas materias, sino que, las aportaciones, son recursos originarios de la Federación que ésta envía para materias específicas de interés común con los Estados y Municipios.

En la Ley de Coordinación Fiscal hasta antes de su reforma para 1998 no se establecía un capítulo expreso para regular el ramo 00026 o las aportaciones federales, sino que es hasta este año en que se institucionalizan estos recursos en la Ley de Coordinación Fiscal, aunque dentro del ramo 00033. Anteriormente sólo se preveía en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los convenios que al efecto celebraban las entidades con la Federación y, como consecuencia de dicho Presupuesto y convenios, los Estados, como en el caso concreto sucede, legislan en su régimen interior para la aplicación de dichos recursos acorde a lo convenido.

Al respecto, el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, establece:

"Art. 25.- Con independencia de lo establecido en "los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la "participación de los Estados, Municipios y el "Distrito Federal en la recaudación federal "participable, se establecen las aportaciones "federales, como recursos que la Federación "transfiere a las haciendas públicas de los Estados, "Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, "condicionando su gasto a la consecución y "cumplimiento de los objetivos que para cada tipo "de aportación establece esta Ley, para los Fondos "siguientes:…".

De tal disposición se aprecia el reconocimiento expreso de la existencia de las aportaciones federales que se venían dando con anterioridad a la Ley de Coordinación Fiscal de 1998, que ahora se institucionalizan y se regulan expresamente en esta Ley, lo que se corrobora también de la exposición de motivos de la misma, que al efecto dice:

"La iniciativa de reformas y adiciones que someto a "la consideración de esa Soberanía, tiene por "objeto principal coadyuvar al fortalecimiento de "las haciendas locales e inclusive municipales en "dos ámbitos: el presupuestario a través de la "institucionalización de la provisión de recursos "federales en apoyo a actividades específicas; y en "el tributario mediante la asignación a los "municipios del 50% de la recaudación que se "obtenga a partir

del 1o. de enero de 1998, respecto "de las personas ahora ubicadas en la economía "informal, que se incorporen al Registro Federal de "Contribuyentes. --- Con esta primera parte de la "Iniciativa, se propone a esa Soberanía "institucionalizar el apoyo que la Federación ofrece "como complemento a los recursos que a las "entidades federativas y a los municipios les "corresponden como participación en la "recaudación federal. --- Así pues, en adición y con "independencia al referido concepto de "recaudación federal participable, se propone dar "permanencia a los recursos que la Federación "aporta para el mejor desarrollo de las actividades "que se han descentralizado a las entidades en los "últimos años. Con tal motivo, propongo la adición "a la Ley de Coordinación Fiscal de un nuevo "capítulo el V, que se denomine "De los Fondos de "Aportaciones Federales" destinados "específicamente a coadyuvar a las siguientes "actividades de las entidades federativas y, en su "caso, de los municipios:… --- La Iniciativa que "someto a la consideración de esa Soberanía, "introduce al régimen jurídico de aportaciones "federales, las erogaciones destinadas al Fondo de "Aportaciones para la Infraestructura Social "Municipal, que han venido siendo reguladas por el "Presupuesto de Egresos de la Federación, como "parte de los recursos del Ramo 26, "Superación "de la Pobreza… --- Cabe señalar que estas "aportaciones son independientes y adicionales a "las participaciones de los estados y municipios en "la recaudación federal participable, ya que "constituyen recursos federales diferentes…".

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 8/2000, del Tribunal Pleno, pendiente de publicación, que dice:

"APORTACIONES FEDERALES. "CARACTERISTICAS. Estos fondos son de "naturaleza federal y corresponden a una partida "que la Federación destina para coadyuvar al "fortalecimiento de los Estados y Municipios en "apoyo de actividades específicas; se prevén en el "Presupuesto de Egresos de la Federación, "regulándose en el Capítulo V de la Ley de "Coordinación Fiscal, resultando independientes "de los que se destinan a los Estados y Municipios "por concepto de participaciones federales."

Precisadas las características esenciales de las participaciones federales y de las aportaciones federales, se pasa a un examen más detallado para determinar si ambas se ubican dentro del régimen de libre administración hacendaria municipal.

Como quedó expuesto, las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los Municipios en términos del inciso b) de la fracción IV, del artículo 115 de la Constitución Federal, se refieren a los rendimientos sobre contribuciones especiales de energía eléctrica que contempla el artículo 73, fracción XXIX, último párrafo de la propia Constitución.

Debe destacarse que aun en este aspecto en acatamiento de lo dispuesto por el propio artículo 73, fracción XXIX y 115, fracción IV, Constitucionales, está a cargo de la legislatura local fijar las bases, montos, plazo y el porcentaje de cada municipio corresponderá de dichas contribuciones especiales.

Del mismo modo en su caso integran las participaciones federales que corresponden a los municipios, los recursos derivados de los convenios de coordinación fiscal celebrados entre los Estados de la República con la Federación regulados en los capítulos I al IV de la Ley de Coordinación Fiscal.

Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Estas participaciones federales a los Estados y Municipios que en términos de la fracción IV, inciso b) del artículo 115 Constitucional forman parte de las haciendas municipales, están previstas en el ramo 00028 del Presupuesto de Egresos Federal y dichos recursos, los municipios podrán administrarlos libremente una vez que la legislatura local en términos del artículo 115, fracción IV, inciso b) lo determine, y por ende formen parte de su hacienda, como se desprende del texto del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal que conviene volver a transcribir:

"ARTICULO 6o.- Las participaciones federales que "recibirán los Municipios del total del Fondo "General de Participaciones incluyendo sus "incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las "cantidades que correspondan al Estado, el cual "habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales "establecerán su distribución entre los Municipios "mediante disposiciones de carácter general.

"La Federación entregará las participaciones a los "municipios por conducto de los Estados, dentro "de los cinco días siguientes a aquél en que el "Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de "intereses, a la tasa de recargos que establece el "Congreso de la Unión para los casos de pago a "plazos de contribución; en caso de "incumplimiento la Federación hará la entrega "directa a los Municipios descontando la "participación del monto que corresponda al "Estado, previa opinión de la Comisión Permanente "de Funcionarios Fiscales.

"Los municipios recibirán como mínimo el 20% de "la recaudación que corresponda al Estado en los "términos del penúltimo y último párrafos del "artículo 2o. de esta Ley.

"Las participaciones serán cubiertas en efectivo, "no en obra, sin condicionamiento alguno y no "podrán ser objeto de deducciones, salvo lo "dispuesto en el artículo 9o. de esta Ley. Los "Gobiernos de los Estados publicarán, cuando "menos una vez al año en el Diario Oficial de la "entidad, y en uno de los periódicos de mayor "circulación de la misma, las participaciones que "correspondan, durante un año, a cada uno de sus "Municipios".

Cabe precisar que las partidas presupuestales del ramo 00028 que conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación corresponden a las entidades federativas y municipios, tienen su origen en el sistema de Coordinación Fiscal previsto por la Ley de Coordinación Fiscal por virtud del cual según la exposición de motivos de la citada ley, ***"los Estados de la República, en "ejercicio de su soberanía, podrán solicitar adherirse al "Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en cuyo caso, la "Secretaría de Hacienda celebrará con ellos, un convenio de "coordinación fiscal que les dará derecho a participar en un "Fondo General de Participaciones formado con el 13.0% de "la recaudación federal total que se incrementará con el por "ciento que represente en dicho ingreso de la Federación la "recaudación de gravámenes locales o municipales que las "entidades convengan en derogar o dejar en suspenso. "Dicho fondo será distribuido entre los Estados conforme a "las bases establecidas en la Ley que se propone y que se "desarrollen en los citados convenios. A cambio de esta "participación, los Estados no impondrán gravámenes o los "mantendrán en suspenso, sobre las materias establecidas "en las leyes federales relativas a impuestos participables, "modalidad que no se hace extensiva en relación a otros "impuestos en los cuales no ha existido participación a los "Estados",*** es decir, dicha partida obra en el Presupuesto de Egresos Federal y no en el de cada Entidad Federativa por tratarse de una redistribución de los ingresos que perciben los Municipios, los Estados y la Federación por virtud de los Convenios de Coordinación Fiscal previstos en la ley en cita.

Tal afirmación se corrobora del texto del artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal ya transcrito.

Del mismo modo, confirma lo anterior que en la exposición de motivos de la Ley de Coordinación Fiscal se estableciera lo siguiente:

"Los Estados de la República, si así lo prefieren, "pueden no adherirse al Sistema Nacional de "Coordinación Fiscal, en cuyo caso, podrán "establecer libremente los impuestos que estimen "convenientes, salvo los señalados en la fracción "XXIX del artículo 73 constitucional, en relación "con los cuales seguirán recibiendo las "participaciones señaladas en las leyes federales".

Ahora bien, el Presupuesto de Egresos de la Federación tiene su fundamento Constitucional en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Federal que establece:

"ARTICULO 74.- Son facultades exclusivas de la "Cámara de Diputados:

"…IV.- Examinar, discutir y aprobar anualmente el "Presupuesto de Egresos de la Federación, "discutiendo primero las contribuciones que, a su "juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como "revisar la Cuenta Pública del año anterior.

"El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la "iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de "Presupuesto de Egresos de la Federación a más "tardar el día 15 del mes de noviembre o hasta el 15 "de diciembre cuando inicie su encargo, en la fecha "prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el "Secretario del Despacho correspondiente a dar "cuenta de los mismos.

"No podrá haber otras partidas secretas, fuera de "las que se consideren necesarias, con ese "carácter, en el mismo presupuesto; las que "emplearán los secretarios por acuerdo escrito del "Presidente de la República.

"La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto "conocer los resultados de la gestión financiera, "comprobar si se ha ajustado a los criterios "señalados por el Presupuesto y el cumplimiento "de los objetivos contenidos en los programas.

"Si el examen que realice la Contaduría Mayor de "Hacienda aparecieran discrepancias entre las "cantidades gastadas y las partidas respectivas del "Presupuesto o no existiera exactitud o "justificación en los gastos hechos, se "determinarán las responsabilidades de acuerdo "con la ley.

"La Cuenta Pública del año anterior deberá ser "presentada a la Cámara de Diputados del H. "Congreso de la Unión dentro de los diez primeros "días del mes de junio.

"Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de "la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de "Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta "Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo "suficientemente justificada a juicio de la Cámara o "de la Comisión Permanente, debiendo comparecer "en todo caso el Secretario del Despacho "correspondiente a informar de las razones que lo "motiven;…".

De lo anterior se advierte que corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se establecerá el ejercicio que ha de

realizarse de los ingresos federales que el Congreso de la Unión en términos del artículo 73, fracciones XXIX y VII determinó para cubrirlo.

Lo anterior se corrobora del texto del artículo 1o. del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y ocho que señala:

"ARTICULO 1o.- El ejercicio y control del gasto "público federal para el año de 1998, se realizará "conforme a las disposiciones de este Decreto y a "las demás aplicables en la materia".

Ahora bien, los artículos 25, y 73, fracciones XXV, XXIX-D, XXIX-E y XXX de la Constitución Federal disponen:

"ARTICULO 25.- Corresponde al Estado la rectoría "del desarrollo nacional para garantizar que éste "sea integral, que fortalezca la Soberanía de la "Nación y su régimen democrático y que, mediante "el fomento del crecimiento económico y el empleo "y una más justa distribución del ingreso y la "riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y "la dignidad de los individuos, grupos y clases "sociales, cuya seguridad protege esta "Constitución.

"El Estado planeará, conducirá, coordinará y "orientará la actividad económica nacional, y "llevará al cabo la regulación y fomento de las "actividades que demande el interés general en el "marco de libertades que otorga esta Constitución.

"Al desarrollo económico nacional concurrirán, con "responsabilidad social, el sector público, el sector "social y el sector privado, sin menoscabo de otras "formas de actividad económica que contribuyan al "desarrollo de la Nación.

"El sector público tendrá a su cargo, de manera "exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan "en el Artículo 28, párrafo cuarto de la "Constitución, manteniendo siempre el Gobierno "Federal la propiedad y el control sobre los "organismos que en su caso se establezcan.

"Asimismo podrá participar por sí o con los "sectores social y privado, de acuerdo con la ley, "para impulsar y organizar las áreas prioritarias del "desarrollo.

"Bajo criterios de equidad social y productividad se "apoyará e impulsará a las empresas de los "sectores social y privado de la economía, "sujetándolos a las modalidades que dicte el "interés público y al uso, en beneficio general, de "los recursos productivos, cuidando su "conservación y el medio ambiente.

"La ley establecerá los mecanismos que faciliten la "organización y la expansión de la actividad "económica del sector social: de los ejidos, "organizaciones de trabajadores, cooperativas, "comunidades, empresas que pertenezcan "mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, "en general, de todas las formas de organización "social para la producción, distribución y consumo "de bienes y servicios socialmente necesarios.

"La ley alentará y protegerá la actividad económica "que realicen los particulares y proveerá las "condiciones para que el desenvolvimiento del "sector privado contribuya al desarrollo económico "nacional, en los términos que establece esta "Constitución".

"ARTICULO 73.- El Congreso tiene facultad:

"…XXV.- Para establecer, organizar y sostener en "toda la República escuelas rurales, elementales, "superiores, secundarias y profesionales; de "investigación científica, de bellas artes y de "enseñanza técnica; escuelas prácticas de "agricultura y de minería, de artes y oficios, "museos, bibliotecas, observatorios y demás "institutos concernientes a la cultura general de los "habitantes de la nación y legislar en todo lo que se "refiere a dichas instituciones; para legislar sobre "monumentos arqueológicos, artísticos e "históricos, cuya conservación sea de interés "nacional; así como para dictar las leyes "encaminadas a distribuir convenientemente entre "la Federación, los Estados y los Municipios el "ejercicio de la función educativa y las "aportaciones económicas correspondientes a ese "servicio público, buscando unificar y coordinar la "educación en toda la República. Los títulos que se "expidan por los establecimientos de que se trata "surtirán sus efectos en toda la República;

"…XXIX-D.- Para expedir leyes sobre planeación "nacional del desarrollo económico y social.

"XXIX-E.- Para expedir leyes para la programación, "promoción, concertación y ejecución de acciones "de orden económico, especialmente las referentes "al abasto y otras que tengan como fin la "producción suficiente y oportuna de bienes y "servicios, social y nacionalmente necesarios.

"XXX.- Para expedir todas las leyes que sean "necesarias, a objeto de hacer efectivas las "facultades anteriores, y todas las otras "concedidas por esta Constitución a los Poderes "de la Unión".

De los citados preceptos, se advierte que corresponde a la Federación, en el ámbito de sus respectivos poderes, la Coordinación del Desarrollo Nacional y legislar en materias que tengan como fin distribuir

convenientemente entre la Federación, Entidades Federativas y Municipios, los servicios educativos, públicos y económicos socialmente necesarios con el fin de hacer una distribución más justa de la riqueza.

Estos preceptos constitucionales, son la base del destino que la Cámara de Diputados Federal determinó para los recursos federales del ramo 0033 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, previsto en el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y ocho.

Asimismo, debe precisarse que los artículos 3o. y 4o. y párrafo tercero del artículo 19 del Presupuesto de Egresos en estudio, así como los artículos 32, 34, primer párrafo, 35, párrafo sexto, 36, 37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, señalan:

"ARTICULO 3o.- En la ejecución del gasto público "federal, las dependencias y entidades deberán "realizar sus actividades con sujeción a los "objetivos y metas de los programas aprobados en "este Presupuesto, que correspondan a las "prioridades del Plan Nacional de Desarrollo".

"ARTICULO 4o.- La Secretaría estará facultada para "interpretar las disposiciones del presente Decreto "para efectos administrativos y establecer las "medidas conducentes a su correcta aplicación, así "como para establecer y, en su caso, recomendar "medidas conducentes a homogeneizar, "racionalizar y ejercer un mejor control del gasto "público federal en las dependencias, entidades y "demás ejecutores de gasto".

"…(párrafo tercero del artículo 19).- El ejercicio de "las erogaciones a que se refiere este artículo "deberá apegarse a la distribución, condiciones y "términos que establece el Capítulo V de la Ley de "Coordinación Fiscal, y no podrán aplicarse para "cubrir otras erogaciones con fines distintos a los "que ahí se señalan. La administración de los "recursos de este ramo estará a cargo de la "Secretaría, la cual deberá coordinarse, en su caso, "con las respectivas secretarías en cuyo sector se "distribuyan las aportaciones federales, para llevar "el seguimiento de dichos recursos".

"ARTICULO 32.- El Fondo de Aportaciones para la "Infraestructura Social se determinará anualmente "en el Presupuesto de Egresos de la Federación "con recursos federales, por un monto equivalente, "sólo para efectos de referencia, al 2.5% de la "recaudación federal participable a que se refiere el "artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la "misma se realice en el propio Presupuesto, con "base en lo que al efecto establezca la Ley de "Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del "total de la recaudación federal participable el "0.303% corresponderá al Fondo para la "Infraestructura Social Estatal y el 2.197% al Fondo "para la Infraestructura Social Municipal.

"Los Fondos se enterarán mensualmente por "partes iguales a los Estados por conducto de la "Federación y a los Municipios a través de los "Estados, sin que para este efecto procedan los "anticipos a que se refiere el segundo párrafo del "artículo 7o. de esta Ley".

"ARTICULO 34.- El Ejecutivo Federal, a través de la "Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura "Social entre los Estados, considerando criterios "de pobreza extrema, conforme a la siguiente "fórmula y procedimientos:…".

"ARTICULO 35.- Los Estados distribuirán entre los "Municipios los recursos del Fondo para la "Infraestructura Social Municipal, con una fórmula "igual a la señalada en el artículo anterior, que "enfatice el carácter redistributivo de estas "aportaciones hacia aquellos Municipios con "mayor magnitud y profundidad de pobreza "extrema. Para ello, utilizarán la información "estadística más reciente de las variables de "rezago social a que se refiere el artículo anterior "publicada por el Instituto Nacional de Estadística, "Geografía e Informática. En aquellos casos en que "la disponibilidad de información no permita la "aplicación de la fórmula antes señalada, se "utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas "y ponderadas con igual peso cada una de ellas:…"

*"…(párrafo sexto).- Con objeto de apoyar a los "Estados en la aplicación de sus fórmulas, la "Secretaría de Desarrollo Social publicará en el "**Diario Oficial de la Federación**, en los primeros "quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las "variables y fuentes de información disponibles a "nivel municipal para cada Estado".*

"ARTICULO 36.- El Fondo de Aportaciones para el "Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito "Federal se determinará anualmente en el "Presupuesto de Egresos de la Federación con "recursos federales, por un monto equivalente, "sólo para efectos de referencia, al 2.5% de la "recaudación federal participable a que se refiere el "artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la "misma se realice en el propio presupuesto, con "base en lo que al efecto establezca la Ley de "Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este "Fondo se enterará mensualmente por partes "iguales a los Municipios, por conducto de los "Estados, y

al Distrito Federal, sin que para este "efecto procedan los anticipos a que se refiere el "segundo párrafo del artículo 7o. de esta Ley".

"ARTICULO 37.- Las aportaciones federales que "con cargo al Fondo de Aportaciones para el "Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito "Federal reciban los Municipios, a través de los "Estados y el Distrito Federal se destinarán "exclusivamente a la satisfacción de sus "requerimientos, dando prioridad al cumplimiento "de sus obligaciones financieras y a la atención de "las necesidades directamente vinculadas a la "seguridad pública de sus habitantes. Respecto de "las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a "que se refiere este artículo, los municipios y el "Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a "que se refieren las fracciones I a III del artículo 33 "de esta Ley".

"ARTICULO 38.- El Ejecutivo Federal, a través de la "Secretaría de Hacienda y Crédito Público, "distribuirá el Fondo de Aportaciones para el "Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito "Federal en proporción directa al número de "habitantes con que cuente cada entidad "federativa, de acuerdo a la información estadística "más reciente que al efecto emita el Instituto "Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

"Las entidades a su vez distribuirán los recursos "que correspondan a sus Municipios, atendiendo "estrictamente a los mismos criterios a que se "refiere el párrafo anterior".

De lo anterior, se advierte que en principio la ejecución del gasto público federal (recursos federales) corresponde a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y específicamente en tratándose de los recursos correspondientes al ramo 0033, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con las demás secretarías cuyo sector esté involucrado en la distribución de los citados recursos en especial la Secretaría de Desarrollo Social.

Lo expuesto se confirma del texto de los artículos 31, fracciones XXIII y XXV y 32, fracciones I y II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que señalan:

"ARTICULO 31.- A la Secretaría de Hacienda y "Crédito Público corresponde el despacho de los "siguientes asuntos:

"…XXIII.- Vigilar el cumplimiento de las "obligaciones derivadas de las disposiciones en "materia de planeación nacional, así como de "programación, presupuestación, contabilidad y "evaluación;…

"…XXV.- Los demás que le atribuyan expresamente "las leyes y reglamentos".

"ARTICULO 32.- A la Secretaría de Desarrollo "Social corresponde el despacho de los siguientes "asuntos:

"I.- Formular, conducir y evaluar la política general "de desarrollo social para el combate efectivo a la "pobreza; en particular, la de asentamientos "humanos, desarrollo urbano y vivienda;

"II.- Proyectar y coordinar, con la participación que "corresponda a los gobiernos estatales y "municipales, la planeación regional; …".

Por lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 35, párrafo sexto de la Ley de Coordinación Fiscal, y 32, fracciones I y II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Secretario de Desarrollo Social elaboró el Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las variables y fuentes de información para la distribución entre los municipios de las aportaciones federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 0033 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y ocho, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el dos de enero de mil novecientos noventa y ocho, y que en lo que al caso interesa señala:

*"…CONSIDERANDO…--- Que de conformidad con "lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, los "estados distribuirán entre los municipios las "aportaciones federales del Fondo para la "Infraestructura Social Municipal, con una fórmula "igual a la prevista para la distribución entre los "estados de acuerdo a lo señalado en el "considerando anterior.--- Que la propia Ley de "Coordinación Fiscal dispone que, con el objeto de "apoyar a los estados en la aplicación de las "fórmulas con base en las cuales distribuirán entre "los municipios respectivos las aportaciones "federales del Fondo para la Infraestructura Social "Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social "publicará en el **Diario Oficial de la Federación**, en "los primeros quince días del ejercicio fiscal, las "variables y fuentes de información disponibles a "nivel municipal para cada estado, he tenido a bien "expedir el siguiente ACUERDO…--- …CUARTO.- "Conforme a lo establecido en el artículo 35 de la "Ley de Coordinación Fiscal, previo convenio con "la Secretaría de Desarrollo Social, los estados "calcularán la distribución del Fondo para la "Infraestructura Social Municipal entre sus "municipios, debiendo publicarla en sus "respectivos órganos oficiales de difusión a más "tardar el 31 de enero del presente ejercicio fiscal, "así como la fórmula y su correspondiente "metodología, justificando cada elemento".*

Ahora bien, los artículos 35, párrafo séptimo de la Ley de Coordinación Fiscal, 22, 32, fracciones II, III, V y XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 116, fracción VII de la Constitución Federal, disponen:

"ARTICULO 35.- …(párrafo séptimo).- Los Estados, "con base en los lineamientos anteriores y previo "convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, "calcularán las distribuciones del Fondo para la "Infraestructura Social Municipal correspondiente a "sus Municipios, debiendo publicarlas en sus "respectivos órganos oficiales de difusión a más "tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, "así como la fórmula y su respectiva metodología, "justificando cada elemento".

"ARTICULO 22.- El Presidente de los Estados "Unidos Mexicanos podrá celebrar convenios de "coordinación de acciones con los Gobiernos "Estatales, y con su participación, en los casos "necesarios, con los Municipios, satisfaciendo las "formalidades legales que en cada caso procedan, "a fin de favorecer el desarrollo integral de las "propias entidades federativas".

"ARTICULO 32.- A la Secretaría de Desarrollo "Social corresponde el despacho de los siguientes "asuntos:

"…II.- Proyectar y coordinar, con la participación "que corresponda a los gobiernos estatales y "municipales, la planeación regional;

"III.- Coordinar las acciones que incidan en el "combate a la pobreza fomentando un mejor nivel "de vida, en lo que el Ejecutivo Federal convenga "con los gobiernos estatales y municipales, "buscando en todo momento propiciar la "simplificación de los procedimientos y el "establecimiento de medidas de seguimiento y "control;

"…V.- Evaluar la aplicación de las transferencias de "fondos en favor de estados y municipios, y de los "sectores social y privado que se deriven de las "acciones e inversiones convenidas, en los "términos de las fracciones anteriores;

"…XVII.- Los demás que se fijen expresamente las "leyes y reglamentos; …".

"ARTICULO 116.- El poder público de los estados "se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, "Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o "más de estos poderes en una sola persona o "corporación, ni depositarse el legislativo en un "solo individuo.

"Los poderes de los Estados se organizarán "conforme a la Constitución de cada uno de ellos, "con sujeción a las siguientes normas:

"…VII.- La Federación y los Estados, en los "términos de ley, podrán convenir la asunción por "parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la "ejecución y operación de obras y la prestación de "servicios públicos, cuando el desarrollo "económico y social lo haga necesario.

"Los Estados estarán facultados para celebrar esos "convenios con sus Municipios, a efecto de que "éstos asuman la prestación de los servicios o la "atención de las funciones a las que se refiere el "párrafo anterior".

Con base en dichos dispositivos legales, el Ejecutivo Federal celebra con los Ejecutivos de los diversos Estados los Convenios de Desarrollo Social, con objeto de que los Gobiernos estatales por conducto de los municipios integrantes de los Estados asuman la ejecución y operación de las obras y servicios públicos que acorde con las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Coordinación Fiscal se deben realizar en la ejecución de los recursos federales entre otros los referentes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal del ramo 0033.

En este punto, cabe precisar que toda vez que el objeto de los citados convenios es la asunción por parte de los Estados por conducto de sus municipios de la ejecución de recursos federales en términos del artículo 116, fracción VII de la Constitución Federal, los citados convenios se celebran con los ejecutivos Estatales sin que en modo alguno participen los Congresos Estatales en su determinación por no referirse a recursos locales.

Del mismo modo, del artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal ya transcrito, se advierte que también por lo que hace al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, corresponde a la autoridad federal en este caso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público distribuir los recursos federales del ramo 0033 a los Estados quienes bajo los mismos lineamientos a su vez deben distribuirlos a los Municipios, por tratarse de recursos federales.

A mayor abundamiento, debe precisarse que el ramo 0033 del Presupuesto de Egresos de la Federación, denominado Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, aparece por primera vez en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y ocho.

El artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y ocho, que contiene el ramo 0033, señala:

"ARTICULO 19.- Las erogaciones previstas para el "Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades "Federativas y Municipios, en el año de 1998, "importan la cantidad de $98'849'598,400.00 y se "distribuyen de la siguiente manera:

"Fondo de Aportaciones para la "Educación Básica y Normal	*$67'512'647,000.00*
"Fondo de Aportaciones para los "Servicios de Salud	*$10'546'151,400.00*
"Fondo de Aportaciones para la "Infraestructura Social, cantidad "que se distribuye en:	*$10'403'400,000.00*
"Fondo para la Infraestructura "Social Estatal	*$ 1'261'100,000.00*
"Fondo para la Infraestructura "Social Municipal	*$ 9'142'300,000.00*
"Fondo de aportaciones para el "Fortalecimiento de los Municipios "y del Distrito Federal	*$ 6'732'100,000.00*
"Fondo de Aportaciones "Múltiples	*$ 3'655'300,000.00*

"El ejercicio de las erogaciones a que se refiere "este artículo deberá apegarse a la distribución, "condiciones y términos que establece el Capítulo "V de la Ley de Coordinación Fiscal, y no podrán "aplicarse para cubrir otras erogaciones con fines "distintos a los que ahí se señalan. La "administración de los recursos de este ramo "estará a cargo de la Secretaría, la cual deberá "coordinarse, en su caso, con las respectivas "secretarías en cuyo sector se distribuyan las "aportaciones federales, para llevar el seguimiento "de dichos recursos.

"El Fondo de Aportaciones para los Servicios de "Salud, incluye la cantidad de $99'128,701.00 para "promover la equidad de los servicios entre las "entidades federativas, conforme a lo dispuesto en "la fracción IV del artículo 30 de la Ley de "Coordinación Fiscal.

"En lo que se refiere al Fondo de Aportaciones para "la Infraestructura Social, las obras, acciones "sociales básicas y las inversiones a las que el "mismo se destinen por estados y municipios, "procurarán que las acciones sean compatibles "con la preservación y protección del medio "ambiente y que impulsen el desarrollo "sustentable.

"Los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples "se deberán destinar a los programas para "proporcionar exclusivamente desayunos "escolares, apoyos alimentarios y asistencia social "a la población en pobreza, apoyos a la población "en desamparo, y a la construcción, equipamiento "y rehabilitación de la infraestructura física de los "niveles de educación básica y superior, en su "modalidad universitaria.

"Los recursos que integran los Fondos de "Aportaciones para la Infraestructura Social, de "Aportaciones para el Fortalecimiento de los "Municipios y del Distrito Federal, y de "Aportaciones Múltiples, se distribuyen conforme a "lo dispuesto en el tomo que corresponda al Ramo "33 Aportaciones Federales para Entidades "Federativas y Municipios.

"La Contraloría, en el ámbito de sus atribuciones, "realizará la inspección y vigilancia del ejercicio del "Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades "Federativas y Municipios. La Cámara y las "legislaturas locales, podrán celebrar convenios "para coordinarse en el seguimiento y evaluación "del ejercicio de estos recursos, en los términos "del párrafo segundo del artículo 27 de este "Decreto".

En general, el citado precepto contiene las siguientes prevenciones:

a) El rubro en comento regula las Aportaciones Federales (sobre recursos federales) para Entidades Federativas y Municipios.

b) Los fondos que integran el citado ramo son los siguientes:

"Fondo de Aportaciones para la Educación Básica "y Normal.

"Fondo de Aportaciones para los Servicios de "Salud.

"Fondo de Aportaciones para la Infraestructura "Social compuesto por:

"Fondo para la Infraestructura Social Estatal.

"Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

"Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de "los Municipios y del Distrito Federal.

"Fondo de Aportaciones Múltiples".

c) Las erogaciones de este ramo se distribuirán en los términos del capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

d) La administración de los recursos estará a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual se coordinará en su caso con las diversas secretarías federales en cuyo sector se distribuyan los recursos (Educación, Salud, Desarrollo Social) para llevar el seguimiento de los mismos.

e) El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se establece para promover la equidad de estos servicios entre las entidades federativas.

f) El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, busca financiar, obras, acciones sociales básicas e inversiones destinadas a los Estados y Municipios básicamente para la preservación y protección del medio ambiente y para impulsar el desarrollo sustentable.

g) El Fondo de Aportaciones Múltiples se constituye exclusivamente para proporcionar desayunos escolares, apoyos alimentarios y asistencia social a la población en pobreza, apoyos a la población en desamparo, y a la construcción, equipamiento y rehabilitación de la infraestructura física de los niveles de educación básica y superior, en su modalidad universitaria.

h) Los recursos correspondientes a los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social, de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, y de Aportaciones Múltiples se distribuirán conforme a lo dispuesto en el tomo que corresponda al Ramo 0033.

i) La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo será la encargada de realizar la inspección y vigilancia del ejercicio de estos recursos.

j) La Cámara de Diputados Federal y las legislaturas locales, podrán celebrar convenios para coordinarse en el seguimiento y evaluación del ejercicio de estos recursos.

Ahora bien, en este punto es necesario hacer referencia a diversos preceptos del propio Presupuesto de Egresos que se relacionan con el ramo 0033 y que son los siguientes:

"ARTICULO 8.- Las erogaciones previstas para las "dependencias, en el año de 1998, importan la "cantidad de $208'910'182,700.00 y se distribuyen "de la siguiente manera:

"…12 Salud $15'768'933,600.00…

"De las erogaciones a que se refiere este artículo "para el Ramo 12 Salud, se destinará, en el año de "1998, la cantidad de $1'558'400,000.00 para dar "cumplimiento a lo dispuesto en las fracciones II y "III del artículo 30 de la Ley de Coordinación Fiscal.

"Las erogaciones a que se refiere el párrafo "anterior, constituyen la totalidad de los recursos "previstos en este Presupuesto para sufragar las "medidas salariales y económicas que resulten en "materia de incrementos salariales, así como las "erogaciones que se deriven del cumplimiento de "otras obligaciones laborales, de las prestaciones, "de las aportaciones por seguridad social, y de los "impuestos federales. Igualmente, con dichos "recursos se cubrirán aquellas medidas que se "requieran para la cobertura del sistema de salud y "el mejoramiento de su calidad, y la creación de "plazas. Las medidas salariales y económicas que "se acuerden conforme a lo que establece este "párrafo serán transferidas a las entidades "federativas a través del Ramo 33 Aportaciones "Federales para Entidades Federativas y "Municipios.

"La Secretaría de Salud, con cargo a los recursos "del Ramo 12 Salud y de conformidad con las "disposiciones aplicables, podrá asumir el gasto de "operación, equipamiento o dotación de la plantilla "necesaria para el funcionamiento de nuevas "unidades de atención a la salud, construidas por "los gobiernos estatales o municipales, siempre y "cuando exista acuerdo previo con dichos "gobiernos.

"Las erogaciones que se ejerzan a través del Ramo "33 Aportaciones Federales para Entidades "Federativas y Municipios deberán aplicarse "conforme a lo dispuesto por el Capítulo V de la "Ley de Coordinación Fiscal y este Decreto. La "Contraloría, en el ámbito de sus atribuciones, "realizará la inspección y vigilancia del ejercicio "que del Ramo 12 Salud realice la Federación".

"ARTICULO 16.- Las erogaciones previstas para el "Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los "Sistemas de Educación Básica y Normal, en el año "de 1998, importan la cantidad de "$20'399'547,500.00 y se distribuyen de la siguiente "manera:

"Previsiones para Servicios Personales para el Fondo de Aportaciones
"para la Educación Básica y Normal $12'132'872,000.00
"Aportaciones para los Servicios de Educación
"Básica en el Distrito Federal $8'266'675,500.00

"Las previsiones para servicios personales a que "se refiere el primer párrafo de este artículo, "constituyen la totalidad de los recursos previstos "en este Presupuesto para sufragar las medidas "salariales y económicas que resulten en materia "de incrementos salariales, así como las "erogaciones que se deriven del cumplimiento de "otras obligaciones laborales, de las prestaciones, "de las aportaciones por seguridad social, y de los "impuestos federales. Igualmente, con dichos "recursos se cubrirán aquellas medidas que se "requieran para la

cobertura del sistema educativo "y el mejoramiento de su calidad, y la creación de "plazas. Las medidas salariales y económicas que "se acuerden conforme a lo que establece este "párrafo serán transferidas en el caso de los "estados, a través del Ramo 33 Aportaciones "Federales para Entidades Federativas y "Municipios y, en el caso del Distrito Federal, por "medio del Ramo 25 Previsiones y Aportaciones "para los Sistemas de Educación Básica y Normal.

"Las erogaciones para los Servicios de Educación "Básica en el Distrito Federal a que se refiere el "primer párrafo de este artículo se ejercerán a "través del Ramo 25 Previsiones y Aportaciones "para los Sistemas de Educación Básica y Normal, "y su administración estará a cargo de la Secretaría "de Educación Pública.

"Las erogaciones que se ejerzan a través del Ramo "33 Aportaciones Federales para Entidades "Federativas y Municipios deberán aplicarse "conforme a lo dispuesto por el Capítulo V de la "Ley de Coordinación Fiscal y este Decreto. La "Contraloría en el ámbito de sus atribuciones, "realizará la inspección y vigilancia del ejercicio "que del Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para "los Sistemas de Educación Básica y Normal "realice la Federación en lo que concierne a las "aportaciones para los Servicios de Educación "Básica en el Distrito Federal".

"ARTICULO 27.- Para el control, evaluación, "inspección y vigilancia de los recursos federales "que se reasignen a las entidades federativas, la "Secretaría en coordinación con las dependencias "que participen en dicha reasignación y la "Contraloría, en el ámbito de sus respectivas "competencias, y de acuerdo con lo que establece "el artículo 25 de este Decreto, podrán incluir en "los convenios en la materia con los gobiernos "estatales los indicadores de desempeño para "elevar la calidad del gasto, así como lograr un "ejercicio más eficiente y eficaz, a través de un "seguimiento transparente de los recursos "públicos.

"La Cámara y las legislaturas locales, podrán "celebrar convenios a través de sus respectivos "órganos técnicos de vigilancia con el objeto de "coordinar acciones para el seguimiento del "ejercicio de los recursos que se reasignen y los "correspondientes a las aportaciones federales a "que se refiere el artículo 19 de este Decreto, a "través de mecanismos de información que "faciliten la evaluación de los resultados, permitan "incorporar éstos en las cuentas públicas "respectivas y promuevan la rendición "transparente y oportuna de cuentas, de acuerdo a "la estructura programática estatal y a los "indicadores de desempeño convenidos".

"ARTICULO 44.- El Ejecutivo Federal, por conducto "de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones "adicionales para aplicarlas a programas y "proyectos estratégicos o prioritarios del sector "público federal conforme a lo siguiente:

"…II.- De los excedentes de los ingresos "tributarios, conforme a lo establecido en el inciso "a) de la fracción I de este artículo se destinará, "una vez descontadas las participaciones federales "que correspondan a las entidades federativas y "municipios de acuerdo con la Ley de Coordinación "Fiscal, hasta el equivalente al 1% de los ingresos "tributarios correspondientes a los enteros que se "realicen en los primeros nueve meses del "ejercicio, conforme a lo siguiente:

"a) El 33.4% al Fondo para la Infraestructura Social "Municipal;

"b) El 33.3% para apoyar los programas de "desarrollo rural autorizados en el Presupuesto "preferente en proyectos productivos de desarrollo "agropecuario;

"c) El 33.3% para apoyar los programas de "construcción, mantenimiento y modernización de "infraestructura carretera autorizados en el "Presupuesto.

"Las erogaciones adicionales que en su caso, "resulten y se autoricen con base en esta fracción, "se distribuirán a más tardar el último día del mes "de mayo y el 15 de noviembre, y no podrán "tomarse en cuenta para determinar la distribución "de aportaciones federales, conforme a lo que "establece el Capítulo V de la Ley de Coordinación "Fiscal.

"El monto que rebase, en su caso, el equivalente al "1% de los ingresos tributarios a que se refiere el "primer párrafo de esta fracción y aquellos "excedentes de ingresos ordinarios que se enteren "en los últimos tres meses del ejercicio fiscal, "deberán aplicarse a la amortización de la deuda "pública, y…".

"SEPTIMO.- Al concluir la Federación el proceso de "transferencia de los servicios de educación básica "con el Gobierno del Distrito Federal, las "aportaciones para los servicios de educación "básica en el Distrito Federal a que se refiere el "artículo 16 de este Decreto, deberán canalizarse a "través del Ramo 33 Aportaciones Federales para "Entidades Federativas y Municipios, conforme a lo "que establece el Capítulo V de la Ley de "Coordinación Fiscal".

"OCTAVO.- Al concluir la Federación el proceso de "transferencia de los servicios de salud con el "Estado de Baja California, las aportaciones para "los servicios de salud a que se refiere el artículo 8 "de este Decreto, deberán canalizarse a través del "Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades "Federativas y Municipios, conforme a lo que "establece el Capítulo V de la Ley de Coordinación "Fiscal".

Del texto de los preceptos transcritos anteriormente se advierte lo siguiente:

a) Por lo que hace al ramo 0012 del Presupuesto referente a Salud, lo relativo a las erogaciones para sufragar medidas salariales y económicas en materia de incrementos salariales, cumplimiento de obligaciones laborales, prestaciones, aportaciones de seguridad social, impuestos federales, cobertura del sistema de salud, mejoramiento de su calidad y creación de plazas, deberán canalizarse a través del ramo 0033 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios en los términos previstos por el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

b) Respecto del ramo 0025, las previsiones para servicios personales para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica se establece para sufragar las medidas salariales y económicas resultantes de incrementos salariales, cumplimiento de otras obligaciones laborales, prestaciones, aportaciones de seguridad social, e impuestos federales, medidas para la cobertura del sistema educativo y el mejoramiento de su calidad así como la creación de plazas también deberán ser transferidas en los términos ya precisados.

c) La Cámara de Diputados y las legislaturas locales podrán celebrar convenios a través de sus órganos técnicos de vigilancia para dar seguimiento a los recursos que se distribuyan conforme al ramo 0033.

d) Los servicios de educación básica en el Distrito Federal contenidos en el ramo 0025 deberán canalizarse conforme lo previene el ramo 0033.

Ahora bien, en este punto debe precisarse que la finalidad de los recursos de este ramo presupuestario es el fortalecimiento de las haciendas locales y municipales mediante la provisión de recursos federales en apoyo a actividades específicas.

Así, se advierte de la exposición de motivos que el Ejecutivo Federal formuló, respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para mil novecientos noventa y ocho que en lo conducente señala:

"Para impulsar decididamente el nuevo "federalismo, en forma simultánea a la "presentación del Proyecto de Presupuesto de "Egresos, someto a la consideración del Honorable "Congreso de la Unión una propuesta de reforma a "la Ley de Coordinación Fiscal. De ser aprobada "esta propuesta, quedaría institucionalizada la "figura aportaciones federales a las entidades "federativas y los municipios. Estas aportaciones "complementarían las participaciones, lo que "permitiría incrementar los recursos, fortalecer las "responsabilidades de los gobiernos locales. La "propuesta consiste en crear tres fondos, cada uno "con un destino específico: el primero, para la "atención de educación básica y normal en las "entidades federativas; el segundo, para los "servicios de salud, y el tercero, para atender las "necesidades de inversión en infraestructura social "básica en los municipios, dando especial atención "a aquellos con los niveles de marginación más "altos. Como se detallará en el capítulo VII de la "Exposición de Motivos, el propósito de esta "reforma es fortalecer la seguridad jurídica sobre "disponibilidad de recursos públicos para las "entidades federativas y los municipios, precisar "las responsabilidades que tienen las tres órdenes "de gobierno en la ejecución, vigilancia y rendición "de cuentas sobre la aplicación de los mismos.--- "El Proyecto de Presupuesto de Egresos incluye un "nuevo Ramo presupuestario, denominado "Aportaciones Federales a Entidades y Municipios, "en que se presupuestarán los recursos de los tres "fondos ya descritos. Con la incorporación de este "Ramo, la Honorable Cámara de Diputados podrá "conocer con mayor precisión y claridad los "recursos que se propone destinar a los fines "mencionados. De este modo y, además, mediante "el fortalecimiento sustancial de otros programas "descentralizados de gasto contenidos en este "Proyecto de Presupuesto de Egresos, podremos "hacer más estrecho el vínculo entre la población y "los responsables inmediatos de la prestación de "los citados servicios públicos, quienes "dispondrán de recursos para atender las "demandas ciudadanas. Al fortalecer la "cooperación y la coordinación recíproca entre los "tres órdenes de gobierno, estas acciones "contribuirán a vigorizar el Pacto Federal y el "avance integral de la República".

Del mismo modo, de la citada exposición de motivos, se aprecia que estas aportaciones federales se crearon para complementar las participaciones federales (ramo 0028) que reciben los Estados y Municipios bajo un esquema totalmente diverso que se desarrollará más adelante.

En efecto, en primer lugar debe precisarse que la Ley de Coordinación Fiscal se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho y su última reforma se publicó el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; sin embargo, para el presente

estudio sólo se atenderá a la Ley reformada hasta el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Las circunstancias básicas que se tomaron en cuenta para la elaboración de la citada ley, según la exposición de motivos formulada por el Ejecutivo Federal son las siguientes:

"La Constitución Política de los Estados Unidos "Mexicanos no ha separado las fuentes de "tributación que deban corresponder a cada uno de "los niveles de gobierno, con la sola excepción de "la fracción XXIX del artículo 73 que se adicionó a "la Carta Fundamental y que reservó algunas "fuentes que se decidió quedaran gravadas "exclusivamente por la Federación; pero en dicha "fracción no quedan comprendidos los principales "impuestos federales y, por otra parte, nuestra "Carta Fundamental no establece impuestos "reservados en forma exclusiva a los Estados, ni a "los municipios".

"La circunstancia de que los textos "constitucionales no delimitan campos impositivos "federales; estatales y municipales, determina que "tanto el Congreso de la Unión, como las "Legislaturas de los Estados, puedan establecer "contribuciones sobre las mismas fuentes. Cuando "ello ocurre se da lugar a la doble o múltiple "tributación interior, consecuencia de la "concurrencia o coincidencia en el ejercicio de "facultades impositivas de Federación y Estado".

"La prudencia de los Legisladores federales y "estatales los ha llevado incluso a buscar acuerdos "para que sólo una u otros graven determinada "materia, compartiendo el producto de su "recaudación y estableciendo las bases de "colaboración administrativa en determinados "impuestos de interés común para Federación y "Estados. Surgió así el procedimiento de "participaciones en impuestos, expresamente "reconocido en la Constitución Política, que ha "constituido uno de los principales alivios a los "problemas derivados de la concurrencia "impositiva".

"El acuerdo entre Federación y Estados no se ha "limitado a las fuentes de impuestos señaladas en "la Constitución, sino que se ha extendido a otras "contribuciones federales en las cuales los "Estados y los Municipios reciben participación a "cambio de abstenerse de gravar la misma fuente. "Esta abstención no constituye una restricción o "limitación que vulnere la soberanía de los "Estados; por el contrario, dicha soberanía se "manifiesta y se ejerce cuando una entidad "federativa decide dejar en suspenso la aplicación "de sus propias leyes o no dictarlas, a cambio de "recibir participación en el impuesto establecido "por la Federación".

"Paralelamente y en muy diversas materias, los "Estados se han venido acogiendo a "participaciones otorgadas por las leyes federales, "absteniéndose de gravar las mismas materias en "los términos previstos en aquellas leyes; pero "como el sistema de participaciones se desarrolló "históricamente en diversas etapas y conforme a "diferentes criterios, resulta que el conjunto del "sistema tributario federal, falta racionalmente en "cuanto a la determinación de los impuestos en "que sí se otorgan participaciones y aquellos otros "cuya recaudación se destina exclusivamente a la "Federación. Falta también uniformidad y armonía "en cuanto al monto y procedimiento para distribuir "las participaciones entre las diversas entidades "federativas".

"Los Estados de la República, en ejercicio de su "soberanía, podrán solicitar adherirse al Sistema "Nacional de Coordinación Fiscal, en cuyo caso, la "Secretaría de Hacienda celebrará con ellos, un "convenio de coordinación fiscal que les dará "derecho a participar en un Fondo General de "Participaciones formado con el 13.0% de la "recaudación federal total que se incrementará con "el porciento que represente en dicho ingreso de la "Federación la recaudación de gravámenes locales "o municipales que las entidades convengan en "derogar o dejar en suspenso. Dicho fondo será "distribuido entre los Estados conforme a las "bases establecidas en la Ley que se propone y "que se desarrollen en los citados convenios. A "cambio de esta participación, los Estados no "impondrán gravámenes o los mantendrán en "suspenso, sobre las materias establecidas en las "leyes federales relativas a impuestos "participables, modalidad que no se hace extensiva "en relación a otros impuestos en los cuales no ha "existido participación a los Estados".

"El acto de adhesión por convenio al Sistema "Nacional de Coordinación Fiscal tiene importancia "relevante para los Estados, ya que deja en "suspenso, mientras dura el convenio, algunos de "los impuestos establecidos por su Legislatura o "impone abstención al propio Estado, por todo lo "cual el convenio se rodea de formalidades "especiales, debiendo ser aprobado, según lo "dispongan las normas locales, por la Legislatura "de cada entidad".

"Los Estados de la República, si así lo prefieren, "pueden no adherirse al Sistema Nacional de "Coordinación Fiscal, en cuyo caso, podrán "establecer libremente los impuestos que

estimen "convenientes, salvo los señalados en la fracción "XXIX del artículo 73 constitucional, en relación "con los cuales seguirán recibiendo las "participaciones señaladas en las leyes federales".

"Como el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, "que se basará en las leyes y se desarrollará en "convenios que celebren los Estados y la "Federación, implica que los Estados no graven las "fuentes en relación con las cuales reciben "participaciones, en convenio, si se busca "preservar dicho Sistema y facilitar su "desenvolvimiento futuro, que se establezcan "procedimientos para resolver los problemas que "pudieren presentarse y mantener las relaciones "entre la Federación y las Entidades en un plano "constante de entendimiento".

"La colaboración administrativa de los Estados con "la Federación para realizar tareas de recaudación, "fiscalización y en general de administración de "impuestos federales, ha sido una fecunda "experiencia que ha demostrado un amplio grado "de desarrollo de la capacidad administrativa de las "entidades federativas. Esta colaboración ha hecho "posible, en los últimos años, obtener un "importante aumento en la recaudación del "impuesto federal sobre ingresos mercantiles y de "otros impuestos de la Federación. Por esta razón "la Iniciativa propone institucionalizar los "convenios entre la Federación y los Estados para "realizar de común acuerdo tareas de "administración fiscal. En el caso del Departamento "del Distrito Federal y dado su carácter de órgano "de la administración pública federal, la "colaboración administrativa se realizará con base "en acuerdos que dicte el Ejecutivo de la Unión".

Así pues, de lo expuesto se advierte que la Ley de Coordinación Fiscal en un principio se elaboró con la finalidad de coordinar el sistema fiscal de la Federación con los Estados, Municipios y Distrito Federal, con el objeto de establecer la participación que correspondería a las haciendas públicas de los citados entes en los ingresos federales, con base en una redistribución de los ingresos que perciben por medio de Convenios de Coordinación Fiscal.

Lo anterior se corrobora de lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que para mayor comprensión del asunto se vuelve a transcribir:

"ARTICULO 1o.- Esta ley tiene por objeto coordinar "el sistema fiscal de la Federación con los de los "Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer "la participación que corresponda a sus haciendas "públicas en los ingresos federales; distribuir entre "ellos dichas participaciones; fijar reglas de "colaboración administrativa entre las diversas "autoridades fiscales; constituir los organismos en "materia de coordinación fiscal y dar las bases de "su organización y funcionamiento.

"Cuando en esta Ley se utilice la expresión ""entidades", ésta se referirá a los Estados y al "Distrito Federal.

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público "celebrará convenio con los Estados que soliciten "adherirse al Sistema Nacional de Coordinación "Fiscal que establece esta Ley. Dichos Estados y el "Distrito Federal participarán en el total de "impuestos federales y en los otros ingresos que "señale esta Ley mediante la distribución de los "fondos que en la misma se establecen".

Ahora bien, dichos recursos referentes a las participaciones federales, como ya se precisó se regulan en el ramo 0028 del Presupuesto de Egresos, por lo que, como se señaló anteriormente, los recursos del ramo 0033 se instauraron en apoyo a las referidas participaciones, pero con una naturaleza enteramente distinta.

Así pues, hasta antes de la reforma publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, la Ley de Coordinación Fiscal en sus cuatro capítulos regulaba lo concerniente al Sistema de Coordinación Fiscal por virtud del cual los Estados y municipios reciben las participaciones contempladas en el ramo 0028 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Ahora bien, a partir de la citada reforma se adicionó el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal que regula precisamente las aportaciones federales que se encuentran contenidas en el ramo 0033 del Presupuesto de Egresos citada y que se reitera, se trata de recursos federales que se establecen para el fortalecimiento de las haciendas locales y municipales en apoyo a actividades específicas.

De la exposición de motivos de la multireferida reforma destaca, lo siguiente:

"La Iniciativa de reformas y adiciones que someto a "la consideración de esa Soberanía, tiene por "objeto principal coadyuvar al fortalecimiento de "las haciendas locales e inclusive municipales en "dos ámbitos: el presupuestario a través de la "institucionalización de la provisión de recursos "federales en apoyo a actividades específicas; y en "el tributario mediante la asignación a los "municipios del 50% de la recaudación que se "obtenga a partir del 1o. de enero de 1998, respecto "de las personas ahora ubicadas en la economía "informal, que se incorporen al Registro Federal de "Contribuyentes.

"Con esta primera parte de la Iniciativa, se propone "a esa Soberanía institucionalizar el apoyo que la "Federación ofrece como complemento a los "recursos que a las entidades federativas y a los "municipios les corresponden como participación "en la recaudación federal.

"Así pues, en adición y con independencia al "referido concepto de recaudación federal "participable, se propone dar permanencia a los "recursos que la Federación aporta para el mejor "desarrollo de las actividades que se han "descentralizado a las entidades en los últimos "años. Con tal motivo, propongo la adición a la Ley "de Coordinación Fiscal de un nuevo capítulo el V, "que se denomine "De los Fondos de Aportaciones "Federales" destinados específicamente a "coadyuvar a las siguientes actividades de las "entidades federativas y, en su caso, de los "municipios:

"1.- La Educación Básica;

"2.- Los Servicios de Salud; y

"3.- La Infraestructura Social Municipal.

"En consonancia con esta Iniciativa, y en atención "a la demanda de fortalecer el nuevo Federalismo, "el Ejecutivo a mi cargo ha sometido a la "consideración de la H. Cámara de Diputados, "como parte del Proyecto de Presupuesto de "Egresos de la Federación para el ejercicio de 1998, "la incorporación de un nuevo ramo -el 33- por "medio del cual se transferirán los recursos para la "constitución de sendos Fondos de recursos de "origen federal.

"Los recursos que hasta ahora han sido "canalizados de acuerdo a los Presupuestos de "Egresos de la Federación por la vía del ramo 25, "se ubicarían en el nuevo ramo 33, conformando el "Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, "cuya creación propongo con la presente Iniciativa, "exclusivo para la operación de los servicios de "educación básica y normal, en los términos de los "artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación. "Por su parte, los recursos necesarios para las "funciones que la propia Ley reserva a la "Federación en materia de educación básica, "seguirán siendo asignados al ramo 11.

"Una característica destacada del Fondo de "Aportaciones para los Servicios de Salud de las "entidades, que se propone en esta Iniciativa y "cuyo soporte presupuestario lo constituiría "también el nuevo ramo 33 del Presupuesto de "Egresos de la Federación, al que ya he hecho "referencia, es la transparencia de la distribución "presupuestaria. Es por ello que, el monto de las "aportaciones para dicho Fondo, parte de la "premisa de preservar la capacidad operativa de "las entidades y, posteriormente, busca una mayor "equidad del gasto público al distribuir los "recursos remanentes mediante una fórmula de "asignación.

"Conviene ahora que se otorgue a la transferencia "de recursos el mismo rango que se dio a los "ámbitos de competencias, mediante su expresión "en un nuevo capítulo de la Ley de Coordinación "Fiscal.

"Reitero que en el proyecto de Presupuesto que "estoy presentando a la H. Cámara de Diputados, "dentro del ya mencionado nuevo ramo 33, se "consideran también los recursos que inicialmente "constituirán el Fondo de Aportaciones para los "Servicios de Salud, en una mecánica equivalente a "lo ya descrito en esta exposición de motivos.

"La Iniciativa que someto a la consideración de esa "Soberanía, introduce al régimen jurídico de "aportaciones federales, las erogaciones "destinadas al Fondo de Aportaciones para la "Infraestructura Social Municipal, que han venido "siendo reguladas por el Presupuesto de Egresos "de la Federación, como parte de los recursos del "Ramo 26, "Superación de la Pobreza".

"En esta Iniciativa se propone que en los "Presupuestos de Egresos de la Federación, se "determinen anualmente recursos federales por un "monto equivalente, sólo para efectos de "referencia, al 2.037% de la recaudación federal "participable, a efecto de contar con un marco que "servirá de base para la determinación del monto "de las aportaciones federales que anualmente "integrarán el Fondo de Aportaciones para la "Infraestructura Social Municipal. Cabe señalar que "estas aportaciones son independientes y "adicionales a las participaciones de los estados y "municipios en la recaudación federal participable, "ya que constituyen recursos federales diferentes.

"A efecto de garantizar el cumplimiento de los "objetivos y estrategias de la política de desarrollo "social y de superación de la pobreza, se propone "que los recursos del Fondo de Aportaciones para "la Infraestructura Social Municipal que reciban los "municipios, se destinen exclusivamente a "financiar obras, acciones sociales básicas e "inversiones que beneficien directamente a "sectores de su población en condiciones de "rezago social y de pobreza extrema, en los rubros "que expresamente se señalan, destinándose hasta "un 2%

de dichos recursos al desarrollo "institucional municipal, a través de la formulación "de programas específicos que serán convenidos "entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría "de Desarrollo Social, el gobierno estatal "correspondiente y el municipio de que se trate.

"A fin de que los recursos que integran este Fondo "se distribuyan equitativamente entre las entidades "federativas, conforme a la situación de pobreza "extrema prevaleciente en cada una de ellas, se "incorpora una fórmula que permite identificar los "índices de pobreza extrema de cada entidad "federativa, mediante criterios definidos y "transparentes, en razón de necesidades básicas "definidas por ingreso por persona, nivel educativo "promedio por hogar, disponibilidad de espacio de "la vivienda, disponibilidad de electricidad-"combustible para cocinar y disponibilidad de "drenaje, que sirven para comparar la situación de "pobreza de cada familia, para traducirla a niveles "de pobreza extrema federativa a nivel nacional.

"Al efecto, la Iniciativa prevé que las normas y "criterios aplicables a esta fórmula sean "establecidos por la Secretaría de Desarrollo "Social, conforme a la competencia que le "determina el artículo 32 de la Ley Orgánica de la "Administración Pública Federal.

"Sin embargo, el esfuerzo descentralizado no sería "eficiente si en razón del origen federal de los "recursos que originalmente constituyen tales "fondos, su operación, manejo y supervisión se "sujetara a disposiciones federales, "anteponiéndolas a la legislación aplicable en cada "entidad federativa y, en su caso, municipal.

"En tal virtud, como corolario del nuevo capítulo "que propongo incorporar a la Ley de Coordinación "Fiscal, planteo la conveniencia de establecer de "manera expresa con el fin de vincular de manera "más eficiente los recursos aportados por la "Federación, con sus beneficiarios, y "responsabilizarlos de su utilización, que los "mismos serán administrados y ejercidos por los "gobiernos de las propias entidades federativas y, "en su caso, de los municipios, que los reciban, de "acuerdo a la legislación que en cada uno de ellos "resulte aplicable; asimismo, que las aportaciones "que con cargo a los fondos ya descritos reciban "las entidades federativas y, en su caso, los "municipios, así como sus correspondientes "accesorios, no podrán ser embargados, gravados, "ni afectos en garantía, por parte de los gobiernos "que los reciban, quienes tampoco podrán "destinarlos a fines diversos a los que, para cada "Fondo limita la Ley".

De dicha exposición de motivos se advierte, lo siguiente:

a) La finalidad de dichas aportaciones es el fortalecimiento de las haciendas locales y municipales.

b) La reforma busca institucionalizar el apoyo que la Federación ofrece como complemento a los recursos que a las entidades federativas y a los municipios les corresponden como participación en la recaudación federal (ramo 0028).

c) Las aportaciones federales estarán contenidas en el ramo 0033 del Presupuesto de Egresos de la Federación y se trata de recursos de origen federal.

d) Los recursos que anteriormente se canalizaban por vía del ramo 0025 del Presupuesto de Egresos Federal, con la reforma se integran dentro del ramo 0033 el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica con la finalidad exclusiva de operar los servicios de educación básica y normal.

e) El monto de las aportaciones para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud busca preservar la capacidad operativa de las autoridades y, posteriormente lograr una mejor equidad del gasto público al distribuir los recursos remanentes mediante una fórmula de asignación.

f) El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal hasta antes de la reforma se contenían en el ramo 0026 del Presupuesto de Egresos Federal.

g) Las aportaciones federales son independientes y adicionales a las participaciones de los estados y municipios en la recaudación federal participable (ramo 0028), por constituir recursos federales diversos.

h) Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que reciban los Municipios deberán destinarse a financiar obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente sectores de su población en condiciones de rezago social y de pobreza extrema en los rubros que expresamente se señalan.

i) Se deberá destinar hasta un 2% de los recursos precisados anteriormente al desarrollo institucional municipal, a través de la formulación de programas específicos que serán convenidos entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno estatal correspondiente y el municipio de que se trate.

Estos convenios tienen como fundamento el artículo 116, fracción VII de la Constitución Federal que como ya se precisó anteriormente permite que la Federación convenga con los Estados y estos con los Municipios la asunción por parte de estos últimos del ejercicio de funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario, que

en principio corresponde a la Federación, como es el caso del ejercicio de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ramo 0033.

j) Para la distribución del referido fondo se incorpora una fórmula que permite identificar los índices de pobreza extrema de cada entidad federativa, mediante criterios definidos y transparentes.

k) Las normas y criterios aplicables a la citada fórmula serán establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social.

Debe señalarse que el multicitado capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal conforme al cual se distribuyen los recursos del citado Fondo para la Infraestructura Social Municipal del ramo 0033, retoma los principios de distribución de recursos que hasta antes del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y ocho, se contemplaba exclusivamente para distribuir los recursos correspondientes al ramo 0026 “Superación de la Pobreza”.

Con la inclusión del citado capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal, se institucionalizan diversas figuras que anteriormente se plasmaban en el propio Presupuesto de Egresos sólo respecto al ramo 0026, como son:

a) Los Fondos que integran el ramo 0033.

b) Se precisan los elementos con base en los cuales se distribuirán los recursos de los diversos fondos que integran este rubro.

c) Se establece claramente la actuación tanto de las autoridades Federales, locales y municipales en la planeación de la aplicación de los recursos.

d) Se precisa la fórmula actuarial conforme a la cual se asignaron los recursos para promover la equidad en los servicios de salud.

e) Se proporcionan los porcentajes y parámetros conforme a los cuales se determinará el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

f) Se precisa el destino que deberá darse a las aportaciones federales que integran el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Estados y Municipios.

g) Se establecen las obligaciones que nacen para los Estados y Municipios respecto de dichas aportaciones, como son: hacer del conocimiento de sus habitantes de los montos que reciban, obras y acciones a realizar, metas, beneficiarios, etc.

h) Se faculta al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social para distribuir el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y a determinar la fórmula actuarial para tal efecto.

i) Se precisa la obligación que tiene el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social para publicar en el **Diario Oficial de la Federación** las normas establecidas para necesidades básicas y valores para el cálculo de la fórmula y la estimación de los porcentajes de participación porcentual que se asignará a cada estado.

j) Se determina la forma en que los recursos del Fondo para la Infraestructura Social serán distribuidos por lo Estados a los Municipios, básicamente con base en una fórmula igual a la empleada para distribuir los recursos entre los Estados.

k) Se señala la obligación de la Secretaría de Desarrollo Social para publicar en el **Diario Oficial de la Federación** en los primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate y en apoyo de los Estados en la aplicación de sus fórmulas, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal para cada Estado.

l) Se establece que los Estados con base en lineamientos dados por la ley y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal de sus municipios, la cual junto con la fórmula y su respectiva metodología deberá ser publicada en sus respectivos órganos oficiales de difusión a más tardar el treinta y uno de enero del ejercicio fiscal aplicable.

m) Se instituye la obligación que tienen los Estados de enterar a sus respectivos municipios los recursos que les correspondan, conforme al calendario de enteros en que la Federación lo hace en favor de los Estados.

n) Se establece la forma en que deberá determinarse el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal y los rubros a los que deberá destinarse.

o) Se determina la obligación a cargo del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para distribuir el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal tomando como base el número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, así como la obligación de las entidades federativas de hacer lo propio respecto de los Municipios.

p) Se da la pauta para determinar el monto de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples y los rubros en que deberá ejercerse.

q) Se remite al Presupuesto de Egresos correspondiente para conocer las asignaciones y reglas para la distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples entre las entidades federativas.

r) Se prevé que los gobiernos de los Estados y en su caso los Municipios, administrarán y ejercerán los recursos correspondientes de conformidad con la legislación local que les sea aplicable, así como la responsabilidad de las autoridades de control y supervisión del ejercicio del gasto en cada entidad federativa, de ejercer la vigilancia directa que le corresponda, para constatar la correcta aplicación de los recursos que reciban de tales fondos y de fincar, en su caso, las responsabilidades administrativas correspondientes.

Esta remisión que se hace a la legislación local para la administración y ejercicio de estos recursos, sólo se refiere a la administración interna (Estado) que se realizará de los recursos que previamente se determinen tanto en el convenio correspondiente celebrado entre el Ejecutivo Federal y los Estados, como los que sean determinados por las diversas dependencias federales involucradas, pues por tratarse del ejercicio de recursos federales éstos deberán regirse necesariamente tanto por el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal como por lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos correspondiente.

Del mismo modo, la responsabilidad administrativa por el manejo de estos fondos a que se refiere esta disposición se basa en la legislación local pero como se verá en el párrafo siguiente con independencia de esta responsabilidad por tratarse de recursos federales procederá también fincar responsabilidad administrativa, civil y penal conforme a la Legislación Federal, e inclusive política en términos del artículo 110, párrafo segundo de la Constitución Federal.

s) Se señala que no obstante lo anterior, las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivados de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran las autoridades locales o municipales exclusivamente con motivo de la desviación de los recursos recibidos de los Fondos integrantes del ramo 0033, para fines distintos a los previstos en la ley, serán sancionados en términos de la legislación federal.

En adición a lo anterior, debe señalarse que los artículos 26, 29 y 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, señalan:

> *"ARTICULO 26.- Con cargo a las aportaciones del "Fondo de Aportaciones para la Educación Básica "y Normal que les correspondan, los Estados y el "Distrito Federal recibirán los recursos económicos "complementarios que les apoyen para ejercer las "atribuciones que de manera exclusiva se les "asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 "de la Ley General de Educación".*
>
> *"ARTICULO 29.- Con cargo a las aportaciones que "del Fondo de Aportaciones para los Servicios de "Salud, les correspondan, los Estados y el Distrito "Federal recibirán los recursos económicos que los "apoyen para ejercer las atribuciones que en los "términos de los artículos 3o., 13 y 18 de la Ley "General de Salud les competan".*
>
> *"ARTICULO 40.- Las aportaciones federales que "con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples "reciban los Estados de la Federación y el Distrito "Federal se destinarán exclusivamente al "otorgamiento de desayunos escolares, apoyos "alimentarios y de asistencia social a la población "en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la "población en desamparo, así como a la "construcción, equipamiento y rehabilitación de "infraestructura física de los niveles de educación "básica y superior en su modalidad universitaria".*

De lo anterior, se advierte que los Fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, de Aportaciones para los Servicios de Salud y de Aportaciones Múltiples, se diseñaron para ser distribuidos entre los Estados y el Distrito Federal y no así para los Municipios.

De lo expuesto con anterioridad, se concluye que toda vez que la partida presupuestaria del ramo 0033 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y ocho, se refiere a recursos federales, cuya ejecución corresponde a las autoridades federales en términos de los artículos 3 y 19 del propio Presupuesto de Egresos de la Federación y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal y 31 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, además atendiendo a que dichos recursos no fueron determinados como ingresos de los municipios actores por la legislatura local quien es la única facultada para determinar las participaciones federales que corresponden a los municipios en términos del artículo 115, fracción IV, inciso b) de la Constitución General de la República, debe estimarse que los citados recursos, aunque ingresan a la hacienda municipal, no están comprendidos dentro del régimen de libre administración hacendaria.

De todo lo expuesto, podemos concluir lo siguiente:

a) Las participaciones federales que forman parte de las haciendas municipales en términos del artículo 115, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal, están previstas en el ramo 0028 del Presupuesto de Egresos Federal y están regulados en los capítulos primero al cuarto de la Ley de Coordinación Fiscal.

b) Las citadas participaciones federales, integrarán las haciendas municipales, y por ende podrán ser administradas libremente una vez que las legislaturas locales mediante disposiciones generales determinen las bases, montos y plazos para ello.

c) La finalidad de los recursos del ramo 0033, es el fortalecimiento de las haciendas locales y municipales mediante la provisión de recursos federales en apoyo a actividades específicas.

d) Las aportaciones federales previstas en el ramo 0033 del Presupuesto de Egresos Federal se crearon para complementar las participaciones federales (ramo 0028) que reciben los Estados y Municipios bajo un esquema totalmente diferente.

e) Las aportaciones federales previstas en el ramo 0033 del Presupuesto de Egresos de la Federación, están regulados en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

f) Conforme a los artículos 35, párrafo séptimo de la Ley de Coordinación Fiscal, 22, 32, fracciones II, III, V y XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 116, fracción VII de la Constitución Federal, el Ejecutivo Federal celebra con los ejecutivos de los Estados los Convenios de Desarrollo Social con objeto de que los Gobiernos Estatales por conducto de los municipios integrantes de los Estados asuman la ejecución y operación de obras y servicios públicos que acorde con las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Coordinación Fiscal se deben realizar en la ejecución de los recursos federales del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del ramo 0033.

g) Toda vez que el objeto de los citados convenios, es la asunción por parte de los Estados por conducto de sus municipios de la ejecución de recursos federales, dichos convenios se celebran con los ejecutivos locales sin que en modo alguno participen los Congresos Estatales en su determinación por no referirse a ingresos locales.

h) El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal del ramo 0033 del Presupuesto de Egresos Federal en términos del artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal y 31, fracciones XXIII y XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal son distribuidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los Estados y estos a los Municipios en los términos precisados por la Ley de Coordinación Fiscal por tratarse de recursos federales.

Precisado todo lo anterior y considerando que las participaciones federales sí forman parte del régimen de libre administración hacendaria, y no así las aportaciones federales, procede ahora entrar el estudio de cada una de las disposiciones impugnadas a efecto de determinar si contravienen dicho régimen tutelado por el artículo 115, fracciones II y IV, inciso b), de la Constitución Federal.

Sirve de apoyo a todo lo expuesto, la tesis de jurisprudencia número 9/2000, del Tribunal Pleno, pendiente de publicación, que dice:

> *"HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y "APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE "DE AQUELLA, PERO SOLO LAS PRIMERAS "QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL REGIMEN DE "LIBRE ADMINISTRACION HACENDARIA. Las "participaciones y aportaciones federales son "recursos que ingresan a la hacienda municipal, "pero únicamente las primeras quedan "comprendidas dentro del régimen de libre "administración hacendaria de los Municipios "conforme a lo dispuesto por el artículo 115, "fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; "por su parte, las aportaciones federales no están "sujetas a dicho régimen, dado que son recursos "netamente federales que se rigen por "disposiciones federales."*

Los artículos de la Ley impugnada que expresamente se combaten en el presente concepto de invalidez, son: 19 al 22, 35, 36, 47, 48, 53 al 56, 74 al 76, 81, 83, 84 y 96.

Los artículos 19 al 22 de la Ley combatida, pertenecen al Título Tercero, Capítulo Unico, "DEL FORTALECIMIENTO Y LA EQUIDAD MUNICIPAL". Dichas disposiciones establecen:

> *"ARTICULO 19.- El Gobierno del Estado transferirá "recursos y responsabilidades a los "Ayuntamientos, fortaleciendo los instrumentos de "coordinación entre ambos para apoyar la política "social que asegure la prioridad en la atención a "regiones y grupos sociales rezagados".*
>
> *"ARTICULO 20.- En la distribución de los recursos "a que se refiere esta Ley, el Estado establecerá "criterios de equidad mediante la aplicación de "fórmulas que procuren la integración al desarrollo, "de las regiones que conforman el territorio, "mismos que harán énfasis en el combate a la "pobreza y en la superación de los rezagos "sociales tanto rurales como urbanos".*
>
> *"ARTICULO 21.- La política de equidad municipal "deberá atacar los desequilibrios entre las distintas "regiones, a través de la canalización de recursos y "la creación de condiciones adecuadas para la "inversión productiva".*
>
> *"ARTICULO 22.- La coordinación entre el Estado y "municipios deberá encauzarse a la armonización "en los procesos de planeación, administración, "gasto y su ejecución, para la justa y equitativa "distribución de los fondos, a efecto de fortalecer a "los municipios de la entidad".*

De las disposiciones transcritas puede advertirse que no se impone obligación alguna a los Ayuntamientos que pueda implicar contravención al régimen de libre administración hacendaria o afectación al libre manejo de su patrimonio, y tampoco establecen prohibición alguna que impida el ejercicio de tales

derechos constitucionales, pues únicamente lo que prevén son lineamientos generales a través de los cuales se busca garantizar el fortalecimiento y equidad municipal.

En efecto, las disposiciones de referencia establecen que el Gobierno del Estado debe transferir recursos y responsabilidades a los Ayuntamientos, fortaleciendo los instrumentos de coordinación entre ambos para apoyar la política social que asegure la prioridad en la atención a regiones y grupos sociales rezagados (artículo 19); que en la distribución de los recursos que prevé la Ley impugnada, el Estado establecerá criterios de equidad mediante la aplicación de fórmulas que procuren la integración al desarrollo, el combate a la pobreza y la superación de los rezagos sociales (artículo 20); que la política de equidad municipal debe atacar los desequilibrios entre las distintas regiones mediante la canalización de recursos y creación de condiciones para la inversión productiva (artículo 21); y, que la coordinación entre el Estado y municipios debe encauzarse a la armonización en los procesos de planeación, administración, gasto y su ejecución, para la justa y equitativa distribución de los fondos, a efecto de fortalecer a los municipios de la entidad (artículo 22).

Como se aprecia, las disposiciones citadas efectivamente no establecen prohibiciones u obligaciones a cargo de los municipios que delimiten su facultad de libre manejo de su patrimonio o de libre administración hacendaria, pues únicamente establecen criterios generales a los que debe atenderse para el fortalecimiento y equidad municipal, como parte de una política social para dar atención a regiones y grupos sociales rezagados mediante la asignación de los recursos correspondientes que deben ser asignados en forma justa y equitativa entre los municipios de la entidad.

Por otra parte, los artículos 35 y 36 forman parte del Título cuarto, “DE LA COORDINACION HACENDARIA”, Capítulo II “DE LA COORDINACION EN INGRESOS Y DEL SISTEMA PARA LA DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS”, Sección II “DEL SISTEMA PARA LA DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS”. Tales preceptos disponen:

> *"ARTICULO 35.- Los fondos participables que "integran el sistema para la distribución de "participaciones a los municipios son:*
>
> *"I.- Fondo de Desarrollo Municipal cuya “distribución se determinará en proporción directa “al número de habitantes de cada municipio y a “criterios de equidad y marginación; y,*
>
> *"II.- Fondo para Incentivar y Estimular la "Recaudación Municipal”.*
>
> *"ARTICULO 36.- El Fondo de Desarrollo Municipal "se integrará con el 20% de las participaciones que "reciba el Estado del Fondo General de "Participaciones, establecido en la Ley de "Coordinación Fiscal incluyendo sus incrementos, "así como de la recaudación que se realice en el "Estado por concepto de los impuestos Sobre "Tenencia o Uso de Vehículos y Automóviles "Nuevos, y de la participación que corresponda al "Estado del Impuesto Especial Sobre Producción y "Servicios aplicado a la cerveza, bebidas "alcohólicas y tabacos labrados”.*

Las disposiciones de mérito establecen cuáles son los fondos participables que integran el sistema para la distribución de participaciones a los municipios, así como la forma en que se determina la distribución e integración del Fondo de Desarrollo Municipal.

Como se aprecia, tales disposiciones no afectan en forma alguna las prerrogativas municipales anteriormente mencionadas, ya que no se limita o impone obligación alguna a los municipios, que afecte su derecho a manejar libremente su patrimonio o de administrar libremente su hacienda, ya que únicamente precisan, dentro del rubro de participaciones federales, los fondos participables que integran el sistema para la distribución de participaciones a los municipios, y la forma de distribución e integración del Fondo de Desarrollo Municipal.

Los artículos 47 y 48, correspondientes al mismo Título “DE LA COORDINACION HACENDARIA”, Capítulo IV “DE LA COORDINACION EN GASTO Y PATRIMONIO”, disponen:

> *"ARTICULO 47.- El Estado y los municipios podrán "coordinarse en materia de gasto público con el "objeto de realizar programas que busquen "satisfacer las necesidades colectivas, mediante la "realización de obras y prestación de servicios "públicos que demande la colectividad”.*
>
> *"ARTICULO 48.- Dentro de sus respectivas esferas "de competencia y atribuciones, el Estado y los "municipios involucrados realizarán la "coordinación en gasto público a través del "cumplimiento de normas de orden público, "acuerdos y convenios”.*

Como se advierte de las disposiciones transcritas, en éstas tampoco se impone obligación o prohibición a los municipios que afecte sus garantías de libre manejo de su patrimonio o de libre administración hacendaria, ya que tan sólo prevén la coordinación que pueden establecer el Estado y los municipios en materia de gasto público.

Respecto de los demás artículos que se impugnan en el presente concepto de invalidez, concretamente el 53, 54, 55, 56, 74, 75, 76, 81, 83, 84 y 96, todos éstos forman parte del Título Quinto de la Ley impugnada “DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES”. Tales disposiciones establecen:

"ARTICULO 53.- De acuerdo a lo establecido en el "Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y en el "Decreto del Presupuesto de Egresos de la "Federación, el Estado recibirá los recursos a que "se refiere este Título, para su administración, "distribución, ejercicio en los casos que proceda, y "supervisión, clasificados en los fondos "siguientes:
"I.- De Aportaciones para la Educación Básica y "Normal;
"II.- De Aportaciones para los Servicios de Salud;
"III.- De Aportaciones para la Infraestructura Social;
"IV.- De Aportaciones para el Fortalecimiento de los "Municipios; y
"V.- De Aportaciones Múltiples".
"ARTICULO 54.- Los fondos a que se refiere este "Título se entregarán en la forma y tiempos "establecidos en esta Ley y para tales efectos no "procederán anticipos".
"ARTICULO 55.- El Estado podrá convenir con los "municipios el destinar el 2% del monto total de los "fondos a que se refieren las fracciones III y IV del "artículo 53 de esta Ley, para el control, la "vigilancia y la supervisión de los mismos".
"ARTICULO 56.- Cuando los recursos a que se "refiere este Título sean administrados y ejercidos "por el Estado, éste deberá observar las "disposiciones contenidas en esta Ley; la Ley de "Obras Públicas del Estado; Ley de Adquisiciones, "Arrendamientos y Prestación de Servicios del "Estado de Puebla; Ley Estatal de Presupuesto, "Contabilidad y Gasto Público y demás "disposiciones estatales aplicables. Asimismo, se "observarán los criterios de racionalidad, "austeridad y disciplina presupuestales "establecidos en la Ley de Egresos del Estado.
"Cuando estos recursos sean administrados y "ejercidos por los Ayuntamientos, éstos deberán "ajustarse en lo procedente, a lo dispuesto en el "párrafo anterior".
"ARTICULO 74.- Los Ayuntamientos presentarán "ante el Gobierno del Estado, para su análisis y "aprobación, los expedientes técnicos de las obras "aprobadas por sus comités de planeación".
"ARTICULO 75.- Una vez aprobados los "expedientes técnicos por el Gobierno del Estado, "éste procederá a la ministración de recursos al "Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el "artículo 73 de esta Ley".
"ARTICULO 76.- Para continuar con la ministración "de los recursos por parte del Gobierno del Estado, "los Ayuntamientos comprobarán con la "documentación correspondiente, la aplicación de "los recursos a que se refiere este capítulo".
"ARTICULO 81.- Para el óptimo aprovechamiento "de los recursos, los municipios aplicarán los "recursos de este fondo de la siguiente manera:
"I.- Prioritariamente para la amortización de "empréstitos contraídos;
"II.- Podrán convenir con el Estado el destinar "cuando menos el 10% de este fondo para el pago "de sus necesidades vinculadas a la seguridad "pública en el marco del Sistema Nacional de "Seguridad Pública; y,
"III.- Canalizar el remanente a la realización de obra "física en Juntas Auxiliares y en colonias "populares, dando prioridad al mantenimiento y "reparación de espacios educativos. Dichas obras "serán consensadas y aprobadas en el seno del "órgano municipal de planeación.
"En cualquier caso los municipios deberán "presentar los presupuestos con cargo a este "fondo a la Contaduría Mayor del H. Congreso del "Estado, para efectos de la revisión a que se refiere "el tercer párrafo del inciso c) de la fracción IV, del "artículo 115 Constitucional".
"ARTICULO 83.- Para la aplicación de los recursos "a que se refiere la fracción III del artículo 81 del "presente ordenamiento, se estará a lo dispuesto "por los artículos del 74 al 76 de esta Ley".
"ARTICULO 84.- Los municipios deberán reportar al "Gobierno del Estado a través de la Secretaría de "Finanzas al inicio de cada ejercicio presupuestal y "de manera permanente, la deuda directa y "contingente a cargo de su Ayuntamiento y de sus "organismos públicos descentralizados, con el "objeto de programar el saneamiento de su deuda, "estableciendo el tiempo y formas de pago".
"ARTICULO 96.- El Gobierno del Estado podrá "suspender a los Ayuntamientos las ministraciones "de los recursos a que se refieren las fracciones III "y IV del artículo 53 de esta Ley, si éstos no "justifican en forma y tiempos establecidos el "avance y aplicación de los mismos, o si se "canalizan a fines distintos a los aprobados en los "órganos de planeación."

Como se aprecia de las disposiciones de referencia, éstas regulan cuestiones propias de las aportaciones federales, las que, como ya quedó expuesto con anterioridad, a diferencia de las participaciones federales, no forman parte de la hacienda municipal que entre dentro del régimen de libre administración hacendaria, por constituir recursos federales que tienen una regulación propia conforme al

Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Coordinación Fiscal, en virtud de la cual los Municipios no tienen libre disposición de los recursos correspondientes.

Por lo tanto, respecto a los fondos que integran las aportaciones federales previstas en el Título Quinto de la Ley impugnada, se concluye que toda vez que de la partida presupuestaria del ramo 0033 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de mil novecientos noventa y ocho, y del capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal que regula dichos recursos, se advierte que éstos son recursos federales, cuya aplicación corresponde a las autoridades federales en términos de los artículos 3 y 19 del propio Presupuesto de Egresos de la Federación, 35 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal y 31 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, además atendiendo a que dichos recursos no fueron determinados por la legislatura local quien es la única facultada para determinar las participaciones federales que corresponden a los municipios en términos del artículo 115, fracción IV, inciso b) de la Constitución General de la República, debe estimarse que los citados recursos, aunque ingresen en la hacienda municipal, no entran dentro del régimen de libre administración hacendaria y, por ende, las disposiciones de la Ley impugnada que regulan los citados recursos federales no violan dicho régimen y, consecuentemente, no existe invasión a la esfera competencial de la parte actora.

No es óbice a lo anterior que el Congreso local precisamente en la Ley impugnada regule las citadas aportaciones federales para que éstas pudieran considerarse como parte de la hacienda municipal sujeta al régimen de libre administración hacendaria, pues el artículo 53 de la ley en cita corrobora lo ya señalado en el sentido de que se trata de recursos federales cuya ejecución corresponde en principio a las autoridades federales, al señalar que:

> *"ARTICULO 53.- De acuerdo a lo establecido en el "Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y en el "Decreto del Presupuesto de Egresos de la "Federación, el Estado recibirá los recursos a que "se refiere este título, para su administración, "distribución, ejercicio en los casos que proceda y "supervisión, clasificados en los fondos "siguientes:…".*

Las demás cuestiones que se alegan en el segundo concepto de invalidez, referentes a las facultades de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y de las Juntas Auxiliares, se analizarán conjuntamente con el primer concepto de invalidez, ya que se relacionan directamente.

OCTAVO.- En el primer concepto de invalidez y en la parte conducente del segundo, se alega violación al artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, ya que en la Ley impugnada se crean autoridades intermedias entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, y con facultades que limitan las correspondientes de estos últimos. Los artículos expresamente impugnados en este aspecto son: 4o., fracciones VII y IX, 8o., tercer párrafo, 13 al 18, 24, fracciones III y V, 30, 42 al 44, 49, 50, 57, 82, 95 y 98 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

A efecto de dilucidar la cuestión planteada, es necesario determinar previamente lo que debe entenderse por autoridad intermedia para los efectos del artículo 115, fracción I, constitucional, ya que dicha figura no se encuentra expresamente definida en el texto constitucional y, por ello, su determinación resulta compleja.

El citado dispositivo fundamental en su fracción I establece:

> *"ARTICULO 115.- Los Estados adoptarán, para su "régimen interior, la forma de gobierno "republicano, representativo, popular, teniendo "como base de su división territorial y de su "organización política y administrativa el municipio "libre, conforme a las bases siguientes:*
>
> *"I.- Cada Municipio será administrado por un "ayuntamiento de elección popular directa y no "habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el "gobierno del Estado".*

De la disposición constitucional transcrita se advierte que cada Municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado.

La prohibición de autoridad intermedia entre Estado y Municipio, a que se refiere la disposición fundamental de referencia, pretende evitar la subsistencia de sistemas viciados que elevaban a ciertas personas “de confianza”, como los llamados “jefes políticos” o “prefectos”, a la calidad de intercesores que, validos de su influencia con los gobernadores, predominaban sobre los mandatarios electos popularmente en el Municipio.

Los antecedentes constitucionales, legislativos e históricos de los que se tiene conocimiento sobre la autoridad intermedia, a saber, son los siguientes:

Según apunta la historia, la institución de los Jefes Políticos tuvo su origen en la Constitución Gaditana de mil ochocientos doce, la que a su vez siguió el modelo francés de la época napoleónica. El antecedente francés consagró, en la época moderna, ese régimen que intercepta las relaciones entre la vida local y la autoridad central, mediante una autoridad intermedia, colocada sobre el Ayuntamiento y bajo la dependencia directa del Gobierno. Napoleón Bonaparte había realizado esta centralización administrativa, con una variante que se ha conocido como organización descentralizada.

El Estado ejerce el control y el Ayuntamiento conserva su autonomía bajo tales limitaciones. El sistema fue implantado por Napoleón al crear la institución de las Prefecturas, por las cuales el Prefecto, como

delegado del poder ejecutivo, administraba el Departamento y el Subprefecto, como delegado del Prefecto, administraba el Distrito.

La Carta Constitucional, dada por Luis XVIII en mil ochocientos catorce, confirmó la existencia del régimen de prefecturas en Francia y había de dar lugar a la expedición de instrucciones a los prefectos, como las que se dictaron en mil ochocientos quince y mil ochocientos dieciséis.

En el Imperio Español, la Constitución de Cádiz, al introducir las Jefaturas Políticas, copió el modelo francés, regulando la organización y funcionamiento de los Ayuntamientos por el Capítulo I del Título IV que lleva la denominación siguiente: "Del Gobierno y Administración de los Pueblos".

En la Constitución expedida por las Cortes Españolas, disponía la existencia de Ayuntamientos para el gobierno interior de los pueblos, debiendo integrarse por alcaldes, regidores, un procurador y un síndico, presididos por el Jefe Político donde lo hubiese o, en su defecto, por el alcalde. Cada provincia estaba a cargo de un Jefe Político y de la Diputación respectiva, compuesta de su presidente, que lo era el Jefe Político, del Intendente y de siete individuos. Las funciones de la Diputación además de políticas, eran de naturaleza predominantemente hacendaria y en el caso de la provincia de México, tanto el Jefe Político como los diputados provinciales, residían en la Capital. Así se desprende de la Constitución Política de la Monarquía Española de marzo dieciocho de mil ochocientos doce, en sus artículos 46, 67, 81, 309, 324, 325, 332 y 337.

La figura del Jefe Político se instituye en nuestro país con motivo de la Constitución de Cádiz, y que sirve de antecedente y base para la emisión de los siguientes ordenamientos en que se reglamenta dicha figura y que son: decreto de veintitrés de mayo de mil ochocientos doce relativo a la "Formación de los ayuntamientos constitucionales" (artículo VII); orden número 105 de "Los jefes políticos no tienen voto en los ayuntamientos; pero sí los alcaldes y procuradores síndicos"; e, "Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias, decretada por las Cortes Generales y Extraordinarias" (artículos 2o., 3o., 6o., 7o., 9o., 11, 16, 17, 18, 19, 22, 23 y 24 y Capítulo III, artículos I al XXXV) de veintitrés de junio de mil ochocientos trece.

De los ordenamientos antes citados destaca lo siguiente:

En un principio el gobierno político de las provincias residía en el Jefe Superior nombrado por el Rey en cada una de ellas, y en cada provincia había una diputación llamada provincial presidida por ese Jefe Superior ante quien tomaban protesta del cargo los alcaldes, quien también debía atender el orden, seguridad de las personas y de sus bienes, de la ejecución de las leyes y órdenes del gobierno y en general todo lo relativo al orden público y prosperidad de la provincia. Asimismo, para el gobierno interior de los pueblos se preveían los ayuntamientos compuestos por el alcalde o alcaldes, regidores y procurador síndico, quienes estaban presididos por el Jefe Político; los Jefes Políticos tenían diversas funciones, entre otras las de tomar protesta a los integrantes de los ayuntamientos (salvo la de los alcaldes que correspondía al Jefe Superior) y de los miembros de las diputaciones provinciales, presidir las juntas de parroquia con asistencia del cura o párroco, así como presidir las juntas electorales de partido.

Además, tocante a los jefes políticos de provincia, en la Instrucción para el gobierno político-económico de las provincias, se establecían ciertas obligaciones a cargo de los Ayuntamientos que constituían, correlativamente, facultades de los citados jefes políticos, entre otras, las siguientes: los Ayuntamientos tenían obligación de enviarles periódicamente una nota relativa a información del registro civil (nacidos, casados y fallecimientos), así como en caso de enfermedades reinantes o epidémicas para que el Jefe Político tomara las medidas pertinentes; tenía que informársele también lo inherente a caminos, calzadas, acueductos u otras cualesquiera obras públicas de la provincia para su conocimiento y atención para el conveniente remedio; los Ayuntamientos tendrían a su cargo aquella intervención que le asignara el Jefe Político en esta materia; se le tenía que dar aviso, para su remedio, de los abusos que se dieran en cuanto a hospitales y casas de expósitos o de beneficencia a cargo de los ayuntamientos; en caso de que éstos tuvieran necesidad de recursos económicos adicionales a los que les eran asignados, para gastos públicos o de utilidad común, deberían acudir al Jefe Político quien lo comunicaría a la diputación provincial; los informes de cuentas anuales de los ayuntamientos, del estado en que se hallen los objetos puestos a su cuidado y de la renovación de sus integrantes, debían informarse directamente al Jefe Político; los vecinos que se sintieran agraviados por providencias económicas o gubernativas dadas por el Ayuntamiento debían acudir al Jefe Político para su resolución; todo lo relativo a bagajes, alojamientos y demás suministros para la tropa debían hacerse siguiendo las órdenes del Jefe Político Superior o del subalterno.

Sumado a todo lo anterior, en caso de amenaza los jefes políticos podían tener temporalmente, además del mando político, el mando militar; tenían el carácter de Señoría u otro mayor o de Excelencia; podían continuar en el mando por tiempo indeterminado, y sólo podían ser removidos o trasladados a voluntad y juicio del gobierno; tenía que cuidar del legal nombramiento de los ayuntamientos y de las elecciones relativas; presidía el ayuntamiento pero sin voto, salvo en casos de empate; como presidente de la diputación provincial tenía que cuidar que se guardara el orden en la provincia para los negocios y para el cumplimiento de las obligaciones y encargos; el Jefe Político era el único conducto de comunicación entre los ayuntamientos y la diputación provincial y entre ésta y el gobierno; sólo el Jefe Político podía circular las

leyes y decretos del gobierno; eran considerados como primeros agentes del gobierno en las provincias pudiendo ejercer incluso algunas facultades del rey; le competía remitir al gobierno la información del registro civil de las provincias, de los problemas de sanidad que se gestaran y de los que se suscitaren con motivo de las elecciones en los ayuntamientos; le correspondía aprobar ciertas cuentas públicas de los ayuntamientos con el visto bueno de la diputación provincial y, en su caso, dar cuenta al gobierno con ellas; debía proponer al gobierno los planes convenientes para el fomento de la agricultura, industria, comercio y todo lo que estimara conveniente para el beneficio de la provincia; le correspondía visar, y expedir los pasaportes en las provincias fronterizas y lo inherente a la salida y entrada de nacionales y extranjeros; cuidar del plan estadístico de la provincia que él debía remitir al gobierno; el Jefe Político tenía la facultad de presidir todas las funciones públicas.

Posteriormente a los ordenamientos antes señalados, con motivo de las Leyes Constitucionales de mil ochocientos treinta y seis, particularmente la Ley Sexta, se instituyó que la República se dividía en Departamentos, éstos en distritos y finalmente éstos en partidos, y que el gobierno interior de los Departamentos estaba a cargo de los gobernadores con sujeción al gobierno general, los distritos a cargo de los prefectos y los partidos a cargo de los subprefectos.

Con esta reforma constitucional se introduce la figura del Prefecto y del Subprefecto, que se reglamenta, en lo que interesa, en los artículos 1o., 4o., 7o., 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29 y 31, de la Sexta Ley.

Conforme a estas disposiciones el Gobernador tenía la facultad de nombrar a los prefectos y de aprobar el nombramiento de los subprefectos del Departamento.

A los prefectos correspondía cuidar en su distrito del orden y tranquilidad pública, con entera sujeción al gobernador; de cumplir y hacer cumplir las órdenes del gobierno particular del Departamento; y, velar sobre el cumplimiento de las obligaciones de los ayuntamientos, y en general, sobre todo lo concerniente al ramo de policía.

Las funciones del subprefecto en el partido, eran las mismas que las del prefecto en el Distrito, pero con sujeción a éste y, por su medio, al gobernador.

Se preveían los ayuntamientos en las capitales de Departamento, cuya integración se fijaba por las juntas departamentales respectivas y con acuerdo del gobernador. En esta época los ayuntamientos tenían a su cargo cuidar de las cárceles, hospitales y casas de beneficencia públicas, escuelas de primera enseñanza, construcción y reparación de puentes, calzadas y caminos, y de ciertas recaudaciones, así como promover la agricultura, industria y comercio, y auxiliar a los alcaldes en la conservación de la tranquilidad y orden público del vecindario.

Los alcaldes tenían facultades judiciales pero con sujeción a los subprefectos y por su medio a las autoridades superiores respectivas.

Los jueces de paz eran propuestos por los subprefectos, nombrados por el prefecto y aprobados por el gobernador; estos jueces debían actuar con sujeción a los subprefectos y por su medio a las autoridades superiores respectivas.

Con la Ley de veinte de marzo de mil ochocientos treinta y siete, que contiene el “Reglamento provisional para el gobierno interior de los Departamentos”, concretamente en sus artículos 1o., 3o., 8o., 17, 61 al 109, 134, 141, 143, 157, 159 y 164, se dispuso que el gobierno interior de los Departamentos estaba a cargo de los gobernadores, juntas departamentales, prefectos, subprefectos, ayuntamientos, alcaldes y jueces de paz.

A los gobernadores correspondía nombrar a los prefectos y aprobar el nombramiento de los subprefectos del Departamento, y confirmar el de los jueces de paz y remover a cualquiera de estos funcionarios. Los gobernadores eran el conducto ordinario de comunicación entre los supremos poderes de la Nación y las Juntas Departamentales, y entre éstas y las autoridades de los Departamentos.

A los prefectos correspondía cuidar en su Distrito del orden y tranquilidad pública, con entera sujeción al gobernador; publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes y decretos del congreso que reciba del gobernador y circularlos oportunamente a las poblaciones del Distrito, por medio de los subprefectos; y, cumplir y hacer cumplir los decretos y órdenes del gobierno general, las disposiciones de la Junta Departamental y del respectivo gobernador.

También los prefectos podían imponer multas; recibir las quejas en contra de los funcionarios del gobierno del Distrito; resolver gubernativamente dudas sobre las elecciones de ayuntamientos y admitir o no las renuncias de sus miembros o de los jueces de paz; expedir orden de cateo; destinar a los vagos, ociosos y sin oficio conocido, previa anuencia del gobernador, a los establecimientos respectivos o a los obrajes o haciendas de labor; excitar a los tribunales para la pronta y recta administración de justicia; procurar que no falten escuelas y que haya asistencia puntual de los niños, así como cuidar de la buena conducta y moral de los maestros; concedían o negaban la licencia a menores para contraer matrimonio; proponer al gobernador cuantas medidas se estimaran necesarias para el fomento de la agricultura, industria, instrucción y beneficencia pública, y para la ejecución de obras de utilidad común y de reparación; arreglar gubernativamente el repartimiento de tierras comunes en los pueblos del Distrito; cuidar que los subprefectos, ayuntamientos y jueces de paz cumplieran con sus obligaciones; vigilar la administración e inversión de ciertos fondos de los pueblos; dictaban las providencias necesarias para proporcionar bagajes,

alojamientos y demás suministros que deban hacerse a las tropas; visitar sus Distritos e informar sobre su estado al gobernador pudiendo tomar por sí las medidas convenientes para corregir los abusos que noten; presidir en las asistencias públicas a todas las autoridades del Distrito; presidir, sin voto, el ayuntamiento, pero podrán decidir en caso de empate; eran el conducto ordinario de comunicación entre el gobernador y las autoridades subalternas del Distrito.

Los subprefectos debían actuar con sujeción al gobernador pero por medio del prefecto; los ayuntamientos tenían a su cargo diversas materias pero con sujeción al subprefecto y por su medio con sujeción al prefecto y al gobernador; los ayuntamientos tenían que dar aviso a los subprefectos de enfermedades reinantes en la demarcación para que por su medio se ministraran los auxilios necesarios, y debían remitir periódicamente al mismo datos del registro civil para que se hicieran llegar al gobernador; los alcaldes debían rendir juramento ante los prefectos.

Por otro lado, conforme al Reglamento del cuerpo de policía municipal de vigilantes diurnos, en sus artículos 2o., 4o., 5o., 6o., 27 y 28, publicado el siete de abril de mil ochocientos treinta y ocho, y el ordenamiento "Sobre que toca a los prefectos conceder licencias temporales a los jueces de paz" de fecha treinta de octubre de mil ochocientos treinta y ocho, a los prefectos correspondía nombrar a los policías municipales y determinar en general todo lo inherente a este cuerpo de seguridad, y otorgar las licencias a los jueces de paz.

De las disposiciones anteriormente destacadas se retomaron diversas cuestiones en ordenamientos posteriores, como lo es en el Decreto de Gobierno del once de mayo de mil ochocientos cincuenta y tres, sobre las facultades de los gobernadores de los Estados, en el que, en su artículo I, fracciones XVII, XXI a XXIII, en lo conducente y a propósito de los llamados Jefes Políticos, se disponía que éstos tenían ciertas facultades para suspender y remover a los ayuntamientos y a sus individuos, así como nombrarlos en determinadas circunstancias, correspondiéndoles además admitir o no las renuncias de los integrantes de los ayuntamientos y aprobar los contratos que estos últimos celebraran, sin cuyo requisito carecían de todo valor, y autorizar los gastos extraordinarios que aquéllos requirieran.

Asimismo, tocante a los Prefectos, en el Estatuto Orgánico Provisional de mil ochocientos cincuenta y seis, en sus artículos 28, 29, 33 al 38, también se reglamentaron sus facultades, concretamente y en lo que interesa para el presente estudio, se disponía que los Prefectos eran los delegados del emperador para administrar los departamentos cuyo gobierno se les encomendaba; contaban con un consejo de gobierno departamental compuesto del funcionario judicial más caracterizado, del administrador de rentas, de un propietario agricultor, de un comerciante y de un minero o industrial; estos prefectos eran nombrados por el emperador; contaban con subprefectos que eran sus representantes en su respectivo Departamento; se disponía que los alcaldes que estaban a cargo de la administración municipal eran nombrados y removidos por el emperador, pero los demás integrantes del ayuntamiento por el prefecto del Departamento respectivo.

Teniendo como premisas todas las disposiciones antes señaladas, se emitieron diversos ordenamientos de carácter local, tanto en el Distrito Federal como en los Estados de la República, en los que se preveía de una u otra manera la figura del Jefe Político o Prefecto, en otros casos como Intendentes, con similares facultades y funciones de las anteriormente precisadas que se contienen en las disposiciones que se han venido detallado en la presente resolución.

Así, por ejemplo, en el Distrito Federal se expidieron numerosas disposiciones; en lo que respecta a la integración del poder municipal, con fecha cuatro de mayo de mil ochocientos sesenta y uno, se expidió un Decreto sobre elecciones, que disponía que el Ayuntamiento de la Capital estuviera compuesto por veinte regidores y dos procuradores de la ciudad, presidido por el Primer Regidor y, en su defecto, por el que le siguiera en orden de numeración. Las demás poblaciones del Distrito, cuyo censo fuera no menor de cuatro mil habitantes, debían contar también con sus respectivos Ayuntamientos, integrados por siete regidores y un procurador.

El territorio del Distrito Federal, por decreto de seis de mayo de mil ochocientos sesenta y uno, quedó dividido en las siguientes secciones:

1.- Municipalidad de México.

2.- Partido de Guadalupe Hidalgo.

3.- Partido de Xochimilco.

4.- Partido de Tlalpan.

5.- Partido de Tacubaya.

En cada uno de estos Partidos había Prefectos. El Gobernador del Distrito, con amplísimas atribuciones, demarcaba las poblaciones, villas y barrios correspondientes a cada Partido, les formaba sus presupuestos, nombraba y removía a los Prefectos y en la Municipalidad de México desempeñaba las funciones de autoridad local. El Prefecto de cada Partido era presidente nato de su respectivo Ayuntamiento y Jefe de la Policía.

Asimismo, en el Estado de Aguascalientes había la Ley Orgánica para la División Territorial y Régimen Interior del Estado, de trece de febrero de mil ochocientos setenta y cuatro, en la que, en sus artículos 52, 53, 58, fracciones I, II y III, y 62, se preveía la existencia de los jefes políticos, estableciéndose sus

facultades, entre las que destacaba que éstos eran el conducto indispensable de comunicación entre los municipios del partido bajo su mando, para con el gobierno.

De igual manera se cita como ejemplo el Estado de Chiapas, en el que igualmente se reglamentaba la existencia y atribuciones de los jefes políticos, concretamente en los artículos 47, fracción I, y 52 de su Constitución Política de quince de noviembre de mil ochocientos noventa y tres; artículo único de la Ley de trece de noviembre de mil ochocientos noventa y tres; artículo 1o. de la Ley de veintinueve de diciembre de mil ochocientos noventa y tres; artículos 1o., 2o. y 3o., fracciones I, II y III, de la Ley Reglamentaria de la Administración Política de los Departamentos y Municipios de quince de enero de mil ochocientos sesenta y dos. Además de las anteriores disposiciones, en el Estado de Chiapas existían otras que reglamentaron la figura de los jefes políticos, a saber: reformas a la Ley de quince de enero de mil ochocientos setenta y cuatro; decreto de diecinueve de enero de mil ochocientos ochenta y cinco; Ley de treinta de octubre de mil ochocientos setenta y tres; Ley de veintisiete de noviembre de mil ochocientos sesenta; Ley de veinticuatro de diciembre de mil ochocientos ochenta y ocho; y otras leyes y circulares.

Conforme a todos estos antecedentes históricos, constitucionales y legislativos, desde la Constitución de Cádiz hasta la Constitución de mil novecientos diecisiete, se instituyó y tuvo vigencia la figura del Jefe Político o Prefecto, en quienes recaía un cúmulo crecido de facultades, funciones, obligaciones y responsabilidades, que lo distinguían y ponían en un plano de superioridad frente a todas las autoridades de carácter local que existían o que fueron dándose durante el periodo que enmarcan las constituciones citadas.

Por una parte, estos funcionarios eran nombrados directamente, según la etapa histórica, por el rey, por los gobernadores o por el emperador, a quien debían obediencia plena y rendían informe de los gobiernos interiores de las regiones que se les encomendaban, que, según también la época y la forma en que el territorio se dividía para su gobierno, a los jefes políticos y prefectos correspondían las provincias, distritos o departamentos.

Dentro de este esquema de supra-subordinación que los jefes políticos y prefectos tenían con relación a quien los nombraba, tenían la obligación y responsabilidad de gobernar aquellas regiones que les eran asignadas y respecto de las cuales tenían que rendir informe a su superior que los designaba, y de quien recibían órdenes para llevar a cabo las políticas de cualquier índole en las zonas en que ejercían autoridad, de tal manera que constituían la autoridad inmediata para la ejecución y aplicación de las órdenes del rey, gobernador o emperador, en cada una de las regiones. Así pues, en este patrón piramidal, estos últimos lograban centralizar las decisiones y políticas que debían aplicarse en las provincias, distritos o departamentos y, así, consecuentemente, en todo el territorio en general.

En esas circunstancias, las jefaturas y prefecturas se identifican de manera destacada en los regímenes centralistas, en los que la toma de decisiones y planes de ejecución surgían precisamente del poder central y se llevaban a su término a través de estas figuras, que permitían efectivamente un control directo del gobierno de todas las regiones del país, sujetos así a un mando central.

Por otro lado, los Jefes Políticos y Prefectos, contaban con amplísimas facultades, tanto de carácter político, gubernativo, social, administrativo, hacendario, religioso, electoral, y de toda índole, que no se limitaba a una cuestión propia o interna de la jefatura o prefectura, sino que abarcaba todo lo inherente al gobierno interno de la provincia, distrito o departamento, según el caso, y que, dada esa amplitud de atribuciones y consecuentemente de funciones, implicaba en esos ámbitos de gobierno a las autoridades locales y particularmente a la de los ayuntamientos, de tal manera que las atribuciones de estos últimos se veían de tal forma limitadas que no podían actuar o realizar mayores funciones sin la supervisión, consenso o conocimiento previo del Jefe Político o Prefecto, de tal forma que los ayuntamientos sólo podía llevar de manera autónoma funciones menores.

Lo anterior se identifica claramente, pues, por una parte, estos jefes o prefectos, presidían toda clase de juntas o eventos, fueran de índole religioso, social, electoral, político y otros, dado que, siendo la autoridad máxima inmediata del lugar, los ordenamientos les reconocían una preeminencia frente a cualquier autoridad y exigía ese reconocimiento, y en esos mismos términos se les reconocía la facultad para dirigir y presidir cualquier junta o evento en esas materias. Tales atribuciones no se limitaban a una simple dirección y presidencia, pues adquirían tales características que podían y debían decidir en un amplio contexto todo lo relativo a las provincias, distritos o departamentos, en lo que se consideraba lo más importante, y en lo de menor trascendencia, de cualquier manera recibían informes y autorizaban en su generalidad las actuaciones de las autoridades locales como lo eran los ayuntamientos.

Las cosas estaban dadas de tal forma, que los ayuntamientos estaban casi en su totalidad sujetos al gobierno de estos Jefes Políticos o Prefectos y, por tanto, no podían acceder directamente a los poderes supremos sino que esto era únicamente por conducto de aquéllos.

En estos términos, se reconoció que por debajo del Gobierno estaban los jefes políticos o prefectos, que hacían cumplir sus órdenes y servían para que la autoridad que representaban tuvieran medios inmediatos de acción y centralización. Todo esto motivó su cuestionamiento y que el Constituyente de mil novecientos

diecisiete finalmente los suprimiera mediante la inclusión de la prohibición de autoridad intermedia a que se refiere la fracción I del artículo 115 Constitucional.

Sobre este tema el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido las tesis jurisprudenciales números 26/97, 48/97 y 50/97, visibles a fojas 133, 395 y 343, respectivamente, del Tomo V correspondiente a los meses de abril y junio de 1997, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que dicen:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL "INSTITUTO ESTATAL DE DESARROLLO "MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA NO ES "AUTORIDAD INTERMEDIA ENTRE EL GOBIERNO "ESTATAL Y EL MUNICIPIO. La prohibición de "autoridad intermedia entre Estado y Municipio, a "que se refiere la fracción I del artículo 115 de la "Constitución Política de los Estados Unidos "Mexicanos, pretende evitar la subsistencia de "sistemas viciados que elevaban a ciertas "personas "de confianza", como los llamados ""jefes políticos", a la calidad de intercesores que, "válidos de su influencia con los gobernadores, "predominaban sobre los mandatarios electos "popularmente en el Municipio. En el caso del "Instituto Estatal de Desarrollo Municipal del "Estado de Oaxaca, de los artículos 1o., 3o. Y 4o. Del "Decreto Número 75 que lo creó, así como de las "demás disposiciones que lo integran, que prevén "su organización, objetivos y atribuciones, se "advierte que tal organismo no tiene una posición "de supremacía frente a los Municipios, sino que, "por lo contrario, sólo es de mera coordinación y "apoyo, pues no se le otorgan facultades "unilaterales de decisión o ejecutividad que le "permitan actuar por encima de los Municipios; es, "básicamente, un órgano descentralizado por "servicio, que únicamente actúa a instancia de "éstos y aunque forma parte de la administración "pública paraestatal dentro de la esfera de "competencia del Poder Ejecutivo Estatal, en "términos de lo dispuesto por los artículos 2o., 4o. Y "42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, no "constituye autoridad intermedia entre el Estado y "el Municipio, por ser parte del propio Gobierno del "Estado y por no contar con facultades unilaterales "de decisión que afecten o impidan la "comunicación directa entre ambos niveles de "gobierno."

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. "AUTORIDADES INTERMEDIAS ENTRE EL ESTADO "Y LOS MUNICIPIOS, NO LAS CONSTITUYEN LAS "JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL, CIVICO Y "MATERIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON. De "conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o. "Y 2o. De la Ley que crea las Juntas de "Mejoramiento Moral, Cívico y Material en el Estado "de Nuevo León, los fines que persiguen éstas "quedan limitados a encauzar y fomentar la "cooperación de los particulares en lo moral, cívico "y material, y las atribuciones que se les otorgan se "reducen a pugnar por inculcar un claro concepto "de los derechos y obligaciones de los ciudadanos "para que actúen con justicia social, con nobleza y "con dignidad, así como para fomental el culto a "los héroes que han forjado la patria. Atento a ello, "las Juntas de Mejoramiento no constituyen "autoridad intermedia y, por ende, los preceptos "citados no transgreden lo dispuesto en la fracción "I del artículo 115 de la Constitución Política de los "Estados Unidos Mexicanos, ya que no se les "permite actuar en forma independiente, unilateral "o con decisión que implique obstrucción u "obstaculización en la comunicación directa entre "Gobierno y Municipio, o que signifique "sometimiento, sustitución o arrogación de "facultades de alguno de estos niveles de "gobierno, ni invaden su esfera de competencia."

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. AUTORIDAD "INTERMEDIA PROHIBIDA EN EL ARTICULO 115, "FRACCION I, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE "LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "CARACTERISTICAS GENERALES QUE LA "IDENTIFICAN. El Constituyente de 1917 impuso la "prohibición de "autoridad intermedia" a que se "refiere la fracción I del artículo 115 de la "Constitución Política de los Estados Unidos "Mexicanos, en atención a situaciones de hecho, "según informa la historia, en virtud de las cuales "se creaban, por debajo de los Gobiernos "Estatales, personas conocidas como "jefes "políticos" que detentaban un poder real y de "hecho reconocido por el gobernador, en virtud del "cual se cumplían las órdenes de éste y servía para "que la autoridad tuviera medios inmediatos de "acción y centralización. Tomando en "consideración lo anterior, debe establecerse que "una autoridad, ente, órgano o persona de que se "trate, no debe tener facultades o atribuciones que "le permitan actuar de manera independiente, "unilateral y con decisión, que no sea resultado o "provenga de manera directa de los acuerdos o "decisiones tomados por los diferentes niveles de "gobierno dentro del ámbito de sus respectivas "facultades, a efecto de impedir que la conducta de "aquéllos se traduzca en actos o hechos que "interrumpan u obstaculicen la comunicación "directa entre el Gobierno Estatal y el Municipio, o "que impliquen sustitución o arrogación de sus "facultades."

Atento a todo lo anteriormente expuesto y reexaminando los criterios sustentados por este Alto Tribunal, se pasa a realizar un análisis interpretativo de la disposición fundamental de referencia, a efecto de determinar los alcances de la prohibición constitucional sobre la autoridad intermedia.

El artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, dispone:

"ARTICULO 115.- Los Estados adoptarán, para su "régimen interior, la forma de gobierno "republicano, representativo, popular, teniendo "como base de su división territorial y de su "organización política y administrativa el municipio "libre, conforme a las bases siguientes:

"I.- Cada Municipio será administrado por un "ayuntamiento de elección popular directa y no "habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el "gobierno del Estado".

Los elementos normativos de la disposición fundamental que destacan para efectos del presente estudio, son los siguientes:

Conforme al primer párrafo del artículo 115 Constitucional:

a) En su régimen interior los Estados tendrán una división territorial.

b) En su régimen interior los Estados tendrán una organización política y administrativa.

c) La base de los dos puntos anteriores será el municipio libre.

d) Las bases del municipio libre son las que se instituyen en las diferentes fracciones del precepto.

Conforme a la fracción I del artículo 115 Constitucional:

a) Cada Municipio será administrado por un ayuntamiento.

b) Los ayuntamientos serán de elección popular directa.

c) No habrá autoridad intermedia entre los ayuntamientos y el gobierno del Estado.

Como se observa del primer párrafo de la disposición Constitucional, en éste se instituye al municipio libre como base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado; por otra parte establece que dicha institución se sustentará en las bases que se fijan en las diferentes fracciones del propio precepto fundamental.

De lo anterior se sigue que, por una parte, se fija el elemento substancial, que es precisamente el municipio libre; por otra, se anuncian las bases a las que se sujetará dicha institución, al remitir a las diversas fracciones del aludido artículo, y que, dados los términos del primer párrafo del precepto, las vincula esencialmente a la cuestión política y administrativa.

Entendido así, las bases contenidas en las ocho fracciones del artículo, tienden a precisar, fundamentalmente, los lineamientos generales en que se sustenta el municipio libre política y administrativamente hablando.

Ahora bien, en términos de la fracción I del referido artículo 115, claramente se advierte que señala en ese ámbito político y administrativo dos cuestiones específicas: que la elección de los ayuntamientos debe ser popular y directa, y que la administración de los municipios corresponde a los ayuntamientos.

Sin embargo, también la fracción I de mérito se refiere a que no debe haber autoridad intermedia entre los municipios y el gobierno del Estado.

Si se atiende a los antecedentes históricos, constitucionales y legislativos anteriormente precisados, y que motivaron la prohibición de mérito, tal disposición que introdujo el Constituyente de mil novecientos diecisiete obedeció a la existencia previa de los llamados Jefes Políticos o Prefectos, que política y administrativamente se ubicaban entre el gobierno y los ayuntamientos, y que tenían amplias facultades con respecto a estos últimos.

Todo esto puede llevar a dar diversas interpretaciones respecto de la autoridad intermedia, en tanto que, en términos de la disposición constitucional y de los antecedentes que se tienen, podría decirse que la prohibición se refiere a que, fuera del gobierno estatal y el municipal, no debe existir una autoridad distinta o ajena a alguno de éstos; o bien, que dicha autoridad, cualquiera que sea su origen o denominación, lesiona la autonomía municipal, suplantando o mediatizando sus facultades constitucionales o invadiendo la esfera competencial del Ayuntamiento; o, finalmente, que la prohibición únicamente pretenda impedir que dentro de la relación que debe existir entre el gobierno del estado y el municipio, dadas sus respectivas facultades en ciertas materias, no debe haber un órgano intermedio que impida la comunicación directa entre ambos niveles de gobierno, de tal forma que no haya un ente de enlace o que pueda interrumpir esa comunicación.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10/2000, del Tribunal Pleno, pendiente de publicación, que dice:

"AUTORIDAD INTERMEDIA. INTERPRETACION DE "LA FRACCION I DEL ARTICULO 115 DE LA "CONSTITUCION FEDERAL. El artículo 115, "fracción I, de la Constitución Federal, establece "que cada Municipio será administrado por un "Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad "intermedia entre éste y el gobierno del Estado. El "análisis de los antecedentes históricos, "constitucionales y legislativos que motivaron la "prohibición de la autoridad intermedia introducida "por el Constituyente de mil novecientos diecisiete, "lo cual obedeció a la existencia previa de los "llamados Jefes Políticos o Prefectos, que política "y administrativamente se ubicaban entre el "gobierno y los Ayuntamientos y tenían amplias

"facultades con respecto a estos últimos, puede "llevar a diversas interpretaciones sobre lo que en "la actualidad puede constituir una autoridad de "esta naturaleza. Al respecto, los supuestos en que "puede darse dicha figura son los siguientes: a) "Cuando fuera del gobierno estatal y del municipal "se instituye una autoridad distinta o ajena a "alguno de éstos; b) Cuando dicha autoridad, "cualquiera que sea su origen o denominación, "lesione la autonomía municipal, suplantando o "mediatizando sus facultades constitucionales o "invadiendo la esfera competencial del "Ayuntamiento; y, c) Cuando esta autoridad se "instituye como un órgano intermedio de enlace "entre el gobierno del Estado y del Municipio, "impidiendo o interrumpiendo la comunicación "directa que debe haber entre ambos niveles de "gobierno."

Para analizar tales cuestiones, es conveniente determinar previamente lo que debe entenderse por gobierno del Estado para efectos de la aludida fracción I del artículo 115 Constitucional, para lo cual se precisan previamente algunas generalidades de los conceptos de gobierno y de Estado.

En el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se define el vocablo "gobierno" como: ***"Del latín "gubernatio-onis, de gubernare, gobernar. En el lenguaje "usual es sinónimo de dirigir, regir, administrar, mandar, "conducir, guiar, etc. Es el agrupamiento de personas que "ejercen el poder. Es la dirección o el manejo de todos los "asuntos que conciernen de igual modo a todo el pueblo".***

El propio diccionario, al referirse al "Estado", dice: ***"Dentro "de la teoría del derecho y en la jurisprudencia dogmática el "concepto de Estado es bastante controvertido, sin embargo "es posible hacer una caracterización y proporcionar una "breve descripción de sus características jurídicas "fundamentales. Básicamente se concibe al Estado como "una corporación, como una persona jurídica. Esta "corporación es una corporación territorial, esto es, actúa y "se manifiesta en un espacio, una determinada "circunscripción territorial. Otra de las características del "Estado, igualmente esencial, es que actúa, se conduce, de "forma autónoma e independiente. Este último dato se "describe como poder originario, autoridad soberana o, "simplemente como la soberanía. De ahí la ampliamente "compartida noción del Estado como corporación territorial "dotada de un poder de mando originario. La caracterización "anterior ha sido persistente en la doctrina jurídica a través "de los años y tiene antecedentes remotos"***.

Por otra parte, la doctrina reconoce que, al hablar de gobierno, generalmente se le vincula con vocablos tales como: autoridad política, régimen político, conjunto de órganos del Estado, conjunto de poderes del Estado, dirección del Estado, parte del Estado, etcétera, todo lo cual en términos generales se refiere al gobierno; de tal forma que puede considerarse a éste como la acción y efecto de la conducción política, que agrupa al conjunto de órganos que realizan los fines de la estructura global del orden jurídico denominado Estado.

Asimismo, al hablar de Estado la doctrina, en términos generales, lo caracteriza como la organización jurídico-potestativa de una comunidad humana, tendiente a concretar en modo sistemático y efectivo la ordenación de la vida social en las condiciones y dentro del ámbito territorial determinados por factores históricos.

Conforme a lo expuesto, puede decirse que el Estado tiene como elementos constitutivos la población, el territorio y la organización política, mientras que el gobierno no es más que este último elemento, entendido como el ordenamiento de un conjunto de normas y de actos.

Ahora bien, estas ideas generales de gobierno y Estado doctrinalmente se conciben en un sentido amplio; sin embargo, para efectos de la disposición constitucional en estudio, debemos ahora precisar que, conforme al artículo 43 de la Constitución Federal, al referirse la fracción I del artículo 115 Constitucional al Estado, alude a éste como alguna de las entidades federativas que integran a la Federación. En estas condiciones, se concluye que el gobierno del Estado a que se refiere esta última disposición, es precisamente la organización política del ente (uno de los que integran a la Federación) que se caracteriza por reunir sus elementos constitutivos que lo distinguen de otros consistentes en una población, territorio y organización política determinados.

Por lo que, siguiendo este orden de ideas, resta precisar si el gobierno a que alude la fracción I del artículo 115 Constitucional, se refiere al poder ejecutivo del Estado, o bien a todos sus componentes, específicamente tanto al poder ejecutivo como al legislativo y judicial.

Frecuentemente se llega a identificar al gobierno como la parte de la administración pública propia del poder ejecutivo; sin embargo, en los términos que apunta la doctrina y siguiendo los conceptos antes precisados, el término "gobierno" no se refiere de manera específica a un poder u órgano público determinado, concretamente al poder ejecutivo, o a un conjunto limitado de acciones o actos del Estado de carácter esencialmente administrativos.

Por otra parte y atendiendo a la fracción I del artículo 115 Constitucional, tampoco puede limitarse la expresión "gobierno" a aquella actividad del Estado de carácter administrativo y propia del poder ejecutivo,

ya que, por una parte, tomando en consideración los antecedentes de los jefes políticos y de los prefectos, es claro que tenían amplias facultades en muchas materias, de las cuales algunas que podrían calificarse como de carácter legislativo y judicial, como son, entre otras, presidir las diputaciones provinciales, resolver algunos conflictos que se suscitaran entre los gobernados y los ayuntamientos, suspender a los miembros de éstos, etcétera, facultades estas que en la actualidad son competencia de los poderes legislativos y judiciales de los Estados.

Además, el texto vigente del artículo 115 de la Constitución Federal, en algunos apartados sí alude a un poder específico, por ejemplo cuando atañe a ciertas facultades de las legislaturas para fijar los derechos tributarios de los ayuntamientos o para suspender a los miembros de éstos (fracciones I, tercer párrafo, y IV); pero igualmente hace alusión al Estado en forma genérica dirigiéndose no al poder ejecutivo en particular, sino a otro de sus poderes, como es el caso de la fracción IV, inciso c), segundo párrafo, que se refiere a que “las leyes federales no limitarán la “facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que “se refieren los incisos a) y c)”, en donde evidentemente se advierte que, al hablar de Estado, lo hace en forma genérica pero aludiendo a la legislatura y no al poder ejecutivo, pues es claro que la fijación de contribuciones corresponde al poder legislativo.

De lo anterior se concluye que la prohibición de autoridad intermedia, al referirse al gobierno del Estado, no está limitada al poder ejecutivo de la entidad federativa, pues, dadas las competencias que en la actualidad tienen los diferentes poderes de los Estados y que antes podían incidir en el jefe político o prefecto, y toda vez que la terminología que al respecto utiliza la disposición constitucional se hace en forma genérica y no referida exclusivamente al poder ejecutivo, debe entenderse que comprende no sólo a este último poder en cita, sino también a los otros poderes, frente a los cuales eventualmente podría gestarse también una autoridad intermedia con relación a los ayuntamientos.

No pasa inadvertido que, conforme al párrafo primero del artículo 115 Constitucional, los lineamientos generales que se instituyen en las bases contenidas en sus diferentes fracciones, tienen por esencia fijar los principios rectores en materia municipal que esencialmente se identifican con cuestiones políticas y administrativas, cuya competencia corresponde al poder ejecutivo en el ámbito estatal; sin embargo, por las razones antes dadas, actualmente y dentro del ámbito de atribuciones de los poderes judicial y legislativo de los Estados, también tienen relación en ciertas materias con los municipios, como en los casos antes apuntados, en los que también podría evaluarse un caso en que se instituyera una autoridad intermedia que afectara a los municipios, como por ejemplo sería si el municipio tuviera que acudir ante un ente diverso para proponer su presupuesto de egresos, para que éste lo autorizara o diera su aprobación y posteriormente fuera quien lo propusiera ante la Legislatura.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número 11/2000, del Tribunal Pleno, pendiente de publicación, que dice:

> *"AUTORIDAD INTERMEDIA. INTERPRETACION DE "LA VOZ “GOBIERNO DEL ESTADO”, UTILIZADA "EN LA FRACCION I DEL ARTICULO 115 DE LA "CONSTITUCION FEDERAL. El artículo 115, "fracción I, de la Constitución Federal establece "que cada Municipio será administrado por un "Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad "intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. El "término “Gobierno del Estado”, no está limitado al "poder ejecutivo de la entidad federativa, pues "dadas las competencias actuales de los diferentes "poderes de los Estados y que antes podían incidir "en el jefe político o prefecto (antecedente de la "autoridad intermedia ahora prohibida), y como la "terminología utilizada por la disposición "constitucional se hace en forma genérica y no "referida exclusivamente al Poder Ejecutivo, debe "entenderse que dicha expresión comprende tanto "al Poder Ejecutivo como a los otros poderes "estatales, frente a los cuales, eventualmente, "también podría darse una autoridad intermedia "con relación a los Ayuntamientos.”*

Precisado lo anterior, se pasa al análisis del caso concreto a la luz de las tres posturas que dan una distinta interpretación de lo que debe entenderse por autoridad intermedia, en la inteligencia de que tal análisis versará respecto de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal y de las Juntas Auxiliares que prevé la Ley impugnada.

1.- PRIMERA POSTURA. Respecto a que la prohibición de autoridad intermedia se refiere a que, fuera del gobierno estatal y el municipal, no debe existir una autoridad distinta o ajena a alguno de éstos.

A) De los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal:

Los artículos 13 y 14 de la Ley impugnada establece:

> *"Art. 13.- Para efectos del artículo anterior, los "municipios contarán con Comités de Planeación "para el Desarrollo Municipal como las instancias "de participación social encargadas de planear, "discutir, analizar y seleccionar las obras y "acciones a realizar para atender las demandas de "la población, en congruencia con los planes "nacional y estatal de desarrollo.”*
>
> *"Art. 14.- El Comité de Planeación para el "Desarrollo Municipal se integrará por:*
>
> *"I. El Ayuntamiento del Municipio;*

"II. El total de juntas auxiliares de cada municipio;
"III. Los representantes comunitarios de "localidades, barrios, colonias populares y de los "comités de obra del municipio; y
"IV. Los representantes del Organo de Planeación "Estatal.
"En todo caso, la elección de los representantes "comunitarios ante este órgano de planeación se "llevará a cabo en asambleas democráticas, de "conformidad con el Manual Unico de Operación "para el Federalismo Hacendario en el Estado de "Puebla que para el efecto expida el Ejecutivo del "Estado."

Estos Comités si bien se califican como de Desarrollo Municipal, también lo es que su forma de integración está dada de tal manera que no puede calificarse como parte del gobierno del Estado o del Municipio.

En efecto, estos Comités se integran por el Ayuntamiento del Municipio, por el total de juntas auxiliares de cada municipio, por los representantes comunitarios de localidades, barrios, colonias populares y de los comités de obra del municipio, y por los representantes del Organo de Planeación Estatal. Como se aprecia, dichos Comités se conforman tanto con autoridades municipales como estatales, así como por representantes de la población.

En tales condiciones, aunque dichos organismos se califiquen como municipales y se integren, entre otros, por autoridades municipales y estatales, evidentemente no pueden catalogarse como órganos municipales o estatales. Es cierto que la forma de su integración no es lo que determina la naturaleza municipal o estatal del mismo, pero también lo es que no existe disposición expresa que lo considere orgánicamente en uno u otro.

En consecuencia, debe considerarse que dichos Comités constituyen una autoridad al margen del gobierno del Estado y de los Municipios, por lo que, conforme a la postura que se analiza, deben considerarse como autoridades intermedias.

No pasa inadvertida la manifestación de la parte demandada, en el sentido de que los Comités de Planeación tienen su sustento en los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal, 4o. y 20 de la Ley de Planeación, 107 y 108 de la Constitución del Estado de Puebla, y 1o., 13, 14 y 17 de la Ley de Planeación para el Desarrollo de Puebla; sin embargo, tales disposiciones no prevén la forma de integración y conformación de los Comités que ahora se analizan, pues únicamente se refieren a la concurrencia para el desarrollo económico de los sectores público, social y privado, así como a las instancias de planeación y coordinación de dichos sectores, y no así a la forma de su integración y menos aún respecto de los municipales.

B) De las Juntas Auxiliares:

Dichos organismos no pueden catalogarse como autoridades intermedias en términos de esta primera postura, toda vez que estas Juntas sí se encuentran consideradas orgánicamente dentro de los Municipios.

En efecto, los artículos 16 y 67 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, dicen:

"Art. 16.- El Municipio, para su administración "interior, se dividirá en pueblos, rancherías, barrios "y secciones."
"Art. 67.- Para el Gobierno de los pueblos habrá "Juntas Auxiliares, integradas por un Presidente y "cuatro miembros propietarios, y sus respectivos "suplentes".

2.- SEGUNDA POSTURA. Interpretación en el sentido de que autoridad intermedia es aquella que, cualquiera que sea su origen o denominación, lesiona la autonomía municipal, suplantando o mediatizando sus facultades constitucionales o invadiendo la esfera competencial del Ayuntamiento.

A) Respecto de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal.

El artículo 13 de la Ley impugnada dispone:

"Art. 13.- Para efectos del artículo anterior, los "municipios contarán con Comités de Planeación "para el Desarrollo Municipal como las instancias "de participación social encargadas de planear, "discutir, analizar y seleccionar las obras y "acciones a realizar para atender las demandas de "la población, en congruencia con los planes "nacional y estatal de desarrollo."

De conformidad con la disposición transcrita, los aludidos Comités constituyen instancias de participación social, encargadas de planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar para atender las demandas de la población.

De conformidad con el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

Los artículos 13 y 40 de la Ley Orgánica Municipal disponen:

"Art. 13.- Cada Municipio será administrado por un "Ayuntamiento de elección popular directa, "integrado por los miembros de la Planilla que haya "obtenido el mayor número de votos, y no habrá "ninguna autoridad intermedia entre el "Ayuntamiento y el Gobierno del Estado."
"Art. 40.- Son atribuciones de los Ayuntamientos: "…

"IV.- Expedir bandos de policía y buen gobierno, "reglamentos, circulares y disposiciones "administrativas de observancia general, referentes "a su organización, funcionamiento, servicios "públicos que deban prestar y demás asuntos de "su competencia, sujetándose a las bases "normativas establecidas por la fracción III del "artículo 105 de la Constitución Política del Estado. "…

"XII.- Promover cuanto estime conveniente para el "progreso del Municipio y acordar la realización de "las obras públicas que fueren necesarias;

"XXX.- Formular y aprobar, de acuerdo con las "leyes federales y estatales, la zonificación y "planos de desarrollo urbano municipal;…".

De las disposiciones transcritas se desprende, por una parte, que la máxima autoridad administrativa de los municipios lo es el Ayuntamiento, al que corresponde emitir todas aquellas disposiciones relativas a su organización, funcionamiento, servicios públicos y otros de su competencia, así como promover y autorizar la realización de obras públicas y lo inherente a su desarrollo urbano.

Lo anterior se relaciona directamente con las atribuciones que se le reconocen a los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal a que se refiere el artículo 13 de la Ley impugnada, en tanto que éstos constituyen instancias encargadas de planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar para atender las demandas de la población.

Acorde con lo anterior, es evidente que los referidos Comités se constituyen en autoridades intermedias conforme a la segunda postura que se analiza, ya que se les dota de facultades tales que invaden la esfera de competencia de los Ayuntamientos, que son la máxima autoridad administrativa de los Municipios, y que, por tal razón, son los que deberían planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y acciones a realizar para atender las demandas de la población.

No debe soslayarse que, considerando la naturaleza propia de estos organismos de planeación, su función debe limitarse a apoyar y coordinar a las autoridades estatales y municipales, así como a los particulares, para que los sectores públicos, sociales y privados concurran en el desarrollo social de los municipios, pero no para la toma de decisiones en estas materias, cuya competencia es exclusiva en el ámbito municipal de los Ayuntamientos, quienes si bien están obligados a dar intervención a cada sector, ello ni implica darles poder de decisión y ejecución, pues de otra manera el Ayuntamiento se constituiría en mero ejecutor de las decisiones de dichos Comités, con lo que se hace nugatoria la garantía constitucional que reserva la administración municipal a los Ayuntamientos.

B) Respecto de las Juntas Auxiliares:

Los artículos 16, 67 y 72 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, dispone:

"ARTICULO 16.- El Municipio, para su "administración interior, se dividirá en pueblos, "rancherías, barrios y secciones".

"ARTICULO 67.- Para el Gobierno de los pueblos "habrá Juntas Auxiliares, integradas por un "Presidente y cuatro miembros propietarios, y sus "respectivos suplentes".

"ARTICULO 72.- Las Juntas Auxiliares tienen por "objeto ayudar al Ayuntamiento en el desempeño "de sus funciones. A este fin ejercerán, dentro de "los límites de su circunscripción y bajo la "vigilancia y dirección de aquéllos, las atribuciones "siguientes:

"I.- Solicitar al respectivo Ayuntamiento recursos "que deberán aplicarse a la satisfacción de los "gastos públicos del pueblo;

"II.- Remitir al Ayuntamiento con la oportunidad "debida para su revisión y aprobación, los "presupuestos de gastos del año siguiente;

"III.- Procurar la debida prestación de los servicios "públicos y, en general, la buena marcha de la "administración pública e informar al Ayuntamiento "sobre sus deficiencias;

"IV.- Procurar la seguridad y el orden público del "pueblo;

"V.- Promover ante el Ayuntamiento de su "jurisdicción, la construcción de las obras de "interés público que estimare necesarias;

"VI.- Nombrar a propuesta del Presidente de la "Junta, al secretario, tesorero y comandante de "policía de la Junta Auxiliar, los que son "funcionarios de confianza y podrán ser removidos "libremente".

De los preceptos transcritos se desprende que los Municipios se dividen, para su administración interior, en pueblos y otros, y que para el gobierno de éstos se integran las Juntas Auxiliares, cuyas facultades no transgreden las de los Ayuntamientos como órganos superiores de administración de los Municipios, a los que deben sujetarse las propias Juntas.

De esto se sigue que las referidas Juntas Auxiliares no afectan la esfera de competencia de los Ayuntamientos y, consecuentemente, no constituyen autoridad intermedia en términos de la segunda postura que se analiza.

3.- TERCERA POSTURA. Son autoridades intermedias la que impiden la comunicación directa entre el Municipio y el gobierno del Estado.

A) Respecto de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal:

Los artículos 13, 44, 57, 59, fracción IV, 67, 73, 74, 81, fracción III, y 82, fracción II, de la Ley impugnada, disponen:

"Art. 13.- Para efectos del artículo anterior, los "municipios contarán con Comités de Planeación "para el Desarrollo Municipal como las instancias "de participación social encargadas de planear, "discutir, analizar y seleccionar las obras y "acciones a realizar para atender las demandas de "la población, en congruencia con los planes "nacional y estatal de desarrollo."

"Art. 44.- Las juntas auxiliares deberán aplicar los "recursos citados en el artículo anterior en la "ejecución de obras que de manera conjunta hayan "sido aprobadas en los órganos de planeación de "los Municipios".

"Art. 57.- Cuando los recursos de los fondos a que "se refiere este título se destinen a obras públicas, "el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos "presentarán ante las dependencias competentes, "para su análisis y aprobación, los expedientes "técnicos de las obras autorizadas por sus comités "de planeación debiendo sujetarse, además de lo "dispuesto por el artículo anterior, a la "normatividad, supervisión técnica y asesoría que "para tales efectos emitan dichas dependencias."

"Art. 59.- Para cumplir con lo dispuesto en el "artículo anterior, el Gobierno del Estado a través "de sus dependencias ejercerá las siguientes "acciones:

"… IV. Promover y fortalecer la participación social "en las actividades educativas que correspondan al "Estado, a través de los órganos de planeación de "los municipios y agrupaciones o consejos, para la "conservación, mejoramiento y equipamiento de "los servicios y demás proyectos de desarrollo "educativo en sus respectivas jurisdicciones;…".

"Art. 67.- El Gobierno del Estado recibirá los "recursos presupuestales a que se refiere este "Capítulo que le transfiera la Federación, y los "programará y presupuestará entre los Municipios "de la entidad, de acuerdo a las directrices "establecidas a nivel federal en materia de salud y "según las necesidades que hayan sido "debidamente jerarquizadas con los mismos en el "seno de los órganos de planeación."

"Art. 73.- El Gobierno del Estado ministrará en "forma mensual a los municipios una cantidad "igual para ser administrada por los "Ayuntamientos; dichos recursos serán destinados "exclusivamente al financiamiento de obras, "acciones sociales básicas y a inversiones, que "beneficien directamente a sectores de su "población que se encuentren en condiciones de "rezago social y de pobreza extrema. --- Para tales "efectos, previamente los municipios presentarán "ante el Gobierno del Estado, sus programas de "obras y acciones aprobadas en el seno de los "comités de planeación para el desarrollo "municipal."

"Art. 74.- Los Ayuntamientos presentarán ante el "Gobierno del Estado, para su análisis y "aprobación, los expedientes técnicos de las obras "aprobadas por sus comités de planeación."

"Art. 81.- Para el óptimo aprovechamiento de los "recursos, los municipios aplicarán los recursos de "este fondo de la siguiente manera: … III. Canalizar "el remanente a la realización de obra física en "Juntas Auxiliares y en colonias populares, dando "prioridad al mantenimiento y reparación de "espacios educativos. Dichas obras serán "consensadas y aprobadas en el seno del órgano "municipal de planeación."

"Art. 82.- Los Municipios deberán:

"…II. Promover la participación de las "comunidades beneficiarias en el seno del Comité "de Planeación para el Desarrollo Municipal, en su "destino, aplicación y vigilancia, así como en la "programación, ejecución, control, seguimiento y "evaluación de las obras que se vayan a realizar; "y…".

De las disposiciones transcritas puede advertirse que los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, no sólo constituyen órganos de planeación y coordinación, sino que se les dota de facultades que van más allá y que implican el sometimiento del Ayuntamiento y de sus Juntas Auxiliares, de tal forma que, para que éstos puedan desarrollar sus funciones y percibir los recursos que les corresponden para tal efecto, deben contar con los planes, programas y jerarquización de obras y acciones autorizadas por los referidos Comités.

Lo anterior demuestra que, conforme a la tercera postura que se analiza, los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal constituyen autoridad intermedia, en la medida que interrumpen la comunicación directa que debe existir entre el gobierno del Estado y los Municipios, ya que sin la intervención de aquéllos, como ente de enlace entre estos dos niveles de gobierno, los municipios estarán obstaculizados para coordinarse con el Estado para llevar a cabo las atribuciones que en materia comunes tienen ambos niveles de gobierno.

B) Respecto de las Juntas Auxiliares:

De conformidad con los artículos 67 y 72 de la Ley Orgánica Municipal anteriormente transcritos, que prevén las Juntas Auxiliares y sus atribuciones, se concluye que no constituyen autoridad intermedia entre el gobierno del Estado y los Municipios conforme a esta tercer postura, ya que no interfieren en forma alguna en la comunicación directa que deben tener ambos niveles de gobierno, pues en todos los casos dichas Juntas deben sujetarse a los lineamientos que establezcan los Ayuntamientos.

No pasa inadvertido que en el escrito de demanda también se aduce que los grupos organizados que prevé la Ley impugnada también constituyen autoridad intermedia.

El artículo 15 de la Ley, dispone:

"Art. 15.- En la coordinación de acciones de "planeación del desarrollo, el Estado tomará en "cuenta la participación de los órganos de "planeación y otros grupos organizados, "entendiéndose como tales principalmente a las "organizaciones representativas de obreros, "campesinos, grupos populares, instituciones "académicas y de investigación, organismos "empresariales y otras agrupaciones sociales, "considerados órganos de consulta permanente."

De la disposición transcrita puede apreciarse que los referidos grupos organizados constituyen tan sólo órganos de consulta permanente, pero sin reconocerles ninguna facultad de decisión, por lo que, dada la naturaleza que les da la Ley y al no constituir autoridad estatal o municipal, en cualquiera de los casos no puede reconocérsele como una autoridad de las prohibidas por el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal.

Atento a todo lo expuesto en el presente considerando, es de concluirse que las Juntas Auxiliares municipales y los grupos organizados no constituyen autoridad intermedia, pero, por cuanto hace a los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, éstos sí constituyen autoridad intermedia conforme a las tres interpretaciones dadas, en contravención a lo dispuesto por el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal.

Consecuentemente, procede declarar la inconstitucionalidad de los artículos 13 y 14 que prevén dichos Comités y sus atribuciones.

Sirven de apoyo a lo anteriormente considerado, las tesis jurisprudenciales números 12/2000, 13/2000 y 14/2000, del Tribunal Pleno, pendientes de publicación, que respectivamente dicen:

"AUTORIDADES INTERMEDIAS. TIENEN ESE "CARACTER LOS COMITES DE PLANEACION "PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL ESTADO "DE PUEBLA (LEY PARA EL FEDERALISMO "HACENDARIO DEL ESTADO DE PUEBLA). Los "artículos 13, 14, 44, 57 y 82, fracción II, de la Ley "para el Federalismo Hacendario del Estado de "Puebla, son violatorios de la fracción I del artículo "115 de la Constitución Política de los Estados "Unidos Mexicanos que prohíbe las autoridades "intermedias entre el Gobierno del Estado y los "Ayuntamientos de los Municipios. Lo anterior en "virtud de lo siguiente: a) Los citados preceptos de "la Ley prevén los Comités de Planeación para el "Desarrollo Municipal como autoridades que no "pertenecen orgánicamente al Estado ni a los "Municipios, aunque se integran con autoridades "de ambos; b) De conformidad con los artículos "115, fracción I, de la Constitución Federal, y 13 y "40 de la Ley Orgánica Municipal de aquella "entidad, entre otros, la máxima autoridad "administrativa de los Municipios lo es el "Ayuntamiento, al que corresponde emitir todas "aquellas disposiciones relativas a su "organización, funcionamiento, servicios públicos "y otros de su competencia, así como promover y "autorizar la realización de obras públicas y lo "inherente a su desarrollo urbano, lo cual se "relaciona directamente con las atribuciones que "se le otorgan a los Comités de Planeación para el "Desarrollo Municipal, en tanto que éstos "constituyen instancias encargadas de planear, "discutir, analizar y seleccionar las obras y "acciones a realizar para atender las demandas de "la población, facultades que invaden la esfera de "competencia de los Ayuntamientos que, por tal "razón, son los que deberían realizarlas; c) Dichos "comités no sólo son órganos de planeación y "coordinación sino que se les dota de facultades "tales que implican el sometimiento del "Ayuntamiento y de sus Juntas Auxiliares, de "forma que, para que éstos puedan desarrollar sus "funciones y percibir los recursos que les "corresponden para tal efecto conforme a la ley "citada, deben contar con los planes, programas y "jerarquización de obras y acciones autorizadas "por los referidos Comités; y d) Además, "interrumpen la comunicación directa que debe "existir entre el Gobierno del Estado y los "Municipios, ya que con la intervención de dichos "Comités, los Municipios estarán obstaculizados "para coordinarse directamente con el Gobierno "del Estado para llevar a cabo sus atribuciones "sobre aquellas materias que en común tienen "ambos niveles."

"AUTORIDADES INTERMEDIAS. NO TIENEN ESE "CARACTER LOS GRUPOS ORGANIZADOS QUE "PREVE EL ARTICULO 15 DE LA LEY PARA EL "FEDERALISMO

HACENDARIO DEL ESTADO DE "PUEBLA. De conformidad con el artículo 15 de la "Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de "Puebla, en la coordinación de acciones de "planeación del desarrollo, el Estado tomará en "cuenta la participación de los órganos de "planeación y otros grupos organizados, "entendiéndose como tales principalmente a las "organizaciones representativas de obreros, "campesinos, grupos populares, instituciones "académicas y de investigación, organismos "empresariales y otras agrupaciones sociales, "considerados órganos de consulta. De esta "disposición se desprende que los referidos "grupos organizados constituyen tan sólo órganos "de consulta permanente, pero sin reconocerles "ninguna facultad de decisión, por lo que no son "autoridades intermedias, prohibidas por el artículo "115, fracción I, de la Constitución Federal."

"AUTORIDADES INTERMEDIAS. NO TIENEN ESE "CARACTER LAS JUNTAS AUXILIARES DE LOS "MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. De "conformidad con los artículos 16, 67 y 72 de la Ley "Orgánica Municipal del Estado de Puebla, los "Municipios se dividen, para su administración "interior, entre otras formas de organización social, "en pueblos, y para el gobierno de éstos se "integran las Juntas Auxiliares, cuyas facultades "se sujetan a las determinaciones de los "Ayuntamientos como órganos superiores de "administración de los Municipios; por lo tanto, las "Juntas Auxiliares al formar parte de la "organización de los Municipios, y atento a sus "facultades, no afectan la esfera de competencia de "los Ayuntamientos ni obstaculizan en forma "alguna la comunicación directa que debe haber "entre el Gobierno del Estado y sus Municipios."

NOVENO.- Respecto de los artículos 4o., fracciones VII y IX, 8o., tercer párrafo, 13, 14, 15 16, 17, 18, 24, fracciones III y V, 30, 42, 43, 44, 49, 50, 57, 82, 95, 97 y 98 de la Ley impugnada, que se combaten expresamente en el segundo concepto de invalidez por constituir autoridades intermedias, se considera lo siguiente:

"ARTICULO 4.- La presente Ley tiene por objeto:

"…VII.- Constituir los órganos en materia "hacendaria para el cumplimiento de los objetivos "de esta Ley así como de los convenios de "coordinación y de colaboración que se "celebren…;

"…IX.- Promover la participación social en los "ámbitos estatal y municipal para la toma de "decisiones en la orientación, definición y "jerarquización de los programas y proyectos "públicos, de acuerdo a las normas establecidas en "la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado "de Puebla".

"ARTICULO 8.- Los recursos que la Federación "transfiera al Estado derivados de programas "federales de descentralización del gasto y "aquellos que, por su naturaleza análoga puedan "ser considerados bajo este rubro, deberán "sujetarse para su ejercicio, a las disposiciones de "esta Ley…;

"…El Ejecutivo Estatal será el responsable de "administrar, distribuir, ejercer y supervisar que los "recursos materia de esta Ley se apliquen a los "fines aprobados. Para ello, el Estado promoverá "las acciones necesarias que garanticen la "transparente y oportuna asignación de dichos "recursos de conformidad con esta Ley y sin "menoscabo de la libertad municipal. Asimismo, a "través de sus dependencias y entidades "competentes, llevará a cabo la asignación y "distribución de los recursos de aportaciones para "la educación básica y normal; de aportaciones "para los servicios de salud; infraestructura social "estatal; y de aportaciones múltiples, con apego "tanto a los programas establecidos por la "Federación, como a los estatales, regionales y "sociales que se instrumenten y que se aprueben "en el seno del órgano de planeación".

"ARTICULO 13.- Para efectos del artículo anterior, "los municipios contarán con Comités de "Planeación para el Desarrollo Municipal como las "instancias de participación social encargadas de "planear, discutir, analizar y seleccionar las obras y "acciones a realizar para atender las demandas de "la población, en congruencia con los planes "nacional y estatal de desarrollo".

"ARTICULO 14.- El Comité de Planeación para el "Desarrollo Municipal se integrará por:

"I.- El Ayuntamiento del municipio;

"II.- El total de juntas auxiliares de cada municipio;

"III.- Los representantes comunitarios de "localidades, barrios, colonias populares y de los "comités de obra del municipio; y,

"IV.- Los representantes del órgano de Planeación "Estatal.

"En todo caso, la elección de los representantes "comunitarios ante este órgano de planeación se "llevará a cabo en asambleas democráticas, de "conformidad con el Manual

Unico de Operación "para el Federalismo Hacendario en el Estado de "Puebla que para el efecto expida el Ejecutivo del "Estado".
"ARTICULO 15.- En la coordinación de acciones de "planeación del desarrollo, el Estado tomará en "cuenta la participación de los órganos de "planeación y otros grupos organizados, "entendiéndose como tales principalmente a las "organizaciones representativas de obreros, "campesinos, grupos populares, instituciones "académicas y de investigación, organismos "empresariales y otras agrupaciones sociales, "considerados órganos de consulta permanente".
"ARTICULO 16.- El Estado fortalecerá la "participación social en la planeación del "desarrollo de la entidad, a través de los órganos "creados por la Ley de Planeación para el "Desarrollo del Estado de Puebla, a fin de que "intervengan en la planeación, programación, "ejecución, control, seguimiento y evaluación de "los programas, y los convenios que con base en "esta Ley se establezcan".
"ARTICULO 17.- La recepción y análisis de las "propuestas sobre inversión, la promoción de la "cooperación y colaboración de la participación "social en las tareas de la planeación del "desarrollo, y los convenios que con base en esta "Ley se celebren, se efectuarán bajo los "lineamientos establecidos en la Ley de Planeación "para el Desarrollo del Estado de Puebla".
"ARTICULO 18.- Para propiciar el fortalecimiento "municipal el Estado deberá:
"I.- Impulsar programas de fortalecimiento de los "municipios, para hacer vigente su función como "instancias de gobierno directamente vinculadas a "las necesidades cotidianas de la población;
"II.- Ampliar los cauces para que las comunidades "participen activamente en la definición de los "programas prioritarios de la gestión "gubernamental y cuenten con la capacidad de "decisión, ejecución y evaluación correspondiente, "dentro del marco del fortalecimiento a los "Ayuntamientos otorgándoles mayores "responsabilidades públicas;
"III.- Fomentar, bajo los principios de justicia social "y equidad, las capacidades y oportunidades para "que, en coordinación con el Estado, los "Ayuntamientos eleven la cobertura y calidad de "los servicios indispensables para el desarrollo "social de su comunidad;
"IV.- Promover la integración y homogeneidad entre "las regiones, acelerando el desarrollo de las que "tienen menor crecimiento relativo y manteniendo "la dinámica de crecimiento de las que registren "mayor capacidad de respuesta productiva y más "altos índices de bienestar social; y,
"V.- Las demás acciones que establezcan los "ordenamientos en la materia".
"ARTICULO 24.- El Sistema Estatal de Coordinación "Hacendaria tiene por objeto:
"…III.- Fijar el sistema para la distribución de "participaciones a los municipios…;
"…V.- Constituir los órganos de coordinación "hacendaria; y…".
"ARTICULO 30.- El Estado de Puebla percibirá las "participaciones correspondientes de los ingresos "federales, de conformidad con lo dispuesto en la "Ley de Coordinación Fiscal.
"Los municipios percibirán las participaciones en "ingresos federales atendiendo a lo que señalan "los Artículos 115 de la Constitución Política de los "Estados Unidos Mexicanos, 103 de la Constitución "local, la propia Ley de Coordinación Fiscal y la "presente Ley".
"ARTICULO 42.- Las Juntas Auxiliares se "coordinarán con los Ayuntamientos, a efecto de "coadyuvar con los mismos en las funciones que "realizan en materia de administración, "recaudación, ejecución y supervisión a que se "refiere esta Ley, así como aquéllas establecidas "en la Ley Orgánica Municipal y demás leyes "aplicables".
"ARTICULO 43.- Para ejercer las funciones a que se "refiere el artículo anterior, las Juntas Auxiliares "recibirán de los Ayuntamientos, de los recursos "provenientes de las participaciones por lo menos:
"a) El 5% cuando el municipio cuente con 1 y hasta "5 Juntas Auxiliares
"b) El 10% cuando el municipio cuente con 6 y "hasta 10 Juntas Auxiliares
"c) El 15% cuando el municipio cuente con 11 o "más Juntas Auxiliares.
"Dichos recursos se distribuirán en proporción "directa al número de habitantes de cada Junta "Auxiliar, de acuerdo con los datos que para el "efecto emita el Consejo Estatal de Población".
"ARTICULO 44.- Las Juntas Auxiliares deberán "aplicar los recursos citados en el artículo anterior "en la ejecución de obras que de manera conjunta "hayan sido aprobadas en los órganos de "planeación de los Municipios".
"ARTICULO 49.- El Gobierno del Estado revisará y "aprobará la evaluación socioeconómica de los "proyectos de inversión para el Estado y los "municipios, procurando que dichos

proyectos se "apeguen a los objetivos de los Planes Nacional, "Estatal y municipales de Desarrollo, así como a "los programas sectoriales y regionales derivados "de los mismos".

"ARTICULO 50.- El H. Congreso del Estado "establecerá normas que aseguren que el ejercicio "del gasto se realice conforme a criterios de "oportunidad, calidad y eficiencia, que permitan "cumplir con las condiciones técnicas de los "proyectos y que atiendan a las prioridades del "desarrollo".

"ARTICULO 57.- Cuando los recursos de los fondos "a que se refiere este Título se destinen a obras "públicas, el Gobierno del Estado y los "Ayuntamientos presentarán ante las dependencias "competentes, para su análisis y aprobación, los "expedientes técnicos de las obras autorizadas por "sus comités de planeación debiendo sujetarse, "además de lo dispuesto por el artículo anterior, a "la normatividad, supervisión técnica y asesoría "que para tales efectos emitan dichas "dependencias".

"ARTICULO 82.- Los municipios deberán:

"I.- Hacer del conocimiento de sus habitantes los "montos que reciban, las obras y acciones a "realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas "y beneficiarios;

"II.- Promover la participación de las comunidades "beneficiarias en el seno del Comité de Planeación "para el Desarrollo Municipal, en su destino, "aplicación y vigilancia, así como en la "programación, ejecución, control, seguimiento y "evaluación de las obras que se vayan a realizar; y

"III.- Informar a sus habitantes al término de cada "ejercicio, sobre los resultados alcanzados".

"ARTICULO 95.- Las infracciones en que incurran "los servidores públicos estatales o municipales a "las disposiciones de esta Ley y su "reglamentación, se sancionarán por los órganos "de control y supervisión del Estado de "conformidad con la Ley de Responsabilidades de "los Servidores Públicos del Estado de Puebla, Ley "Orgánica y Reglamentaria de la Contaduría Mayor "de Hacienda del Congreso del Estado de Puebla y "demás ordenamientos estatales aplicables".

"ARTICULO 97.- En caso de que los Ayuntamientos "no ministren los recursos que conforme a esta "Ley les corresponden a sus Juntas Auxiliares, el "Gobierno del Estado los liquidará directamente."

"ARTICULO 98.- Las autoridades estatales y "municipales que incurran en responsabilidades "civiles y penales con motivo de la desviación de "los recursos a que se refiere esta Ley, serán "sancionados en términos de la legislación "aplicable".

En la fracción VII del artículo 4o., no se establece disposición que implique constitución de autoridades intermedias, ya que sólo prevé el que se procure la coordinación en materia de gasto. En la fracción IX del propio artículo únicamente se prevé el que se promueva la participación social en los ámbitos estatal y municipal, pero sin que se instituyan tampoco autoridades intermedias. Cabe aclarar que, el que se promueva la participación social en los ámbitos estatal y municipal para la toma de decisiones en la orientación, definición y jerarquización de los programas y proyectos públicos, no afecta en sí mismo las facultades de los Ayuntamientos, siempre y cuando las decisiones corran a cargo de los Ayuntamientos, cuestión que dicha disposición no limita.

El tercer párrafo del artículo 8o. de la Ley impugnada, tampoco prevé autoridades intermedias, pues únicamente se refiere a la facultad del Ejecutivo Estatal como responsable de administrar, distribuir, ejercer y supervisar los recursos materia de la Ley para que se apliquen a los fines aprobados, además de que dispone que esto será sin menoscabo de la libertad municipal.

El artículo 15 que prevé los grupos organizados como órganos de consulta, tampoco instituye autoridades intermedias, por tratarse de órganos de consulta sin alguna otra atribución.

El artículo 16 tampoco contraviene la disposición fundamental, pues se refiere a la participación social en la planeación del desarrollo de la entidad a través de los órganos creados por la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; esto es, no se refiere a los órganos de planeación municipales cuyas facultades se establecen en la Ley que ahora se combate.

El artículo 17 tampoco instituye autoridades intermedias, ya que únicamente prevé que deberá estarse a los lineamientos establecidos en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla para efectos de la recepción y análisis de las propuestas sobre inversión, la promoción de la cooperación y colaboración de la participación social en las tareas de la planeación del desarrollo, y para la celebración de convenios.

El artículo 18 tampoco vulnera la prohibición de autoridad intermedia, en tanto que únicamente establece lineamientos generales para propiciar el fortalecimiento municipal.

El artículo 24, fracciones III y V, tampoco violenta la disposición constitucional que se aduce violada, ya que tan sólo establece el objeto del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria.

El artículo 30 tampoco violenta la disposición constitucional, ya que se refiere a que el Estado percibirá las participaciones correspondientes de los ingresos federales de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal.

El artículo 42 tampoco instituye autoridades intermedias, ya que solamente prevé que las Juntas Auxiliares se coordinarán con los Ayuntamientos para coadyuvar en las funciones que realizan en materia de administración, recaudación, ejecución y supervisión a que se refiere la Ley y demás aplicables.

El artículo 43 prevé los porcentajes mínimos que por concepto de participaciones deberán recibir las Juntas Auxiliares, con lo cual no se crean autoridades intermedias.

El artículo 49 tampoco infringe la disposición fundamental señalada, en cuanto a que regula la revisión y aprobación que hará el Gobierno del Estado de la evaluación socioeconómica de los proyectos de inversión para el Estado y los municipios.

El artículo 50 tampoco vulnera el artículo 115, fracción I, constitucional, pues sólo prevé que el Congreso Estatal establecerá normas que aseguren que el ejercicio del gasto se realice conforme a criterios de oportunidad, calidad y eficiencia.

Los artículos 95 y 98 tampoco violentan la disposición constitucional de referencia, ya que regulan cuestiones propias de responsabilidades y sanciones, sin que instituyan de ninguna forma autoridades intermedias.

En efecto, el artículo 95 establece las sanciones que por incumplimiento de la Ley podrán hacerse acreedores los servidores públicos estatales o municipales y para tales efectos remiten a las diversas Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, Orgánica y Reglamentaria de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del propio Estado y demás ordenamientos estatales aplicables, y el artículo 98 se refiere a las responsabilidades civiles y penales en que pueden incurrir las autoridades estatales y municipales al desviar los recursos que contempla la citada ley y para ello remite a la legislación aplicable.

Lo anterior es acorde con el texto constitucional y no invade las atribuciones de los Municipios actores por lo siguiente:

Los artículos 108, primero y cuarto párrafos, y 109, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan:

> *"ARTICULO 108.- Para los efectos de las "responsabilidades a que alude este Título se "reputarán como servidores públicos a los "representantes de elección popular, a los "miembros del Poder Judicial Federal y del Poder "Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y "empleados, y, en general, a toda persona que "desempeñe un empleo, cargo o comisión de "cualquier naturaleza en la Administración Pública "Federal o en el Distrito Federal, así como a los "servidores del Instituto Federal Electoral, quienes "serán responsables por los actos u omisiones en "que incurran en el desempeño de sus respectivas "funciones…;*
>
> *"…Las Constituciones de los Estados de la "República precisarán, en los mismos términos del "primer párrafo de este artículo y para los efectos "de sus responsabilidades, el carácter de "servidores públicos de quienes desempeñen "empleo, cargo o comisión en los Estados y en los "Municipios".*
>
> *"ARTICULO 109.- El Congreso de la Unión y las "Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos "de sus respectivas competencias, expedirán las "leyes de responsabilidades de los servidores "públicos y las demás normas conducentes a "sancionar a quienes, teniendo este carácter, "incurran en responsabilidad, de conformidad con "las siguientes prevenciones:…".*

De lo anterior, se advierte que las legislaturas locales están facultadas para expedir las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales.

Del mismo modo, el artículo 115, fracción IV, inciso c), último párrafo, faculta a las legislaturas locales para revisar las cuentas públicas de los Ayuntamientos.

Por lo expuesto, se puede concluir que el artículo 95 de la Ley impugnada al remitir a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, a la Ley Orgánica y Reglamentaria de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del citado Estado y a los demás ordenamientos estatales aplicables para la determinación de las infracciones en que pudieran incurrir los servidores públicos estatales y municipales, en la aplicación de la Ley impugnada, es acorde con las facultades constitucionales que posee el Congreso local.

Lo mismo cabe concluir del artículo 98, pues lo único que establece es la remisión a la legislación aplicable en caso de que exista una desviación de los recursos de la Ley por parte de las autoridades estatales o municipales, lo que de ninguna forma vulnera ninguna facultad de los Municipios actores.

En otro aspecto, se considera que los artículos 13, 14, 44, 57, 82, fracción II, y 97 de la Ley impugnada, sí violan la fracción I del artículo 115 de la Constitución Federal, en virtud de lo siguiente:

Dichas disposiciones son contrarias a la disposición constitucional en cita, por las mismas razones dadas en el considerando que antecede, toda vez que integran los Comités de Planeación para el Desarrollo

Municipal y les otorgan facultades de tal manera que afectan la esfera de competencia de los Ayuntamientos, pues supeditan sus facultades a las decisiones de dichos Comités.

Finalmente, respecto del artículo 97 de la Ley impugnada, al establecer la posibilidad de que el Estado entere recursos de las participaciones federales directamente a las Juntas Auxiliares sin tomar en cuenta a los Ayuntamientos a quienes constitucionalmente les corresponde la facultad de administrar los recursos de la hacienda municipal, afecta las facultades constitucionales que tienen estos últimos, con lo que se transgrede el artículo 105, fracciones I y IV, inciso b), constitucional, en cuanto que establece que los Ayuntamientos son a los que corresponde administrar el Municipio y que, por ende, son los que llevan a cabo la libre administración hacendaria municipal, por lo que la facultad que se otorga al Gobierno del Estado para entregar los recursos directamente a las Juntas Auxiliares en caso de que los Ayuntamientos no los ministren resulta inconstitucional. Cabe señalar que aun ante una situación anómala de parte del Ayuntamiento que motive la falta de entrega de los recursos que correspondan a las Juntas, es una cuestión que será responsabilidad del propio Ayuntamiento y de las consecuencias legales correspondientes, pero no puede justificar que el Gobierno se sustituya en las atribuciones que constitucionalmente les son propias a los Ayuntamientos.

Atento a todo lo expuesto en el presente considerando y en el anterior, además de la inconstitucionalidad decretada de los artículos 13 y 14, procede también declarar inconstitucionales los artículos 44, 57, 82, fracción II, y 97 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

DECIMO.- En el tercer concepto de invalidez se alega violación al artículo 116 constitucional, por la delegación de facultades que se hace en la Ley impugnada en favor del Gobernador del Estado para expedir el “Manual Unico de Operación para el Federalismo Hacendario en el Estado de Puebla”.

Es infundado el concepto de invalidez expuesto.

La parte relativa del artículo 116 constitucional que se aduce violada, dispone:

"Art. 116.- El poder público de los Estados se "dividirá para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo "y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de "estos poderes en una sola persona o corporación, "ni depositarse el Legislativo en un solo individuo."

El último párrafo del artículo 14 de la Ley impugnada, dispone:

"Art. 14.- El Comité de Planeación para el "Desarrollo Municipal se integrará por: … --- En "todo caso, la elección de los representantes "comunitarios ante este órgano de planeación se "llevará a cabo en asambleas democráticas, de "conformidad con el Manual Unico de Operación "para el Federalismo Hacendario en el Estado de "Puebla que para el efecto expida el Ejecutivo del "Estado."

Como se aprecia del artículo impugnado, no existe contravención a la disposición constitucional de referencia, ya que con dicho precepto no se provoca que se reúnan dos o más de los poderes públicos en una sola persona o corporación, ni se deposita el Legislativo en un solo individuo.

En efecto, la disposición combatida únicamente reserva al Poder Ejecutivo Estatal, la facultad de emitir el Manual Unico de Operación para el Federalismo Hacendario en el Estado de Puebla, a efecto de establecer la forma en que deberá llevarse a cabo la asamblea democrática para la elección de los representantes comunitarios ante el órgano de planeación, lo que debe considerarse como la facultad que tiene para proveer en la esfera administrativa para el cumplimiento de las leyes que emita la Legislatura Estatal.

DECIMO PRIMERO.- En el cuarto concepto de invalidez se aduce violación al artículo 133 de la Constitución Federal, en relación con el 120 de la propia Carta Fundamental, por la no aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal con motivo de la expedición de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla. En esencia, la parte actora alega que la Ley impugnada se aparta de lo dispuesto de la Ley de Coordinación Fiscal, en virtud de que la facultad que tienen los estados a través de sus respectivos órganos legislativos, de fijar las bases, montos y plazos de la distribución de participaciones y aportaciones, innegablemente puede ser ejercida siempre cuando el ejercicio de dicha facultad quede sujeto y se condicione a lo que la Ley de Coordinación Fiscal establezca al respecto.

Es parcialmente fundado el concepto de invalidez expuesto.

Para dilucidar la cuestión planteada debe analizarse por separado lo relativo a las participaciones federales y por otra las aportaciones federales.

Con relación a las participaciones federales se considera lo siguiente:

En primer lugar debe precisarse que, contrariamente a lo considerado por los municipios actores, el artículo 133 de la Constitución Federal no establece ninguna jerarquía entre las legislaciones federal y local, sino un ámbito de competencias diverso el cual se deriva del texto del artículo 124 de la propia Norma Fundamental.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 10/91, sustentada por la Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 56, Tomo VII-Marzo, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación que a la letra señala:

"LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE "ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA, "SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA "CONSTITUCION.- El artículo 133 de la Constitución "Política de los Estados Unidos Mexicanos no "establece ninguna relación de jerarquía entre las "legislaciones federal y local, sino que en el caso "de una aparente contradicción entre las "legislaciones mencionadas, ésta se debe resolver "atendiendo a qué órganos es competente para "expedir esa ley de acuerdo con el sistema de "competencia que la norma fundamental establece "en su artículo 124. Esta interpretación se refuerza "con los artículos 16 y 103 de la propia "Constitución: el primero al señalar que la "actuación por autoridad competente es una "garantía individual, y el segundo, al establecer la "procedencia del juicio de amparo si la autoridad "local o federal actúa más allá de su competencia "constitucional".

Por lo que respecta a las participaciones federales, como ya se ha precisado en el presente fallo, esta materia es de coordinación entre la Federación y los Estados en tanto que se trata de una redistribución de los ingresos que perciben los Municipios, los Estados y la Federación por virtud de los Convenios de Coordinación Fiscal previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso b), y último párrafo, de la Constitución Federal, las participaciones federales, como parte de la hacienda municipal, serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por la legislaturas de los Estados, las que aprobarán las leyes de ingresos de los ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas.

De lo anterior se sigue que las legislaturas estatales, en su respectivo ámbito de competencia, por disposición constitucional, tienen facultades para regular el rubro de participaciones federales y concretamente sobre las bases, montos y plazos.

En consecuencia, debe desestimarse el concepto de invalidez en el que se alega que la Ley impugnada se aparta de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal en cuanto a las bases, montos y plazos correspondientes a las participaciones federales, pues esto es una facultad de la Legislatura en su ámbito de competencias.

Respecto a que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla se aparta de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal en lo relativo a las bases, montos y plazos en materia de aportaciones federales, cabe considerar lo siguiente:

Previamente resulta pertinente aclarar que, tratándose de las aportaciones federales, siendo recursos de los que los municipios deben beneficiarse en términos del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Coordinación Fiscal, esto legitima en la causa a los municipios actores para cuestionar en esta vía la constitucionalidad de la Ley que ahora se impugna, toda vez que en ésta se establecen los supuestos normativos en virtud de los cuales tiene que hacerse la distribución y asignación de los recursos respectivos a los municipios.

En efecto, como quedó expuesto en considerandos anteriores, son recursos de naturaleza federal que destinan y supervisan las autoridades federales, que se rigen por disposiciones de carácter federal, que se entregan a los estados previo convenio con la Federación y en el que no participan los municipios, que, aunque finalmente llegan a ingresar a la hacienda municipal, no forman parte del régimen de libre administración hacendaria, y que los municipios únicamente ejecutan la aplicación de dichos recursos en los rubros previamente determinados por las disposiciones federales; sin embargo, en estos casos, los municipios tienen especial interés en que los recursos correspondientes se reciban oportuna y eficazmente en términos de las disposiciones legales respectivas, para los fines para los cuales se les destinan, por lo que, si en el caso se aduce que la Ley impugnada se aparta de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal que establece los lineamientos generales al efecto en contravención a la Constitución Federal, es evidente que debe reconocerse que los municipios están legitimados en la causa para acudir en esta vía a plantear la inconstitucionalidad de la Ley impugnada si se considera que contraviene a la Constitución Federal.

A efecto de determinar si la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla se ajusta a las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de aportaciones federales para los municipios, es conveniente atender, en primer lugar, a lo que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de mil novecientos noventa y ocho; y, en segundo lugar, a las disposiciones relativas de la Ley impugnada y la Ley de Coordinación Fiscal.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del citado Presupuesto de Egresos de la Federación, las erogaciones previstas para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios para el año de mil novecientos noventa y ocho, se distribuye entre los siguientes fondos:

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

En este último Fondo los recursos se distribuyen entre los siguientes rubros:

Fondo para la Infraestructura Social Estatal.
Fondo para la Infraestructura Social Municipal.
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal.
Fondo de Aportaciones Múltiples.

La disposición en cita también establece que el ejercicio de las erogaciones a que se refiere este artículo deberá apegarse a la distribución, condiciones y términos que establece el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, y no podrán aplicarse para cubrir otras erogaciones con fines distintos a los que ahí se señalan.

En el capítulo V de la citada Ley de Coordinación Fiscal, en el que se regula lo relativo a las aportaciones federales, se contienen diversos preceptos en los que expresamente se reglamenta la forma y términos para la asignación de estos recursos que están destinados a los municipios.

A continuación se procede a realizar el comparativo entre las disposiciones relativas que interesan para el caso concreto de la Ley de Coordinación Fiscal, con las respectivas de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

En el artículo 32, penúltimo párrafo, y el 35, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, con relación a las Aportaciones para la Infraestructura Social, dispone:

"Art. 32.- … Del total de la recaudación federal "participable el 0.303% corresponderá al Fondo "para la Infraestructura Social Estatal y el 2.197% al "Fondo para Infraestructura Social Municipal. --- "Este fondo se enterará mensualmente en los "primero diez meses del año por partes iguales a "los Estados por conducto de la Federación y a los "Municipios a través de los Estados, de manera ágil "directa, sin más limitaciones ni restricciones, "incluyendo las de carácter administrativo, que las "correspondientes a los fines que se establecen en "el artículo 33 de esta Ley…".

"Art. 35.- Los Estados distribuirán entre los "municipios los recursos del Fondo para la "Infraestructura Social Municipal, … (último "párrafo) Los Estados deberán entregar a sus "respectivos municipios los recursos que les "corresponden conforme al calendario de enteros "en que la Federación lo haga a los Estados, en los "términos del penúltimo párrafo del artículo 32 de "la presente Ley".

Al efecto, los artículo 73, 74 y 75 de la Ley impugnada, correspondientes al capítulo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, disponen:

"Art. 73.- El Gobierno del Estado ministrará en "forma mensual a los municipios una cantidad "igual para ser administrada por los "Ayuntamientos: dichos recursos serán destinados "exclusivamente al financiamiento de obras, "acciones sociales básicas y a inversiones, que "beneficien directamente a sectores de su "población que se encuentren en condiciones de "rezago social y de pobreza extrema. --- Para tales "efectos, previamente los municipios presentarán "al Gobierno del Estado, sus programas de obras y "acciones aprobadas en el seno de los comités de "planeación para el desarrollo municipal."

"Art. 74.- Los Ayuntamientos presentarán ante el "Gobierno del Estado, para su análisis y "aprobación, los expedientes técnicos de las obras "aprobadas por sus comités de planeación."

"Art. 75.- Una vez aprobados los expedientes "técnicos por el Gobierno del Estado, éste "procederá a la ministración de recursos al "Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el "artículo 73 de esta Ley."

De los preceptos transcritos se advierte que los artículos 73, 74 y 75 de la Ley impugnada, no se ajustan a los lineamientos generales previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, en tanto que no prevén el mismo plazo para el suministro de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en tanto que esta última dispone que deberá enterarse mensualmente en los primeros diez meses del año, sin más limitaciones ni restricciones; mientras que los citados artículos de la Ley combatida establecen que serán ministrados los recursos de dicho Fondo mensualmente y condicionado a que los municipios cuenten con la aprobación de los comités de planeación para el desarrollo municipal de los programas de obras y acciones para que el Gobierno del Estado apruebe los expedientes técnicos para proceder a la ministración de los recursos a los Ayuntamientos.

Por otra parte, el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en lo que se refiere a los municipios, establece:

"Art. 33.- Las aportaciones federales que con cargo "al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura "Social reciban los Estados y los Municipios, se "destinarán exclusivamente al financiamiento de "obras, acciones sociales básicas y a inversiones "que beneficien directamente a sectores de su "población que se encuentren en condiciones de "rezago social y pobreza extrema en los siguientes "rubros:

"a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura "Social Municipal: agua potable, alcantarillado, "drenaje y letrinas, urbanización municipal, "electrificación rural y de colonias pobres, "infraestructura básica de salud, infraestructura "básica educativa, mejoramiento de vivienda, "caminos rurales, e infraestructura productiva "rural, y

"b) …

"En caso de los municipios, éstos podrán disponer "de hasta un 2% del total de recursos del Fondo "para la Infraestructura Social Municipal que les "correspondan para la realización de un programa "de desarrollo institucional. Este programa será "convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la "Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno "Estatal correspondiente y el Municipio de que se "trate.

"Adicionalmente, los Estados y Municipios podrán "destinar hasta el 3% de los recursos "correspondiente en cada caso, para ser aplicados "como gastos indirectos a las obras señaladas en "el presente artículo. Respecto de dichas "aportaciones, los Estados y los municipios "deberán:

"I.- Hacer del conocimiento de sus habitantes, los "montos que reciban, las obras y acciones a "realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas "y beneficiarios;

"II.- Promover la participación de las comunidades "beneficiarias en su destino, aplicación y "vigilancia, así como en la programación, "ejecución, control, seguimiento y evaluación de "las obras y acciones que se vayan a realizar;

"III.- Informar a sus habitantes, al término de cada "ejercicio, sobre los resultados alcanzados;

"IV.- Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo "Social, la información que sobre la utilización del "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura "Social le sea requerida. En el caso de los "municipios lo harán por conducto de los Estados, "y

"V.- Procurar que las obras que realicen con los "recursos de los Estados sean compatibles con la "preservación y protección del medio ambiente y "que impulsen el desarrollo sustentable."

Al respecto, el artículo 69 de la Ley impugnada dispone:

"Art. 69.- Corresponde al Gobierno del Estado y a "los Municipios financiar obras y realizar acciones "sociales básicas e inversiones que beneficien "directamente a la población que se encuentre en "condiciones de rezago social y de pobreza "extrema. Para ello, en cada uno de los rubros "mencionados a continuación deberán en materia "de:

"I.- Agua potable, drenaje, letrinas, alcantarillado y "tratamiento residual: …

"II.- Electrificación rural y de colonias populares:…

"III.- Infraestructura básica de salud y educativa:…

"IV.- Mejoramiento de vivienda:…

"V.- Caminos rurales:…

"VI.- Infraestructura productiva rural:…

"VII.- Las demás que establezcan las leyes y demás "ordenamientos aplicables."

De esta última disposición se advierte que hay coincidencia entre lo previsto en la Ley impugnada y el primer párrafo, inciso a), del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Por otra parte, el artículo 77 de la Ley combatida dispone:

"Art. 77.- Los municipios podrán disponer de hasta "un 2% del total de recursos del fondo para "infraestructura social municipal que les "correspondan, para la realización de un programa "de desarrollo institucional. Este programa será "convenido entre el Ejecutivo Federal, el Gobierno "del Estado y los municipios".

Este artículo 77 es coincidente con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Por otro lado, el artículo 78 de la Ley que se combate, establece:

"Art. 78.- El Estado y los municipios deberán:

"I.- Hacer del conocimiento de sus habitantes los "montos que reciban, las obras y acciones a "realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas "y beneficiarios;

"II.- Promover la participación de las comunidades "beneficiarias en su destino, aplicación y "vigilancia, así como en la programación, "ejecución, control, seguimiento y evaluación de "las obras y acciones que se vayan a realizar;

"III.- Detonar el desarrollo de las regiones "identificadas en los programas regionales y "especiales; y

"IV.- Informar a sus habitantes al término de cada "ejercicio, sobre los resultados alcanzados."

Este precepto es coincidente con lo dispuesto por las fracciones I, II y III del citado artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en lo referente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social municipal,

pero debe destacarse que la Ley impugnada es omisa en cuanto a los lineamientos generales establecidos en el párrafo quinto (destino del 3% para gastos indirectos) y en las fracciones IV y V del citado artículo 33 (informar a la Secretaría de Desarrollo Social sobre la utilización del Fondo y por conducto de los Estados en el caso de los municipios, y que las obras realizadas con dicho Fondo sean compatibles con el medio ambiente e impulsen el desarrollo sustentable).

En otro aspecto, el artículo 35 de la Ley de Corrdinación Fiscal, con relación al Fondo para la Infraestructura Social Municipal, dispone:

"Art. 35.- Los Estados distribuirán entre los "municipios los recursos del Fondo para la "Infraestructura Social Municipal, con una fórmula "igual a la señalada en el artículo anterior, que "enfatice el carácter redistributivo de estas "aportaciones hacia aquellos Municipios con "mayor magnitud y profundidad de pobreza "extrema. Para ello, utilizarán la información "estadística más reciente de las variables de "rezago social a que se refiere el artículo anterior "publicada por el Instituto Nacional de Estadística, "Geografía e Informática. En aquellos casos en que "la disponibilidad de información no permita la "aplicación de la fórmula antes señalada, se "utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas "y ponderadas con igual peso cada una de ellas: "…".

Por su parte, el artículo 72 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, dispone:

"Art. 72.- La distribución de los recursos del Fondo "para la Infraestructura Social Municipal, se hará de "conformidad con lo establecido en los artículos 34 "y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal."

En virtud de la remisión que hace el artículo 72 de la Ley impugnada a los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal para efectos de las fórmulas que deben aplicarse para la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, se advierte que existe total coincidencia entre ambos ordenamientos legales.

Con relación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal dispone:

"Art. 37.- Las aportaciones federales que con cargo "al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento "de los Municipios, reciban los mismos a través de "los Estados, se destinarán exclusivamente a la "satisfacción de sus requerimientos, dando "prioridad al cumplimiento de sus obligaciones "financieras y a la atención de las necesidades "directamente vinculadas a la seguridad pública de "sus habitantes. Respecto de las aportaciones que "reciban con cargo al Fondo a que se refiere este "artículo, los municipios tendrán las mismas "obligaciones a que se refieren las fracciones I a III "del artículo 33 de esta Ley."

Al respecto, los artículos 79 y 82 de la Ley impugnada, contenidos en el capítulo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, disponen:

"Art. 79.- Los recursos provenientes del fondo de "aportaciones para el fortalecimiento de los "municipios deberán ser canalizados a la "satisfacción de sus requerimientos, para lo cual "se dará prioridad al cumplimiento de las "obligaciones financieras y a los programas de "gasto derivados de la seguridad pública."

"Art. 82.- Los Municipios deberán:

"I.- Hacer del conocimiento de sus habitantes los "montos que reciban, las obras y acciones a "realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas "y beneficiarios;

"II.- Promover la participación de las comunidades "beneficiarias en el seno del Comité de Planeación "para el Desarrollo Municipal, en su destino, "aplicación y vigilancia, así como en la "programación, ejecución, control, seguimiento y "evaluación de las obras que se vayan a realizar; y

"III.- Informar a sus habitantes al término de cada "ejercicio, sobre los resultados alcanzados."

De las disposiciones transcritas de la Ley impugnada, se aprecia que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 37 en relación con el 33, fracciones I a III, de la Ley de Coordinación Fiscal.

Por otro lado, el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece:

"Art. 38.- El Ejecutivo Federal, a través de la "Secretaría de Hacienda y Crédito Público, "distribuirá el Fondo de Aportaciones para el "Fortalecimiento de los Municipios en proporción "directa al número de habitantes con que cuente "cada Estado, de acuerdo a la información "estadística más reciente que al efecto emita el "Instituto Nacional de Estadística, Geografía e "Informática. --- Los Estados a su vez distribuirán "los recursos que correspondan a sus municipios, "atendiendo estrictamente a los mismos criterios a "que se refiere el párrafo anterior."

Con relación a este precepto, el artículo 80 de la Ley combatida establece:

"Art. 80.- La distribución del fondo de aportaciones "para el fortalecimiento de los municipios, se "realizará en proporción directa del número de "habitantes de cada uno de ellos. Los montos se "calcularán con base en la información oficial más "reciente publicada por el Instituto Nacional de "Estadística, Geografía e Informática y deberá "publicarse en el Periódico Oficial del Estado a más "tardar el 31 de enero de cada ejercicio fiscal."

De este último precepto se aprecia que en esencia existe coincidencia con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal.

De lo expuesto se concluye que, con relación a lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal respecto de aportaciones federales que deben suministrarse a los municipios, los artículos 73, 74 y 75 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla se apartan de lo dispuesto en aquélla.

Lo anterior es violatorio de la Constitución Federal, aunque por contravención a preceptos distintos de los que señala la parte actora.

En efecto, en el concepto de invalidez que se analiza se señalan como violados los artículos 120 y 133 de la Constitución Federal. Tales disposiciones establecen:

"Art. 120.- Los gobernadores de los Estados están "obligados a publicar y hacer cumplir las leyes "federales."

"Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del "Congreso de la Unión que emanen de ella y todos "los tratados que estén de acuerdo con la misma, "celebrados y que se celebren por el Presidente de "la República, con aprobación del Senado, serán la "Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada "Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y "tratados a pesar de las disposiciones en contrario "que pueda haber en las Constituciones o leyes de "los Estados."

La contradicción existente entre los artículos señalados de la Ley impugnada y la Ley de Coordinación Fiscal, no contraviene lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución Federal, toda vez que este precepto únicamente establece la obligación a cargo de los gobernadores de los Estados de publicar y hacer cumplir las leyes federales, pero no el que los Congresos Estatales deban legislar conforme a las leyes federales.

Tampoco la aludida contradicción entre la Ley impugnada y la Ley de Coordinación Fiscal contraviene al artículo 133 de la Constitución Federal, ya que, como quedó expuesto en el presente considerando, en esta disposición constitucional no se establece un sistema de jerarquía de normas entre las legislaciones federal y locales sino ámbitos determinados de competencia, por lo que la contradicción planteada entre una y otra ley no pueden implicar contravención al referido precepto fundamental.

Pese a lo anterior y a efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede suplir la deficiencia de la queja y tener como preceptos constitucionales violados los artículos 124, 134, primero y cuarto párrafos, en relación con el 74, fracción IV, de la Constitución Federal, por contravención a las facultades que tiene la Federación para administrar su hacienda pública y para destinar y regular sus recursos federales como son las aportaciones federales.

En primer lugar es necesario establecer el principio general de administración pública hacendaria que rige para los Municipios, los Estados, el Distrito Federal y la Federación.

Como ya quedó expuesto en la presente resolución, la hacienda municipal se prevé en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, en la que se establece como prerrogativa de los municipios el régimen de libre administración hacendaria. De una interpretación armónica, sistemática y teleológica de la citada disposición constitucional, se llegó a la conclusión de que la hacienda municipal comprende la totalidad de los ingresos, activos y pasivos de los municipios, pero sólo determinados conceptos quedan comprendidos dentro del régimen de libre disposición hacendaria que son los que expresamente señala la fracción IV de la referida norma fundamental. Sobre estos conceptos los municipios pueden disponer libremente de su hacienda para los fines públicos establecidos en las leyes, de tal manera que los municipios pueden ejercer y aplicar los recursos que integran su hacienda y que están comprendidos dentro del régimen de libre administración hacendaria, en la forma y términos que consideren convenientes, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones legales que los rigen y para los fines públicos para los cuales deben destinarse.

De igual manera debe reconocerse que con relación a las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, rige el principio de libre administración hacendaria, en tanto que, al contar con una hacienda pública integrada por diversos conceptos y que debe destinarse a satisfacer sus necesidades, deben gozar de libertad para administrar y disponer de sus recursos económicos a efecto de ejercerlos y aplicarlos para los fines públicos para los cuales deben destinarse.

Por su parte, la Federación también cuenta con una hacienda pública federal, que le corresponde administrar y disponer conforme a las disposiciones que la rigen, por lo que, respecto de los recursos económicos que la integran, tiene facultad de ejercerlos y aplicarlos para los fines públicos en que deben destinarse conforme a las disposiciones legales aplicables.

En este orden de ideas, considerando los diferentes niveles de gobierno en que se divide nuestro sistema federal, que comprende un ámbito de competencia determinado en el que cada nivel ejerce sus facultades, y considerando que cada uno cuenta con una hacienda pública integrada por diversos conceptos y que respectivamente se rige por sus propias disposiciones, debe concluirse que el principio de libre administración de la hacienda pública, inmerso en nuestra Carta Fundamental, rige para los municipios, los estados, el Distrito Federal y la Federación, los que, acorde con sus respectivos ámbitos de competencia y conforme a las disposiciones que a cada uno les es aplicable, deben administrar sus haciendas públicas a efecto de poder ejercer y aplicar los recursos económicos que les corresponden para sus fines públicos.

Lo anterior es acorde con el sistema federal que consagra el artículo 124 de la Constitución Federal, en virtud del cual las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados, por lo que, tratándose de la hacienda pública, la Federación tiene facultades expresas para administrar sus recursos, y en lo tocante a las haciendas estatales y del Distrito Federal, deben entenderse reservadas dichas facultades a favor de cada entidad federativa, así como para los municipios; en estas condiciones, cada nivel de gobierno es el competente para disponer y ejercer sus propios recursos públicos para la satisfacción de sus necesidades en términos de las leyes correspondientes.

Ahora bien, sin perjuicio del respectivo ámbito de competencia de cada nivel de gobierno y del principio de libre administración hacendaria que rige para cada uno en lo individual, es el caso que determinados recursos de un nivel de gobierno, en aras de dicho principio y consecuentemente en función de su libre disposición y aplicación, se destinan a favor de otro nivel de gobierno para su fortalecimiento y para coadyuvar en determinadas materias específicas; sin embargo, en este tipo de recursos, aunque pasan a formar parte de la hacienda pública del ente al que se beneficia, prevalecen las disposiciones del que los destina para tal efecto, de tal manera que para esos recursos continúan rigiendo las disposiciones legales que originariamente los prevén y que son las que establecen dicho destino y aplicación, por lo que en estos casos los beneficiarios de los mismos no pueden disponer libremente de los recursos sino en estricta aplicación para los fines que prevén las leyes que los regulan.

En efecto, sea que se trate de entidades federadas o de la Federación, la actividad financiera se desarrolla no sólo por el gobierno federal, sino también por los gobiernos locales (Estados, Distrito Federal o Municipios), cada uno en su respectivo ámbito de competencias, lo que eventualmente genera problemas de coordinación entre la actividad de cada nivel de gobierno, que puede referirse tanto a la coordinación entre la prestación del servicio y al monto de los gravámenes necesarios para prestarlo, como al control del nivel conjunto de gastos públicos y de la recaudación tributaria, para evitar que la superposición de varios sistemas fiscales conduzca a una excesiva presión impositiva, y en el caso de gobiernos federales, impedir que la política financiera local obstaculice la política financiera del gobierno federal. Esto ha motivado el establecimiento de sistemas de coordinación, mediante la celebración de convenios acorde con las disposiciones que rigen los recursos respectivos, para que cada nivel de gobierno pueda disponer de sus recursos y cuando éstos se destinan a otro nivel de gobierno se ajusten a las disposiciones legales del primero para su correcta y eficaz aplicación y destino para coadyuvar en materias específicas de interés común.

Lo anterior se evidencia claramente tratándose de las aportaciones federales que, como quedó expuesto en considerandos anteriores, son recursos federales, que destinan y supervisan las autoridades federales para los estados y los municipios y que, por su naturaleza, se rigen por disposiciones federales, por lo que, aunque pasan a formar parte de las haciendas estatales y municipales, no están comprendidos dentro del régimen de libre administración de estos últimos, pues es la Federación la que autoriza su destino y aplicación, de ahí que los otros niveles de gobierno no puedan disponer libremente de dichos recursos y, por el contrario, deben estarse a las disposiciones federales y convenios de coordinación respectivos para su aplicación.

Al respecto cabe citar lo expuesto en la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal, de fecha trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, relativa al Decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, que dice:

> *"...La iniciativa presentada en esa oportunidad fue "enriquecida por las aportaciones sustantivas de "esa honorable Representación, de forma tal que, "además de los Fondos de Aportaciones Federales "inicialmente propuestos para la Educación Básica, "los Servicios de Salud y la Infraestructura Social "Municipal, esa entidad soberana incluyó los "Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento "de los Municipios y el Distrito Federal, así como el "de Aportaciones Múltiples."*

Ahora bien, en atención a lo expuesto, se considera que los artículos 73, 74 y 75 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, que se oponen a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, son violatorios de los artículos 124, 134, primero y cuarto párrafos, en relación con el 74, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que establece reglas distintas en materia de aportaciones federales que,

por su naturaleza y por las razones dadas en la presente resolución, deben regularse conforme a las disposiciones que al efecto prevé la citada Ley de Coordinación Fiscal.

En efecto, siendo recursos federales que se rigen por disposiciones federales, respecto de los cuales la Federación dispone su destino en su respectivo ámbito de competencia conforme al principio de libre administración pública hacendaria, los estados no pueden establecer reglas distintas sobre sus montos, bases y plazos, por lo que, las disposiciones citadas de la Ley impugnada, como quedó demostrado con anterioridad, al contrariar los lineamientos generales establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, contravienen el ámbito de facultades de la Federación.

Los artículos 134, primero y cuarto párrafos, y 74, fracción IV, de la Carta Magna, disponen:

"Art. 134.- Los recursos económicos de que "dispongan el Gobierno Federal y el Gobierno del "Distrito Federal, así como sus respectivas "administraciones públicas paraestatales, se "administrarán con eficiencia, eficacia y honradez "para satisfacer los objetivos a los que estén "destinados... (cuarto párrafo) El manejo de "recursos económicos federales se sujetará a las "bases de este artículo."

"Art. 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara "de Diputados: ...IV. Examinar, discutir y aprobar "anualmente el Presupuesto de Egresos de la "Federación, discutiendo primero las "contribuciones que, a su juicio, deben decretarse "para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública "del año anterior."

De conformidad con las disposiciones constitucionales transcritas, el Gobierno Federal deberá administrar los recursos de que disponga de tal manera que satisfaga los objetivos para los cuales están destinados; y, por otra parte, compete a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.

De lo anterior se sigue que los recursos económicos de que puede disponer el Gobierno Federal y los rubros en los que deben aplicarse, los establece la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se prevén, en su artículo 19, las aportaciones federales para las entidades federativas y los municipios que ya fueron materia de análisis en la presente resolución.

Por su parte, el Presupuesto de Egresos de la Federación, en su citado artículo 19, dispone que el ejercicio de las erogaciones a que se refiere este artículo deberá apegarse a la distribución, condiciones y términos que establece el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, y no podrán aplicarse para cubrir otras erogaciones con fines distintos a los que ahí se señalan.

En este orden de ideas, si la Federación debe ejercer sus recursos económicos en términos del Presupuesto de Egresos de la Federación el que a su vez, en materia de aportaciones federales, remite a lo establecido en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, es de concluirse que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en cuanto a sus disposiciones que regulan lo relativo a las aportaciones federales, debe ajustarse a los lineamientos generales establecidos en el referido Presupuesto y Ley de Coordinación Fiscal.

En consecuencia, si la parte actora aduce que la Ley impugnada se opone a lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal en cuanto a los plazos, bases y montos en materia de aportaciones federales, y si del análisis comparativo correspondiente se consideró que los artículos 73, 74 y 75 de la Ley combatida se contraponen a las disposiciones relativas de la referida Ley de Coordinación Fiscal, es de concluirse que aquéllos resultan violatorios del artículo 134, primero y cuarto párrafos, en relación con el 74, fracción IV, de la Constitución Federal, en tanto que afectan el principio de libre administración pública hacendaria federal respecto de los recursos señalados que sólo compete a la Federación su regulación.

Atento a todo lo expuesto en la presente ejecutoria, al haber resultado parcialmente fundados los conceptos de invalidez expuestos, procede declarar la invalidez de los artículos 13, 14, 44, 57, 73, 74, 75, 82, fracción II, y 97 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, y reconocer la validez de los demás preceptos impugnados.

Esta sentencia producirá plenos efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, por lo que las disposiciones declaradas inválidas ya no podrán aplicarse a partir de entonces. En virtud de la invalidez de preceptos que regulan cuestiones propias de las aportaciones federales, las autoridades deberán ajustarse a las disposiciones federales sobre la materia.

Debe precisarse que, toda vez que los municipios actores en vía de consecuencia impugnan los actos de aplicación de la Ley combatida, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, procede también declarar la invalidez de los actos que hayan sido emitidos como consecuencia de la aplicación de las normas declaradas inválidas así como de los actos que con apoyo en dichos preceptos se emitan con anterioridad a la publicación de esta sentencia, los que no podrán continuar produciendo efecto legal alguno a partir de dicha publicación; lo anterior en la inteligencia de que si dichos actos ya produjeron algunos efectos únicamente respecto de éstos ya no operará la invalidez decretada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45, párrafo segundo, de la citada Ley Reglamentaria, que dispone que la declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos.

Finalmente, conforme a los artículos 105, fracción I, penúltimo y último párrafos, de la Constitución Federal y 42 de su Ley Reglamentaria, la citada declaratoria de invalidez, por tratarse de una Ley Estatal impugnada por los municipios actores, sólo surtirá efectos entre las partes.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- Es procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional promovida por los Ayuntamientos de los Municipios precisados en el primer resultando de esta ejecutoria.

SEGUNDO.- Los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de los Municipios actores carecen de legitimación para promover la presente controversia constitucional en términos del considerando tercero de este fallo.

TERCERO.- Se declara la invalidez de los artículos 13, 14, 44, 57, 73, 74, 75, 82, fracción II, y 97 de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, y de los actos de aplicación de dichas disposiciones en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia.

CUARTO.- Se reconoce la validez de las demás disposiciones impugnadas de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria.

QUINTO.- Esta ejecutoria surtirá plenos efectos al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia.

SEXTO.- Publíquese esta resolución en el **Diario Oficial de la Federación**, en el Periódico Oficial del Estado de Puebla y en el Semanario Judicial de la Federación.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Castro y Castro, Díaz Romero, Aguinaco Alemán, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, Silva Meza y Presidente Góngora Pimentel. Estuvo ausente en la votación el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Firman los señores Ministros Presidente y Ponente, con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

El Ministro Presidente, **Genaro David Góngora Pimentel**.- Rúbrica.- El Ministro Ponente, **Guillermo I. Ortiz Mayagoitia**.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos, **José Javier Aguilar Domínguez**.- Rúbrica.

LICENCIADO **JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ**, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de ciento cincuenta y cinco fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con su original que obra en el expediente relativo a la Controversia Constitucional 6/98, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Aljojuca, Puebla y otros Municipios de la misma entidad, en contra del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Puebla, se certifica para efectos de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, en términos de lo dispuesto en el párrafo Segundo del artículo 44 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el punto Sexto resolutivo de su sentencia dictada en la sesión pública de catorce de marzo del año en curso. México, Distrito Federal, a diecisiete de marzo de dos mil.- Conste.- Rúbrica.